LUCES Y SOMBRAS DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ

EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL ES INCONSTITUCIONAL

Y

EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO, UN FRAUDE



LUCES Y SOMBRAS DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ

EL Nuevo Código Procesal Penal es Inconstitucional

Y

El Sistema Judicial Acusatorio, un Fraude





DEDICATORIA

Esta obra se la dedico a mi esposa Margot y a mis hijos Jorge y Jose, a mi madre Luzmila que hace muchos años partió al cielo, y a mi padre Ernesto que hace un par de años nos dejó y siguió el mismo camino; estoy seguro que desde donde están iluminan y guiarán mi camino como dos relucientes luceros que guían cada amanecer la senda del arriero.

Gratitud a mi formación policial y militar:

- *Gracias a la Escuela de Oficiales de la Guardia Republicana del Perú que me forjó y me formó como Oficial y como persona, e hizo de mí lo que hoy soy (1974-1977).*
- *Gracias a la Academia Especial de la Guardia Civil Española (Aranjuez-Madrid) que me acogió como uno de los suyos, nutrió mi saber y amplió mis horizontes (1982-1984).*
- *Gracias a la Escuela de Estado Mayor del Ejército Español (Madrid), que fortaleció mis conocimientos e hizo de mi un hombre con determinación y de grandes y amplias miras (Set 1990-Mar 1993).*

Gratitud a mi formación jurídica:

- *Mención a la Universidad de Lima por despertar en mí mis ganas de estudiar y mi alma universitaria, Resolución DUSAR 006/78, Exp. Acad. 13561-6, Facultad de Economía (1978-1980).*
- *Gracias a la Universidad San Martín de Porres que en su claustro (Facultad de Derecho) me permitió sacar la carrera de abogado (1986-1991).*
- *Gracias a la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, en cuyas aulas curse los dos años lectivos correspondientes al doctorado en derecho penal (1993-1994) y (1994-1995).*
- *Gracias a la Universidad Carlos III de Madrid (Getafe), por el año lectivo (Facultad de Derecho) que duró el VIII Curso de Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio (Nov 1997-May 1998) especialidad que me inició.*
- *Gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que un 06 de octubre de 1995 me incorporó a sus filas, como colegiado N.º 57280; desde entonces han pasado ya 25 años como abogado ejerciente. Además de los diferentes y diversos cursos recibidos en sus aulas de la calle Serrano Nº11; de derecho penal, extranjería y otras materias, como menores, violencia de género y familia entras.*

INDICE

PREFACIO 1

PROLOGO 2

INTRODUCCIÓN 3

UBICACIÓN DEL OBJETIVO COMO APUNTE PREVIO 6

INVESTIGAR LA DELINCUENCIA vs INVESTIGACIÓN DEL DELITO 11

Delimitación funcional y el delito. 20

EL GRAN FRAUDE DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 25

El Nuevo Código Procesal Penal es Inconstitucional. 28

LA INVESTIGACIÓN en el nuevo CÓDIGO PROCESAL PENAL. 38

ETAPA DE INVESTIGACION PREPARATORIA 39

Los Actos de Investigación de Fiscalía y Policía, no es jurisdiccional 46

ARTÍCULOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL (NCPP) QUE COLISIONAN CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL Y PERJUDICAN LA LABOR DE LA POLICÍA 51

DETENCIÓN POLICIAL 117

COMENTARIO FINAL A ESTE APARTADO 135

AUTONOMÍA Y CONTROL DE LA POLICÍA EN EL NUEVO PROCESO PENAL 137

FACULTADES AUTÓNOMAS DE LA POLICÍA AFECTADAS POR EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO 139

FACULTADES AUTÓNOMAS DE LA POLICÍA EN EL DERECHO COMPARADO 141

LA ACCIÓN PENAL, LA PERVERCIÓN DEL SISTEMA Y EL PROCEDIMIENTO 144

LA ACCIÓN PENAL Y EL ESTADO 151

LA ACCIÓN PENAL EN LA MIRA 154

LA ACCIÓN PENAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 162

FISCALES CON LA ACCIÓN PENAL JUEGAN A SER POLICÍAS 176

DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y LOS FISCALES 183

PODER JUDICIAL, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CÓDIGO PROCESAL PENAL EN CONFLICTO 184

CODIGO PROCESAL PENAL, PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y SU CONSTITUCIONALIDAD 196

LOS FISCALES 201

FISCALES vs POLICÍA 207

ANTECEDENTES de: FISCALES vs POLICÍA 216

DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 218

PODER COHERCITIVO, LIBERTAD INDIVIDUAL Y LOS FISCALES 220

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL CONTRA EL PODER JUDICIAL 228

VISIÓN POLITICO-CRIMINAL DEL NUEVO PROCESO PENAL 247

PRETEXTOS QUE ESGRIMIERON PARA IMPLANTAR EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO 253

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL SISTEMA ACUSATORIO 255

POLITIZACIÓN DE LA CRIMINALIDAD EN EL SISTEMA ACUSATORIO 258

JUECES – PODER JUDICIAL – INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA CONSTITUCIÓN, ATACADOS EN EL NCPP 261

LA CORDURA DEL PODER Y LA LEY 263

EL INSEPARABLE VÍNCULO ENTRE DERECHO Y POLÍTICA 264

CRITICAS AL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO EN EL PERÚ 266

LA TEORÍA DEL CASO Y LA JUSTICIA 269
TEORÍA DEL CASO vs TEORIA DE LA VERDAD 274
EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO 276
CONSIDERACIONES GENERALES 277
SINOPSIS DEL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO 282
A esta primera parte le llamo yo, 'LA RUTA o el atajo': 282
A esta 2da parte le llamo, 'EL CONTENIDO'. 283
SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO, SOCIEDAD Y DERECHO COMPARADO 284
LA IMPUNIDAD ES LEY EN EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO 289
EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO ES UN FRACASO 292
La politización aviva el conflicto de la justicia. 297
TUTELA DE DERECHOS POR FALTA DE IMPUTACIÓN 300
PODER VS JUSTICIA 303
EL PODER DE LA LEY 304
EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO HA DESTRUIDO LA JUSTICIA 306
COMENTARIO A LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL (NCPP) 310
OBJECIONES FINALES AL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 316
UNA CONTRAREFORMA SE HACE NECESARIA 319
ANALISIS Y APORTES 321
¿CÚAL ES LA SOLUCIÓN? 325
RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS 327
COROLARIO Y COMENTARIO FINAL 328
ANEXOS 330
ABREVIATURAS 330
GLOSARIO DE TERMINOS 331
DICHOS, FRASES Y REFRANES USADOS EN EL TEXTO 334
LEGISLACIÓN UTILIZADA 344
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 (vigente) 344
NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL PERÚ 349
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ DE 1979 (derogada) 358
DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 358
(Ley Orgánica del Ministerio Público) 358
Versión original – del 16 de marzo de 1981 358
DECRETO SUPREMO Nº 005-81-JUS 359
Reglamentan Disposiciones de Decreto Legislativo Nº 052 359
(Ley Orgánica del Ministerio Público) 359

PREFACIO

La caratula o portada del libro es una sutil metáfora a las luces y sombras de la justicia en el Perú. Muchos verán en la imagen la balanza de la justicia descabalada y descompensada, otros verán o querrán ver lo que su primera impresión les cause el objeto desbalanceado, habrá incluso, quienes atarán su mirada en el negro color de la duda que sugiere el fondo.

Yo lo tengo claro, es tal y como percibo la justicia en nuestra patria, 'una negra metáfora; donde la ley se ha convertido en instrumento de perversión al servicio de intereses políticos, económicos e ideológicos, donde el caos, la delincuencia, la impunidad y la corrupción son el espejo en el que se mira todo un país. El Perú.

En tal sentido, este libro que no peca por extenso, sino más bien por ser bastante ligero teniendo en cuenta los diversos temas que toca, y con los que, a través del análisis, mi sentido común va colisionando en crítica, siguiendo el irrestricto contenido de la Constitución Política y el Nuevo Código Procesal Penal, normas cuyo contenido es objeto de confrontación en la parte que interesa al presente estudio.

Todo ello, a efectos de llegar a entender por qué la justicia en el Perú ha caído en picado y va camino al descalabro; tanto, que la justicia ya no se mira al espejo, siente vergüenza ajena. Con tanta delincuencia, tanta corrupción y tanta injusticia el horizonte es negro. Si seguimos así, volveremos al oscurantismo de la justicia, a la oscuridad de la metáfora ante tanta confusión y desvarío; la falta de justicia podría dar paso al ojo por ojo, al linchamiento, a la venganza y a la barbarie.

Si seguimos a caballo del sistema judicial acusatorio que se implantó en nuestro país después de caer en cascada tras implantarse en los demás países de Latinoamérica, no habrá balanza de la justicia que valga ni espada alzada que zanje la litis; ojiplática y sin venda la justicia, verá pasar su cadáver, su mortaja y sus exequias, en un réquiem donde sólo quede vulneración y quebranto, oprobio e injusticia a pesar de la ley.

De qué vale una ley si no respeta la Constitución como ley suprema.

PROLOGO

‘SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO, EL GRAN FRAUDE’

CÓDIGO PROCESAL PENAL CONTRA LA CONSTITUCIÓN

FISCALES CONTRA LA POLICÍA

INTRODUCCIÓN

El sistema judicial acusatorio en el Perú es un fiasco total. Llegó sin que nadie se diera cuenta; y sin que nadie notara el ardid perverso de pervertirlo todo, en silencio se fue cocinando el zarpazo a la justicia, al Poder Judicial y a la policía que en su momento fueron pilares fundamentales en la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA.

Realmente este nuevo sistema de justicia, no es que se inventara o diseñara pensando en el Perú, es una vieja aspiración y pretensión del comunismo internacional. Al ver que por las armas sus huestes e ideólogos no pudieron imponer su primacía ni sus reglas, cambiaron de escenario y estrategia, y decidieron urdir una manera de infiltrarse solapadamente en el aparato del Estado, y así, meterse en el sistema imperante y desde dentro como un caballo de troya destruirlo.

Necesitaban conejillos de indias y un escenario como laboratorio para sus experimentos, y le pusieron la mira a Latinoamérica, era la zona geopolítica perfecta; no eran ricos ni desarrollados, pero tampoco eran tan atrasados como en África. Por lo tanto, al ser países en vías de desarrollo, eran susceptibles de tragar el anzuelo y ellos mismos autodestruir sus instituciones, su pasado histórico y el legado cultural de sus abuelos. Sabían que los países de la región (especialmente el Perú) son un nido de pillos, no se iban a resistir al dinero contante y sonante en ayudas, subvenciones y financiación foránea que como un maná recibirían de ONGs y de organismos internacionales. Las mentes corruptas de oportunistas a la sazón de periodistas, académicos, políticos y hasta incautos haría el resto; aprovechados que ávidos se prestaron al engaño.

Con ese incentivo surgieron sequitos de adoctrinadores, pseudo expertos, negociadores, arregladores y “arregleros”, entendidillos y convencedores, y como no, lo que nunca falta una retahíla de coimeros. Y no sólo en el Perú, sino en toda Latinoamérica.

Los acólitos del sistema acusatorio lo vendieron y lo venden como el “sistema judicial Latinoamericano”, no porque ahí lo inventaran, sino porque ahí hacen de cobayas del experimento dejándose inocular el virus de la antijusticia. Y digo bien, porque el sistema acusatorio que va en contra de que haya justicia, se ha expandido como un virus por toda Latinoamérica, países que han caído en cascada tomando ese sistema judicial como paradigma de justicia para la región. Aunque últimamente hay países como Argentina, Chile y México, que artos del aumento de la criminalidad están dando marcha atrás al ver que este sistema

(contrario a que se haga justicia) agrava el conflicto social y favorece e incentiva la delincuencia común.

El punto inicial del cambio de la justicia y la configuración del "nuevo proceso penal" está en el "Proyecto de Código Procesal Penal Tipo para América Latina" de 1978, desarrollado por abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur quienes fueron los autores intelectuales y promotores de estas reformas, como lo afirma uno de sus conspicuos predicadores del sistema acusatorio el afamado profesor de derecho penal Máximo Langer en su libro 'Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano'.

Ese fue el inicio de un movimiento de reformas legislativas cuyos códigos procesales de avanzadilla fueron los de Guatemala, Costa Rica 1996 y el Código Argentino de las Provincia de Buenos Aires de 1996, Venezuela 1998, Paraguay 1998, Bolivia 1999, Ecuador 2000, Chile 2000, Colombia 2004 y el NCPP de Perú que entró en vigor el 01 de agosto de 2006 (aunque fue aprobado en 2004); entre otros.

Como se ve, es una ola doctrinal e ideológica gigante de la antijusticia en América Latina, pararla es difícil pero no imposible, sólo hace falta que la gente despierte de su letargo a la vista de la criminalidad imperante que va a más y a peor; al punto que la gente en algunos lugares se está tomando la justicia por su propia mano, a falta de ella. Las ocurrencias de la globalización y las apetencias e injerencias neocomunistas en los sistemas de justicia están haciendo estragos en la convivencia de la gente de bien por culpa del crimen que se hace endémico, ya que, con el sistema de justicia acusatorio hay más delincuencia, más impunidad y más corrupción.

Al Perú el sistema judicial acusatorio llegó de la mano de "los hijos de Sendero y el MRTA", teniendo como centro de operaciones algunas ONGs ideológicas que se prestaron para ello, como IDL reporteros, Movadef y otras que se plegaron a los millones de dólares de las subvenciones y dádivas; dinero por el cual sucumbieron a la imposición de Organismos Internacionales como la ONU y sus Agencias, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc, etc. Consumándose un fraude a la justicia que es un fiasco total en el Perú.

Porqué este sistema judicial es un gran FRAUDE. Para empezar, debieron modificar la Constitución para poder aprobar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) tal cual está concebido y que da cabida al nuevo sistema de justicia llamado 'ACUSATORIO'. Es evidente que los gestores y promotores de este fraude hicieron un traje a la medida de sus intenciones. Una ilegalidad, que al no modificar la Constitución es una camisa de fuerza que sólo trae injusticia. Este sistema institucionaliza la injusticia. No hay justicia. Ha pervertido competencias de la judicatura, se ha cargado a los Juzgados de Instrucción y más, afecta la independencia de poderes y la razón de ser del Poder Judicial; por otro lado, el NCPP ataca frontalmente las atribuciones de la Policía Nacional que como

institución tutelar del Estado se debe a la Constitución y al imperio de la ley; un ataque que pervierte su accionar.

Precisamente de ello trata este estudio, de las transgresiones a la Constitución, mandatos anticonstitucionales del Nuevo Código Procesal Penal; también analizo los diversos cometidos de las instituciones implicadas como operadores de justicia, centrando el debate en el deslinde y/o confrontación entre investigación del delito e investigación policial, conflicto de atribuciones de los fiscales y la policía, la perversión de la acción penal, y porqué el sistema acusatorio es un fraude para la justicia. Y así lo abordo.

No olvidemos que el sistema acusatorio está diseñado "para apropiarse" de los mecanismos del sistema judicial y de las atribuciones de la policía; en otras palabras, destruir los instrumentos y mecanismos tradicionales imperantes en la justicia y en la policía para desestabilizar y pervertir el orden y la convivencia, de tal manera, que los "grupos ideológicos de influencia y de poder de la izquierda caviar y neocomunista" puedan tener el control e influir, y si acaso, manejar a su antojo las instituciones, haciendo y deshaciendo con la justicia y la labor policial, mientras sus huestes de fachada y de acción actúan generando caos y violencia con total impunidad.

UBICACIÓN DEL OBJETIVO COMO APUNTE PREVIO

Antes de entrar de lleno en el análisis materia de presente estudio, permítanme la licencia de ubicar el objetivo principal contra quienes atenta este sistema judicial acusatorio instaurado a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

Su implantación en el Perú, objetivamente nos deja tres perjudicados o víctimas:

En primer lugar, **todos** nosotros **los peruanos**, la gente en general (la sociedad).

En segundo lugar, **el Poder Judicial** (la justicia).

En tercer lugar, **la policía** que lucha contra la criminalidad (el orden y el cumplimiento de la ley).

1).- ***Se perjudica la sociedad***, porque al quitarle a las personas el derecho como víctimas de ejercer por sí mismas la acción penal, se quedan desarmadas, desguarnecidas, sin el amparo real de acceso a la justicia que les daba anteriormente (y les puede dar) el 'principio de legalidad'. Y eso, sólo se puede establecer con un vínculo directo entre la víctima y el juez. Sin intermediarios que criben, limiten o discriminen la acción, en otras palabras, impidan el acceso al juez, apropiándose de la acción penal e instrumentalizando sucedáneos de justicia en base al 'principio de oportunidad' que abandera el sistema acusatorio.

Imaginemos un parque público, que es de todos, donde cualquiera puede acceder fácil y libremente, sin que nadie limite el acceso; pero si el Estado lo regala, lo entrega en concesión o se lo asigna a alguien, y éste, limita, selecciona el acceso y determina quienes pueden entrar y quienes no, sencillamente, ese parque deja de ser de todos. Como dirían en Castilla: Sería como "ponerle puertas al campo". Eso ocurre con la acción penal en el sistema judicial acusatorio. La criba de los delitos que pasan del fiscal al juez es su seña de identidad, debido a que el fiscal tiene facultades para aplicar el 'principio de oportunidad', lo cual impide el acceso a la justicia, es decir, a la tutela judicial efectiva. Las víctimas quedan a expensas que el fiscal ejerza o no la acción penal, si es que la ejerce.

Por otro lado, las personas con el sistema judicial acusatorio se perjudican, porque éste atenta contra la presunción de inocencia, ya que promueve un mal uso y una arbitraria aplicación de la prisión preventiva. Así, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en sus artículos que regula esta medida restrictiva de la libertad, viola el Art. **2. 24, e)** de la Constitución que dice: "*Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad"*.

Al ser los fiscales, amos y señores de lo que llaman investigación preparatoria, a instancias y a su solicitud, "pueden meter en la cárcel" a cualquier ciudadano que para el fiscal es presunto responsable de haber cometido un delito; el juez, para no contaminarse no puede hacer otra cosa que autorizar. Y todo ello, sin

que la persona haya sido procesada aún y mucho menos acusada; si acaso, "siguiendo el juego" al sistema judicial acusatorio y al NCPP, estaría con una "imputación fiscal", una calidad de imputado, que es un invento fraudulento del sistema acusatorio; ya que, en un estado de derecho sensato, las imputaciones se rigen por el principio de legalidad, y sólo podría imputar un juez. Al fiscal sólo le correspondería calificar y acusar cuando le tocara.

Es decir, "la prisión preventiva del sistema acusatorio" se carga literalmente 'la presunción de inocencia', ya que una persona por el sólo hecho de estar siendo investigada por un Fiscal puede entrar en prisión. ¡No colaboras con mi investigación, te envío a prisión!. Y eso no debería ser así. La prisión preventiva debería ser la excepción y no la regla. Eso, al margen, que excepcionalmente según el caso se tenga que acreditar los presupuestos y requisitos contemplados para su aplicación.

Visto así, ¿el sistema acusatorio es garantista?; de qué, de quién y para quién. Si beneficia a los delincuentes es antijusticia. Contradictorio, ¡verdad!.

Si los fiscales son los que velan por la legalidad, y velan que ninguna persona que no haya sido declarada judicialmente responsable pise la cárcel, porqué utilizan la prisión preventiva como arma arrojadiza para conminar e incentivar la delación muchas veces falaz e inútil. Así, se pervierte la justicia jugando a la cocinita de la antijusticia. "Si no hablas te frío". "Hablas, delatas, colaboras, te declaras chivato (mentiroso por conveniencia) o te meto a prisión". Se ve, … ¡Dos varas de medir, según la oportunidad!. En el sistema acusatorio se le llama "construir el caso". Lo cierto es que, la verdad no se construye. ¡La verdad, es o no es!. En otras palabras, los hechos no se construyen, son lo que son.

Decía: Se perjudica la sociedad; porque con el sistema judicial acusatorio desaparece la víctima como tal, le etiquetan eufemismos progres y le privan de sus derechos; lo convierten en agraviado, perjudicado, ofendido, etc, etc; y en el juicio, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) nos lo presenta como ACTOR CIVIL. Con lo cual, se cargan de un plumazo la acusación particular, desaparece; dejando la suerte de la víctima en manos del fiscal. Como actor civil sólo puede reclamar resarcimiento (reparación). El juicio incluso puede llevarse a cabo en ausencia de la víctima (notificada).

Así, ante UNA mala acusación fiscal (única bala) o un mal planteamiento de 'la teoría del caso' por parte del fiscal, el resultado sería contrario a los intereses de la víctima. De ser así, en el juicio la víctima es convertida en mera observadora de la injusticia. Una doble desgracia; primero por ser víctima de un crimen y segundo por ver a su agresor salir libre de polvo y paja gracias a la antijusticia del sistema acusatorio. Por el contrario; si hubiera acusación particular (sistema español) eso no ocurría, porque a juicio la víctima iría con dos balas en la recamara; una, la acusación particular (principal), y dos, la acusación fiscal; e incluso una tercera bala, de 'la acusación popular' si fuera el caso; además (al no ser sistema acusatorio) contaría con la valoración, ponderación y discrecionalidad de un juez (distinto) con autoridad y autonomía para valorar y

resolver en base a las pruebas presentadas, practicadas y/o ratificadas en el plenario.

2).- ***Se perjudica el Poder Judicial***, porque le usurpan su razón de ser, el de administrar justicia, es decir, que sus jueces puedan juzgar tal y como marca la Constitución, en base al principio de legalidad, sin intermediarios ni estar condicionados por nada, más que al imperio de la ley. Justicia y juez es algo indisoluble. No puede haber cortapisas, señuelos ni sucedáneos de justicia de ningún tipo, como son la purga previa que hace el fiscal (de no hacer uso de la acción penal por decisión propia al amparo del principio de oportunidad) o los acuerdos reparatorios (que son de facto sentencias anticipadas); o el uso arbitrario que hacen los fiscales de no acusar en función de su teoría del caso; es decir, si no logran "construir un caso"; o incluso, muchas veces, simplemente dejen pasar el tiempo a que muera el asunto por prescripción; una perversión legal difícil de controlar.

Ni que decir, que, como un huracán que lo destruye todo, el sistema judicial acusatorio arrasó con los juzgados de instrucción, dejando al Poder Judicial sin una herramienta y una parcela funcional muy importante; un activo referente de justicia, que daba cabida a que la víctima pudiera acceder a ella directamente como tal. La fase de instrucción instrumentalizaba ese espacio inicial donde la justicia abordaba los hechos con la cara lavada, era el puente para que fuera posible, real y efectivo el principio de legalidad.

De cómo se gestó estos malos vientos, lo graficaré más adelante en palabras de uno de sus mentores y promotores del sistema procesal penal acusatorio-adversarial, el Dr. Julio B. J. Maier.

La Constitución política del Perú no prevé ni recoge nada sobre la desaparición de los jueces de Instrucción. Por el contrario, los refuerza en muchos artículos. A los fiscales les otorga conducir la investigación del delito (activarla, accionarla, impulsarla), pero no presidirla ni controlarla, eso constitucionalmente se le otorga al juez de instrucción (Poder Judicial), como manda la Constitución, **Art. 2. 24, f**, y el **Art 100** (párrafos **3ro** y **5to**), etc., etc., remarcándose incluso en estos artículos la necesaria asunción de jurisdicción de este juez. "El juez podrá asumir jurisdicción antes de vencido el término (tiempo)" (Art. 2. 24, f). "El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente" (Art. 100).

Por ello, cabe preguntarse: Quién le ha dado atribuciones de imputar al fiscal, dónde está eso, en la Constitución no está. Si no lo hace el juez, el fiscal no podría hablar de imputado, sino de investigado, eso incluso tendría que hacerlo el juez, además de la tipificación inicial.

En la Constitución no hay ni una sola mención al 'sistema judicial acusatorio' ni tampoco al 'principio de oportunidad', que le son ajenos, disimiles, contrarios y contradictorios al mandato constitucional. Y sin embargo si hay muchos artículos que recogen 'el principio de legalidad', dejando clara la postura del espíritu de la

norma constitucional y su preminencia; pero sobre todo reseñando qué sistema procesal es el que tiene encaje y cabida en nuestro ordenamiento jurídico.

Por ello, es incomprensible el manso sometimiento del Poder Judicial a este sistema acusatorio foráneo e impostado que ha irrumpido pervirtiendo nuestro sistema judicial, alterando la convivencia con la ley y rompiendo la baraja de la justicia en nuestro país. Nuestra justicia no admite cartas marcadas, y menos marcadas por un fiscal.

Con ello, la judicatura pierde muchísimo; pierde entidad como institución, señorío, credibilidad y referencia. El Poder Judicial ya no es lo que era, tiene rotos por todas partes, le han agujereado su esencia que hasta la justicia desconfía de él. Ya no hay juzgados de guardia, los juzgados de instrucción fueron borrados del mapa, no hay carceleta judicial, no hay atestados ni detención judicial a solicitud policial, les han capado la facultad de dictar auto apertorios de instrucción, la persecución del delito es una papa que les quema, no hay policía judicial, han perdido el Instituto de Medicina legal y muchas más cosas. Han perdido entidad y poder, tanto, que muchos jueces están siendo sancionados por dictar sentencias ajustadas a derecho, pero no ajustadas a ciertos intereses; es decir, por ser contrarias al interés del fiscal y/o al poder político. El poder mediático hace el resto.

Hay muchas más aristas, contenidos y matices del ataque, colisión y perjuicio que causa el sistema judicial acusatorio y su Código (el NCPP) en contra de nuestro denostado Poder Judicial; sobre todo, el ataque y vulneraciones a los contenidos y mandatos constitucionales de los artículos **138, 139 y 143, y otros,** cuya explicación la hago y desarrollo más adelante.

3).- ***La tercera perjudicada es la policía***, que a pesar de lo que manada la Constitución; a través del Nuevo Código Procesal Penal: Por un lado, hay una ilegal injerencia funcional en contra de la policía, a todas luces inconstitucional, le usurpan la investigación de la delincuencia (o investigación policial) y la someten bajo el yugo de los fiscales, reduciendo a la policía al nivel más ínfimo y elemental, de simples mandaderos, ordenanzas, cuidadores de objetos, y como mucho, escribientes o algo menos que a un simple furriel. Ya que al privársele de hacer los atestados que iban directamente al juez, hoy sólo se les permite informar y como mucho hacer informes dirigidos al fiscal, que por mucho que se esfuercen, les dicen que no son vinculantes, por lo tanto, no son tomados en cuenta.

Por otro lado, de nada vale que la policía se esmere por combatir la delincuencia, si cuando detiene a los delincuentes el fiscal los pone en libertad de inmediato a vista y paciencia de todos sin que pasen por el juez; y todo ello, ante el asombro de las víctimas, de la policía y de la ciudadanía en general.

El policía por mandato constitucional y empoderado para ejercer ‘el poder de policía del Estado’, debería poner a disposición a los detenidos directamente al juez que instruya o juzgue, según el caso (Art. 2. 24. f); así ordena la

Constitución. Eso de que haya intermediarios de por medio, como es el caso de los fiscales, es hacerle trampas a la norma constitucional, es entrar en un 'juego de trileros' con la justicia que la ley no debe permitir ni amparar. Lo que ocurre, es que, el NCPP va contra natura al hecho de obtener una justicia real, libre de ataduras y condicionamientos ideológicos.

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), fue promocionado y vendido como un nuevo proceso penal que iba a transformar la justicia, de lenta, enredada, intrincada y corrupta, en ágil, simple, diligente y transparente. Por ello y para ello, favorecieron al Ministerio Público otorgándole excesivas atribuciones, funciones y competencias; en desmedro de la Policía Nacional, al desnaturalizar su finalidad fundamental, recortándole sus atribuciones y facultades en la investigación, contraviniendo el mandato constitucional.

De ello, y de este tercer punto en particular, basa parte importante de este estudio. De las contradicciones y vulneraciones a la Constitución por parte del NCPP en perjuicio de la policía, teniendo como escenario el sistema judicial acusatorio, la criminalidad, el delito y los actores en la investigación.

Para no repetir nombres, cuando diga la Policía me refiero a la Policía Nacional del Perú, la sigla NCPP es Nuevo Código Procesal Penal, cuando lean la Constitución estoy hablando de la Constitución Política del Perú.

Si bien, el NCPP hace referencia a instancias, fases o partes del proceso penal y a diversas figuras jurídicas con nombres edulcorados y travestidos para burlar todo lo relacionado con el sistema judicial antiguo. Con ello, se le ha dado carta de naturaleza a los cambios que recoge y a todo lo que asume como válido; lo cual, es una perversión jurídica al vulnerar la Constitución. Por ello, yo al considerarlo inconstitucional; para este estudio, lo veré sólo desde dos perspectivas, jurisdiccional y no jurisdiccional; limites que el NCPP no debería haber traspasado.

No distraeré al lector con lo evidente, de lo que es mejor o peor; tampoco con el análisis de intrascendentes peculiaridades procesales que contiene el NCPP. Lo que haré, es centrarme en tres aspectos fundamentales, la inconstitucionalidad, la verdad fáctica del nuevo proceso penal y sus opuestos (investigación y antijusticia) y lo que el sistema acusatorio y el NCPP causan en la sociedad peruana.

Empezaré el desarrollo invirtiendo el orden de prioridades, por proximidad, comenzaré por el agravio y todo lo que atenta contra la Policía, luego seguiré con la injerencia y ataque hacían el Poder Judicial, y finalmente, el daño a la sociedad y todo lo que ello significa y causa el sistema judicial acusatorio.

INVESTIGAR LA DELINCUENCIA vs INVESTIGACIÓN DEL DELITO

INVESTIGAR EL DELITO vs INVESTIGACIÓN POLICIAL

EN LA CONSTITUCIÓN

Labor policial vs Labor procesal
Actividad policial vs Proceso penal
Investigación policial vs Investigación jurisdiccional
Investigar hechos delictivos vs Investigar hechos del delito
Investigar hechos delincuenciales vs Investigar hechos tipificados
Investigar la delincuencia vs Investigar el delito
Hechos en policía vs Delitos en juzgado
Hechos delictivos vs Hechos del delito

Los títulos que anteceden están puestos adrede y de diversa manera, para verificar que se mire por donde se mire la realidad es una y nos lleva a la misma conclusión y línea de razonamiento. Si focalizamos la idea para establecer la premisa; concluiremos: Que hay que saber diferenciar las cosas, y más si se trata de la norma constitucional.

La Constitución Política del Perú en su normativa nos marca un reto a deslindar y a aclarar; por un lado, en su Art. **159 inc. 4**, nos habla de "INVESTIGACIÓN DEL DELITO"; y, por otro lado, en su **Art. 166**, nos habla de "INVESTIGAR LA DELINCUENCIA".

Artículo 159.- ***Atribuciones del Ministerio Público***

Corresponde al Ministerio Público:

1.- Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.

2.- Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.

3.- Representar en los procesos judiciales a la sociedad.

4.- Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

5.- Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

6.- Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.

7.- Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.

Artículo 166.- ***Finalidad de la Policía Nacional***

La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

Pues bien, al parecer esto ha creado tal confusión, no sólo en las instituciones que tienen que ejecutar estos dos cometidos, sino también en quienes tenían la obligación de interpretar y hacer cumplir la Constitución; tanto, que les ha llevado a promover y a aprobar normas de rango menor que la Constitución, como el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957, promulgado el 22 Jul 2004; publicado el 29 Jul 2004; y que entró en vigor el **1 de Ago 2006**) que contraviene claramente el mandato constitucional antes señalado.

Este código procesal no sólo trae confusión, sino que, ha pervertido el sistema desde el punto de vista constitucional. Eso, porque a la vista de ambos mandatos (159.4 y 166), simplemente estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes; y si cabe, estamos hablando de dos momentos diferentes del trabajo a desarrollar por las diversas autoridades e instituciones implicadas, a las cuales la Constitución les encomienda un trabajo específico. A la Policía Nacional le corresponde 'INVESTIGAR LA DELINCUENCIA' y al Ministerio Público le corresponde la 'INVESTIGACIÓN DEL DELITO'.

Pero además hay una diferencia muy precisa y clara, a la Policía Nacional el encargo constitucional está recogido como una FINALIDAD FUNDAMENTAL, es decir, como la razón de ser de la policía (entre otras). Sin embargo, el encargo al Ministerio Público está como una ATRIBUCIÓN más, es decir, como algo complementario a su razón de ser, cuya principal finalidad de los Fiscales es velar por la legalidad.

Investigar la delincuencia.

Es lo que en todo el mundo se le conoce como 'Investigación Policial'. Eso implica, pesquisas, prevención, vigilancias, sospechas, seguimientos, colaboradores, infiltración, indagaciones y todo lo que demande la investigación policial, ya sea labor de inteligencia, operativos, trabajo de campo, intervenciones preventivas e indagatorias, y lógicamente, intervención e investigación en flagrancia de hechos. Es decir, intervenir en todo lo que es el accionar de la delincuencia, desde que los hechos delictivos o las acciones delincuenciales están en ciernes hasta que se producen los mismos y hasta antes de ponerlos a disposición de la autoridad judicial o jurisdiccional (Art. 2. 24. f de la Constitución).

No por algo, la finalidad fundamental de la Policía Nacional a que se hace referencia (Art. 166), en su literalidad constitucional dice: "PREVIENE, INVESTIGA y COMBATE la delincuencia". Con ello, la Constitución deja claro que otorga a la policía no sólo **investigar**, sino, prevenir y combatir la delincuencia; con lo cual, cierra el círculo de la fase policial dotándole de autonomía para ello, sin la intervención de un tercero (un fiscal).

Que quede claro, que 'hablamos de hechos' en fase policial, que presuntamente podrían ser delitos o no, pero eso lo verán o determinarán en fase jurisdiccional. Es decir, que la policía investiga e interviene ante hechos delincuenciales. Constitucionalmente en esta fase la policía tiene autonomía y es la titular del accionar funcional en ese sentido.

Para ello, la misma Constitución en su **Art. 2, 24. f. (*),** en dos supuestos muy marcados, le da a la policía el soporte y las herramientas necesarias para que su accionar no quede vacío de contenido.

(*) ***Art. 2. 24. A la libertad y a la seguridad personales****. En consecuencia:*

a. *...Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe...*

e. *Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.*

f. *Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las* ***autoridades policiales*** *en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto* ***a disposición del juzgado*** *correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.*

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y ***al juez, quien*** *puede* ***asumir jurisdicción*** *antes de vencido dicho término.*

En el primer supuesto le dice a la policía; que en caso de flagrancia puede detener hasta por 48 horas, poniéndolo ***a disposición del juzgado***. Aquí, en ningún momento menciona la intervención del fiscal. Y es porque son diligencias e investigación policial. Así que cualquier cosa que diga lo contrario es una transgresión constitucional.

En el segundo supuesto dice: por terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales (aquí no dice flagrancia, así que no hace falta); la policía puede efectuar detención preventiva hasta por 15 días, **dando cuenta al** Ministerio Público y **al juez**. Aquí tampoco se considera la intervención del fiscal, a quien ni se le nombra, se hace referencia al Ministerio Público como institución

al que a título informativo sólo se le informa (en el primer supuesto no es necesario y no se le informa); lógicamente, después de dar cuenta previamente al juez, y donde el juez puede asumir jurisdicción antes de vencerse el plazo dado constitucionalmente. Como se puede ver, no habla de jurisdicción fiscal. Y esto es, por la misma razón del párrafo primero, que son diligencias policiales, 'hechos que la policía tiene que poner a disposición judicial' por imperativo legal.

Eso es lo que manda la Constitución. Como se puede apreciar claramente, la jurisdicción es judicial. Por lo tanto, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), al normar y establecer cosas contrarias a los mandatos de la Constitución, en este caso en concreto, se quebranta y mucho la norma constitucional. Digo mucho, porque a partir de ello se eliminan los atestados y los jueces de instrucción y más; se pervierte el sistema de justicia.

Todo ello, se complementa con el **inc. e)** del mismo **Art. 2. 24**, que remarca como imperativo legal: *"Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado **judicialmente** su responsabilidad"*. Y es lógico, el detenido será presunto, y así lo debería recoger la policía en sus diligencias y en su atestado si se le restableciera sus atribuciones y su finalidad fundamental de "investigar la delincuencia". Como se ve, la Constitución recoge, reseña y habla en todo momento de juzgado (**judicialmente**). No habla para nada de fiscal.

Según la Constitución (**Art. 166**), la delincuencia (hechos delincuenciales) debe ser investigada por la policía. El mandato constitucional es claro; en él, la autonomía policial en la investigación está más que reconocida. En este punto, la presencia del fiscal sobra, no pinta nada, no es necesaria ni es constitucional. Por lo tanto, el trabajo de la policía en cuanto a la investigación no está condicionado más que por el imperio de la ley y por la autoridad judicial, que es a quien debería poner a disposición los detenidos dentro de las 48 horas o 15 días según sea el caso (**Art. 2. 24, f**).

La certeza de este razonamiento la tenemos en el citado **Art. 159. inc. 4**, que atribuye al Ministerio Publico "***Conducir** desde su inicio la investigación del delito".* Mandato que inequívocamente debería ir en concordancia con el mandato anterior "mientras no se haya declarado **judicialmente** su responsabilidad" del Art. 2, 24 **inc e)**. Es decir, con un mandato previo (un auto) de imputación por un juez o con una sentencia. En otras palabras, la inocencia del detenido puede ser afectada judicialmente mucho antes a que haya sentencia, si su no responsabilidad se ve cuestionada. Constitucionalmente esta situación se da con el auto apertorio de instrucción (Art. 2 y Art. 100), es decir, cuando el juez asume jurisdicción; y por lo tanto, PRESIDE **y dirige** la INVESTIGACIÓN. Es evidente que actualmente con el NCPP no es así, pero es

evidente también que eso es inconstitucional. Lo cierto es que, DIRIGIR y CONDUCIR no significan lo mismo, son dos cosas distintas. Dirigir deviene y es atribuible al director; y conducir es o significa mover, accionar, activar, impulsar, promover, etc, y es atribuible a un operador sujeto a las disposiciones de un director. Pues bien, en este caso constitucionalmente, el director sería el juez y el conductor sería el fiscal, todo dentro del proceso penal, que no debería ser diferente a la fase jurisdiccional.

Queda claro que constitucionalmente la intervención del fiscal a efector de INVESTIGACIÓN del delito debería aparecer recién después del auto apertorio, ya que antes sin un juez de por medio no habría indicios racionales de imputabilidad de delito. Ahí está precisamente, y no antes, el punto de partida y el inicio de la actuación fiscal, en cumplimiento al mandato de "conducir la investigación del delito", antes no hay delito, sólo hechos. Todo ello, lo explico detalladamente más adelante.

Por lo tanto: Lo de "tipificación fiscal" e "imputación fiscal" es un invento del sistema judicial acusatorio que no tiene pies ni cabeza. Si nos ceñimos a la Constitución, la tipificación y la imputación, no son en fase policial. En todo caso, ello, ocurren más tarde, ya en fase jurisdiccional. El fiscal debe limitarse a la "calificación y acusación fiscal" cuando le toque. La calificación y la imputación pareciera que son lo mismo, y hasta cierto punto se parecen, pero no lo son. **La calificación**, ciertamente es una valoración de los hechos que no lleva la carga impositiva de la certeza punitiva que está dotada **la imputación** (siempre claro está en términos de presunción); sino más bien recoge el convencimiento de una valoración-propuesta, donde el fiscal le pide al juez se impute e imponga al procesado un determinado castigo penal.

Volviendo a retomar el punto inicial del debate que nos ocupa. Lo cierto es que, siguiendo el mandato constitucional, LOS HECHOS, una vez recogidos por la policía (investigación policial), con las declaraciones, testimonios, indicios, pruebas o elementos probatorios (lo que hoy el Nuevo Código Procesal Penal llama elementos de convicción), más los objetos intervenidos, junto con los detenidos, como manda la Constitución, deberían ser remitidos por la policía directamente al juzgado; lo que se conoce como, 'poner a disposición judicial'.

Es preciso señalar que lo realizado por la policía hasta ese momento aún no es procedimiento judicial. La Constitución misma se encarga de remarcar y diferenciar atribuciones y tiempos, de cuándo un hecho es jurisdiccional (Art. 2. 24, f), siendo la policía el nexo que marca la Constitución entre el hecho criminal y la puesta a disposición judicial. Asumida la jurisdicción por el juez, la policía queda a disposición y a ordenes bajo mandato judicial.

Por lo tanto, antes de ello, constitucionalmente, no hay ni puede haber intervención del fiscal aún, sino hasta que el "atestado policial" (que es como se llama en todo el mundo las actuaciones policiales que van al juzgado) llega a manos del Juez; y éste, incoara procedimiento (diligencias) si apreciara que hay un hecho punible (un delito); o si a valoración judicial de los hechos existiese indicios racionales de criminalidad; por supuesto, siempre en el ámbito de la presunción.

Ese es el momento en que se entra a la fase jurisdiccional, y donde el fiscal, tal y como está redactada la Constitución, sí tiene ya un mandato que cumplir; la investigación del delito. El Juez es quien le debería dar traslado de la infracción penal presunta, para que el fiscal actúe en consecuencia. ASÍ ES COMO DEBERÍA SER.

La Investigación del delito.

Aquí es donde, de acuerdo al mandato constitucional recién debería entra a tallar el Fiscal para cumplir su cometido de CONDUCIR (mover, accionar, activar) la investigación bajo la dirección del juez. Encargo que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) lo ha desvirtuado, llevándolo a traspasar límites de quebranto constitucional. Constitucionalmente la dirección de la persecución e INVESTIGACIÓN del delito le corresponde al juez, lo que ocurre, es que el NCPP se cargó a los jueces de instrucción para que estos no cumplieran con ese rol. Lo cierto es que, la labor de investigación que tenían encomendada los jueces y que venían desempeñando normalmente, el NCPP se lo endosó a los fiscales, de otra forma no se hubiera podido instaurar el sistema acusatorio. Una transgresión constitucional cuyas consecuencias fue cargarse la justicia. De acuerdo a la Constitución los fiscales deberían actuar y cumplir su rol en fase jurisdiccional, una vez que el proceso penal está en marcha.

Y lo explico:

El Juez debería recibir el atestado o diligencias policiales, o si se quiere, 'los hechos investigados policialmente'; éste tiene dos opciones, si cree que no hay indicios de criminalidad lo archiva, si cree que hay indicios racionales que los hechos son constitutivos de configurar un tipo penal, 'incoa' o instruye (manda); y para que se cumpla el mandato del **Art. 159 inc. 4** de la Constitución sobre la conducción de la 'Investigación del delito", el Juez tendrá (tendría) que remitir al Fiscal lo que recibió de la policía (denuncia e investigación policial), para que éste haga su trabajo (**conducir**). Como se puede ver, el juez sigue siendo el titular de la instrucción (investigación), el DIRECTOR, el que dirige la persecución del delito; y el fiscal sólo es un activador de la investigación, un accionador o CONDUCTOR; o si se quiere, un promotor de la misma. Así es en España.

Si el fiscal, cree que lo recibido del juez (la denuncia y la investigación policial –<atestado>) es suficiente para demostrar que se cometió un delito; con ello, puede ejercer "la acción penal", que vendría a ser la formalización de la denuncia

en nombre del interés general, que sería en términos prácticos, reforzar la denuncia de la víctima enviada por la policía al juez y que se materializa en la acción penal ejercida por la víctima en su propio nombre. De esa manera se cumpliría el mandato constitucional. Si por contrario, el fiscal cree que lo actuado y recibido no es suficiente. Al haberse iniciado el proceso penal y estar aún en el INICIO de la investigación DEL DELITO (fase de instrucción), puede por su parte, solicitar al juez diligencias a realizar por la policía (previa autorización judicial) o librar mandatos a la policía a través del juez para que ésta realice ciertas diligencias que la fiscalía estime conveniente.

Y si la fiscalía tomara conocimiento de un hecho criminal y aún no estuviera judicializado, siendo la fiscalía la primera que toma conocimiento, a requerimiento de la fiscalía la policía está obligada a investigar (se tomaría como una denuncia), pero realizada la investigación policial (hoy le llaman investigación preliminar) es al juez a quien se tiene que dirigir la policía poniendo a disposición lo actuado para que éste asuma jurisdicción. Eso es lo que manda la Constitución. (Lógicamente, todo esto no se está cumpliendo).

No se está cumpliendo porque eliminaron al Juez de Instrucción, pero mientras no se revierta la vigencia del sistema judicial acusatorio, la policía en cumplimiento del **Art. 2. 24, f** de la Constitución, podría poner a disposición del Juez de Investigación Preparatoria, quien podría admitir a trámite la denuncia, y remitirlo a la fiscalía a efectos de la CONDUCCIÓN de la investigación del delito propiamente dicho. La justicia no puede ser bicéfala.

A diferencia de España que todo se canaliza a través del juez; en el Perú el fiscal sin respetar las competencias y autonomía funcional de la policía (merced al NCPP) se dirige por su cuenta a la policía, como si ésta estuviera a su servicio; considerándola como si fuera una fuerza auxiliar de la fiscalía; lo cual, hace saltar por los aires la AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL (funcional) que la policía tiene otorgada en el **Art. 166**.

Lo que ha ocurrido, es que para sacar adelante el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se ha tenido que retorcer el espíritu normativo de la Constitución hasta extremos de ser vulnerada sin que nadie repare en ello.

Así, con una antojadiza y mala interpretación del **Art.159 inc. 4** de la Constitución se ha permitido que ésta sea violentada por el NCPP: "…*la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función".* Esto traducido en cristiano sería: "señor policía tenemos conocimiento que fulanito está delinquiendo o está cometiendo actos contrarios a la ley, haga el favor de investigarlo".

Ojo: Ello, no significa que la policía se ponga a ordenes de los fiscales. Eso no dice la Constitución. La labor policial es labor policial, y aunque no lo quieran ver (en el cumplimiento de su función), goza de autonomía sólo sujeta al imperio de la ley. El trabajo de la policía no tiene porqué realizarla el fiscal, ni estar condicionada por éste; ni siquiera debe estar presente un fiscal en fase policial

(en prevenir, investigar y combatir la delincuencia); no es necesario. Sería contrario a derecho, tal y como está redactada la Constitución.

Cuando la Constitución dice 'CONDUCIR', no dice subordinar y dirigir al personal policial ni realizar el trabajo policial, sino, se refiere a que el fiscal debe **conducir** (accionar, activar, mover) 'la investigación del delito' cuando LOS ACTUADOS llegan a su mesa procedentes del juez; pero siempre a través del juez que asume jurisdicción. Precisamente ahí, penalmente, la investigación está en sus INICIOS como tal. Ahí se inicia el proceso penal, que es el inicio al que se refiere el Art. 159 inc. 4 de la Constitución. Fase jurisdiccional. Es decir, que a partir de ese momento el fiscal puede determinar qué otras diligencias debe hacer la policía, pero de ninguna manera interferir de cómo las llevará acabo, ni como la policía debe realizar su trabajo sobre el terreno.

No hace falta fiscales en las comisarías ni en las Unidades especializadas de investigación. Para garantizar el derecho de las personas intervenidas (citados, notificados, testigos, interrogados, detenidos) ya está el abogado designado y apersonado (particular o de oficio). Eso sí, la policía a través del juez, está en la obligación de cumplir los mandatos (o requerimientos por escrito) del fiscal con eficiencia (siempre en fase jurisdiccional), pero con entera libertad o autonomía funcional con arreglo a ley, autonomía que le da el Art. 166 de la Constitución.

Con ello, más lo que hay en los actuados, el Fiscal cuando le toque (fase jurisdiccional), al margen de lo que haga la víctima; si ve que hay delito, podrá ante el Juez formalizar denuncia y ejercer la acción penal en nombre del interés general (para más adelante en el juicio ejercer la acusación fiscal); en caso contrario, comunicará al Juez que no estima haya delito.

El Juez actúa en consecuencia, teniendo en cuenta, además, si hay o no denuncia de la víctima que pueda constituirse luego como acusación particular. Lógicamente, esto último tampoco se cumple, porqué en el NCPP (que encarna el sistema acusatorio) desaparece la condición de víctima.

Las personas deberían acceder a la justicia no sólo como actor civil, sino también como víctimas. Si bien, la "Acción penal pública", en nombre del Estado (o del interés general) la dejan en manos del Fiscal, la Constitución no dice que "a la persona" se le niegue la condición de víctima; y mucho menos dice, que a la víctima se le prive de su derecho a ejercer de 'motu propio' la acción penal, ello, sería privarle de su derecho al arbitrio judicial. La Constitución no le despoja a la víctima el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Si la Acción penal es PÚBLICA significa que COMPETE a TODOS, y no excluye a la VÍCTIMA, que lógicamente por su cuenta y como tal está en su derecho de ejercerla.

Como se puede apreciar, hay una mala interpretación de la norma constitucional y de ahí los desatinos en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

Dicho lo cual, el Fiscal y la víctima deberían estar habilitados para constituirse como acusación; uno a nombre del Estado e interés general, y la víctima en su propio nombre.

Esa es la interpretación correcta y la lectura que se le debe y se le debió hacer al **Art. 159** de la Constitución, sobre la 'acción penal' y sobre la 'investigación del delito' por parte del Ministerio Público, para que la actuación de los fiscales al amparo del NCPP no sea inconstitucional.

Volviendo a la idea: Hablar de investigación del delito desde el contexto constitucional, nos obliga a analizar el espíritu de la norma, es ubicarnos en fase jurisdiccional, es hablar de una fase que se da mucho más tarde en el tiempo respecto a la inicial intervención de la policía y su investigación policial. Por ello, no hay que confundir, o mejor dicho hay que saber diferenciar, la labor de la policía de la labor de los fiscales. No es lo mismo prevenir, investigar y combatir la delincuencia (mandato constitucional **Art. 166**), lo que incluye hechos con indicios de criminalidad; que investigar el delito del **Art. 159;** aquello es otra cosa; es el delito en sí, ya en sede jurisdiccional.

No cabe duda, que 'la investigación del delito en sí' (de acuerdo al mandato constitucional), se da recién con la 'incoación de diligencias' que debería hacer el Juez al recibir el atestado; ya que es él, quien en definitiva determina si hay indicios racionales de criminalidad. A partir de ahí, el Fiscal puede hacer suyo el cometido y promover la investigación, conduciendo la misma según sus valoraciones. Para ello, se le abren dos vías: **la 1ra,** a través del juez aquellas diligencias que requieren autorización judicial, y **la 2da**, ante una noticia criminal que conoce, librar mandatos (a título de denuncia) que crea oportuno a la policía para que ésta investigue y cumpla en realizar algunas diligencias propias de la función policial.

Todo ello, para en su momento, en representación de la sociedad presentar acción penal, que equivale a formalizar la denuncia, independientemente de lo que haga la víctima. Postura que puede coincidir o no con la del juez, quien tomará nota y hará valoración de acuerdo a su apreciación legal.

Es decir, en el momento que el Juez envía los actuados al Fiscal para que éste presente acciones si considera si hay delito, o si cree que hay algo que investigar, para que se requiera (mandatos) a la policía investigue y haga las diligencias oportunas, averiguaciones, búsquedas, toma de declaraciones, búsqueda de indicios, pruebas, etc, etc. Como se puede ver; ahí el fiscal puede promover acciones y diligencias; es decir, conduce LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO si lo cree necesario. Se puede constatar, que aún estamos en el inicio del proceso penal. Es el inicio de la investigación del delito como tal, ya que recién los hechos son INCOADOS por el juez como DELITO o delitos (presuntos).

Es ese el momento (fase jurisdiccional) en que la Policía Nacional está obligada a cumplir los requerimientos (mandatos) del Ministerio Público 'en el ámbito de su función', pero a través del juez. Pero que no se confunda ni se mal interprete. Cuando dice mandatos, no se refiere a que la policía como tal, se tenga que subordinar o ponerse a órdenes del fiscal; sino, que lo requerido por el fiscal 'por escrito' (mandatos), la policía realizará y cumplirá en el ámbito de sus competencias; pero lo hará con autonomía funcional. Es trabajo policial.

El policía representa la ley y a una institución, la PNP; por lo tanto, no es mozo, mandadero, ni recadero del fiscal; y mucho menos matón a sueldo a disposición del fiscal. La policía está sujeta al imperio de la ley. No está obligada a cumplir mandatos contrarios a la legalidad. Ejemplo, realizar un allanamiento de domicilio o una detención sin mandato judicial.

Delimitación funcional y el delito.

Dicho lo dicho, la clave para diferenciar o delimitar la competencia de la policía y los fiscales, siempre 'desde el enfoque constitucional', está en determinar *en qué momento los hechos jurisdiccionalmente son considerados DELITO (lógicamente presuntos), para que entre a tallar el Código Procesal Penal*. Ahí está 'el quid de la cuestión'.

No hay que ser 'docto' en derecho para darse cuenta que, esa circunstancia se da, en el momento de la primera valoración judicial que coincide con la incoación de diligencias (el inicio), auto de admisión a trámite, auto apertorio de instrucción, o como quieran llamarle (según el país). Luego más adelante, ya vendría la imputación, la calificación, acusación penal (fiscal y/o particular) y el juicio; hay países que contemplan incluso una acusación popular; pero eso es otra historia.

Esa es la interpretación correcta que se debió hacer ciñéndose a lo que establece la Constitución, que como se puede apreciar es contraria a lo que contempla y dice actualmente el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que al ser un plagio de otros códigos similares de países vecinos está muy alejado de nuestra realidad social e incluso histórica, y lo más grave, transgrede la norma constitucional.

El análisis que acabo de hacer es ajustado a derecho, no cabe otra interpretación, ni otra manera de que se cumpla la Constitución. Lo contrario sería una vulneración de la misma. Lo cual nos llevaría a situaciones absurdas y una serie de contrasentidos, como que el fiscal pervierta su naturaleza como tal convirtiéndose en policía.

Por lo tanto, si el fiscal interviene en fase policial como si fuera policía, tendría que ir a juicio como testigo (como lo hacen los policías); dándose el absurdo que tendría que interrogarse a sí mismo (al ir travestido de policía interviniente). Y eso no es así, ya que el fiscal va como parte durante todo el proceso penal; y en el juicio concretamente, es parte principal ya que es acusación fiscal.

Conclusión: En la Constitución está muy claro. En fase policial, la investigación realizada por los agentes de la policía, sólo son hechos delictivos, hechos que hasta no lo determine un juez sólo son hechos denunciados presuntamente constitutivos de un delito. La Constitución en su **Inc. e) del Art. 2** dice: *"Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad".*

Eso significa que sólo un juez puede valorar ese mandato constitucional, por lo tanto, no puede ser un fiscal. Sería inconstitucional. Sin embargo; actualmente, a pesar que es evidente que el NCPP ha volado todos los puentes de este mandato constitucional, los fiscales no se enteran o no les interesa.

El punto de vista jurisdiccional y el policial, son dos extremos de un camino que se proyectan hacia un fin, la justicia; dos tramos que se encuentran en un determinado punto, cuya línea fronteriza está claramente diferenciada, y es, cuando empieza la fase jurisdiccional. Ambos tienen que tener autonomía, uno para investigar y juzgar y el otro para hacer pesquisas y detener bajo el imperio de la ley.

De acuerdo con la Constitución vigente, no hace falta un tercero (FISCAL) para decidir, dónde y cuándo hacer pesquisas policiales y a quién detener en flagrancia o a quién un juez debe juzgar; los fiscales ya tienen un importante cometido como garantes de la legalidad. Hacer lo contrario, sólo se entiende desde la perversión del sistema judicial, desde la anti justicia. Es darle alas a la delincuencia y a la impunidad. El proceso penal o fase jurisdiccional es una cosa, y la fase policial es otra cosa. No nos confundamos.

Poco faltó que el Nuevo Código Procesal Penal regulara, los tiempos y el procedimiento que distrae la criminología, la psicología, la sociología o incluso la antropología respecto al crimen, cuyas ópticas de investigación de la delincuencia, el delincuente y el delito tienen un camino o ‘iter criminis’ muy distinto y ajeno al que debería recogerse en el marco del proceso penal.

Un código anticonstitucional (NCPP), 'es Ley envenenada'.

Un Código que regula como mandato imperativo materias que no son de su competencia violando una norma superior como la Constitución Política del Estado, nace viciado de raíz (desde su concepción), y debería llevar a su nula aplicación. Y eso, porque de facto se convierte en prueba de una transgresión legal, en este caso, constitucional.

Lo cual, nos llevaría a análogas consecuencias y a legitimas acciones de amparo y desobediencia, reguladas en ese sentido en diferentes artículos de la Constitución. **"***Nadie debe obediencia…, a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución...***"** (**Art.46**); **"***La Constitución prevalece sobre toda norma legal; …***"** (**Art. 51**); y **"***No surten efecto las normas… dictadas en violación de lo que establece…***"** (**Art. 74**); entre otros. Artículos de la Constitución que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) ha ignorado para saltarse la constitucionalidad y vulnerarla.

Haciendo una analogía, o mejor dicho un símil, en relación a la esencia y contenido trasgresor del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), se le podría equiparar o comparar a lo que ocurre en la '**teoría del fruto del árbol envenenado**'. *Esta doctrina hace referencia a una metáfora legal relacionada con la valoración de la prueba, que consiste en desestimar cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas. Teoría donde cualquier prueba que directa o indirectamente se pudiera relacionar con una prueba nula debe también considerarse nula.*

En ese sentido, un Código Procesal Penal dado sin respetar el control de legalidad constitucional, origina que se convierta además de ilegal en ilegítimo. Por lo tanto, ese Código se convierte en nulo de pleno derecho; eso significa su total y radical nulidad. Lo cual conlleva a que todas aquellas otras normas (leyes, decretos y resoluciones) directamente relacionadas o derivadas del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que vulneran la norma constitucional, como la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás normas vinculadas igualmente vulnerativas y por tanto inconstitucionales, sean también nulas de pleno derecho. La raíz de todo ello está en el NCPP que hace de **árbol envenenado**; por consiguiente, todo lo que se derive de él es fruto envenenado.

Todo árbol que dé fruto envenenado, habría que cortarlo de raíz, consiguiendo así evitar la fuente que ha envenenado el árbol que da el fruto malo. El razonamiento es muy válido y se recoge como principio en una metáfora bíblica.

Es decir; hasta la biblia nos advierte de ello:

"Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis". ***Mateo 7:17-20****.*

En base a esta teoría, el Tribunal Supremo Español ha sido determinante para resolver cuestiones de nulidad. Así, su reiterada jurisprudencia viene a afirmar que, "**toda prueba obtenida legalmente de otra prueba obtenida de manera ilegal, debe considerarse ilegal**, pues la segunda de las pruebas, posiblemente no se hubiese podido obtener legalmente de la primera prueba ilegal. Ello conforma la denominada doctrina penal del fruto del árbol envenenado".

Así pues, la doctrina y jurisprudencia de este alto tribunal resume su razonamiento, en que, si la fuente está corrompida, cualquier consecuencia que derive de la misma también lo estará.

Esto supone un precedente y un enlace jurídico ineludible entre normas vinculadas; significa que, la nulidad del primero (NCPP), produce nulidad en el segundo (normas conexas y derivadas) conexión que impide puedan tenerse como validas.

Esta valoración tiene vigor y engarce constitucional a efectos de hacer prevalecer el estado de derecho en el Perú. La Constitución prohíbe la aplicación de una ley si se ha producido una vulneración constitucional. Según lo cual, una ley vulnerativa de la Constitución no debería surtir efecto porque violenta la legalidad. El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) al transgredir la Constitución, es una fuente ilícita para toda normativa basa en él o que tiene conexión.

Como se puede apreciar, esta teoría jurídica es muy válida para tener una justicia digna y civilizada, eso, si se quiere tener una buena salud e higiene democrática y un país respetuoso del 'estado de derecho'. No se puede retorcer el mandato constitucional hasta el punto de vulnerarlo con leyes de menor rango, como es el NCPP. Creo que 'no todo vale'.

Si bien el sustento de esta teoría es empleada para la prueba en derecho penal, empecé diciendo que por analogía o símil debería aplicarse en caso de normas que vulneran la Constitución, ya que son la prueba en sí mismas de esa vulneración; como es el caso del NCPP.

Hacer uso de un Código “ilegal”, como lo es el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que vulnera la norma constitucional para ejercer poder u obligar a cumplir mandatos derivados de ello, es ilegal, anormal y lógicamente antijurídico. En otras palabras, un fraude a la justicia peruana.

Dicho esto: Todas las Leyes, Decretos Legislativos, Decretos Leyes y otras normas que contravienen el mandato constitucional, devienen en inconstitucionales, porque se han dado saltándose la preminencia del ordenamiento jurídico. **“***La Constitución prevalece sobre toda norma legal; …***”** (**Art. 51**).

En esa tesitura está el Nuevo Código Procesal Penal peruano que someteré al rigor jurídico de mi observación, opinión y crítica constructiva sobre el tema materia de análisis.

EL GRAN FRAUDE DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Después de haber analizado con rigor la Constitución, puedo decir que el Nuevo Código Procesal Penal es un fraude legal total; vulnera la Constitución en muchos de sus artículos. No sólo porque destruye atribuciones constitucionales de la Policía Nacional o toma por asalto parcelas del Poder Judicial y las pervierte regalándoselas al Ministerio Público, sino también, porque al ser contrario a la persecución penal del delito favorece la delincuencia, por lo tanto, es nocivo para la convivencia de los peruanos, ya que ha pervertido nuestro sistema judicial.

Este Código, nos ha impuesto un sistema procesal penal que al día de hoy es un fracaso total. Pero lo más grave, es que ha transgredido la Constitución y nadie dice ni ha dicho nada. La única respuesta que hay es el de la gente, que ante tanto delito y tanto delincuente en la calle se están tomando la justicia por su propia mano. Incluso entre la gente de los barrios se corre la voz activando una campaña ilegal llamada “chapa tu choro y déjalo paralitico”; eso en el mejor de los casos, ya que, en caso de violadores y asesinos, muchas veces el acto de indignación y rechazo lleva a la barbarie llegando al punto de causar la muerte del criminal. Todo ello, debido a la incompetencia e inoperancia del sistema judicial peruano que se nos ha impuesto a través del NCPP. Lo preocupante, es que el ajusticiamiento se vea como algo normal y entre la gente se acepte como un escarmiento.

En YouTube, se pueden ver muchos casos de ajusticiamiento en el Perú, incluso contra delincuentes extranjeros. Como el video donde se ve que en el Callao cogen a un delincuente venezolano y están a punto de lincharlo a vista y paciencia de los transeúntes que circulan, unos sin inmutarse y otros que se suman al ajusticiamiento. Eso, porque saben que no hay justicia y creen que es la única manera de combatir a la delincuencia.

El Nuevo Código Procesal Penal peruano, entró en vigor el 01 de agosto de 2006; pero de cómo se gestó hasta ver la luz, merece un estudio o como mínimo un comentario aparte para poder desentrañar las verdaderas motivaciones de su concepción e instauración, y cómo ha servido de cobijo al sistema judicial acusatorio. Todo ello, ha dejado de ser un secreto a voces. Hoy sabemos que fue producto de alguna mente oscura, macabra, dispuesta a pervertirlo todo, o quizá fue el resultado de alguna ocurrencia retorcida siguiendo los dictados de la progresía, ‘corriente progre’ que ha invadido Latinoamérica.

Así, entre gallos y media noche, abusando de un instrumento jurídico que debería ser excepcional al extremo, como es la ‘delegación legislativa’, los peruanos de pronto un día despertaron con el cuestionado Código. Lo que nadie

reparó, es que fueran ‘cuatro gatos’ (y no el Congreso) acólitos de la progresía, investidos como ‘Comisión especial de alto nivel’, quienes cambiaron para peor la forma de hacer justicia en nuestro país a través del NCPP, que es muy favorable al delito y a la delincuencia, tanto, que hoy en día, ser delincuente en el Perú se ha normalizado y casi sale gratis. Este atropello a la justicia fue un cambio absurdo que oficialmente se dio en tan sólo 30 días de facultades legislativas al ejecutivo; aunque todo ello, se remonta a mucho antes (a la Constitución de 1979), pero recién en el año 2003 empezó con fuerza esta conspiración contra la justicia **(DS. N°005-2003-JUS)**.

Lógicamente, yo no estoy de acuerdo que, por vía de Decretos Legislativos se tenga que ‘poner patas arriba’ a todo un país, y menos en cuestiones tan sensibles y de hondo calado social, como es la justicia; como es el tener que decidir un sistema de justicia racional, equilibrado y justo, donde la sociedad se sienta segura y confíe en la justicia de su país; y no vivir con la sensación permanente, de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra gracias al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Pues eso es lo que está ocurriendo actualmente.

En el Perú los legisladores del Congreso de la República hacen dejación de la obligación que tienen de legislar, y dejan al Poder Ejecutivo someta al país a los dictados y sesgo político del momento; y este (el gobierno de turno), al frente de una camarilla de oportunistas hacen y deshacen con la norma, sin ser legisladores. Eso es antinatural y muy grave. Es gobernar por DECRETO, y tener una justicia por decreto. Porque en sí los Decretos Legislativos son eso, DECRETOS. Pero todos pasan de ello y a nadie le preocupa. Sólo los transgresores aplauden y se frotan las manos. Luego sus acólitos en las aulas universitarias se encargan de repetir una y mil veces, “el legislador a dicho, el legislador dice, … el legislador pensó, etc, etc”; una burda forma de hacernos creer y pensar que tenemos legisladores de verdad, ...

¡Una pena, pero así es!, y no debería ser ni se debería permitir.

Eso es lo que ha ocurrido con el NCPP, que es producto de un Decreto Legislativo, es decir, consecuencia de una ‘delegación legislativa’, donde los legisladores de verdad entretenidos en otras cosas no legislaron (dejaron que otros lo hicieran): y mientras la justicia se ponía de cabeza, bostezando desde sus poltronas se limitaron a mirar como ‘cuatro oportunistas’ destruían el sistema judicial vigente entonces.

Dicho esto, paso a observar con rigor jurídico el ***Decreto Legislativo 957***, **Nuevo Código Procesal Penal (NCPP),** en cuanto afecta a la Policía Nacional.

Un código Procesal Penal no puede meterse a normar materias que no son de su incumbencia o materia especifica de su esfera jurisdiccional (proceso penal), porque de lo contrario el ordenamiento jurídico sería un caos. ¿Se imaginan ustedes, cada Código invadiendo lo que otras leyes ya contemplan, leyes regulando las mismas cosas al mismo tiempo y de forma diferente?. Sería 'la ley de la selva'; la tiranía del más fuerte en el funcionamiento social y del aparato estatal. Yo creo que el Código Procesal Penal que hay ahora, debió limitarse a normar todo lo que comprende y corresponde sólo al proceso penal en sí, pero no querer modificar las funciones y atribuciones que la Constitución le asigna a la Policía Nacional.

Siendo más preciso y ajustándome a lo que jurídicamente es norma general en todo el mundo, los Códigos Procesales norman o regulan todo lo estrictamente relacionado con el derecho procesal. Ahí os dejo una definición de ello, para que ubiquen el contexto, aplicándolo claro está a la parcela PENAL.

'Derecho procesal': *"Conjunto de normas que regulan el proceso judicial; los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso. Es una rama del derecho público que incluye al conjunto de actos mediante los que se constituye, desarrolla y determina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y demás personas intervinientes. Tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes, a través de una decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados, y en el derecho aplicable".*

Es una definición general sin trucos ni sesgos. Podría darles diversas definiciones de diferentes autores, y todas coincidirán en lo mismo, en lo esencial, la norma procesal, su especificidad lo determina la parcela jurídico-social a aplicar. Para nuestro estudio sería el proceso penal.

Por lo tanto, el Nuevo Código Procesal Penal Peruano (NCPP) se debería limitar a estos parámetros, los de la definición, que es universal y bastante clara y objetiva; cualquier otro interés u otro planteamiento, es sacarlo de contexto y pervertir la norma. Si no es así; si no se respeta las lindes jurídicas, ni se respeta la constitucionalidad, estamos ante una anti norma, por lo tanto, siendo este el caso, podemos afirmar que el NCPP es un fraude.

Pues bien, este Código va dando bandazos entre la ilegalidad y la norma con sus transgresiones a la Constitución, además de limitar derechos de la gente y cercenar atribuciones del Poder Judicial; de forma encubierta quiebra la constitucionalidad de muchos mandatos atribuidos a la PNP, es decir, el NCPP mete sus narices donde no debería tener alcance normativo, generando confusión, inseguridad e indefensión en la gente porque que pervierte, limita e invade el accionar de la Policía Nacional. Pero sobre todo este desaguisado normativo empuja y promueve a que no haya justicia, avivando incluso la inacción de fiscales y policías; los fiscales porque no les interesa la persecución penal del "delincuente común"; y de la policía, porque intervenir ante un hecho delictivo es como 'tirarse al vacío sin paracaídas', se arriesgan a ser perseguidos penalmente por el Ministerio Público, muchas veces por usar su arma de reglamento, otras veces por el uso legítimo de la fuerza, o por lo que sea. Precisamente por los exabruptos normativos afines al sistema judicial acusatorio, muchos policías van presos por combatir la delincuencia. Paradójicamente por lo que la Constitución les señala y manda como su finalidad fundamental (Art.166).

Así tenemos que, el **Art. VI (*)** (Título Preliminar) del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que habla de la *'Legalidad de las medidas limitativas de derechos'*, es ambiguo, confuso y contradictorio, porque pareciera que recoge el espíritu normativo constitucional, tanto, que incluso hace referencia a ello, pero lo cierto es qué el NCPP en su conjunto es una normativa que deja en letra muerta las buenas intenciones del contenido del Art. VI de su título preliminar.

(*) *Artículo VI,* *(Título Preliminar del NCPP).* ***Legalidad de las medidas limitativas de derechos.***

"Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad".

Así tenemos que, la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que la Constitución cautela, por lo tanto, sería imposible imaginar que un juez dicte una orden prohibiéndola sólo porque el fiscal se lo pide. Como eso no es posible, no hizo falta que un juez prevaricar haciendo aquello (dar una orden judicial de esa naturaleza). El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en su articulado al regalarle a los fiscales la acción penal y el principio de oportunidad viste de legalidad una inconstitucionalidad tan grosera como la citada al privarle o limitarle

a la víctima solicitar justicia por sí misma. Los derechos fundamentales no sólo son los citados en el Art. 2 de la Constitución, estos no son excluyentes, incluye todos aquellos que por su naturaleza análoga tienen cabida en el Art. 3 de la Constitución.

Dicho esto, centrémonos en derechos fundamentales como la detención o la privación de la libertad, por involucrar a policías y jueces respectivamente. Respecto a ello, el contenido del NCPP debería aclarar que su alcance normativo se circunscribe y se refiriere a fase jurisdiccional. De lo contrario, el NCPP estaría invadiendo de forma encubierta competencias policiales que deberían estar reguladas en la Ley Orgánica PNP (que extrañamente no existe).

Porque una cosa es la detención que hace la policía en flagrante delito **Art 2. 24, f** de la Constitución, y otra cosa es la prisión preventiva en fase jurisdiccional que es por mandato judicial y que lógicamente debe ser recogida y regulada en el Código Procesal Penal. Aunque, a la vista de hechos públicamente conocidos esto no está ocurriendo así, debido a las perversiones normativas que permite el NCPP. Precisamente de ello, se valen los fiscales para actuar como si fueran sheriffs del lejano oeste, encabezando, dirigiendo y llevando a cabo operativos con detenciones muy raras y extrañas que lindan la ilegalidad, ya que en muchos casos ni siquiera hay denuncia, pero utilizan a la policía para ejecutarlas, sin notificación alguna previa y con allanamiento de domicilio incluido (caso Alan García y otros).

Si este **artículo VI**, incluye la etapa policial, hay un ataque directo al mandato constitucional, ya que como se puede ver, en su literalidad no recoge ni homologa las atribuciones para detener que la Constitución (**Art. 2. 24, f**) le otorga a la Policía Nacional. Se lo salta, ya que de ser así estaría normando en contrario. Eso sí, hace una simple mención "*salvo las excepciones previstas en la Constitución";* mención que es letra muerta, ya que este NCPP y los Fiscales lo incumplen; por lo tanto, es la transgresión hecha ley. ¿Y por qué se lo saltan?: La respuesta está cantada. Porque, saben perfectamente y son conscientes, que el Art 2. 24, f, dice y es todo lo contrario a lo que recoge el NCPP, que para despistar de soslayo en este Art. VI hace mención a la Constitución, pero luego en su articulado lo transgrede abiertamente; todo ello, sin duda para facilitar la implantación del sistema judicial acusatorio. La literalidad de este Art. VI recoge el mandato constitucional y su espíritu normativo, pero es totalmente opuesto al resto de las normas que recoge el NCPP y opuesto a las pretensiones del sistema acusatorio; precisamente por ello, es letra muerta. Al margen claro está, a efectos ***de las medidas limitativas de derechos,*** el no precisar que la fase policial previa no forma parte del 'proceso judicial'.

En este sentido, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) pasa de largo lo que la Constitución dice o establece, sobre que la policía en caso de flagrancia pondrá a disposición judicial a los detenidos dentro de las **48 horas**, y en delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas (TID) y organización criminal, tiene para hacerlo hasta dentro de los **15 días**, incluso sin flagrancia, sólo informando al Ministerio Público (no al fiscal) y dando cuenta al juez que puede asumir jurisdicción antes de vencido ese plazo.

Si miramos el citado **Art. VI** de este Código (Título Preliminar), habla que ***"las medidas limitativas de derechos sólo podrán ser dictadas por el juez, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley"*.** Con lo cual, reconoce de cierta manera que lo que realiza la Policía Nacional en etapa policial aún no forma parte del proceso penal porque lógicamente el juez aún no ha asumido jurisdicción. Ahí el mandato constitucional es muy claro, dice que, en caso de flagrancia la policía no necesita orden judicial para detener a un delincuente. En caso de delincuencia común hasta por 48 horas, y en los supuestos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de frogas (TID) y organización criminal hasta por 15 días bajo directriz y sujeción constitucional. Por lo tanto, constitucionalmente en estos casos tiene y goza de autonomía funcional.

No podemos negar ni mucho menos ignorar, que cuando la Constitución en su **Art. 2. 24. f,** le otorga a la Policía facultades para detener afecta derechos fundamentales del detenido. Claro que afecta. Pero es en nombre de la ley y en defensa de bienes supremos como la vida o la integridad física, moral, patrimonial o material de los ciudadanos; por ello tiene amparo constitucional la actuación de la policía para detener en flagrancia y recogidas como 'excepciones' citadas de soslayo en el Art VI del NCPP.

La pregunta es: ¿Si es así; entonces porqué este Nuevo Código Procesal Penal no recoge la 'literalidad constitucional' donde dice que la policía debe poner a disposición judicial a los detenidos, de forma directa y sin intermediarios?. Es decir, directamente y sin pasar por el fiscal

La respuesta es muy sencilla; porque de ser así (de la policía al juez), sería inviable 'el sistema judicial acusatorio', e incompatible con 'los intereses de la nueva justicia', los fiscales perderían el poder que tienen y que les da el NCPP. Lo cierto es que la Constitución dice otra cosa a la vista del Art. 2. 24. F, dice que todo aquello forma parte de actuaciones policiales, donde la función jurisdiccional aún no tiene injerencia; es decir, aún no hay caso. Por lo tanto, la detención policial en flagrancia ipso facto, constitucionalmente no es aún jurisdiccional mientras el detenido no sea puesto a disposición judicial. La

Constitución en su mandato del **Art. 2, 24. f,** reconoce la autonomía policial durante el tiempo reseñado, cosa que se está vulnerando; incluso de han dado normas menores con rango de ley donde se han sacado de la manga figuras jurídicas alternativas-paralelas sobre ***medidas limitativas de derechos*** como la **detención preliminar,** y para poderlo aplicar se han distorsionado los tiempos en favor de la actuación fiscal; fiscales que constitucionalmente no tendrían nada que hacer en esta fase.

Al parecer, los acólitos del nuevo sistema no encontraron una mejor forma de pervertir la justicia que hacerlo a través del NCPP. Si la finalidad del sistema judicial acusatorio era el cambio del proceso penal en el Perú, como ya se venía haciendo en toda Latinoamérica; eso no lo podían hacer sin vulnerar la Constitución, y sin antes tumbarse (derogarse) el código procesal vigente hasta entonces, aunque la forma de hacerlo significara quebranto de la Constitución, porque para hacer todo ello, tendrían que haber modificado la Constitución y no lo hicieron.

Dicho lo cual, carece de sentido que el Nuevo Código Procesal Penal Peruano contradiga o limite lo que manda Constitución respecto a la intervención de la policía y las detenciones que esta realiza en cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Sólo si la detención fuera ilegal por parte de la policía, entonces sí, a priori entraría a tallar un juez. En ese caso, cabría un habeas corpus y el Juez competente asumiría jurisdicción; pero eso es otra historia. Lógicamente, en el segundo supuesto contemplado por el Art. 2. 24, f el juez podría asumir jurisdicción antes como dice el mandato.

Por lo tanto: queda demostrado que una cosa son las medidas y actuaciones que deben estar bajo el paraguas del Código Procesal Penal; y otra cosa es, lo que está bajo el paraguas de la actuación policial que tiene amparo constitucional.

Lógicamente, los acólitos del sistema acusatorio que hicieron esta chapuza de Código Procesal Penal, que más parece una mala copia de algún país vecino donde “los progres ideológicos” han entrado con fuerza en las instituciones del estado, se cuidaron y mucho de que ‘no se les viera el plumero’, nos hicieron creer que lo antiguo era inquisitorial y que lo nuevo era la justicia personificada en una eficaz y nueva forma de hacer justicia. Una burda mentira. Ni eficaz ni nueva, más bien un plagio. Los mentores (plagiadores), muy descarados y sin escrúpulos constitucionales, violaron la Constitución a diestra y siniestra ‘para que tuviera encaje’ el sistema acusatorio a través del NCPP.

En lo que respecta a la policía: Para consumar la usurpación funcional en contra de la Policía; en este Código (NCPP) se abocaron o mejor dicho se esmeraron en normar procedimientos policiales subordinándolos a la fiscalía, sacándolos del contexto constitucional, no sin antes, privarle previamente a la Policía Nacional de su Ley Orgánica, algo que habían precavido con antelación para que la policía no dificultara sus propósitos. Con lo cual la dejaron coja y sin alas, desguarnecida y sin amparo legal institucional. En este sentido, metieron en el NCPP "muy sutilmente" el accionar de la policía y su lucha e investigación de la delincuencia, sometiéndola a la fiscalía; olvidándose que constitucionalmente ese cometido es una finalidad fundamental de la PNP dotada de autonomía funcional.

De esta forma, le dieron legitimidad y patente de corso a las diversas normas y directrices del NCPP sobre materia policial que lógicamente sus mentores tenían previsto en la hoja de ruta del sistema judicial acusatorio implantado a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Así es como lograron burlar la legalidad transgrediendo la Constitución sin que nadie lo notara. Un verdadero fraude, un burdo engaño.

Llegados a este punto: Analizando el articulado de este código y tratando de desentrañar sus verdaderas intenciones normativas; hasta una persona ignorante puede darse cuenta de la intromisión funcional contra la policía que hicieron los que promovieron y echaron a andar el sistema judicial acusatorio a través del NCPP; norma que arbitrariamente le entrega al Ministerio Publico la investigación policial. Por eso, es normal que la gente se escandalice al ver que los fiscales liberan a los delincuentes que la policía previamente a detenido. Todo ello tiene un origen. Si no lo ven, es que son ciegos.

Sobre ello, podría remontarme (como antecedente previo) al año 1981 cuando se dio el Decreto Legislativo **Nº 052 (*)** Ley Orgánica del Ministerio Público y su aparición como institución autónoma, incluso un poco antes, a la Constitución de **1979 (*)**, que lo separaba del Poder Judicial; donde se le atribuía la investigación del delito y se le vinculaba veladamente con la función policial, con una clara injerencia en ella. Pero esta nueva visión que afectaba a la justicia y a la labor policial, al no desarrollarse en una ley específica no se podía aplicar; fue entonces que, el gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry dio la **Ley Nº23230**, mediante la cual el Congreso de la República autorizó al Poder Ejecutivo, para que en un plazo de 180 días derogue o modifique la legislación aprobada el 03 de octubre de 1968 por el gobierno militar de Juan Velazco Alvarado; señalando expresamente en el **Art. 2do** de la misma ley, que en el plazo de 90 días se dicten los Decretos Legislativos respectivos, entre ellos, la Ley Orgánica del Ministerio Público, haciendo hincapié que estos decretos legislativos serán expedidos previa revisión de la Comisión Permanente del Congreso de la

República. Así fue como se dio el Decreto Legislativo **Nº 052** de fecha 16 de marzo de 1981, Ley Orgánica del Ministerio Público.

(*) DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 – 1981, **LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO** (Original).

Fue promulgada el 16 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de marzo de 1981.

Artículo 9º - *El Ministerio Público, conforme al inciso 5º del artículo 250 de la Constitución Política, vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial. Con ese objeto las Fuerzas Policiales realizan la investigación. El Ministerio Público interviene en ella orientándola en cuanto a las pruebas que sean menester actuar y las supervigila para que se cumplan las disposiciones legales pertinentes para el ejercicio oportuno de la acción penal.*

Igual función corresponde al Ministerio Público en las acciones policiales preventivas del delito.

Artículo 10º - *Tan luego como el Fiscal Provincial en lo penal sea informado de la detención policial de persona imputada de la comisión de delito se pondrá en comunicación, por si o por medio de su Adjunto o de su auxiliar debidamente autorizado, con el detenido, para el efecto de asegurar el derecho de defensa de éste y los demás, según les reconoce la Constitución y las leyes.*

Artículo 104º - *El Fiscal de la Nación, durante los seis meses de la promulgación de la presente ley, atenderá preferentemente a las labores de organización, instalación y equipamiento del Ministerio Público en la República.*

Artículo 106º - *Deróganse, asimismo, el TITULO III – Ministerio Público – del Libro primero del Código de Procedimientos Penales y sus artículos 41º, en cuanto se refiere a la intervención del Juez Instructor y el Tribunal Correccional en la excusa del Agente Fiscal; 50º, 199º, en cuanto autorizan al Juez Instructor para resolver los autos al Agente Fiscal para que expida dictamen; 220º, modificado por el Decreto Ley Nº 21895, en cuanto autoriza al Tribunal a disponer, alternativamente, que el fiscal se pronuncie sobre el fondo del proceso y los artículos 222º y 223º, modificados por el citado Decreto Ley.*

Artículo 107º - "*Modificase el Código de Procedimientos Penales en sus artículos 74º, 75º y 77º, modificado por Decreto Ley Nº 21895, en el sentido de que la instrucción sólo puede iniciarse de oficio o por denuncia del Ministerio Público, cuando la acción penal es pública, y del agraviado o de sus parientes cuando es privada; 91º, en cuanto declara facultativa la concurrencia del Ministerio Público a las diligencias judiciales, la que es obligatoria, 219º, en el sentido de que son ocho días naturales si hay reo en cárcel y veinte, si no lo hay…*

(*) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1979

Artículo 250*.-El Ministerio Público es autónomo y jerárquicamente organizado. Le corresponde: 5.- Vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial, y promover la acción penal de oficio o a petición de parte.*

Artículo 251*.-Son órganos del Ministerio Público: 1.- El Fiscal de la Nación. 2.- Los Fiscales ante la Corte Suprema. Son nombrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado. Se turnan cada dos años en la Fiscalía de la Nación.*

Artículo 277*.-Las Fuerzas Policiales están constituidas por la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana tienen por finalidad fundamental mantener el orden*

interno, preservar, conservar el orden público, garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad de las personas y los patrimonios público y privado así como prevenir y combatir la delincuencia. Participa con las Fuerzas Armadas en la Defensa Nacional. Sus misiones especificas son establecidas por las respectivas leyes orgánicas.

***Artículo 278**.-Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no son deliberantes. Están subordinadas al Poder Constitucional.*

Pero el **Decreto Legislativo Nº 052**, al ser quien le da vida al Ministerio Público (MP) constituyéndolo como institución autónoma, tenía que tener una transición, y esta fue inexistente esos primeros años ya que el MP no tenía infraestructura ni personal, por consiguiente, fue letra muerta e inaplicable por entonces; más aún, teniendo en cuenta que su redacción era contradictoria y confusa respecto a diversos mandatos constitucionales con los que colisionaba; por lo tanto, mucho de su articulado no tenía amparo constitucional. El Poder Judicial y La Policía con la irrupción del Ministerio Público vieron se avecinaba tiempos con cierta turbulencia que movía las fichas del tablero judicial pero no le vieron las orejas al lobo, se avecinaba a lo lejos un verdadero huracán. El sistema judicial acusatorio había puesto ya su huevo, sólo había que incubarlo, o quizá mejor, ya había dejado su larva, ya estaba entre nosotros. No obstante, durante esos primeros años, el inmovilismo y su difícil encaje fue la constante, el monstruito aún era un bebé, una idea atascada en la mente de sus acólitos.

Eso hasta 1985 en que Alan García que irrumpió como un gobierno totalitario de izquierda anunció la unificación de las Fuerzas Policiales **(*)**; es decir, la desaparición de la Policía de Investigaciones (PIP), de la Guardia Civil (GCP) y de la Guardia Republicana (GRP). Hecho que daría inicio a un camino sin retorno ya que en 1986 con el Decreto Legislativo **Nº 371** y otros, se dio inicio a la unificación. Consumándose el oprobio a las FFPP, el 7 de diciembre de 1988 con la publicación de la **Ley 24949** que modificó la Constitución de 1979 y creó la Policía Nacional (ley promulgada el 25 nov 1988). Todo esto allanaría el camino en “el afán que tenían los zurdos” por implantar el sistema judicial acusatorio, y con ello, pervertir la función policial, no sólo en cuanto a la lucha e investigación de la delincuencia, sino también, con todo lo relacionado con la seguridad ciudadana, que también ocurre algo parecido y merece un estudio y análisis similar.

(*) *UNIFICACIÓN DE LA FUERZAS POLICIALES*

El presidente Alan García Pérez, en su primer gobierno, el 14 de septiembre de 1985, al amparo de la ley 24294 aprobada por el Congreso de la República, inició la reorganización de las Fuerzas Policiales.

El 4 de febrero de 1986, con tal propósito, se expidieron los Decretos Legislativos Nros. 370, 371, 372, 373 y 374 Ley Orgánica del Ministerio del Interior, Ley de Bases de las Fuerzas Policiales, Leyes Orgánicas de la Guardia Republicana, Guardia Civil y Policía de Investigaciones.

*El Decreto Legislativo **Nº 371** "**Ley de Bases de las Fuerzas Policiales**" sentó las bases para la creación de la Policía Nacional del Perú. Esta ley estableció un comando único (la Dirección General de las Fuerzas Policiales) y un solo centro de estudios para la formación de sus oficiales (la Escuela de Oficiales de las*

Fuerzas Policiales con sede en el antiguo Centro de Instrucción de la Guardia Civil en La Campiña - Chorrillos) y de una escuela nacional para los guardias y agentes (Escuela Nacional de Policía con sede en el antiguo Centro de Instrucción de la Guardia Republicana en Puente Piedra).

El 25 de noviembre de 1988 se promulgó la Ley 24949, publicada el 7 de diciembre de 1988, que modificó la Constitución de 1979 y creó la Policía Nacional.

Los objetivos que se buscaron fueron, entre otros, integrar las tres Fuerzas Policiales, hacer un mejor uso de los recursos (humanos y económicos), so pretexto de hacer desaparecer los conflictos que existían entre ellas originados por "dualidad de funciones" y, sobre todo, ofrecer un mejor servicio a la sociedad.

Este proceso de cambios y reformas, incluido claro está, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), fue y sigue siendo una burda patraña hecha para ciegos que no quisieron ni quieren ver, impulsada por una 'corriente progre' conocida en el Perú como los caviares que no les importó pervertir la justicia.

Pero por el momento; centrémonos en lo que afecta al accionar de la Policía Nacional en cuanto a su finalidad constitucional (Art.166) de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Para ello, obviamente es necesario conocer todo el espectro normativo, por lo tanto, habrá que estudiar lo que la Constitución y otras normas afines dicen al respecto.

Si analizan bien el mandato constitucional, verán que la Constitución es muy clara, habla de 'investigación del delito' como parte del accionar del Ministerio Publico (**Art. 159 inc 4**). Sin embargo, el Código Procesal Penal en su **Art. IV (*)** (título preliminar) nos lleva al engaño; juega con la ambigüedad de las palabras y frases incompletas, como "los hechos", "el delito" y "la investigación".

(*) *Artículo IV*, *(Título Preliminar del NCPP).* ***Titular de la acción penal.***

1.- *El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad.*

2.- *El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y* ***controla*** *jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.*

3.- ***Los actos de investigación*** *que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional* ***no tienen carácter jurisdiccional****. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición.*

4.- *El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la* ***Policía Nacional*** *de conformidad con* ***sus leyes*** *y reglamentos.*

Así, en el **Inc 1** (Art **IV)**, sólo recoge, *"Asume la conducción de la investigación desde su inicio".* LA INVESTIGACIÓN va a secas, obviando si se refiere a la

‘investigación de los hechos’ o la ‘investigación del delito’; ya que son dos cosas distintas. Obviamente tal cual está redactado se está refiriendo a la investigación que realiza la policía. ¿Despiste, confusión u omisión deliberada?.

En el **Inc 2** (Art **IV)**, se elimina o se omite deliberadamente la frase *“investigación del delito”*, y en su lugar se consigna *“hechos constitutivos de delito”*. Es preciso indicar, que una cosa son los hechos y otra cosa es el delito en sí. Igualmente, en este inciso, con descaro se legitima la usurpación funcional contra la policía cuando recoge, “…*conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional”.* Hay que ser muy lerdos para no darse cuenta que esta redacción nada tiene que ver con lo que contempla el mandato constitucional. La Constitución atribuye a los fiscales la CONDUCCIÓN (accionar, activar, mover) de la investigación del delito, pero en fase jurisdiccional; no así la investigación de hechos delincuenciales en fase policial. Aquí (Art IV), nos dan gato por liebre, “actos de investigación” a secas sustituye a la “investigación del delito”. Repito, ¿este enredo es algo deliberado?.

Quién sabe. Lo cierto es que, lo hicieron así, conscientes que la Constitución y el Código procesal Penal hacen referencia a dos cosas distintas. De esta forma, de un zarpazo este Código (NCPP) tuerce la ley dando por hecho que la ‘investigación del delito’ que los juzgados de instrucción venían realizando hasta entonces, era igual que la ‘investigación policial’. Un absurdo porque retuerce la norma para poder burlar el verdadero espíritu de la ley suprema.

Lo cierto es que, el artículo IV (Título Preliminar) del NCPP es bastante revelador del poder omnímodo que se le ha dado al Ministerio Público, sin reparar el daño institucional y funcional a otras instituciones tutelares del Estado como son la Policía Nacional (PNP) y a la judicatura (Poder Judicial), ni tampoco se midió el daño y las consecuencias que ello traería a la sociedad respecto a la justicia que recibe, ya que, actualmente con el nuevo sistema de justicia, a las víctimas no se les garantiza hacerles justicia, y mucho menos se le permite acceder a ella per sé.

Así es como, a los fiscales, con una redacción confusa y plagada de palabras muy calculadas, ‘de una tacada’, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en el **Inc. 1** del *Art IV, (Título Preliminar),* le entrega en bandeja de plata ‘la acción penal’ como ‘TITULARES’ de la misma (extremo que la Constitución no contempla); además les confiere la investigación desde el inicio *(sin precisar qué investigación y a qué inicio se refiere; porque no es lo mismo el inicio del proceso penal o cualquier otro inicio);* otorgándoles con ello, atribuciones y facultades de cuasi policía y cuasi juez, otorgándoles además de nuevas competencias y un poder absoluto para actuar. Con lo cual, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con la justicia actualmente, el poder otorgado a los fiscales en el NCPP es algo excesivo porque al ponerlos por encima del bien y del mal, se

quiebra el equilibrio de poderes. Por un lado, ser juez y parte; por otro lado, policía y fiscal al mismo tiempo. Lo de “titular de la acción penal” es un invento del NCPP.

Todo ello, se mire por donde se le mire, es una transgredió a la Constitución, que se instituyó y se le dio cuerpo en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), y todo, sólo por echar andar el sistema judicial acusatorio que encarna “la nueva justicia”, que es tan foránea como ajena a la realidad peruana. Que como estamos viendo, no funciona ya que es un sistema nefasto para la justicia y para la víctima, ya que gracias a ello hay más delincuencia, más impunidad, más injusticia y más corrupción. Los fiscales investigan, medio juzgan y en base al principio de oportunidad, fungen resolver en fase no jurisdiccional a través de los acuerdos reparatorios. Los delincuentes mientras tanto y gracias a ello están en su salsa.

Ante tanta corrupción, cabría preguntarse, y quién denuncia e investiga al investigador (al fiscal) en caso de exceso, abuso, prevaricación o que viole la ley cometiendo cualquier otro delito. No basta con el régimen disciplinario interno que los fiscales tienen. Porque ‘otorongo no come otorongo’. De todo ello hablaremos luego.

LA INVESTIGACIÓN en el nuevo CÓDIGO PROCESAL PENAL.

En este punto analizaré los diversos aspectos y contenidos que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) recoge y hacen referencia a la Investigación y que entran en clara colisión y conflicto con el mandato constitucional sobre este tema. El estudio incluye lógicamente el análisis de los **incisos 1, 2, 3 y 4** del **Art IV** del NCPP, entre otros.

Es decir, todo lo que se refiere y está relacionado con la Policía respecto a LA INVESTIGACIÓN. La que realiza la Policía y también la que le asignan al Ministerio Público (que antes realizaba el Juez de Instrucción). Así podremos diferenciar y tener claro, porqué este NCPP es inconstitucional.

Los acólitos del sistema judicial acusatorio para justificar lo injustificable dirán qué el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) ha dividido el proceso penal en tres etapas *(la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa del juzgamiento)*. Que la investigación preparatoria, está dividida en dos sub etapas: la Investigación Preliminar y la Investigación Preparatoria propiamente dicha, cada una con sus propios objetivos y características. Es decir, que la investigación del delito que le atribuye al Ministerio Público la divide en dos para birlarle la cartera a la judicatura y a la policía. Lógicamente, el NCPP en contra del mandato constitucional, de una forma encubierta toma funciones del Poder Judicial y de la Policía Nacional y se las otorga al Ministerio Público, con lo cual, se puede afirmar que hoy por hoy, los fiscales están invadiendo, usurpando o ejerciendo algunas funciones que constitucionalmente no tienen.

A fecha 25 de agosto 2024, hay una ley en debate en el Congreso de la República con la que le devuelven a la policía el poder investigar, le facultarán realizar la investigación preliminar, lo que antes era la investigación policial. Pero, aunque lo aprueben, me temo que seguirá siendo papel mojado, ya que, si la ley pone que tienen que poner la investigación a disposición de la fiscalía, me temo que no servirá de mucho, será papel mojado, ya que los fiscales con ello se pueden limpias el trasero y no pasará nada, porque seguirán al frente de la siguiente sub etapa, de “la investigación preliminar” propiamente dicha, y en ella pueden tomar decisiones autónomas respecto a la investigación sin que un juez pueda impedirlo. En otras palabras, la policía seguirá deteniendo a delincuentes y los fiscales los seguirán liberando.

Todo ello, es una forma de pervertir la justicia y el sistema (el proceso penal) mezclando lo jurisdiccional con lo no jurisdiccional en una frontera opaca. Convirtiendo a los fiscales en una suerte de poderosos saltimbanquis aupados al poder, asidos a él para gobernar la ley a su antojo, y con ello la justicia; a la sazón de defensores de la legalidad, titulares de la acción penal y encargados de investigar y perseguir el delito. Pues todo ello, en esa frontera creada exprofeso como zona gris (entre lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional) para que

los fiscales reinen, ya que con ello pueden estar en ambas partes y en ninguna. Digo en ninguna porque si quieren no hacen nada (no denuncian, no acusan, no construyen caso). O, se van al otro extremo; afanándose y volviéndose contra todo aquél que osa desafiar su poder o contra quienes ya la tienen jurada o le han puesto la mira.

De ahí que los fiscales estén siempre prestos a anunciar en los medios de comunicación con grandes titulares que han montado tal o cual operativo con detención de individuos incluido; así también, anuncian con bombos y platillos, que han logrado meter en la cárcel vía prisión preventiva a quienes investigan y no se someten, salvo claro está, los que se declaran colaboradores eficaces. Pero también, si no se les da la gana; no logran o no terminan de construir un caso, y muchas veces igualmente, son incapaces de acusar a quien tienen que acusar. Es decir, que en todo ello hay mucho circo. ¡Mucho ruido y pocas nueces!. Mientras tanto, la justicia brilla por su ausencia.

En ese sentido: Ya pueden dividir la investigación como quieran, que en un Estado de Derecho que se precie, la verdad siempre es la verdad; por lo tanto, de nada valdría todas esas turbias triquiñuelas articuladas en el NCPP, propias de una leguleyada normativa, que apuntan ser ilegales de origen ya que las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) son contrarias y contradicen el mandato constitucional; y que todo lo que recoge el citado Código se ha instrumentalizado sólo para favorecer la instalación y puesta en marcha del sistema judicial acusatorio.

Por ello, para no hacer propaganda del sistema acusatorio no entraré a analizar las bondades (si es que las tiene) de las etapas o fases de la investigación tal y como promueven sus acólitos y lo recoge el NCPP, y mucho menos alentaré sus desvaríos, porque en este tema, mi percepción de inconstitucionalidad es muy clara.

ETAPA DE INVESTIGACION PREPARATORIA

No obstante: para este estudio, interesa lo que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) llama **ETAPA DE INVESTIGACION PREPARATORIA**, su alcance e implicancias, para poder explicar y demostrar, cómo han burlado la Constitución en su empeño para poder implantar el sistema judicial acusatorio.

Con ese propósito, el NCPP, a esta etapa la ha dividido en **dos sub etapas**, cada una con sus propios objetivos y características:

a) La Investigación Preliminar, según el NCPP, consiste en la realización de diligencias preliminares urgentes e inaplazables para corroborar los hechos delictivos. Es decir, equivale a lo que antes realizaba la policía y se le conocía como investigación policial, y que se traducía en un atestado.

(en otros países allanados al sistema judicial acusatorio le llaman investigación previa o diligencias previas), y;

b) La Investigación Preparatoria propiamente dicha

(en otros países allanados al sistema acusatorio le llaman Investigación Formalizada y abarca la investigación de la Etapa Intermedia).

Lógicamente esta mezcolanza extraña recogida en el NCPP como Etapa de Investigación Preparatoria, que más parece un batiburrillo con sesgo interesado afín al sistema acusatorio, lo hicieron a propósito para poder usurpar no sólo la función de investigación del Juez de Instrucción (que el NCPP se lo carga) quien valoraba si el hecho era típico, antijurídico, punible y si había culpa, dolo, o indicios de criminalidad; sino también, lo hicieron para apropiarse la atribución policial de investigar la delincuencia (o investigación policial) que es un mandato constitucional otorgado como finalidad fundamental a la Policía Nacional (**Art. 166**), donde las pesquisas policiales y la actuación en flagrancia (**Art. 2. 24. f**) tiene autonomía reconocida y amparo constitucional.

Pero a través del NCPP han burlado estos mandatos, distorsionando la labor policial y apropiándosela con el nombre de investigación preliminar (metiéndola dentro de la Investigación Preparatoria); lo cual, es contraproducente y un absurdo legalmente, ya que, al mismo tiempo, reconocen que ésta no tiene carácter jurisdiccional. Y así lo recoge el Nuevo Código Procesal Penal que textualmente dice: ***"Los actos de investigación*** *que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional* ***no tienen carácter jurisdiccional"*** *(**inc. 3 Art IV del NCPP).*** Y si no es jurisdiccional, surge la siguiente pregunta: Qué hace en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) metiendo sus narices en algo que aún no forman parte del proceso penal. Como se puede ver ¡Es un atraco en toda regla!.

Por lo tanto; no debería entrar a comentar estos desvaríos normativos del NCPP, porque hacerlo, es caer en el juego dialectico y doctrinario de los transgresores de la norma constitucional que son acólitos del sistema judicial acusatorio. Pero a efectos didácticos y para que el lector sepa exactamente de lo que estoy hablando, lo resumiré en una sucinta explicación, directa y al grano, cuyas líneas siguen a continuación:

Investigación Preliminar (diligencias Preliminares)

Decía que, consiste en la realización de diligencias urgentes para corroborar el hecho delictivo. Equivale a lo que antes realizaba la policía, se le conocía como investigación policial, y que se traducía en un atestado que con las pruebas y el detenido era puesto a disposición judicial. En ese lapso, de por medio, la policía realizaba peritajes, informes de criminalística, declaraciones, confesiones, testigos y muchas más cosas. Todo ello, servían en el juicio, donde la policía era llamada como testigo para corroborar su investigación y sus pericias, lo que era tomado por el juez como una prueba contundente a tener en cuenta para la resolución.

Lo cierto, es que, la Investigación Preliminar, tal cual está en el NCPP, es un atraco, porque se inicia con una denuncia que se hacía en la policía y luego era remitida directamente al juez, y que hoy ya no es así, ha sido monopolizada por la fiscalía, y para que se judicialicen los hechos denunciados es obligatoria la anuencia del fiscal; es más, en el supuesto que esta sub etapa se la dieran a la policía, no serviría de mucho, ni a la víctima ni a la justicia, porque la siguiente sub etapa en manos de la fiscalía es una alambrada difícil de superar para la justicia, porque el fiscal con la investigación de la policía hará lo que se le dé la gana; es decir, se puede limpiar el trasero y no pasaría nada. Son autónomos.

Según se puede ver, a día de hoy 26/08/2024, el NCPP lo recoge como un procedimiento muy sesgado, hecho a la medida del Fiscal. Es decir, que puesta una denuncia en la policía nada va al juez si no pasa previamente por la criba de un fiscal. Lo cual es un menoscabo a la labor policial y una perversión del sistema de justicia.

Es una sub etapa dirigida y controlada por la fiscalía, llevada a cabo sin prisa y con las pausas que se le antoje o quiera el Fiscal, “es oficiosa y discrecional”, por lo tanto, la discrecionalidad del fiscal, basada en su particular valoración y oportunidad, es una losa muy grande y muy pesada para la justicia. En las diligencias preliminares los fiscales (según el NCPP) son amos y señores, no sólo de la actuación policial (investigación) sino también de la suerte que corre la acción penal.

Es llamada así, porque es actuación no formalizada o pre procesal. El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) lo recoge como “no jurisdiccional”, es decir, tierra de nadie atribuida a los fiscales; atribución anormal que ha generado una situación que ha sido mal entendida por los fiscales ya que estos señores creen que este “territorio” (espacio o ámbito) es su exclusivo potrero. Tanto que en esta fase (sub etapa) no jurisdiccional se han atrevido a dictar órdenes de detención y registros sin mandato judicial. Como nos muestra *la jurisprudencia de la Corte*

Suprema de Justicia de la República – Sala Permanente. ***Apelación N.º 11-2017****, Loreto, del 15 de Feb 2029;* entre otras sentencias.

Las diligencias preliminares en la que han encuadrado la investigación preliminar, no es formalizada y corresponde a una actuación previa a la otra sub etapa llamada INVESTIGACIÓN PREPARATORIA propiamente dicha, que si es formalizada.

Como se puede ver, este Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), de un plumazo se lleva de encuentro "La Instrucción" o Investigación del delito que realizaba el Juez de Instrucción (que hoy llaman investigación preparatoria formalizada), y por otro lado, le arrebatan a la Policía la 'Investigación Policial' que se lo atribuyen al Fiscal; la que con el nombre de 'Investigación Preliminar' la incorporan dentro de la 'Etapa de Investigación Preparatoria' como Investigación no jurisdiccional (no formalizada). Todo ello es inconstitucional.

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) va cargado de una terminología amanerada, alambicada para no herir la susceptibilidad del delincuente, cuya doctrina y nomenclatura jurídica va travestida con un claro sesgo ideológico progre muy marcado para cumplir la hoja de ruta y pueda tener encaje el sistema judicial acusatorio en nuestro país.

En otras palabras, en el NCPP hay muchos "nombrecitos nuevos" para 'marear la perdiz', para poder robarle la cartera al Poder Judicial y a la Policía Nacional; pero sobre todo robarle la cartera a la sociedad y a la justicia. Visto así: Por un lado, desbalijaron al extinto Juez de Instrucción (hoy convertido en juez de la etapa intermedia (juez preparatorio o juez de garantías); y, por otro lado, a la Policía le han birlado la Investigación Policial que realizaba conforme al **Art. 2. 24. f** de la Constitución. Mandato constitucional que a vista y paciencia de todos ha sido violado por el NCPP. Con ello, el Ministerio Público invade competencias policiales, y los fiscales (conocedores de la ley), usurpan atribuciones y funciones; con lo cual, si nos remitimos al mandato constitucional, la actuación fiscal tal cual lo recoge el NCPP linda la **prevaricación** funcional y el abuso de poder porque **actúan al margen** de lo que manda la Constitución, siendo conscientes y conocedores de la ley.

En este sentido, "**la investigación preliminar y la investigación preparatoria**" coexisten y se mueve cual péndulo a capricho de la fiscalía. Actuación que cohabita en una etapa gris y confusa; o quizá mejor, tiene una parte oscura (tierra de nadie), donde el Fiscal hace y deshace, donde incluso, muy sutil pero coercitivamente utiliza la amenaza y/o el chantaje (entre comillas) para que el

sistema acusatorio funcione. Es decir, que para investigar echa mano de: “o colaboras, declaras y delatas, o te meto preso” (prisión preventiva). Lo mismo hace con los colaboradores eficaces; ‘colaboras o te pido prisión preventiva’. Con lo cual, genera una red de chivatos, mentirosos y traidores, que por salvar su pellejo traicionan hasta a su propia madre. A la postre, es la perversión de la justicia en estado puro. Pero eso es lo que promueve el sistema judicial acusatorio (dizque garantista) enquistado en el NCPP.

También ocurre lo mismo en fase o etapa temprana con otro invento, “la detención preliminar”, que está al servicio de los fiscales, siendo en realidad, un atraco a las atribuciones de la policía, porque sólo la policía constitucionalmente está facultada para detener, sin embargo, la fiscalía a través de NCPP se ha dotado de esta medida no reconocida en la Constitución; en otras palabras, han birlado la detención policial con el nombre de detención preliminar, siendo esta no jurisdiccional.

Así, la justicia no llega lejos, sólo impacto mediático… Mucho ruido y pocas nueces. Titulares en los medios de comunicación y pocas sentencias, pocos casos llegan a juicio porque muchas veces “no logran construir un caso”, por lo tanto, en la mayoría de los casos no logran ejercer la acusación.

Los fiscales se han constituido en un poder político más que un instrumento institucional que busca justicia.

Si es así: ‘Qué tipo de sistema garantista es este’… si “en esta parcela” de la investigación **(preliminar y/o preparatoria)** el fiscal hace lo que quiere; tanto que en su accionar caen en una serie de excesos y exabruptos por acción u omisión. Entonces cabría preguntarse: Garantista para quién… si este sistema proscribe y prescinde de la víctima, dejando al Fiscal en monopolio de la acusación; donde el fiscal utiliza la acción penal como quiere, o como requiere “la oportunidad”, el momento, e incluso, escoger el color o interés político. Dicho lo dicho: Una investigación así sólo es garantista según qué o quién. Víctima y delincuente no tienen el mismo amparo en la nueva justicia, el NCPP se inclina por el criminal. Si la policía recobrara su autonomía y el juez de instrucción su rol constitucional (**Art 2. 24, f** y **Art. 100**, entre otros), otro gallo cantaría.

Pero este problema se está presentando en todos los países donde se ha implantado el sistema judicial acusatorio, y todos bajo el mismo patrón intentan burlar su propio ordenamiento jurídico constitucional para pervertir sus instituciones y así lograr sus verdaderos objetivos, el de hacerse con el control de la justicia y con el control de la policía. De esa forma, con una la justicia politizada, no hay justicia que valga.

En Argentina, que iniciaron este proceso de instaurar el sistema acusatorio en 1996 (10 años entes que en Perú), para subyugar a la policía bajo la autoridad

de los fiscales, en su Código Procesal Penal (versiones, Nacional, Federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), decidieron incorporar normas y procedimientos en ese sentido. Así, para regular el sometimiento del sistema incluyendo el quehacer policial, marcaron lindes de actuación para que los fiscales tuvieran poder y libertad absoluta en esta parcela, un espacio de actuación no jurisdiccional amplísimo, que abarcaba más allá (hasta antes) de lo que los códigos argentinos llaman la formalización de la investigación.

Para ellos: **"***La investigación Fiscal, tiene dos momentos, antes y después de la formalización. La formalización de la investigación es el acto a partir del cual el fiscal imputa un hecho con características de delito al sujeto investigado***". "***La formalización comienza cuando el fiscal imputa el hecho a una persona por cuanto la tiene como presunta responsable de un hecho ilícito***".**

Los argentinos contemplan además que la etapa sin formalizar o anterior a la formalización se caracteriza, por ser administrativa, preliminar, desformalizada, reservada y sin la participación de los demás intervinientes ni del juez de garantías. Los únicos actores son el fiscal y la policía que actúa bajo las órdenes del fiscal.

Como se puede ver, los peruanos no somos los únicos que sufrimos las consecuencias del sistema judicial acusatorio. Pero en nuestro país la perversión del sistema judicial y la transgresión constitucional tiene sus propias peculiaridades. Ya dije que esto es como un virus, en cada país tiene sus propias mutaciones, aunque para toda América Latina este sistema judicial acusatorio surgiera de la misma cepa. En este sentido, los acólitos que adaptaron el sistema acusatorio al Nuevo Código Procesal Penal del Perú, no se conformaron con poco, fueron más allá de lo ya expuesto hasta ahora.

Nuestra Constitución dice (**Art.159 inc. 4**), que el Ministerio Publico "*Conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función*". Como se puede leer, en ningún momento la Constitución dice lo que "los pseudo legisladores" han recogido en el Nuevo Código Procesal Penal. Lo de "pseudo" es porque el NCPP es una norma que no salió de las deliberaciones del Congreso de la Republica. No fueron legisladores al uso los que se sacaron de la chistera el engendro, sino "cuatro iluminados" (acólitos del sistema acusatorio) que dejaron a oscuras la justicia en el Perú.

Para empezar, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) no debería regular nada que no sea parte del proceso penal; pero resulta que no es así; ya que, transgrediendo la constitución, en la parte final de su **Art. IV inc. 2** (Título Preliminar) nos dice:

"El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y ***controla*** *jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional".*

Se puede apreciar que, como por arte de magia, aparece la palabra CONTROLA que no está en el Art. 159. 4 de la Constitución arriba citado. No es lo mismo conducir que controlar. Y no es lo mismo, 'conducir la investigación del delito', que meter las narices en el trabajo policial propiamente dicho, como es la investigación de la delincuencia o 'investigación policial'. En el primer supuesto (investigación del delito), constitucionalmente es cuando ya el asunto o el hecho está judicializado; y en el segundo supuesto (investigación policial), lo que realiza la policía aún no forma parte del proceso judicial.

Como se puede ver, el NCPP vuelve a caer en la vulneración y contradicción respecto a lo que manda la Constitución, lo cual, nos lleva al oscurantismo legal; una oscuridad deliberada. A quién hacemos caso a la Constitución o al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, hay dos momentos en los que interviene la Policía Nacional.

El primero, es la etapa policial, donde la policía 'investiga hechos' lógicamente vinculados a la delincuencia y criminalidad (al crimen), donde aún no ha entrado a tallar la judicatura, aún no estamos en etapa o parcela jurisdiccional, todavía no hay proceso penal, ya que aún no existe.

El segundo momento (según la Constitución Art.2.24,f); es cuando, una vez la policía pone a disposición del juzgado a los detenidos (48 horas o 15 días según sea el caso), y el juez incoa el procedimiento por DELITO (presunto); en otras palabras, cuando el juez asume jurisdicción, abre diligencias, admisión a trámite (o como le quieran llamar) y luego da traslado al fiscal, para que éste, habiéndose 'puesto en marcha la maquinaria judicial', **inicie la CONDUCCIÓN** de 'la investigación del delito' y pida que la policía (o libre mandato) realice las diligencias que estime necesarias, siempre y cuando no requieran de mandato judicial (detenciones, allanamientos, etc, etc.) y sean del ámbito de su función. Lo normal, es que todo se haga a través del juez para que la justicia no se convierta en bicéfala. Un mandato es otra cosa que un requerimiento por escrito, ya lo hacía el juez instructor cuando existió.

La Constitución en ningún momento dice que el Ministerio Público controle a la Policía en las actuaciones que ésta realiza como policía; y mucho menos, en la primera etapa en que la policía hace 'pesquisa' e 'investigación policial', y donde, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) no debería entrar; porque no sería su parcela o campo de acción a regular, ni tampoco le compete porque no es parte

del proceso penal. La Constitución lo deja claro. Por lo tanto, lo de investigación preliminar como parte de la investigación preparatoria es un invento del NCPP para invadir competencia en favor de los fiscales, a costo de transgredir mandatos constitucionales de obligado cumplimiento.

Extremo, que los transgresores de la Constitución lo sabían, pero les dio lo mismo, 'se hicieron de la vista gorda'; se saltaron la norma constitucional. No obstante, en un arranque de arrepentimiento o quizá de suavizar o enmascarar el engaño, en el **inc 4, Art. IV** del Título Preliminar de este Código (NCPP) dice*: "El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos".* Texto que es letra muerta porque a la Policía Nacional (PNP) no le han dotado de su Ley Orgánica.

Lo cierto es que, este mismo Código reconoce que el accionar de la Policía Nacional se rige por sus propias leyes y reglamentos. Si es así, entonces qué hace el NCPP normando aspectos funcionales de la Policía en una etapa que no es jurisdiccional. El NCPP más parece un reglamento de la policía.

Lamentablemente, las fuerzas ocultas del poder caviar y neocomunista que inunda el Perú (zurdos, progres y filoterroristas), influyeron para que la Policía Nacional no tuviera una Ley Orgánica en condiciones como si tuvieron sus antecesoras (GC, PIP y GR). Sin embargo, curiosamente los interesados en implantar el sistema judicial acusatorio, si lograron que la Ley Orgánica del Ministerio Público (**DL. Nº 052** de 18-03-1981) sobreviviera en el tiempo con mil remiendos; dotándole constante y sucesivamente vía Decretos Legislativos, de más poder, a costa de invadir funciones, competencias y atribuciones de otras instituciones del Estado, como es el Poder Judicial y la Policía Nacional.

Por lo expuesto y más, el Código Procesal Penal en cuestión contraviene y mucho el mandato constitucional. Es una ilegalidad que se debe corregir derogándolo y alinear la normativa futura a lo que manda y prescribe el ordenamiento constitucional. El Código Procesal Penal debería limitarse a normar el proceso penal, es decir, lo que es ámbito y competencia jurisdiccional; desde que los hechos llegan a sede judicial (a manos del juez), y siguiendo escrupulosamente el dictado Constitucional.

Los Actos de Investigación de Fiscalía y Policía, no es jurisdiccional

La evidencia más clara, donde los acólitos del sistema acusatorio infractores de la Constitución se delatan, es cuando en el **Art. IV. inc. 3** (Título Preliminar) del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se recoge:

"*Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición****".***

Ahí está la evidencia del atraco, ahí la "confusión deliberada", porque constitucionalmente es verdad que la actuación de la policía respecto a la investigación de la delincuencia no es jurisdiccional; pero la conducción de la investigación del delito "desde el inicio" por parte de los fiscales constitucionalmente si es y debería ser jurisdiccional, porque se refiere a cuando se empieza el proceso penal, y eso ocurre con la puesta a disposición al juez o cuando éste asume jurisdicción, porque ahí se imputa el delito y **ahí se inicia el proceso penal**. Eso dice la Constitución, ese es el mandato constitucional, al menos ese es su espíritu normativo.

Lo que ocurre, es qué: El NCPP (**inc. 3 Art. IV)** mezcla los actos de investigación de la policía con los actos de investigación del Ministerio Público, y no son lo mismo. La policía constitucionalmente investiga hechos delictivos (hechos cometidos por el delincuente) Art. 166; y *la fiscalía* ***conduce*** *la investigación del delito como tal (Art. 159. 4)* **(*)**, desde el punto de vista jurídico, ya en sede judicial DESDE EL INICIO del proceso penal; eso dice la Constitución, y que actualmente no se cumple.

(*) **"***Conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función*"

La función de la policía no es jurisdiccional, porque su participación se da cuando aún no hay proceso penal; en cambio, la participación de la fiscalía si debería ser jurisdiccional porque además de ser parte en el proceso penal, es ahí donde se tiene que valorar la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad del hecho cometido; que es cuando se imputa y se califica si el hecho es o no un delito, o dicho de otra manera, cuando en sede judicial se considera que lo denunciado tiene indicios racionales de criminalidad, o los hechos son constitutivos de un delito.

Evidentemente, en esa fase, si el fiscal haciendo uso de la atribución de CONDUCIR la investigación del delito, que no es otra cosa que activar, accionar e impulsar la investigación, requiere que se realice alguna diligencia por intermedio de la policía, claro que ésta (la policía) está obligada a cumplir (el mandato o requerimiento), pero tiene que ser a través del juez, porque de lo contrario la justicia tendría dos cabezas, y eso es inconstitucional.

Por lo tanto, el NCPP (**inc. 3 Art. IV)** le da a los fiscales un cheque en blanco 'sin tener crédito constitucional' para ello, parcela donde pueden hacer y deshacer, dejando al libre albedrío de los fiscales el pedir autorización o no según qué cosas "si fuera indispensable", donde pueden aplicar si quieren (y lo

están haciendo) la "política de tierra quemada" según qué interés o qué convenga, le llaman "la oportunidad" (principio que explicaré más adelante); parcela exclusiva para ellos, donde pueden hacer lo que quieran; donde el juez es ciego, sordo, manco y mudo; es más, ni se molesta en mirar (no existe). Así como los argentinos se sacaron de la manga (crearon) la fase no formalizada (para hacer de los fiscales cuasi policías), en el Perú se inventaron "la parcela no jurisdiccional".

En este artículo, la vulneración Constitucional queda al descubierto. El Código Procesal Penal, sólo debería normar todo lo que concierne al Proceso Penal en sí, que nada tiene que ver con la etapa policial; sin embargo, 'se mete en camisa de once varas', y le atribuye poderes de policía a los fiscales. Lo cual es inconstitucional. 'No se puede estar en misa y repicando'. O se es Fiscal o se es Policía.

De acuerdo a la Constitución, el accionar del Fiscal sólo se refiere y concierne al ámbito jurisdiccional. Sin embargo, este Código en el **inc. 3**, **del Art. IV** antes señalado, se sale del ámbito jurisdiccional. Es decir, dice lo contrario a la Constitución. Lo cual es una aberración jurídica por transgresora, y porque cada parcela del derecho tiene su competencia y su propia normativa. La que corresponde a la Policía Nacional está claramente recogida en la Constitución y debería reflejarse en su Ley Orgánica. Cualquier otra normativa que diga lo contrario se convierte de hecho en una transgresión constitucional. La política del 'yo me lo guiso yo me lo como' para hacer justicia no vale. Los fiscales no son 'Juan Palomo' (con permiso de Francisco de Quevedo); así que, 'No vale todo', y menos para transgredir la Constitución.

El Código en cuestión, es un gran fraude legal en contra de la norma constitucional, y nadie repara ni dice nada. En nuestras narices, la de todos los peruanos, se permite a ciertos personajes desde el poder, sacar Leyes transgresoras disfrazadas como Decretos Legislativos. Una curiosa y torticera forma de burlar el sentido común y la constitucionalidad. Una burda forma de pervertir nuestro ordenamiento jurídico.

Es responsabilidad del Congreso hacer las leyes, pero se ha tomado la mala costumbre que el Ejecutivo haga ese trabajo a través de Decretos Legislativos, por eso, como si fuera un atraco, 'entre gallos y media noche' nos sorprenden con 'normas que se burlan de la Constitución'. Como diría un criollo e incluso un castizo, 'nos birlan la cartera sin despeinarse y se quedan tan Panchos'.

Sin embargo, si fuera una ley dada por el Congreso, habría previamente muchos debates parlamentarios y no parlamentarios, y además, participaría toda la ciudadanía con sus iniciativas y opiniones; mientras que los Decretos Legislativos, son el refugio de ocurrencias e improvisaciones cocinadas casi con secretismo y oscurantismo por parte del Ejecutivo para que todo esté de acuerdo a sus intereses políticos y no políticos; tanto, que cuando uno (la ciudanía) se quiere dar cuenta, ya nos han comido con zapatos y todo; ya lo han publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Con lo cual, los Decretos Legislativos se han constituido en una herramienta partidista y partidaria de carácter político, muchas veces, con marcados sesgos ideológicos que no responden a la necesidad ni al clamor de la población, sino, a ideas y maniobras de un “pequeño grupo de iluminados”, que a puerta cerrada conspiran para sacar “leyes” que transgreden por lo general los mandatos constitucionales. Mandatos que deberían ser respetados y protegidos; que son de obligado cumplimiento para todos, empezando por los poderes del Estado. Pero no es así.

Para legitimar el engaño del NCPP y cerrar el círculo de la idea macabra, la agresión a la norma constitucional fue más allá de atacar a la Policía. Era preciso romperle el espinazo a todo al sistema judicial peruano. Para ello, le pusieron la mira al Código Procesal Penal vigente en ese momento; tenían que aniquilarlo, cambiarlo todo. Lo satanizaron y lo tacharon de inquisitorial. El atentado contra el antiguo Código fue tal, que certificaron su muerte y le expidieron partida de defunción por adelantado. Y así lo hicieron. Y en ello, lógicamente las funciones y atribuciones que la Constitución marca para la Policía Nacional ‘se lo pasaron por el forro’.

Para que pudieran hacer todo aquello, como mínimo necesitaban modificar la Constitución; pero no lo hicieron. ¿Cómo se le puede llamar a eso?. Robo, atraco, fraude, transgresión, prevaricación, cabe todo ello y mucho más… Pueden opinar y no ahorren calificativos.

El botín era goloso; además de someter a la policía, hacerse con la acción penal, invisibilizando a la víctima (haciendo que no exista), dejar fuera de juego a los jueces (cargándose la instrucción), y con la justicia en manos de la progresía, la política y la corrupción, han dejado que la delincuencia menor y la de cuello y corbata, gocen cada una de un buen trozo de impunidad de manos de los fiscales, gracias al principio de oportunidad, gracias al sistema judicial acusatorio, gracias al Nuevo Código Procesal Penal.

¡Cómo le explicamos esto a la gente!.

Lógicamente, esto no se explica en los medios de comunicación que hacen mutis, la enseñanza mira para otro lado y se allana al adoctrinamiento del nuevo sistema, las autoridades y los políticos se desentienden; mientras la gente vive en la ignorancia sobre este tema, se limitan a maldecir su suerte cuando les toca sufrir los estragos de la delincuencia y la falta de justicia, las consecuencias son el resultado de la aplicación del sistema judicial acusatorio a través del NCPP.

Todo ello y mucho más, confrontándolo con la Constitución ‘pongo sobre el tapete’ a continuación para que con análisis crítico saquen sus propias conclusiones.

ARTÍCULOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL (NCPP) QUE COLISIONAN CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL Y PERJUDICAN LA LABOR DE LA POLICÍA

CAPÍTULO I: EL MINISTERIO PÚBLICO

ARTÍCULO 60 del NCPP. - *Funciones*.

1.- *El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial.*

2.- *El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función***".**

Este artículo es uno de tantos del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que rompen el mandato constitucional.

NOTA: *En estos días a fecha 26/08/2024, hay una Ley en debate en el Congreso de la República, que modifica este Art. 60 y otros del NCPP. Modificación que plantea devolver a la Policía Nacional la investigación preliminar (antigua investigación policial), dejándole a los fiscales la siguiente sub etapa, 'la investigación preparatoria' propiamente dicha.*

No obstante: *Los artículos tal cual están a fecha de hoy, sea que lo modifiquen o no; el análisis hecho en este libro, sirve para ver la evolución del problema. La ley en ciernes, a mí criterio, no será la solución. Por muchas modificaciones que hagan, el problema no es el NCPP, sino el sistema; es decir, el tipo de justicia que tenemos. Hay que cambiar el sistema de justicia. El sistema judicial acusatorio no sirve, es un fraude, no se ajusta a nuestra realidad; es antijisticia.*

Inc. 1, del Art 60 del NCPP.

Aquí el NCPP olímpicamente se pasa por el arco del triunfo el mandato constitucional. Este inciso tiene dos partes separados por un punto en el mismo literal; en la primera parte, le otorga la titularidad de la acción penal al Ministerio Público, y en la segunda parte, faculta a los fiscales actuar de oficio, a instancias de la víctima, por acción popular o por noticia policial. Ambas partes recogen cuestiones totalmente diferentes, que aquí lo mezclan intencionadamente para confundir y dar por bueno lo que no es.

En la primera parte no sé de dónde se han sacado que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, porque la Constitución no dice tal cosa. Que alguien me diga dónde está. Por lo tanto, es un invento del NCPP.

En la segunda parte, dice los fiscales (MP) **actúan de oficio**, eso significa convertir a los fiscales en inquisidores, es revivir "la Santa Inquisición", una casa de brujas en toda regla; porque al haber desaparecido los 'delitos perseguibles de oficio', tal cual se les conocía y cuya persecución estaba a cargo de los juzgados de instrucción; y, habiéndolos travestido con el nombre de "delitos

perseguibles por acción pública", le dejan a los fiscales ser un látigo que puede blandirse a la señal de un dedo. Unos y otros no son lo mismo. La diferencia es sustancial, por primeros tienen encaje constitucional y los segundos no.

También dice, que la fiscalía actúa ***"… por acción popular o por noticia policial***", es otro invento del NCPP, en la Constitución tampoco está, tal sometimiento de los colectivos sociales y de la policía; es más, ni por asomo contempla tal barbaridad. Con ello; por un lado, se apropiaron de 'la ACCIÓN y **acusación popular**'; y, por otro lado, se apropiaron de 'la ACCIÓN y **acusación particular**'; ya que, en ambos casos se les impide su apersonamiento es sede judicial. Si no es a través de la fiscalía no hay nada, no existen. Con ello, la ACCIÓN y acusación de ambas desaparece.

Curioso es también el término de "noticia policial", un lenguaje amanerado que le resta importancia a la denuncia policial de toda la vida. Lo cual evidencia la poca consideración al trabajo denodado y sacrificado de la policía; ya que, con ello, hacen innecesario el atestado policial que lo desaparecen.

En contraposición a todo este disparate, el inc. **5 del Art. 159 (*)** de la Constitución Política, dice algo totalmente diferente de lo que recoge el **Art 60 del NCPP**.

En ningún momento dice que el Ministerio Público actúa POR NOTICIA DE LA POLICÍA. Está puntualización a modo de norma del Nuevo Código Procesal Penal es un invento que no está en la Constitución; es una clara manipulación y tergiversación para burlar el verdadero contenido del mandato, quebrantando lo que realmente recoge la Constitución.

(*) *Art. 159 de la* ***Constitución Política del Perú****.*
Atribuciones del Ministerio Público*.*
Corresponde al Ministerio Público:
1.- *Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.*
2.- *Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.*
3-. *Representar en los procesos judiciales a la sociedad.*
4.- *Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.*
5.- *Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.*
6.- *Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.*
7.- *Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.*

Lo que dice la Constitución en el **inc. 5** de su **Art.159**, es: ***"El ministerio Público ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte"*.** Como se puede ver no hay ni dice nada más. Sin embargo, este Código en el **Inc. 1 del Art 60** 'se saca de la manga' o mejor dicho le 'agrega de su cosecha' la frase, *"…por acción popular o por noticia policial*". Con lo cual, varía total y radicalmente el contenido del mandato constitucional.

La Constitución se refiere a que en fase jurisdiccional e iniciado el procedimiento penal, el Ministerio Púbico ejercerá la acción penal. Sin embargo, el NCPP al involucrar a la policía vinculándolo con el fiscal, inexplicablemente invade una esfera ajena a su ámbito de competencia (el jurisdiccional) ya que claramente se está refiriendo a la fase policial, cosa que la Constitución no contempla; por lo tanto, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se sale de su campo de influencia y radio de acción.

No es lo mismo que el fiscal ejerza la acción penal ya en fase jurisdiccional después de conducir la investigación del delito en sede judicial, que querer someter la fase policial o el trabajo policial a órdenes de los fiscales.

La policía constitucionalmente debería entregar sus actuaciones de investigación, pesquisas y denuncias directamente al juez, así lo manda el **Art. 2, 24, f** de la Constitución. Cualquier otra interpretación, es quebrantar el mandato constitucional. No olvidemos que la Constitución además de tener preminencia normativa sobre cualquier otra ley, es anterior a este Código transgresor, es 13 años más vieja que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), y fue concebida en consonancia con el sistema procesal penal vigente en ese momento, es decir, tomando en cuenta los fundamentos y esencia del Código de Procedimientos Penales de **1940** (**LEY Nº 9024** del 23 Nov 1939), como son el principio de legalidad, la tutela judicial efectiva y la justicia ejercida y administrada por jueces; etc, etc.

En síntesis, constitucionalmente el vínculo funcional del quehacer policial en todo lo relacionado con la criminalidad y la delincuencia es directamente con el juez y no con el fiscal; y así debería ser, pero no lo es. Todo, por culpa del código procesal transgresor (NCPP). Es decir, que el canal correcto de la investigación policial y la puesta a disposición de la denuncia con los detenidos se encuentra claramente establecida en el Art.2. 24, f de la Constitución. Lo pueden leer, y el que no sepa leer que pregunte a alguien que haya ido al colegio.

Debo señalar que el **inc. 1**, del **Art 60** del NCPP, en forma encubierta, sin decirlo expresamente, certificó la defunción del atestado policial, ya que se salta esta atribución de la policía y el rol del atestado lo minimiza al nivel de "**noticia policial**", y lo que era su contenido lo somete a un mero informe que pierde su cometido dentro de la carpeta fiscal; es decir, que la fiscalía se antepone y vulgarmente "puentea a la policía", obviando el trabajo que ésta venía realizando en la investigación y en la tramitación de las denuncias a sede judicial; un ataque frontal y artero a la **autonomía** del quehacer policial que le reconoce la constitución (Art.166 concordante con el Art. 2.24, f).

Lo curioso es que en este inciso 1, el NCPP vuelve a confundir y juega con la ambigüedad, nos habla de la acción judicial, queriendo equiparar, o mejor dicho sin querer queriendo nos quiere vender que es igual a la acción penal. Y eso no es así. 'Promover la acción judicial', es algo que los fiscales siempre lo han venido haciendo desde antes, pero en fase jurisdiccional. La fiscalía en sede judicial, de oficio o a petición de parte impulsaba (promovía) la causa si creía que había indicios racionales de criminalidad. Pero 'la acción penal' es otra cosa, es la denuncia que las personas hacían en la policía, y ésta, ponía a disposición del

juzgado de turno (ahí en sede judicial la propia víctima ejercía la acción penal, al margen de la acción que podía o no ejercer la fiscalía). Digo hacían, porque ahora ya no es así, los fiscales han juntado estos dos momentos, estas dos acciones, y la han subsumido en una sola. Con lo cual, "la policía está pintada", lo que hace no tiene la autoridad ni la fuerza que le daba el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940. Aunque la gente sigue yendo a la comisaría a presentar denuncia, ese hecho es como si no contara para nada si no hay un fiscal de por medio que autorice o esté presente. La policía ha perdido autoridad, funcionalidad y autonomía.

Pues para todo ello, y para arrasar con cualquier rastro o vestigio del sistema judicial anterior, se inventaron 'la carpeta fiscal', con ella, el atestado dejó de existir y el fiscal asumió inconstitucionalmente la función de ser el canalizador de los hechos o noticia criminal a sede judicial (contraviniendo el **Art. 2. 24, f** de la Constitución); aunque ellos digan que es legal porque lo dice el NCPP, constitucionalmente no lo es. Saquen ustedes sus propias conclusiones. La Constitución prevalece por encima de cualquier otra ley (Art.51)

Así, con la carpeta fiscal, al ser una parcela exclusiva del Ministerio Público, los fiscales juegan con la suerte de la víctima que también ha dejado de ser tal en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), porque la acción penal ya no está en las manos de la víctima (baila en una carpeta fiscal), el Ministerio público se la ha apropiado a pesar de que conocen que hay una clara transgresión del mandato constitucional, ya que lo de titular de la acción penal es un invento del NCPP. Por lo tanto, habría que explicar cómo y porqué se hizo así, y de paso explicar, "qué significa ser titular de la acción penal"; tal y como lo explicaré más adelante.

Ahora lo que estamos viendo es cómo la policía ha sido desplazada de sus atribuciones y desposeída de una de sus finalidades fundamentales que le encomienda la Constitución, como es la de "investigar y poner a disposición judicial sus pesquisas" a través del tradicional atestado.

Inc. 2, del Art 60 del NCPP.

El inc. 2, del Art. 60 del Nuevo Código Procesal Penal, tiene igualmente dos partes separadas por un punto seguido.

"*El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función*".

Este inciso, si se refiere a la fase jurisdiccional, sería correcto ya que estaría en concordancia y enmarcado en el contexto del espíritu normativo de la Constitución (**inc. 4 Art. 159**); pero me temo que no es así, porque el NCPP en su conjunto, retuerce su interpretación para burlar la esencia del mandato constitucional. El literal está dividido en dos partes y dos instituciones con tareas distintas. Constitucionalmente una debería ser jurisdiccional (fiscales) y la otra no jurisdiccional (policía). Sin embargo, el NCPP lo mezcla todo y retuerce la norma constitucional, para ubica la labor del fiscal (que debería ser una vez iniciado el proceso penal - jurisdiccional) en tierra de nadie para hacerse con la

función policial; para ello, declara su accionar como no jurisdiccional, a sabiendas que la investigación del delito lo hacían los jueces de instrucción en fase jurisdiccional.

La 1ra parte de este inciso, cuando se refiere a la investigación del delito, si ello fuera en fase jurisdiccional, sería correcto; pero no es así. Este **inc. 2 Art. 60** del NCPP es poco claro, ambiguo y engañoso. Eso, porque la 2da parte de este inciso, al referirse a la Policía Nacional, sin decirlo, vincula esta norma al inc. 1 de ese mismo artículo; lo cual, es un contrasentido, por ser contradictorio no sólo a lo que verdaderamente quiere decir el Art 159, sino también del Art 2. 24, f. de la Constitución, por cuanto quiebra la autonomía del quehacer policial del Art.166. Como se puede observar, el NCPP cambia radicalmente la esencia del mandato constitucional que en su conjunto está totalmente en contra de lo que propugna la nueva justicia.

No olvidemos que; una cosa es, la labor de la policía en fase jurisdiccional (cuando ya hay delito), donde evidentemente tiene que cumplir los mandatos a los que se refiere la Constitución, siempre a través del juez ya que muchos requerirán orden judicial (detenciones, allanamientos, etc); y otra cosa es, que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) le atribuya en forma encubierta a los fiscales una función de investigación en fase policial que la Constitución no contempla. Ahí está el problema. Por lo tanto, tal y como está operando la fiscalía en fase policial es inconstitucional. No se está cumpliendo la Constitución, porque lo que recoge en este artículo el NCPP y la forma como se está aplicando es contradictorio e ilegal constitucionalmente hablando.

ARTÍCULO 61 del NCPP. - *Atribuciones y obligaciones.*

1.- *El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación.*

2. *Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo.*

3. *Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece.*

4. *Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición establecidas en el artículo 53.*

Respecto del **Inc. 1, Art 61** de este Código.

El inc. 1, de este artículo del Nuevo Código Procesal Penal, hace referencia a las atribuciones y obligaciones de los fiscales, y dice además, que sus actos se rigen únicamente por la Constitución y la ley.

Eso mismo es aplicable para la policía (regirse únicamente por la Constitución y la Ley). Y a partir de ahí, cada institución cumplir su tarea en su campo de acción,

que no es otra cosa, que las funciones y atribuciones que les marca la Constitución.

Eso es lo ideal y lo que debería ser. Sin embargo, si los Fiscales se rigieran únicamente por la CONSTITUCIÓN y la ley, hace rato tendrían que haberse dado cuenta que el NCPP vulnera y mucho la Constitución; sin embargo, a sabiendas que están cayendo (incurriendo) en transgresión, desacato, desobediencia, abuso de poder, prevaricación, etc, etc, no dicen nada al respecto, callan. No deberían aplicar el NCPP por inconstitucional, está plagado de artículos que violan en mandato constitucional.

Este inciso 1, además de lo dicho, tiene una redacción muy contradictoria, empieza diciendo que "*el Fiscal actúa con independencia de criterio*", para terminar, diciendo, que "*se regirá por las directivas o instrucciones de la Fiscalía de la Nación*". Un contrasentido verdad. En qué quedamos, el Fiscal es autónomo o actúa recibiendo instrucciones.

Ahí queda retratada la injerencia y la politización de la justicia. Ya no es que sea una mala redacción, el NCPP está hecho a la medida de los intereses del sistema judicial acusatorio. En la práctica, esas directivas o instrucciones a que se hace referencia, terminan siendo órdenes del Fiscal de la Nación que a través de sus fiscales al final invaden competencias de la Policía Nacional, tanto es así, que estos (los fiscales) de facto se yerguen en jefes directos de algunas Unidades Policiales como el **Equipo Eficcop** de la DIVIAC y otras.

Respecto del **Inc. 2, Art 61** de este Código.

El inc. 2, de este artículo, cuando dice que el fiscal: ***"Conduce la investigación preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación…".*** Es una vulneración constitucional encubierta. Sería conforme a la Constitución, si se refiriera a la 'Investigación del delito' en fase jurisdiccional. Si no es así, estaríamos nuevamente ante otra transgresión constitucional si nos remite a la etapa policial. Ya he explicado que el invento de 'la investigación preparatoria', concebido tal cual está, es un despropósito legal para facilitar la puesta en marcha del sistema acusatorio. Por otro lado, en este inciso, entendemos que ese "PRÁCTICARÁ", no se refiere a que los fiscales se pongan 'polaca, kepi y revolver al cinto' y salgan a la calle en busca de delincuentes; porque sería otro atentado a la Constitución. Lo mismo ocurre con el "ORDENARÁ practicar los actos de investigación…", no dice a quién ordenará, si se refiere a la policía, no estaría ajustado al mandato constitucional. La Constitución habla de "mandatos" (**Art.159 inc 4**) como vehículo de interrelación institucional y funcional, pero no dice nada de dar órdenes. Un mandato, no deja de ser un petitorio que la policía debe ejecutar en cumplimiento de su función. Pero, tal cual está redactado este inciso 2 del NCPP, no sólo viola la constitución, sino que afecta la autonomía de la policía. El Fiscal no es jefe ni mando policial.

La Constitución manda que los fiscales CONDUZCAN la investigación del delito desde el inicio del Proceso Penal (fase jurisdiccional); no dice que investiguen el delito, eso debería hacerlo un juez de instrucción (el NCCP los eliminó). Todo ello, desde sus despachos y en fase jurisdiccional. Pero no manda que los

fiscales se disfracen de policías y salgan a pegar tiros a diestra y siniestra persiguiendo delincuentes, ni mucho menos les faculta montar operativos. Para eso ya tenemos a la policía. Eso es lo que manda la Constitución, y es lo que se debe cumplir y respetar.

Respecto del **Inc. 3, Art 61** de este Código.

El inc. 3, de este artículo, recoge como atribución del Fiscal: *"Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso".*

Este inciso, deliberadamente habla sólo **del proceso**, pero no dice qué proceso. Al estar recogido en el NCPP suponemos que se refiere al proceso penal; pero me temo que no, al parecer en esa simple omisión "hay gato encerrao".

Si se ciñera la literalidad de esta norma (Inc.3), al título que lleva el compendio normativo "Código Procesal Penal", debería intervenir sólo en lo que es precisamente el proceso penal en sí, es decir, desde el momento que el hecho denunciado ha sido judicializado. Pero como todos sabemos no es así, eso no está ocurriendo. Los Fiscales dan por bueno que el proceso al que se refiere y que regula el NCPP abarca la fase policial, aunque procesalmente eso es un sacrilegio, porque todos sabemos que el proceso penal jurisdiccionalmente no es así, pero como estamos viendo, retuercen la ley a su antojo, para que tenga encaje el sistema judicial acusatorio, aún en contra de la Constitución; como dirían nuestros abuelos, "se zurran en todo", o si quieren una sentencia popular más actual, a los acólitos del sistema acusatorio "les vale pulpo como animal de compañía".

Respecto del **Inc. 4, Art 61** de este Código.

El inc. 4, de este artículo establece que los fiscales *"están obligados a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando estén incurso en las causales de inhibición establecidas en el artículo 53"* **(*)**.

(*) *Artículo 53 (del NCPP). - Inhibición.*
1.-* *Los Jueces* *se inhibirán por las siguientes causales:
a) *Cuando directa o indirectamente tuviesen interés en el proceso o lo tuviere su cónyuge, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus parientes por adopción o relación de convivencia con alguno de los demás sujetos procesales. En el caso del cónyuge y del parentesco que de ese vínculo se deriven, subsistirá esta causal incluso luego de la anulación, disolución o cesación de los efectos civiles del matrimonio. De igual manera se tratará, en lo pertinente, cuando se produce una ruptura definitiva del vínculo convivencial.*
b) *Cuando tenga amistad notoria, enemistad manifiesta o un vínculo de compadrazgo con el imputado, la víctima, o contra sus representantes.*
c) *Cuando fueren acreedores o deudores del imputado, víctima o tercero civil.*
d) *Cuando hubieren intervenido anteriormente como Juez o Fiscal en el proceso, o como perito, testigo o abogado de alguna de las partes o de la víctima.*
e) *Cuando exista cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad.*
2.- *La inhibición se hará constar por escrito, con expresa indicación de la causal invocada. Se presentará a la Sala Penal Superior en el caso del Juez de la Investigación Preparatoria y del Juez Penal, con conocimiento de las partes, y elevando copia certificada de los actuados. La Sala decidirá inmediatamente, previo traslado a las partes por el plazo común de tres días.*

El Art. 53 citado, está referido textual y taxativamente a los jueces, tanto así, que dice: *"Los Jueces se inhibirán por las siguientes causales: …".* Es decir, es una referencia con nombre y apellido. En consecuencia, ningún otro colectivo que no

sean jueces debería atribuirse los alcances de este mandato; y los fiscales no son jueces. Por lo tanto, es el NCPP el que lo ha pervertido todo.

Este artículo aplicado a los fiscales es una aberración jurídica, ya que en el proceso judicial el único que asume jurisdicción es el juez, por lo tanto, que alguien me diga, qué jurisdicción es la que asumen los fiscales en el proceso penal para que ellos puedan inhibirse. ¿Ilógico verdad?.

Y si me responden, que esta inhibición se refiere a la investigación del delito. Pues ahí tienen otra prueba de que esa investigación, es decir, CONDUCIRLA (impulsar, promoverla), **más no dirigirla ni llevarla a cabo**, es en fase jurisdiccional; porque de lo contrario, de no ser así, se estaría atentando contra el derecho fundamental de la víctima, como es la tutela judicial efectiva, que sí tiene amparo constitucional (Art.3).

Como se puede ver del **inc. 4**, los Fiscales dan por hecho que son jueces, y no es así, y todo porque el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) está lleno de contradicciones. Si bien las causales de inhibición podrían ser parecidas o incluso las mismas ajustadas a la peculiaridad de la función propia de Fiscal, que lo dudo y es imposible ya que los fiscales no asumen jurisdicción de nada (constitucionalmente hablando). No obstante, si los acólitos de la nueva justicia piensan lo contrario; debería recogerlo textualmente en el NCPP, pero a título propio (de fiscal), indicando cual es la jurisdicción que asumen los fiscales dentro del proceso penal, eso para diferenciarlo, y para que los fiscales no se crean jueces o actúen como si lo fueran.

Todo ello, demuestra lo que al comienzo explicaba; que este Nuevo Código Procesal Penal (para que funcione el sistema judicial acusatorio) había creado (metafóricamente hablando) ‘un monstruito’, más que legal inconstitucional (tal cual es ahora), un justiciero en la figura del fiscal, una especie de enviado o iluminado al frente del sistema acusatorio, una suerte de inquisidor al frente de un “sistema Frankenstein de justicia”, un gobierno del bien y el mal en la sombra, con autonomía para destruir lo que pretende garantizar, la justicia; de ahí lo de Frankenstein. Digo en la sombra, porque constitucionalmente es el Poder Judicial el único que puede administrar justicia, sin embargo, como lo explicaré más adelante, la justicia gracias al sistema acusatorio agoniza y muere en las manos del Fiscal.

Hay un dicho muy cierto que dice: “de aquellos barros vienen estos lodos”. Es decir, de ahí (del NCPP) viene que, los fiscales se creen jueces, y ahí está el problema, porque se creen investidos de una autoridad que la Constitución no les otorga, ‘un juez es un juez’, y ‘un fiscal es un fiscal’, así de simple.

Constitucionalmente, los fiscales son funcionarios públicos garantes de la legalidad, con atribuciones específicas **para impulsar** la investigación del delito (en fase jurisdiccional), entre otras cosas. La Constitución no les otorga facultad ni atribución para instruir; la instrucción está reservada a los jueces (**Art. 2** y **Art. 100**, entre otros).

Es por ello qué, para burlar el mandato constitucional se inventaron en el NCPP "las carpetas fiscales", con las cuales, de un plumazo se cargaron la instrucción que realizaba el juez y el atestado que realizaba la policía. Una perversión más, de las tantas que nos ha traído el sistema judicial acusatorio. Lo cierto es que, toda esta parafernalia y confusión afecta a la justicia, y lógicamente afecta a la policía y su desempeño como tal.

ARTÍCULO 65 del NCPP **(*)**, *La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal.*

Precisamente, del enunciado que precede, se supone que el NCPP debería recoger todo lo referente a '*La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal'.* Pero no, no es así.

(*) ***Artículo 65*** *(del NCPP).* ***La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal.***

1.- *El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69 y 333.*

2.- *El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará -si correspondiere- las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional.*

3.- *Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal.*

4.- *El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. La Policía Nacional brinda sus recomendaciones a tal efecto. Garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes.*

5.- *El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios.*

En este artículo el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) extravía nuevamente su contenido, su cometido y la esencia de su razón de ser, que es **normar el proceso penal** propiamente dicho, o lo que es lo mismo, **normar el proceso jurisdiccional**; pero este Código tergiversa y 'se salta a la torera' lo que dice la Constitución, estableciendo criterios que rompen la norma constitucional.

Respecto del **Inc. 1, Art 65** de este Código.

El inc.1, dice: *"El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69 y 333".*

Este **inc. 1** tiene dos partes. En la primera parte: Por un lado, el fiscal se pone (birla) la camiseta de juez instructor para INVESTIGAR el delito (suponemos que en fase jurisdiccional); y, por otro lado, a la vez se pone la camiseta de fiscal para ejercitar la acción penal. Una ambivalencia difícil de sostener si se quiere alcanzar justicia, o como mínimo, que la víctima tenga garantizado su derecho a acceder a la tutela judicial. En la segunda parte de este inciso: Los fiscales se ponen la camiseta de policía, descienden de los altares y se entrometen en terreno policial, dicen que "para LUCHAR contra el delito", en ese "chute de travestismo", se sienten policías y actúan como tales, incluso deciden los protocolos de actuación policial, es decir, el cómo y cuándo actuar; en resumen, el cómo ser policía.

A su vez, este inc 1: reconoce y hace la diferenciación que una cosa es 'Investigación del delito' y otra cosa son los 'hechos delictivos' (al invocar la mayor eficacia en la lucha contra el delito). Suponemos que se está refiriendo a la LUCHA contra la delincuencia del Art.166 de la Constitución, de lo contrario no se para que involucra a la policía y le pide colaboración, si los fiscales en sede judicial son los que deberían CONDUCIR (impulsar, activar, promover) la investigación del delito como tal, pero no llevarla a cabo ni dirigirla, ya que eso debería hacerlo un juez que asume jurisdicción, eso dice la Constitución.

Como se puede apreciar todo este batiburrillo normativo, confunde y trae perversión en la actuación de los funcionarios u operadores de justicia.

Este inciso también dice que *"…el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada…".*

Pues bien, la cooperación y la coordinación es razonable y entendible; pero lo de "actuar de forma conjunta", ahí es donde este Código hace trampa. Qué es lo que tienen que hacer juntos, fiscales y policías, ¿lo que la Constitución le encarga a los fiscales? o ¿lo que la Constitución le encarga a la policía?.

Como se puede ver, nadie se imagina a un policía haciendo de fiscal, como tampoco es imaginable ver a los fiscales haciendo de policías. Por lo tanto, lo de actuar de forma conjunta, es una forma encubierta de invadir las funciones, competencias y atribuciones de la policía por parte de los fiscales.

Finalmente, este mismo inciso dice: "diseñar protocolos de actuación" de forma conjunta. La pregunta es la misma, ¿para qué?, para que los policías hagan de fiscales o para que los fiscales hagan de policías. Como se ve, otra vez de forma velada, este Código procesal a través de protocolos quiere invadir competencias policiales. Constitucionalmente la labor de la policía no es jurisdiccional (no es proceso penal), la labor de la fiscalía si es en fase jurisdiccional (durante el

proceso penal); ahí está el quid de la cuestión. ¿Quién quiere invadir a quién?. No obstante, la policía y su quehacer policial se deben a la Constitución y a la Ley; lo mismo la fiscalía. Ambas instituciones en el ámbito de su función; la policía de acuerdo al Art. 166; y la fiscalía conforme al Art. 159.4. Eso dice la Constitución.

Entonces, queda claro: La policía debería actuar de acuerdo a sus propias Leyes (Ley orgánica) y Reglamentos, así como lo hace la fiscalía. Por lo tanto, es fácil concluir que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), fuerza el mandato constitucional en una suerte de desvarío legal para vulnerarlo.

Respecto del **Inc. 2, Art 65** del NCPP.

El **inc. 2**, del **Art.65**, dice: *"El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará -si correspondiere- las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional".*

En este inciso, el Fiscal directamente se pone como policía, al realizar actuación policial encubierta como diligencias preliminares (actuación no jurisdiccional), y va mucho más lejos, se pone de jefe de la Policía, pudiendo ORDENAR directamente a la policía. Se salta el control jurisdiccional, y se salta la sana y cordial relación inter institucional entre los diversos operadores de justicia, afectando la institucionalidad de la Policía Nacional (PNP), así como la autonomía y atribuciones de los mandos de la respectiva Unidad policial.

En este inciso el NCPP no tiene reparos en situar (sin decirlo) a los fiscales en las comisarías, porque, aunque el texto dice que: *"en cuanto tenga noticia del delito*"; es decir, desde cuando se judicializa el hecho, o dicho de otra manera, desde que el juez recibe la denuncia, asume jurisdicción y da traslado al fiscal para que conduzca (impulse o promueva) la investigación desde el inicio del proceso penal. Esa debería ser la interpretación real y legal; pero actualmente no es así, ya que las *"diligencias preliminares"* o ese *"dispondrá que las realice la policía"*, los fiscales amparados en el NCPP lo han entendido que se refiere a la labor policial, aunque saben muy bien que la Constitución no estipula tal cosa; como tampoco, la Constitución dice que los fiscales den órdenes directas a los policías (eso es otro invento del NCPP). Es decir, burlan el mandato constitucional.
Les recuerdo que las diligencias preliminares era lo que los jueces realizaban como parte de la FASE DE INSTRUCCIÓN; sin embargo, con el NCPP lo desjudicializan y lo sacan del proceso penal para dárselo a los fiscales como fase no jurisdiccional. Con lo cual, todo ello es inconstitucional; porque, por un lado, faculta a los fiscales actuar como si fueran jueces sin serlo; y por otro lado, para que los fiscales puedan actuar como policías sin ser policías. Y todo ello (desde el punto de vista penal), en *una parcela no procesal regulada por un Código procesal,* donde los fiscales pueden hacer y deshacer.

Respecto al **inc. 3, del Art. 65** del NCPP.

El inc. 3, del Art.65, dice: *"Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que*

deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal".

Podría decirse de la literalidad, que '*los fiscales están a ambos lados de la ley*' procesalmente hablando claro está (jurisdiccional y no jurisdiccional), o quizá la metáfora signifique algo más (legalidad e ilegalidad) si se mira con ojos de la constitucionalidad. En esta norma, no cabe duda que los fiscales se posicionan en el lado opaco desde una óptica procesal, digo opaco porque lo que se sugiere aquí no forma parte del proceso penal, con lo cual, a los fiscales en este caso sólo les interesa la labor que realiza la policía, la que es sometida bajo órdenes del fiscal, que se yergue en notario para validar toda actuación policial, le llaman *"garantizar su validez"*; es decir, que si al fiscal no se le da la gana de dar su visto bueno, ser policía no sirve de nada, porque sin anuencia del fiscal, la policía es un espantapájaros. De ahí que los fiscales liberen a los delincuentes que la policía detiene con tanto esfuerzo, cuando estos cometen actos criminales.

Este inciso 3, nuevamente nos lleva a la confusión, porque una cosa es 'una intervención policial', y otra cosa son, 'los actos de investigación', no siempre se corresponden ni tiene porqué ser así, ya que muchas veces la intervención policial puede realizarla un policía que no necesariamente realiza luego la investigación policial posterior, como es en el caso de flagrancia o como consecuencia de un operativo policial por otros asuntos.

En este inciso el NCPP marca dos tiempos o momentos: Primero; le atribuye al fiscal el ORDENAR la INTERVENCIÓN POLICIAL, dar indicaciones precisando el objeto de la intervención; y de ser el caso, ordenará y precisará el cómo de los actos de investigación a realizar por la policía, de lo contrario no tendrían validez. Segundo; para asegurarse la sumisión de la policía al Fiscal, remarca que la función de investigación de la policía está sujeta al albedrío del Fiscal; aunque dice conducción, todos sabemos que en la práctica los fiscales se han convertido en amos y señores de la pesquisa policial. Pues todo ello, es contrario a lo que establece la Constitución.

Pues, si los **incisos 2 y 3,** se ciñeran a la 'Investigación del delito' como establece la Constitución (en fase jurisdiccional), sería lo correcto y así debería ser. Eso era lo que ya hacían los 'Juzgados de Instrucción'. Pero si se refiere a la etapa policial o 'Investigación policial' (como se puede leer y viene ocurriendo); entonces, muy mal, porque además de ser contrario a la norma constitucional, pervierte los dos cometidos que marca la Constitución; **primero**, 'la investigación del delito' que se lo asignó al Ministerio Público (fiscales) en desmedro de los jueces de instrucción que este NCPP los eliminó; y **segundo**, 'la investigación policial' que se lo encomendó a la Policía Nacional.

Como se puede ver, no sólo hay un conflicto funcional y de atribuciones, sino también, conflicto de intereses e institucionalidad, que afecta a fiscales, jueces y policía.

Por un lado (según el NCPP), el fiscal en fase de 'investigación del delito' tiene autonomía, donde incluso puede "negociar" (llegar a acuerdos); y, por otro lado, contrariamente, la policía en la 'investigación policial' se limita a cumplir con su función, donde no puede ni debe llegar a acuerdos, debe limitarse a intervenir,

recoger los hechos y ponerlos a disposición judicial. Eso es lo que dispone la norma constitucional (**Art. 2. 24. f**).

Es necesario precisar y dejar claro; que la Constitución manda que el fiscal actúe en fase jurisdiccional. Ahí es donde constitucionalmente podría "negociar con el delito" (llegar a acuerdos) si quiere, si le deja la víctima, si le permite el juez y si no fuera ilegal; más no en fase policial, donde la policía debería tener autonomía si no se quiere pervertir la ley y el quehacer policial que es previo a la intervención de la justicia.

Respecto del **inc. 4, Art. 65** del NCPP.

El inc. 4, del Art.65, dice: *"El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. La Policía Nacional brinda sus recomendaciones a tal efecto. Garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes".*

Este inciso dividido por los puntos es una amalgama de varias cosas, donde el Fiscal decide como investigar, programa las pautas, técnicas y medios para la investigación, garantiza la regularidad de las diligencias, entre otras cosas. A la policía le deja un papel secundario, sólo puede brindar recomendaciones.

Aquí el NCPP es casi repetitivo y cansino en su afán por debilitar la participación y la función de la policía, pero, sobre todo, para dejar sentado la primacía del Fiscal por encima de cualquier cosa; todo para que funcione el sistema judicial acusatorio. Así, el Fiscal está en todo y en todas partes. Omnipresente, en una mano el Código Penal y en la otra su dedo acusador. Han hecho de su figura una especie de ser omnisciente con un poder omnipotente. Así de obnubilados van; los fiscales no están si el NCPP requiere de un correctivo severo para volverlo a la legalidad. Los defensores de la legalidad no se inmutan. Ahora que han perdido la noción de quién es el inquisidor; los fiscales no están como para renegar del sistema inquisitorial. ¡Irónico verdad!.

No obstante, en este inciso: Cuando dice que "*el Fiscal decide la estrategia de investigación"*, no dice si se refiere a la investigación del delito o se refiere a la investigación policial, obvia precisar; por algo será. Si además "*decide las pautas, técnicas y medios"*, deja a la policía desnuda de facultades y tiritando ante la falta de autonomía funcional; ello, si como parece se refiere a la investigación policial, que tampoco precisa.

Le atribuye también al fiscal, que marque el ritmo y los tiempos, es decir, *"garantice la regularidad de las diligencias"*, que tampoco precisa a qué se refiere y de qué tipo son; ya que, si las diligencias son policiales y los fiscales meten sus narices, entonces la policía sale sobrando.

Los fiscales no pueden hacer de policías; por lo tanto, todo el contenido de esta norma **(inc. 4**, del Art.65) es un empacho de atribuciones policiales en manos de los fiscales. Todo ello, es una injerencia grosera ser por inconstitucional. La investigación policial tiene sus métodos, sus tiempos y requiere de autonomía,

sobre todo la parte que corresponde a la inteligencia operativa e incluso el trabajo de campo de las pesquisas policiales cotidianas.

Respecto del **Inc. 5, Art. 65** del NCPP.

El inc. 5, del Art. 65, dice: ***"****El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios".*

Este inciso, valiéndose de *"la investigación del delito"*; deliberadamente mezclar la labor de la policía (hechos) con la labor de la fiscalía (delito en sede jurisdiccional) como si fuera lo mismo, y no es así, constitucionalmente son dos cometidos distintos. Eso, aunque el NCPP rompiendo la constitucionalidad lo haya pervertido.

Aquí, el NCPP nos vuelve a 'tomar el pelo'. Es cierto que la policía está obligada a observar y regirse por el principio de legalidad. Así es y así debe ser; eso si se quiere cumplir con la Constitución. Sin embargo, los Fiscales por exigencias del sistema judicial acusatorio que es la raíz y origen del enjambre normativo del Nuevo Código Procesal Penal, se rigen prioritariamente por el principio de oportunidad; la prueba lo tenemos en el Art. 2 del NCPP. Ahí está el problema. Ahí está la raíz de todos los males de la justicia peruana en la actualidad.

Y cuando **el inc. 5** hace referencia que: ***"****El Ministerio Público y la Policía Nacional realicen programas de capacitación conjunta****".*** Esto podría ser viable siempre y cuando no sirva para adoctrinar a los policías en contra de su institucionalidad funcional y de sus propios intereses, ni se minimice la función policial; pero sobre todo que estos programas de capacitación no estén orientados a someter a la policía bajo yugo de los fiscales. De ser así, sería un adoctrinamiento encubierto para obtener un resultado premeditado y sesgado con el fin de consolidar la implantación del sistema acusatorio; y, por lo tanto, viciado. Adoctrinar a los policías para que obedezcan y hagan todo lo contrario de lo que manda la Constitución, no sólo es ilegal, sino una arbitrariedad; una barbaridad. Se olvidan que hay un principio constitucional que dice: **"***nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda****...***"**.**

A la vista de cómo van las cosas; en que los fiscales minimizan la labor policial y 'miran por encima del hombro' a los policías, creyéndose jefes supremos de los policías, es muy difícil que prevalezca el imperio de la ley (al que se deben los policías), y mucho menos un acercamiento de posturas consciente y consecuente. Porque son dos formas de entender la ley y la justicia. Uno (el policía) captura delincuentes, y el otro (el fiscal) los suelta. El policía actúa bajo el principio de legalidad, y el fiscal prioriza el principio de oportunidad. Dos verdades y dos formas de ver las cosas. ¡Qué diferencia verdad!. Y la Ley, qué pasa con la Ley.

Creo que cada institución debe hacer respetar sus atribuciones ajustándose a lo que dicta la Constitución, y en ese sentido formar a sus profesionales. La preminencia del mandato constitucional está primero. Eso de dejar que los

fiscales adoctrinen a los policías a través de programas de capacitación conjunta, no huele bien. Los fiscales defenderán y harán prevalecer el NCPP; que como hemos visto vulnera la Constitución.

Mientras el Nuevo Código Procesal Penal no sea derogado, y no se enmiende las transgresiones al mandato constitucional, no habrá justicia en el Perú. Una justicia que valga la pena pasa por que se respeten los mandatos constitucionales. Mientras tanto, a los policías no les queda más remedio que seguir luchando contra la delincuencia y hacer respetar el imperio de la Ley.

La policía constitucionalmente está obligada a combatir la delincuencia (Art.166), por lo tanto, está obligada a intervenir en hechos delictivos que son un quebranto o violación de la ley penal; por eso y para eso es LA POLICÍA.

En el Perú, la Policía Nacional es una policía ESTATAL con autonomía funcional reconocida por la Constitución (Art.166); por lo tanto, no debe ni tiene porqué esperar a pedir permiso al fiscal para intervenir en caso de flagrancia, a solicitud e instancias de la víctima o por orden judicial. Así es en todos los países civilizados.

De que sirve una policía maniatada, sin autonomía para operar. A quién beneficia atar de manos a la policía. Está claro que al crimen y a la delincuencia. ¿Qué está pasando? ¿Es que nos estamos volviendo locos o qué?.

ARTÍCULO 66 del NCPP. - Poder coercitivo.

1. *En caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional.*

2. *Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes de que transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal dispondrá su levantamiento, bajo responsabilidad.*

Respecto del **Inc. 1, Art. 66** del NCPP.

¿A qué citación y qué apercibimiento se refiere? ¿Nos está diciendo que un fiscal puede citar y también puede apercibir? También dice que el Ministerio Público dispondrá (ordenará) la *conducción compulsiva* del omiso (es decir, la detención del rebelde) a través de la policía; eso quiere decir que el fiscal le dará órdenes a la policía para efectuar ese tipo de detenciones. Digo detenciones, porque, aunque quieran dorar la píldora o disfrazarla con términos tibios, blandos o vagos, se trata de una detención en toda regla. Como se puede ver esta norma es un desaguisado que es todo un contrasentido. Un fiscal no puede ordenar la detención de una persona sería ilegal e inconstitucional.

El inc. 1, del Art.66, repito, es totalmente ilegal e inconstitucional. El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) no puede darle atribuciones de juez a un fiscal. No puede porque es inconstitucional y, por lo tanto, es ilegal. Ya hay varias

sentencias de la Corte Suprema que han condenado a fiscales por ordenar la detención de personas.

Precisamente, porque este NCPP dispone que un fiscal puede ordenar (disponer) la conducción compulsiva (detención) a quien no concurra a una de sus citaciones, sitúa a los fiscales en la inconstitucionalidad. Y claro, involucra a la Policía Nacional para ejecutar la detención y conducción del omiso.

Muchos se preguntarán: Y qué pasa si la orden del fiscal es verbal. Porque como siempre ocurre, 'cuando las papas queman', si no hay nada por escrito el responsable elude su responsabilidad; es decir, el fiscal 'se lava las manos' y dice que él no ordenó. Por eso, los policías deben estar atentos y conocer la ley; y todo debe ser por escrito para deslindar responsabilidades. Porque en este contexto, no estamos hablando de actos administrativos, estamos hablando de "conducción compulsiva", eso implica detener por mandato del Código Procesal Penal; pero lo legal de acuerdo a la Constitución no debe ser así, ya que, dentro del marco normativo constitucional, el único que puede ordenar acciones compulsivas que afectan la libertad individual es un juez. Salvo las facultades constitucionales que nuestra norma suprema le otorga a la policía en flagrancia, que están tasadas y son especiales. Constitucionalmente un Fiscal no puede hacerlo; no puede detener ni ordenar que detengan a nadie. Un fiscal no es un juez.

Respecto del **Inc. 2, Art. 66** del NCPP.

"Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes de que transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal dispondrá su levantamiento, bajo responsabilidad".

En este inciso se destapa y queda en evidencia el atraco, aquí los fiscales se pasan al otro lado de la línea procesal. Aquí se ve claramente que la fiscalía, haciéndole una rebaja de 24 horas, se apropia de la atribución constitucional que es exclusiva de la policía, la detención que puede realizar de 48 horas en flagrancia (Art. 2. 24. f). Pero, además, a través del NCPP se eximen para sí el requisito o condición de flagrancia. En este inciso no lo dice, pero suponemos que se están refiriendo o es una medida similar a la detención preliminar que el NCPP se sacó de la manga para hacer aún más poderosos a los fiscales.

Pues bien, sea como fuere, al parecer, la fiscalía aprovechándose de la atribución policial, lo toman por asalto y se la atribuyen, la modifican y nos hacen creer que los fiscales también pueden detener u ordenar a la policía que lo hagan a su orden. Lo llamativo es qué, en esta norma ellos eliminan la flagrancia; es decir, crean un supuesto de detención que no existe ni es posible constitucionalmente.

Si eso es así, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) entra en colisión frontal y directa contra la Constitución al autorizar a los fiscales realizar detenciones totalmente inconstitucionales; eso, por más que le pongan de nombre 'detención preliminar'. Una medida coercitiva que atenta contra la libertad del individuo totalmente inconstitucional.

El inc. 2, del Art. 66, vuelve a caer en el mismo error que el anterior inciso. Al Fiscal a través del NCPP se le atribuye poderes que la Constitución no le otorga ni lo contempla. Pero, en un afán por burlar el mandato constitucional, el NCPP veladamente le hurta a la policía la facultad que tiene de detener por 24 horas en caso de flagrancia. Digo le hurta, porque constitucionalmente para detener a una persona hace falta una orden judicial o que la policía te detenga en el momento mismo que se está cometiendo un delito, es decir, en flagrancia. ¡Porqué entonces este NCPP dice lo que dice!.

Como se puede observar, el Nuevo Código Procesal Penal, de una manera absurda retuerce la ley para burlar el mandato constitucional. Y porqué o para qué lo hace. La respuesta es evidente. Para darle a los fiscales poderes ilimitados, más allá de los alcances del Proceso Penal. Para que puedan darle vida, sostener y mantener cogido con pinzas el sistema judicial acusatorio.

Los fiscales sin mandato judicial, constitucionalmente no son nadie para ordenar detener a las personas, u ordenar a la policía levantar ordenes de fuerza como es la detención o conducción compulsiva de una persona. Si lo hacen es ilegal. En flagrancia la policía tiene autonomía constitucional, y en los demás casos, es la orden judicial la que marca el camino de la legalidad.

Es decir, si un fiscal realiza detenciones o da órdenes de detención ignorando el mandato constitucional, aunque vayan disfrazadas con el nombre de detención preliminar o de cualquier otra forma, y aunque el NCPP lo recoja, insinúe o avale, el Fiscal, además de incurrir en abuso de autoridad, con lo que ello supone, estaría cometiendo varios delitos, contra la administración pública, prevaricación, usurpación de funciones, detención ilegal, etc, etc.

Ya hay jurisprudencia que habla de ello: **Sentencia del 15 de febrero de 2019** de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA - SALA PENAL PERMANENTE - **APELACIÓN N° 11-2017,** LORETO. Ahí os dejo una síntesis parcial o extracto de los hechos y su desenlace final **(*)**.

(*) *"El primero de diciembre de dos mil trece, la señora Tesy Pisco Cumayari se acercó a la Comisaría de Contamana para denunciar a Ángel Miguel Vargas del Águila por haber violado sexualmente a su menor hija de iniciales A. L. D. P. -de nueve años de edad-, hecho ocurrido en el mes de junio de dos mil trece; la Policía Nacional dispuso un examen médico de la agraviada y, al tener como resultado "desfloración aguda", procedió a buscar al presunto violador; al encontrarlo, fue conducido a la comisaría, dando cuenta de ello al* ***fiscal provincial*** *de turno,* ***Estuardo Alfonso Estrada Bellodas****, quien se constituyó a la precitada comisaría, el mismo día, primero de diciembre, a las quince horas aproximadamente. En este contexto, el imputado formuló el acta fiscal respectiva, dispuso el inicio de la investigación correspondiente y -pese a no presentarse una situación de flagrancia delictiva- ordenó la detención preliminar judicial del intervenido".*

…

"DECLARARON INFUNDADO *el recurso de apelación interpuesto por el imputado* ***Estuardo Alfonso Estrada Bellodas****; en consecuencia.* ***CONFIRMARON la sentencia*** *del veintiocho de abril de dos mil diecisiete, que lo condenó como autor del delito contra la administración pública-usurpación de funciones, en agravio del Estado-Poder Judicial; y, como tal, le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de dos años, sujeta*

al cumplimiento de reglas de conducta; y fijó en tres mil soles el monto por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.
***CONDENARON** al sentenciado al pago de las costas del recurso desestimado.*

Con esta sentencia, un Fiscal ha sido condenado por ordenar la detención de una persona sin ser juez. *Un fiscal que fue más allá de sus atribuciones por culpa del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y sus desvaríos normativos, se quedó solo ante el exceso cometido por su parte, quedó expuesto a ser pasible de ser condenado*. Una condena ejemplarizante, de 4 años de (prisión) pena privativa de la libertad y al pago de 3 mil soles de reparación civil, por el **delito contra la administración pública–usurpación de funciones, en agravio del Estado-Poder Judicial**; sí como al pago de costas. Hechos probados y juzgados que llegaron hasta la última instancia (Corte Suprema), que resultaron ser constitutivos de delito y merecedores de condena penal.

Visto lo visto, de los hechos narrados y la jurisprudencia citada, los incisos 1 y 2 del Artículo 66 del NCPP, constitucionalmente deberían ser letra muerta si los fiscales no quieren incurrir en ilegalidad y, por lo tanto, ser objeto de persecución penal por actuar como jueces sin serlo.

Sentencia del 15 de febrero de 2019 de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA - SALA PENAL PERMANENTE - APELACIÓN N° 11-2017, LORETO.

CAPÍTULO II: LA POLICÍA.

ARTÍCULO 67 del NCPP. - Función de investigación de la Policía.

1.- *La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancia privada o sujetas a ejercicio privado de la acción penal.*

2.- *Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria.*

Este artículo, es un alumbramiento antinatural, y por su claro interés invasivo, yo diría que es un parto con fórceps del Nuevo Código Procesal Penal.

Lo es, porque las actuaciones y procedimientos policiales deberían estar reguladas en las leyes propias de la policía. La pregunta que surge entonces: ¿Por qué este Código se mete a normar funciones de la Policía Nacional?.
La respuesta es muy sencilla: Porque los que hicieron el NCPP de alguna manera tenían que arrebatarle a la policía su autonomía funcional y su labor en investigación para que pudieran echar a andar el sistema judicial acusatorio. De otra manera hubiese sido imposible, porque la relación policía - juez constitucionalmente estaba y aún está (la Constitución no se ha modificado) tasada en la Constitución como un mandato insalvable y de obligado cumplimiento. Los que elaboraron el NCPP eran conscientes que los fiscales de acuerdo a la Constitución no tienen competencia en fase policial, ya que la 'investigación del delito' al que hace referencia el **Art.159 inc. 4** se refiere a la que ya realizaban los Jueces de Instrucción en fase jurisdiccional. Donde los fiscales constitucionalmente sólo deberían "conducir" la misma (impulsar, activar y promover). Pero la única forma de violar la Constitución en su **Art. 2. 24 inc. f** (donde dice, que la policía se dirige al juez), era a través de este Nuevo Código Procesal.

Así es como instauraron el sistema judicial acusatorio. De paso, dejaron en 'papel mojado' el Art. 166 de la Constitución, cargándose una de las finalidades fundamentales de la Policía Nacional como es la 'investigación de la delincuencia' o "investigación policial", que se la sirven en bandeja a la fiscalía y la sume como parcela suya; quebrándole de esta manera a la policía su autonomía funcional. Todo ello, sin que se notara a través del NCPP que está plagado de artículos inconstitucionales y que son materia de este estudio.

Respecto del **Inc. 1,** del **Art. 67** del NCPP.

En el inc. 1 de este articulo**;** cuando dice que la policía, debe ***"****inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal****"***.

Ese INCLUSIVE, parece grosero y hasta faltoso con la policía. ¿Se imaginan una policía sin iniciativa para combatir la delincuencia y el delito?. ¡No verdad!., Dejaría de ser policía. En otras palabras, nos dice que la policía puede recibir denuncias; algo que está sobre entendido y que debería estar regulado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Pero además "el regalo" va condicionado a que debe dar cuenta inmediata al fiscal. Con lo cual, de un plumazo ataca a la Constitución en el mandato del **Art. 2, 24, f)**, el mismo que ordena sea el juez el que debe tomar conocimiento de los hechos a través de la policía dentro de las 48 horas en caso de flagrancia o en 15 días en caso de espionaje, terrorismo, tráfico de drogas u organización criminal, donde inclusive faculta al juez asumir jurisdicción antes de vencido ese plazo.

En este inciso, cuando dice que la policía debe realizar *las diligencias imprescindibles* (al ser el inclusive extensivo, amén de dar cuenta al fiscal), nuevamente es un mandato invasivo y limitativo. Aquí el NCPP le corta las alas a la policía, las de iniciativa y operatividad de la labor investigativa. Le dice a la policía, "no sea diligente, usted no haga nada si el fiscal no le autoriza. En otras palabras, este mandato lleva implícito un "sólo" encubierto no es textual (usted policía sólo puede hacer esto), pero no hay que ser demasiado listo para darse cuenta de la verdadera intención. Aquí el NCPP se vuelve a equivocar al inmiscuirse en el quehacer "no jurisdiccional" de una institución tutelar del Estado como es la Policía Nacional. Esta normativa, más allá de la injerencia, limita la labor policial. Lo cierto es que, constitucionalmente, la policía tendría que realizar no sólo las diligencias imprescindibles como pretenden, si no, que está obligada a realizar por imperio de la ley todas las diligencias que sean NECESARIAS vinculadas o relacionadas con el hecho delictivo.

La Constitución le otorga a la Policía Nacional amplias facultades y le encomienda una importantísima 'finalidad fundamental', entre las que se encuentra la función de prevenir, combatir e investigar la delincuencia.

Los mandatos constitucionales se deben cumplir sí o sí; no cabe otra opción porque sería ilegal. Además, este Código (NCPP) invade una parcela que no es jurisdiccional, que no pertenece aún al proceso penal, como es la investigación policial.

Entonces, cabe preguntarse: Qué ha pasado para que este Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) incluya en su normativa cosas que la Constitución ordena de otra manera. La respuesta sigue siendo la misma, pero nadie la quiere ver. El sistema judicial acusatorio es el culpable de todas estas aberraciones jurídicas y de los males actuales de la justicia en el Perú.

Respecto del **Inc. 2,** del **Art 67** del NCPP.

En este inciso, el NCPP vuelve a jugar a una ambigüedad consciente de la transgresión, por no decir que juega al engaño. Esta vez, se saca de la manga un nuevo término, INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. (copia otros códigos procesales de países latinoamericanos donde el sistema acusatorio hace de las suyas).

Inc. 2. *"Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria".*

Este inciso, igual que otros tantos lleva a la confusión. Si se fijan bien, nos remite a la investigación preparatoria; lo cual, pareciera que estuviera refiriéndose a la etapa jurisdiccional. Lo que ocurre es que a efectos de encajar el encargo que este Código le hace a los fiscales, la investigación preparatoria traspasa las lindes del proceso, y abarca una parcela donde el caso está judicializado, y otra parcela no judicializada; y ahí, es donde viene el engaño, ya que en esta parcela se han inventado "la investigación preliminar" como parte de la investigación preparatoria. Por lo tanto, de qué nos está hablando el NCPP en este inciso para que se tomen el trabajo de referirse en tono de advertencia a los policías que realizan investigación conminándoles que están obligada a apoyar el Ministerio Público.

Si la norma de este inciso se refiere a la Investigación policial, sería contraria al mandato constitucional, ya que ahí a los fiscales la Constitución 'no les da vela en el entierro'. Por lo tanto, el NCPP en este inciso lleva a la confusión. Si se refiriese a la investigación del delito en fase jurisdiccional, entonces si tendría sentido. Pero me temo, que tal y como está recogido el inc. 2; no es así.

No hace falta que diga que los policías 'están OBLIGADOS a apoyar' porque es obvio. Es una obviedad porque por norma general la policía está obligada a colaborar con todos los estamentos e instituciones del Estado y a intervenir en auxilio de todas las víctimas para que se cumpla la ley; pero si ese apoyo requerido por cualquier autoridad, incluido los fiscales, es algo contrario a ley, esa obligación desaparece. Eso dice la Constitución **(*)**:

(*) **Art 2. Inc. 24, a**; *'Nadie está obligado a cumplir lo que la ley no manda'*, mandato concordante con el **Art. 46** *(nadie debe obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución)*, **Art. 51** *(la Constitución prevalece sobre toda ley)* y **Art. 74** *(no surten efecto leyes dictadas en violación de lo que manda la Constitución)*.

Pero, además, de darse el caso; el cumplimiento de ese "ESTÁN OBLIGADOS", tendría que ser a través de 'mandatos' como manda la Constitución (es decir, por escrito), pero además estos requerimientos tendrían que hacerse a través de la autoridad judicial. La justicia no puede tener dos cabezas. La ocurrencia de que la justicia tiene que ser bicéfala es cosa del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), lo cual es inconstitucional.

Un mandato es un pedido de obligado cumplimiento si es conforme a ley, pero ojo, no es una orden. No es un has esto porque te lo ordeno yo. Lo que ocurre, es qué; en el intento por no dejar cabos sueltos en la vulneración de los artículos de la Constitución antes reseñados, tuvieron que servirse de un lenguaje confuso y de leguleyadas para violentar la Constitución a través del Nuevo Código Procesal Penal, y así, poder invadir competencias de la policía en la fase no jurisdiccional.

En el supuesto, que el caso estuviera ya judicializado; si realmente quisieran cumplir con el mandato constitucional, no debería haber fiscal, ministro, ni cualquier otra autoridad que obligue a quebrantarlo; en este caso, a romper el deber de función o el secreto profesional del policía que realiza la investigación en su relación con el juez, mucho más, si por mandato constitucional y judicial el policía que investiga se constituye en "policía judicial" (proscrita por el NCPP).

Este Nuevo Código Procesal Penal en su afán por arrasar y pervertir el sistema judicial del Perú, también se ha cargado a la policía judicial; no hay ninguna referencia en su articulado. Sin embargo, su labor, hoy proscrita por sistema judicial acusatorio a través del NCPP, estuvo siempre ajena a cualquier injerencia de otra autoridad que no sea el juez (autoridad política, administrativa o institucional); autonomía funcional amparada por la judicatura, al extremo que quien la vulneraba, incurriría en una ilegalidad denunciable con consecuencias penales.

En España hay un caso muy conocido que puede extrapolar como ejemplo para aclarar la idea de lo que significa la labor y autonomía de la policía judicial (véase el caso, coronel Pérez de los Cobos y el ministro Marlazka) **(*)**.

(*) *El 25 de mayo 2020, el ministro del Interior Grande-Marlaska, cesó de su cargo al coronel Pérez de los Cobos, como jefe de la Guardia Civil de Madrid, alegando "pérdida de confianza" por la existencia de un informe a pedido de la juez que investigaba por prevaricación al delegado del Gobierno de Madrid, al autorizar el 8 de marzo una manifestación feminista multitudinaria por el día de la mujer, días antes del estado de alarma por el coronavirus.*

Esto derivó en una llamada del Ministro del Interior a Pérez de los Cobos para conocer el contenido de la investigación, orden que el coronel se negó a cumplir porque era parte de una investigación que se encontraba bajo la dirección de la autoridad judicial y que, por ello, tenía carácter reservado.

Tras ello, el coronel fue cesado, lo que se interpretó como una decisión partidista, causando gran malestar en el seno de la Guardia Civil, iniciándose por ello un proceso judicial.

En esta pugna, el titular de la cartera de Interior, vetó el ascenso del coronel a pesar de aparecer como el número uno de su promoción, decisión que fue entendida como venganza.

La Audiencia Nacional en tanto, emitió sentencia considerando ilegal la destitución, recogiendo que el coronel había sido cesado "por cumplir con la ley". Quien investiga por orden judicial "es policía judicial" que sólo debe sujeción al juez. La resolución ordena la reposición del coronel al frente de la Guardia Civil en Madrid.

ARTÍCULO 68 del NCPP, Atribuciones de la Policía.

Este artículo que consta de tres incisos, constitucionalmente y por sentido común es invasivo e incoherente respecto al quehacer policial; el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se lo podía haber ahorrado, porque es materia netamente policial. Su contenido ajustándose a la Constitución debería haberse recogido en una Ley Orgánica PNP (que aún no tiene) y demás legislación propia de la Policía Nacional.

El Inc. 1, del Art, 68, dice:

"La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en las normas sobre investigación, bajo la conducción del Fiscal, podrá realizar lo siguiente":

a) *Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes.*
b) *Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito.*
c) *Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito.*
d) *Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación.*
e) *Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito.*
f) *Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos.*
g) *Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas.*
h) *Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos.*
i) *Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. En este caso, de ser posible en función a su cantidad, los pondrá rápidamente a disposición del Fiscal para los fines consiguientes quien los remitirá para su examen al Juez de la Investigación Preparatoria. De no ser posible, dará cuenta de dicha documentación describiéndola concisamente. El Juez de la Investigación Preparatoria, decidirá inmediatamente o, si lo considera conveniente, antes de hacerlo, se constituirá al lugar donde se encuentran los documentos inmovilizados para apreciarlos directamente. Si el Juez estima legítima la inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá su conversión en incautación, poniéndolas a disposición del Ministerio Público. De igual manera se procederá respecto de los libros, comprobantes y documentos contables administrativos.*
j) *Allanar locales de uso público o abiertos al público.*
k) *Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.*
l) *Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos.*
m) *Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del Fiscal, y*
n) *Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados.*

Se nota que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) “va directamente a la yugular”, no quiere que se le escape el botín (funcional) por no decir la presa figurativamente hablando. Comienza diciendo que: “**BAJO la conducción del FISCAL**, podrá realizar…”; dando por hecho y poniendo a la POLICÍA al servicio del Fiscal.

El aire imperativo y dictatorial de esta norma, no tiene otro objeto que someter a la policía como institución en su labor de investigación. No les basta a los fiscales con haberse apropiado de la investigación policial, sino que, además, el NCPP manda que la policía esté bajo el control de la fiscalía, norma disfrazada con la frase “**bajo conducción**”, confundiendo así el mandato constitucional; porque una cosa es *“conducir la investigación del delito”* y otra cosa es *“conducir a la policía”*. Luego el Inc. 1, del Art, 68 se esmera en detallar cual reglamento de la policía, que debe hacer y qué no, a efectos de quedar bajo control de la fiscalía.

En otras palabras, aquí el NCPP dispone la policía le haga el trabajo a los fiscales. Digo le haga el trabajo, porque si leen bien son quehaceres o labor policial, pero este Código le atribuye la titularidad a los fiscales, por lo tanto, la policía es un mandado, un monigote que trabaja y viste de prestado, las pesquisas y el trabajo de campo propio de la labor policial lo controla el fiscal como si fuera una función y responsabilidad de la fiscalía; por lo tanto, la policía siente en sus comisarías y en sus unidades de investigación, como si estuvieran

haciéndole el trabajo sucio a la fiscalía, ya que sin órdenes del fiscal la policía es cero, es nada.

En todo caso, esta norma que subyuga la función policial, deja a la policía inmovilizada bajo el yugo de la fiscalía. Todo ello, a pesar que la Constitución no dice ni contempla nada al respecto y tampoco de lo que el NCPP recoge respecto a cómo la policía debe cumplir sus funciones derivadas de su finalidad fundamental constitucional. El mandato constitucional le da autonomía funcional a la policía para investigar los hechos delictivos (delincuencia) y vincula su labor investigativa a una sujeción directa con el juez (Art. 166 y Art. 2. 24, f).

El **inciso 1,** con sus apartados que van de la letra **a)** hasta la letra **n)**, con el título de atribuciones, recoge una serie de funciones a realizar por la policía relacionadas con "LA INVESTIGACIÓN", pero sometida a los fiscales y en terreno netamente policial. Lo cual es absurdo y contradictorio con el mandato constitucional.

Ahí os dejo los 14 supuestos del Art. 68 del NCPP que en temas de investigación pone a la policía bajo conducción del fiscal para que ustedes mismos constaten lo evidente, como los supuestos del literal "i" y "m", donde el sometimiento de la labor policial a los fiscales que el NCPP impone es más que evidente, lo cual, es anticonstitucional (viola el Art. 166 y el Art. 2. 24, f).

No obstante, lo dicho: No deja de ser llamativo, que todo un Código como el Procesal Penal, se distraiga en tareas muy básicas y nimias más propias de un manual policial, a las que les llama funciones. Las cuales recoge en este artículo muy detalladas, pero con un componente y denominador común, hacer prevalecer la figura del Fiscal por encima de todo; a costa incluso de transgredir la norma constitucional.

Es tan obvio el intervencionismo e invasión funcional de una institución contra otra, que para que todo quede bien atado, se repite una y otra vez en una huida hacia adelante haciendo prevalecer lo normado en el NCPP con la finalidad que funcione el sistema judicial acusatorio, y que los fiscales que son la infantería de ese sistema, tengan allanado el camino para promover y velar se aplique la nueva justicia. Por eso se han tomado tanta molestia en atar y bien atado el accionar de la policía, tanto, que el Inc. 1, Art, 68 más parece un manual de colegial que un Código abocado al proceso penal. No cabe duda que esta norma fue hecha a propósito para asegurarse el sometimiento de la policía hacia los fiscales. Mejor les remito al Decreto Legislativo que aprobó el código en cuestión y valoren ustedes mismos.

Lo que recoge el NCPP en este artículo en cuanto a la investigación, podría tener sentido si se refiriese a diligencias ordenadas dentro de la fase jurisdiccional. Pero como se puede ver, no es así. Aquí el Nuevo Código Procesal Penal invade claramente terreno policial. Todo lo que pone y regula al respecto, ya lo hacía la policía sin intervención del fiscal estando vigente el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940 que marcaba el límite entre dos fases muy marcadas, la jurisdiccional (ya con el caso en el juzgado) y la no jurisdiccional anterior a la intervención del juez (investigación estrictamente policial).

El inc. 2, del Art. 68 del NCPP; dice:

"*De todas las diligencias específicas en este artículo, la Policía sentará actas detalladas las que entregará al Fiscal. Respetará las formalidades previstas para la investigación. El Fiscal durante la Investigación Preparatoria puede disponer lo conveniente en relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía***".**

Aquí, se ordena que la policía entregue actas y se someta al fiscal. Una reiteración más que sospechosa, ya que además remarca que la policía RESPETE las "formalidades" que la fiscalía disponga. De qué tienen miedo. ¿Que la policía les diga esto no se puede hacer porque es inconstitucional?.

Pero el despropósito no acaba ahí. Del quehacer de la policía se pasa a la Investigación Preparatoria (remarcándola con mayúsculas para que nada se les escape); es decir, da un salto y de un zarpazo asume que la labor policial es parte de su parcela, y por ello, dice que los fiscales pueden disponer lo conveniente respecto a las atribuciones de la policía. Eso en cristiano (en otras palabras) significa que un fiscal puede a su libre albedrío "DISPONER lo que se le antoje respecto al trabajo de la policía". Un absurdo total.

Todo esto está originando la perversión del sistema, donde alcanzar justicia se ha vuelto una pesadilla y un imposible para las víctimas, porque la policía interviene a un malhechor y la fiscalía los suelta, los delincuentes saben que el sistema falla y por eso aumenta la delincuencia. Lo que ocurre, es que la policía detiene y el Fiscal muy presto, pide las actuaciones policiales, según dicen, para abrir carpeta fiscal. Lo cierto es que, la denuncia policial enviada a fiscalía, luego no se traduce en formalización ante el juez, y mucho menos llega a una acusación fiscal posterior. Es decir, que el trabajo de la policía, por muy acucioso que sea, por lo general, se desintegra en manos del fiscal (en base del principio de oportunidad), y en muchos casos, 'duerme el sueño de los justos' en el cajón de algún escritorio del fiscal, hasta que la eficacia de la labor e investigación policial se esfuma por la alcantarilla del despropósito de dejarlo pasar, archivarlo o simplemente muera por prescripción; lo cual, todo ello, es una ilegalidad que abona la impunidad e incita a que haya más delincuencia.

REPITO, si todo esto fuera en fase jurisdiccional, no habría problema, sería legal si se sigue los parámetros tasados por la Constitución. Pero en fase policial que no es jurisdiccional es absurdo y contrario a ley; me refiero a la ley suprema (la Constitución), porque ya es sabido que el NCPP que es un Decreto Legislativo con rango de Ley, dice lo contrario. Lo cual es un despropósito. La policía necesita y debería tener autonomía funcional. La Constitución así lo manda (Art.166).

Lo cierto es que, el cambiar el nombre a la investigación policial por 'investigación preparatoria', o meterla en el mismo saco, es una intromisión y un contrasentido que el NCPP asume al margen de la Constitución para favorecer la implantación del sistema acusatorio. En todo ello, se ve claramente, una intensión deliberada de mezclar la investigación jurisdiccional (del delito) y la investigación no jurisdiccional (policial). El propósito es claro, burlar el mandato constitucional. Si los fiscales quieren llamarla así (investigación preparatoria), que lo hagan, pero

a la investigación que ellos están encomendados a CONDUCIR en fase jurisdiccional. Lo que hace la policía, es investigación policial; y ahí, constitucionalmente nada tiene que hacer un fiscal. Para eso está la policía, se debe a la ley y a su cumplimiento. Para velar por los derechos del detenido y de la víctima ya está su abogado. Lo que ocurre, que esta parcela también se la han apropiado los fiscales, como explicaré más adelante.

Y eso, de DISPONER LO CONVENIENTE, sobre las atribuciones reconocidas a la policía, es otra injerencia funcional de los fiscales que este Código Procesal recoge con un perfil claramente inconstitucional. Porque da por hecho que la investigación policial está bajo el poder y control del Fiscal. Eso, ni siquiera en fase jurisdiccional constitucionalmente es así (Art. 2, 24, f), y mucho menos en fase policial. Por otro lado, al respecto, la Constitución habla de MANDATOS; es decir, por escrito (como lo hacía el Juez de Instrucción); más no dice DISPONER de la policía. Igual ocurre con el otro término que complementa el mandato; este Código dice ATRIBUCIONES (reconocidas a la policía), y la Constitución dice en el ámbito de sus FUNCIONES. Lo cual no es lo mismo.

Nada de lo que recoge el NCPP se parece al mandato constitucional, que textual y claramente dice, 'investigación del delito' para los fiscales e 'investigación de la delincuencia' para la policía (investigación policial).

Pues ahí, en todo ello, hay una clara vulneración de la norma constitucional, cuyo mandato literal dice expresamente, que la policía con su investigación y los detenidos tiene que dirigirse al juez Art. 2. 24. f. Es decir, todo lo contrario de lo que dispone aquí el Nuevo Código Procesal Penal.

El Inc. 3, del Art 68 del NCPP; dice:

"*El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la Policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 324 del presente Código. El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas****".***

Ojo al texto: *"…El fiscal decretará…el secreto de las investigaciones…",* y como se puede leer, se está refiriendo a *"…las diligencias practicadas por la Policía…".* Ese "DECRETARÁ"; es más que evidente. Un decreto es una resolución que contiene una orden imperativa como resultado o consecuencia de un proceso; sí concierne a la justicia debería ser un juez el que lo emita, si es el resultado de alguna acción administrativa será una autoridad administrativa la que lo emita. La Constitución no dice que los fiscales pueden dar decretos, lo que si dice: es que a efectos de conducir la investigación del delito puede impulsar la misma requiriendo la intervención de la policía a través de mandatos que no dejan de ser requerimientos para tal fin (Art.159.4) **(*)**, pero siempre a través de la autoridad judicial que constitucionalmente es quien tiene a su cargo la DIRECCIÓN de la investigación del delito desde el momento que asume jurisdicción (Art. 2.24, f) y (Art.100). Eso es lo que dice y contempla la Constitución. Lo que ocurre es qué actualmente, todo ello es letra muerta gracias a la transgresión que se hace a través del Nuevo Código Procesal penal (NCPP). Pero lo más llamativo es que el NCPP insiste en ubicar toda esta normativa en

ámbito policial, es decir que no forma parte del proceso penal; cosa que la Constitución no establece ni contempla, ya que ubica la investigación del delito y el quehacer del fiscal cuando el juez asume jurisdicción y es **el inicio del proceso**, y, por lo tanto, ya se puede hablar y valorar los hechos como un posible delito, antes sólo son hechos delictivos bajo intervención policial.

(*) ***Art. 159.4*** *de la Constitución: "Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función".*

Además, se podría decir, que **este** I**nc. 3 (Art 68** del NCPP), es otra aberración legal, por cuanto, trata de confundir y perjudica los intereses de la víctima. No es lo mismo que al detenido se le informe los motivos de su detención y los derechos que le asiste como detenido (como debe ser), a que la policía desvele el contenido de sus pesquisas e investigaciones al delincuente o criminal, poniéndolos a su alcance y disposición para que éste eluda la acción de la justicia. ¡Absurdo verdad!. Toda una contradicción, porque luego dice que el Fiscal podrá decretar el secreto de las actuaciones policiales (investigaciones), en una clara injerencia y atentado contra la autonomía policial, 'del qué y el cómo' del quehacer policial, es decir, injerencia operativa y funcional. Con lo cual, este código procesal penal crea un procedimiento paralelo a todas luces inconstitucional, donde el fiscal sin ser juez puede decretar lo que se le ocurra. Todo ello, entorpece y perjudica la labor de la policía. Constitucionalmente sólo un juez está habilitado para arbitrar justicia y decretar sobre ello.

Este NCPP es muy ambiguo y marrullero. Empieza el **Inc. 3** diciendo, "**el imputado** y su defensor". Por una parte; ya en fase policial habla de imputado, lo cual parece prematuro si aún no lo ha valorado un juez; y, por otro lado, habla de **su defensor** (del detenido), lo cual es llamativo, porque si ya está el abogado del detenido para velar por los intereses de éste; me pregunto, qué carajo hace un fiscal metiendo sus narices donde no debe, aún no le toca, aún no es fase jurisdiccional. ¿Dudan de la policía? Lo mismo se puede decir y dudar del fiscal.

Si este inciso se refiere a la etapa policial, sería contrario a lo que la Constitución establece. En cambio, sí tendría sentido en fase jurisdiccional; es decir, si la policía ya ha puesto a disposición del Juez las diligencias policiales (lo que antes era "el atestado"), y el juez lo envía al fiscal para que este ejerza la acción penal en nombre del interés general, o si a los mismos efectos, necesita accionar para conducir la investigar el delito. Ahí si proceden los mandatos (requerimientos) de la fiscalía a efectos que la policía realice algunas diligencias necesarias autorizadas por el juez (detenciones, allanamientos y otros); evidentemente la labor del fiscal es de impulsar la investigación, pero en ningún caso realizarla como si fuera policía. Por lo tanto, estos mandatos o requerimientos, es sólo es una petición de obligado cumplimiento en cuanto a la respuesta; pero, si la petición estuviera reñida con la ley, la policía no tiene obligación de cumplirla, pero sí de dar respuesta. Y eso vale para cualquier autoridad que requiera a la policía el cumplimiento de algún mandato o requerimiento.

Sirva como ejemplo, que ya hemos tenido a un presidente (Castillo) que ordenó de forma imperativa a la policía que detengan a la Fiscal de la Nación, y no por ello, la policía obedeció.

Volviendo a la idea y contenido de este **Inc. 3**; cabe decir, que antes de la fase jurisdiccional no cabe constitucionalmente la presencia del fiscal, porque estaríamos en etapa policial, donde la policía necesita autonomía para hacer prevalecer el imperio de la ley, y porque la Constitución no considera la intervención del fiscal ahí **Art. 2. 24, f**). Sería contravenir el mandato constitucional.

Aquí (**inc. 3**) el NCPP contra todo sentido común, manda que la policía le muestre al delincuente (a su defensa) el contenido de sus pesquisas policiales, siguiendo lineamientos y criterios del sistema judicial acusatorio, que promueve "la igualdad de armas" entre la víctima y su verdugo, como si el que te roben o te violen fuera un juego, un concurso o una competencia consentida (un viólame que jugamos a quien gana en demostrar la verdad). Lo cual, además de ser un mandato perverso, es pro antijusticia, que pone a la policía en una situación de vulnerabilidad, porque mucha de esa información es confidencial (de la víctima) o reservada (según qué), información de pesquisas, de los servicios de inteligencia o proviene de informantes; situación que, de ser así, pone en riesgo a la víctima y el trabajo realizado por la policía.

También llama la atención, por contradictorio, que en fase policial sea un fiscal el que decrete o no el secreto de la investigación policial, una intromisión absurda que resta autoridad a la policía. Obliga a que la policía se debilite ante el delincuente y su abogado. Tanto así, que lo expone a insultos, amenazas y denuncias. Así, los terroristas, narcotraficantes y las organizaciones criminales lo tienen muy fácil; sólo les hace falta tener un amigo fiscal para manejar y controlar a su antojo el mundo sórdido de la criminalidad. Aquí, igualmente se viola el **Art. 2. 24. f**) de la Constitución. La investigación policial al no ser jurisdiccional debe ser de conocimiento sólo de quien investiga y el juez competente, siendo información reservada o secreta según el caso, donde el delincuente no tenga nada que ver, salvo declarar y dar su versión de los hechos; ya tendrá su momento en sede judicial (fase jurisdiccional) para defenderse o hacer valer sus derechos. Ese es el espíritu de la norma constitucional.

El Nuevo Código Procesal Penal juega a la ambigüedad y al oscurantismo normativo. Si miramos bien el inc. 3, hace referencia al artículo 324 de este Código, el cual, como por arte de magia saca de la chistera al 'Juez de la Investigación Preparatoria', que por culpa del Nuevo Código Procesal Penal es ajeno a todo lo que está ocurriendo en fase policial, es decir, que mientras el fiscal va haciendo de las suyas, él aún está pensando en las musarañas sin hacer nada, entre esperas y bostezos, Si el fiscal no le pasa el caso al juez, éste no puede hacer nada, ni se entera. Aquí para confundir más (Art.324), tal vez por interés o intereses del sistema acusatorio, el fiscal se ubica en fase jurisdiccional. Es decir, muta a lo que debería ser feudo exclusivo del juez. Todo un regalo del NCPP.

Estamos viendo que, a lo largo de lo hasta ahora analizado, este Código nos llevaba de un lado para otro, y de una forma encubierta, se apodera de la etapa de la investigación policial vinculándola al Fiscal, lo cual, no es normal ni es preceptivo, y mucho menos legal si respetáramos la Constitución. Ya que es distinta la investigación del delito en fase procesal (atribuida al fiscal) que la investigación que realiza la policía en fase no jurisdiccional (luchar contra la delincuencia); pesquisas, recepción de denuncias, atestados, etc., etc., (investigación policial). Por cierto, los atestados también fueron proscritos por este NCPP.

ARTÍCULO 324 del NCPP. - *Reserva y secreto de la investigación.*

Inc. 2.- ***"****El Fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de veinte días, prorrogables por el Juez de la Investigación Preparatoria por un plazo no mayor de veinte días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. La Disposición del Fiscal que declara el secreto se notificará a las partes****".*

Este Inc. 2, es totalmente inconstitucional. Imagínense las arbitrariedades que los fiscales podrían cometer si siguen al pie de la letra esta norma. Con las facultades que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) les da a los fiscales, como ordenar detención preliminar (en fase no jurisdiccional) y ordenar la conducción compulsiva a quien no acuda a una citación o se niegue a colaborar con la fiscalía (Inc. 1, Art. 66 NCPP). Si a eso le añadimos que este Art. 324 le faculta "ORDENAR que cualquier ACTUACIÓN bajo "su autoridad" se mantenga en secreto. Con ello, un fiscal siguiendo el criterio de este mandato, fácilmente podría ordenar detener a una persona, privarle su libertad por 20 días y encima tenerlo en secreto, por lo tanto, sin que nadie se entere. Eso viola derechos fundamentales. Sería un secuestro en toda regla. Con este tipo de normas, se está permitiendo que los fiscales jueguen (funjan) a ser jueces sin serlo.

Esta norma (**Inc. 2)**, es contraproducente por no decir descabellada. Al citar al juez de investigación preparatoria, se supone, que el caso ya está judicializado; por lo tanto, estaríamos en fase jurisdiccional. Porque si se refiere a momento y tiempo del quehacer policial sería un motivo más de su inconstitucionalidad. Pero vamos a seguirle el juego a su ambigüedad. Partimos que los fiscales tienen por encargo la CONDUCCIÓN de la investigación del delito. Si es así: ¡Qué pasa!, ¿A quién le ordena el fiscal, al juez que ya ha asumido jurisdicción?. No creo que un fiscal ordene a otro fiscal, o quizá se ordena a sí mismo mantener en secreto por 20 días la investigación. Porque ordenar a la policía no puede ser, porque constitucionalmente, la policía sólo puede detener por 48 horas en flagrancia (Art. 2. 24, f) antes de ponerlo a disposición del juez (con la investigación realizada); salvo los casos de espionaje, terrorismo, tráfico de drogas u organización criminal que puede disponer de un máximo de 15 días.

Es decir, si nos ceñimos a la normativa del Inc. 2 del Art.324 del NCPP, hay cinco (5) días que están en el aire, "aceptando pulpo como animal de compañía"; es decir, aceptando y dando por bueno que la fiscalía le birle esa atribución constitucional a la policía. De dónde sacaron lo de los 20 días y dónde dice la Constitución que el fiscal puede ordenar detener. ¡No ven que es una barbaridad, o acaso no lo ven!. Me dirán; es que lo dice el NCPP. Claro, pero eso es

inconstitucional. Si la policía no pone a disposición judicial en el tiempo y forma que el mandato constitucional dispone (Art. 2. 24, f), es porque la normativa que contiene al respecto el NCPP se impone violando la Constitución.

Este mismo inciso **(Inc. 2),** dice además, que el Juez de la Investigación Preparatoria puede prorrogar por 20 días más el secreto de alguna actuación. Por lo tanto: ¡En qué quedamos!; estamos en fase policial, o estamos en fase jurisdiccional. Si el caso ya está judicializado, la policía ya no puede detener ni retener nada sobre el caso en cuestión sin orden judicial, y mucho menos seguirle el juego al fiscal jugando al secretismo o aliarse con él para secretos por guardar. Y si este inc. 2, se refiere a fase policial, es decir, fase no jurisdiccional; cómo es que la policía puede mantener en secreto actuaciones o documentos de una intervención policial por 20 días, más otros 20 días que el juez puede prorrogar; eso, según el NCPP. Lo cual, como se puede ver, se aparta totalmente del mandato constitucional (Art. 2.24.f).

Los que redactaron el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y los que lo aplican a vista y paciencia de todos, entre ellos, los fiscales, no se dan cuenta que, en fase jurisdiccional la policía no tiene por qué tener nada oculto, y mucho menos por orden de un Fiscal, porque sería ilegal.

Este inc. 2, incluso, re refiere a notificar a las partes, la disposición del fiscal que declara el secreto de las investigaciones. Si con esa alusión se está refiriendo a las pesquisas policiales, estaría atacando frontalmente la autonomía funcional de la policía, ya que la policía no tiene porqué notificar a los delincuentes que se les está investigando en secreto. ¡Qué tontería es esa!. La investigación policial aún no es proceso penal, por lo tanto, no hay partes; lo que hay son unos hechos y una víctima; el denunciado podrá defender su inocencia en sede judicial.

Este inc. 2, además de excederse al darle a los fiscales, atribuciones respecto a la policía que son una ilegalidad, también, le atribuye competencias que son exclusividad de los jueces, como es, decretar u ordenar actuaciones respecto al procedimiento penal. Lógicamente, si no se quiere cumplir con lo que manda la Constitución es una total ilegalidad.

Como se puede ver, estas contradicciones del NCPP, de mezclar momentos distintos y escenarios distintos; actuación policial (no jurisdiccional) con actuación jurisdiccional. Y de ello, inventarse un procedimiento ad hoc para los fiscales donde puedan 'bailar dos bailes a la vez', dos cometidos difíciles de maridar sin violar la Constitución (porque se desarrollan en momentos y escenarios distintos); como son: **1.- la investigación preliminar**, para birlarle a la policía su quehacer y autonomía en su lucha contra la criminalidad; y **2.- la investigación preparatoria**, para birlarle al Poder Judicial las funciones y competencias del Juez de Instrucción (ilegalmente extinto). Que como se puede ver, son dos cosas distintas. De esta forma, 'de un tiro mataron dos pájaros'. Y para más inri, para asegurarse que funcione esta disfunción normativa, incorporaron en la última la primera (la investigación preliminar en la investigación preparatoria); y así, lo enrevesaron más de la cuenta para confundir al neófito y darle carnaza al docto interesado y mal intencionado, que fungen de eruditos con ceguera constitucional para ir haciendo de fantoches jurídicos.

En conclusión, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), se saca de la chistera dos investigaciones para que los fiscales puedan 'marear la perdiz a su antojo', y así, servirle en bandeja de plata lo poco que quedaba de justicia en el Perú al sistema acusatorio que abandera la antijusticia, y que en su hoja de ruta lleva un determinado sesgo para politizar la justicia, cuyo objetivo es pervertirla. Pues, el NCPP le da cuerpo y personifica lo que es la antijusticia.

Este inciso, demuestra que el NCPP no es coherente ni se ciñe a la legalidad; por el contrario, es muy transgresor de la constitucionalidad. De lo leído, resulta que analizándolo no tiene pies ni cabeza. ¿No era que la fiscalía está a cargo de la investigación del delito? Si ya estamos en etapa jurisdiccional, y ya hay un juez que ha asumido jurisdicción. Qué pasa, a quién ordena el fiscal.

Antes había dicho que este NCPP se saca de la chistera al 'Juez de Investigación Preparatoria', eso es porque, travestido con ese nombre, éste vendría a ser el mismo que con el antiguo Código se le llamaba 'Juez de Instrucción', sólo que disminuido, ciego y sordo según el sistema acusatorio, o mejor dicho, con sus funciones y atribuciones cercenadas y hasta pervertidas literalmente hablando. Como se diría en peruano, sería 'la misma chola con diferente calzón'. Pero esta vez, con el calzón roto y con la pollera menos pesada. Eso, porque le birlaron 'la investigación del delito' y se la pasaron al Fiscal. Quien 'ancho y orondo', se ha creído tanto su papel, que conociendo la ley ha ido más allá de lo que manda la Constitución. Ha invadido terreno judicial y terreno policial.

No obstante, el Fiscal no tiene la culpa. Los culpables son los que seducidos por el sistema acusatorio elaboraron el Nuevo Código Procesal Penal burlando la norma constitucional. Extremo que no les importó con tal de cumplir con su propósito, poder implantar en el Perú el nuevo modelo judicial (acusatorio). De otra manera eso no hubiera sido posible. La Constitución no lo permite. Tal y como lo han hecho y con tantas trasgresiones juntas a la misma. Como por ejemplo, cargarse "la Instrucción" y borrar del mapa al Juez de la misma (Juez de Instrucción) sin modificar la Constitución. Tal es así, que aún hoy en su Art. 100 se remarca y personifica esta figura a pesar del NCPP.

Así pues, el juez preparatorio, al que reúsan y reniegan en el NCPP llamarle de Instrucción; el mismo que, cuando le permiten ver por la cerradura de la justicia, sigue mandando en la investigación (instrucción), que no es otra cosa que la 'investigación del delito' de acuerdo a la Constitución. Circunstancia funcional, que tiene que compartir parcela con el Fiscal; pero como en las películas del oeste, cada uno desde su trinchera; uno CONDUCE (impulsa o acciona) y el otro lleva la dirección (dirige); así debería ser, pero no se cumple. Decía, refiriéndome al juez preparatorio, 'cuando le permiten'; eso es, porque si el fiscal no le pasa al juez la denuncia, éste es ajeno a lo que pasa, por lo tanto, es ciego y sordo respecto al caso por imposición del NCPP.

Como se puede ver, todo es muy raro. Lo que realmente ha ocurrido, es que para poder implantar el "sistema judicial acusatorio" en el Perú, se saltaron todas las barreras e impedimentos constitucionales, y lo hicieron a través del NCPP. Es por eso, que este nuevo Código Procesal Penal, al tener tantos artículos

contrarios al mandato constitucional, debería ser declarado inconstitucional, o en su defecto derogado. No se puede tener vigente una ley que contradice y contraviene la Constitución.

ARTÍCULO 68-A del NCPP, Operativo de revelación del delito.

1.- *Ante la inminente perpetración de un delito, durante su comisión o para su esclarecimiento, el Fiscal, en coordinación con la Policía, podrá disponer la realización de un operativo conjunto con la finalidad de identificar y, de ser el caso, detener a sus autores, el que deberá ser perennizado a través del medio idóneo, conforme a las circunstancias del caso.*

2.- *Para el operativo el Fiscal podrá disponer la asistencia y participación de otras entidades, siempre que no genere un riesgo de frustración.*

Aquí en términos figurativos, se nota las vergüenzas del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Se ve que de prisa y corriendo le ponen un parche. Al artículo precedente de este Código de ponen una A configurando otro artículo con contenido propio el Art.68-A. Esto, porque seguro se les olvidó algo y no les importó hacer un remiendo. 'Les importó un comino' que alguien les sacara los colores al ver dos artículos 68. Pero como querían dejar atado y bien atado el atraco al sistema judicial peruano instaurando el 'sistema acusatorio', tenían que tomar todas las precauciones y 'no dejar cabos sueltos'; y uno de ellos, era el someter a la policía a como dé lugar. A pesar de violar varios artículos de la Constitución.

No les bastó con usurpar a la policía las atribuciones de investigación policial (Art. 68 del NCPP), era necesario para los intereses del sistema acusatorio, apropiarse de la prevención y lucha contra la delincuencia (**Art. 166** de la Constitución), y por eso, hicieron este nuevo **Art. 68-A** "Operativo de revelación del delito", un eufemismo (como título), para no decir "prevención y lucha contra la delincuencia", una función policial, con todo lo que ello implica. Es decir, inmiscuirse a través de los fiscales y maniatar a la policía no sólo en la investigación (policial), sino también, en inteligencia operativa, pesquisas e intervenciones policiales. Esta transgresión constitucional del NCPP, le ha restado autonomía operativa y funcional a la policía. A los fiscales, constitucionalmente les corresponde **conducir** 'la investigación del delito'; es decir, impulsarla, pero no presidirla ni controlarla (eso le corresponde al extinto juez de instrucción). Todo ello, a partir o desde el principio **que los hechos se judicializan** (fase jurisdiccional); no antes (**Art. 2. 24, f**).

Respecto al **Inc. 1,** del **Art. 68-A** del NCPP.

En el **inc. 1,** el atraco al mandato constitucional y las atribuciones de la Policía Nacional es frontal. Se le da poderes de policía a los fiscales. Este Código Procesal Penal ordena que los fiscales hagan OPERATIVOS POLICIALES CONJUNTOS con la policía. Es más, dispone que los dirija y los controle. Y eso, no es lo que dice la Constitución Art. 2. 24, f.

Aquí hay que diferenciar tres momentos, antes, durante y después del hecho presuntamente criminal. Es decir, prevención, intervención y esclarecimiento. En

los tres momentos, el NCPP le da facultades a los fiscales que son claramente inconstitucionales.

Este inciso empieza diciendo *"**ante la inminente perpetración de un delito**"*. Es decir, se ubica en un momento previo, en que aún no hay delito y ni siquiera han ocurrido los hechos. La inminencia es un compás de espera incierto. Por lo tanto, lo inminente puede darse por sorpresa en cualquier momento. Por ejemplo, la policía puede estar patrullando o quizá realizando algún trabajo de inteligencia, y en esas circunstancias se produce el hecho delictivo al margen de la inminencia. Pero, como el NCPP ordena que la policía no puede hacer nada sin la venia del fiscal, esta norma traer consecuencias irreversibles e irreparables. Lo cierto es que, en la espera, el delincuente ya ha robado, matado o violado, o quizá ya ha atracado un banco o incendiado un bien, etc. Esta norma ata de pies y manos a la policía, genera inacción policial.

Sigue la literalidad del inciso diciendo ***"durante su comisión"*** (del delito). Aquí, el NCPP rosa el absurdo porque estamos hablando del momento mismo en que se está cometiendo el delito, es decir, que estaríamos en flagrancia. Y la Constitución (Art. 2. 24, f) dice que, en caso de flagrancia la policía puede intervenir, detener y poner a disposición del juez directamente, no dice nada respecto a que debe intervenir un fiscal. El policía no puede decirle al malhechor: "señor delincuente, suspenda la perpetración que tengo que llamar al fiscal". Si fuera así, la lucha contra la delincuencia perdería eficacia y la flagrancia sería una utopía.

Continúa este inc. 1: ***"o para su esclarecimiento***". En este contexto, no cabe duda, "el código transgresor" nos ubica a los instantes inmediatamente posteriores a la intervención policial, al momento después de producirse el hecho presuntamente criminal. Si se fijan bien, aquí "el Código tramposo" no habla de INVESTIGACIÓN de delito, habla de ESCLARECIMIENTO. La diferencia es sustancial, esta estriba en que, para **la investigación del delito** ya el juez ha tomado conocimiento, es decir, que el caso ya está judicializado (fase jurisdiccional), y ahí, si el fiscal está legitimado constitucionalmente para impulsarla, accionarla, activarla (**conducirla**); mientras qué, **el esclarecimiento** está relacionado a los hechos del momento en concreto, se refiere a las pesquisas que realiza la policía, investigación de la delincuencia, recepción de denuncias, constataciones, levantamiento de actas y toma de declaraciones (lo que anteriormente la policía reflejaba en su atestado policial); es decir, aún es fase policial o investigación policial (no jurisdiccional).

Si es así, y siguiendo con la literalidad de este inciso: ***"el Fiscal, en coordinación con la Policía, podrá disponer la realización de un operativo conjunto con la finalidad de identificar y, de ser el caso, detener a sus autores, …".*** Qué necesidad había de pervertir el sistema a sabiendas de que se está transgrediendo la Constitución. Travestir a los fiscales de policías, para poder realizar operativos conjuntos, donde el fiscal manda (dispone), aunque en la misma frase dice también "en coordinación". En qué quedamos; ¿el fiscal dispone o coordina?. Claro, por eso, luego los titulares en los medios de comunicación: "Fiscal detiene", "Operativo del Ministerio Público desmantela banda de delincuentes", etc., etc.

Es una pena tanto despropósito junto y tanta intromisión e inquina gratuita contra la PNP, que se ve agravada con el abandono institucional por parte del gobierno de turno al no dotarle de una Ley Orgánica en condiciones, donde se haga respetar los fueros e intereses institucionales. Quieren convertir a la policía en una figura decorativa, en un ente que sólo haga acto de presencia, que no haga nada, expuesta incluso a ser apedreada por la turba, cuya violencia y desmanes no es otra cosa que delincuencia en masa.

Respecto al **inc. 2, del Art 68-A** del NCPP.

A la letra dice: *"Para el operativo el Fiscal podrá disponer la asistencia y participación de otras entidades, siempre que no genere un riesgo de frustración".*

En el **inc. 2**, el NCPP no tiene reparos ni límites; ordena que los fiscales pueden disponer la asistencia y participación "de terceros" (otras entidades) para los operativos (policiales). Lo cual, deja que el oscurantismo legal sea abono para cualquier desfachatez que se les ocurra a los fiscales. Porque de ser así, a quién tiene que invitar el fiscal, o qué pretenden con esta disposición; ¿quizá invitar a periodistas o a medios de comunicación que les interese por alguna razón?; o tal vez, causar daño mediático con consecuencias imprevisibles, como ocurrió con el caso del ex presidente Alan García que se suicidó.

El Nuevo Código Procesal Penal debería ser derogado por inconstitucional. Volveríamos al Código de Procedimientos Penales anterior que podría ser mejorado, acabaríamos con el sistema judicial acusatorio que ha pervertido la justicia, la acción penal volvería a poder del ciudadano, la víctima volvería a ser acusación particular, y la justicia peruana volvería a tener las garantías del principio de legalidad que siempre tuvo y que se ha perdido en favor de la delincuencia.

ARTÍCULO 69 del NCPP, sobre 'Instrucciones del Fiscal de la Nación' dice:

"Sin perjuicio de las directivas específicas que el Fiscal correspondiente imparte en cada caso a la Policía, el Fiscal de la Nación regulará mediante Instrucciones Generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, así como los mecanismos de coordinación que deberán realizar los fiscales para el adecuado cumplimiento de las funciones previstas en este Código".

Con el título de "INSTRUCCIONES del Fiscal de la Nación", este artículo, "como si fuera la Ley Orgánica del Ministerio Público", encierra normas de actuación y formalidades que al parecer deberían ser de carácter interno para los fiscales, pero si se lee entre líneas, son Instrucciones que involucra y afecta a todo el sistema. Sin embargo, siendo un Código Procesal Penal, no recoge normas internas similares para los jueces. ¿Porqué?. La respuesta es muy simple. Este NCPP es el motor y alma del sistema judicial acusatorio. Por eso, al margen de la norma constitucional empodera al Fiscal de la Nación, otorgándole facultades que la Constitución no contempla.

Como se puede ver, este artículo cambia el sentido constitucional de la norma. Si bien es cierto, la Constitución en su Art.159 inc. 4 dice, que para la

‘investigación del delito’ (siempre en fase jurisdiccional), ***“****la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función****”.*** En ningún momento habla de directivas, habla de mandatos; y no es lo mismo.

Cuando la Constitución dice “la Policía Nacional”, se está refiriendo a los policías o unidades encargadas de combatir la delincuencia que realizan investigación policial; y cuando dice, “del Ministerio Público”, se está refiriendo a los fiscales o fiscalías que se les ha encomendado **conducir** la investigación del delito (en fase jurisdiccional). En este sentido, constitucionalmente tanto la policía (Art.166) como la fiscalía (Art.159) tienen autonomía funcional dentro de sus respectivas responsabilidades. Los mandatos, son petitorios “en cada caso” en particular que el Fiscal debería hacer a la policía a través del juez, y que son de obligado cumplimiento; lo cual, no significa sujeción de la policía a la fiscalía. Actualmente la fiscalía obvia al juez saltándose la Constitución.

Por otra parte: La Constitución no dice que el Fiscal de la Nación puede interferir ni influir en las decisiones de un fiscal (se supone que un fiscal tiene autonomía). Si en este Art. 69 del NCPP, quieren hacer ver que el Fiscal de la Nación puede impartir instrucciones y directivas internas de su institución, no hacía falta que lo recojan en el Código Procesal Penal, porque para eso tienen su propia ley, la Ley Orgánica del Ministerio Público. En ese mismo sentido, la Policía tiene su Comandancia General para regular el manejo interno de la Policía. Por lo tanto, no deberían interferir en las funciones propias de cada institución. El policía que investiga debe tener autonomía, con sujeción sólo a la ley y al juez. En fase no jurisdiccional, nadie debe interferir en una investigación policial respecto a un hecho delictivo, la policía se debe a la ley. Policía y Fiscalía tienen que tener autonomía funcional respecto a su labor. Ambos tienen que observar un irrestricto respeto a la legalidad, no son monigotes. La constitución y la ley están por encima de todo.

La Constitución (Art.159 inc. 4) no se refiere a la preminencia de una sobre la otra institución, afectaría las relaciones interinstitucionales; tampoco a si el Fiscal de la Nación de una parte y el Comandante General de la Policía Nacional de otra parte, tengan que interferir o influir en cada caso. La constitución más bien se refiere, a quienes realizan o ejecutan la labor funcional respectiva.

Cuando la Constitución habla de MANDATOS, se refiere a los requerimientos por escrito que hacían los Juzgados de Instrucción a la policía para que realice ciertas diligencias, y era generalmente durante “la instrucción del procedimiento” (fase en la que, la Constitución involucra al fiscal).

Sin embargo, vemos que en este artículo el Nuevo Código Procesal Penal habla de DIRECTIVAS. Con lo cual; por un lado, se cambia la reseña constitucional de uno de los instrumentos (mandato) de la rutina del quehacer policial y nos lleva a un nivel administrativo y burocrático para poder manejar a la policía en su conjunto a su antojo. Ya que, no es lo mismo, que libren un mandato por escrito para que la policía realice alguna diligencia, a que los fiscales le estén dando directivas a la policía de cómo debe realizar su labor policial.

Por otro lado, el NCPP con este tipo de disposiciones genera malestar y fricción entre las dos instituciones citadas, elevando el conflicto a su nivel más alto, ya que involucra al Fiscal de la Nación para que mediante instrucciones generales regule las actuaciones de la investigación policial. Como si la Policía Nacional no tuviera sus propias instancias, normas y mecanismos para ello.

A la vista, queda claro, que esta norma es una clara invasión a las competencias del Comandante General de la Policía Nacional, que debería ser quién dicte las directivas e instrucciones para regular los procedimientos internos y la actuación del personal policial en la labor que estos realizan para prevenir, investigar y combatir la delincuencia (Art 166 de la Constitución), a través de sus propias leyes, reglamentos y manuales.

Por otro lado, no cabe duda que el Art. 69 del NCPP cuando dice: ***"****Sin perjuicio de las directivas específicas que el Fiscal correspondiente imparte en cada caso a la Policía,…".* Es una vulneración reiterada de la Constitución. Se refiere a los fiscales y a la policía sometida a través de este mandato. Se olvidan que la Constitución le dota de autonomía funcional a la labor policial sujeta tan sólo al mandato constitucional y al imperio de la ley, como así manda nuestra carta magna al asignarle a la Policía Nacional (PNP) atribuciones y una importantísima finalidad fundamental que encierra los cometidos constitucionales del Art. 166.

ARTÍCULO 70 del NCPP, Prohibición de informar.

*"La Policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible requerirá la previa autorización del Fiscal**".***

El título es muy revelador y a la vez engañoso, "PROHIBICIÓN DE INFORMAR" (refiriéndose a la policía). Su mismo nombre lo dice todo. Y la intención es muy reveladora y clara. Que la policía en etapa policial no pueda informar sobre sus intervenciones, y según qué supuesto, tenga que pedir permiso al fiscal para informar a los medios de comunicación. Lo cual es: ¡Una verdadera mordaza contra la policía!.

Este artículo 70 contempla dos supuestos; la información acerca de los imputados, y la información de la víctima, testigos y otras personas vinculadas al hecho punible. En el primer supuesto: "la policía podrá informar", pero sólo sobre la identidad "de los imputados"; lo cual es contraproducente, porque en etapa policial todavía no hay imputados; es tan absurdo, que el NCPP diga que la policía puede revelar la identidad "de los imputados" (suponemos se refiere a los detenidos) pero no puede informar del hecho motivo de la intervención. En el segundo supuesto: cuando se trate de la víctima y otros, no puede informar, "requerirá autorización del Fiscal". Eso dice el NCPP. Lo cual, sigue siendo un absurdo. En ambos supuestos, al referirse a la policía nos ubica en fase de intervención policial.

Sin embargo, en la vida real, el Fiscal si sale a los medios de comunicación (especialmente televisión), donde muchas veces da opiniones y juicios

anticipados; pero, sobre todo, para vanagloriarse de operativos, detenciones e intervenciones que sin la participación de la policía sería imposible. Lo cual, nos lleva a pensar, que todo esto va de quién se lleva la gloria; una lucha de 'quién se lleva el gato al agua', que más parece una guerra sibilina mediática, de 'quién se apunta el tanto' de tal o cual intervención. De ahí (oportunismo de por medio y ganas de figurar), que hayan salido tantos Fiscales mediáticos, televisivos y polémicos, que 'venden la piel del oso antes de cazarlo'. Ya que luego estas lumbreras, son incapaces de llevar a juicio a los detenidos; en la mayoría de los casos no logran construir un caso, y, por lo tanto, no acusan, y si llegan a formular acusación, no son eficaces; por eso los delincuentes no son condenados.

Decía, que el título de este artículo era engañoso y castrante para la policía porque de la '**prohibición de informar**' se ha hecho eco el Tribunal Constitucional y se ha pronunciado al respecto (Exp. 02570-2018-PA/TC). Cuya sentencia que podría sentar jurisprudencia, en vez de ser clarificadora, 'mezcla papas con camotes' y confunde más, al meter la presunción de inocencia como sustento y justificación de su fallo. Meter de por medio la presunción de inocencia (en fase policial) cuando no se ha verificado judicialmente su vulneración, es un error de apreciación de la norma por parte del alto tribunal. Su sentencia es confusa, porque la policía no puede ser silenciada de esa manera. Claro que se tiene que respetar la presunción de inocencia, es un mandato constitucional, *«toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad» (Art. 2. Inc. 24, e)*. Pero la policía, respetando el mandato constitucional, puede informar sobre sus intervenciones, detenciones y dar cuenta de los hechos del crimen presuntamente cometido, sin entrar a valorar, imputar, calificar ni juzgar; de ello, ya se encargará en su momento la autoridad judicial correspondiente. Lógicamente, la policía cuando lo haga se ceñirá a los hechos y dará información fidedigna y exacta respetando los derechos de los detenidos.

En este artículo, el Nuevo Código Procesal Penal se limita a recoger que la policía sólo puede informar acerca de la identidad de los imputados. Sabido es, que cuando la policía interviene en fase policial, aún no hay imputados. ¡Contradictorio!, ¿verdad?.

Los que hicieron el NCPP, visto lo visto, suponemos que eran conscientes, que una redacción confusa (por no decir transgresora y tramposa) iba a pasar desapercibida para la gente; como así lo ha sido. Nadie se dio cuenta. Y así, a través del NCPP nos colaron el sistema judicial acusatorio. Lo que no repararon sus mentores y promotores, es en el daño que harían a la justicia y a la sociedad que cada día suma víctimas como consecuencia de la criminalidad. Quitarle autoridad y apoyo a la policía es un error en lucha contra la delincuencia de todos los días. ¡O quizá sí se dieron cuenta!.

Lo cierto es que, la policía respetando la legalidad constitucional y los derechos humanos; en fase policial, tiene el deber de informar y dar cuenta a la ciudadanía del trabajo que realiza contra la criminalidad y los peligros de la delincuencia para poder prevenirlos, Que los delincuentes sepan que ante el crimen siempre tendrán enfrente a la Policía Nacional para frenarlos.

Este Art. 70, es una muestra más de los excesos normativos del NCPP en su propósito por minimizar y desvalorar las atribuciones de la policía, silenciándola y sometiéndola a permiso fiscal “hasta para abrir la boca”. Todo un ataque a la autonomía funcional de la policía al ponerla bajo tutela de la fiscalía como si la policía fuera ‘una panda de críos’. La fiscalía quiere hacer de niñera de la policía al punto de otorgarle permisos como se le otorga a un colegial; sólo falta el bozal. Sólo faltaba que este Código pusiera por escrito hasta si la policía podía estornudar o no y cuándo. En todo caso, si se trata de permisos, a efectos de la citada atribución vinculada a la función policial, la policía ya tiene al juez para otorgarlos; eso estipula la Constitución.

Si la normativa del Art. 70 se refiriese que todo ello es aplicable en fase jurisdiccional, constitucionalmente sería legal y correcto, pero en fase policial no cabe. Este Código (NCPP) es invasivo y su contenido transgresor es una auténtica barbaridad por inconstitucional. En el primer supuesto del texto, nos lleva al engaño, nos confunde; nos habla de los IMPUTADOS. Con ello, pareciera que nos habla y nos ubica en fase jurisdiccional, ya que en fase policial aún no hay imputados. Cuando la policía interviene, en sus pesquisas sólo tiene a presuntos autores de un hecho criminal. Por ello, no sé entiende que en el segundo supuesto del texto, se remarque que la policía necesita autorización del Fiscal. El pretexto para justificar toda esta sin razón normativa, son ‘los derechos humanos’ de los delincuentes. Últimamente se le llaman ‘derechos fundamentales’. Que en el fondo sólo protegen los derechos de ladrones, violadores y todo tipo de criminales. Cabría preguntarse; ¿y qué pasa con los derechos de las víctimas.

Esta norma sólo podría tener amparo constitucional, si se refiriese a la fase de Investigación del delito una vez iniciado el proceso penal. Pero si se refiere al trabajo netamente policial, como es la etapa previa a la judicialización, conocida como ‘investigación policial’; entonces ES UNA MORDAZA en toda regla a la policía, para obstaculizar no sólo el trabajo policial, sino también, para amordazar a la Policía Nacional en su accionar como institución tutelar del Estado, cuya finalidad fundamental está recogida en la Constitución, Art. 166.

Llegados a este punto, y sobre el Art. 70 del NCPP; habiendo citado líneas arriba al Tribunal Constitucional y su **sentencia Nº 02570-2018-PA/TC (de fecha 18 de marzo 2021)**, que sienta una mala y peligrosa jurisprudencia; es importante puntualizar que;

La prensa en su día difundió el siguiente comunicado:

“PERSONAS INTERVENIDAS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO-HURTO
Personal policial del departamento de Emergencia de Ica, el día 9 de febrero de 2017 a las 14:00 horas recepcionó una llamada telefónica de base 105 Ica, quien indicó que se dirigieron al Hospital Regional de Ica donde se habría suscitado un hecho delictivo, llegando al lugar se entrevistaron con Juan Manuel PAREDES MENDOZA (asesor legal del hospital regional) quien refiere que a horas 12:45 personal de seguridad, Pedro Miguel García Hernández (43) se logró capturar a las personas identificadas como Jean Pierre Cortez Solano (25) y Víctor Hugo Gallegos Villavicencio (26), quienes se retiraban en un vehículo automóvil, de placa Y1I-513, marca Nissan, color gris urbano,

llevándose treinta y seis (36) historias clínicas dentro de un maletín negro. Siendo los intervenidos puestos a disposición de la Comisaría PNP Ica".

Comunicado que fue el origen y motivó la citada sentencia. Como se puede apreciar: La policía ante una llamada del personal de un hospital interviene a unas personas que en un coche se estaban llevando una gran cantidad de historias clínicas de pacientes, según personal del mismo hospital se las estaban robando. La policía detiene a los autores y la prensa se hace eco de la noticia. El abogado de los detenidos presenta ante un juzgado de 1ra Instancia, una demanda de amparo (de fecha 4 de mayo 2017) contra la policía, que fue estimada en parte. La sentencia fue recurrida, y en la Corte Superior la demanda es desestimada totalmente. Ante ello, los demandantes, interponen 'Recurso de agravio constitucional' contra la resolución de fecha 9 de mayo 2018, expedida por la 1ra Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional por los fundamentos que expuso y, "con la autoridad" que le confiere la Constitución Política del Perú, RESOLVIÓ:

1. *Declarar FUNDADA la demanda por haberse vulnerado los derechos a la rectificación y al honor, y el principio a la presunción de inocencia.*

2. *ORDENAR al director de la VIII Macro Región Ayacucho – Ica de la Policía Nacional del Perú (PNP), redacte una nota aclaratoria destinada a resarcir el honor y la presunción de inocencia de los recurrentes.*

La sentencia es una verdadera insensatez porque está dando por probado que la policía había vulnerado el honor y la presunción de inocencia de los recurrentes (detenidos). Digo insensatez, porque para que ello hubiera ocurrido, tendría que haber sido un juez en sentencia firme el que así lo dejara sentado, pero un juez de instancia de lo penal, porque estaríamos hablando de delitos; por lo tanto, la vulneración del honor y la presunción de inocencia tiene que ser juzgado previamente por la vía penal.

Por eso, decía antes que esta jurisprudencia es un mal precedente, porque para que el Tribunal Constitucional (TC) entrara a tallar tendría que haber exigido previamente que los recurrentes presentaran como prueba la sentencia condenatoria. Sin ese requisito, el TC tendría que haber inadmitido a trámite esa demanda. No olvidemos que el Tribunal Constitucional (TC) no es un tribunal de instancia, por lo tanto, no se le debe distraer con nimiedades y mucho menos se debe permitir se manosee su accionar con asuntos intrascendentes que no son de su competencia, como es el hecho que nos ocupa; que la policía informa que ha detenido a unas personas por haberlas encontrado llevándose (robando según los denunciantes) 30 historias clínicas de un hospital. Sin embargo, el TC llega a la conclusión que llegó: porque cree o deduce, que la policía emitió un comunicado y porque la foto en la que salen los detenidos lleva el logo de la Policía Nacional (conjeturas y suposiciones). Aunque eso fuera verdad, el TC no puede entrar a valorar el fondo de la cuestión, no es de su competencia valorar hechos que le compete a otros juzgados ordinarios de rango menor, como es un juzgado de lo penal. Por lo tanto, como ya lo indiqué líneas arriba, tendría que haber inadmitido a trámite "la demanda" (recurso de agravio constitucional). No es su competencia juzgar delitos, máxime si la PNP negó la autoría del comunicado y respecto a los detenidos siempre se expresó en términos de

PRESUNTOS. Repito, el Tribunal Constitucional tendría que haber inadmitido a trámite la demanda. De no ser así, sería un mal precedente y la justicia sería un caos. El TC no es un tribunal de instancia. Así que, 'no todo vale' en nombre de la tutela de derechos. La tutela judicial efectiva tiene sus propios causes y es otra cosa. "El Constitucional es el Constitucional"; debería estar al margen del "marujeo" y de los chismes de claraboyas.

Por lo demás. Merece la pena explicar y detenernos en esta sentencia, porque nos arroja luces y sombras. Luces, porque nos ayuda a comprender los alcances de la labor policial desde un prisma constitucional. Sombras porque su desenlace arroja un resultado inesperado por una mala interpretación de los hechos y una equivocada aplicación de los fundamentos de derecho. No obstante, con los argumentos y FUNDAMENTOS que contiene, a efectos de poder entender mi postura crítica contra el NCPP, ratifica la tesis que sostengo en este libro haciéndola más sólida.

Así pues, los fiscales no podrán decir que el estudio y análisis que yo hago es sesgado o parcializado en favor de la labor policial y por ende de la Policía Nacional.

De la citada sentencia del Tribunal Constitucional, tomaré la literalidad de algunos de sus fundamentos; y de ello, tenemos que:

El Fundamento 13. Dice: ***"…*** *siendo una* ***intervención policial****, … es la PNP quien mantiene el control de la intervención en cumplimiento de su labor de prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, así como garantizar las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, y* ***prevenir, investigar y combatir la delincuencia*** *(art 166 de la Constitución)****".***

Aquí el Tribunal Constitucional es muy claro, dice que en caso de una intervención policial es la Policía Nacional quién tiene el control de la intervención en cumplimiento de su labor constitucional (Art. 166). Es decir, que el máximo Tribunal le reconoce autonomía funcional a la policía, la misma que está avalada en el mandato constitucional del citado Art. 166.

El Fundamento 16. Dice: *"…se presenta la información como una denuncia realizada por un tercero. Así también, la parte demandada (la policía) se refiere a la conducta delictual de los recurrentes en condicional: 'se habría suscitado un hecho delictivo', además, … se refiere a los recurrentes como 'personas intervenidas', …".*

Aunque el resultado final de esta sentencia no es el esperado. Aquí el Tribunal Constitucional consigna que la policía al referirse a la conducta delictual de los intervenidos lo hace en condicional, es decir en PRESUNCIÓN del hecho, "se habría suscitado un hecho delictivo". Además, en TC deja sentado que la policía se refiere a los detenidos como "personas intervenidas". Lo cual, es completamente correcto, porque no puede ser de otra manera. La policía tiene que hablar de presunción y de hechos. De lo que pase con el delito en sí ya se encargarán otros en su momento; unos de acusar (el fiscal) y otros de juzgar y sentenciar (el juez). La presunción es la garantía para no vulnerar la presunción de inocencia.

El Fundamento 17. Dice: *"Teniendo en cuenta los hechos…, se efectuó en el marco del inicio de una investigación policial sobre un presunto hecho reconocido por los recurrentes, etapa en la cual prima el principio de presunción de inocencia, dado que aún no ha habido una determinación judicial de la responsabilidad penal".*

Aquí el Tribunal Constitucional reconoce que existe un marco de actuación que es el inicio de investigación policial, en la cual la policía interviene en solitario, sin tutela de nadie, recordándole a su vez, que es una etapa en la cual la presunción de inocencia prima por sobre todas las cosas, dado que aún el juez no se ha pronunciado sobre la responsabilidad penal de los detenidos. Al leer entre líneas, se puede ver que el alto tribunal le reconoce a la policía autonomía en la etapa policial, y por ello, le exige que respete la presunción de inocencia durante la investigación policial, en tanto en cuanto, no hay aún una determinación judicial de la responsabilidad penal. Además, y es muy importante, no dice ni reconoce injerencia alguna de fiscal en esta etapa. De lo contrario, el TC hubiese recogido este extremo en su sentencia. El TC sabe perfectamente lo que dice la Constitución en su Art 2. 24, f y el Art. 166.

El Fundamento 18. Dice: *"…cuando a nivel policial… se tomen nota de los diversos actos en los que han participado la Policía en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, ello no implica que en dicha etapa se pueda atribuir con cierta probabilidad o certeza, responsabilidades penales a los investigados, pues dicha determinación es una competencia exclusiva y excluyente del Poder Judicial…".*

Aquí el Tribunal Constitucional, sobre la participación de la policía, habla de NIVEL POLICIAL, y con mucha razón, porque en ese estadío (fase) o supuesto, aún el hecho no se ha judicializado, y como bien dice y reconoce el Tribunal Constitucional, LA POLICÍA ACTÚA EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES. Además, deja sentado que sólo el Poder Judicial tiene la competencia para imputar. Competencia que es exclusiva y excluyente. Por lo tanto, nadie, ni siquiera el fiscal puede atribuirse esa facultad; lógicamente la policía tampoco. Si constitucionalmente es así; entonces porqué los fiscales (que no son del Poder Judicial sino del Ministerio Público) se llenan la boca y van atribuyendo imputaciones a diestra y siniestra, sobre todo de cara a los medios de comunicación.

El Fundamento 19. Dice: *"la elaboración y posterior difusión de una nota informando la presunta responsabilidad penal de los investigados sí lesiona el principio constitucional a la presunción de inocencia… también el principio de dignidad humana y el derecho al honor de los recurrentes […]".*

Aunque no estoy de acuerdo con esta valoración por haberse hecho sin tener el principal requisito para que este supuesto se diera, como es la prueba principal; 'una sentencia condenatoria por la vía penal' en contra de la policía, donde se recoja que los hechos que la policía atribuía como conductas delictuales a los detenidos NO ERAN CIERTOS; o en su defecto, que lo difundido por la policía se trate de información inexacta; y que dicha información agraviara a los detenidos. Lógicamente, dichos extremos sólo podrían verificarse y se podría saber, si los detenidos previamente hubiesen interpuesto una denuncia por vía

penal y haber obtenido una sentencia condenatoria contra el jefe de la PNP responsable, donde además quedara sentado y acreditado la inocencia de los intervenidos. Pues sin esa prueba, esencial para su admisión, el Alto Tribunal (TC) llegó a conclusiones y emitió su fallo en contra de la policía, que no es otro que la citada sentencia en cuestión, en base a conjeturas y entrando a valorar los hechos como si fuera un juzgado de instancia; y el Tribunal Constitucional no lo es. Por lo tanto, el TC debió inadmitir a trámite el recurso presentado por los intervenidos.

Así mismo, el TC en el fundamento 19 citado, recoge como sustento que la policía como hecho reprochable jurídicamente para merecer ese fallo en su contra, es el haber informado la PRESUNTA responsabilidad penal de los investigados. Contradictorio fallo ¿verdad?.

De nada sirvió que el comando de la Policía Nacional hiciera su descargo negando que alguien de la institución enviara el susodicho comunicado para su publicación, ni que se dijera por activa y por pasiva, que la policía únicamente había dado cuenta de la intervención policial realizada el 9 de febrero 2017 ante una llamada que realizó personal del Hospital Regional de Ica.

Tampoco sirvió que la difusión de la noticia (nota de prensa y la rueda de prensa respectiva) fuera hecha sin ningún calificativo de imputación de delito. Por lo tanto, los dos supuestos: información inexacta; y, que dicha información agraviara al recurrente, en este caso no se daban.

Lo cierto es que el Alto Tribunal falló que la policía debía publicar una rectificación en el mismo medio de comunicación que se publicó la nota de prensa en cuestión; lo cual lógicamente entraba en contradicción con su misma resolución.

El fundamento 14 de la precitada sentencia; en ese mismo sentido, recoge: *"El TC estableció con carácter de precedente que, para que un medio de comunicación social tenga la obligación de corregir un hecho noticioso no veraz, era preciso que, simultáneamente, se presentaran los dos siguientes supuestos: en primer lugar, que se trate de información inexacta; y en segundo lugar, que dicha información agravie al recurrente".*

Aquí el Tribunal Constitucional se pega un tiro en el pie, ya que por un lado dice que para que se vulnere el honor de una persona tiene que haber sido víctima de una mentira y que esa mentira le causare un daño. Lo cual no se dio. Ninguno de los dos supuestos: En primer lugar, los intervenidos fueron encontrados con las manos en la masa; la policía los detuvo llevándose las historias clínicas de un hospital. En segundo lugar, la policía sólo cumplió con su trabajo de detener a los autores de un hecho presuntamente delictivo e informar a la ciudadanía de la detención del PRESUNTO robo; por lo tanto, no hay agravio que tenga cabida, la policía actúa en cumplimiento de la ley.

Comentario final a los artículos del NCPP que colisionan con la Constitución y perjudican la labor policial.

Este Código en los artículos antes analizados es violatorio e invasivo, se mete a normar el accionar de la Policía en fase no jurisdiccional, lo cual, no debería ser así, ya que todo ello, tendría que estar recogido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, marco legal que brilla por su ausencia y que mucha falta hace. Lo cierto es que, por imperio de fuerzas ocultas interesadas e influencias políticas soterradas contrarias a los intereses de la policía, lamentablemente no es así. Y no es así, porque hay mucho resentido social, que les gusta vivir del Estado, pero luchan por destruirlo apedreando a todo lo que lo representa, y por ello descargan su ira contra la Policía Nacional (PNP).

En ese contexto, al ser la policía el brazo armado de la ley y a la vez representante del Estado ante la ciudadanía es el 'blanco de todas las iras', no sólo de la delincuencia sino de los antisistema. Y si a ello, le sumamos el odio y desprecio a la policía, encarnado en algunos ministros del interior caviares y progres que le ha tocado los últimos tiempos, que no sólo se han dedicado a dañar la imagen de la institución, sino que, cual caballos de Troya, se han dedicado a querer destruirla desde dentro con pseudo reformas contrarias a los intereses y fueros institucionales de la PNP.

El NCPP hace muy mal en invadir terreno que no es jurisdiccional, debería limitarse sólo a regular lo concerniente al Proceso Penal y no situaciones que aún no forman parte de la fase jurisdiccional, y mucho menos meterse a regular el trabajo de la policía, en una clara injerencia no saludable para el buen funcionamiento de las Instituciones del Estado. Este código, le quita autonomía a la policía e invade sus competencias para someterla de forma forzosa, arbitraria e inconstitucional en favor de los fiscales (Ministerio Público).

EL CÓDIGO PROCESAL PENAL ES INVASIVO A LA LABOR POLICIAL

ARTÍCULO 205 del NCPP, *'Control de identidad policial'*

Bajo ese título el NCPP norma todo lo referente al trabajo policial en relación con esa atribución. No obstante, los incisos de este artículo están cargados de ambigüedad e incoherencias, tal y como explico a continuación. Tanto, que está siendo objeto de algunos parches, como han hecho con la modificación del inc. 4 vía de Decreto Legislativo.

Este Código es tan invasivo e intervencionista que más parece propio de una dictadura, ya que se mete a regular (usurpa) atribuciones de otras áreas del accionar funcional del Estado. Se inmiscuye a normar meras actividades rutinarias del quehacer diario de la policía, como es entre otras cosas, la identificación de personas que a priori están fuera del alcance del Proceso Penal, ya que la identificación policial se da en fase incipiente sobre una circunstancia que aún no es un hecho judicializado, es decir, que aún no forma parte del proceso penal, por lo tanto, la tarea de identificar al no ser aún jurisdiccional, los jueces ni fiscales tienen atribuciones para 'meter sus narices', salvo que la policía cometiera una ilegalidad.

El Nuevo Código Procesal Penal, por deseo de sus mentores, al querer ser más un reglamento policial se aparta de su esencia, "se pasa tres pueblos" (metafóricamente hablando) yéndose hasta las antípodas de su verdadero ámbito y propósito normativo. En su literalidad se puede observar que hace alarde de tal despilfarro normativo que lo convierten en un código invasivo que orilla la sinrazón, ya que priva a los policías de poder ejercer libremente su trabajo.

El inc. 1, dice: *"La Policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. El intervenido tiene derecho a exigir al Policía le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado".*

Así, este inc.1 en un claro afán por controlar a la policía norma un asusto tan rutinario que desvirtúa y perjudica el quehacer policial, manda que sean los policías los que se identifiquen ante el posible infractor, sospechoso o quién sabe si es incluso algún peligroso delincuente o asesino, poniendo en riesgo de esta forma la seguridad e integridad del funcionario policial.

Los policías, como es en otros países, deberían llevar solamente un número que los identifique, en vez de obligarles a ir dando o proporcionando sus nombres completos a saber a quién y para qué; muchos de estos individuos que piden al policía se identifique resultan ser delincuentes, y otros, suelen ser enemigos de la policía que utilizan estos datos subiéndolos a las redes sociales de internet para dañar la imagen institucional.

Pero lo que más llama la atención, es como empieza este inciso: *"La Policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de* ***orden del Fiscal*** *o del Juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona…"*. Lo cual, evidencia que el Código transgresor (NCPP) contempla esa posibilidad, generando confusión, ya que da pie a que los fiscales se equiparen al Juez y se atribuyan poderes de dar órdenes a la policía.

Pues, eso no está en la Constitución, no dice nada al respecto. Los fiscales constitucionalmente no pueden dar órdenes a los policías. Un fiscal no es un juez. La única equiparación que hace, es respecto a la escala remunerativa entre fiscales y jueces; pero de ahí a asumir por parte de los fiscales la majestad y autoridad judicial; tal y como está redactada la constitución, eso es imposible, ya que los fiscales al no ser miembros de la judicatura, no les reconoce la categoría de magistrados. Por lo tanto, constitucionalmente, es imposible cualquier otra aseveración en contrario. Juez y fiscal son dos cosas muy distintas. Los fiscales son sólo funcionarios del Ministerio Público con funciones y atribuciones constitucionales muy específicas y concretas, pero no son magistrados cuya función es juzgar.

El inc. 2, dice: *"La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio del correspondiente documento de identidad. Se deberá proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. Si en ese acto se constata que su documentación está en orden, se le devolverá el documento y autorizará su alejamiento del lugar".*

Este inciso dibuja un supuesto o una intervención únicamente a efectos de identificación a través del documento de identidad, pero solamente en el lugar donde se encontrare la persona; es decir, que la policía no puede conducir a nadie a dependencias policiales a estos efectos. Por lo tanto, si el sospechoso presentara un documento aparentemente falso o se sospechara que hay una posible suplantación de identidad, y en el lugar no se tiene ni los medios ni hay forma de comprobarlo, habría que dejarlo ir, porque al no haber certeza y el policía in situ no dispone de los medios materiales ni técnicos para verificarlo tendría que hacerse de la vista gorda y dejar que el sospechoso se marche; en otras palabras, se les escape. Ya que llevarlo a comisaría y fallar en la sospecha, supondría para el policía un problema.

Por otro lado; un policía es policía las 24 horas del día, todos los días del año; si ve algo sospechoso o ante una eminente perpetración de un delito, aunque no esté de servicio o incluso aunque no pertenezca a la Unidad encargada de tal o cual función o cometido, está en la obligación de intervenir y evitar un daño o que se cometa un hecho delictivo. Eso incluso, lo puede hacer 'un ciudadano de a pie'. Si un policía va a esperar que un fiscal le autorice identificar a un sospechoso, es que vamos muy mal.

Toda esta normativa va contra el sentido común. El policía tiene el deber constitucional de proteger a los ciudadanos y para ello es necesario que ejerza como autoridad. Lógicamente no puede ir tirando tiros a diestra y siniestra sin motivo, ni ir molestando a la gente por gusto, pero ante un peligro o una sospecha está obligado a intervenir, y si para ello, tiene que identificar a alguien lo hará.

El inc. 3, dice: *"Si existiere fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso, la Policía podrá registrarle sus vestimentas; equipaje o vehículo. De esta diligencia específica, en caso resulte positiva, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público".*

En este inciso, ya no hablamos sólo de identificación. Se supone que la persona ha presentado su documento (se ha identificado), pero el policía sospecha que esta persona está relacionada con la comisión de un hecho delictivo. Según este inciso, sólo en ese supuesto, la policía puede registrarle a la persona sus vestimentas, equipaje o vehículo. En otras palabras, el policía no puede revisar los vehículos, ni lo que porta una persona como control rutinario, sólo si el individuo es sospechoso. No puede haber margen de error porque el policía podría tener problemas. Ateniéndonos a la literalidad de esta norma, la autoridad de la policía en la calle es papel mojado. Luego los ciudadanos se quejan que no hay policías en la calle para que los protejan, En qué quedamos. Los controles policiales selectivos, aleatorios e inopinados son muy eficaces y necesarios si se quiere aprovechar el factor sorpresa, de lo contrario los delincuentes siempre llevaran la delantera.

Y lo más absurdo, es que, si la policía encuentra algo, el NCPP obliga a la policía a dar cuenta inmediatamente al fiscal, lo cual atenta contra la autonomía funcional de la policía y entorpece las pesquisas de la policía, ya que los fiscales, por intereses que la ciudadanía aún no entiende, resulta que pone inmediatamente en libertad a los intervenidos o detenidos, por muy evidentes y graves sean los hechos delictivos motivo de la intervención.

Esa es la cuestión que la gente no lo entiende; creen que es la policía la que suelta a los delincuentes, y claro, esa circunstancia mengua y atenta contra la moral operativa de los policías que se esfuerzan y trabajan duro las 24 horas del día en la lucha contra la criminalidad. Los policías de a pie, los que ponen el pecho poniendo en riesgo su vida en cumplimiento del deber, se desmoralizan y llegan a la conclusión, que arriesgan su pellejo para nada.

Del mandato "dar cuenta inmediatamente al fiscal", se infiere que este código le atribuye a los fiscales controlar a la policía hasta en cuestiones muy elementales y rutinarias. Con lo cual, de facto santifica a los fiscales y les otorga aureola de "seres impolutos y superiores" con capacidad ilimitada para controlar el accionar policial, de una policía a priori según el NCPP no confiable; poco falta que a los fiscales se les de atribuciones de niñera de la policía, olvidando que estos tienen mandos propios, y que ya está el Código Penal para castigar en caso de una ilegalidad o un exceso policial. Visto lo visto, el NCPP pone a los fiscales por encima del bien y el mal.

El siguiente inciso 4 del art. 205, cuya redacción primigenia **(*)** no tenía pies ni cabeza por las ambigüedades e incoherencias que encerraba su literalidad, lo han modificado, en un afán por subsanar el galimatías enrevesado de los procedimientos y la labor policial que el contenía, y que por su falta de claridad era papel mojado, inoperativo e inútil.

(*) El inc. 4 (primigenio), decía: *"En caso no sea posible la exhibición del documento de identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial*

practicada, se conducirá al intervenido a la Dependencia Policial más cercana para exclusivos fines de identificación. Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria. Este procedimiento, contado desde el momento de la intervención policial, no puede exceder de cuatro horas, luego de las cuales se le permitirá retirarse. En estos casos, el intervenido no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto con personas detenidas, y tendrá derecho a comunicarse con un familiar o con la persona que indique. La Policía deberá llevar, para estos casos, un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y

En este sentido, han aprobado el Decreto Legislativo Nº 1574 publicado el 5 de octubre de 2023, que modifica el Decreto Legislativo 957 y deja el **Inc. 4. del Art. 205** del NCPP, redactado de esta manera:

El inc. 4, dice: "*En caso no sea posible la exhibición del documento de identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada, se tendrá en cuenta las siguientes disposiciones:*
4.1 *Se conducirá al intervenido a la Dependencia Policial más cercana para exclusivos fines de identificación, pudiéndose tomar las impresiones dactilares del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria. Este procedimiento, contado desde el momento de la intervención policial, no puede exceder de cuatro horas en el caso de ciudadanos nacionales, luego de las cuales se le permitirá retirarse.*
4.2 *Para el caso de extranjeros, excepcionalmente el procedimiento descrito en el numeral anterior no puede exceder de doce horas para su plena identificación, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente:*
4.3 *En los casos descritos en los numerales 4.1 y 4.2 procedentes, el intervenido no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto con personas detenidas, y tendrá derecho a comunicarse con un familiar o con la persona que indique. La policía deberá llevar, para estos casos, un Libro-Registro en el que se hará constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de las mismas".*

Como se puede observar, **el inc. 4** en cuestión, a pesar de la modificatoria vía Decreto Legislativo, viene a ser casi lo mismo, "un parche" que varía la forma de su literalidad, pero el fondo en esencia cambia muy poco, y en algunos casos, lo enreda más. Se supone que toda esta parafernalia es para poder identificar a la persona *"en caso no sea posible la exhibición del documento de identidad".*

Si es así, *según la gravedad del hecho investigado*, la reseña policial (toma de huellas incluida) sin el consentimiento del individuo se podrá hacer en dependencias policiales y no puede exceder de 4 horas y en caso de extranjeros hasta por 12 horas. Al menos es un avance, a diferencia del texto anterior a la modificación, que sólo se podía hacer por orden judicial, o en su defecto, cuando el individuo había sido detenido en flagrancia por un presunto delito. Lo cierto es que esta diligencia se realiza con la finalidad de *"establecer la identidad y constatar si registra alguna requisitoria"*. Lógicamente todo ello se realizará siguiendo las pautas y el procedimiento contemplado en este artículo y mediante técnicas policiales que determinarán la indudable identificación de un sujeto en previsión que utilice nombre falso, para verificar sus antecedentes policiales, judiciales o penitenciarios, o para descubrir su participación en un hecho delictivo. Dejando constancia de todo ello en un libro-registro, incluyendo motivos y duración.

Si esto es así; entonces, en qué quedamos, se lleva a un individuo a Dependencia Policial más cercana sólo a efectos de identificarle o también por algo más. Qué pasa si se identifica con su DNI y a vista de la policía el documento o incluso el mismo individuo despierta cierta sospecha.

Contradicciones a la vista:

Este Código Procesal Penal es tan absurdo, que recoge incluso aspectos que ya están regulados en el Código Penal. Es evidente que un policía no puede retener y mucho menos detener sin motivo a las personas, tampoco puede conducirlas ni meterlas en un calabozo sin motivo, todo ello, ya tiene amparo legal en el código penal. Pareciera que el NCPP ha sido hecho por mentes retorcidas que odian a la policía.

Desconfían de la policía, pero a los fiscales "les dan manga ancha", que más parece les hubiesen dado un cheque en blanco para actuar sin control ni límite en una etapa o fase que no es jurisdiccional, por lo tanto, no deberían inmiscuirse en funciones ni atribuciones que la Constitución no les otorga ni prevé. Todo ello, sin fiscalización ni reproche penal en caso de que cometieran una ilegalidad, abuso o quebranto de la ley. Ello es tan evidente, que han intentado tapar el sol con un dedo. De ahí, la **Ley Nº 31166** del 29 de marzo 2021 (un parche más al NCPP) que modifica el **Art. 454** del Código Procesal Penal (**DL. 957**); por el cual, los fiscales, de su Ley Orgánica y su normativa disciplinaria interna, se supone asumen responsabilidades. Pero no olvidemos que el corporativismo es tan marcado que nos lleva a la vieja frase de 'otorongo no come otorongo' o si prefieren 'perro no come perro', porque esta ley no deja de ser un traje a medida. Pregúntense: ¿Alguien tiene noticias, de que algún fiscal denunció penalmente a otro fiscal? No, verdad.

El inc. 5, del Art. 205, dice: *"Siempre que sea necesario para las finalidades del juicio o para las finalidades del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin perjuicio de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad -en cuyo caso se requiere la expresa* ***orden del Ministerio Público****-, y efectuar en él mediciones y medidas semejantes. De este hecho se levantará un acta".*

En este inciso, 'rizando el rizo', a lejos se siente el 'tufo invasivo y prepotente' del que va cargado este código; dice: que el Fiscal puede ordenar a la policía que le tome fotografías al detenido incluso contra su voluntad. Claro, como este NCPP ha despojado a la policía hasta de la mínima autoridad, se da la circunstancia que hasta para reseñar e identificar se requiere autorización del fiscal. En otras palabras, quiere que la policía hasta para estornudar pida permiso o requiera autorización de un fiscal.

Los fiscales se están atribuyendo la condición de magistrados que realmente la Constitución no les otorga. Sólo en la mente de los acólitos del sistema judicial acusatorio está ese razonamiento absurdo. O se es fiscal o no se es. El ser magistrado, significa ser juez; por lo tanto, tener atribuciones para administrar justicia. La función de los fiscales es velar por la legalidad. Cualquier cosa que se salga de ahí, es otra cosa.

Todo lo que corresponde al trabajo que realiza la Policía que no sea jurisdiccional, debería estar regulado en las leyes propias que norman la labor de la Policía. Hace falta una Ley Orgánica de la Policía Nacional en condiciones como lo tiene el Ministerio Público.

En un estado de derecho, con una visión más amplia, por qué no dotarle al Estado de una herramienta legal para garantizar su autoridad y fortaleza, la necesaria que asegure la convivencia pacífica entre los peruanos. Se debería dar una Ley potente con la fortaleza suficiente que norme el alcance del poder de policía que tiene el Estado en todos sus ámbitos y estamentos. Dotarle a la policía del marco legal coercitivo necesario y efectivo, con directrices claras de cómo ejercitar la autoridad que le otorga la ley. Una autoridad a ejecutar con 'mano de hierro y guante de seda'. Lógicamente ante el quebranto de la ley, en una lucha sin cuartel contra la criminalidad.

No olvidemos que la Policía Nacional (PNP) es una policía estatal, no existe otra en el Perú. Es la única reconocida por la Constitución. Por lo tanto, quitarle o restarle autoridad va en contra de la convivencia y la seguridad pública.

Para poderle exigir a la policía su deber de protegernos, hay que dotarle de autoridad para que pueda cumplir con su finalidad constitucional y su función (art. 166), la que muchas veces, incluso poniendo en riesgo su vida, la saca adelante con muchas limitaciones, materiales y normativas. La policía necesita medios, pero también leyes que la protejan y avalen su trabajo, leyes que la envistan de autoridad. Sólo así tendremos un país ordenado y en paz, con índices de criminalidad bajos. En la Republica de El Salvador tenemos un claro ejemplo de qué hay que hacer para reducir el crimen.

ARTÍCULO 206 del NCPP. Controles policiales públicos en delitos graves.

1. *Para el descubrimiento y ubicación de los partícipes en un delito causante de grave alarma social y para la incautación de instrumentos, efectos o pruebas del mismo, la Policía -dando cuenta al Ministerio Público-* ***podrá*** *establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a estos fines, al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales, con el fin de comprobar que no se porten sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos.*
2. *La Policía abrirá un Libro-Registro de Controles Policiales Públicos. El resultado de las diligencias, con las actas correspondientes, se* ***pondrá de inmediato*** *en conocimiento del Ministerio Público.*

Este artículo que se refiere a controles en delitos graves, es mucho más absurdo e intervencionista que los ya analizados, ya que le resta iniciativa y autoridad a la Policía, que ni siquiera puede con libertad de criterio y autonomía realizar controles de carretera u otros controles estratégicos en su lucha contra la criminalidad, para prevenir y evitar aleatoriamente el incumplimiento de la ley.

Del inc. 1, Art. 206, se infiere: Que la policía es un pájaro sin alas que no puede volar solo, ya que sin que haya de por medio conocimiento e intervención de un fiscal no puede mover un dedo.

Como si los delincuentes como paso previo a cometer sus fechorías avisaran a la policía y dijeran dónde estos deberían poner controles “para delitos graves”; de paso, por su parte la policía tiene que dar cuenta a la fiscalía del chivatazo para que ésta de su venía. Porque según está redactada esta norma, fiscalía podría decir que no a tal o cual control; ya que, su literalidad dice, que la policía PODRÍA (inc.1), no dice que PUEDE. Limitaciones que este Código le impone a la policía, a pesar que la Constitución dice todo lo contrario. Es decir, que le da a la Policía atribuciones constitucionales para ello, en cumplimiento del mandato constitucional del Art 166, donde se puede leer claramente, que el accionar de la policía no está maniatado por la fiscalía.

Del inc. 2, Art. 206, se infiere: Que haya o no pesquisa de delito grave, la policía tiene que dar cuenta al final de cada operativo de control policial. Poco faltó que pusieran que al término de cada control se presentaran AL TÉRMINO DE LA DISTANCIA y después de cuadrarse a seis pasos, en voz alta dijeran SIN NOVEDAD MI FISCAL. No lo dice, pero recoge algo similar, que DE INMEDIATO lleve al fiscal las actas con el resultado de las diligencias, sea cual fuera el resultado, es decir, incluso si no hubiera habido ni pasado nada. ¡Un parte sin novedad en toda regla!.

En este sentido: El Nuevo Código Procesal Penal, en claro desacato a la Constitución, maniata a la Policía sometiéndola a la orden de un tercero, al Ministerio Público. Por lo tanto, a la voluntad o no de un Fiscal. Atenta contra la autonomía policial y le resta la iniciativa a la policía. Arbitrariedad a la que no están sometidos ni siquiera aquellas entidades o personajes que fungen ilegalmente de seudo policías, como son los Serenos, los Fiscalizadores, los ITU (Inspectores de Transporte Urbano) y los controladores del Ministerio de Transportes, entre otros. ¿Por qué?.

En qué cabeza cabe, que la Policía que es el brazo armado de la ley y la fuerza coercitiva del Estado, tenga que supeditar su accionar rutinario a una institución que no tiene nada que ver con la Policía Nacional. Digo nada, porque los fiscales constitucionalmente no tienen funciones de policía, ni tampoco tienen autoridad para regular ni maniatar la función policial.

Ni siquiera en los países de África desvaloran a su Policía de esta manera. Un país que se precie de democrático y respetuoso del estado de derecho, por el contrario, fortalece su autoridad y se preocupa por tener la mejor policía del mundo. Lo que ocurre, es qué, ‘los progres’ que llegaron a tener influencia y poder, además, de ‘colarnos por la puerta falsa’ (vía DL) el Nuevo Código Procesal Penal, han tomado e invadido las estructuras del Estado, y con ello, ‘han hecho tabla rasa’ en la PNP, con un intervencionismo cuasi feroz de las atribuciones de la Policía. ¿Por qué? Ahí está la cuestión.

ARTÍCULO 208 y SIGUIENTES **del NCPP**; los artículos que siguen versan sobre pesquisas, retenciones y registros policiales, e igual que los ya analizados, van en el mismo sentido. Es decir, son una camisa de fuerza al accionar policial, ya que, le restan iniciativa y autonomía. No cabe duda que este Código somete a la

policía, funcional y operativamente a la autoridad de los fiscales hasta niveles muy básicos, rutinarios e ínfimos, una vigilancia casi tribal; tanto que, si la Policía no da cuenta o no tiene autorización del fiscal no puede hacer nada. Una arbitrariedad que maniata la labor de los agentes de la ley, restándoles autoridad.

Pero lo peor en esta cuestión, no es que los fiscales vigilen o tengan bajo el zapato a la Policía. Es que la Constitución no les da a los fiscales esa potestad, el de someter a la Policía, maniatándola y minimizando su accionar, lo cual anula su capacidad operativa e impide cumpla eficientemente sus funciones con autonomía.

Llama la atención que el NCPP (a diferencia de la Constitución) considere a la Policía como una institución sin iniciativa, poco responsable e ineficaz, atribuyéndole una ineptitud institucionalizada, como si la Policía fuera una agrupación no profesional, sin principios y sin formación, un mero instrumento incapaz conformado por entes ineptos; de lo contrario, no se explica por qué tanta desconfianza en su trabajo, que tienen que ponerle un intermediario entre su labor constitucional (que le atribuye el Art.166) y el juez, donde el fiscal hace de implacable capataz.

ARTÍCULO 208.- Motivos y objeto de la inspección.

1. *La Policía, por sí —dando cuenta al Fiscal— o por orden de aquél, podrá inspeccionar o disponer pesquisas en lugares abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán rastros del delito, o considere que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona prófuga, procede a realizar una inspección.*
2. *La pesquisa tiene por objeto comprobar el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere, de utilidad para la investigación. De su realización se levantará un acta que describirá lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerá o conservarán los elementos materiales útiles.*
3. *Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si estos han desaparecido o han sido alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de convicción de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente se procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar.*
4. *De ser posible se levantarán planos de señales, descriptivos y fotográficos y toda otra operación técnica, adecuada y necesaria al efecto.*

Este artículo está referido a las pesquisas que realiza la policía, por lo tanto, no sé de dónde saca este código procesal, que la policía para poder llevarlas a cabo tiene que tener orden del fiscal, o, si quiere hacer uso de iniciativa tiene que dar cuenta al fiscal, quedando a expensas que éste autorice o no.

Las pesquisas no siempre se realizan a consecuencia de haberse cometido un delito; también se realizan en base a datos proporcionados por informantes, incluso por mera prevención ante el riesgo de que se produzcan posibles hechos de delincuencia. Por lo tanto, estamos hablando de una labor netamente policial, donde los fiscales constitucionalmente nada tienen que hacer.

Este artículo es una clara injerencia que entorpece la labor policial, creo que el NCPP en este asunto comete un exceso ya que todo ello debería estar regulado en las leyes y normas propias de la función policial. A los fiscales no les gustaría que en la ley de la policía se someta a los fiscales bajo la autoridad policial, y,

además, se regule hasta las cosas más nimias de su quehacer como fiscales. Qué les parecería, si se presenta la policía en el despacho del fiscal diciendo. Un momento, somos la policía, infórmeme su trabajo y estas son las pautas que usted debe seguir y cumplir bajo apercibimiento en caso de no hacerlo. A que eso no estaría bien. De cuándo acá hemos convertido a los fiscales en "autoridades" que controlen a otras autoridades en el desempeño de sus actividades profesionales. Y digo bien, actividades profesionales. Porque se supone que los policías son profesionales. Pues bien:

Del inc. 1, se infiere: Pareciera que se le otorga autonomía a la Policía cuando dice: *"La Policía, por sí",* pero luego viene la mordaza -dando cuenta al Fiscal-; es decir, que si éste no quiere la Policía no puede hacer nada. Y lo más grave, atenta contra la autonomía funcional de la policía, cuando dice: *"POR ORDEN DE AQUEL"*, refiriéndose al fiscal.

La Constitución no dice nada de que la Policía esté bajo las órdenes del fiscal, y mucho menos someta a aquél su trabajo de rutina como son las pesquisas policiales. Por lo tanto, consignar eso de: *"…dando cuenta al fiscal- o por orden de aquél…"*, es un exabrupto normativo para controlar a la policía; creo que ahí el NCPP "ha sacado los pies del plato", valga el modismo para decir que se entromete en asuntos que no le conciernen, porque las pesquisas aún no son proceso penal. Aquí el NCPP rebasa las lindes de su campo normativo.

Del inc. 2, se infiere: Que el NCPP, equipara pesquisa con inspección; con lo cual, se vuelve a equivocar. Las inspecciones, por lo general suelen realizarse a requerimiento de parte o por mandato judicial; es decir, que cualquier persona víctima de un hecho delictivo puede requerirlo o un juez puede ordenar se realice una inspección para esclarecer el hecho delictivo o criminal; ante lo cual, la policía acude PARA VERIFICAR.

Las pesquisas, por el contrario, no necesitan de una denuncia en concreto ya que se realizan siguiendo el olfato policial, a eso se le llama INICIATIVA o inteligencia operativa, seguir el rastro de un delito o de presuntos delincuentes, sin que estos ni nadie se dé cuenta que están siendo investigados. Este cometido viene amparado y recogido en el Art.166 de la Constitución, cuando dice que la Policía "*Previene, investiga y combate la delincuencia".*

Los incisos 3 y 4, son un complemento de los dos anteriores, recogen tareas nimias que se sobreentiende la policía está acostumbrada a realizar de forma rutinaria, por lo tanto, no merecía tanto despilfarro normativo de este Código en ese sentido.

No obstante, a modo de ilustración, ahí os dejo un par de enlaces sobre derecho comparado al respecto de las pesquisas. Pero sobre todo les dejo el fundamento primero **(*)** de la sentencia-STS 1388/2021 del Tribunal Supremo español; donde de su literalidad puedo destacar su texto:

(*) ***Fundamento destacado (sentencia- STS 1388/2021): PRIMERO.*** *[…]* ***1.11.*** *…*

"En modo alguno el derecho abarca a conocer el contenido de la investigación ***pre procesal****, cuyo resultado final, al tener valor de denuncia o de mero objeto de la prueba*

(art. 297 LECRIM), sólo sirve para el arranque del proceso penal y se materializa como referencia inaugural para el ejercicio del derecho de defensa en la forma procesalmente prevista".

Otros: Jurisprudencia de derecho comparado (España)

1.- Mera sospecha no justifica ingreso a domicilio para pesquisas policiales (España) [STS 3815/2020]. https://lpderecho.pe/mera-sospecha-no-justifica-ingreso-domicilio-pesquisa-policiales-rec-271-2019/

2.- Las partes no pueden conocer sobre las pesquisas —métodos, técnicas y pruebas— salvo que se cuestione la validez de la prueba o procedimiento (España) [STS 1388/2021]. https://lpderecho.pe/partes-conocer-metodos-tecnicas-instrumentos-investigacion-policial-espana-sts-1388-2021/

ARTÍCULO 209 del NCP - Retenciones.

1.- *La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- o por orden de aquél, cuando resulte necesario que se practique una pesquisa, podrá disponer que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra.*

2.- *La retención sólo podrá durar cuatro horas, luego de lo cual se debe recabar, inmediatamente, orden judicial para extender en el tiempo la presencia de los intervenidos.*

En este artículo se repite la misma monserga *"La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- o por orden de aquél…".* Refiriéndose al quehacer de la labor policial, por lo tanto, la respuesta vendría ser la misma que en el artículo anterior. Los fiscales no son policías y mucho menos jefes de la policía. El NCPP ha confundido los roles constitucionales de las distintas autoridades inmersas en todo este contexto como operadores de justicia. La función policial no puede estar supeditada al capricho de un fiscal. ¿Dónde está la autonomía funcional que la Constitución le da a la Policía? (Art. 166).

Además, este Art. 209 NCPP, colisiona directamente con el Art. 2. 24, f **(*)** de la Constitución que confiere a la Policía facultad para detener hasta por 48 horas en caso de flagrante delito, y hasta por 15 días en caso de terrorismo, tráfico de drogas y organización criminal.

(*) ***f.*** *Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.*
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

Ya sé, me van a decir, pero una cosa es RETENCIÓN y otra cosa es DETENCIÓN. Claro, así es. Precisamente por ello es que el Art. 209 es inconstitucional. La figura de la "retención" no figura en la Constitución, por lo tanto, es un invento más del NCPP. La policía a efectos del cumplimiento de sus funciones, como toda policía en el mundo, tiene autonomía para conducir al sospechoso a dependencia policial a efectos de identificación y para verificar si

no está requisitoriado. El negarse a identificarse ante la policía de facto convierte al sujeto en sospechoso. Por lo tanto, la policía tiene la obligación de cerciorarse si el sospechoso no es un criminal buscado por la justicia; esa es la forma de evitar males mayores, sacando de las calles a los criminales. Pero esa conducción preventiva por el tiempo mínimo necesario para la comprobación, no se puede exceder, porque quien lo haga con exceso cometería un delito. La policía debe dejar ir al individuo si no está requisitoriado, y si hubiera cometido un delito y estuviera en busca y captura, la policía le comunicará que queda DETENIDO para ser puesto a disposición de la justicia. Ese es el procedimiento, y como se ve no hace falta LA RETENCIÓN y menos cumpliendo órdenes de un fiscal, cuyas atribuciones constitucionales no contemplan tal despropósito.

Así pues, en tal sentido: La Constitución no contempla otra medida limitativa de la libertad de movimiento de las personas que no sea la detención.

La conducción de un sospechoso a dependencias policiales a efectos de identificación y verificación, es sólo eso, una conducción del individuo, más no una detención. Voy a poner un símil para que se entienda. Sería como si un policía encuentra un herido en la calle y no hay forma que un médico lo asista en el lugar, el policía conducirá al herido hasta el centro de salud más cercano, pero ello no implica de ninguna forma que la policía lleva detenido al herido. Incluso si éste se negara a ser conducido y corriese peligro su vida, el policía tendría que actuar. De ahí que hayan dado un Decreto Legislativo de la duración del tiempo que la policía tiene para identificar y verificar requisitorias, que incluye la conducción a dependencia policial de un individuo hasta por 4 horas a esos efectos.

LAS RETENCIONES, son un invento del Nuevo Código Procesal Penal para burlar el mandato constitucional, y así, poder darle cabida a la intromisión de los fiscales en las atribuciones que la Constitución otorga a la Policía. El NCPP al instituir LAS RETENCIONES como medida coercitiva del derecho penal crea una figura jurídica nueva contraria a lo que manda la Constitución. Una forma encubierta de burlar el mandato constitucional. De esta forma le han quitado autoridad a la policía, arrebatándole la atribución constitucional de detener de forma autónoma del Art. 2. 24, f antes citado; todo, para crear nuevas atribuciones en favor de los fiscales; una inconstitucionalidad, para que estos puedan seguir a pie juntillas los dictados del Sistema Judicial Acusatorio impuesto a través del NCPP de forma inconstitucional.

En materia penal, cualquier recorte de los derechos fundamentales tiene que tener amparo constitucional. Si la norma suprema no lo recoge, al ser LA RETENCIÓN una medida drástica, que afecta la libre circulación y movimiento de las personas reconocida como un derecho fundamental, colisionaría con el marco normativo constitucional de nuestro ordenamiento jurídico.

No obstante, dentro de las atribuciones que el Art. 2. 24, f, le confiere a la Policía; ésta, tiene además todas aquellas que son propias del quehacer policial y necesarias para el cumplimiento de su cometido constitucional (Art 166). Entre ellas, algunas de prevención, como es el identificar y verificar si alguien tiene requisitoria; y otras de acción, como el empleo legítimo de la fuerza, detenciones

y citar a las personas a Dependencia Policial para tomar declaraciones que ayuden al esclarecimiento de los hechos; y, por su puesto, recoger las denuncias que se ponen a disposición de la autoridad competente. Constitucionalmente debería ser al Juez, pero el NCPP transgrediendo el mandato constitucional dispone que se haga al Fiscal.

La permanencia de las personas en comisaría, no se le puede considerar como una retención. Unos lo hacen voluntariamente ante una citación policial, otros obligados ante un mandato judicial. En ambos casos, si no hay resistencia del individuo, podría considerarse una COMPARECENCIA, pero no una RETENCIÓN. Si durante la diligencia la Policía verifica que el sujeto está implicado en un delito o está requisitoriado, se le comunica que queda DETENIDO para ser puesto a disposición judicial. Por lo tanto, constitucionalmente no hay RETENCIÓN que valga tal y como recoge el NCPP.

Conducir a la persona a Dependencia Policial a efectos de esclarecimiento e identificación es algo normal si hay un motivo, el que nada debe nada teme, la persona tiene el deber e incluso la obligación de colaborar con la policía, por lo tanto, no se le debe considerar RETENIDO. Constitucionalmente es parte de las atribuciones de la Policía. En estos casos, antiguamente, se le pedía al individuo que voluntariamente acompañe a la Policía, si no lo hacía y había sospechas fundadas, se pedía autorización judicial; y si de su declaración se deducía que estaba involucrado en un delito se le detenía y se le ponía a disposición judicial. LA RETENCIÓN es un invento inconstitucional del NCPP.

El trabajo de la policía está amparado en el Art 2. 24, f de la Constitución en consonancia con el Art 166; ello implica que está facultada y con las atribuciones necesarias para la identificación, verificación y esclarecimiento en su lucha contra la criminalidad.

Sorprende que en el NCPP se hayan sacado de la manga LA RETENCIÓN de hasta 4 horas. Como ya dije, es un invento para limitar el accionar de la policía y controlarla a voluntad y antojo de los fiscales, ya que este código procesal les atribuye el poder autorizar o no. Todo para burlar las facultades que constitucionalmente debería realizar y le corresponde a la Policía.

ARTÍCULO 210 del NCP. - Registro de personas.

1.- *La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- o por orden de aquél, cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito, procederá a registrarla. Antes de su realización se invitará a la persona a que exhiba y entregue el bien buscado. Si el bien se presenta no se procederá al registro, salvo que se considere útil proceder a fin de completar las investigaciones.*

2.- *El registro se efectuará respetando la dignidad y, dentro de los límites posibles, el pudor de la persona. Corresponderá realizarlo a una persona del mismo sexo del intervenido, salvo que ello importe demora en perjuicio de la investigación.*

3.- *El registro puede comprender no sólo las vestimentas que llevare el intervenido, sino también el equipaje o bultos que portare y el vehículo utilizado.*

4.- *Antes de iniciar el registro se expresará al intervenido las razones de su ejecución, y se le indicará del derecho que tiene de hacerse asistir en ese acto por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad.*

5.- *De todo lo acontecido se levantará un acta, que será firmada por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciera, se expondrá la razón.*

Imaginemos una escena: Policía intercepta en la calle a alguien que corre y detrás a otro gritando, ladrón me ha robado la cartera. Según este artículo, el policía tendría que hacer una llamada: Señor fiscal al parecer he interceptado a un ladrón y se niega a colaborar, me autoriza a que le registre sus pertenencias. El fiscal pueda que le diga mire usted estoy en la playa no moleste, o qué le pasa policía no ve que hora es, o llámeme más tarde que estoy con mi novia y no le puedo atender. Mil situaciones se podrían dar. El policía sin embargo está obligado a intervenir, el deber de socorro es primero, para eso es policía las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Como se puede ver, este artículo aborda un procedimiento policial que por sentido común forma parte y se enmarca dentro de la rutina funcional y operativa de una intervención policial propiamente dicha, como no puede ser de otra manera; donde la policía en el ejercicio de su trabajo haciendo uso de la autoridad que tiene conferida registra a una persona que considera esconde alguna cosa relacionada con un delito.

Me parece, que esperar autorización de un fiscal o estar a expensas de ello, es absurdo, no racional y poco práctico. Y que la policía tenga que solicitar autorización, dar cuenta o recibir órdenes de un fiscal para que pueda hacer su trabajo, es arbitrario y desproporcionado. Primero, porque ya tiene su línea de comando funcional, operativo e institucional, cuya autonomía como autoridad está reconocida en el **Art. 166** de la Constitución; y segundo, porque tendría que estar pidiendo permiso a cada rato a los fiscales para cuestiones funcionales cotidianas ínfimas ya que cada caso es muy particular y cada registro requiere un tratamiento individualizado en el acto y en el momento mismo que la necesidad y que el registro requiere.

Por lo tanto, es contraproducente este tipo de control absurdo a la policía por parte de los fiscales, los que, en vez de dedicarse a su estricta labor como fiscales, tengan que distraerse en cuestiones rutinarias de otros funcionarios profesionales que también tiene el estatus de autoridad del Estado, como son los policías.

Para que este capricho del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) funcione haría falta muchísimos fiscales para cubrir cada intervención y en cada registro, y para que se cumpla realmente este desatino normativo.

La obsesión en el NCPP por amordazar, maniatar y controlar a la Policía es evidente. El registro a las personas es sólo una de sus atribuciones afectadas, como hemos podido ver ya en los art. 205 (control de identidad), art. 206 (controles policiales en delitos graves) y art. 208 (inspecciones).

ARTÍCULOS 211, 212 y 213 del NCPP.

En estos tres artículos; el fiscal no sólo invade las atribuciones, competencias y autoridad de la policía, sino que, suplanta al juez en las autorizaciones que se

deberían recabar en caso que un individuo no quisiera o se opusiera al registro corporal.

Se supone que las personas gozan constitucionalmente de la presunción de inocencia, por lo tanto, sólo en flagrante delito o cuando haya sospechas fundadas de su perpetración la policía debería actuar. Y de acuerdo a la Constitución, sólo un juez puede autorizar a la policía se encargue de hacer cumplir se lleve a cabo un examen corporal. Si es así, por qué no se cumple. No sé de dónde han sacado que es el fiscal el que debe autorizar si la Constitución no lo contempla. ¡Ya lo sé!, del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Por eso, no es descabellado decir: que el NCPP está lleno de contradicciones, incoherencias y de muchas normas que violan la Constitución; por lo tanto, es un Código inconstitucional que debería ser derogado porque contradice lo que realmente manda la Constitución.

Se supone que todo esto ocurre en fase policial, es decir, en fase no jurisdiccional, por lo tanto, la intervención del fiscal no cabe en esta fase tan temprana. Al menos eso se colige del mandato constitucional. Como ya expliqué, una cosa es la fase no jurisdiccional y otra es la fase jurisdiccional. En la primera, la policía debería tener autonomía para intervenir y tomar decisiones sin la intervención de ningún fiscal; en la segunda, la policía está a lo que ordene el juez competente. Los fiscales no deberían interferir la labor de la policía, y no deberían invadir competencias constitucionales de la judicatura por mucho que lo diga el NCPP, de lo contrario se estaría vulnerando la Constitución.

ARTÍCULO 211 (*) del NCP. - **Examen corporal del imputado.**

Este artículo, en su título hace referencia sólo al IMPUTADO. Si nos atenemos a su literalidad, nos estaría ubicando en fase JURISDICCIONAL. Pero entonces, qué pasa con aquellos que son detenidos en los aeropuertos portando droga dentro de su cuerpo y son intervenidos por la policía; es preciso resaltar, que esos sujetos aún no son imputados.

En los países donde los tentáculos del sistema judicial acusatorio aún no ha llegado, y con ello, el virus de la antijusticia no ha pervertido el sentido común, la policía (sin intermediarios) pide autorización al juez para que los agentes trasladen al detenido a un hospital a que sea examinado corporalmente y le hagan expulsar la droga que pudiera tener o haber tragado antes de abordar el avión; donde si corre peligro su vida y no hay otra forma, a través de intervención quirúrgica realizada por personal médico le extraerán la droga. En toda esta diligencia, la policía custodia al detenido y vigila que se cumpla la ley. Por lo tanto, podemos afirmar y se puede ver la incoherencia de estos artículos del NCPP que a la vista de su literalidad es más que evidente.

(*) ***Artículo 211.- Examen corporal del imputado***

1.- *El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar un examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la investigación, siempre que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad mayor de cuatro años. Con esta finalidad, aún sin el consentimiento del imputado, pueden realizarse pruebas de análisis sanguíneos, pruebas genético-moleculares u otras intervenciones corporales, así como exploraciones radiológicas, siempre efectuadas por un médico u otro profesional especializado. La diligencia está condicionada a que no se tema*

fundadamente un daño grave para la salud del imputado, para lo cual si resulta necesario se contará con un previo dictamen pericial.
2.- *Si el examen corporal de una mujer puede ofender el pudor, sin perjuicio que el examen lo realice un médico u otro profesional especializado, a petición suya debe ser admitida otra mujer o un familiar.*
3.- *El Fiscal podrá ordenar la realización de ese examen si el mismo debe realizarse con urgencia o hay peligro por la demora, y no puede esperar la orden judicial. En ese caso, el Fiscal instará inmediatamente la confirmación judicial.*
4.- *La diligencia se asentará en acta. En esta diligencia estará presente el Abogado Defensor del imputado, salvo que no concurra pese a la citación correspondiente o que exista fundado peligro de que la prueba se perjudique si no se realiza inmediatamente, en cuyo caso podrá estar presente una persona de la confianza del intervenido siempre que pueda ser ubicada en ese acto. En el acta se dejará constancia de la causal invocada para prescindir de la intervención del Abogado Defensor y de la intervención de la persona de confianza del intervenido.*
5.- *El Ministerio Público, o la Policía Nacional con conocimiento del Fiscal, sin orden judicial, podrán disponer mínimas intervenciones para observación, como pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello que no provoquen ningún perjuicio para su salud, siempre que el experto que lleve a cabo la intervención no la considere riesgosa. En caso contrario, se pedirá la orden judicial, para lo cual se contará con un previo dictamen pericial que establezca la ausencia de peligro de realizarse la intervención.*

El Inc. 1, dice: *"El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar un examen corporal del imputado…"*

Aunque en este artículo se hace mención al Juez de Investigación Preparatoria, si esto se ajustase a la Constitución, debería decir: que 'un juez de instrucción de turno' debería ser el que autorice. Pero no es así, y ya no es posible, porque el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) violando la Constitución se ha encargado de borrar del mapa a los jueces de Instrucción; tal cual. Literalmente, los acólitos del sistema judicial acusatorio se los cargaron (a los jueces de instrucción) por conveniencias políticas e ideológicas para hacerse con el control de la justicia y el poder; tal y como lo explicaré más adelante.

También recoge: *"A solicitud del Ministerio Público";* es decir, de la fiscalía, puede ser posible esta diligencia… Como se puede ver; si no se trata de UN IMPUTADO, entonces el fiscal vendría a ser un intermediario que la Constitución no contempla en el engranaje policial. Es decir, es inconstitucional que un fiscal se interponga en la labor policial en fase no jurisdiccional.

El Inc. 3, dice: "*El Fiscal podrá ordenar la realización de ese examen si el mismo debe realizarse con urgencia o hay peligro por la demora, y no puede esperar la orden judicial. En ese caso, el Fiscal instará inmediatamente la confirmación judicial.*

Este inciso entra en disonancia con lo que establece el título del Art. 211 NCPP, que dice *examen corporal del IMPUTADO*. En este inciso, sin embargo, se asume que la urgencia y la demora puede suponer un peligro. No se menciona, pero se trataría de un supuesto donde está de por medio una intervención policial; por lo tanto, ante ello, el fiscal suplanta al juez y ordena; si luego la confirmación judicial llega o no, no le preocupa, el NCPP le ampara.

Si es así, es la policía la que debería pedir autorización judicial. Pero se ve que no es así. Esta norma le da poderes al Fiscal para autorizar a la Policía en estos casos sin esperar orden judicial. Lo cual, es una autentica aberración.
Primero; constitucionalmente el fiscal no puede sustituir y mucho menos suplantar a un juez, porque sería ilegal e inconstitucional (hay jurisprudencia de

ello: **sentencia Nº 02570-2018-PA/TC (de fecha 18 de marzo 2021**), la constitución peruana no lo permite. La coletilla de "el Fiscal instará inmediatamente la confirmación judicial", quiebra la independencia judicial, ya que el juez podría decir que no, es decir, no autorizar por razones legales. Si se diera el caso; ante hechos consumados, las consecuencias (por analogía) la podemos ver en la sentencia líneas arriba citada, donde un fiscal es condenado por fungir las veces de juez.

Segundo; el fiscal no puede usurpar las atribuciones de la policía porque viola el Art. 2. 24. f, y el Art. 166 de la Constitución. Es decir, el mandato de: "El Fiscal podrá ordenar…", se supone que dar órdenes a la policía, para que ésta obedezca y ejecute la decisión o capricho del fiscal; lo cual, se sale del marco jurídico constitucional.

El Inc. 5, dice: "*El Ministerio Público, o la Policía Nacional con conocimiento del Fiscal, sin orden judicial, podrán disponer mínimas intervenciones para observación, como pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello que no provoquen ningún perjuicio para su salud, siempre que el experto que lleve a cabo la intervención no la considere riesgosa. En caso contrario, se pedirá la orden judicial, para lo cual se contará con un previo dictamen pericial que establezca la ausencia de peligro de realizarse la intervención.*

El mandato que establece en este inciso es una norma incoherente y carece de toda lógica. Sacarle sangre, piel o cabello a una persona sin su consentimiento es ilegal, porque atenta contra derechos fundamentales de las personas. Salvo que se haga como consecuencia de habérsele encontrado infraganti cometiendo un delito o hubiera sospechas fundadas de ser el autor o estar implicado en un hecho delictivo; pero para ello, se necesita autorización judicial. Los fiscales no son jueces, no pueden arrogarse esa atribución porque constitucionalmente no la tienen, y mucho menos, involucrar a la policía sometiéndola bajo su autoridad a efectos que ésta les esté pidiendo permiso hasta para estornudar; lo cual, sería otra ilegalidad más que contiene el NCPP. En todo caso, la policía debería ser quién pida autorización directamente al juez, eso sí sería constitucional.

Qué es eso de: *"podrá disponer mínimas intervenciones para observación".* Un mandato que no queda nada claro, por no decir que es indescifrable e inaplicable. No se puede ir atacando los derechos fundamentales de las personas, sólo porque a un Fiscal se le ocurre ordenar un examen PARA OBSERVACIÓN, 'saltándose a la torera' la presunción de inocencia, sólo porque el Fiscal quiere curiosear con INTERVENCIONES MINIMAS, con exámenes que en este inciso textualmente se citan (sangre, piel, etc, etc), poco faltó que pusieran, que por orden de un Fiscal se le puede ir sacando a la gente cualquier otro fluido corporal **para observación**; es decir, para saciar la curiosidad del Fiscal.

Como se puede ver esta norma 'es una patata caliente' en manos de los fiscales. Si bien es cierto se está aplicando y nadie reclama; también es cierto, que con la Constitución en la mano y sujetándose a la ley correctamente, más de un Fiscal podría tener problemas si alguien los denunciará por ordenar algo que constitucionalmente no se puede hacer. El resultado ya se conoce y hay jurisprudencia*,* **sentencia Nº 02570-2018-PA/TC** (de 18 de marzo 2021). El delito: **–usurpación de funciones, en agravio del Estado-Poder Judicial**;

también podría ser por prevaricación, abuso de autoridad, delito contra la administración pública y otras valoraciones y tipos penales que podrían caber ahí.

L**os incisos 2 y 4** de este artículo; no merecen mayor comentario por la obviedad de su contenido, que más parece propio de un manual de rutina policial. El afán por controlar a la policía rebaja el nivel del NCPP a algo parecido a un panfleto espeso, bronco, difícil de digerir. Que si no hay que ofender el pudor si la examinada es una mujer, que si tiene que ser admitida otra mujer o un familiar (inc. 2); que si debe estar presente el abogado del **imputado**, que si debe estar presente una persona de confianza del **intervenido** (inc. 4). En qué quedamos es imputado o es intervenido.

ARTÍCULO 212 del NCP. - **Examen corporal de otras personas.**

1.- *Otras personas no inculpadas también pueden ser examinadas sin su consentimiento, sólo en consideración de testigos, siempre que deba ser constatado, para el esclarecimiento de los hechos, si se encuentra en su cuerpo determinada huella o secuela del delito.*
2.- *En otras personas no inculpadas, los exámenes para la constatación de descendencia y la extracción de análisis sanguíneos sin el consentimiento del examinado son admisibles si no cabe temer ningún daño para su salud y la medida es indispensable para la averiguación de la verdad. Los exámenes y la extracción de análisis sanguíneos sólo pueden ser efectuados por un médico.*
3.- *Los exámenes o extracciones de análisis sanguíneos pueden ser rehusados por los mismos motivos que el testimonio. Si se trata de menores de edad o incapaces, decide su representante legal, salvo que esté inhabilitado para hacerlo por ser imputado en el delito, en cuyo caso decide el Juez.*

El Inc. 1, es una total incoherencia que ataca y afecta directamente a derechos fundamentales.

Los exámenes corporales, en caso que se haga a testigos sin su consentimiento es un total despropósito. Una persona que tiene la calidad de testigo no puede ser sometido a un examen corporal porque se estaría atentando contra sus derechos fundamentales. Es una incoherencia del NCPP, por no decir, que es una norma inconstitucional que atenta contra la libertad y derechos del testigo, entre ellas, la presunción de inocencia. Al realizarse contra su voluntad, es decir obligarle, eso significa que alguien tiene que maniatarle. Si no quiere habría que detenerle. Todo ello sin orden judicial; sólo porque el Fiscal lo dice. ¡Qué pasa!, nos están diciendo que alguien puede ir a una comisaría o a una fiscalía como testigo, y si se le ocurre al Fiscal que te metan el dedo (PARA OBSERVACIÓN), y si tu no autorizas, te van a obligar?. A muchos tendrán que maniatarlos; y si es así, que el mismo fiscal lo haga, que no involucre a la policía. De ahí la importancia que la policía trabaje en estos casos bajo mandato judicial y no “bajo curiosidad del fiscal”.

En todo caso, si, como recoge **en el Inc. 1** de este artículo: “Si se encuentra en su cuerpo determinada huella o secuela del delito”; entonces, ya no sería un testigo; si no es la víctima, con las huellas del delito en su cuerpo, esa persona ya sería un sospechoso, o en todo caso, por las evidencias, sería una persona a la que se le debería considerar involucrada en el delito hasta no se demuestre lo contrario; lógicamente respetando siempre la presunción de inocencia que le asiste.

El Inc. 2, ya no habla de **intervenidos** ni de **imputados** sino de personas no **INCULPADAS**, es decir, de personas no incursas, que no se les ha abierto un **proceso penal**, que no se les atribuye la comisión de hechos que constituyan delito. Es decir, EXÁMENES para la CONSTATACIÓN DE DESCENDENCIA; eso dice.

Sin embargo, averiguar si son o no, o quiénes son tus hijos, es materia del DERECHO CIVIL. Si ese es su marco normativo; qué demonios pinta el Código Procesal Penal para meterse en donde no le llaman. Por eso decía, que este NCPP es un batiburrillo que no tiene pies ni cabeza. Creo que lo demás no merece mayor comentario, insiste en violar el CONSENTIMIENTO de las personas, en este caso INOCENTES hasta que no se demuestre lo contrario, con lo cual, se viola también la constitución.

El Inc. 3, nos dice: que tratándose de casos de urgencia y de peligro por la demora, el fiscal puede ordenar se realice un examen corporal. Decir que aquí, el NCPP nuevamente sustituye al juez por el fiscal, es una obviedad.

Ubiquémonos nuevamente en un aeropuerto. Se supone, que es la policía la que hace el control de viajeros, y supongamos que detecta o sospecha que una persona lleva droga en su estómago (así lo indica el escáner); si es tan urgente, lo normal es que la policía pida autorización al juez para que se realice el examen corporal en un hospital. Qué sentido tiene que la policía le pida permiso al fiscal para que éste a su vez le pida autorización al juez. Porque lo de autorizar por parte del fiscal constitucionalmente no se contempla. La Constitución dice otra cosa; no autoriza a los fiscales a suplantar a los jueces, ni tampoco dice que la policía se someta a los fiscales. Todo ello, es un invento del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

ARTÍCULO 213 del NCP. - **Examen corporal para prueba de alcoholemia.**

1.- *La Policía, ya sea en su misión de prevención de delitos o en el curso de una inmediata intervención como consecuencia de la posible comisión de un delito mediante la conducción de vehículos, podrá realizar la comprobación de tasas de alcoholemia en aire aspirado.*
2.- *Si el resultado de la comprobación es positiva o, en todo caso, si se presentan signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancia prohibida, el intervenido será retenido y conducido al centro de control sanitario correspondiente para realizar la prueba de intoxicación en sangre o en otros fluidos según la prescripción del facultativo.*
3.- *La Policía, cuando interviene en operaciones de prevención del delito, según el numeral 1) del presente artículo, elaborará un acta de las diligencias realizadas, abrirá un Libro-Registro en el que se harán constar las comprobaciones de aire aspirado realizadas, y comunicará lo ejecutado al Ministerio Público adjuntando un informe razonado de su intervención.*
4.- *Cuando se trata de una intervención como consecuencia de la posible comisión de un delito y deba procederse con arreglo al numeral 2) del presente artículo, rige lo dispuesto en el numeral 4) del art 210.*

Este artículo aborda la prueba de alcoholemia en sus diversas modalidades y supuestos; pero, como en todas las disposiciones anteriores, el Nuevo Código

Procesal Penal (NCPP) se distrae “reglamentando nimiedades” de rutina policial, como: que la Policía debe elaborar un acta de las diligencias realizadas, abrirá un Libro-Registro en el que hará constar las comprobaciones de aire aspirado realizadas, y que debe comunicar lo ejecutado al Ministerio Público adjuntando un informe razonado de su intervención.

Dar cuenta al Ministerio Público de todas las comprobaciones de aire aspirado realizadas, parece ocioso y exagerado, demandaría de mucho tiempo perdido y dispendio innecesario de personal, porque la mayoría de pruebas seguramente serán negativas; y en el supuesto, que dieran positivo, si la tasa de alcohol no excede lo permitido estaríamos en un plano totalmente distinto, inocuo, donde no habría sanción; y si excede mínimamente, como mucho podría acarrear una multa administrativa.

Y si el conductor excede los parámetros legales que marca el Código Penal, entonces ya estaríamos hablando de un delito bajo la influencia del alcohol o de alguna sustancia prohibida (drogas, etc); es ese caso, la policía tendría que actuar y realizar sus diligencias con autonomía para poner a disposición los actuados a la autoridad competente, que repito constitucionalmente no sería el fiscal, sino, el juzgado de turno, algo que el NCPP se ha cargado sin que nadie sea capaz de advertirlo.

Y lo de adjuntar un INFORME RAZONADO de la intervención, poco más y parece que los fiscales reclaman el PARTE POLICIAL rompiendo la cadena de mando. Todo ello, me parece un exceso más de este NCPP, que bien podría ser letra muerta, porque en la práctica, se necesitaría muchos policías para estar RAZONANDO los informes del porqué los centenares de individuos dieron negativo o positivo en la prueba de alcoholemia.

Todo ello, para saciar la curiosidad o quizá el ego de los fiscales, que igual cada informe sobre las pruebas realizadas diariamente lo utilicen o necesiten para hacer una TESINA. Pruebas de alcoholemia, que en suma ‘no tienen otro aquél’ que determinar si la persona ha superado o no el índice o baremo permitido de la tasa de alcohol.

El inc. 4 de este artículo, nos remite al inc. 4 del Art. 210 de este mismo Código; que, en suma, no hace otra cosa que, alertarnos que no se debe atentar contra el pudor del imputado o de las personas examinadas. Palabras vacías, porque se preocupan del pudor, pero autoriza a violar el consentimiento sin orden judicial si se niegan.

Con lo sencillo que es anteponer la coherencia y el sentido común. Si una persona no desea ser examinada y se niega a dar su autorización, se levanta acta de su negativa o rebeldía, por lo tanto, debería ser un juez quien autorice con arreglo a ley se realice un examen así. Porque la policía no puede ir aporreando ni maniatando a la gente para forzar la voluntad de cada individuo sólo porque lo pide un fiscal.

ARTÍCULOS, 214 y siguientes, **215, 216 y 217**

(ya en **ámbito jurisdiccional**, sobre **allanamientos** e **incautaciones)**

En estos artículos el NCPP hace lo mismo que en los anteriores ya vistos; se entromete a regular procedimientos policiales rutinarios y de uso funcional, como es, la forma de realizar sus intervenciones y los protocolos de operativos propios de la labor policial; instrucciones que deberían estar reguladas en las leyes de la Policía y no en el Código Procesal Penal en cuestión, ya que su finalidad y alcance de éste es otro. Con ello, pervierte su normativa al dedicarla a asuntos que no son de su área regulatoria ni competencial.

'No vale ni cabe todo en el NCPP'; no puede regular todo lo que se les antoja a sus mentores. Si fuera así; por qué entonces, el NCPP no regula al detalle, cómo los Congresistas deben interpelar (interrogar) y hasta cómo deben estornudar los parlamentarios cuando estos desarrollan tareas de investigación, o quizá, cómo las comisiones de investigación del Congreso deben citar e interrogar a sus interpelados; o cómo debe hacer su trabajo la Superintendencia de Banca o la Contraloría General de la República. ¿Verdad que no lo hace?. No lo hace, porque estas áreas tienen sus propios procedimientos y legislación para que puedan con autonomía desempeñar eficazmente su función fiscalizadora y de control; investigaciones ajenas al proceso penal. Es decir, son instituciones del Estado con su propio funcionamiento para investigar. Lógicamente, si en ello, encontraran hechos o conductas de carácter delictivo lo pondrán a disposición de la justicia. Pues, lo mismo ocurre con la Policía. La policía necesita cierta autonomía; ni más ni menos, la que le otorga la Constitución. Porque hay que diferenciar, que una cosa es la labor policial y otra la labor jurisdiccional. Y por supuesto, una cosa es la Policía, otra la Fiscalía y otra la judicatura (los jueces).

ARTÍCULO 214 del NCPP. - **Solicitud y ámbito del allanamiento**

1.- *Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el Fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto.*
2.- *La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar, y el tiempo aproximado que durará.*
3.- *Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial constarán detalladamente en el acta.*

En este artículo ocurre lo mismo que los anteriores, el fiscal se" inviste de jefe de la policía", y por mandato de este NCPP **(inc. 1),** es quién encabeza 'la comitiva u operativo policial. Al decir: *"el Fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa…"*, se olvida de poner **a quién le solicitará**; se supone que al juez; pero no lo dice. En el **Inc. 2**, tampoco lo pone; sólo dice que la solicitud consignará el lugar a registrar, la finalidad del allanamiento, las

diligencias y el tiempo de duración; lo cual no aclara nada. Sin embargo, al leer el **Inc. 3**, pone que en el acta constarán los motivos que determinaron el ALLANAMIENTO SIN ORDEN JUDICIAL. Con estas contradicciones, quién se aclara. Nos están diciendo que un Fiscal, ¿a río revuelto tiene licencia para todo?. Porque con una norma confusa como ésta cabe todo; un fiscal podría a su antojo allanar cualquier lugar y salir indemne ante sus excesos; como diría un criollo, el fiscal sin autorización de nadie, o sin autorización de un juez, podría cometer abusos e 'irse de rositas', todo por culpa de estos exabruptos normativos del NCPP.

Decía que, como en los artículos anteriores, aquí también; en el supuesto, que nos sitúe en fase policial, debería ser la policía la que pida autorización al juez para allanar un domicilio, un local o cualquier otro inmueble. Pero lamentablemente no está siendo así, porque así lo recoge el NCPP en su articulado que está lleno de mandatos inconstitucionales. Si fuera en fase jurisdiccional, lógicamente el fiscal para impulsar (conducir) la investigación del delito debería ser quien pida esa autorización judicial de allanamiento.

ARTÍCULO 215 del NCPP. - ***Contenido de la resolución***

1.- *La resolución autoritativa contendrá: el nombre del Fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan, la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia, y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato.*
2.- *La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado o para un período determinado, en cuyo caso constarán esos datos.*

Este artículo curiosamente hace referencia a LA RESOLUCIÓN AUTORITATIVA sin mencionar autorización de quién, o, mejor dicho, no precisa quién es el que debe autorizar. Se podría decir, se sobreentiende que se refiere a que es un juez el que debe autorizar, pero no lo dice.

Con lo cual, podría ser que nos dicen que esa decisión queda a criterio del fiscal, o quizá refiere que el fiscal pide autorización a su superior jerárquico, es decir, puede ser cualquier cosa, incluso que todo quede en casa y a criterio de la familia corporativa. Al NCPP le cuesta mencionar al juez. O quizá se está refiriendo a fase no jurisdiccional.

Estaríamos en el supuesto, que los fiscales entre ellos hacen la repartija del poder en los quehaceres previos de hacer justicia; porque esa es la parcela en la que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) ha encumbrado a los fiscales como los nuevos adalides de la justicia. La excusa perfecta la tienen en el '**principio de oportunidad**' para hacer y deshacer a su antojo en todo esto y mucho más.

No merece mayor comentario lo que sigue y contiene este artículo porque son minucias de manual escolar de una supuesta resolución que no dice quién la firma y ordena o quién la debe emitir; por lo tanto, sería letra muerta si nos

ceñimos a la literalidad de esta norma por falta de precisión textual para hacerla vinculante.

ARTÍCULO 216 del NCPP. - **Desarrollo de la diligencia**

1.- *Al iniciarse la diligencia se entregará una copia de la autorización al imputado siempre que se encuentre presente o a quien tenga la disponibilidad actual del lugar, comunicándole la facultad que tiene de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza.*
2.- *Si no se encuentran las personas arriba indicadas, la copia se entregará y el aviso se dirigirá a un vecino, a una persona que conviva con él, y a falta de ellos, sólo de ser posible, al portero o a quien haga sus veces.*
3.-*La diligencia se circunscribirá a lo autorizado, redactándose acta. Durante su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado.*

Siguiendo la secuencia normativa, este artículo nos remite e indica que se trata de una diligencia de allanamiento, pero tal cual está redactado, al hacer referencia que es contra un IMPUTADO, para no causar indefensión, lo más lógico, siguiendo las reglas del sistema acusatorio, es que previamente se le notifique a la parte IMPUTADA; pero como se ve, no lo hacen, lo cual nos indica que cuando quieren se lo saltan.

Dónde queda la igualdad o paridad de armas que promueve este tipo de proceso penal. Es todo tan descabellado, que incluso meten en el mismo saco a personas ajenas, A UN VECINO, al portero, etc.; en otras palabras, a quién en esos momentos pase por ahí. Lo cual, además de atentar contra derechos fundamentales, causa indefensión. 'Se pasan por el arco del triunfo' la notificación previa y el que haya abogado de la defensa; dando por hecho, que sí o sí hay allanamiento con desarraje incluido se lleva a cabo por decisión fiscal.

Pero como este Código procesal está lleno de impresiones e inexactitudes, de normas confusas, poco claras, cuasi tramposas, que inducen a sus operadores (los fiscales) a jugar al acomodo para ejercer poder ilimitado en nombre de la ley y la justicia, que linda la arbitrariedad; vamos a retroceder, y nos ubicaremos en fase no jurisdiccional; es decir, **cuando el intervenido aún no es imputado**, en fase policial.

Si la policía a través de sus pesquisas cotidianas o como resultado del trabajo de inteligencia operativa realizado por sus agentes, descubre o detecta la inminente perpetración de un hecho delictivo, llámese tráfico de drogas, atentado terrorista, asalto a un banco o cualquier delito grave. Es evidente que aún no hay imputados, lo normal sería que la policía actuara y fuera un juez el que le autorizara realizar el allanamiento. Supuesto que con este Código la policía tropieza con un muro, negación y desamparo normativo. Hacer cualquier otra cosa es inconstitucional. Es por eso, que este Código es impreciso, para violar la norma constitucional de forma tramposa.

Este artículo también, hace hincapié el preservar la reputación y el pudor de las personas sujetas al allanamiento. Si se cumpliera con la igualdad de armas entre

las partes para el debido proceso que propugna el NCPP, sería innecesario se preocupen por el pudor. Lo que pasa, es que tal cual está el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) como instrumento del sistema acusatorio, deja la puerta abierta para la arbitrariedad. De ello se aprovechan los fiscales para hacer allanamientos a altas horas de la noche o de madrugada cuando los intervenidos duermen, no les importa si las personas están en calzoncillos. De qué pudor hablamos. Muchas veces hacen intervenciones con escenas humillantes; de qué reputación hablamos.

Todo ello, sin saber quién autoriza, es decir, sin orden judicial. Está claro que el Nuevo Código Procesal Penal en este artículo no lo indica ni mucho menos lo aclara. Al no precisarlo, cabe todo, incluso la autorización de un alcalde; porqué no. A río revuelto ganancia de pescadores. Es irónico, pero es así. A falta de precisión en la ley, lo que diga un necio cabe.

ARTÍCULO 217 del NCPP. - **Solicitud del Fiscal para incautación y registro de personas**

1.- *Cuando sea el caso, el Fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso. En este caso se hará un inventario en varios ejemplares, uno de los cuales se dejará al responsable del recinto allanado.*
2.- *El allanamiento, si el Fiscal lo decide, podrá comprender el registro personal de las personas presentes o que lleguen, cuando considere que las mismas pueden ocultar bienes delictivos o que se relacionen con el mismo. El Fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. El trasgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar.*

Para el caso de las incautaciones, ocurre lo mismo, el NCPP incurre en los mismos vicios, desatinos, imprecisiones y vacíos normativos, lo cual genera indefensión en las personas intervenidas y origina un caos procedimental con prejuicio y daños que igual son difíciles de reparar ante un error o un exceso por parte del operador principal y responsable de estas diligencias, el Fiscal.

Este artículo consigna "solicitud del Fiscal para incautación y registro de personas". Incluso contempla la detención de las personas según **el Inc. 1**. Pero a quién debe pedir autorización. "EL FISCAL SOLICITARÁ que el ALLANAMIENTO comprenda LA DETENCIÓN DE PERSONAS…". Eso dice esta norma. Pero, ¿a quién debe pedir AUTORIZACIÓN?. Quiere que adivinemos o quizá que imaginemos. Entre adivinanzas y desatinos, estamos como en los artículos ya analizados líneas arriba. Es decir, imprecisiones y vacío normativo.

¿Qué pasa, a los mentores del NCPP les costaba tanto poner que el Fiscal debía pedir **autorización judicial**?. Porque si no; está claro, que **'lo que la ley no lo dice no existe'**; se podría interpretar que cualquiera podría ser el que autorice, incluso otro fiscal. Así, si hay un fallo o un abuso; para revestirse de impunidad,

se podrían agarrar a la conocida frase que ya es una máxima popular, que 'otorongo no come otorongo'.

Igualmente; no es entendible qué en todo este tinglado lleno de incongruencias, además, los fiscales utilicen a la policía para RETENER en forma coactiva a las personas encontradas en el lugar del allanamiento **(inc. 2)**, algunas incluso pueda que estén ahí circunstancialmente; todo ello, se supone que con autorización de no se sabe quién; es decir, sin mandato judicial.

DETENCIÓN POLICIAL

Este apartado, **detención policial** en flagrancia del **Art. 259** del NCPP, a los promotores del sistema judicial acusatorio les resultó harto complicado evitar el choque frontal con el **Art. 2. 24, f** de la Constitución; tarea difícil al retorcer la norma, de manera tal que no se notara la intención de burlar el mandato constitucional. Contradecir o desvirtuar el Art. 2. 24, f, hasta lograr que nadie advirtiera que en el Nuevo Código Procesal Penal hay una clara intención de incumplir lo que consagra nuestra carta magna respecto a la actuación de la Policía Nacional en etapa policial (no jurisdiccional).

Para ello que mejor, que una redacción escueta y encorsetada como este Art. 259, que no recoge la relación funcional de la policía con el juez, vínculo consagrado constitucionalmente en el citado Art. 2. 24, f. y que el NCPP ni lo reseña ni lo desarrolla. ¡Curioso, verdad!. Hacerlo, hubiese sido reconocer la existencia real de la policía judicial cuya relación y vínculo con el juez consagra la Constitución en dicho artículo. Vínculo incompatible con el sistema judicial acusatorio, por eso el NCPP se cargó a la policía judicial y al juez de instrucción, metiendo a los fiscales de por medio e interrumpiendo la relación funcional juez – policía. No cabe duda, que todo ello lo hicieron para que instaurar un nuevo modelo de justicia, al que yo llamo la antijusticia; donde los fiscales adquieren un poder y protagonismo desmesurado "en nombre de la justicia".

Los mentores del NCPP no tuvieron reparos en redactar un texto que **omite un importante y gran detalle**, que la policía constitucionalmente debería poner los detenidos a disposición del juez y no de un fiscal, tal y como dispone el Art. 2. 24, f de la Constitución. Pues esa pequeña GRAN OMISIÓN contradice el mandato y la literalidad del texto constitucional. Lo cual, altera y dificulta el trabajo que le toca desempeñar a la policía en cumplimiento a su finalidad fundamental consagrada en el Art. 166 de la Constitución.

Eso sí, el NCPP a la fiscalía le otorga atribuciones que constitucionalmente no ostenta, pero que este Código se las da. Pero la gente ya se está dando cuenta que con este Código no encuentran justicia, tampoco favorece la labor de la policía, más bien le resta autoridad, funcionalidad y le quita autonomía; la somete a control fiscal no previsto en la Constitución.

ARTÍCULO 259 del NCPP**.** Este artículo que aborda el tema de la **DETENCIÓN POLICIAL,** fue modificado por el Art. 1 de la **Ley Nº 29569 (*)**, del 20 de agosto de 2010, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de agosto de ese mismo

año; modificando una vez más el Decreto Legislativo Nº 957; es decir, un nuevo parche al susodicho Nuevo Código Procesal Penal.

El Art. 259 (vigente), entre otras cosas; establece que la Policía puede detener sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Además, el agente puede ser detenido sin mandato judicial si ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible, etc., etc.

(*) *LEY Nº 29569 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 259º DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.*
Artículo 1º.- Modificación del artículo 259º del Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo núm. 957
Modifícase el artículo 259º del Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo núm. 957, en los términos siguientes:
"Artículo 259º.- Detención Policial
La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:
…
En Lima, a los veinte días de mes de agosto de dos mil diez.

ARTÍCULO 259 (vigente) del NCPP. - **Detención Policial.**

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:
***1.-** El agente es descubierto en la realización del hecho punible.*
***2.-** El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.*
***3.-** El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.*
***4.-** El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.*

A la vista, pareciera que el Art. 259 de este Código es generoso con la Policía, pero no lo es; es cicatero, rácano y hasta mezquino, ya que en fragrante delito cualquier persona está habilitada para impedir la perpetración de un hecho delictivo y mucho más si el delito es grave; y ello, a falta de policía, incluiría la detención o capturar del infractor para ponerlo a disposición de la justicia. Por lo tanto, con mucha más razón la Policía estaría habilitada para ello; como no estarlo si representa a la ley. Y, el remarcar que la Policía en estos casos puede detener sin mandato judicial, es una floritura del NCPP que se sobreentiende, porque eso manda la Constitución y porque si un policía está en el lugar y momento que se está cometiendo un delito no puede mirar para otro lado, tendría que intervenir, tiene la obligación de hacerlo. En ese caso (flagrancia) y circunstancias, por sentido común y por norma constitucional, el policía no puede esperar mandato judicial para intervenir, porque estaría incurriendo en uno o más delitos, que en los códigos penales del mundo civilizado están tipificados como un delito contra el 'deber de socorro', y, además, al ser la policía, otro delito de 'dejación de funciones'.

En el Perú estos tipos penales según el caso, podrían tener encaje penal en los artículos 126 y 127 del CP (omisión de socorro y omisión de auxilio respectivamente) y, por otro lado, al ser policía y no intervenir ante la perpetración flagrante de un delito podría tener encaje penal en los artículos 377 y 378 del CP (omisión o rehusamiento de actos funcionales).

Volviendo al Art. 259 del NCPP: Decía que esta norma es mezquina, porque es una norma incompleta respecto al mandato del Art. 2. 24, f de la Constitución, que es de donde se supone debería derivarse y tomar su esencia normativa. En otras palabras, el Art. 259 cercena parte del mandato constitucional, como es, el tiempo que puede detener la policía; y, por otro lado, han retorcido su literalidad para darle un significado que la Constitución no recoge, no dice ni prevé, como es, que la policía tenga que poner a los detenidos a disposición del fiscal.

Esta norma omite también señalar, que la Policía constitucionalmente puede detener en flagrancia hasta por 48 horas en todos los delitos, haciendo una salvedad que, en los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y en delitos cometidos por organización criminal, la policía puede detener hasta por 15 días, tal y como manda el 2do. párrafo del inc. f del Art. 2. 24 de la Constitución.

Como se puede apreciar; sólo en estos últimos casos, se advierte la salvedad de informar (dar cuenta) al Fiscal; pero a quién realmente tiene que poner a disposición las diligencias policiales (atestado) con los detenidos es **al juez** (mandato constitucional que no se cumple), ya que es **quien asume jurisdicción**. Eso dice la Constitución. En ningún momento la literalidad de la norma constitucional dice que sea el Fiscal a quien se le ponga a disposición. Ese dar cuenta al fiscal es sólo en los casos descritos, que son muy específicos. En cualquier otro delito, la Policía constitucionalmente tiene autonomía funcional, por lo tanto, no debería haber ningún fiscal de por medio entorpeciendo la labor policial. Ese es el mandato constitucional, cualquier otra interpretación es contraria a este.

El inc. f **(*)** del Art. 2. 24 de la Constitución, tiene dos partes; es decir, fracciona en dos el mandato constitucional; o si se quiere, contiene dos mandatos independientes el uno del otro. Para ello, y para que no quepa ninguna duda, lo hace a través de UN PUNTO APARTE para diferenciar los dos momentos y situaciones planteadas. Dos párrafos muy diferenciados.

En **el primer párrafo**, se refiere y está relacionado a cualquier delito menos los delitos citados en el siguiente párrafo que tienen plazos diferentes de duración para la detención. En **el segundo párrafo**, por separado, recoge después de "un punto y aparte" una norma totalmente distinta a la primera, tanto en tiempos como en la forma.

Todos sabemos (y los legisladores más) que un punto aparte, separa ideas significativamente diferentes. Es decir; qué en este caso, el punto aparte que separa los dos párrafos, desvincula por completo el sentido y contenido de la literalidad de lo expuesto antes y después del punto, aunque se siga hablando del mismo tema. Por eso, es muy importante saber leer bien el texto del inciso

(f) para poder entender su contenido y acatar la norma constitucional tal cual es y no burlar su espíritu normativo. Más si se hace de forma consciente y deliberada.

(*) ***f.*** *Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.*
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

En otras palabras, el Art. 259 del Nuevo Código Procesal Penal, que aborda todo lo referente a la **DETENCIÓN POLICIAL**, recoge lo obvio, pero a la par, lleva consigo una finalidad y una intensión encubierta; como se puede ver. Me refiero a la OMISIÓN del meollo normativo que ataña y afecta a la Policía; por eso, tanta obviedad y floritura, para que nadie se diera cuenta del propósito de burlar la Constitución. Estamos hablando concretamente que el Art. 259 del NCPP burla por omisión y por contradicción lo que recoge el Art. 2. 24, f de la Constitución.

Este artículo 259, dice que la policía detiene en flagrancia, pero luego OMITE poner lo que la Constitución recoge como mandato, que la policía debe poner al detenido a disposición del Juez. ¡Raro verdad!. ¿Por qué no lo pone?. La respuesta es obvia, para que los fiscales puedan entrar en escena y asumir su rol protagónico previsto por el sistema judicial acusatorio, que los encumbra como los adalides y abanderados ponderados del susodicho sistema.

La pregunta sería: Dónde está la trampa, dónde está el engaño, la mentira, la trasgresión constitucional. Pues, además de lo ya expuesto hasta ahora, la respuesta la volveremos a encontrar en los artículos 261 y 263.

Por lo demás, este artículo a efectos de **la detención policial** hace una descripción detallada de **cuándo se da la flagrancia**, marcando los parámetros y fijando los límites de actuación de la policía en caso de que interviniera, encorsetándola bajo los supuestos descritos que se recogen en los cuatro (4) numerales de esta norma.

A modo de ilustración; para que vean de 'cómo está el patio' en este tema y cómo los diversos sesgos ideológicos influyen en la justicia, ahí os dejo algunas concordancias y jurisprudencia relacionada con la flagrancia y la detención policial.

Información tomada de 'LP Pasión por el DERECHO', a través de su Observatorio de Jurisprudencia, que se ha propuesto sistematizar la jurisprudencia más relevante y actual sobre cada artículo del Nuevo Código Procesal Penal del Perú. Cosa que felicitamos.

Concordancias

C: art. 2.24.f, g; NCPP: arts. 296 y ss., 331.
Jurisprudencia del artículo 259 del Código Procesal Penal
Corte Suprema
1.- Alcances del delito de flagrancia: Clases y notas adjetivas (doctrina legal) [APE 2-2016/CJ-116]. Link: bit.ly/3A4WmO9
2.- Se configura cuasiflagrancia cuando se persigue al asaltante sin perderlo de vista [Casación 1376-2018, Madre de Dios]. Link: bit.ly/3nm1ciw
3.- Sindicación de testigo de referencia no es suficiente para sustentar flagrancia delictiva [Casación 842-2016, Sullana]. Link: bit.ly/3bC8Ani
4.- Alcances sobre la flagrancia y flagrancia presunta [Casación 692-2016, Lima Norte]. Link: bit.ly/3Ic0pKF
5.- Cuasiflagrancia: No es exigible presencia fiscal en la detención policial [RN 373-2019, Lima Sur]. Link: bit.ly/3Aa3lFs
6.- Alegar «actitud sospechosa» del intervenido no acredita flagrancia delictiva [RN 656-2019, Lima Norte]. Link: bit.ly/3nhuRt7
7.- La flagrancia delictiva posibilita la detención sin una orden judicial y la adopción de una acusación constitucional bajo un proceso sumario (caso Pedro Castillo y Aníbal Torres) [Apelación 256-2022, Suprema]. Link: bit.ly/3OmYV5g
8.- Detención del presidente tras pronunciamiento de «autogolpe» fue en flagrancia delictiva (caso Pedro Castillo) [Apelación 248-2022, Suprema]. Link: bit.ly/41UfQiA
9.- Solo la Policía —y no el fiscal— puede detener, en casos de flagrancia, a una persona sin autorización judicial [Apelación 26-2015, Madre de Dios]. Link: bit.ly/3oa6uhq
Tribunal Constitucional
1.- Dos presupuestos para la configuración de flagrancia delictiva [Exp. 00359-2018-PHC/TC]. Link: bit.ly/3rnOaGi
2.- No existe flagrancia en detención del taxista que traslada a un pasajero que lleva droga [Exp. 03830-2017-PHC/TC]. Link: bit.ly/3QO1ITM
3.- No es un supuesto de flagrancia que investigado sea detenido en una diligencia de investigación [Exp. 04487-2014-PHC/TC]. Link: bit.ly/3xVCRVz
4.- Dos criterios para determinar flagrancia: Inmediatez temporal y personal [Exp. 01757-2011-PHC/TC]. Link: bit.ly/3ynIX2c
5.- Ilegalidad de la detención policial realizada solo por información de inteligencia policial [Exp. 3553-2003-HC/TC]. Link: bit.ly/3u5JWSf
6.- Transitar cerca al lugar donde acontece un delito no constituye flagrancia [Exp. 1324-2000-HC/TC]. Link: bit.ly/3bxUDGQ
7.- No procede detención por cuasiflagrancia, ya que no está contemplado constitucionalmente [Exp. 1318-2000-HC/TC]. Link: bit.ly/3NpPXjz
Corte Interamericana de Derechos Humanos
1.- Es ilegal la detención por orden de naturaleza policial —sin mediar flagrancia— y no por la autoridad competente [Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela]. Link: bit.ly/3NE8uIO
2.- La revisión judicial como medio de control idóneo para evitar detenciones arbitrarias e ilegales [Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú]. Link: bit.ly/3Sl4G2O
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
1.- Detención necesita de «sospechas o indicios racionales» —criterios objetivos— capaz de convencer a un observador imparcial que el detenido cometió el delito [Fox, Campbell y Hartley vs. Reino Unido]. Link: bit.ly/3ccYzgp

ARTÍCULO 261 del NCPP, **Detención Preliminar Judicial.**

1. *El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar cuando:*
a) *No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.*
b) *El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.*

c) *El detenido se fugare de un centro de detención preliminar.*

2. *En los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento.*

3. *La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la Policía a la brevedad posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias puede ordenarse el cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, telefónicamente u otro medio de comunicación válido que garantice la veracidad del mandato judicial. En todos estos casos la comunicación debe contener los datos de identidad personal del requerido conforme a lo indicado en el numeral dos.*

4. *Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tienen una vigencia de seis meses. Vencido este plazo, caducan automáticamente bajo responsabilidad, salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas no caducan hasta la efectiva detención de los requisitoriados.*

Este artículo 'también trae parches'. El numeral 4 fue modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo **N° 1575**, publicado el 11 de octubre de 2023. Pero, anteriormente, este artículo ya fue modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo **N° 1298**, publicado el 30 de diciembre de 2016. Lo que evidencia la improvisación y falta de coherencia de los que hicieron el Nuevo Código Procesal Penal.

El título del **Art. 261** está remarcado como 'Detención Preliminar Judicial'. Por lo tanto, lo lógico sería, que al intervenir un juez su contenido debería estar enmarcado y abocado a la fase jurisdiccional. Es decir; como su mismo nombre lo indica 'DETENCIÓN … JUDICIAL', esta norma evoca y recoge de soslayo lo jurisdiccional, ya que está referida a las detenciones por mandato judicial.

Lo que ocurre es que la denominación 'DETENCIÓN PRELIMINAR' es un término inventado por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) siguiendo los lineamientos, preceptos y dictados del 'sistema judicial acusatorio' para poder burlar los mandatos constitucionales que se oponen a la nueva corriente progre de idea de justicia. Lo normal es, que mientras no se modifique la Constitución, el juez después de escuchar al detenido por la policía, debería decretar prisión provisional o ponerlo en libertad, según la valoración que haga, si lo considera o no presunto autor de un delito grave y si hay riesgo de que el detenido pueda sustraerse a la acción de la justicia.

Por lo demás, el NCPP utiliza el término 'Detención Preliminar Judicial' para invadir el terreno policial y para facilitar que los fiscales ignorando la función tradicional del extinto juez de instrucción puedan invadir las atribuciones propias de un policía, que a la vista de lo normado por el NCPP la Policía pierde autoridad y autonomía. Como así lo explicaré y quedará demostrado a continuación.

El Inc. 1 (o numeral 1) del Art. 261 dice:

"*El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar cuando: …"*

Lo curioso es que en este Inc. 1 el juez hace de espantapájaros porque ya de entrada el mandato del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se encarga de arrebatarle la poca autoridad que le quedaba en este punto, al disponer que SIN TRÁMITE ALGUNO, es decir, sin que el juez tenga opinión ni oposición obliga a éste se someta al requerimiento del Fiscal; requerimiento que muchas de las veces responde a intereses sesgados de política criminal, e incluso, a intereses políticos puro y duros; y cuando no, estos responden a caprichos interesados de terceros vinculados al poder o incluso del fiscal. Al juez no le queda más que cumplir 'a pie juntillas' y ordenar lo que el fiscal le pide, porque así lo exige y ordena la literalidad del texto de este mandato del NCPP curiosamente detallado en tres supuestos enmarcados en los literales a), b) y c).

Literal a):

a) *No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.*

En este literal (o apartado), el NCPP se salta todos los filtros de garantía personal y entra en conflicto con los derechos fundamentales. Nos dice sin decirlo abiertamente que se pueden saltar la presunción de inocencia, TAN SÓLO POR UNA SOSPECHA, sospechosamente revestida de "razones plausibles" a criterio del fiscal. Con lo cual, si una persona es tan sólo un sospechoso, si el fiscal quiere, camaleónicamente cambia su papel e invade terreno de la Policía para apropiarse de la pesquisa policial. Todo ello, porque esta norma nos habla que en un supuesto de NO FLAGRANCIA delictiva, una persona puede ser privada de su libertad sólo porque el fiscal SIN CONSENTIMIENTO REAL del juez (ya que éste está obligado a autorizar) considera que alguien ha cometido un delito grave previsto con una pena superior a cuatro años de cárcel.

Lo paradójico de este despropósito, es que el fiscal arrastra a la policía para que le haga el trabajo sucio (ejecute la detención), ya que la policía amputada su autoridad por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) no tiene capacidad de decidir, es decir, 'ni pincha ni corta', sólo obedece al fiscal. Decía que era paradójico, porque el Fiscal sin la policía no podría detener. Se imaginan a un fiscal engrilletando a un detenido; aunque visto lo visto, cualquier día de estos veremos a los fiscales fusil al ristre o pistola en mano persiguiendo a delincuentes, prescindiendo de la policía cuyos agentes son el brazo armado de la ley personificada.

En el último párrafo de este literal ocurre lo mismo. Por muchas 'circunstancias del caso' que haya, si el individuo intervenido sólo es un sospechoso debe prevalecer la presunción de inocencia. Ni la sospecha de posibilidad de fuga, ni la sospecha de obstaculización de averiguación de la "LA VERDAD" son válidas si no se tiene pruebas contundentes para privar de libertad a una persona. LA LIBERTAD es un derecho fundamental de las personas, lo son también, el libre tránsito y la libertad de movimiento de los individuos si judicialmente no está impedido o si no es un caso de flagrancia delictiva. Por eso, si no se tiene nada

más que una sospecha sobre una persona, aunque se le pueda investigar, no se le puede detener; salvo que hayan sobrados indicios racionales de criminalidad para ello. Esto induce a que los fiscales abusen de este mandato y se den excesos al respecto.

Por eso, es muy importante que la policía tenga autonomía y autoridad, la suficiente para poder realizar sus pesquisas con garantía y libertad de acción a fin de poder reunir los elementos de prueba suficientes, verificados y contrastados, de forma inequívoca para que la autoridad competente pueda tomar una medida de ese calibre; y siempre, bajo los parámetros que marca la Constitución (en caso de flagrancia y no flagrancia); no digo, 'y dé la ley', porque el Nuevo Código Procesal Penal está viciado y lleno de inconstitucionalidad.

Literal b). -

b) *El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.*

Este literal (o apartado) nos ubica directamente en **etapa policial**. Si es así, lo del fiscal sobra, me refiero al mandato del Inc. 1. *"…A REQUERIMIENTO del fiscal…"*. Porque si no, habría que preguntarse: Qué hace un fiscal en una circunstancia de flagrante delito. Qué pasa. Estaba por su cuenta patrullando la ciudad o quizá estaba esperando frente de la dependencia policial. FLAGRANTE DELITO, eso dice el enunciado; y eso significa, sorprender a alguien en el lugar y momento en que ha perpetrado un delito. No creo que en ese instante o preciso momento haya tiempo para perder en algo que no sea la detención del infractor; menos para avisar a un fiscal y éste a su vez solicite al juez, y éste a su requerimiento de la orden de detención. No les parece que sería dar muchas vueltas. Este Código además de enrevesado es tramposo.

El NCPP, al titular este artículo como **detención preliminar**, 'de un plumazo' con este invento mata dos pájaros con una bala. Por un lado, se carga instituciones procedimentales de lucha contra la criminalidad, y, por otro lado, pervierte el sistema procesal judicial. Es decir; la detención preliminar la inventan para sustituir (usurpar) la detención policial que la Constitución consagra, y también; para que el juez haga de 'convidado de piedra'. Es decir: Por un lado; la policía se olvida de la detención policial que recoge el Art. 2. 24, f de la Constitución. Y por otro lado; el juez complace al fiscal haciendo de recadero (oiga, ordene a la policía que…); y claro, con esos mimbres, la policía hace de matón a sueldo y el fiscal ejerce de capataz, convirtiendo la justicia en su hacienda. No digo chacra para no herir susceptibilidades, aunque hay cada personaje que a las justas saben hablar.

Por otro lado; la flagrancia ha sido desvirtuada para que tenga cabida la participación de los fiscales cual sheriff del oeste americano. Para qué, en el desarrollo de alguna diligencia, allanamiento o cualquier otra operación o intervención policial, el fiscal pueda tener manga ancha para intimidar y hasta amenazar a los intervenidos con detenerlos si no se allanan a sus exigencias. Total, están en fase policial; y al no ser etapa jurisdiccional, pueden hacer y deshacer a su antojo. En todo caso, si fuera preceptivo solicitar o informar, sólo

tienen que ‘hacer el paripé’ de una llamada al juez, diciéndole que van a detener a alguien; es decir, un mero trámite.

Como se puede ver, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), le quita de las manos a la policía la detención policial que la Constitución le da en exclusiva en el Art. 2, 24. f, y se la entrega en bandeja de plata a los fiscales para que estos hagan con ella lo que quieran. Sí, como lo oyen, ¡lo que quieran!; y eso, gracias al ‘principio de oportunidad’ que este mismo código les otorga y pone en sus manos como soporte a los desatinos que favorece a los criminales.

Lo cual, tiene confundida a la sociedad, porque creen que es la policía la que libera a los malhechores una vez detenidos; y eso no es así. Los delincuentes son detenidos por la policía y son puestos en libertad inmediatamente por los fiscales. Eso es consecuencia y resultado del famoso principio de oportunidad que oponiéndose a lo que manda la Constitución se impone y prevalece por encima del principio de legalidad, que sí es constitucional; y todo, gracias al NCPP que es “el soporte legal” del sistema judicial acusatorio. Que bien podría decirse ilegal. Todo ello, lo explicaré más adelante.

Literal c). -

c) *El detenido se fugare de un centro de detención preliminar.*

En este literal, ya lo he explicado líneas arriba que los fiscales a través del NCPP se apropian funcionalmente de la detención policial que ahora le llaman detención preliminar, y así queda recogido en este código; por lo tanto, nos toca explicar esta anomalía normativa.

Qué es eso de, ‘un centro de detención preliminar’. ¿Nos están diciendo que hay fiscales custodiando a estos detenidos? O utilizan a la policía para que hagan de carceleros mientras los fiscales orondos desde la poltrona de sus despachos deciden la suerte de los detenidos disponiendo de la policía como si estos fueran (repito) simples carceleros, o como mucho simples amanuenses.

Esto, porque el NCPP se inventa o se saca de la manga los ‘centros de detención preliminar’, hurtándole a la policía lo que venía siendo y siempre fue los calabozos policiales; que igual siguen ahí pero que los han rebautizado para que estén bajo control de los fiscales. A no ser que los fiscales hayan construido algo diferente o quizá han habilitado junto a sus despachos un habitáculo para custodiar a los detenidos por orden o a requerimiento de fiscalía. Si no fuera así, entonces, podemos constatar una vez más el esfuerzo del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) de asegurarse que el sistema judicial acusatorio cuente con las herramientas necesarias y que sus huestes personificadas en los fiscales tengan un poder omnímodo para los fines del citado sistema.

Antiguamente, si un detenido se fugaba de un calabozo policial, si aún no había tomado conocimiento el juez, la policía realizaba sus pesquisas hasta dar con el paradero del fugado; y si ya era de conocimiento judicial, la policía daba cuenta del hecho al juez y solicitaba autorización para buscarlo, el juez ponía al fugado en busca y captura hasta dar con él. Es decir, en todos los casos de fuga del

calabozo policial, la policía buscaba y detenía al fugado, no era necesario que esta operación policial estuviera patrocinada ni dirigida por la fiscalía, ni tampoco se necesitaba orden judicial, sólo si el detenido ya estaba a disposición del juez el detenido era custodiado en la 'carceleta judicial', recinto que también ha desaparecido en desmedro de las competencias del poder judicial.

Por lo tanto, si estos 'centros de detención preliminar' están a cargo o bajo la jurisdicción de la fiscalía, que nos expliquen en que parte de la Constitución dice que debe ser así. Y si van a utilizar a la policía para que custodie a estos detenidos, queda demostrado que utilizan a la policía para que les haga el trabajo sucio. En otras palabras, la policía no es quién los encierra y tampoco la que da la orden de liberarlos en fase policial; es decir, unos meros carceleros al servicio de la fiscalía.

El Inc. 2 (o numeral 2) del Art. 261 dice:

"*En los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento".*

Este inciso nos remite a los literales **del Inc.1** (anterior); **a)** No se presente flagrancia **b)** Sospechoso en flagrante delito y **c)** Detenido se fuga de un centro de detención preliminar. Líneas arriba decía que el NCPP era tramposo porque transgrediendo el mandato constitucional ha pervertido el campo funcional de los que luchan contra la delincuencia y los que persiguen el delito. Para entenderlo, no hay que ser muy docto ni muy neófito, sólo hace falta leerse la Constitución y darle la interpretación literal ni más ni menos. Pero el NCPP recoge mandatos que no tienen pies ni cabeza si lo vemos con la Constitución en la mano. Es más, el título del Art. 261 al instituir la figura de 'detención preliminar judicial', nos está diciendo que esa detención es jurisdiccional; que hay un juez competente de por medio; es decir, que es preceptivo la intervención judicial.

Sin embargo; aquí la norma nos presenta tres momentos ("En los supuestos anteriores, …") que se corresponden con los 3 literales arriba mencionados. El supuesto contenido en el literal **a)** su momento nos lleva a ubicarnos en **fase jurisdiccional**, al no haber flagrancia, la detención tendría que ser obligatoriamente por mandato judicial. El supuesto contenido en el literal **b)** su momento nos lleva a la **fase policial** porque sólo la policía puede detener en flagrante delito, cualquier otra interpretación es retorcer la norma para burlar el mandato constitucional. Y el supuesto contenido en el literal **c)** su momento nos lleva a una fase que legalmente no debería existir porque vulnera el mandato constitucional, donde los "centros de detención preliminar" son un invento del NCPP, una fase donde los fiscales hacen y deshacen.

En qué quedamos, flagrancia, no flagrancia o a disposición del fiscal, jurisdiccional o no jurisdiccional. No se puede 'estar en misa y repicando a la vez', si la policía actúa en flagrancia, ni juez, ni fiscal ni leches como dirían los españoles. La policía en flagrancia detiene por imperativo legal sin esperar mandato ni orden de nadie, así ordena la Constitución. En flagrancia, la policía no puede esperar, tiene que impedir la perpetración del hecho delictivo, más si es un delito grave. Que tontería es esa de: "*para cursar la orden de detención se*

requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado con nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento". Todos estos desvaríos del NCPP están hechos para que los fiscales puedan burlar el mandato constitucional, el motivo es claro y evidente, la aplicación del sistema judicial acusatorio.

El Inc. 3 (o numeral 3) del Art. 261 dice:

"*La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la Policía a la brevedad posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias puede ordenarse el cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, telefónicamente u otro medio de comunicación válido que garantice la veracidad del mandato judicial. En todos estos casos la comunicación debe contener los datos de identidad personal del requerido conforme a lo indicado en el numeral dos".*

Esta norma recoge dos supuestos, uno en situación normal y el otro bajo circunstancias extraordinarias.

Primer supuesto: Pareciera que aquí la policía recupera su autonomía y es el juez el que se dirige directamente a la policía, pero me temo que no es así, porque como hemos visto, ese vínculo el NCPP lo rompe. Por lo tanto: Es el fiscal quien amparado por el NCPP que no precisa, el que da la orden de detención directamente a no estar el caso revestido de extraordinario; o es el fiscal que haciendo de intermediario, el que notifica la orden de detención a la policía para que ésta la ejecute de inmediato.

Si se trata de detener a una persona cuyos hechos delictivos **no están judicializados**, que están aún en parcela policial; es decir, lo que los acólitos del sistema acusatorio han convertido en zona gris llamándola 'investigación preliminar'; aunque este Inc. 3 no lo dice, con esta norma es el fiscal el que de facto puede dar la orden de detención; "orden para detener" a una persona sin conocimiento judicial. Lo cual es un disparate.

Segundo supuesto: Bajo circunstancias extraordinarias *"…puede ordenarse el cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, **telefónicamente** u otro medio de comunicación…".* Ya podemos imaginar a un fiscal llamando por teléfono a la policía, "soy el fiscal ordeno que detengan a fulanito y a menganito". La policía muertita de miedo por temor a la ira y represalia del fiscal cumple la orden. Total, se supone que quién ha verificado la veracidad del mandato judicial es el mismo fiscal. O acaso se imaginan a la policía yendo a buscar al juez para cerciorarse si el fiscal cumplió o no con el procedimiento. El desenlace puede ser cualquier cosa, total, las palabras se lo lleva el viento; el fiscal luego puede decir que él no ordenó, salvo que la policía grave la llamada. No les parece que la libertad de una persona es más importante que una llamada. Por eso, la policía debe trabajar con ordenes por escrito y firmadas por quien tiene realmente autoridad y es competente para ordenar una detención, el juez.

De todo este desatino normativo, se pueden dar muchos supuestos. Un ejemplo lo tenemos cuando: Una fiscal se presentó en una comisaría dando órdenes para que detengan a un policía que disparó a un delincuente en legítima defensa y le

causó la muerte. El policía fue asaltado por dos malhechores armados, y él haciendo uso de su arma de fuego mató a uno de ellos; era su vida o la de los delincuentes. Lo cierto es que la fiscal con todo su sequito se presentó 'cual una dura e implacable caza recompensas' en la comisaría y le ordenaba verbalmente al comisario para que detenga al policía en cuestión.

Por suerte, el comisario fue muy valiente y con los pantalones bien puestos. Se negó a cumplir la orden de la fiscal (una orden verbal ilegal) diciéndole que el policía había hecho uso de su arma en legítima defensa; la fiscal le decía que tenían que detener al policía porque no había estado de servicio en el momento de los hechos. El comisario respondió que un policía es policía 24/7 todos los días del año, y como tal, está obligado a impedir un delito más aún sí es contra su persona. Que ante un hecho delictivo un policía no puede dejar de intervenir. Si hubiesen asaltado a un fiscal el policía hubiese intervenido igualmente. Por lo tanto, siendo prerrogativa de la policía detener o no en fase policial. En este caso no procedía detener al policía porque actuó para impedir un delito y en legítima defensa. La fiscal utilizó todas las argucias legales y métodos de coacción, exigiendo y ordenando: *"Ahí está el policía deténganle, o deténganle y luego presentan un habeas corpus, etc., etc.",* repetía imperativa e incesantemente la fiscal.

Esta norma engañosa; al margen de no decir ni precisar quién puede ordenar; y al decir "**OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN**", de ello se aprovechan los fiscales para intimidar a la policía conminándoles a que cumplan este tipo de ordenes ilegales, como es 'la orden verbal y presencial'. Es por ello qué a esa fiscal, valga la ironía, 'le sobró ganas y le faltó tiempo' para plantarse en la comisaría de policía para de forma prepotente exigir verbalmente que detengan al policía.

Por escrito no se atrevió a ordenar porque sabe que ya hay sentencias de la Corte Suprema que han sentado jurisprudencia, que condenan a fiscales por ordenar detener a una persona no siendo juez.

Ahí les dejo el enlace de YouTube del caso del policía para que saquen sus propias conclusiones. FISCAL QUIERE MANDAR COMO DETENIDO AL POLICIA QUE MATO A DELINCUENTE (youtube.com) de fecha de estreno: 25 nov 2023. *https://www.youtube.com/watch?v=i-Lg1Ca1Ylc*

Por otro lado, **si el caso ya está judicializado** y el fiscal pide al juez ordene la detención; a éste 'no le queda más remedio' que cumplir con el requerimiento porque así lo establece el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Es decir, el juez hace de recadero, ya que a instancias del fiscal se limita a cumplir con el mandato. Toda una irregularidad, ya que el juez debería dirigirse directamente a la policía y dar la orden de detención sin intermediarios. Hacer lo contrario es seguirle el juego a un procedimiento que entra en colisión con el mandato constitucional. Algo que nos han impuesto 'por la puerta de atrás' y que es vital para que pueda mantenerse en pie el cuestionado sistema judicial acusatorio.

El Inc. 4 (o numeral 4) del Art. 261 dice:

"Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tienen una vigencia de seis meses. Vencido este plazo, caducan automáticamente bajo responsabilidad, salvo que fuesen

renovadas. La vigencia de la requisitoria para los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas no caducan hasta la efectiva detención de los requisitoriados".

Aquí, se sobrentiende que la norma que alberga el Inc. 4, al tratarse de requisitorias, es un juez el que da la orden de detención. Eso está claro y es correcto. Lo incorrecto e ilegal sería que los fiscales emitieran ordenes de requisitorias.

Lo que no dice esta norma de forma clara, es que, para que se cumpla la orden judicial es un fiscal el que hace de intermediario; y eso, no es lo que dice la Constitución. La orden de detención por requisitorias debe ir directamente del juez a la policía sin ningún intermediario. Así es en los países done se respeta el estado de derecho. Por eso, para la ejecución y cumplimiento de este tipo de mandatos judiciales existe en todo el mundo la policía judicial que se encarga de las requisitorias y todo lo relacionado con buscas y capturas, averiguaciones de paradero, notificaciones y otras diligencias judiciales.

- **Como <u>CONCLUSIÓN</u>** del **<u>Art. 261</u>** del NCPP, decir que:

Está claro que su título indica que su contenido versa sobre 'Detención Preliminar Judicial'. Sin embargo, sin mencionarlo, es obvio que en momentos su literalidad se refiere a supuestos del Art. 2. 24, f de la Constitución. Por ejemplo, en el literal b) del numeral 1, este Art. 261 habla de flagrancia. Como se puede ver, en este caso; el título del artículo, con su contenido se disocian, hablan de situaciones diferentes. El Nuevo Código Procesal Penal en su afán por burlar la norma constitucional, deja de lado a la policía e involucra aquí a los fiscales, en un título que no cuadra con la literalidad de su contenido. Incluso, en esta deriva normativa, nos habla de un 'Centro de Detención Preliminar'. A qué se refiere, ¿a los calabozos de la Policía?; o a falta de carceleta judicial, se está refiriendo que en la Oficina del Fiscal habrá un habitáculo o un espacio para tener ahí a los detenidos. Todo está muy enrevesado.

Si es un tema policial, el NCPP transgrede la Constitución al normar que estas detenciones se realizan sólo a solicitud del Fiscal. Ya que la Constitución no contempla la intervención de un Fiscal, ni en flagrancia ni por orden judicial. Todo ello, es un invento del Nuevo Código Procesal Penal.

<u>ARTÍCULO 263</u> del NCPP**. Deberes de la policía.**

1.- *La Policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de <u>arresto ciudadano</u>, informará al detenido el delito que se le atribuye y <u>comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público</u>. También <u>informará al Juez</u> de la Investigación Preparatoria tratándose de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas".*

2.- *En los casos del artículo 261, sin perjuicio de informar al detenido del delito que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención, comunicará la medida al Ministerio Público y pondrá al detenido inmediatamente a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria. El Juez, tratándose de los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 261, inmediatamente examinará al imputado, con la asistencia de su Defensor o el de oficio, a fin de verificar su identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Acto seguido, lo pondrá a disposición del Fiscal y lo ingresará en el <u>centro de detención policial</u> o <u>transitorio</u> que corresponda. En los demás literales, constatada la identidad, dispondrá lo conveniente.*

3.- *En todos los casos, la Policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste los derechos previstos en el artículo 71. De esa diligencia se levantará un acta".*

El título del **Art. 263** de este Código, **DEBERES DE LA POLICÍA**, pareciera indicarnos con el término DEBERES, que es una norma que pretende remplazar o al menos se asemeja el título de un manual policial. Un remedo de protocolo de actuación policial concebido adrede para articular y controlar el quehacer de la policía. Al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) poco le faltó incorporar en su contenido un título dedicado a los 'RECADOS que debería hacer la policía'.

En los tres numerales del que consta este artículo nos habla de la detención que realiza la Policía. Si es así; entonces nos surge la siguiente pregunta: Qué hace un Código Procesal Penal regulando donde no debería, normando donde no le llaman, abordando contra corriente aspectos que la Constitución no lo contempla. Y lo más grave, tergiversando el sentido y contenido del espíritu de la norma constitucional. Es decir, en contra de la Constitución; ya que tuerce el mandato, le da una interpretación inconstitucional, lo recoge como norma y nadie dice nada ante esta ilegalidad.

Este artículo es el que más llama la atención, porque para transgredirlo retuercen la norma; de una forma supina, ilegalmente le dan la vuelta al mandato constitucional y lo burlan. Para demostrarlo, ahí va un análisis simple y llano para que todos lo entiendan.

El inc. 1, Art. 263 del **NCPP;** dice**:** ***"La Policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto ciudadano, informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También informará al Juez de la Investigación Preparatoria tratándose de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas".***

La Constitución, en el primer párrafo (o **primer supuesto**) del Art. 2. 24. f, ordena, que EN FLAGRANCIA LA POLICÍA tiene 48 horas para poner al detenido a DISPOSICIÓN DEL JUEZ. No dice que hay que poner a disposición del Fiscal y tampoco dice que hay que informar al Fiscal.

En el **segundo supuesto** (segundo párrafo del mismo inc. f); cuando se refiere a delitos de terrorismo, tráfico de drogas, espionaje y organización criminal, ahí son 15 días que la Policía tiene para poner a disposición judicial, y en ese supuesto no menciona flagrancia, con lo cual, no hace falta a efectos de la actuación policial y lógicamente de la detención que realice.

La flagrancia en los delitos graves aquí contemplados, a efectos de las detenciones pertinentes no es imprescindible, porque al ser complejos, se supone que la medida adoptada es producto de un concienzudo trabajo de inteligencia e investigación policial. El 2do supuesto dice además que la Policía dará cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. En el 1er supuesto, eso no es necesario.

La CONSTITUCIÓN lo deja muy claro: "La parcela policial", no es jurisdicción que esté al amparo del Código Procesal Penal, porque las pesquisas y todo lo

que hace la policía respecto al inciso f) del Art. 2. 24 no es jurisdiccional (por eso dice que el juez podrá asumir jurisdicción). Por lo tanto, si el Juez no tiene competencia aún, menos lo podría tener el Fiscal, a quién la Constitución lo mantiene al margen en el 1er supuesto. Sólo en el segundo supuesto del citado Inc. f) dice que se le informe a efectos de accionar una vez que el juez asume jurisdicción.

Por lo tanto; el Art. 263 del NCPP saca de contexto ese "TAMBIÉN INFORMARÁ AL JUEZ", porque da a entender, que el Fiscal tiene prioridad sobre el Juez, y no es así.

La Constitución es muy clara (Art. 2. 24, f), la policía debe poner el detenido a disposición judicial sin intermediarios. Constitucionalmente ese vínculo o relación funcional entre el juez y la policía es directa.

Sólo en el 2do supuesto del Inc. f) el fiscal también debe ser informado (eso dice expresamente la Constitución) para que éste cumpla con su cometido. No así, en el primer supuesto de 48 horas, donde ahí es sólo el juez el receptor de la denuncia, los detenidos y la investigación policial.

Es decir; en el 2do supuesto (plazo hasta de 15 días), la policía informa a ambos (al juez y al fiscal), pero es al juez a quien tiene que poner a disposición el detenido, sus pesquisas y demás actuaciones; es el juez el que asume jurisdicción incluso antes de vencido ese plazo. Antes, todo ello, la policía lo enviaba directamente al juez en un soporte documental llamado **atestado policial**, que por razones de interés, a efectos de instaurar el sistema judicial acusatorio, hoy ya no existe.

Pero volvamos contenido del **inc. 1**, del **Art. 263** del NCPP. Si se fijan, dice todo lo contrario, cambiándole el sentido e interpretación al mandato constitucional. El NCPP ordena que se ponga todo a disposición del fiscal y TAMBIÉN se informe al juez; es decir todo al revés, dándole un sentido supletorio al vínculo funcional juez – policía.

Este Inc. 1, también dice: *"en los casos de arresto ciudadano".* Con lo cual crea una nueva figura jurídica coercitiva que no se ajusta a los dictados de la Constitución. Arrestar significa detener. Proviene de los usos y costumbres militares, pero como un castigo; es decir, como una consecuencia de un porqué, de un motivo. La Constitución no lo contempla, afectaría derechos fundamentales.

No obstante, algunos países han incorporado **el arresto** en su léxico de 'política criminal'**,** pero con otros matices; no como un correctivo, sino más bien como una pena (un castigo). Es decir, lo han incorporado en sus códigos penales con diversos nombres, pero siempre como resultado de una sentencia o una resolución judicial.

Así, por ejemplo: En España su código penal recoge el 'arresto domiciliario' o pena de localización permanente, que viene a ser una modalidad de detención a la que "puede acceder un imputado" que haya sido detenido por una causa

legalmente establecida. Consiste en que la privación de la libertad se cumple en el domicilio de la persona condenada, aunque según sea el caso, también se le puede aplicar a los procesados.

Dicho esto, podemos ver que el Nuevo Código Procesal Peruano (NCPP) para seguirle el juego al sistema judicial acusatorio se inventa el término "arresto ciudadano", asegurándose que sirva a ciertos fines e intereses. A tal efecto, le bajan un peldaño respecto a la detención judicial; es decir, no lo ubican en fase judicial, de inicio no interviene ningún juez. En ese sentido, al arresto ciudadano le crean un procedimiento ad hoc para que puedan intervenir los fiscales… Así: si una persona "arresta" a otra que presuntamente está cometiendo un delito, lo conduce a la policía, y a ésta da cuenta o pone a disposición del fiscal. No queda más remedio que acatar la imposición del NCPP.

Dicho de otra manera, a este arresto (detención CONDICIONADA) se le ubica a nivel policial encorsetándola en fase no jurisdiccional. La intención es clara, para que así, los fiscales puedan hacer y deshacer con el destino de la libertad del detenido. Tal es así, que el NCPP en este Inc. 1, recoge la intromisión de los fiscales si se diera un caso de arresto ciudadano, cuando dice: ***"La policía… informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público…".*** Una ilegalidad en toda regla, porque constitucionalmente la policía está vinculada al juez a efectos de informar y poner a disposición los detenidos (Art. 2. 24, f).

La Constitución establece de forma tasada y taxativa, cuándo y quiénes pueden detener a las personas. Y no dice que un ciudadano cualquiera puede detener a otro. Lo que si faculta es que un ciudadano pueda intervenir en caso que presencie la perpetración de un delito (flagrancia).

Es decir, puede impedir que se cometa un delito, capturar al infractor y llamar a la policía para que se haga cargo, mientras tanto lógicamente lo tendrá que sujetar o retener hasta que la autoridad policial llegue. Pero aquello, técnica ni jurídicamente sería una **detención o arresto**, ya que esa sujeción o inmovilización del sujeto aprehendido está condicionada a la llegada de la autoridad policial. En caso que no hubiera policía en el lugar por ser una zona rural alejada, se trasladará al capturado hasta donde haya policía, lo que se tarde en llegar, entregándolo al término de la distancia.

Pero ello, 'es de cajón'; o quizá un cajón de sastre, donde la gente interviene para evitar un delito o ante la perpetración de un hecho delictivo. Es decir, lo de toda la vida, cómo se ha hecho siempre. Un ciudadano no puede mirar a otro lado si ve que se está cometiendo un delito, porque el no brindar auxilio, estaría incurriendo en un delito contra el deber de socorro, que dependiendo el país toma un nombre o adopta determinada tipificación penal.

Dicho esto, tal y como está recogido en el NCPP; el Arresto Ciudadano es una facultad que tiene todo ciudadano de privar momentánea y transitoriamente la libertad personal a un individuo que esté cometido un delito. Esa facultad lo recoge el **Art. 260 (*)** del NCPP. Según ese artículo, cualquier persona puede realizar un arresto en caso de flagrancia delictiva, debiendo entregar

inmediatamente al sospechoso y el cuerpo del delito a la Policía. Hasta ahí todo bien, menos la intervención del fiscal. La policía está legitimada y tiene autonomía funcional (**Art.166** de la Constitución).

(*) ***Artículo 260.- Arresto Ciudadano***

1. *En los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva.*
2. *En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la Policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. La Policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.*

El lector se estará preguntando, y cuál es la diferencia o qué más da sí se le llama detención, **arresto**, aprehensión, sujeción, retención, inmovilización, etc., etc., La respuesta debería ser la misma. ¡NO es lo mismo!… Pues jugar con estos términos se presta para burlar la norma. Aunque semánticamente en su lexicografía sean sinónimos respecto a su contenido y significado, la identidad figurativa de su escritura los diferencia e individualiza de cara al derecho y a su uso jurídico.

No es lo mismo, porque la norma es la que crea la figura jurídica, y en este caso, es en la Constitución donde hay que ir a encontrar el origen como fuente de derecho, por algo es la ley suprema. Y la norma constitucional recoge el término **DETENCIÓN** (**Art. 2. 24, f**). Nadie puede ser detenido sino por mandato judicial o por la policía en flagrancia.

Además, el literal b) del mismo artículo constitucional (Art. 2. 24) dice: *"No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley…".* Y la ley constitucional sin lugar a dudas dice lo que dice, DETENCIÓN.

Por lo tanto, los otros nombres se prestan a que a través de ellos se pretenda burlar la Constitución, como se ha hecho y se viene haciendo a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), quebrantándola, contraviniéndola o interpretándola erróneamente para pervertir el mandato constitucional siguiendo lineamientos antojadizos y sesgados para favorecer la aplicación y funcionamiento del inconstitucional sistema judicial acusatorio con el soporte del NCPP y beneplácito de los fiscales.

El inc. 2, Art. 263 del **NCPP;** dice**:**

"En los casos del artículo 261 ***(*)****, sin perjuicio de informar al detenido del delito que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención, comunicará la medida al Ministerio Público y* ***pondrá al detenido inmediatamente a disposición del Juez*** *de la Investigación Preparatoria.* ***El Juez****, tratándose de los* ***literales a) y b)*** *del numeral 1 del artículo 261, inmediatamente examinará al imputado,* ***con la asistencia de su Defensor*** *o el de oficio, a fin de verificar su identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Acto seguido,* ***lo pondrá a disposición del Fiscal*** *y lo*

ingresará en el centro de detención policial o transitorio que corresponda. En los demás literales, constatada la identidad, dispondrá lo conveniente".

(*) ARTÍCULO 261 del NCPP, **Detención Preliminar Judicial** (literales a y b).
1. *El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar cuando:*
a) *No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.*
b) *El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.*

El **Inc. 2 Art. 263**; es un 'batiburrillo normativo', que dice y se desdice; una mezcla desordenada de cosas que no guardan relación entre sí, lo cual enrevesa aún más la norma. Aquí, a los que hicieron el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), 'se les ve el plumero', les traicionó el inconsciente de su sesgo, el ser conscientes y saber lo que dispone el Art. 2. 24, f. de la Constitución; y sin embargo vulnerarlo.

Es por ello, que consignaron en el Inc. 2 de este Art. 263 del NCPP refiriéndose a la policía, que: "*…pondrá al detenido inmediatamente a disposición del Juez…",* para luego agregar que *"El Juez, tratándose de los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 261* (ambos se refieren a flagrancia)*, …examinará al imputado, …con la asistencia de su Defensor … Acto seguido,* (el Juez) *lo pondrá a disposición del Fiscal…";* para finalmente el juez disponer, *"y lo ingresará en el centro de detención policial o transitorio…".*

Como se puede observar, en este Inc. 2, sí que se adopta y acata en parte el mandato constitucional, en lo que se refiere y concierne a la intervención de la policía. En otras palabras, dice: que una vez que la policía detiene debe poner a los detenidos directamente a disposición del juez sin pasar por la fiscalía, a quien sólo informa (según este Inc. 2) en los casos del Art. 261 del NCPP. Lo cual, es contraproducente, porque los literales a) y b) del numeral 1 del mismo artículo 261 se refieren a **casos de flagrancia**. Por lo tanto, si es como reza su título 'Detención Preliminar Judicial', al estar ya a disposición judicial ya no habría tal flagrancia.

Sin embargo, volviendo al citado Inc. 2, este dice, que una vez el juez examina al imputado en presencia de su abogado, el juez lo pondrá a disposición del fiscal y ordenará su ingreso en un centro de detención policial o transitorio. Lo cual es contradictorio, porque de ser así esta norma dice una cosa y lo contrario al mismo tiempo. El que un juez ordene que un imputado ingrese en un centro de detención policial es otro desatino normativo más del NCPP, ya que si el caso está judicializado el juez constitucionalmente sólo tiene dos alternativas o lo envía a prisión o deja en libertad al detenido. La policía sólo puede detener y custodiar a los detenidos bajo los parámetros del marco constitucional. Y como ya lo expliqué líneas arriba, la policía tiene dos supuestos muy bien marcados y claramente delimitados en el mandato constitucional del Art. 2. 24, f); el primer supuesto es, en caso de delitos comunes; y el segundo supuesto es, para los delitos de espionaje, terrorismo, tráfico ilícito de drogas y de organización criminal.

No obstante, la norma de este Inc. 2 del Art. 263 del NCPP, al ser contradictoria con respecto a los otros mandatos del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), y aunque en parte si se ajusta al mandato constitucional, en la práctica no se cumple, y viene siendo así, porque de lo contrario afectaría las bases y lineamientos del sistema judicial acusatorio. Por lo tanto, sería como tirar piedras contra su propio tejado.

El inc. 3, Art. 263 del **NCPP;** dice**:** *"En todos los casos, la Policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste los derechos previstos en el artículo 71* ***(Derechos del imputado)****. De esa diligencia se levantará un acta".*

Este Inciso comienza refiriéndose por un lado al **DETENIDO** y por otro lado al **ARRESTADO**, para luego hacer referencia al Art. 71 del NCPP (derechos del **IMPUTADO**). Lo cual evidencia el caos normativo de este Código Procesal Penal.

Las vulneraciones y contradicciones son constantes y generalizadas. Una cosa es ser un detenido, y otra cosa es ser un arrestado (más propio de la jurisdicción militar); y cosa distinta es ser un imputado. Son términos jurídicos que obedecen a distintos momentos procesales y sindican situaciones personales distintas respecto del procedimiento penal. Por lo demás, en este inciso hay poco que añadir y comentar.

COMENTARIO FINAL A ESTE APARTADO

Hay muchos más artículos que colisionan con el mandato constitucional; con lo cual, sería extenso comentar uno a uno; pero todos van en la misma línea.

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) le entrega a los Fiscales cometidos, competencias y atribuciones que no les reconoce la Constitución. Atribuciones algunas que son netamente policiales y otras que corresponden a la judicatura; sin olvidar que deja a la víctima sin poder ejercer la acción penal en su propio nombre.

En el Perú, a través del Nuevo Código Procesal Penal, se nos ha IMPUESTO a como dé lugar el sistema judicial acusatorio que se puso en marcha en el año 2006, su implantación ha roto todos los puentes de la justicia, trayendo consigo más criminalidad.

Ello ha supuesto que, por la vía del atajo normativo, se nos haya impuesto una nueva forma de hacer justicia en base al principio de oportunidad, ignorando el principio de legalidad que la Constitución contempla como pilar vertebrador de la justicia. Para ello, echaron mano del NCPP a fin de burlar la constitucionalidad.

Con ello, se han llevado de encuentro muchos principios constitucionales, como la prevalencia de la jerarquía normativa, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, y otros, al punto de transgredir y desvirtuar muchos de los mandatos constitucionales expuestos en este estudio.

No cabe duda que, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es un fraude y un fiasco total. Es una camisa de fuerza contra la justicia, la judicatura, la policía y la realización de su trabajo como tal. Su aplicación genera impunidad, corrupción y falta de justicia, acrecienta la criminalidad y favorece al delincuente

Con esta nueva forma de hacer justicia, la sociedad es la que sale perdiendo, porque es la verdadera perjudicada; los únicos que salen ganando son los delincuentes.

Como consecuencia de ello: Hay muchos más delincuentes, la delincuencia se generaliza, se ha incrustado en el tejido social, se ha viralizado y se hace crónica. Cual pandemia, ataca a la sociedad, la seguridad ciudadana se rompe, se quiebra la convivencia, el caos se apodera de las calles, los barrios se hacen inseguros, corrupción y más delincuentes. Delito e impunidad hacen del crimen credo.

En esa metástasis social, el deterioro sólo puede traer más y más crimen y delincuencia, en cuyas cloacas, entre el hedor hediondo de la impunidad y lo putrefacto de la criminalidad ‘hacen su agosto’ delincuentes de todo tipo y pelaje, desde el vulgar ladrón y el ladrón de cuello blanco; todos ‘campan a sus anchas’ a falta de orden y justicia.

Todo esto se da porque gente con sesgo ideológico, a los que llamo acólitos de la nueva justicia o de la antijusticia; siguiendo lineamientos y consignas globalistas, con nocturnidad y ventaja, rebasando lo racional, “alumbraron” el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP); y con él nos han colado el sistema judicial acusatorio que es un fiasco, porque pone en riesgo el estado de derecho y la seguridad jurídica en el país.

AUTONOMÍA Y CONTROL DE LA POLICÍA EN EL NUEVO PROCESO PENAL

No cabe duda que el sistema judicial acusatorio a afectado la autonomía operativa de la Policía Nacional del Perú en cuanto a su trabajo relacionado con la investigación, y en otras funciones también (materia de otro estudio), pero a efectos del presente, nos interesa lo relacionado a la investigación de la delincuencia y el delito.

En este sentido, las facultades y autonomía policial, con el sistema judicial acusatorio se ven seriamente afectadas, digamos que están en el punto de mira para anularlas, minimizarlas o mermarlas. Así lo exige el sistema de la nueva justicia. Esa es la razón por la que la autonomía policial actualmente es objeto de discrepancia con la fiscalía que gracias al NCPP se siente por encima, aunque la Constitución no diga tal cosa; por el contrario, su Art. 166 es muy claro y contundente en favor de la policía.

Lo cierto es que, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) peruano, con el pretexto de que puede haber riesgo de afectar los derechos fundamentales, ha recortado el ámbito de las facultades de actuación autónoma de la policía, para las cuales constitucionalmente no se necesitaría orden previa del juez y mucho menos la autorización de un fiscal.

Los fiscales no se encuentran habilitados para realizar por sí mismos las diligencias de campo e inteligencia, operativos, ni las tareas policiales conocidas como pesquisas relacionadas con la investigación de los hechos delictivos. Su labor constitucional consiste en **conducir la investigación del delito**, pero desde el inicio del proceso penal; lo cual, siendo rigurosos con el mandato constitucional, implica sólo, "**instar, accionar e impulsar**". Lógicamente ese marco de actuación de los fiscales se refiere que debe darse en fase jurisdiccional (eso infiere mandato constitucional). Todo lo que es pre jurisdiccional debería ser llevada a cabo por la policía con la autonomía que le da la Constitución (Art. 2. 24, f) y (Art. 166).

Si la Constitución dice Art. 166, que la policía INVESTIGA LA DELINCUENCIA (además de prevenir y luchar contra ella), no debería haber ninguna norma de rango inferior que contradiga este mandato, ni tampoco debería haber ninguna otra autoridad que se interponga en el cumplimiento irrestricto de esa **finalidad fundamental** porque sería una contravención a ese mandato constitucional.

Lo que ocurre, es que todos estos devaneos normativos obedecen a una corriente progre ("progresista") que promueve y encarna un nuevo sistema de hacer justicia llamado Sistema Judicial Acusatorio a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) con el que se ha pervertido el espíritu de la norma constitucional.

En el caso concreto que nos ocupa, sobre la autonomía policial, el NCPP ha pervertido la interpretación de los Art. 159. 4 **(*)** y 166 **(*)** de la Constitución. El primero, atribuido al Ministerio Público: "*Conducir desde su inicio la investigación*

del delito; y el segundo, atribuido a la Policía Nacional: "*Previene**, investiga** y combate la delincuencia*.

Ahí está el quid de la cuestión, ahí radica "el problema". Un asunto meridianamente claro que el NCPP lo ha convertido en un problema inconstitucional. El contenido de ambos artículos de la Constitución, son dos cosas totalmente distintas que se corresponden con dos momentos distintos.

Ambos cometidos tienen su propio recorrido y **gozan de autonomía constitucional** a través de las respectivas instituciones estatales que reciben el encargo, por un lado, el Ministerio Público y por otro lado la Policía Nacional respectivamente. Con lo cual su aplicación no debería ser un problema. Pero para ello, hay que saber interpretar la norma constitucional, y no buscar retorcerla para burlar el mandato.

(*) Art. 159.- **Atribuciones del Ministerio Público**
Corresponde al Ministerio Público:
1.- *Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.*
2.- *Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.*
3.- *Representar en los procesos judiciales a la sociedad.*
4.- Conducir desde su inicio la investigación del delito*. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.*
5.- *Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.*
6.- *Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.*
7.- *Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.*

(*) Art. 166.- **Finalidad de la Policía Nacional.**
*La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene**, investiga** y combate **la delincuencia**. Vigila y controla las fronteras.*

A la vista está, no hace falta mucho para entenderlo, sólo hace falta saber leer y tener conciencia de acatamiento al orden constitucional. Por eso, es importante que no nos vendan gato por liebre. La policía constitucionalmente (Art. 2. 24, f y Art. 166) tiene autonomía para realizar su trabajo en fase no jurisdiccional y el Ministerio Público (Art. 159. 4) igualmente con autonomía debería ceñirse a realizar su trabajo, pero en fase jurisdiccional.

Lo cierto, es que, una cosa es la investigación que hace la policía y otra es la que realiza el Ministerio Público. Ambas tienen su momento y son compatibles autónomamente en la medida que se cumpla el mandato constitucional. No se puede pretender que la policía haga una buena labor en su lucha contra la criminalidad si se le recorta facultades y se le limita su accionar. Privarle a la policía que investigue o restarle autonomía para ello, es un desatino cuyo costo a la sociedad resulta ser muy alto en víctimas de delitos que se pueden evitar.

El problema que hay en Perú respecto a cómo se está abordando la lucha contra la delincuencia y la forma de cómo se está haciendo justicia responde al sistema

judicial acusatorio como principal culpable a través de la aplicación del NCPP, por las razones ya expuestas.

Con ello, se ha pervertido la justicia y le han quitado autonomía a la policía. En cuanto a la justicia es injusticia o antijusticia; en cuanto a la policía, han distorsionado su finalidad fundamental constitucional (Art. 166) al pretender someterla y controlarla a través de los fiscales, sirviéndose precisamente del cuestionado Nuevo Código Procesal Penal. No obstante, todo ello lo explicaré detalladamente más adelante.

No cabe duda que con el Nuevo Código Procesal Penal la Policía ha perdido autonomía funcional, porque a través de este, se le pretende someter bajo el mando, control y órdenes de la Fiscalía saltándose todos los filtros del mandato constitucional.

FACULTADES AUTÓNOMAS DE LA POLICÍA AFECTADAS POR EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO
(La autonomía policial se debe respetar)

Las actuaciones autónomas de la policía son aquellas en las cuales la policía no necesita autorización de nadie, ni siquiera del juez, fiscal u otra autoridad para actuar en cumplimiento de la ley, porque están guiadas por el irrestricto cumplimiento a la norma constitucional y a la sujeción obligada al imperio de la ley.

Por lo tanto, estas facultades propias de su función son plenas, donde la policía no necesita autorización previa para realizarlas porque la autorización viene implícita en el mandato constitucional que las otorga (Art. 166); autonomía que se debería respetar, si no queremos que el **principio de autoridad** se resquebraje y **el principio de legalidad** carezca de sentido.

Entre estas facultades tenemos: El auxilio a la víctima, detener en flagrancia, resguardar el lugar de los hechos, identificar a testigos y consignar sus declaraciones, recibir denuncias, realizar pesquisas y diversas actuaciones de prevención, patrullajes, control de alcoholemia, practicar control de identidad, aprehender objetos y documentos de la escena o producto del crimen, interrogar a los detenidos, etc., etc.; todas ellas, en merito a las funciones contenidas en la finalidad fundamental que tiene asignada la Policía Nacional del Perú en el Art. 166 de la Constitución, entre ellas, “prevenir, INVESTIGAR y combatir la delincuencia”; mandato constitucional que se complementa con las atribuciones que le otorga el Art. 2. 24, f) de nuestra carta magna.

En qué cabeza cabe que la policía para auxiliar a una persona que se encuentra en peligro o para intervenir en caso de flagrancia ante la perpetración de un delito tenga que esperar que alguien le autorice; y así, lo mismo con las demás facultades que son propias de la policía.

Sin embargo: Con el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) pocas son las facultades de actuación autónoma de la policía que conservan su original concepción constitucional. En otras palabras, el NCPP le priva a la policía su

primigenia **autonomía** constitucional. Tal es así, que hoy por hoy, por mandato de este Código, la policía para todo tiene que solicitar autorización del fiscal. Se ha llegado al extremo que fuere cual fuere la actuación policial está supeditada y supervisada por la fiscalía.

A fecha de hoy (Nov2023), incluso, la facultad de prestar auxilio a la víctima, recibir denuncias e interrogar a testigos y al denunciado, si no hay anuencia del fiscal, la policía está atada de pies y manos, no puede hacer nada que no esté sujeta y vinculada a una carpeta fiscal. Aunque en estos días el gobierno ha anunciado la aprobación de un Decreto Legislativo que aparentemente flexibilizará algunas de estas restricciones a la policía y le van a permitir una ligera participación en la investigación preliminar, que irónicamente no es otra cosa que la investigación policial secuestrada y disfrazada con otro nombre, pero condicionada y sometida a supervisión y aprobación fiscal.

Se olvidan, que la investigación que realiza la policía es no jurisdiccional y está sujeta a LOS HECHOS y a descubrir al AUTOR MATERIAL de los mismos, apoyándose en las pesquisas y en la criminalística. Por su parte, la fiscalía constitucionalmente, tendría que sujetarse a accionar e impulsar (conducir) la investigación del delito en fase jurisdiccional, que es donde, desde el punto de vista jurídico es el inicio del proceso penal para determinar si esos hechos se ajustan a los parámetros de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad.

Hay otras facultades constitucionales de la policía que a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) han sido recortadas o pervertidas en el articulado del citado Código en cuanto a su función, ejecución y procedimiento, porque que le han impuesto un tercero (un fiscal) de por medio que interrumpe la relación funcional que la policía debería tener con el juez; **vínculo constitucional** que desaparece en esta norma de menor rango, menguando de esta manera la AUTONOMÍA y las atribuciones de la policía.

Así mismo: Facultades, como la de detener sin orden judicial (en flagrancia) o establecer controles e incluso la facultad de identificar a las personas, entre otras, han sido afectadas igualmente en su autonomía ya que para todo tienen que informar o dar cuenta al fiscal, so pretexto de ser susceptibles de ser lesivas a los derechos fundamentales del infractor o presunto delincuente; incluso, de vulnerarse la proporcionalidad y el principio de la presunción de inocencia durante las intervenciones policiales; excesos que igualmente podrían conllevar riesgo de afectar los derechos humanos. Alrededor de los cuales, se ha generado toda una amalgama de principios y medidas proteccionistas que le siguen el juego a la cultura del caos como soporte de la corriente ideológica globalista puesta de moda en estos tiempos.

Pues, todo ello, afecta **la autonomía** de la labor policial, favorece a la delincuencia y promueve la antijusticia disfrazada de lo contrario, teniendo en el sistema judicial acusatorio a su mejor aliado.

Eso, con independencia del problema de inconstitucionalidad que pudieran presentar cada una de las medidas proteccionistas, como es el hecho que los fiscales liberan sin más a los delincuentes que detiene la policía amparándose

en el principio de oportunidad. Respuesta inconstitucional en la lucha contra el crimen, porque la Constitución no recoge ni contempla la OPORTUNIDAD como principio constitucional, y mucho menos como un mecanismo en manos de los fiscales para liberar delincuentes. Con lo cual, es un invento del NCPP.

Eso está ocurriendo en el Perú, mientras que en los países desarrollados (USA - Europa) y en otras partes del mundo, para luchar contra la delincuencia común y contra el crimen organizado dotan a la policía de herramientas legales y medios, ensanchando sus atribuciones, su radio de acción y sobre todo le fortalecen sus **facultades autónomas**; lógicamente confían en la profesionalidad de sus policías. Autoridad policial que siempre está al servicio de la sociedad, cuyos miembros, son profesionales que trabajan convencidos de no sobrepasar el umbral de lo permitido y tolerado por la ley.

FACULTADES AUTÓNOMAS DE LA POLICÍA EN EL DERECHO COMPARADO

En cualquier sistema de persecución penal, es cosa sensible las facultades de actuación autónoma de la policía y los mecanismos de control tendientes a evitar detectar o sancionar eventuales abusos en su ejercicio. Una posibilidad es impedir que la policía pueda realizar cualquier actividad sin previa orden judicial o fiscal. Pero esta opción es paralizante, inoperante y un inconveniente, por el evidente riesgo de burocratizar la función policial y tornarla en ineficiente e ineficaz, especialmente en la investigación de delitos y por tanto del sistema.

Por eso se explica que, a pesar de las reservas inherentes a la actuación autónoma de la policía, en el derecho comparado se observe normalmente algunos modelos que consagran, ya sea normativa o fácticamente cierta autonomía de la policía en materia de investigación delictual.

Así, **en el sistema alemán**, si bien se establece a nivel legal que la dirección de la investigación corresponde a la fiscalía, en la práctica es la policía la que lleva a cabo la investigación en forma autónoma, especialmente si no se trata de delitos de gravedad, y cuando termina la indagación entrega el expediente a la fiscalía, la que entonces decide formular acusación o archivar la causa. En resumen, ***"el ministerio fiscal es únicamente el dueño y señor del proceso de instrucción, y posee una facultad exclusiva de dirección material en los casos de la tradicional delincuencia grave, como delitos capitales y delincuencia económica. En todos los demás casos, de la criminalidad común y especialmente en el ámbito de la lucha preventiva contra la delincuencia para combatir la criminalidad organizada, el verdadero dueño y señor es la policía"*.**

Por su parte, en el **sistema norteamericano**, normativamente se entrega a la policía la labor de investigación, dejándose en manos del fiscal las investigaciones complementarias que éste desee que se realicen para preparar la acusación.

Respecto al control de la actuación autónoma de la policía, se aprecia una distinta manera de proceder entre el **sistema continental europeo** y el **sistema anglosajón**. En el primero se ha extendido la idea de un control jurisdiccional externo, mientras tanto en el segundo, prima la idea de un control interno dentro de la jerarquía policial.

En Chile su Código Procesal Penal (CPP) plasmó permitir en forma restrictiva el ejercicio de facultades autónomas de la policía. Como contrapartida, establece una muy débil función de dirección y control de la policía por parte del Ministerio Público, al no asignarle poder disciplinario sobre los funcionarios policiales, dejando esto a las autoridades de cada una de las instituciones a las que pertenecen (art. 80 inc. 1°), lo que hace incomprensible atribuir a los fiscales responsabilidad por actuaciones de las policías (art 91 inc 2º). No obstante, algunas de sus normas facilitan el control del Ministerio Público sobre la policía, al establecer ciertos deberes de información, como sucede, verbigracia, con el artículo 84.

Lógicamente su CPP ha sido modificado para aumentar las facultades de actuación autónoma de la policía, con el riesgo (según algunos), para el necesario respeto de los derechos humanos y el funcionamiento eficiente del sistema, pues al ser dos los cuerpos policiales los que tienen las mismas facultades autónomas, hay la posibilidad que se produzcan conflictos entre ellos.

Para efectos de la investigación en el proceso penal, la policía chilena está integrada por un cuerpo policial civil, la Policía de Investigaciones, y por una policía uniformada, Carabineros de Chile. En otro caso, tratándose de la investigación de hechos cometidos en el interior de establecimientos penales, hay instrucciones y está normado que se encargue la Gendarmería de Chile, art. 79 inc. 3° de su Código Procesal Penal (CPP).

Del art. 79 CPP, se podría deducir que la investigación de los delitos corresponde a la Policía de Investigaciones de Chile, y sólo en subsidio a Carabineros. Sin embargo, en la práctica, ambos cuerpos cumplen funciones investigativas por igual, sin que quepa sostener que uno sea subsidiario del otro. Los que, además de cumplir órdenes que les dan los tribunales (art. 80 inc. 2° CPP; verbigracia, de detención) y las instrucciones que imparten los fiscales (practicar pericias, etc.), las policías están facultadas (y a veces, obligadas) para ejercer ciertas funciones en forma autónoma, sin orden previa del juez o instrucción fiscal; respetando los derechos humanos.

Como puede advertirse, la profesionalidad de la policía chilena (policía de investigaciones y los Carabineros) está más que contrastada, por lo tanto, en principio no parece que la eventual maximización de las facultades autónomas de la policía, comporte un necesario incremento del riesgo de vulneración de derechos fundamentales del imputado.

Después de 20 años de la Reforma Procesal Penal (año 2000), en que Chile sustituyó el “sistema inquisitivo” por uno acusatorio adversarial y, a raíz de los hechos ocurridos en la llamada “Operación Huracán” (Set 2017), donde se enfrentaron el Ministerio Público y Carabineros de Chile (Ene 2018), los

problemas entre el instituto policial armado y la pléyade de fiscales progresistas no ha cesado (prevalencia y profesionalidad cara a cara); por lo que cabe preguntarse si vale la pena seguir con un sistema judicial que lo único que hace es trastocar la convivencia social con más delincuencia y una alta dosis de impunidad.

En consonancia con ello, un conocido jurista y cronista mexicano a raíz de los problemas que el sistema acusatorio viene originando en su país, escribió: ***"…****creímos que mejorando el sistema de justicia penal resolveríamos todos los problemas, nos vimos en el espejo chileno sin querer ver que en México no teníamos algo parecido a los Carabineros o su Policía de Investigación (PDI);****…"***, para luego, en su diagnóstico político agregar: "Hay dos puntos que es necesario resaltar e incidir de forma categórica para mejorar: 1) el diseño de la política criminal y el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito; 2) y lógicamente la profesionalización de los policías".

En México tienen un sistema de gobierno federal y muchas políticas y lineamientos de seguridad pública a nivel nacional. Las responsabilidades del trabajo policial se dividen entre los gobiernos federal, estatal y municipal; las fuerzas policiales se organizan tanto por jurisdicción como por función. Su policía ha sufrido muchas reformas; durante más de dos décadas, sucesivos gobiernos han tomado medidas con la intención de crear fuerzas policiales profesionales, modernas y bien equipadas, pero esos esfuerzos han sido infructuosos. No han logrado establecer mística institucional ni sólidos controles sobre las acciones policiales, lo que permite continúe un patrón generalizado de abuso y corrupción.

Con el **Sistema Procesal Adversarial Acusatorio** (SPAA) intentan involucrar a la **policía** para que tuviera una **participación** condicionada en la fase inicial de la etapa de investigación bajo control de los fiscales, y eso es lo que no aceptan los policías. En México el **Ministerio Público** necesita del apoyo de **la policía** en la realización de actos de investigación, ya que es, la que llega primero al lugar de los hechos (en lenguaje progre, primer respondiente), conoce e informa, de primera mano lo acontecido; entrevista, realiza actos de investigación, recaba indicios y protege la cadena de custodia; pero la relación entre estas instituciones no es buena.

El SPAA espera que el policía tenga conocimientos, al menos en un nivel profesional, de derecho, victimología, criminalística, criminología, técnicas y tácticas policiales, investigación criminal, etc. Sin embargo, esto no es así, ya que los políticos han pervertido la institucionalidad de los cuerpos de policía, convirtiéndolos en un galimatías sin mística y poca profesionalización. En *2016 el* Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) realizó una evaluación sobre el SPAA, que arrojó resultados poco halagadores para los policías preventivos; según los *Hallazgos* la capacitación recibida es tan deficiente, que sólo el 25% de oficiales es capaz de llenar de manera correcta un Informe Policial Homologado (IPH), donde se reporta una intervención. Por esto y más, el desencuentro entre policía y fiscales es acusado.

El divorcio que hay entre el agente del Ministerio Público y el policía preventivo es uno de los grandes escollos para poder impartir **justicia en México**

mínimamente. La aplicación del Sistema Procesal Adversarial Acusatorio (SPAA) lo ha vuelto más evidente y ha agudizado el problema. Quién lo padece es la ciudadanía; pues la falta de coordinación para el cumplimiento de un objetivo común entre ambos eslabones provoca que muchos delincuentes permanezcan en las calles haciendo de las suyas.

Uno de los principales desencuentros está en la interpretación que se hace del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se manifiesta que ***"****el policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución de México****".*** **.**

Leído tal cual, la autoridad fiscal se asume como el "jefe" del policía preventivo, señalando que su actuación está sujeta a lo que él determine por ser quien conduce la investigación y le exige "cuadrar los servicios", dando instrucciones para evitar todo lo que pueda significar error que una hábil defensa pueda aprovechar para invalidar el proceso o sea una puerta a la corrupción a través de los sobornos.

La distancia interinstitucional entre policías y fiscales es tal, que los policías entrevistados indicaron que, aunque tuvieran una buena actuación e integración de elementos probatorios, la vulnerabilidad en la aplicación del SPAA está en el Ministerio Público, ya que los fiscales bajo el amparo de la conducción de la investigación fungen como un "juez de control" al determinar qué sí y qué no puede ser calificado para la apertura de una carpeta de investigación. Lo cual echa por tierra todo el trabajo policial.

Alberto Binder, especialista en la implementación de Sistemas de Justicias en América Latina, señaló la urgencia que tiene **México** de hacer una reingeniería funcional sobre la figura del Ministerio Público, pues sus malas ejecuciones han provocado los principales problemas que se le achacan a la implementación del **Sistema Procesal Adversarial Acusatorio** (SPAA); además, más allá de las actuaciones policiales, los fiscales están asumiendo funciones que no tienen.

LA ACCIÓN PENAL, LA PERVERCIÓN DEL SISTEMA Y EL PROCEDIMIENTO

A las vulneraciones a la Constitución ya citadas, se suman otras que también han sido plasmadas en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Me refiero a la normativa que este código recoge en cuanto a la acción penal y las fases de investigación penal y policial; todo un compost de disposiciones que adulteran la esencia del mandato constitucional, y que afectan no sólo a la sociedad y a la administración de la justicia en su conjunto, sino también, a las funciones y atribuciones de la Policía Nacional.

Antes de la entrada en vigor de este Código Procesal, un ciudadano víctima de un delito podía acceder fácil y directamente a un juez para encontrar justicia, hoy eso ya no es posible con la acción penal en manos de los fiscales "de forma

exclusiva"; lo cual, cierra el camino a la tutela judicial efectiva de la víctima. Con ello, además de pervertir el sentido estricto, real y efectivo de hacer justicia, se afectó a la 'investigación policial' que se hacía a través de 'los atestados policiales', con los que la policía ponía a disposición judicial los hechos y los detenidos; cosa que ya es historia, porque los juzgados y jueces de instrucción ya no existen, al menos por ahora.

Lo mismo ha ocurrido con otras figuras, presupuestos e instituciones jurídicas esenciales de nuestro modelo de justicia tradicional, que de igual forma han sido expectorados del sistema de justicia actual; es decir, que también ya son historia, como el 'juzgado de guardia o juzgado de turno', 'carceleta judicial', juzgado de instrucción, policía judicial ni agente judicial; ya no hay auto apertorio de instrucción, ni investigación y persecución judicial del delito, la discrecionalidad y el impulso procesal judicial tampoco existe ya, etc., etc.

Con el nuevo Código, todo ello se borró de un plumazo, 'so pretexto que son nuevos tiempos', y que el sistema judicial que teníamos era un sistema heredado, anticuado e inquisitorial. Por lo tanto, se les ocurrió la "brillante idea" de plagiar lo que ya en otros países de Latinoamérica 'la corriente progre' había instaurado y que venían aplicando y experimentando; o mejor dicho ya lo habían implantado como 'nuevo modelo de justicia'. ¡Como si la justicia fuera una cuestión de modas!. ¡La justicia es justicia o no lo es!.

Así, de golpe y porrazo hemos pasado del **tradicional sistema judicial** que demonizaron etiquetándole como "inquisitorial" (según ellos), a un '**sistema judicial acusatorio** adversarial' (o contradictorio) al que santifican aupándolo a los altares atribuyéndole dones que no tiene. Los progres dicen que en el sistema procesal antiguo no hay 'principio contradictorio', que todo era por escrito y no había oralidad, que el delincuente y la víctima no iban al juzgamiento en igualdad de armas; lo cual es una tremenda falacia (se olvidan que existía el juicio oral).

Ante ello, debo decir que, por el contrario; es en el sistema judicial nuevo (el acusatorio) donde no hay contradicción y no se hace justicia, porque a la vista está que muchas veces antes que tome conocimiento el juez decide un fiscal, según 'con que pie se levante de la cama ese día **LA OPORTUNIDAD'** (sobre todo en fase no jurisdiccional).

Para ser más preciso y lo podamos entender, es oportuno decir que, en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que encarna el sistema judicial acusatorio, **se ha eliminado a la víctima como víctima**, ya que para este sistema y su Código Procesal sólo existe el agraviado, ofendido o perjudicado (**un mero actor civil**).

Aunque debo decir, que en la última modificación del NCPP de fecha **20 Dic 2023 (DL Nº 1605)**, para confundir y engañar aún más al incauto, al iletrado y al no docto, se hayan tomado la molestia de mencionar la palabra víctima unas cuantas veces; algo así, como cuando alguien para embaucar se saca un conejo de la chistera, aun sabiendo que ello no es así, que es letra muerta; porque a causa del NCPP es evidente que "la víctima" ya no puede dirigirse directamente a un juez en busca de justicia; ya que le han cerrado el paso a la tutela judicial efectiva (más adelante lo explico ampliamente).

Por lo tanto; siendo así, qué contradicción puede hacer la víctima en contra de su victimario si el sistema judicial acusatorio se lo impide a través del Nuevo Código Procesal Penal. Tanto que lo recoge dejándolo sólo como actor civil. Lo cual es una broma de mal gusto. El fiscal nunca podrá encarnar el espíritu y la esencia del verdadero sentir de "**la víctima como víctima",** más aún si con ello, la víctima se queda sin ser o acudir a juicio como **acusación particular** en caso que hubiera víctima.

Por otro lado:

Con el sistema procesal antiguo imperaba 'el **principio de legalidad**', y en el sistema procesal nuevo (acusatorio) impera 'el **principio de oportunidad**'. La víctima es la que paga las consecuencias de ello, en el primero existe como tal (como víctima) y en el segundo desaparece.

En la modificación antes citada del NCPP, para confundir a tutilimundi (a todo el mundo) o quizá para engañar a tirios y troyanos; mencionan el principio de legalidad un par de veces, visibilizándolo engañosamente, a sabiendas que este principio es incompatible con el sistema judicial acusatorio y contrario al principio de oportunidad; el cual, condiciona la acción penal y es el vertebrador del proceso penal de la nueva justicia (Art. 2 NCPPP).

No obstante, por más que quieran esconder las cartas marcadas de la nueva justicia. El sistema judicial acusatorio da por sentado en su ideario, que respecto al delito no es una cuestión de justicia ni se trata de justicia, sino, que es un conflicto a resolver; reduciendo la gravedad del caso a un problema bajo mínimos negociable en favor "del infractor", dejando a la víctima offside para que la teoría de resolución de conflictos haga el resto. En ese sentido está redactado el NCPP con el principio de oportunidad como bandera. Así que, no hay chistera que valga; el engaño a la justicia está muy claro. Por eso se oponen que los delincuentes vayan a la cárcel.

No cabe duda que el sistema acusatorio encarna la antijusticia, cuyo espíritu de la norma que promueve, cual ángel del mal, ninguna ley debería recoger ni encarnar mientras no se modifique la Constitución; porque una ley ilegal como el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) no puede invocar la legalidad porque carece precisamente de ello por inconstitucional.

Por lo tanto, sobra en el NCPP la mención al principio de legalidad; el cual, encarna por encima de todo el imperio de la ley y garantiza el acceso a la justicia como regla de oro en la aplicación del derecho como tal; pero, sobre todo, el principio de legalidad, garantiza la tutela judicial efectiva derecho fundamental. Es decir, exige una justicia real con apego a la legalidad, no aquella que rompe las reglas de juego "de forma ilegal".

Si bien es cierto, la justicia no llega a ser justa casi nunca. Con el sistema judicial antiguo, por lo menos, una vez que la víctima ponía su denuncia era un juez quien salía al encuentro como auxilio judicial; quien con la jurisdicción asumida se abocaba a la causa, y haciendo de árbitro procuraba que la justicia tuviera el

mismo rasero para todos. En cambio, con el sistema judicial nuevo (el acusatorio), ante un hecho delictivo no hay arbitro (juez) si no quiere el fiscal; ya que depende del fiscal que una denuncia por delito pase a manos del juez; eso, por las ilimitadas atribuciones que el NCPP le otorga al fiscal para ejercer o no la acción penal. Mejor dicho, gracias a que este Código Procesal que faculta a los fiscales echar mano de una herramienta poderosa como es el principio de oportunidad, que los fiscales utilizan ya sabemos cómo, según su discrecional criterio.

Los fiscales escudándose en el consabido 'principio de oportunidad', pueden hacer y deshacer a su antojo en fase no jurisdiccional, es decir, pueden o no ejercer la acción penal; 'la oportunidad' queda o está a consideración del fiscal. En cristiano significa, que si al fiscal no se le da la gana no hace nada. Ya pueden los policías coger infraganti a un delincuente que si el fiscal quiere lo pone en libertad de inmediato; el principio de oportunidad le da alas para eso y más. El nuevo Código Procesal le da al fiscal 'un cheque en blanco' (toda una barbaridad), el valorar la oportunidad (si cree oportuno); es decir, decide si el delincuente pasa o no a manos del juez, ejerciendo o no la acción penal.

Esta situación anómala, se puede dar incluso más adelante con el caso ya judicializado; ya que, este Código le permite al fiscal "hacer todo tipo de apaños (arreglos)", para acusar o no acusar, según su parecer o crea oportuno (principio de oportunidad); acuerdos reparatorios le llaman. Se refieren a reparar al agraviado (algo material) porque la víctima hace rato que quedó atrás, en el ostracismo, olvidada, es cero, no existe.

Con lo cual, todo este tinglado normativo se presta a que impere y campe la impunidad y la corrupción. Así tenemos que con estas facilidades y anomalías del sistema acusatorio la delincuencia común se las arregla para torcer la voluntad de los fiscales; y con la delincuencia de alto vuelo (de cuello y corbata), el poder político es el que marca los tiempos, las formas y hasta los resultados. Se podría decir, que con este sistema acusatorio campa la delincuencia en todos los niveles y la justicia brilla por su ausencia.

Hablando de altas esferas: Lo que ocurre con las fiscalías, es que los fiscales dependen del Fiscal de la Nación, y éste, a pesar de su autonomía, como viene ocurriendo todos estos años desde que se implantó el sistema judicial acusatorio, muchas veces se ve influido o actúa en contubernio con el poder político de turno. Y eso no es bueno. No lo es, porque el poder embriaga, contamina y corrompe inclinando la balanza hacia un lado u a otro, según los intereses en juego. Por eso, ante tantos devaneos en nombre de la legalidad, la ley y la justicia sufren las tribulaciones a las que son sometidas por los corruptos de turno.

Así, en ese contexto, se pueden dar casos a favor o en contra del poder, como los que en su día se dieron con la Fiscal de la Nación Nélida Colán (quien renunciara el 20Nov2000 al ser acusada de ser servil al régimen de Fujimori (aparecía en un vladivideo en una reunión familiar con Montesinos); u otro caso, como el del Fiscal de la Nación Pedro Chavarry (acusado por la prensa de intromisión en el caso Lava Jato al destituir a dos fiscales mediáticos); dos casos

contrapuestos que responden a tiempos diferentes, dos caras de la misma moneda, dos posicionamientos muy distintos y opuestos.

Una (la 1ra) mirando para otro lado las tropelías del gobernante de turno (la fiscal terminó en la cárcel) y el otro (el 2do) empeñado en investigar los desmanes delictivos de otro gobernante (apodado el lagarto), el fiscal terminó “renunciado” (08/01/2019). Y si a eso, le sumamos la actuación de los fiscales estrella (mediáticos) de los últimos tiempos, donde unos siguiendo o respondiendo a consignas de ILD Reporteros (eso dice la prensa), otros siguiendo el reguero de dólares que dejaba Odebrecht para que miraran a otro lado y el Perú dejara de cobrar miles de millones de dólares de deuda tributaria, donde fiscales del equipo especial Lava Jato ‘marearon la perdiz’ en el tiempo de la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos (Marz2019-Marz2022) inhabilitada como fiscal por el Congreso de la Republica en 2023, actos de corrupción en los que "se vendió la función pública al más alto nivel"; o quizá, lo más reciente, caso de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides destituida por la Junta Nacional de Justicia, en una lucha de poder; un ‘triunvirato enfrentado’ (ejecutivo, legislativo y Ministerio Público), que ante un desajuste de la triada que se masticaban pero no se tragaban, se desató una descarnada lucha de ‘poder por el poder’ el 27 Nov 2023, cuando la Fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta de la república Dina Boluarte por las muertes en las protestas de Dic 2022 - Ene 2023.

Por lo que, haciendo un símil, perfectamente se le podría llamar la noche de los cuchillos largos. Ya que la presidenta Dina Boluarte al día siguiente, el 28Nov2023 pidió la renuncia de la titular del MP; “la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha perdido ‘objetividad’ para liderar el Ministerio Público; dijo (Noticia RPP). La fiscal tenía de aliados a congresistas y la presidenta tenía como aliados a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; la que a su vez investigaba a la fiscal, a quien la tenía en la mira para una posible destitución o inhabilitación. Como se ve, razones tenían, pero hasta ese momento las partes enfrentadas sólo se enseñaban los dientes. Hasta que estalló todo. A la vista está; que “se acuchillan” sin piedad dejando muertos y heridos en el camino; nunca mejor dicha la metáfora empleada (aunque la noche se prolongó por varios días y los cuchillos una vez blandidos se cobró su primera víctima - la fiscal). Se había desatado una lucha de poder, donde la operación Valquiria (versión peruana) impulsada por una fiscal disidente fue el germen y detonante de una serie de conspiraciones entre el triunvirato, que acabó con la Fiscal de la Nación. Hecho que quedará para los anales de la historia reciente del Perú como tiempos oscuros de la justicia y el poder.

Muchos se estarán preguntando, y qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando. Pues en todo ello, parte de culpa se lo debemos al sistema judicial acusatorio, porque a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se le dio y permitió tanto poder a los fiscales, que incluso en una cruenta lucha entre ellos como la que estamos viendo y viviendo, cual pelea de perros, su sangre salpica a todos; tanto que estos líos y vendettas desestabilizan el país.

Estos ejemplos sólo son ‘la punta del iceberg’ de todo un conglomerado de desatinos de la forma de proceder de los fiscales, que empoderados

inconstitucionalmente por el NCPP y embriagados de poder en nombre de la justicia cocinan atrocidades jurídico-legales en el seno de su ecosistema funcional e institucional, que bien cabría etiquetarlo como de disfuncional, porque en vez de ser **garantes de la legalidad** se subieron al carro del sistema judicial acusatorio sin más, sin reparar, repasar y respetar la constitucionalidad, es decir, se auparon al carro de la antijusticia.

Así pues, el sistema judicial acusatorio que recoge el Nuevo Código Procesal Penal Peruano, que convierte a los fiscales en seres poderosos omnipresentes, es toda una parafernalia incoherente y absurda que favorece la corrupción y favorece a la delincuencia so pretexto de garantizar los derechos humanos del delincuente o justiciable, derechos que organizaciones globalistas como la ONU han rebautizado como derechos fundamentales ante la falta de credibilidad y fuerza del nombre primero.

A la postre, derechos humanos o derechos fundamentales de los delincuentes es la misma chola con diferente calzón. Un cliché que abanderan ideologías progresistas apoyados en propaganda y programas sostenidos y financiados por movimientos globalistas, a través de los cuales, 'le han comido la tostada' a la justicia en Latinoamérica invadiendo países en vías de desarrollo, como Perú, México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, países de Centroamérica y otros más.

Todo ello, lo explicaré y desgranaré más adelante de una manera sencilla dentro de lo que cabe, empleando incluso un lenguaje coloquial, para que los no letrados o legos en derecho lo puedan entender, pero guardando siempre el rigor jurídico que corresponde.

El sistema judicial acusatorio, también **llamado adversarial** (de confrontación o contradicción), pone a la víctima y al delincuente al mismo nivel y condiciones. Aunque como ya he explicado, la víctima en este sistema deja de ser víctima y pasa a ser sólo agraviado o perjudicado con sus intereses en manos del fiscal.

Este sistema es perverso, **promueve la no persecución penal** de los delincuentes habituales de lo que es conocido como delincuencia común, con lo cual, los que delinquen no tienen un freno ni tampoco un escarmiento, por lo tanto, la delincuencia se generaliza, se vuelve endémica en el país. Los criminales y asesinos pueden ser torpes, pero no son idiotas; se han dado cuenta que ellos delinquen y no les pasa nada. Ante ello, la ciudadanía se encuentra con las manos atadas. Es tal la indignación y desesperación de la gente que busca justicia, qué ante la ausencia de ésta, se quieren tomar la justicia por su mano.

La acción penal no debería estar en manos del Ministerio Público de forma exclusiva; también debería estar en manos de las víctimas directamente sin intermediarios, para que estas puedan ejercerla con entera libertad y en uso de su derecho a la tutela judicial efectiva y a que se les haga justicia. Esta limitación y distorsión es promovida y propia del sistema judicial acusatorio.

Con el sistema de justicia antiguo o tradicional, el que teníamos antes que entrara en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), la víctima de un delito podía ejercer la acción penal en su propio nombre, con lo cual, tenía asegurada su condición de víctima como tal y con ello se le aseguraba la tutela judicial efectiva. Eso, le aseguraba luego ya en el juicio, personarse con su abogado y ejercer o hacer uso de su propia acusación particular.

Eso, independientemente de si se trataba de un delito perseguible de oficio, en cuyos casos, obligatoriamente estaba presente el fiscal para ejercer en nombre del estado y del interés general la acusación fiscal. Lo cual era una garantía total para que se hiciera justicia; la víctima iba a juicio (si lo había) muy bien arropada ya que iba acompañada por la acusación fiscal y la acusación particular. Eso sí que era buscar justicia.

Por lo tanto: No se trata de ir a por plata como actor civil, se trata de que se haga justicia, y para ello, hace falta que la víctima, ejerza la acción penal por sí misma y se constituya en su momento como acusación particular.

Los mayores de generaciones pasadas, ante un hecho criminal tenían una máxima popular que decía, “el que la hace la paga”. Para eso estaba el juez para imponer el castigo conforme a ley. Y no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Lo contrario es una perversión de la justicia. Perversión que el sistema judicial acusatorio nos ha colado por la puerta falsa y que nadie lo ve.

LA ACCIÓN PENAL Y EL ESTADO

La acción penal, además de estar en manos del Ministerio Público en nombre del interés general (por parte del Estado); en los delitos perseguibles de oficio, la acción penal debería estar en manos de todos, en poder de la gente, en poder de las víctimas. En otras palabras, a la denuncia debería abrírsele todos los caminos y posibilidades para que la tutela judicial efectiva no quede en papel mojado. Es decir: Que la acción penal de la víctima ejercida por ella misma, al tener amparo constitucional, debería estar garantizada y protegida por ser un derecho fundamental. No cabe duda, que el auxilio judicial, el arbitrio judicial, el amparo judicial y la tutela judicial efectiva son motivos más que suficientes para que la acción penal de la víctima ejercida por ella misma esté garantizada; ya sea a través del juzgado de Guardia directamente o a través de la policía si esta interviene o recibe denuncia. Eso, si se quiere respetar el verdadero espíritu de la norma constitucional.

Si hay denuncia de la víctima en sede policial; hasta que la policía no haga de conocimiento o ponga a disposición judicial, el fiscal al ser luego parte procesal, "no debería pintar nada" en fase policial, ya que aún no se ha iniciado formalmente el proceso penal. Si la denuncia aún no está en manos del juez, carece de sentido que un fiscal haga de cribador de la acción penal; por lo tanto, no debería interferir ni ser protagonista; salvo para ejercer su labor constitucional de garante de la legalidad y para activar la acción penal en fase jurisdiccional en nombre del interés general independientemente de lo que la víctima por su parte haga con la acción penal en su nombre. Por supuesto, el fiscal también podrá sustentar la acusación fiscal si es el caso.

Ese es el procedimiento constitucional previsto. Ese es el camino correcto si se quiere realmente dar una oportunidad a que se haga justicia, lo demás es una distorsión de la misma. En un 'Estado de derecho' primero está la ley luego las arbitrariedades de los gobernantes en nombre del Estado. El gobierno vía Decreto Legislativo no puede en nombre del Estado otorgar la TITULARIDAD de la **Acción Penal** **(*)** a los fiscales si expresamente la Constitución no lo dice ni lo contempla porque iría contra el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva y contra el mandato constitucional.

(*) **La acción penal**: *Es el punto de partida del proceso judicial en la jurisdicción penal, se origina a partir de un delito y supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. El ejercicio de interponer esta acción es un derecho fundamental que salvaguarda* ***el acceso a la justicia*** *donde un juez juzga los hechos que la víctima denuncia como delito. Es decir, la acción penal debería garantizar la tutela judicial efectiva.*

Si es así de claro; la pregunta es:

¿Por qué entonces el sistema judicial acusatorio lo distorsiona, se apropia de la acción penal para dárselo a los fiscales a través del NCPP que se inventa una certeza y le otorga certificación de TITULAR?.

La respuesta la encontramos en un mal uso por parte del Poder Ejecutivo de las facultades legislativas del **Art. 104** de la Constitución **(*)** que fuerza la distorsión legislativa para que fuera posible vulnerar la Constitución a través de una ley procesal, en este caso, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que nace viciado de inicio, está plagado de inconstitucionalidad; en este caso concreto, recoge una TITULARIDAD para la acción penal que la Constitución no lo dice ni contempla. Que alguien me diga dónde dice aquello expresamente. Por lo tanto, tal aseveración, que el Ministerio Público es el **titular de la acción penal**, no es verdad. Es una invención del NCPP. No dice eso la Constitución. Esa titularidad otorgada por el NCPP, es una vulneración constitucional y un mal uso del poder del Estado.

(*) ***Artículo 104.- Delegación de facultades al Poder Ejecutivo***
El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.

Lo cierto es que:

Los orígenes de la acción penal se remontan a los tiempos en que el Estado se hizo con el monopolio del uso de la fuerza; al inaugurarse la acción penal, ésta reemplazó a la venganza y a la autodefensa, al ser el Estado quien asumió la defensa y el resarcimiento a los ciudadanos. Por lo tanto, esto supuso un ejercicio de poder por parte del Estado y el deber de tutela hacia los ciudadanos que sufren las consecuencias de un delito cometido contra su persona.

En un sentido social y filosófico, la acción penal es una de las formas que tiene el Estado para reestablecer la paz social que es alterada por la comisión de un delito. El ejercicio y promoción de la acción penal debería ser ejercida tanto por el poder estatal a través de los fiscales en nombre del interés general, como por la víctima por sí misma y en su propio nombre. También debería ser posible su ejercicio por acción popular en delitos perseguibles de oficio (en defensa de todos como víctimas), sobre todo para denunciar delitos cometidos desde el poder.

Por lo tanto, no debería estar reñido que además de la asistencia del Estado a través de los fiscales, las personas puedan ejercer como víctimas y tener en sus manos la acción penal en su nombre y ejercerla sin que nadie tenga que interponerse en su camino hacia la tutela judicial efectiva.

En otras palabras. Si la acción penal es pública (de todos), el Estado no debería apropiársela y regalársela al Ministerio Público, porque entonces la acción deja de ser pública en sentido estricto y pasa a ser una acción penal estatal, secuestrada por el poder, “confiscada” e impuesta. Eso sólo es posible en una dictadura, admisible y propio de regímenes totalitarios, como el comunista, que cosifican a la persona y se apropian hasta de su alma; donde el Estado es el

dueño del ser humano. Pero en un Estado de libertades y derechos, no es admisible se le prive derechos fundamentales a la víctima.

Incluso, aunque la acción penal fuera declarada estatal; la acción, no debería regalársela a los fiscales en exclusiva, porque los fiscales son parte en el proceso penal. Con lo cual, los mismos argumentos que utilizaron para satanizar y quitarse de en medio a los jueces de instrucción, tendría que valer para invalidar la actuación de los fiscales (contaminación, inquisitorial, dictador, dispersión, multifunción, saturación, ineficacia, etc, etc,); a los que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) les da excesivo protagonismo y muchos cometidos (de policía, de juez y de fiscal), incluso hay casos en que el fiscal es juez y parte en etapa no jurisdiccional; y todo ello, con poderes ilimitados a riesgo y conciencia de ser conocedores de estas transgresiones constitucionales. Poco falta que los fiscales hagan de curas, psicólogos, concejeros, curanderos y hasta de padrinos de los delincuentes por oficiar los mejores arreglos para estos (acuerdos reparatorios) y por ser tan condescendientes con los criminales poniéndolos en libertad sin más argumento que “la oportunidad”.

Las personas de bien no entienden ni aceptan que con el sistema procesal acusatorio se renuncie a la lucha contra el crimen y se favorezca la delincuencia y al delincuente; extremos que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) lo aborda como una simple cuestión relacionada con la “**resolución del conflicto**”, con prácticas, formas, procedimientos y ritos procesales, cuya filosofía que las rige y cimenta, riñe con las costumbres y forma tradicional de administrar justicia en nuestro país; además de chocar con la norma constitucional vigente.

LA ACCIÓN PENAL EN LA MIRA

La acción penal, es la facultad que tiene un individuo para iniciar un proceso penal; y, también, la obligación que tiene el estado de ejercer el ius puniendi ante un hecho que reviste los caracteres de una infracción penal. Ambos conceptos, no son exclusivos ni excluyentes, la diferencia estriba en el sujeto que la lleva a cabo, y la naturaleza jurídica de la acción, si bien, en nuestro ordenamiento jurídico, la acción penal es publica, su ejercicio puede ser público o privado. Y debería ser ejercida tanto por el Ministerio Público como por la víctima por sí misma. E incluso ejercida por acción popular en defensa del interés colectivo. Constitucionalmente, eso es lo previsto.

No obstante lo dicho, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) designa al Ministerio Público como titular de la acción penal. Designación que la Constitución no contempla ni prevé, al menos en la literalidad constitucional no está textualmente esa designación o atribución en favor del Ministerio Público (de los fiscales) de "**titular de la acción penal**". Con lo cual, se puede decir que es un invento del NCPP, por lo tanto, inconstitucional.

Precisamente porque la acción penal es pública el Estado tiene la obligación de hacer valer el derecho a que se aplique la Ley penal en aras del interés general o colectivo para restaurar la paz social quebrantada por el delito. Por lo tanto, carece de sentido que la fiscalía se interponga en el camino de la acción penal. El interés general en un sentido estricto es que se haga justicia, y el sentido común nos dice que haya justicia; es decir, que la justicia le dé el castigo justo a quien delinque. No hacerlo sería injusticia, por eso, nada ni nadie debería apropiarse de la acción penal, ni como titular "ni como suplente" (valga la ironía).

Si bien, el único que puede atender esa pretensión es el Estado que tiene el monopolio del ***ius punendi***, no es menos cierto, que es un derecho fundamental de la víctima la tutela judicial efectiva. ***La Constitución establece que debe ser un juez el que haga justicia, no un fiscal***. A la acción penal no se le puede ni debe cambiar el rumbo porque sí. La acción penal no debe ser interceptada, desviada, desvirtuada ni mucho menos secuestrada ni pervertida a través de una simulación o remedo de hacer justicia en etapa no jurisdiccional. Los acuerdos reparatorios en etapa no jurisdiccional (incluso sin contar con la víctima) para remplazar la vía penal so pretexto de "resolver el conflicto" es antijusticia pura y dura; eso, sí que es inquisitorial, porque secuestran la acción penal y disponen de ella, y la hacen fenecer sin contar con la víctima a la que se le ignora y se le priva de ese derecho (de la acción penal) que está estrechamente ligado a la tutela judicial efectiva.

En el Perú por una flagrante violación de la Constitución a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), el ejercicio de la acción penal se halla monopolizado por el estado a través del Ministerio Público, a quien se le da la categoría de TITULAR de la misma sin reparar las consecuencias negativas para la víctima como pilar fundamental del interés general; porque, al fin y al cabo, todas las víctimas en su conjunto responden a ese todo unitario de nuestra sociedad que es el interés general. Hay la excepción en los delitos puramente

privados, o mejor dicho, tratamiento aparte merecen las querellas, que responden a los casos en que se reserva expresamente a la iniciativa de parte el ejercicio privado de la acción penal, como son los delitos contra el honor (injurias, calumnias, etc, etc); pero esa parcela es 'harina de otro costal'. Lo cierto es que en los delitos perseguibles de oficio la víctima es esencial para que se le haga justicia. Pero estamos viendo, el NCPP pervierte el procedimiento e ignora ambos extremos.

La acción penal en los delitos perseguibles de oficio debería ser irrenunciable sin posibilidad de desistimiento ni motivo de transacción extrajudicial ("acuerdos reparatorios"); salvo que el delincuente reconociera los hechos (el delito) y aceptara su responsabilidad; en ese caso, como ocurre en España estaríamos ante **UNA CONFORMIDAD**. El delincuente acepta su autoría y las consecuencias de ello, que no es otra cosa que, una condena basada en el pedido de la acusación particular (la víctima).

Así ha sido y así debería seguir siendo bajo jurisdicción e intervención judicial. Es decir que, una vez iniciado el proceso penal, sólo puede concluir con una resolución judicial que recoja la culpabilidad o no; es decir, una sentencia condenatoria o absolutoria; o incluso, en un auto de sobreseimiento (o archivo) si el juez considera que no hay lugar a juicio por falta de pruebas, porque no quedó acreditado el hecho o porque no se identificó al autor. Tal y como se está disponiendo de la acción penal actualmente, no es hacer justicia.

Según los acólitos del sistema acusatorio, la justicia debe actualizarse, ser más ágil y funcional, que hay que quitar carga procesal a los jueces. Pues si eso es verdad, deberían en primer lugar; respetar la Constitución, porque sin ello, no hay respeto a la ley que valga. En segundo lugar; si de agilizar la justicia se trata; podrían evitarse el juicio (en sede judicial) con 'UNA CONFORMIDAD', bastaría con el reconocimiento del delito; es decir, el imputado se declara culpable y acepta la condena, beneficiándose así de una rebaja de la pena prevista en el código penal; ello claro está, con anuencia de la acusación fiscal y de lo que pida la acusación particular (que hoy por hoy no existe). Eso es mejor que cortarle el camino a la acción penal con "un acuerdo reparatorio" dirigido sólo por el fiscal (muchas veces en fase no jurisdiccional); lo cual, tal y como está, es un ataque a la justicia y a la Constitución; porque ese apaño sólo busca el resarcimiento del daño material pero no alcanza la finalidad punitiva de la pena; es decir, no se hace justicia.

Por lo tanto, está fuera de lugar y no cabe en ningún caso la aplicación de los 'criterios de oportunidad'; un principio totalmente ajeno a la Constitución y contrario al principio de legalidad.

Eso de forzar la máquina de la justicia retorciendo la ley o creando procedimientos paralelos a la justicia para obligar o darle chance al delincuente para que pueda inventarse algo o tejer una mentira o una estrategia para burlar la acción de la justicia, me parece un absurdo y una tremenda obscenidad, pero sobre todo una autentica injusticia, un atentado a la misma, o quizá mejor, es el

retrato de la ANTIJUSTICIA. Salvo que sólo importe el resultado y 'les importe un pepino la justicia'. Hacer justicia es un deber y una obligación de la judicatura (eso dice la Constitución); y para la víctima, el que se le haga justicia es un derecho irrenunciable (el perdón en delitos graves no cuenta) e inembargable, por eso, la acción penal debe hacer el recorrido de la mano de la víctima, ejerciéndola ella en su propio nombre sin que nadie la interrumpa, ni siquiera un fiscal.

Así es como la acción penal se puso en la mira del sistema judicial acusatorio y así es como el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) inconstitucionalmente lo deja en manos del fiscal. Lo demás, es relleno que no merece la pena 'entrar al trapo' porque su articulado está lleno de transgresiones constitucionales, y seguirle el juego al NCPP es legitimarlo, es darle carta de naturaleza, y no cabe ni merece la pena, una ilegalidad es una ilegalidad, aunque lo recoja "una ley ilegal", como lo es el Nuevo Código Procesal Penal.

No obstante, daré algunas pinceladas sobre el particular a efectos de ilustrar mejor el tema.

Según 'el nuevo sistema penal' impuesto en nuestro país, a través del NCPP, Decreto Legislativo Nº 957; la acción penal en el proceso se puede ejercer de **tres formas**: En casos de delitos públicos, semipúblicos y privados. Todos vienen tipificados en el Código Penal, se diferencian principalmente por las partes involucradas y su perseguibilidad.

Los Delitos Públicos: Son aquellos que no están incluidos como delitos privados o semipúblicos. Pueden ser **perseguidos de oficio** o denunciados por cualquier persona que tenga conocimiento del hecho. Las autoridades inician el procedimiento penal y proponen las penas. Ejemplo; tráfico de drogas, los delitos contra Hacienda, la propiedad intelectual, entre otros.

1.- Ejercicio público de la acción penal absoluta

*(**art. 1, inc. 1** del NCPP – 2004). "Corresponde a los casos de los delitos de persecución publica y el titular es el Ministerio Público".*

Debo decir que: Lo primero, lo de persecución pública, es legalmente discutible; y lo segundo (que el titular es el Ministerio Público) es constitucionalmente ilegal.

Se puede ver claramente la manipulación, la trampa, el engaño. Los acólitos del sistema acusatorio rehúyen mencionar "delitos perseguibles de oficio", y en su lugar le pintan la cara a la justicia y se lo cambian por "delitos de persecución pública". La razón es simple, los delitos perseguibles de oficio estaban relacionados con la persecución a cargo de los jueces de instrucción y conllevaba una obligatoriedad judicial. Por eso, que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) los ha eliminado; borrando con ello cualquier reminiscencia. Al cambiarle de nombre, por delitos de persecución pública, eliminó la obligatoriedad y rompió el vínculo con el viejo sistema judicial. Es decir, que

tomando como punto de partida la acción penal, todo queda en mano de los fiscales.

Con todo ello, sin que nadie lo advierta ni se escandalice, le otorgaron a los fiscales la persecución de estos delitos, para que haciendo uso de la oportunidad hicieran su agosto todos los meses del año. Así lo recoge el NCPP; por lo tanto, tiene una fachada o apariencia legal, pero visto desde la Constitución, enajenar la acción penal en manos de los fiscales es inconstitucional. Que me diga alguien dónde recoge tal barbaridad la Constitución.

De esta forma los acólitos de la nueva justicia generadores de doctrina en favor del sistema judicial acusatorio se sacaron de la manga nuevos principios, términos y hasta dogmas, que no son más que nuevas argucias, para hacerse con todo lo relacionado con la justicia. Y claro está, el ejercicio de la acción penal no podía quedar al margen, era un bocado demasiado apetitoso como para desentenderse, y a por él fueron, para dárselo a los fiscales, que actualmente gracias al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) fungen ser la caballería del nuevo sistema de justicia (del sistema acusatorio).

Así es como, a sabiendas que 'el principio de oportunidad' es totalmente contrario 'al principio de legalidad', echaron mano una vez más de sus ocurrencias, para generar artificialmente una especie de ingeniería dialéctica alrededor del que han llamado '**principio de oficialidad**'; 'mezclando papas con camotes', para sacar de la chistera un artificio diciendo que todo viene del principio de necesidad; y que este puede tener distintas acepciones: "El **principio de necesidad** como sinónimo del **principio de legalidad procesal**", y "El principio de necesidad como principio de oficialidad".

De esta forma, es como han burlado y burlan la norma constitucional, y lógicamente, "se ríen en la cara" del verdadero '**principio de legalidad**'; que no es otra cosa que, el pilar fundamental y soporte principal de la justicia, para garantizar que sea un juez quien haga prevalecer la ley, haciendo justicia en aras de la tutela judicial efectiva.

La cara opuesta a la justicia, es cualquier otra que se oponga a ella, como es el 'principio de oportunidad', que hace de cortafuegos a la acción penal evitando que llegue a su destino para que la justicia auténtica actúe. Lo demás es echar mano a artificios baratos pérfidos con la Constitución para burlar la norma y el muro infranqueable que es 'el principio de legalidad', al que quieren pervertir sacándolo de contexto, quieren 'sacarle flecos' y 'hacerle un roto' por donde no lo tiene para desvirtuarlo, quieren que la justicia ante la judicatura sea nula, sea historia, que no exista, haciéndola pasto de las llamas que trae el sistema judicial acusatorio.

Decir que el 'principio de oficialidad' es un derivado del 'principio de legalidad'; lo cual, es un despropósito, porque a **la legalidad** poco le importa quien lleve a cuestas la acción penal, lo que le importa a la justicia es que se cumpla la ley y se le haga justicia a la víctima garantizándole la tutela judicial efectiva. Es por eso que, el principio de legalidad en nada se parece al principio de oportunidad y sus pseudo aliados colaterales (necesidad, oficialidad, etc, etc.). Es decir, que

el principio de legalidad para nada calza ni comulga con el sistema judicial acusatorio; pero los acólitos de éste, son capaces de torcer no sólo la norma sino también los principios y su esencia. El fin justifica los medios; pervertirlo todo es la nueva estrategia, romper con moldes, con lo antiguo y con todo lo que representa y significó la justicia tradicional de toda la vida.

Por eso se han sacado de la manga que el "núcleo esencial del principio de oficialidad es el ejercicio obligatorio de la acción penal por un órgano público", es decir, por los fiscales. Pero se olvidan de la víctima, que su accionar en nada perturbaría a la acción oficial; es decir, que perfectamente la víctima podría ejercer la acción penal en su nombre al margen de lo que haga o deje de hacer el fiscal ejerciendo la acción penal en nombre del interés general u oficial.

Los acólitos del nuevo sistema de justicia en el Perú han copiado este argumento (el de la oficialidad) de España, concretamente de la teoría elaborada por el profesor Alfredo Vélez Mariconde, basada en el sistema procesal argentino; es decir, una propuesta doctrinal que es copia de copia (por no decir plagio de plagio), acerca del '**principio de oficialidad'** **(*)**.

(*) **"***El principio de oficialidad, es aquel según el cual la iniciación, impulso y desarrollo de los procesos judiciales y de los procedimientos administrativos depende de un órgano público y no de la mera voluntad de las partes. Implica que el Estado tiene la potestad o el deber de ejercer la administración de justicia, reprimiendo al responsable de infringir la norma, garantizando la seguridad jurídica".*

Pero lo que no dicen, es que **la obligatoriedad** del ejercicio de la acción penal por un órgano público (la fiscalía) en ningún momento está reñido con el derecho de la víctima de ejercer la acción penal por sí misma y en su nombre; así es en España de donde han plagiado esta teoría. La misma, que, para poder torcerle el brazo al pilar fundamental de la justicia como es el principio de legalidad, se señala que el principio de oficialidad tiene su origen en el carácter público de las normas de derecho penal, por lo que, en la aplicación de las mismas, el *«proceso penal asume un carácter totalmente oficial»*. En ese sentido, para sortear el muro de la legalidad, Vélez Mariconde descompone dicho principio en diversos subprincipios; todo para negar lo evidente, que se están cargando la justicia y se están burlando del principio de legalidad.

¡Así las cosas, 'con esa guisa' (forma - manera), cualquiera espera justicia, cualquiera espera seguridad jurídica!; ironía que también vale para la justicia que no llega.

En nuestro sistema jurídico, la Constitución Política del Estado de 1993 en el su artículo 159 inciso 5, asigna la potestad de "ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte" al Ministerio Público. Pero en ningún momento habla de acción penal pública, lo recoge como acción penal a secas. Por lo tanto, la acción penal es única y unitaria. Cualquier clasificación, subdivisión, variación, o cambio de nomenclatura de la misma es una cuestión artificiosa y mal intencionada del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

2.- El ejercicio público de la acción penal limitado

(**art. 1, inc. 3 y 4** del NCPP – 2004)

Los acólitos del sistema acusatorio a través de este Código procesal (NCPP) dicen que la acción penal, en estos casos de delitos semipúblicos le corresponde y es su titular el Ministerio Público.

El delito semipúblico es un delito que afecta en primer lugar a una persona concreta, pero que tiene la entidad y gravedad suficiente para considerarse de interés general por atentar también contra el sistema. Son aquellos que afectan la moralidad pública y la seguridad de los ciudadanos, pero son de menor gravedad que los delitos públicos. Debido a que puede afectar a la intimidad de las personas, solo puede ser perseguido si media denuncia del agraviado.

Según el NCPP, el ejercicio de la acción penal tiene dos limitaciones en estos delitos**:**

-Delitos que son objeto de acción penal por el Ministerio Publico cuando el agraviado promueva la persecución penal a través de la denuncia de parte; por ejemplo, los delitos tributarios, los delitos bancarios, etc. En estos casos el fiscal puede solicitar al agraviado la autorización correspondiente (inciso 3).

-Delitos que solamente pueden ser objeto de acción penal por el Ministerio Publico, cuando el congreso u otro órgano público autoriza el ejercicio de la acción penal a través de un debido proceso (inciso 4).

3.- Ejercicio privado de la acción penal

(**art. 1 inc. 2**) del NCPP – 2004)

Se ejercita a través de la interposición de una querella de la persona afectada, se tramita mediante el proceso especial por delito de ejercicio privado de la acción penal. Es lo que siempre se ha venido practicando en términos de justicia.

Corresponde a los casos de delitos privados como son las calumnias e injurias, delitos que afectan el honor y la dignidad de las personas y su titular es el sujeto pasivo del delito. No atentan contra un bien jurídico general, sino contra una persona específica. Ni terceros no afectados ni las autoridades pueden promover el procedimiento de oficio de delitos privados: **Calumnia:** Imputar a alguien la comisión de un delito sabiendo que es falso. **Injuria:** Afectar la dignidad o prestigio de otra persona con manifestaciones de opiniones o hechos.

Sin embargo, los acólitos del sistema acusatorio para justificar su no intromisión en esta parcela, dicen que estos casos constituyen una excepción al principio oficial, siendo que en estos casos el Ministerio Público carece de legitimidad para promover la persecución penal. Lo cual es cierto, el ministerio público no puede arrogarse la titularidad de lo que la Constitución no le otorga, menos aún si hay una víctima de por medio que puede hacer valer sus derechos por sí misma.

El principio de oportunidad como excepción al ejercicio de la acción penal

El principio de oportunidad constituye la antítesis del principio de legalidad. Lo recoge el Art. 2 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), fundamenta su sistema procesal en que los fiscales (Ministerio Público) están autorizados a no ejercitar la acción penal cuando se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 2 y otros de ese mismo Código procesal penal.

La aplicación del principio de oportunidad puede promoverse de oficio por el Ministerio Público, con consentimiento del imputado o a pedido de este. Por lo tanto, para el principio de oportunidad la víctima es cero, se aplica ignorando totalmente a la víctima.

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) establece que el Ministerio Público "podrá" abstenerse de ejercitar la acción penal, con lo cual, le otorga poderes omnipotentes que son contrarios al propósito y esencia de la función jurisdiccional como es el hacer justicia, es decir, contrario totalmente a la administración de justicia constitucionalmente a cargo de la judicatura, lo cual, a vista y crítica de juristas con apego al orden constitucional, esta facultad recogida por el NCPP abre la discusión de si el principio de oportunidad genera un derecho o una potestad discrecional sin límite de los fiscales, basándose en la valoración de la oportunidad.

Esto en otras palabras es, el poder o el deber de ejercitar o no la acción penal por parte de los fiscales tan sólo empleando su criterio y verificando en base a la oportunidad los presupuestos legales establecidos en la norma procesal (NCPP) que hace rato es evidente que está más que cuestionada.

Reflexiones finales sobre la acción penal y la norma procesal

1.- La acción penal como requisito existencial del sistema procesal penal peruano, constituye un poder-deber de activar a la jurisdicción penal para lograr la aplicación del derecho penal sustantivo a un caso concreto.

2.- La acción no es estática sino dinámica (eso dicen): Su ejercicio no se agota con la interposición de una denuncia penal, ya que debe mantenerse durante todo el proceso judicial, a fin de que esta pueda existir. Sin acción penal no hay jurisdicción.

Eso es lógico, pero una vez accionada y el juez asume jurisdicción, en los delitos perseguibles de oficio la justicia no puede ser interrumpida, y menos por un fiscal; eso se presta a politización, corrupción y ausencia de justicia. Las demás acusaciones son necesarias, deberían contar y ser tomadas en cuenta.

3.- El ejercicio de la acción penal justifica la apertura del proceso penal y su ejercicio mantiene vivo el proceso penal. La acusación es el momento culmen

del ejercicio de la acción penal. El sistema acusatorio encarnado en el NCPP promueve que debe ser sólo la fiscalía la que acuse.

Sin embargo, en la Constitución no existe la prohibición que la víctima vaya como acusación particular, por lo tanto, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) al discriminar a la víctima quitándole el derecho de ejercer por sí misma la acción penal vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.

4.- Los acólitos del sistema judicial acusatorio, dicen que: Siendo la acción penal dinámica, la no formulación de la acusación significa el cese del ejercicio de la acción penal y la imposibilidad de continuar con la función jurisdiccional, por lo tanto, la pérdida del objeto procesal.

Eso demuestra que es una barbaridad, porque si la víctima fuera parte en el proceso como acusación particular la acción penal estaría viva hasta la sentencia.

5.- Dicen también que, el cese del ejercicio de la acción penal es una especie de sustracción del objeto del proceso penal por lo que al igual que en el proceso civil configura una forma de terminación anormal del proceso sin sentencia sobre el fondo.

Pues, al respecto debo decir que nuestra Constitución no contempla este sistema, por lo tanto, en los delitos perseguibles de oficio la justicia no puede abstraerse sólo porque el fiscal se inclina y mira hacia el otro lado de la justicia. Además, querer equiparar la vía penal a un proceso civil es pensar en el resultado material como finalidad y final de la resolución de un conflicto. ¡Y la justicia qué!

6.- Bajo el esquema del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) sus acólitos dicen que se tiene que distinguir el momento de promoción de la acción penal (que es con la formalización de la investigación preparatoria), del momento de ejercicio que se presenta en la acusación, siendo la '**acusación fiscal**' un acto postulatorio, con el que se fundamenta y deduce la pretensión penal.

7.- Lo cierto es que esta norma procesal (NCPP) se desentiende de la víctima y la deja sin '**acusación particular**'. Y por supuesto, en este nuevo modelo de justicia, también se echa de menos la existencia de '**la acusación popular**' en delitos que afectan intereses colectivos, donde se hace más que necesaria y es común la utilización de esta figura a través de asociaciones independientes.

8.- De conformidad con el NCPP, para que el fiscal pueda formalizar investigación, se exige la identificación o individualización del presunto autor (art 336.1); es decir, se dirige contra persona física determinada. Si no la hay; ya sea porque la investigación no arroja buenos resultados o porque no se puede identificar o individualizar al autor, la probabilidad de impunidad es muy alta.

9.- Incluso ya en investigación preparatoria, si los fiscales no logran construir un caso, todo queda en nada, como casi siempre. ¡Qué tipo de justicia tenemos!.

LA ACCIÓN PENAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

"Artículo IV. (del NCPP). Titular de la acción penal.

1. *El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad.*

2. *El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.*

3. *Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición.*

4. *El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos.***"**

(*) Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley N° 30076, publicada el 19 de agosto de 2013.

ARTÍCULO 1 del NCPP. - Acción penal.

La acción penal es pública.

1. *Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular.*
2. *En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente. Se necesita la presentación de querella.*
3. *En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente.*
4. *Cuando corresponde la previa autorización del Congreso o de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento previsto por la Ley para dejar expedita la promoción de la acción penal.*

Concordancias
C: arts. 99, 103, 109, 159, 166; CP: art. 138; NCPP: art. IV TP.
Jurisprudencia del artículo 1 del Código Procesal Penal
Corte Suprema
1.- Delitos tributarios: no puede incoarse acción penal si ya se regularizó situación ante Sunat [RN 1543-2019, Lima]. Link: bit.ly/3niEW8U
2.- Acción penal: Dos beneficios del «principio de oficialidad» del fiscal en el proceso penal (caso Lady Guillén) [RN 1969-2016, Lima Norte]. Link: bit.ly/3ouZvmZ
3.- Principio acusatorio: exclusiva potestad del Ministerio Público de incoar acción penal [RN 2330-2012, Junín]. Link: bit.ly/39THjMw

4.- Proceso contra funcionarios públicos: no se necesita autorización previa del Fiscal de la Nación para ampliar una investigación contra un investigado por otro delito [Apelación 29-2022, Corte Suprema]. Link: bit.ly/3BPqdKO
5.- Principio acusatorio: fiscal es el único que puede determinar los hechos, calificación jurídica y emitir acusación (precedente vinculante) [Queja 1678-2006, Lima]. Link: bit.ly/43vM84R

El Art. 1 del NCPP (Nuevo Código Procesal Penal), lleva por título 'ACCIÓN PENAL', y en el sub título recoge como enunciado que "**La acción penal es pública**".

Al respecto, es preciso decir que:

Si fuera así, SI ES PÚBLICA **la acción penal** como reza el enunciado, las personas que son víctimas de un delito deberían tener amparo inmediato de un juez; es decir, tener garantizado el amparo judicial; o si se quiere ser garantista, la presunta víctima por lo menos debería tener garantizado **el arbitrio judicial**; y eso, actualmente no se está dando ni es así. Esto debería valer tanto para los delitos perseguibles de oficio como para los delitos por denuncia de la víctima.

Lo que ocurre, es que, con la implantación (imposición) del sistema judicial acusatorio, el globalismo y las ideologías progresistas están pervirtiéndolo todo, ideas, conceptos, principios, valores, significado de las palabras y hasta los diccionarios (incluido el jurídico). Y con ello, claro está, la justicia anda al revés; últimamente están creando doctrina y jurisprudencia muy alejadas del principio de legalidad. Oportunismo puro y duro. Por eso, le llamo yo **la antijusticia** al sistema acusatorio y su instrumento, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y todo lo que el alberga.

Dicho esto: Si la acción penal es pública, quiere decir que es de todos, y si es de todos, cada individuo (con lo que le toca) debería ser libre para disponer y hacer lo que quiera con lo que le afecta en defensa de su derecho como víctima de un delito. Eso, independientemente de lo que haga o deje de hacer el Ministerio Público en defensa del interés general y/o representación del Estado. Y digo bien, EN REPRESENTACIÓN, porque el hecho que en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se diga que es el titular de la acción penal, no quiere decir que sea el dueño de la misma; y no lo es, porque la Constitución no dice eso. La Constitución, sólo contempla qué **en nombre de lo público**, el Ministerio Público (la Fiscalía) es un mero promotor de la acción penal en representación DE LOS DEMÁS, pero no de la víctima, que constitucionalmente tiene autonomía para ejercer la acción penal por sí misma, no ha sido inhabilitada ni despojada de ese derecho fundamental ni de la titularidad del daño que le afecta si es víctima de un delito. (Art. 2 y Art. 3 de la Constitución).

Al decir **los demás** es evidente que me refiero AL PÚEBLO, a la gente en general. 'El poder del Estado emana del pueblo'; eso dice el Art. 45 de la Constitución, por lo tanto, el Estado no puede desarmar a la gente (a su pueblo) dejándola sin el arma principal que le asiste como la víctima y como derecho ante un delito, como es **la acción penal** ejercida por ella misma.

Por el contrario, a la víctima se le deben abrir todas las vías posibles para poder ejercer la acción penal en su camino hacia la tutela judicial efectiva, sin fiscales

que criben la acción, ni códigos procesales que normen en contra de su ejercicio pleno por parte de la víctima. Lo contrario, es una obstaculización a la justicia y a que se haga justicia; una artimaña para favorecer la delincuencia.

Sin la víctima ejerciendo como tal, y la acción penal en manos de un negociador que se vale de la oportunidad como principio; el delito más parece el botín de un negocio llamado justicia, donde las partes implicadas y los operadores de la misma juegan a cualquier cosa menos a que se haga justicia; un teatro de trileros que nadie entiende, porque entre el caos que se genera y la delincuencia que crece, la corrupción y la impunidad alimentan el negocio. La justicia no debe tender a ello ni siquiera parecerlo. El delito se combate haciendo justicia. No dejemos que el delito mercantilice la justicia.

Por ello, LA ACCIÓN PENAL no debe ser entendida ni considerada como si fuera propiedad del Ministerio Público, que actualmente funge como dueño (titular), ya que se le ha adjudicado como propia en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Por eso, la justicia está como está, sumida en un callejón sin salida; porque el NCPP ha puesto la acción penal al servicio del sistema judicial acusatorio, al servicio de los fiscales que son la caballería de la nueva justicia. Siendo así: El principio de legalidad y el principio de oportunidad no casan ni calzan, no son compatibles respecto a la acción penal.

Por otro lado; si la acción penal es pública no significa que sea estatal. No hay que confundir PÚBLICA con ESTATAL. Todos sabemos que el Estado delega, descentraliza, etc., etc.; pero si nos salen con la monserga de que el Estado somos todos; entonces, no olvidemos que el individuo a título personal como víctima tiene su cuota que es propia y que es irrenunciable e inconfiscable, porque lo que le afecta a la víctima forma parte de sus derechos fundamentales, como es la tutela judicial efectiva respecto a la acción penal si ha sido víctima de un delito; constitucionalmente así está previsto.

Sino que me digan, en la Constitución dónde está la prohibición a la víctima, que diga textualmente, *"se prohíbe a la víctima ejercer la acción penal en su propio nombre"*. ¡No existe…!. Por lo tanto, el Estado por muy Estado que sea, o mejor dicho, los que mandan, no se pueden saltar a la torera la Constitución. Salvo que fuera una dictadura. No se pueden apropiar de la acción penal excluyendo a la víctima, porque el derecho a la vida, a la salud, a la libertad y a la justicia, etc, etc, son derechos fundamentales inalienables, inembargables, propios e inherentes de cada individuo.

En ese sentido; la parte final del último párrafo del Art. 41**(*)** de la Constitución, refiriéndose a la acción penal en los delitos cometidos tanto por funcionarios o servidores públicos, así como por particulares en caso de delitos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado; dice: "*La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad".*

(*) *Artículo 41 (de la Constitución).*

…

El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios

o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad.

En cristiano; este mandato constitucional, nos está diciendo que conforme al '**principio de legalidad**' la acción penal no tiene que ser interrumpida; tiene que llegar hasta que sea un juez el que determine su desenlace una vez que éste haya tomado conocimiento y haya asumido jurisdicción. Principio de legalidad igual a tutela judicial. Como se puede ver, no menciona el principio de oportunidad.

Es decir, que no prevé ninguna interrupción de la acción penal. Por lo tanto, el espíritu de la norma constitucional, no faculta a nadie que pueda interrumpir el recorrido de la acción penal. Y menos a un fiscal. No dice que la acción penal está sujeta o a expensas del principio de oportunidad; tampoco que ese principio se pueda aplicar. No dice que un fiscal puede o no ejercer la acción penal ignorando o dejando de lado a la víctima.

Todo ello, se complementa con el Art. 44 **(*)** de la Constitución, que estipula entre otras cosas como 'Deberes del Estado' para con los peruanos, *"el bienestar general que se fundamenta en la justicia".*

(*) *Artículo 44.-Deberes del Estado*
Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Por lo tanto, el Estado no puede privar a las personas el derecho a ejercer la acción penal en su propio nombre si son víctimas de un delito porque estaría incumpliendo este deber, en tanto en cuanto, la acción penal es el inicio del proceso para que se le haga justicia. Que mejor bienestar puede haber para los ciudadanos que a una persona se le haga justicia ante un hecho injusto como es el hecho de ser víctima de un delito.

En este Art. 44, la Constitución si prevé y lo recoge textual e inequívocamente que haya justicia como fundamento de un bienestar general para las personas. Y lo hace, dándole garantía de justicia a la gente, no arrebatándole su derecho a denunciar ni privándole de su **derecho a ejercer la acción penal** por sí misma en busca de justicia. La Constitución no dice nada que a las personas se les prive de ejercer ese derecho fundamental; no lo hace. Ni implícita ni textualmente la literalidad de su texto recoge "una confiscación" o intervención de esa índole.

Muy por el contrario, la Constitución en su Art. 3 **(*)** que reseña como Numerus apertus los Derechos constitucionales, no excluye ningún derecho fundamental; muy por el contrario, incluye incluso los implícitos y los demás derechos de naturaleza análoga o cualquiera **que se funde en la dignidad del hombre**.

(*) *Artículo 3.- Derechos Constitucionales. Numerus apertus*
*La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza **ANÁLOGA** o que se fundan en la*

dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

Por lo tanto, que mejor dignidad puede tener y sentir un hombre como persona ver que la justicia responde a su llamada. El de sentirse y ser dueña de su propia demanda de justicia.

Qué justicia puede ser aquella, si a alguien la secuestran, la lesionan o la violan, y ante ello, viene un tercero (un fiscal) y te dice, quieto ahí, te han violado, pero ya no eres la víctima ahora sólo eres agraviado (o perjudicado); quieto que "tu daño es ahora mi negocio", yo ya veré si denuncio o no denuncio (si ejerzo o no la acción penal), PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. Eso para el ciudadano de a pies no es justicia.

Por eso, cuando el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en su Art. 1 dice que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es una norma contraria a lo que establece la Constitución. La constitución no dice eso. El NCPP no puede normar en contra de la Constitución a título confiscatorio de la misma porque sería inconstitucional.

Lo que dice el mandato constitucional del Art. 159 **(*)** numeral 1: El Ministerio Público "**promueve** de oficio, o a petición de parte, **la acción judicial** en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho"; y en su numeral 5 dice: "**Ejercitar la acción penal** de oficio o a petición de parte".

(*) ***Artículo 159.- Atribuciones del Ministerio Público***
Corresponde al Ministerio Público:
1.- *Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.*
2.- Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
3.- Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4.- Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
5.- *Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.*
6.- Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
7.- Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.

Pero eso ha sido así siempre, el ministerio público en defensa del interés general se constituía en acusación fiscal y ejercía la acción en ese sentido, pero dejaba que la víctima se constituyera como acusación particular, y como tal, ejercía la acción penal por sí misma.

Por lo tanto, si se quiere validar "la titularidad" del Ministerio público respecto a la acción penal, debemos entender que ello se debería hacer con arreglo a la

Constitución. Mientras tanto, nuestra Carta Magna sólo lo reconoce como mero PROMOTOR de la acción judicial (inc.1 Art 159) y como mero encargado de ejercitar la acción penal en representación del interés público y como garante de la legalidad. Con lo cual, como ya lo expliqué antes; eso no significa que la víctima pierda su condición de víctima o se quede sin poder ejercer de mutuo propio la acción penal en su propio nombre, y en su momento, ejercer como acusación particular. Una cosa no excluye a la otra.

Mientras constitucionalmente no se diga otra cosa. Hacer lo contrario, implica obligatoriamente modificar previamente la Constitución, y eso no se ha hecho. En otras palabras, se han transgredido principios y normas constitucionales. El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) a nivel normativo va a contra corriente con la Constitución, porque atenta contra derechos fundamentales de la víctima, como el derecho a recibir justicia y a la tutela judicial efectiva.

Por lo tanto, cuando el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) dice que el Ministerio Público es el **titular de la acción penal** (Art. IV de su Título Preliminar), sorprendentemente se refiriere al auxilio que el Estado promueve en defensa del interés general para el ejercicio público de la acción penal, encargándole este cometido a los fiscales. Digo sorprendentemente por el tinte de exclusividad que le da a sabiendas que la Constitución no menciona ninguna titularidad. Lo de titular es una invención del NCPP.

Por ello, es fundamental que cada individuo como víctima en su propio nombre y derecho, ejerza la acción penal. Porque, quién mejor puede haber que la víctima ejerza por sí misma la acción penal, independientemente de lo que haga o deje de hacer el fiscal. Es decir, está muy bien que los fiscales puedan ejercer la acción penal en nombre del interés público como dice la Constitución; pero la víctima, como ente individual, constitucionalmente está habilitada para hacerlo por sí misma; la Constitución no le prohíbe (Art. 2. 24. a).

Por el contrario, nuestra carta magna, en vez de restringir derechos fundamentales, es amplia, abierta y garantista. Así, además de los mandatos constitucionales ya descritos, en el **Art. 2. 20 (*),** recoge como **derecho fundamental**, que toda persona **(la víctima),** tiene derecho a *"formular peticiones… ante la autoridad **(el juez)** competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta **(resolución)** …dentro del plazo legal, bajo responsabilidad".* Eso dice la Constitución. Así mismo, de forma análoga reconoce todos aquellos derechos sin excepción que tienen cabida en su **Numerus apertus (Art. 3)** sobre los derechos constitucionales de las personas.

(*) *Art. 2. de la Constitución*
20. *A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.*

Es más, en el mismo sentido; el **literal h**, numeral **24** del **Art. 2 (*)** de la Constitución recoge como derecho fundamental constitucional que: *"Nadie debe ser **víctima** de VIOLENCIA moral, psíquica o FISICA… **Cualquiera puede pedir** … o recurrir POR SI MISMA **a la autoridad**…".* Es evidente que esta norma al

hablar de víctima y violencia física, etc, etc, se refiriere a la perpetración de hechos que configuran delito, y cuando se refiere a la autoridad, nos está indicando a la autoridad competente que haga justicia; y ese es el juez.

(*) Art. 2. *de la Constitución*
24. *A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:*
h. *Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.*

Por lo tanto; este mandato constitucional, reconoce implícitamente que recurrir en auxilio judicial ejerciendo la acción penal por sí mismo, es un derecho fundamental de las personas; un derecho constitucional inembargable, que no debería ser cribado ni interrumpido, ni siquiera por un fiscal, y menos en nombre del susodicho principio de oportunidad que colisiona frontalmente con el principio de legalidad impidiéndole a la víctima ejercer la acción penal.

Si la Constitución no prohíbe expresamente a la víctima ejercer la acción penal por sí misma, es decir, denunciar directamente ante el juez el delito cometido contra su persona, no puede haber ley que recoja una prohibición así. Si lo hubiera, esa ley sería inconstitucional y en cumplimiento a otro mandato constitucional, nadie estaría obligado a cumplir esa ley. Una ley ilegal no es ley. Los jueces y toda autoridad ante las contradicciones entre la Constitución y una ley, deben hacer prevalecer la Constitución.

No existe norma alguna en la Constitución que prohíba a la víctima ejercer la acción penal de muto propio y a título personal, es decir, por su cuenta. Por lo tanto, una ley tampoco puede hacerlo porque entra en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales. La forma como los operadores de justicia vienen aplicando este tema es anticonstitucional.

Para que ello fuera legal, la Constitución tendría que recoger esta prohibición y sobre esa base tener una ley que de forma expresa prohíba a la víctima, diciendo que no puede denunciar directamente ante el juez ni tampoco recurrir a la justicia, prohibiéndole expresamente ejercer la acción penal; lo cual es un absurdo.

Sobre el particular, el **Art. 2. 24. a) (*)** de la Constitución, dice: *"…Nadie está impedido de hacer lo que la Constitución no prohíbe"*. Por lo tanto, si la Constitución no prohíbe a la víctima ejercer la acción penal en su propio nombre, está claro que puede hacerlo; de lo contrario se estaría vulnerando el mandato constitucional, y claro está, como consecuencia de ello se estaría atentando contra los derechos fundamentales de la víctima.

(*) Art. 2. *de la Constitución*
24. *A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:*
a. *Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.*

Dicho lo dicho y habiendo puesto en contexto y análisis la situación conceptual, doctrinaria y normativa de la **ACIÓN PENAL** en el seno de la Constitución y en la literalidad normativa del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), paso a analizar los incisos o numerales del **Art. 1 (*)** del NCPP. Un análisis crítico que nos ayude a entender el quid de la cuestión, el verdadero problema.

DISPOSICIONES GENERALES
(*) *Artículo 1 (del NCPP). - Acción penal*
La acción penal es pública.
1. *Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular.*
2. *En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente. Se necesita la presentación de querella.*
3. *En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente.*
4. *Cuando corresponde la previa autorización del Congreso o de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento previsto por la Ley para dejar expedita la promoción de la acción penal.*

Inc. 1 del Art. 1 (Acción penal) del NCPP; dice:

*"Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio Público. La ejercerá de oficio, **a instancia** del **agraviado** por el delito o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular".*

Como se puede ver, en el **inc. 1**, de este artículo, empieza el amaneramiento del 'lenguaje procesal penal', ya que se sustituye el lenguaje jurídico tradicional por un 'lenguaje procesal penal progre' (progresista) que los acólitos del sistema judicial acusatorio han impuesto en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y que éste adoptó para que "la nueva justicia" o la nueva forma de impartirla se generalice y quede normalizado este sistema.

A la vista está, que en este **Inc. 1** (y a lo largo de todo el Código procesal), en vez de hablar de denuncia se habla de "instancia", y en vez referirse a la 'víctima' habla del "agraviado". Imaginemos que a alguien le cortan el cuello y lo matan, o quizá se ensañan con una mujer y brutalmente la violan; con este Código, en vez de decir la víctima, tendríamos que decir el agraviado o la agraviada. Igual ocurre con todo, la mención de agraviado a sustituido a la víctima de cualquier otro crimen atroz o delito grave. La falta de humanidad es evidente con esta nueva justicia. Imaginemos decir; *al agraviado le han cortado el cuello, ha perdido la vida, cuánto es la reparación civil*.

Pero lo más extraño de este mandato, es que siendo 'la acción penal pública' se lo regalen sin más a los fiscales (Ministerio Público) e ignoren a la víctima; que bien, podría también ejercer la acción penal en su nombre ya que la Constitución no le prohíbe "ni le confisca" este derecho. No nos engañemos, si 'la acción

penal' no va directamente a un juez, es una burda mentira decir que es pública. Si realmente es publica, el juez y la víctima deberían ser quienes directamente vía arbitrio judicial aborden el problema en base a la acción penal.

Los fiscales en lo que le ataña a la víctima salen sobrando; eso constitucionalmente. Por lo tanto: Ahí empieza el engaño. ¿Por qué los fiscales tienen que interponerse y decidir? Si la acción penal es pública debería estar en manos de la gente, en poder de la víctima. Una acción penal sin participación activa de la víctima vulnera derechos fundamentales.

Si la acción penal es pública no necesita filtros ni cribadores del crimen en su recorrido entre la víctima y el juzgador (el juez); a eso se le llama tutela judicial efectiva, y si se quiere ser garantista, es someterse al arbitrio judicial. Si no es así, entonces la justicia no existe. Qué carajo de sistema es este, donde los fiscales se ponen a discriminar si la acción penal va al juez o no, como si estuvieran sexando pollos (este sí este no).

Los fiscales por obra y gracia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) irónicamente se han erigido en inquisidores; ellos deciden a quién perseguir y a quién hay que ajusticiar. Con la acción penal en su poder han maniatado a la víctima dejándola sin ese derecho fundamental. En qué parte de la Constitución dice que "se le confisca este derecho a la víctima", dónde dice que "se estatiza la acción penal". Que sea pública no quiere decir que sea de exclusividad del Estado. No estamos en una dictadura. El interés general cuenta, pero el interés de la víctima también. El fiscal no puede ser juez y parte.

Se ve claramente, que retorcieron el mandato constitucional para transgredirlo, y así, con una interpretación antojadiza, es como los fiscales a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se apropiaron del derecho de la víctima al auxilio judicial inmediato, y con ello, hemos pasado a que el crimen sufrido (perjuicio penal) no tenga una respuesta judicial segura; ya que los fiscales se interponen de por medio. Con lo cual, a través del NCPP se rompe el vínculo entre víctima y justicia; mejor dicho, se han cargado la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad. ¿Dónde queda la seguridad jurídica?, y ¿Qué pasa con el imperio de la ley?. De todo ello es culpable el NCPP que es el resultado y una consecuencia del sistema judicial acusatorio.

Recurriendo al derecho comparado podemos decir que:

En España la acción penal también es pública; y, sin embargo, no se da esta perversión, ni se le saca la vuelta a la norma constitucional. Como acción penal pública; ésta, está garantizada a todos ciudadanos; su ejercicio está legalmente configurado como UN DEBER para el Ministerio Fiscal (Ministerio Público) y como UN DERECHO para todos los ciudadanos. El Ministerio Fiscal es el órgano público al que la ley encomienda el ejercicio de **la acción penal** con carácter general y en nombre del interés público (del Estado).

Pero eso no quita ni impide que el ciudadano que es víctima de un delito pueda acudir por sí misma y en persona de muto propio en auxilio judicial; es decir, que

como particular tiene garantizado que su denuncia llegue a sede judicial en ejercicio de la acción penal, para que sea un juez el que determine el recorrido de la misma, independientemente de lo que haga o deje de hacer el fiscal.

Es decir, que, en España la víctima de un delito está legitimada para ejercer por sí misma la acción penal y también hacer de acusación particular, con independencia de la actuación del Fiscal. En la práctica, algunas veces ocurre que el Fiscal decide no ejercer la acusación, pero la víctima puede seguir adelante como acusación particular. Respecto a la acción penal vía denuncia, la víctima sí o sí tiene asegurada que sea un juez el que vea y resuelva su denuncia, a ello se le llama amparo judicial.

Hay casos, en que la víctima de un delito acude con "la acción penal" y la somete al arbitrio judicial, muchas veces en contra del criterio del Fiscal, pero como de este no depende de forma exclusiva el recorrido de la acción penal, la víctima puede llegar a obtener sentencia condenatoria para el autor del delito. De esa manera, se le garantiza a la víctima que un procedimiento penal puede comenzar y finalizar independiente de si el Fiscal denuncia o no denuncia, si acusa o no acusa.

En el **ordenamiento jurídico español** la mayoría de delitos son públicos; por consiguiente, son perseguibles de oficio. No obstante, la víctima en los delitos leves (en Perú faltas) puede o no ejercer la acción penal (independientemente del fiscal), y si lo hace, luego puede o no ejercer la acusación particular con o sin abogado ante el juez; es decir, puede mantener o no la denuncia.

En los delitos graves, ejercida la acción penal, la víctima tiene los mismos derechos, pero como a la vez hay acusación fiscal, si el hecho denunciado es perseguible de oficio tiene que terminar en sentencia condenatoria o absolutoria. Puede terminar también con el sobreseimiento, parcial o definitivo, por falta de pruebas o porque no se ha identificado al autor; eso significa el archivo, manteniéndose viva la acción penal, a expensas de nuevas pruebas o de identificar y encontrar posteriormente al autor; pero esa es otra historia.

El hecho que la víctima pueda ejercitar la acción penal por sí misma es muy importante, sobre todo en **delitos contra su persona** y otros. En el proceso penal español la víctima también puede ejercer al mismo tiempo y ante el mismo juez la acción civil *ex delicto*, a menos que se haga reserva de tal acción o renuncie a ella.

En el Perú, la Constitución respecto a la acción penal recoge prácticamente lo mismo que en España donde la justicia se sustenta en el principio de legalidad, por lo tanto, por sentido común no debería ser diferente. No hay razón ni motivo para que se le prive a la víctima de su derecho al auxilio judicial inmediato. Si en el Perú, constitucionalmente no hay prohibición ni existe impedimento que prive a la víctima de su derecho a ejercer la acción penal por sí misma; ésta debería ejercer como tal sin que nadie le impida ni se interponga en la acción, ni siquiera un fiscal. La Constitución no inhabilita a la víctima y tampoco le dice "tú no tienes ese derecho". Les invito a leer bien el mandato constitucional.

Si alguien comete un delito y no se le juzga por ello, es un mal síntoma de la justicia, indica claramente que el ordenamiento jurídico se ha pervertido; más, si entre la víctima y la justicia alguien se interpone en el camino, como es el caso de los fiscales respecto la acción penal; que se ponen de por medio proclamándose 'TITULARES DE LA ACCIÓN PENAL' gracias al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP); todo ello, al margen de la Constitución, ya que esta no dice tal cosa. Lo cual, es un hecho violatorio, ilegal, ilegitimo y contrario a la Constitución. Es por eso, que un fiscal, gracias al infractor NCPP es el que decide finalmente qué hacer o no con la ACCIÓN PENAL. ¿Acaso no importa lo que dice la Constitución?. Pues debería importar, porque un ordenamiento jurídico sano, si no parte del marco constitucional y no lo respeta, entonces no es un estado de derecho, por lo tanto, nadie estaría obligado a obedecer 'leyes ilegales'.

Justificar lo contrario es retorcer torticeramente LA LEY SUPREMA, ya que el mandato constitucional es claro. La víctima al no alcanzar justicia, y ante las torcidas triquiñuelas legales que le impiden obtenerla o por lo menos tenerla a su alcance, ha perdido la fe en ella y tampoco cree ya en la ley. Por eso, crece la delincuencia y la impunidad en el Perú.

Las consecuencias las estamos viendo. Ello invita a que la gente alimente su sed de venganza y se tome la justicia por su propia mano. Como así está ocurriendo en muchos lugares del país.

Con el tipo de justicia que hay ahora en el Perú, todo está patas arriba; por poner un ejemplo: "cuando un policía encuentra a un criminal infraganti y lo abate, el policía va preso; pero si un delincuente, asesina a un policía lo dejan libre". Es el mundo al revés; un contrasentido y una triste realidad, pero así es. Los fiscales encarcelan literalmente al policía que combate la delincuencia mientras por otro lado se dedican a liberar a los delincuentes.

Inc. 3 del Art. 1 (Acción penal) del NCPP; dice:

"*En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante, ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente****".***

En el **inc. 3**; continua la aberración jurídica de este Código, donde su contenido no es nada claro. Pareciera que se refiere a la querella, pero no la menciona, más bien, nos habla de delitos de previa INSTANCIA, y, es más, no menciona a la víctima sino habla del OFENDIDO. Instancia y ofendido son dos eufemismos progres para no decir DENUNCIA y VÍCTIMA. Por eso, digo que este Código Procesal es enrevesado y opaco, poco claro. Con lo cual, intentando adivinar, suponemos que otra opción es, que se refiera a 'las denuncias' que cada día los ciudadanos ponían en manos de la policía para que ésta después de su investigación policial pusiera a disposición del juez, procedimiento valido y lógico en la persecución de hechos que tienen tintes de criminalidad presunta.

Si es así, aquí a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se consuma otro atraco legal a la Constitución, que en su **Art. 2. 24**. **f,** dice claramente, que es la policía la que debe poner a disposición judicial en 48 horas (1er supuesto del literal) o en 15 días según los casos de … (2do supuesto del literal). Con lo cual, lo del fiscal y lo que dice el NCPP saldría sobrando según la Constitución.

Sin embargo, este Código, encubierta y engañosamente nos dice entre líneas, que la denuncia si no pasa por el fiscal no pasará al juez. Y eso no es lo que dice la Constitución. Han roto el mandato constitucional. Y para sonrojo de todos, el 'lenguaje progre' que usan desdeña a las víctimas, llamándolas "**el ofendido**" o "el **titular de la instancia**". Aquí nuevamente nos llevan a la confusión, porque al decir 'titular de la instancia', podrían estar refiriéndose a la víctima y su denuncia, si es así, que les cuesta decir 'denuncia de la víctima'; o quizá, nos están diciendo que se trata de la 'instancia judicial' ¿les suena eso de juzgado de primera instancia?. Como ven el lenguaje progre es engañoso.

No obstante, lo dicho: Imaginen a una mujer violada que 'en vez de ser la víctima es la ofendida'; y en vez de tener derecho a presentar denuncia, se le requiera que presente una instancia (una solicitud) sólo a efectos de que diga qué precio le pone al daño; porque al ser sólo ofendida y no víctima, sería solo un actor civil, por lo tanto, sólo puede reclamar reparación civil. Absurdo verdad.

Lo cierto es que, dado el caso, con esta norma, la víctima estaría a expensas de un fiscal que tenga a bien ejercer o no la acción penal ante el juez; con lo cual, a la víctima le supone vivir con esa duda y sufrir el daño producido por el delito, ignorada, marginada y sola, sabiendo que el violador se puede beneficiar del principio de oportunidad y quedar libre.

Lo normal sería, que la víctima sin que de por medio haya un fiscal pudiera acceder a la justicia, y que sea un juez quien decida si procede o no su denuncia, a eso se le llama arbitrio judicial (acceso a la justicia). Lo justo y correcto sería, que todos tuviéramos derecho a acceder al auxilio y protección judicial de inmediato y luego ir a un juicio justo a presencia de un juez y en sede judicial. Pero por ahora, eso no es así, al menos en fase no jurisdiccional.

En etapa jurisdiccional, lo que el NCPP denomina como investigación preparatoria, sólo si el fiscal acusa puede una causa llegar a juicio, pero para ello, el fiscal previamente tendría que construir un caso (cosa poco frecuente); de lo contrario, el asunto queda en tierra de nadie (etapa intermedia) durmiendo en una carpeta fiscal esperando a que prescriba la acción penal o el delito; en ese caso, hasta el tiempo que hace el trabajo sucio queda a expensas del fiscal. ¡Ahorro procesal, o quizá oportunidad!.

Eso de no ejercer la acción penal o de no acusar, es un atraco a la justicia en toda regla. No me vale como pretexto, que digan: Que si el fiscal no logra obtener los elementos de convicción o no logra construir un caso, valga la redundancia NO HAY CASO. Esa es la justicia que tenemos.

Todo ello ocurre, a vista y paciencia de todos, a sabiendas que constitucionalmente el Poder Judicial a través de sus jueces es el único que

puede administrar justicia. Que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), le entregara a los fiscales el manejo del interruptor por el cual se activa la justicia, es inconstitucional. Demasiado poder. Justicia que no se hace no es justicia.

Pero como ya dije antes, este atraco a la justicia lo hicieron violando el mandato constitucional. Para ello, necesitaban modificar la Constitución. Y no lo hicieron. Igual pensaron que nadie se daría cuenta. Qué el peruano es tonto o que le da igual todo.

Dejar la acción penal en manos de los fiscales para que sea sometida a una especie de censura o criba, es un atraco a la justicia, porque es adelantarse a valorar hechos justiciables, es hacer justicia sin ser juez. Es malo para la víctima y malo para la justicia.

Con el antiguo Código de Procedimientos Penales <<de 1940>> **(*)**, la policía tan pronto recibía una denuncia, en el plazo más breve (dentro de las 48 horas) o al término de la distancia lo ponía a disposición del juez; lo cual era una garantía de que la acción penal terminara en sede judicial. Mejor que un juez nadie pude garantizar justicia. Si no es así, 'apaga (velas) y vámonos'.

(*) *El antiguo sistema de justicia establecía un procedimiento ordinario con dos etapas, instrucción y juzgamiento. Durante la primera etapa, el juez de instrucción era el director de la investigación.*

Dicho todo lo anterior:

El fiscal ignorando a la víctima no puede atribuirse la acción penal en exclusividad y no debe erigirse en solitario en voz de la víctima porque nunca será igual que si lo hiciera la propia víctima per se, aunque el fiscal cuente la misma historia; y aunque luego ya para el juicio con su famosa 'teoría del caso' el fiscal monte un show o un circo, nunca podría sustituir a la víctima.

Lo cierto es que, la víctima en su nombre mostrará su verdad enmarcándolo en las circunstancias vividas del hecho delictivo, lógicamente narrado con el dolor de haber sufrido una agresión o un daño; por lo tanto, denunciar en primera persona los hechos materia del delito siempre será mejor para la víctima. Por ejemplo: En el caso de una violación; la víctima narrará y expondrá su verdad desde el dolor con descarnada sinceridad.

Con lo cual, **para la víctima** pedir justicia y tener garantizado el amparo judicial, no sólo es una cuestión de justicia, sino, tener la seguridad de poder exponer ante el juez el delito y el daño sufrido. Es decir, tener garantizado, el principio de legalidad y el poder ejercer la acción penal; la cual, a efecto de sus intereses no es una cuestión de quién acude con la acción penal (actualmente el fiscal); que también, sino, que se le escuche como víctima; de ser ella su propia voz.

En otras palabras, debería ser la víctima quién lleve la acción penal como acusación particular. **«Nada ni nadie puede (ni debe) sustituir la palabra misma de la víctima en primera persona»**, ni siquiera un fiscal; por lo tanto, es necesario seguir escuchando como lo era antes (con el sistema judicial antiguo)

su voz como víctima, escuchar su verdad, independientemente de lo que haga el fiscal (en defensa del interés general); en ese sentido, la víctima por sí misma debe poner ante el juez el ilícito penal que denuncia exponiendo su verdad; es decir, que no se le prive el auxilio judicial.

Antes de pasar a otro punto, quiero indicar que la acción penal en defensa del interés general o interés público, debería tener un alcance mucho más amplio del que tenemos actualmente en el Perú, de tal manera que además del fiscal (y ojalá también de la víctima), debería estar a disposición de **la acusación popular**; sobre todo, en los delitos de corrupción en el poder, de tal manera, que cualquier colectivo con personería jurídica (asociaciones, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos, etc, etc.) pudiera apersonarse y presentar denuncia penal ante la autoridad judicial competente. De esa manera, se evitaría estar a expensas de lo que haga o deje de hacer un fiscal, ya que la justicia se activaría por esta tercera vía; con ello, se evitaría la impunidad.

En España hay buen ejemplo de ello; ahí tenemos casos muy sonados promovidos por el 'Sindicato Manos Limpias' **(*);** que se ha constituido en un verdadero látigo contra la corrupción en el poder. Denunciando a autoridades, personas e instituciones corruptas. También el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid **(*)** hace lo mismo como celoso guardián del derecho de defensa y otros.

(*) ***'Manos Limpias****', es un sindicato fundado en 1995, ha denunciado varios casos mediáticos a lo largo de los años:*
1.- Caso Begoña Gómez*: Recientemente, Manos Limpias presentó una denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, acusándola de corrupción y tráfico de influencias. Esta es solo la última de una serie de demandas presentadas por el sindicato.*
2.- Caso Infanta Cristina*: Manos Limpias también solicitó la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos. Para retirar la acusación, pidieron hasta dos millones de euros.*
3.- Caso Pedro Sánchez y dirigentes del PSOE*: Manos Limpias demandó a Pedro Sánchez y a algunos dirigentes del PSOE por la ley de amnistía.*
4.- Caso Podemos*: El sindicato también denunció a Podemos por la financiación del partido.*
5.- Caso 'Los Lunnis'*: En el año 2000, Manos Limpias demandó a la serie de dibujos animados 'Los Lunnis' por mostrar "una boda entre dos personas del mismo sexo," considerándolo inapropiado para niños.*

Manos Limpias ha denunciado muchos casos relacionados con políticos y presuntos delitos de corrupción. Aunque algunas denuncias han sido archivadas, el sindicato es un actor relevante en el panorama legal de España.

(*) ***El Colegio de la Abogacía de Madrid*** *presentó denuncia* ***contra la Fiscalía General*** *por desvelar datos confidenciales de la pareja de Ayuso. Al ser datos "confidenciales" de conversaciones entre el letrado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal que lo investiga por presunto fraude fiscal,* ***Fiscalía General*** *habría incurrido en el delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos tipificados en el artículo* ***417*** *del Código Penal que dice: "La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".*
La denuncia subraya que el "derecho de defensa es sagrado" ya que es una "pieza básica del Estado de derecho".

FISCALES CON LA ACCIÓN PENAL JUEGAN A SER POLICÍAS

Al haber creado un dique de contención en la figura de los fiscales respecto a la acción penal; a efectos de aclarar el manoseo a que es sometida la acción penal en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), lo que hace incierto el recorrido de la misma hacia la búsqueda de justicia; es necesario dejar claro algunos puntos contemplados en la Constitución (Art. 159 inc. 1 y 5).

Inc. 1.- *Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.*
Inc. 5.- *Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.*

Si bien, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) dice que la acción penal es publica, lo cierto es que, la Constitución sólo lo define como ACCIÓN PENAL a secas, sin atribuirle el calificativo; lo de publica es cosecha del Código transgresor (NCPP). No obstante, habría que aclarar, que sí la definición de pública conlleva la connotación que corresponde "a todos" o es "de todos", ello no significa que sea estatal. La frase de: *"El estado somos todos"*, es una falacia utilizada por los progres para freírnos con impuestos confiscatorios. La acción penal, ejercida por el estado a través de los fiscales en defensa del interés general, constitucionalmente, al no haber ninguna prohibición, no está reñida con el ejercicio de la acción penal por la víctima en su propio nombre y derecho. Cabe incluso el ejercicio por acción popular. Sólo las dictaduras cercenan derechos.

En un estado de derecho, la acción penal va íntimamente ligada al principio de legalidad, y no lo digo yo, lo dice la Constitución en diversos artículos, entre ellos el Art. 41**(*)**.

(*) ***Art. 41*** *(de la Constitución)**.-** Declaración Jurada de bienes y rentas*
…

*"El plazo de prescripción de la **acción penal** se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. **La acción penal** es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme **al principio de legalidad".***

Si la acción penal es de todos; y la Constitución no le niega ni le retira el derecho a la víctima para ejercer la acción penal por sí misma y en su propio nombre; cómo es posible, que el NCPP transgreda no sólo principios sino normas constitucionales y nadie diga nada.

No es cierto que la Constitución deje la acción penal en manos de los fiscales en exclusividad. La constitución no lo dice, expresa ni tácitamente. Lo que dice al respecto es otra cosa. El **Art. 159 inc. 1**: *"Promover de oficio, o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho";* y el **Art. 159 inc. 5**: *"Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte".*
Como se puede ver: El encargo que la Constitución le hace al Ministerio Público es a título de **promotor** o de **ejerciente** de la acción penal (en defensa del interés

general), pero se refiere a la fase jurisdiccional o instancia judicial. Una cosa es "acción penal" y otra es "acción judicial".

Eso de que el Ministerio Público es el 'titular de la acción penal' es un invento del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para transgredir la Constitución; va en contra de lo que ella estipula.

Lo normal y lo constitucional es que; tanto el Ministerio Público en representación del Estado que vela por el interés público, y la víctima en su propio nombre, puedan ejercer la acción penal. No existe ninguna prohibición constitucional en ese sentido respecto a la víctima. Es en el Nuevo Código Procesal Penal donde se crea la perversión y el incumplimiento al mandato constitucional.

No es cierto que la Constitución sea restrictiva con los derechos de la víctima, y mucho menos, entrega la acción penal para uso exclusivo de los fiscales. El mandato constitucional no es excluyente, tampoco faculta a los fiscales para que hagan lo que quieran con la acción penal, y mucho menos "negocien con ella" bajo el pretexto de "resolver el conflicto" llevando a cabo acuerdos reparatorios (instrumentalizados por el sistema acusatorio); sino, para que la ejerzan en representación del Estado (del interés público) sin cribas ni censura a la víctima y mucho menos interrumpir el recorrido a la acción penal; que sí bien podría decirse que es pública, NO ES PROPIEDAD DEL ESTADO, sino de todos. En consecuencia, dependiendo del delito, le pertenece a la víctima en primera persona, y al interés general en segundo lugar.

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) ha pervertido el sistema de justicia previsto en nuestra Constitución, al incorporar en su articulado una serie de normas que contienen infinidad de transgresiones y contravenciones del mandato constitucional.

No debemos olvidar que para el fiscal la atribución de ejercer la acción penal es UN DEBER, y para la víctima esta acción es UN DERECHO. Lo que ocurre, es que el fiscal no quiere ser fiscal; mejor dicho, no quiere ser sólo fiscal porque ha encontrado en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) un instrumento ambiguo hecho a la medida del sistema acusatorio, con el cual, el fiscal, además de ser fiscal juega a ser juez y policía, todo bajo el mismo disfraz, un tridente que muta como el camaleón según qué toque (ser juez, fiscal o policía). Al menos, atribuciones para todo ello le da el NCPP. Pero todo ello, no está en consonancia con la Constitución.

Es importante recalcar, que los fiscales no son policías; la policía no es parte en el proceso penal. Por lo tanto, el recibir denuncias y la labor de investigación que realiza la policía no es jurisdiccional; lo que realiza la policía está en una fase temprana llamada tradicionalmente etapa policial. Siendo así, los fiscales defensores de la legalidad no pintan nada en ese estadio; su trabajo constitucionalmente está en fase jurisdiccional. El NCPP siguiendo consignas del sistema judicial acusatorio se ha sacado de la chistera un conejo "haciendo trampa"; se ha inventado una etapa difusa para pervertir la justicia, entre lo jurisdiccional y no jurisdiccional; donde los fiscales son amos y señores. Un fortín que desafía la lógica constitucional del equilibrio de poderes del Estado.

En otras palabras, el NCPP se salta todas las barreras y todos los límites al margen de la Constitución, y lo hace con un lenguaje poco claro, ambiguo y engañoso. Autoriza a los fiscales a realizar funciones que no son jurisdiccionales (en terreno policial), y a la vez, autoriza a los fiscales a realizar funciones que eran competencia y estaba a cargo de los jueces de instrucción (terreno jurisdiccional).

El fiscal en esta parcela, además de fiscal es juez y parte, y donde también es fiscal y policía; lo cual es una perversión del sistema judicial. Le llaman INVESTIGACIÓN PREPARATORIA o ETAPA INTERMEDIA **para burlar la Constitución**; donde los fiscales se mueven como peces en el agua sin barreras ni limitaciones, donde si quieren echan mano de los instrumentos que el sistema acusatorio pone en sus manos, como es poder aplicar el PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, y con ello, hacen y deshacen. Digo burlar, porque la Constitución no contempla estos desatinos o desvaríos normativos. Todo ello es contradictorio con el ejercicio de la acción penal y lesivo para la víctima. Esta norma crea una situación confusa y anómala que pervierte la justicia. Si el fiscal es parte en el proceso penal en defensa de la legalidad, su TRABAJO debería ser JURISDICCIONAL.

Si es así; y la Constitución es la que debe prevalecer por encima del Código Procesal Penal. Entonces qué carajo hace un fiscal metiendo sus narices en la etapa policial SI NO ES POLICÍA. Que alguien me explique por qué se le permite tanta mutación. Lo que sí queda claro, es qué, desde que se puso en marcha el sistema acusatorio y su nueva justicia, no hay justicia en el Perú.

Recapitulemos: La Constitución es del año 1993 y el Nuevo Código Procesal Penal, aunque fue aprobado en el año 2004 entró en vigencia recién en agosto de 2006. Eso significa que la ACCIÓN PENAL durante 13 años se estuvo ejerciendo enmarcada en el sistema judicial tradicional (antiguo) con el principio de legalidad como piedra angular y soporte de la justicia en el Perú.

Es decir, la acción penal se ejercía sin estar condicionada y sin la imposición del sistema judicial acusatorio porque aún no existía el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Durante todo ese periodo, y desde mucho tiempo atrás, con el 'principio de legalidad' en plenitud, al menos se impartía algo de justicia; los delitos perseguibles de oficio o de acción pública, llegaban al juzgado por denuncia de la víctima ante la policía o ante el juzgado de guardia; y también la justicia se activaba de oficio por el juzgado cuando éste tomaba conocimiento de haberse cometido un delito.

En los delitos perseguibles de oficio, las partes que promovían la acción penal eran dos, la víctima y la sociedad (el Estado); la víctima actuaba en su nombre (con su denuncia) y la sociedad a través del fiscal como garante de la legalidad representando al interés público; y lógicamente también, con 'la persecución del delito de oficio' directamente por el juzgado, cuando este conocía la noticia criminal.

Pues bien; respecto a la sociedad, y en aras del interés público, a efectos de ejercer la ACCIÓN PENAL, la Constitución le otorga al Ministerio Público su ejercicio a nombre del interés general, **Art.159 (*)** incisos **3 y 5**; pero en ningún momento la Constitución dice que el fiscal sustituirá a la víctima, negándole a ésta el derecho de ejercer la acción penal por su parte, por sí misma y en su nombre.

(*) ***Artículo 159*** *(de la Constitución).* - ***Atribuciones del Ministerio Público.***
Corresponde al Ministerio Público:
3.- *Representar en los procesos judiciales a la sociedad.*
5.- *Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.*

Por lo tanto, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) tendría que haber regulado en ese mismo sentido del mandato constitucional, sin privarle ese derecho a la víctima, ni cambiarle el destino (interrumpiendo el camino) a la acción penal. En otras palabras, si nos ciñéramos al mandato constitucional, la víctima a través de la policía, estaría habilitada constitucionalmente para hacer llegar su denuncia directamente al juez. Lo cual no se le está permitiendo. La fiscalía se ha puesto de por medio.

Me detuve explicando este punto para que se pueda entender, porqué el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) contraviene el mandato constitucional. Ya que, sin el NCPP como instrumento esencial del sistema judicial acusatorio, hubiese sido imposible su puesta en marcha en el Perú.

Es evidente que el NCPP favorece al Ministerio Público y dota a los fiscales de atribuciones desoyendo lo que manda la Constitución. Además de quitarle a los ciudadanos su derecho a ejercitar por sí mismos la acción penal, perjudica la labor de la policía al quitarle autonomía funcional; condicionando su accionar y restringiendo sus atribuciones en la prevención, INVESTIGACIÓN y lucha contra la delincuencia.

Los fiscales, deberían preocuparse en promover la acción judicial y ejercer la acción penal (acusar) en instancia jurisdiccional, y dejar que los ciudadanos hagan lo propio ejerciendo la acción penal por su cuenta, denunciando directamente o a través de la policía. La Constitución no prohíbe a los ciudadanos ejercerla por ellos mismos, sólo dice que los fiscales ejercen la acción penal, se entiende que en los delitos perseguibles de oficio representando al interés público y a LA SOCIEDAD, pero no dice en representación de LA VÍCTIMA como individuo, como sujeto de derecho.

La Constitución respecto a la actuación de los fiscales, sin lugar a dudas, se refiere al momento que el juez asume jurisdicción, porque ahí es cuando toma entidad el delito; es decir, cobra sentido el determinar si un hecho es típico, antijurídico y punible a través de la valoración en sede judicial, donde lógicamente, si cobra relevancia la investigación que promueva el fiscal.

Antes (en la fase no jurisdiccional), constitucionalmente la actuación de la fiscalía no tiene amparo en la Constitución, por lo tanto, no tiene cabida, es innecesaria e inconstitucional; ya que todo lo que no es jurisdiccional constitucionalmente es

competencia de la policía con autonomía plena (**Art. 2. 24. f) y (Art. 166**). La labor del fiscal debe centrarse a la fase jurisdiccional, porque el mandato constitucional así lo determina.

Los fiscales, ya bastante tarea tienen como garantes de la legalidad y siendo 'acusación fiscal'; es decir, manteniendo viva la acción penal en sede judicial si hay merito para ello, y ejerciéndola en representación del interés público durante el enjuiciamiento. Eso, independientemente que la víctima por su parte, con su abogado haciendo uso de su derecho de amparo judicial ejerza de 'acusación particular', circunstancia que no se está cumpliendo.

Por otro lado, la Constitución hace referencia a que el fiscal estará desde el inicio en la investigación del delito. No hay duda de ello, pero DESDE EL INICIO DEL PROCESO PENAL y eso es en FASE JURISDICCIONAL. Es decir, a partir que el juez asume jurisdicción (incoa el procedimiento por delito), o, dicho de otra manera, desde que el juez 'abre diligencias'. La Constitución en este tema es muy clara, se refiere exactamente a lo mismo que en su día realizaban los Jueces de Instrucción con el antiguo Código de Procedimientos Penales, que era, perseguir e investigar el delito JURISDICCIONALMENTE, al margen de la investigación policial que previamente realizaba la policía.

Por ello, además de ser anticonstitucional, es un torpe desatino lo que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) recoge en su **Art. IV inc. 3** (Título Preliminar) ***"Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional…".*** Claro que la fase policial no es jurisdiccional, pero eso ha sido así siempre, y seguirá siéndolo mientras el ordenamiento jurídico constitucional de nuestro país no diga lo contrario.

Entonces, si LOS FISCALES NO SON POLICÍAS ¿Deben investigar el delito?, la respuesta es: No. Lo que sí deben hacer es CONDUCIR impulsar la investigación del delito desde su inicio del proceso penal. Pero deben hacerlo en la fase jurisdiccional y desde el punto de vista técnico jurídico. Es decir, impulsar la investigación desde que los hechos con indicios racionales de criminalidad llegan a sede judicial, que es cuando se inicia el proceso penal, momento cuando el juez hace la primera valoración y tipifica**; ahí es el inicio al que se refiere la Constitución** en su **Art. 159. 4 (*).** Antes no, porque sólo son hechos delictivos.

(*) Art. 159. 4 (CPE). "*Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función".*

Por su parte; la policía, con la autonomía que le da la Constitución **(Art.166),** investiga la delincuencia; es decir, que está facultada para investigar todos los hechos delincuenciales, en los que tenga que intervenir; los que después de sus pesquisas debería poner a disposición de la autoridad judicial. Eso dice la Constitución (**Art. 2. 24, f).**

Es decir, los fiscales, deberían centrar la conducción de la investigación del delito en lo jurisdiccional, con la acción penal ya en sede judicial, que es el punto de inicio o de partida del proceso penal. Pues, desde ahí, desde ese momento

deberían CONDUCIR la investigación (el juez de instrucción debería dirigirla y presidirla; lamentablemente actualmente no es así). El fiscal, desde ese punto INICIAL, debería accionar, impulsar, activar, promover **(CONDUCIR)** se recabe las pruebas del delito, o, se practiquen las diligencias que estime necesarias a través de la Policía; o si se quiere decir de otra manera, como dice el NCPP (en lenguaje progre), recabar los **elementos de convicción**. Porque ya sabemos qué en la nueva justicia, la cosa no va de **pruebas**, sino de convencer al juez.

Por lo tanto, hay que dejar en paz a la policía, que haga su trabajo sujeta sólo al imperio de la ley y con la autonomía que le da el mandato constitucional. Y de paso, dejar que la acción penal no interrumpa su camino en busca de justicia. La policía, antes que entrara en vigor este Código (NCPP) era el receptor y trasmisor de la denuncia, era el mensajero de la acción al canalizar la denuncia ajeno a la censura; era el enlace y portador directo de la denuncia hacia el juez para que la víctima ejerza la acción penal en su nombre.

Y así debería ser. Sólo un juez debería dilucidad si un hecho constituye o no un ilícito penal, sólo un juez debería decidir si hay delito o no hay delito, si se juzga o no se juzga, y si hay condena o no hay condena. Un fiscal constitucionalmente no está habilitado para ello, hacerlo es hacer de juez. Por lo tanto, lo que actualmente hacen los fiscales con la acción penal que no llega a sede judicial aplicando el principio de oportunidad, es administrar justicia, es fungir que se imparte justicia sin ser juez; lo cual, constitucionalmente es darle una puñalada trapera a la justicia.

Con este Código Procesal, las decisiones de un Fiscal (en lo que ellos llaman diligencias preliminares o investigación preliminar) que responden a sus consabidos acuerdos reparatorios, son UNA SENTENCIA ANTICIPADA, que muchas veces tienen el carácter de cosa juzgada. La Acción Penal, no se debe quedar en el camino, y mucho menos morir en las manos del fiscal. Todo ello, es un atraco a la justicia, un atraco a la sociedad, pero sobre todo un atraco a la víctima.

Es el mundo al revés. Alguien que no es juez (el fiscal) decide si se juzga o no se juzga un delito amparándose en el principio de oportunidad; cuya resolución del acuerdo reparatorio sin víctima a la vista surte el mismo efecto que una resolución judicial de sobreseimiento o archivo definitivo. Es como si se juzgara y sentenciara, y no es recurrible; por lo tanto, con los efectos de cosa juzgada.

Todo ello lo origina entre otros el **Art. IV** numeral 1 del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal **(*)**.

(*) *TÍTULO PRELIMINAR*
Artículo IV. Titular de la acción penal.
1.- *El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad.*

Que a la vista es una perversión del sistema de justicia y una intromisión en la labor policial, porque **a los fiscales** que deberían estar cumpliendo a cabalidad

con su finalidad fundamental que es **la defensa de la legalidad**, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) como ya lo he explicado, les otorga atribuciones y competencias que van más allá de todo ello.

La Constitución no recoge lo de TITULAR de la acción penal (es un invento del NCPP), y cuando dice la investigación del delito desde su inicio, no se refiere a la investigación policial o investigación de la delincuencia, se refiere a la investigación del delito desde cuando se inicia el proceso penal o judicial, es decir, desde que es jurisdiccional. Cuando un juez asume jurisdicción.

Por otro lado, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), como se ve del Inc. 1, del Art. IV (Título preliminar), sólo pone **investigación** obviando DEL DELITO, lógicamente esta omisión es adrede, para poder invadir y/o usurpar la función policial como es la investigación de la delincuencia atribuida a la Policía Nacional en el Art. 166 de la Constitución.

DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y LOS FISCALES

Los fiscales tradicionalmente han cumplido un rol especifico e importante, y así queda reflejado en la Constitución (**Art. 159**); donde entre otros cometidos, tienen encomendada como misión principal y fundamental **'la defensa de la legalidad'**, y para ello, además les faculta ***promover la acción de la Justicia*** *en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley* **(Inc. 1) (*)**, de oficio o a petición de los interesados; así, también tienen asignada la tarea de velar por la independencia de los Tribunales. Esa es y debería ser su labor.

(*) Inc. 1 Art. 159. *Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.*

Sin embargo, es paradójico que quienes tienen la obligación de velar porque se respete la legalidad, es decir, que se respete la ley, sean los primeros en incumplir el mandato constitucional. Por lo tanto, siendo así, de qué DEFENSA DE LA LEGALIDAD estamos hablando. No se puede exigir lo que no se está dispuesto a cumplir. El respeto a la legalidad debe ser una constante y una obligación de todos, incluido para los fiscales, y se debe partir por el respeto a la Constitución.

Es paradójico también, que siendo la legalidad el pilar de nuestro ordenamiento jurídico como principio fundamental sobre el que se asienta toda democracia, se le quiera pervertir remplazándola con 'la oportunidad hecha principio'. La aplicación de la ley o el imperio de la legalidad es un principio innegociable y mucho menos prescindible, por eso, partiendo de la Constitución no cabe desdibujarla en nombre de una nueva justicia, no tienen cabida los atajos que el sistema judicial acusatorio nos ofrece para burlar la constitucionalidad de la legalidad.

En términos de derecho penal, el principio de legalidad es un concepto jurídico que establece que ninguna persona puede ser condenada por un hecho que no esté expresamente tipificado como delito en la ley. Este principio es un pilar fundamental del Estado de Derecho, pero también garantiza la tutela judicial efectiva de la víctima, protege los derechos de los individuos y establece límites al poder del Estado. Una de las manifestaciones más importantes de la legalidad es el principio de reserva de ley el cual nos advierte que sólo la ley puede establecer los delitos y las penas, y que ninguna autoridad puede crear delitos o imponer sanciones sin una base legal. Lógicamente una ley que no contravenga la Constitución.

El principio de legalidad en el mismo sentido regulador también se vincula estrechamente al derecho a defensa. En un proceso penal, el acusado tiene derecho a conocer con precisión los cargos que se le imputan y a contar con un abogado para preparar su defensa. Eso implica garantizar la seguridad jurídica, que las leyes penales sean claras, precisas y accesible a todos, para que el acusado pueda entender cuál es la conducta que se le atribuye y pueda ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva.

En este sentido, es necesario poner en marcha mecanismos de política-criminal para garantizar la prevalencia de la legalidad, defendiendo nuestra constitucionalidad, ya que ello, significa velar por salvaguardar el estado de derecho, pero sobre todo significa respeto a la Constitución como fundamento, principio y fin de toda ley. Una ley como el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) con tanta inconstitucionalidad en su contenido no tiene cabida.

La defensa del Estado de Derecho es fundamental para la convivencia y para que un país funcione correctamente y en el que todos deberían estar comprometidos. Eso implica el cumplimiento de los mandatos constitucionales, porque el orden constitucional y el cumplimiento de la ley es la base de una democracia y una convivencia pacífica; pero siempre con leyes que no sean contrarias ni vulnerativas del mismo. Sin ello no habría legalidad. Los fiscales a partir de esa premisa deberían tener presente que sólo respetando la constitucionalidad hay defensa de la legalidad. Fuera de ahí, lo demás es caos y perversión del sistema.

PODER JUDICIAL, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CÓDIGO PROCESAL PENAL EN CONFLICTO

Antes de abordar en crítica el tema sobre '**la administración de justicia y el conflicto originado por el NCPP y su desencuentro con el Poder Judicial**'; os dejo un artículo de la Constitución, el **Art. 138** **(*)**, que nos ayudará a entender el porqué de mi objeción a la legitimidad y legalidad del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que nos ha traído el sistema judicial acusatorio. Bajo mi punto de vista, todo ello, ha supuesto el quebranto normativo constitucional, porqué nos ha impuesto por la fuerza "una ley viciada al estar plagada de anticonstitucionalidad" como es el NCPP; y con él, se nos ha impuesto un nuevo sistema de justicia (el sistema judicial acusatorio) que la norma constitucional no contempla ni está previsto. Tal cual está redactada la Constitución ese sistema no tiene cabida.

(*) El Art. 138, de la Constitución sobre la **Administración de Justicia,** dice:
"La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente".

Además de lo ya expuesto; decía que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) carece de legitimidad porque a la vista está el incremento del crimen y la delincuencia en las calles desde que éste entrara en vigor; por ello y más, esta norma procesal es impopular y no responde a las expectativas del interés general, de la sociedad y en definitiva de la gente; por otro lado, adolece de legalidad porque viola muchísimos artículos de la Constitución. Lo cual supone un problema que ha generado un conflicto de intereses que perjudica a la administración de justicia y afecta al Poder judicial.

Si revisan el **Art. 139** **(*)** de la Constitución (Principios de la Administración de Justicia), verán que en sus diversos incisos o numerales, las normas y enunciados son exclusivos y excluyentes propios de la función jurisdiccional (jueces – Poder judicial), tales como: ***"****exclusividad de la función jurisdiccional****"*** **(Inc.1);** ***"****ninguna autoridad* (que no sea juez) *puede avocarse…ni interferir la función jurisdiccional****"*** **(Inc. 2);** ***"****el debido proceso y la tutela jurisdiccional****"*** **(Inc. 3);** ***"****Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley****"*** **(Inc. 3);** ***"****Prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución****"*** **(Inc. 19);** entre otros.

(*) Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

1.- *La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.*

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación.

2.- *La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.*

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

3.- *La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.*

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

4.- La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.

5.- La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

6.- La pluralidad de la instancia.

7.- La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

8.- El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.

En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.

9.- El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.

10.- El principio de no ser penado sin proceso judicial.

11.- La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.

12.- El principio de no ser condenado en ausencia.

13.- La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.

14.- El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

15.- El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.

16.- El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala

17.- La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.

18.- La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.

19.- *La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley.*

20.- El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.

21.- El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.

22.- El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

Por todo ello y más, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), es a todas luces un código inconstitucional, porque quiebra la 'independencia de poderes' que reconoce la Constitución al otorgarle al Ministerio público competencias que son propias y exclusivas de los jueces. Atenta contra la independencia del 'Poder Judicial', porque subyuga la acción penal al arbitrio del fiscal; es decir, que un juez sólo podrá administrar justicia si la denuncia logra 'pasar el corte' del fiscal (Ministerio Público).

En otras palabras, sólo si el fiscal denuncia o si el fiscal acusa, según la fase en que se encuentre el proceso, tendrá el juez la posibilidad de **administrar justicia**; siempre y cuando el fiscal logre construir el caso. Si eso no ocurre, lo que dice la Constitución sobre ello es letra muerta, por mucho que los jueces constitucionalmente sean los llamados a hacer justicia.

Pues, para burlar el mandato constitucional, el NCPP ha incorporado en la estructura procesal un condicionante (previo al proceso penal), o, mejor dicho, una condición sine qua non, **LA FORMALIZACIÓN**, sin la cual no hay proceso, quedando todo en manos y al arbitrio del fiscal; la misma que ha sido dotada de contenido jurídico para que sirva al cometido y esté al servicio del sistema acusatorio. Así, de esta manera, sin la susodicha formalización no hay proceso que ande, sin ella no hay justicia que se ponga en marcha ni justicia que llegue o se haga.

Mientras tanto, en los entresijos previos a ella (a la formalización), los fiscales se entretienen haciendo labor policial, "investigando preliminarmente o preparatoriamente", según el estadio, enfrascados en sendas carpetas fiscales, que muchas veces 'es más paja que trigo'. Al final brillan por su ausencia los enjuiciamientos y condenas que respondan al delito cometido y a las aspiraciones reales de la víctima. Con lo cual, esta nueva forma de hacer justicia que encarna el NCPP, ha sido para mal o para peor; ha sido 'una vuelta de calcetín a la justicia' y a las atribuciones que tenía el Poder Judicial a través de los juzgados de instrucción y las Cortes Superiores que se encargaban de someter a la justicia a delincuentes de toda calaña que habían cometido delitos graves de diversa índole.

Constitucionalmente estas atribuciones aún las tiene encomendada el Poder Judicial (**Art. 138** y **Art. 139**); pero como se puede observar, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) ha creado un conflicto funcional en la administración de justicia, enfrentando a jueces y fiscales. Pareciera que ahora los fiscales tienen más poder que los jueces. Al punto que, los fiscales se creen magistrados y constitucionalmente no lo son, ni siquiera pertenecen al Poder Judicial **(PJ).**

Los fiscales dejaron de pertenecer al **PJ** en el año 1981 cuando por ley Orgánica (Decreto Legislativo 052) se creó el Ministerio Público como una institución autónoma y se separó del Poder Judicial (PJ) por mandato de la Constitución de 1979). En otras palabras, constitucionalmente, los fiscales son funcionarios del Estado pertenecientes al Ministerio Público; pero no son jueces ni miembros de la judicatura, por lo tanto, no son magistrados.

Que **los fiscales son una autoridad**, claro que lo son, pero como cualquier otra autoridad no judicial, como lo son los policías, los inspectores de hacienda, los agentes de aduana, agentes de la Contraloría, etc, etc, cada uno en su campo funcional y su marco de competencias que les asigna la Constitución.

Pues, por lo mismo. Los fiscales como garantes de la legalidad, tienen un rol constitucional asignado por el Estado importante y respetable, como importante y respetable es el rol de las otras autoridades del Estado. Siendo así, y para que se entienda, por ejemplo; un fiscal no puede detener ni ordenar la detención de nadie, un fiscal no puede allanar ni ordenar el allanamiento de la casa o el local de nadie; lo que si puede hacer es instar ante el juez para que éste ordene. Un fiscal tampoco puede ordenar un operativo policial, y puesto en marcha un operativo por orden judicial, el fiscal no puede dar órdenes a los policías ni dirigirlo, lo que sí puede hacer, es instar a que se cumpla lo que dice la ley; y como garante de la legalidad, y a efectos de promover y/o mantener viva la acción penal, puede estar presente si es necesario o si el juez lo estima conveniente.

Otra cosa es, los efectos del **Art. 159. 4** de la Constitución, cuando el juez asume jurisdicción y es el inicio del proceso penal, ahí sí el fiscal CONDUCE la investigación; que no es otra cosa que, accionar, activar, instar o promover a través de su señoría (el juez) para que la policía cumpla **los mandatos** del fiscal, que no dejan de ser requerimientos (mandamientos por escrito) para realizar alguna diligencia, informes, peritajes criminalísticos, u otra acción de atribución policial.

Lo que pasa, es que la norma constitucional ha sido mal interpretada, o quizá maliciosamente mal interpretada y manipulada, por eso, vemos a fiscales yendo a las comisarías como si fueran mandos directos de los uniformados originando enfrentamientos con la policía. Si esos mandatos (requerimientos) vienen avalados por o **con orden judicial**, la policía los acatará sin problema, no hacerlo sería un desacato al mandato judicial. Todo lo demás es un contrasentido. Por cierto, no hay delito por desacato a la orden de un fiscal. Repito, un fiscal no es juez. Por eso tiene que ser todo a través del juez. **La justicia no puede tener dos cabezas**. Eso, si no queremos que la justicia sea un caos. Todo ello, no impide que la fiscalía pueda **promover** 'investigaciones de calado', sobre todo en delitos cometidos en el poder o desde el poder; ello por su puesto sin ignorar al juez.

Visto así, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) **HA PERVERTIDO** el proceso penal y **LA JUSTICIA**, a costa de haber suprimido instituciones jurídicas, instancias, juzgados de Instrucción, y recortando atribuciones a la judicatura que hoy ya no existen o las han debilitado; y otras, que ya no están bajo el paraguas del Poder Judicial, como son la antigua 'etapa de instrucción y el juicio oral', donde se admitía que la víctima sea un actor principal en busca de justicia, ya que, durante el proceso penal se le permitía personarse con la acción penal y ejercerla por sí misma, por lo tanto, era parte y acusación particular en su calidad de víctima.

Lo cierto es que: Constitucionalmente, la administración de justicia está asignada al Poder Judicial y a sus jueces en exclusiva **(Art.138)**, pero con el sistema judicial acusatorio que recoge y articula el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se deja un buen trozo de justicia en manos de los fiscales, que con el beneplácito de este código, en etapa no jurisdiccional acceden y ejercen de facto a "administrar justicia", ya que disponen y hacen de ella lo que les sale de su real entender y decisión en base al principio de oportunidad. El hecho de valorar y decidir el recorrido que debe tener un hecho criminal, el valorar y decidir el destino de la acción penal, y "dar veredicto" de qué se debe juzgar y qué no, no es otra cosa que hacer un uso ilegal de la justicia y decidir sobre ella; en definitiva, juzgar. Y eso es inconstitucional.

Para todo ello, el sistema judicial acusatorio y su Código (el NCPP) se sacaron de la manga (se inventaron) una fase que le llaman DILIGENCIAS PRELIMINARES que abarca otra invención a la que llaman **investigación preliminar**, con ello, han convalidado o sustituido torticeramente lo que antes eran las DILIGENCIAS PREVIAS (en fase jurisdiccional) que realizaba el juez de Instrucción para determinar si el hecho investigado era punible o no; y de paso a la vez, se han apropiado (en fase no jurisdiccional) de lo que era parcela de la investigación policial. Ambivalencia que rompe el equilibrio del sistema, por un lado, apropiándose de la autonomía policial, y, por otro lado, apropiándose de la función y autonomía judicial que ostentaba el juez de instrucción; secuestrando en suma la esencia y rol de la justicia. El fraude está precisamente ahí.

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) saca del proceso penal en sí las Diligencias Preliminares; es decir, las saca de la etapa jurisdiccional sin que el poder Judicial advierta "el atraco", 'haciéndole un roto' a la justicia; las ubica bajo control fiscal "haciéndoles un hueco" en terreno no jurisdiccional. Así, los fiscales adquieren "potrero propio" para hacer y deshacer con la acción penal y manejar la justicia a su antojo. Se supone que un Código Procesal Penal debería ceñirse a regular solamente EL PROCESO PENAL. La pregunta es: Qué hace el NCPP normando y regulando cuestiones no jurisdiccionales que no están bajo arbitrio judicial.

En otras palabras, con la llamada DILIGENCIAS PRELIMINARES los fiscales pueden perfectamente de facto (de hecho) "hacer justicia" prescindiendo de la judicatura. Se amparan en el principio de oportunidad que el Nuevo Código Procesal (NCPP) pone en sus manos para ello. Un cheque en blanco cargado a cuenta y nombre de la justicia. Tanto que, en esa fase inicial, previa, opaca, oscura, enmarcada contra natura por este Código dentro de la Etapa de Investigación Preparatoria, es donde, **por un lado**, los fiscales ponen en la calle a muchos criminales sólo a cuenta y riesgo de su criterio; y **por otro lado**, según qué intereses haya, "juegan a la justicia del justiciero", donde le ponen la soga al cuello a los colaboradores eficaces (en casos de alto calado) si no cantan lo que los fiscales quieren oír cantar, eso, al margen de si es verdad o no es verdad; y donde paradójicamente, "juegan al desdeño de la justicia" en los casos de delincuencia común, cuyo crimen vulgar y ordinario queda a la suerte de "la oportunidad" como principio, o quizá sería mejor decir, la regla. Por eso la gente dice y maldice que ¡no hay justicia en el Perú!; porque los "choros, violadores,

extorsionadores y asesinos" entran por una puerta y por la otra puerta salen. Esa es la percepción de la gente.

Así es como 'de facto', la justicia que 'con balanza y espada en mano' debería ser ciega y justa ha quedado '**en manos de la oportunidad**', en manos de la subjetividad y discrecionalidad de los fiscales; muchos vinculados al poder político y otros sometidos a él. Aquellos que se atrevieron a desafiar al poder terminaron mal. Sólo habría que mirar los últimos años, la vinculación de los gobiernos y los "fiscales estrella", o incluso el contubernio casi mafioso entre algunos presidentes de la república y algunos fiscales de la nación; y otros sometidos o vinculados a ONGs mafiosas como IDL reporteros y otras. Lo cierto, es que, con el sistema judicial acusatorio hasta el simbolismo antes citado (balanza y espada) de lo que debería ser la justicia se ha pervertido, porque si alguna vez alguien se preguntó, qué es la justicia y quién debe administrarla, seguro que sin dudarlo diría que es un juez el que debe impartirla.

Dicho esto: Por otro lado; el Nuevo Código Procesal (NCPP), al cargarse literalmente la figura de los Jueces de Instrucción (los eliminó), y a cambio nos trajo otro nuevo juez, o quizá el mismo, pero nos lo presenta travestido como *Juez de Investigación Preparatoria*, que "ya no persigue ni investiga el delito" (que sólo mira y espera), atribución que el NCPP le quita y se lo otorga a los fiscales. En el fondo "la pollera sigue siendo la misma pero la chola ya no"; con lo cual, no sólo se rompe la tradición, sino también se rompe la constitucionalidad, porque la investigación del delito bajo el arbitrio judicial se va al traste. Hubiese sido comprensible si fuera 'la misma chola con diferente calzón', porque todo cambio entra dentro de lo razonable si se ajusta a la norma constitucional. Pero no es así, porque estos jueces son muy distintos, hay diferencias insalvables con el extinto juez de instrucción. La Constitución prevé otra cosa para la justicia.

El nuevo juez (de investigación preparatoria), lleva una pollera muy ligera (menos trabajo), ya que no investiga ni persigue el delito, y sin la responsabilidad del impulso procesal y discrecionalidad, que si tenían los jueces de instrucción. Este juez dirige o conduce la etapa intermedia *(donde no cumple labor de investigación del delito, ni participa en la etapa crucial del proceso penal: el juzgamiento)*. Y aunque nos lo presentan como un juez sin contaminar, un "juez de garantías"; siguiendo con la metáfora, este es más bien un juez desarmado, "sin balanza ni espada". Dicen que es garantista, pero de qué o de quién; si es "una pieza útil" del sistema judicial acusatorio; y este, promueve la delincuencia y protege al delincuente. Siendo así, de qué justicia estamos hablando.

Lo cierto es que, por imposición del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) este juez se convierte en, mudo, manco, además de ciego. Aunque, durante la investigación preparatoria, sólo a instancia de las partes (fiscal o defensa del imputado) es competente para conocer y resolver las incidencias y cuestiones planteadas. Por lo tanto, dar por bueno y justificar su aparición a cambio de la desaparición del juez de instrucción, es justificar el sistema judicial acusatorio, en el hecho que deja de instruir (investigar el delito) para no contaminarse con el caso si se aboca a su conocimiento; lo cual, es una falacia.

Así, el acto de rendir declaración delante de un Juez instructor ya no existe, ahora se hace delante del Fiscal, con las mismas características, aunque no hay una total equivalencia entre ambas instancias. La tradicional declaración indagatoria delante del Juez Instructor era estrictamente judicial, la declaración "del imputado" en la sede del Ministerio Público durante la investigación preliminar es una instancia de tipo pre jurisdiccional (no jurisdiccional), sin control de magistrado alguno, y en definitiva no opera como el acto de persecución del Estado que permita aplicar el *ius puniendi.*

De este modo, el Nuevo Código Procesal (NCPP) le otorga carácter interruptivo a la justicia y de paso somete a la acción penal a mil bemoles y triquiñuelas al margen de la justicia, ya que, en el interín, la acción penal puede ser archivada, "negociada o arreglada" en base a **la oportunidad**, incluso dejar que el tiempo haga el trabajo sucio y propiciar la prescripción de la acción. En otras palabras, de esta manera "el Fiscal hace justicia al margen de la justicia".

Para cargarse al juez de instrucción, le colgaron la etiqueta de inquisidor, dijeron y dicen que su rol era anacrónico y que no operaba con oralidad; en otras palabras, que era 'un juez carcamán', obsoleto y papeluchero; que no recibía los testimonios, declaraciones, comparecencias ni la prueba en persona, sino que lo hacían sus auxiliares, a la vez, decían que era un juez contaminado con el caso. ¿Contradictorio, verdad?. Porque si le acusaban de que no se enteraba del caso, cómo se podía contaminar. Además, se dijo; que al tener exceso de trabajo al judicializarse todo, ni siquiera dirigía realmente la investigación. Por lo tanto, debía ser remplazado en esa función para que se pueda implantar una nueva forma de hacer justicia, 'el sistema judicial acusatorio'. Y así se lo quitaron de en medio y pusieron a los fiscales que realicen su trabajo.

Los pretextos y monsergas que utilizaron para desprestigiar y demonizar al juez de instrucción y al viejo sistema judicial que teníamos anteriormente, está en todos los discursos de los acólitos del sistema judicial acusatorio. Para mejor y mayor ilustración de lo que estoy exponiendo al respecto, les dejo lo que en sus propias palabras dice uno de los mentores y propulsores del sistema judicial acusatorio para Latinoamérica el Dr. Julio B. J. Maier:

*"**Un** juez de instrucción, encerrado entre dos fuegos, la necesidad de averiguar la verdad y su labor judicial de protector de las garantías ciudadanas, papeles contrapuestos, que se pretende juegue a un mismo tiempo, culmina por diluir las funciones que le son adjudicadas, cumpliendo en forma ineficiente ambas tareas. Inquisidor, por una parte, y garante (juez) por la otra, el resultado es la ineficacia de su función en ambos sentidos. No es posible un sistema garantista erigiendo a una autoridad, que ejerce el poder público, en control de sí mismo. El hecho de llamar juez al órgano de la persecución penal contribuye al propósito corruptor del procedimiento.*
***De** ahí, el porqué de la propuesta moderna, extendida por toda Latinoamérica, que consiste en separar las funciones, concediendo competencia a órganos distintos; al ministerio público, controlar el buen uso del poder público, custodiar las garantías ciudadanas y evitar la arbitrariedad en el manejo de la fuerza pública a los jueces. Por ello, la investigación preliminar se confía al ministerio público".*

Así lo concebía Julio B. J. Maier cuando empezó a pergeñar esta locura. Cavilaciones que le servirían para justificar el cambio. En la década de los

ochenta, este jurista argentino de ascendencia teutona, en el 'Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente' (ILANUD) en San José de Costa Rica, comenzó a impulsar la reforma procesal y su larga labor para la transformación de la legislación procesal de Centroamérica y el Caribe, desde la perspectiva de los derechos humanos del justiciable, tendencia procesal de garantías que manejaba a profundidad. Comenzó por Costa Rica y Guatemala, y pronto a toda Latinoamérica. Al frente de un puñado de jóvenes activistas estudiosos del derecho que le acompañaron (hoy influyentes juristas), difundieron **los principios de una nueva política criminal** a través del cambio en las Constituciones adhiriéndolas a los derechos humanos, con capacidad de realización a través de los Nuevos Códigos Procesales Penales que recogieran los ritos y actos procesales.

Como se puede ver, son los mismos argumentos que en su día fueron utilizados para implantar en el Perú el sistema judicial acusatorio a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). El padre de la criatura para Latinoamérica (Dr. Julio B. J. Maier), clara y meridianamente nos dice, que los países debían cambiar y adaptar su Constitución para lograr que aquella aspiración de los jóvenes juristas progresistas (que entorno al Consejo Interamericano de Derechos humanos programaron se adopte el sistema judicial acusatorio) se hiciera realidad a través del Código Procesal Penal sin colisionar con el orden constitucional. Lo cual, en el Perú no se hizo; es por ello, que el Nuevo Código Procesal Peruano es anticonstitucional. Porque no se modificó la Constitución.

Así es como a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se ha eliminado al juez de instrucción, al que "los progres" llamaron 'juez DICTADOR del sistema inquisidor', para ir a otro modelo o estereotipo muy distinto, contrapuesto, basado en otros principios y bajo reglas diferentes, al que llaman 'juez DIRECTOR del sistema acusatorio', que según los acólitos del sistema acusatorio, garantice los derechos humanos del delincuente (presunto) y respete las garantías de las partes para resolver "el conflicto". Como si los jueces de instrucción que hasta entonces ejercían como tales hubiesen estado violando sistemáticamente todo aquello.

El NCPP es sumamente complaciente con la criminalidad y con el delincuente, tanto, que en consideración a éste y para que no se pueda ofender "su dignidad"; con palabras edulcoradas alejadas de cualquier estigmatización huye de criminalizar al autor del hecho criminal; dicho de otra manera, con un lenguaje amanerado y garantista, rebautiza muchos nombres y términos jurídicos; especialmente los del proceso penal para que tuviera encaje el sistema judicial acusatorio **adversarial**, obedeciendo patrones progresistas de la nueva corriente globalista en política criminal.

Así, el juzgamiento del delito cometido, pasa a ser **la controversia** que el juez tiene que dirimir de forma pública con la información dada por los litigantes, sin desentenderse del control de la legalidad, la publicidad, la lógica adversarial, la confrontación de posiciones, y sobre todo de los ritos y destreza de litigación oral de los actores del nuevo proceso o deslinde adversarial.

Así, ‘la víctima’ pasa a ser “el ofendido o el agraviado”, el atestado es relevado por la carpeta fiscal, el delincuente (presunto) pasa a ser el ‘sujeto procesal investigado’ que no puede ser sometido a medios coactivos que vulneren su dignidad; y además éste tiene derecho a exigir igualdad de armas entre las partes; prima la oportunidad a la legalidad; etc, etc.

Aquí, al juez ya no le valen las pruebas sino los elementos de convicción; ya no cuenta para nada la verdad sino la historia contada según cómo y con qué…; es la teoría del caso y su sublimación. Se trata de convencer al juez.

Y así, infinidad de modificaciones y cambios que se han dado en la nomenclatura jurídico-procesal.

El SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO ENTRE NOSOTROS

Todo lo anteriormente expuesto viene con la nueva justicia, que ha supuesto en el Perú la implantación del sistema judicial acusatorio adversarial, y que a su vez nos ha impuesto un cambio normativo y el cambio organizacional de las instituciones que desempeñan un rol entre los operadores de justicia; estos dos ejes (normativo y organizacional) eran vitales e imprescindibles para implantar el sistema judicial acusatorio-adversarial. Ello ha supuesto la imposición y adoctrinamiento de los operadores jurídicos, con charlas, seminarios, cursos y panfletos con la nueva doctrina. Así, los impulsores acólitos del nuevo proceso penal han hecho desaparecer el viejo y tradicional sistema de justicia que operaba en el Perú desde allende los tiempos, y que, según ellos, cobijaba entre otros anacronismos, las viejas prácticas del ritualismo y la lógica del trámite que ya no respondían a la demanda de los nuevos tiempos.

En cuanto al **cambio normativo**, su máxima expresión al margen de la Constitución que ya sabemos ha sido vulnerada, la tenemos en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que personifica, contiene y sostiene no sólo la estructura normativa, sino que articula la estructura organizacional del nuevo sistema judicial ACUSATORIO ADVERSARIAL en el Perú. Y de ahí, otras normas colaterales y concomitantes como la Ley Orgánica que regula el funcionamiento y operatividad del Ministerio Público.

En cuanto al **cambio organizacional**, sería extenso explicar todo lo que ello comporta, ya que hay muchos cambios; pero lo más evidente, es la instauración de “los nuevos fiscales” con nuevas competencias, y la aparición de “los nuevos jueces” igualmente con nuevas funciones; resaltando el juez de investigación preparatoria. La desaparición del Juez de Instrucción, y todo lo que ello comporta, como es el destino y articulación de **la investigación** y **persecución del delito**. Todo ello, claro está, después de regular y disponer el destino de la acción penal “que se lo han apropiado los fiscales”. Eso de: “titular de la acción penal” **es un invento** del NCPP, ya que en la Constitución no está. El NCPP, entre otras cosas también, certifica la desaparición de la fase de instrucción para que sea posible la implantación del nuevo sistema de justicia.

En ese sentido el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) nos viene a decir en su articulado que, “en la nueva justicia”, el principio acusatorio garantiza la imparcialidad del nuevo juez, ya que éste, no puede actuar de oficio en el ejercicio de la acción penal, y que tampoco puede investigar ni perseguir el delito. Con lo cual, los delitos perseguibles de oficio “cambian de dueño” o su persecución cambia de persecutor (el fiscal).

En otras palabras, “el nuevo juez” no puede participar en la determinación del objeto del proceso ni en la aportación de hechos y pruebas. Este juez que es rebautizado por el NCPP como juez de investigación preparatoria se sitúa por encima de las partes (acusadora e imputada) para que pueda según los acólitos del sistema judicial acusatorio actuar con imparcialidad y pueda decidir con justicia sobre la culpabilidad o inocencia del imputado en base a la acusación que se haga. Prohíbe al juez estar a cargo de un proceso si tiene alguna relación con las partes o el objeto del mismo; ello, se supone para garantizar la

imparcialidad. ¡Qué novedad! Antes, también el juez de Instrucción era imparcial y estaba por encima de las partes.

Así, con el NCPP, "el nuevo juez", el de investigación preparatoria, es hoy un receptor de la actividad probatoria de las partes, limitándose a convalidar las solicitudes y requerimientos del Ministerio Público. Aunque para justificar su existencia, nos digan que en su rol resuelve todo tipo de incidencias emitiendo autos de enjuiciamiento y autos de sobreseimiento según sea el caso a instancia de las partes; siendo en todo caso, la fiscalía la que marca los tiempos y el fondo, la acuciosidad, la celeridad y la inversa, controlando incluso el desvarío y hasta el olvido. Así, el juez en el nuevo modelo de justicia, al ser un juez sin discrecionalidad es un convidado de piedra, aunque nos lo quieran vender como un juez con independencia judicial y/o jurisdiccional.

Lo cierto es que, el sistema judicial acusatorio es perverso, porque al concluir la investigación preparatoria, conforme al **Art. 344** del NCPP, el fiscal puede solicitar al juez el *sobreseimiento de la causa,* cuando: **(a)** el hecho objeto de ella no se hubiere realizado o no resultase atribuible al imputado; **(b)** el hecho no sea típico o concurra una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad; **(c)** la acción penal se hubiere extinguido; o **(d)** no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hubiere elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento del imputado.

Como se puede ver, todo puede caber dentro de la subjetividad de un fiscal, más si hay de por medio intereses superiores o subalternos (la prensa informa muchos casos de ello cada día). También, puede archivar determinados casos cuando están en etapa pre judicial o no jurisdiccional (ladrones, violadores, extorsionadores, etc, etc,); de delincuencia común, vulgar y de poca monta, de poco interés para el fiscal, aunque para la ciudadanía que la sufre sean una pesadilla de amenaza. Así mismo, el fiscal, según la etapa procesal, cuenta con otras herramientas o *alternativas* "para no judicializar el conflicto", es decir para que el delincuente no sea procesado, todo ello al margen de la víctima que no es enterada, es más, no existe como tal en el NCPP, en el nuevo sistema de justicia. "La víctima" sólo sabe que la han violado, y resulta que ese hecho le hace participe y pasible de un conflicto que no ha buscado y que es susceptible "de negociar" a través de un acuerdo por un tercero (el fiscal) en su nombre.

Pues todo ello, a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) "nos lo venden" como "*soluciones penales*" para resolver los conflictos que llegan al Sistema de Justicia Penal. El objetivo, dicen, es evitar que todas las causas arriben a sede judicial, supuestamente para racionalizar los recursos del sistema. Ese es otro de los pretextos o lo que en su día los acólitos de la nueva justicia sustentaron para instaura el sistema judicial acusatorio adversarial.

Según el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), la idea es que la investigación del delito no sea sólo la búsqueda de medios probatorios incriminatorios sino también exculpatorios, como si para ello no bastara con el abogado de la defensa del delincuente. Es decir, que el NCPP prevé mecanismos para premiar o favorecer al delincuente, ya que, no sólo promueve la comunicación y coordinación entre el fiscal y la Defensa del delincuente para evitar su

indefensión, sino que le impone a la fiscalía poner boca arriba las cartas de su investigación para que el delincuente pueda luchar con las mismas armas; además, da carta libre a los fiscales para llegar a un entendimiento previo si fuera necesario, y si se diera el caso, primar al delincuente con el 'principio de oportunidad'. El NCPP en fase o etapa no jurisdiccional, faculta a las partes (fiscal y delincuente) para exponer el caso y proponer fórmulas alternativas de negociación. Parece inverosímil, pero es cierto. El acuerdo o resolución que se firme surtirá el efecto de cosa juzgada. ¡Y la víctima qué!; al margen. Ese es el tipo de justicia que tenemos. Por eso hay tanta delincuencia en las calles.

Todo ello y mucho más nos ha traído el sistema judicial acusatorio. Está entre nosotros, gobierna la justicia y condiciona nuestras vidas. Nuevos ritos, nuevos hábitos y nuevas instituciones, nuevas reglas, nuevos términos y nuevas autoridades. Dicen que 'el hábito no hace al monje'. Pero en este caso no sólo es el hábito y el monje, también es el rito, la doctrina y un nuevo credo (hablando de justicia, claro).

Es como si de la noche a la mañana viniera alguien y da una ley que todos los peruanos en vez de ser católicos o cristianos se convirtieran en musulmanes, pues a partir de ahí, cambiaría todo; los monjes dejarían de ser monjes, no habría padre nuestro ni credo, las iglesias serían mezquitas, y en vez de biblia primaría la lectura del Corán. Nuevos ritos, nuevas reglas, todo sería nuevo. Pues, eso es lo que le ha pasado a la justicia en el Perú y nadie lo ve o no lo quieren ver.

Antiguamente, un delincuente era un delincuente, no se le santificaba, y mucho menos se le invitaba "a tomar café con el fiscal". La víctima era dueña de su destino como víctima, iba con su acción penal de muto propio hasta las últimas instancias y consecuencias; hoy no. Y la policía como brazo armado de la ley sólo obedecía al juez, la justicia no tenía dos cabezas, hoy por obra y gracia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) al parecer si, donde mandan dos "autoridades" en nombre de la justicia (juez y fiscal), al menos eso parece. El sistema judicial acusatorio adversarial está entre nosotros, se ha adueñado de la justicia y no nos hemos enterado.

CODIGO PROCESAL PENAL, PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y SU CONSTITUCIONALIDAD

Analizar todo el Código Procesal Penal sería muy amplio, ya que la normativa de su articulado ha cambiado todo el 'sistema de enjuiciamiento criminal'. Como ya dije al principio, sólo he tocado algunos aspectos de este Código los que afectan a la policía, a la justicia y a la víctima. No obstante, antes de continuar con el tema, me detendré brevemente en el **Art. 2 del NCPP** que recoge el cuestionado "Principio de Oportunidad". Al que someto a crítica para que el lector se dé cuenta cuál es el verdadero problema que hay en el Perú respecto al binomio delincuencia y justicia. Problemática que acarrea inseguridad, corrupción, impunidad y caos. Es necesario que la gente sepa en manos de qué o de quienes estamos al acudir a la justicia. Habría que preguntarse: A dónde nos está llevando el sistema judicial acusatorio; o, porqué la víctima deja de serlo (de ser víctima) a la hora de solicitar auxilio, amparo o arbitrio judicial. En definitiva; hay o no hay justicia en el Perú. Con el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), se juzga lo que se quiere, y lo que no, no se juzga. Con el sistema judicial que impera hoy, alcanzar u obtener justicia es todo un calvario, eso sino se convierte en un infierno; pedirla ya es una odisea. Tortuoso camino el de la 'víctima que mira a lo lejos a través del cristal' de la fiscalía.

Dicho esto, hay que precisar, que: En la Constitución no hay ninguna mención al 'principio de oportunidad', muy al contrario de lo que ocurre con el 'principio de legalidad' que sí aparece y se recoge en diversos artículos de nuestra carta magna; en el **Art. 2** se consagra el espíritu normativo de alcance penal de este principio, también hay menciones textuales como el **Art. 41** (párrafo final) que dice; ***"La acción penal** es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad"; o* el **Art. 74** (*Principio de Legalidad)*; entre otros. Sin embargo, la Constitución no contempla el principio de oportunidad por ningún lado, y mucho menos, como eje rector de la justicia en el Perú. Podemos decir con toda certeza que el principio de oportunidad no está ni tiene cabida en la Constitución. La oportunidad ni el oportunismo deberían tener lugar en nuestra justicia. No merecemos una justicia donde el principio de legalidad va cojo y manco; justicia que no garantiza la tutela judicial efectiva de la víctima no es justicia.

Visto así, el principio de oportunidad es un atraco a la justicia peruana que nos hace el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), porque este principio no está reconocido en la Constitución, y ni siquiera lo menciona.

Tampoco tiene cabida constitucional el sistema judicial acusatorio, por lo tanto, la justicia que tenemos hoy en día en el Perú no se ajusta a la legalidad constitucional. Falta la víctima y su acción penal, falta ese juez que perseguía el delito y ostentaba discrecionalidad (el juez de instrucción), falta la acusación particular, hace falta que el principio de legalidad no sea papel mojado, sobra el principio de oportunidad, sobra el sistema judicial acusatorio.

A pesar de ello, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) le dedica al '**PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD**' un artículo extensísimo, **el Art. 2 (*)**, con 9 numerales, en los cuales se precisa una serie de supuestos que analizaré más adelante. Pero

a efectos de contextualizar este punto, muestro una pequeña señal de lo evidente; les dejo: El literal a) del numeral 1 de este artículo 2, donde a la víctima se le llama '**EL AGENTE**'; quizá, para no contrariar al delincuente, no vaya ser que el decir **la víctima** coloque al justiciable en indefensión o atente su honorabilidad.

*"**Artículo 2** (del NCPP).- **Principio de oportunidad**.*
1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:
*a) Cuando **el agente** haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, …".*

(*) ***Artículo 2*** *(del NCPP). -* ***Principio de oportunidad***.
1. *El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:*
a) *Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.*
b) *Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.*
c) *Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.*
2. *En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido.*
3. *El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que este exceda de nueve meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente.*
4. *Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable.*
5. *Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente artículo.*
6. *Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procede un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 149 primer párrafo, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.' (*) Párrafo modificado por el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 008-2020, publicado el 9 de enero de 2020.*
El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3) del presente artículo.
7. *Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar*

auto de sobreseimiento -con o sin las reglas fijadas en el numeral 5)- hasta antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil si esta es fijada por el Juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas si estas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado.

***8.** El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código Penal, suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el presente artículo.*

***9.** No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando el imputado:*

***a)** Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad a los artículos 46-B y 46-C del Código Penal;*

***b)** Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico;*

***c)** Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último delito; o,*

***d)** Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio.*

En estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y procede de acuerdo con sus atribuciones. Lo dispuesto en el numeral 9) es aplicable también para los casos en que se hubiere promovido la acción penal."

***(*)** Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley N° 30076, publicada el 19 de agosto de 2013.*

Pues bien: En base al *principio de oportunidad*, las atribuciones y facultades que adquieren los fiscales en detrimento de la judicatura y el juzgamiento son insultantes. Se ha dejado en sus manos decidir qué se juzga y qué no se juzga, quitándole a la víctima la oportunidad de obtener justicia real en presencia de un juez. Lo cual, hace de un fiscal, un personaje con superpoderes, antes y durante el proceso penal; extremo que ha alterado y ha adulterado el tradicional procedimiento judicial, ya que con tanto poder y con tantas facultades, el fiscal en cualquier momento, incluso ya judicializado el caso, puede pararlo y acabarlo con algún 'acuerdo reparatorio' (un arreglo) vía principio de oportunidad; o simplemente, no acusar arguyendo que no tiene caso; en otras palabras, que no logró construir un caso.

Así igualmente, basándose en el **Art. 2 del NCPP**, y en aplicación del principio de oportunidad; **EL FISCAL**, de oficio o a pedido **del imputado** y con su consentimiento, puede abstenerse. Es decir, no ejercitar la acción penal (**Inc. 1. a)**, cuando **"el agente"** (el delincuente) haya sido afectado por las consecuencias del delito y el fiscal cree que la pena resulta innecesaria; también se podrá abstener: cuando el delito no afecta el interés público; cuando por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del denunciado el fiscal aprecia atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 del Código Penal (tentativa, desistimiento, inimputabilidad, responsabilidad restringida, cómplices, etc); y del Art 46, no tener antecedente penales, emoción o temor excusables, apremiantes circunstancias personales y familiares, si procura disminuir las consecuencias, si repara el daño, si se presenta y admite su responsabilidad, la edad; si deja de delinquir voluntariamente, etc, etc. Cada uno de los motivos y circunstancias tienen su propia peculiaridad y haría falta una extensa

explicación. No obstante, decir solamente, que esa labor requiere valorar y decidir (DISCRECIONALIDAD) las consecuencias de un delito, por lo tanto, es función jurisdiccional; y eso, constitucionalmente sólo le corresponde a los jueces.

Como se puede apreciar, el ABSTENERSE o no de ejercer LA ACCIÓN PENAL, y todo lo que ello conlleva, entra dentro del mundo de la subjetividad. Circunstancias, intencionalidad, motivaciones y todo tipo de cuestiones y situaciones relacionadas con el delito cometido, que antes eran valoradas en sede judicial por un juez y luego durante el juicio por un tribunal; pues a día de hoy, es un fiscal el que a su criterio y a 'vuelo de pájaro' determina y decide según "la oportunidad". Un principio incorporado contra natura por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), no valido para encontrar justicia real y autentica en caso de delito contra una persona. La justicia que tenemos ahora no nos sirve, por eso, tenemos que revertirla, derogarla, volver a la cordura; eso, si no queremos convertir la justicia penal en un mercado Persa, donde el mejor postor con seguridad no es la víctima. Mercadear con el delito en base al principio de oportunidad puede ser un buen negocio depende para quién o para quiénes; para la justicia seguro que no, mucho menos para la víctima que sólo quiere y clama se haga justicia.

El principio de oportunidad del Art. 2 del NCPP, faculta además a los fiscales, dirigir "**acuerdos**" entre el agente (el delincuente) y "el ofendido o agraviado" (la víctima) si se repara los daños a presencia del fiscal. En caso que el agraviado no se presente, el fiscal puede arreglar por él previa acta (acuerdo reparatorio); es decir, que la víctima ahí no tiene voz ni voto. Resulta que el dueño de la acción penal no es la víctima, es otro (es el fiscal). Finalmente, el Fiscal expedirá una 'Disposición de Abstención', que "en cristiano" equivale a una resolución, que impide bajo sanción de nulidad se vuelva a promover acción penal por lo mismo; es decir 'es cosa juzgada'. Pues, nada de todo esto prevé ni recoge la Constitución.

Antes de darse el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), la justicia estaba bajo el amparo y jurisdicción del Poder Judicial y sus jueces. Y constitucionalmente lo sigue estando. Así lo establece y ordena el **Art. 138** y **Art. 139** de la Constitución donde se recoge claramente quién debe administrar justicia.

Había una mejor justicia y era constitucional cuando los jueces de instrucción haciendo valer la prevalencia del **principio de legalidad** hacían uso de su discernimiento para aplicar la ponderación y **discrecionalidad judicial** en caso de delitos cometidos. Principio y atribuciones que este Código (NCPP) ha minimizado al punto de no recogerlos en su normativa; es decir, los desaparece. Aunque en la última modificación del NCPP de fecha 21 Dic 2023 hayan incorporado una mención al principio de legalidad, la misma que es una alusión forzada, tirada de los cabellos, ya que es letra muerta, porque el sistema judicial acusatorio es el que rige, prevaleciendo el principio de oportunidad. Algo que constitucionalmente no debería ser así porque ha pervertido el sistema judicial.

Si analizamos fríamente el tema y nos ceñimos a la Constitución que es muy anterior al Código Procesal que tenemos hoy (13 años antes); el espíritu de la

ley constitucional y su normativa, nada tiene que ver con las pretensiones usurpadoras del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que sin lugar a dudas quebranta la Constitución en muchos de sus artículos, vulneraciones claramente orientadas y direccionadas para pervertir el sistema judicial, y con ello, de paso debilita las competencias del Poder Judicial, con un claro atentando a su razón de ser como es el de administrar o hacer justicia. Un Código Procesal que se pone del lado del delincuente.

Si resucitaran los padres de la patria y nuestros abuelos, hombres honrados que con esfuerzo forjaron el Perú que nos legaron y que hoy tenemos, se echarían las manos a la cabeza al ver que hay leyes como el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que favorece e incentiva la delincuencia al ser tremendamente antijusticia, que prima al delincuente y es anti castigo penal; seguro ellos dirían:

"*No hay que primar ni premiar a los delincuentes.*
*Hay que zurrarles la badana a los que violan la ley****".***

La progresía y los acólitos del sistema judicial acusatorio dicen y predicen pregonando que el NCPP es un Código justo y GARANTISTA; los delincuentes están felices, la policía perpleja se harta en detener delincuentes para nada, las víctimas invisibilizadas se resignan a su suerte, mientras huérfana la justicia languidece. Esa es la verdad de la justicia en el Perú.

Por todas esas razones y mucho más, el nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es inconstitucional, porque su normativa está llena de artículos que contravienen o dicen exactamente lo contrario al mandato constitucional. Respecto a ello, la propia Constitución es muy clara, cuando hay incompatibilidades con la Constitución y cuando hay desacato o surgen transgresiones a la misma.

En ese sentido: En caso de incompatibilidad, el 2do párrafo de su **Art.138** dice: **"***En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera***".** En su **Art. 51** dice: **"***La Constitución prevalece por encima de cualquier otra norma legal…***".**

Y en caso de violación o vulneración de la Constitución, ésta legitima el desacato y la desobediencia como mecanismo de defensa, **Art. 2. 24, a) "***Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe***".** Habilita incluso la insurgencia en defensa del orden constitucional, su **Art. 46** dice: **"***Nadie debe obediencia…a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución... La población tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas****".***

Como ya dije antes, el tema es muy amplio, pero creo que el lector es inteligente y se dará cuenta en que manos ha caído la justicia peruana. Me refiero a la intromisión del 'pensamiento progre' en nuestro sistema judicial a través del sistema judicial acusatorio donde el NCPP impone y los fiscales mandan. Precisamente de ello sigue las siguientes líneas.

LOS FISCALES

Los fiscales en el mundo cumplen una función determinada en los procesos penales. En España que ha sido nuestro referente histórico, tienen encomendado, la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, así como velar por la independencia de los Tribunales. Y así, en muchos otros países donde estos funcionarios públicos (los fiscales) realizan su labor sin pervertirla y ajustándose al orden constitucional. Sin embargo, en los países de Latinoamérica donde la justicia ha caído en brazos del **sistema judicial acusatorio adversarial** se ha pervertido el accionar de los fiscales, a quienes a través del NCPP se les ha dotado de poder y de herramientas jurídicas contradictorias, además de funciones y atribuciones que van a contra corriente con la Constitución y con que se haga justicia, es decir, que va contra el sentido de la justicia misma.

En el Perú siguiendo tendencias de marcado sesgo político de izquierdas (progresistas, caviares y neocomunistas) que hicieron el Nuevo Código Procesal Penal (con Diego García Sayán **(*)** al frente como ministro), y en connivencia con los gobiernos filoterroristas y/o pro comunistas que hemos tenido (Paniagua, Toledo, etc, etc), se rasgaron las vestiduras en nombre de los derechos humanos, y genuflexos cedieron a la "progre" e ideológica **teoría del conflicto** y alumbraron el cuestionado y vigente Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

(*) ***Diego García Sayán*** *(Inf. Wikipedia)*
Ministro de Justicia (2000-2001)
El 27 de noviembre del 2000, fue nombrado ministro de Justicia por el presidente transitorio, Valentín Paniagua.
Como tal, promovió la normalización de las relaciones del Perú con la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impulsó la reconstrucción del Sistema de Justicia.
Permaneció en el cargo hasta 28 de julio del 2001.
Ministro de Relaciones Exteriores (2001-2002)
El 28 de julio de 2001 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Alejandro Toledo. Dirigió la adhesión del Perú a la Corte Penal Internacional y la aprobación por la OEA de la Carta Democrática Interamericana (iniciativa peruana que personalmente lideró).
En el 2004, fue elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual ha sido presidente el período 2010-2014.

Pues a través de este Código (NCPP), han hecho de los fiscales unos "poderosos monstruitos" **(*)** que amedrentan y causan miedo, personajes variopintos con un poder ilimitado antes y durante el proceso penal, con un "arma de guerra letal" para la justicia, llamada '**principio de oportunidad**', con la que llevan cautiva bajo el ala a '**la acción penal**'; la que es utilizada por los fiscales a su antojo dejando sin posibilidad de recibir justicia a la víctima por parte de un juez, mientras el justiciable (el delincuente) muerto de risa 'se va de rositas' si por gracia del fiscal es "tocado con la varita mágica de la oportunidad". Así, 'la justicia en el Perú es un brindis al sol'.

(*) *Hay **monstruitos de chocolate** que se pueden devorar de un bocado, aunque a veces da pena acabar con su efímera vida. También los hay en la imaginación, los de los*

*tebeos, **monstruitos** que tienen hambre, que comen melones o tarta, y otros que comer sillas, zapatos o tractores. Pero no, ellos no; me refería a los 'poderosos **monstruitos de la justicia'**; aquellos que se alimentan de la ley para violarla, que hacen de la justicia su potrero, que según sea qué, cortan cabezas o abren la celda para que impere la oportunidad.*

Metáfora aparte y con la dispensa del caso por el dicho castellano; no cabe duda, que los fiscales de un tiempo a esta parte, desde que (en contra del mandato constitucional) se les regalara 'la acción penal', hacen y deshacen con la justicia. Han adquirido un protagonismo tan grande y notorio que no hay precedente ni parangón en la justicia peruana. Los fiscales han dejado de tener ese perfil bajo respecto al juez como figura que encarna la justicia, en torno al delito y de cara a la administración de justicia, antes y durante el proceso penal. Le han birlado la cartera a los jueces de instrucción quedándose con la investigación y persecución del delito; por otro lado, teniendo en sus manos la exclusividad de la formalización de la acción penal han dejado a los jueces cual estatuas de piedra, sin ojos, sin voz, sin acción y sin nada; sin investigación y persecución penal, sin iniciativa procesal ni discrecionalidad.

En ese sentido, de acuerdo a lo que manda el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) el fiscal es determinante desde tres frentes muy marcados. Un fiscal en el Perú es al mismo tiempo, "un super policía, un super juez y un super fiscal", todo ello, gracias al sistema judicial acusatorio y al NCPP que le faculta. Y lo explico:

1).- Le faculta la investigación del delito; es decir, lo que antes hacía el Juez de Instrucción. Pero además, con este Código los fiscales meten sus narices en la etapa policial (algo inconstitucional, pero lo hacen). Confunden el texto constitucional. Cuando la Constitución dice que los fiscales (MP) dirigen la investigación del delito desde la etapa inicial se refiere desde que se inicia el proceso penal, y eso sólo puede ser cuando los hechos pasan o están a disposición judicial.

Gracias a esta perversión de la norma constitucional, el Fiscal se ha constituido en *UN SUPER POLICÍA*; que los ha llevado a creerse que pueden hacer operativos o pesquisas como si fueran policías. Y lo hacen, por eso no es extraño leer en la prensa, 'Fiscalía desarticula banda de delincuentes'. Se tienen tan creído 'el papel de policía', que han incorporado en su estructura sus propios laboratorios de criminalística y gabinetes de peritos. Lo cierto es que esto no debería ser así. Está claro que la Constitución limita el cometido del Fiscal a la fase jurisdiccional, pero el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) desoye el mandato constitucional y superpone el accionar de los fiscales por encima del accionar de la policía. Le quita iniciativa y le corta las alas a la labor policial. Si la policía tiene noticias que se va a cometer un delito tiene que pedir permiso al fiscal y esperar a que éste autorice. Con lo cual, quieren obligar a la policía que sólo investigue lo que el fiscal quiere. En la práctica es un abuso que lamentablemente se está dando. Esta situación ha creado un conflicto funcional insalvable entre fiscal y policía.

(2).- Le faculta decidir, qué es delito y que no, qué debe denunciarse y que no. Le atribuye valorar de primera mano los hechos denunciados. Antiguamente era atribución del Juzgado de Guardia. El NCPP faculta a los fiscales expedir

‘DISPOSICIONES DE ABSTENCIÓN’, que adquieren el carácter de COSA JUZGADA (Art. 2, inc 4 del NCPP), ya que impiden bajo sanción de nulidad se vuelva a promover acción penal por los mismos hechos. Con lo cual, aunque parezca sorprendente, irremediablemente estás disposiciones adquieren el mismo valor de una sentencia consentida; ‘y si se paga el daño’, queda ejecutoriada. Todo ello comporta valoración de los hechos (del hecho criminal) y confrontarla con la ley penal, si eso no es administrar justicia, entonces es el mundo al revés.

Mas poder que eso, no hay nada. La justicia en la palma de la mano de un fiscal. Es decir que aquí un Fiscal es *UN SUPER JUEZ*.

(3). - Y lógico, tiene facultades de Fiscal. Pero no de cualquier fiscal. Además de defender la legalidad (entre comillas). Con este Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), haciendo uso de la facultad que tiene de disponer del ‘principio de oportunidad’, en cualquier estado y momento del proceso penal PUEDE retirar la acusación si llega a un arreglo (acuerdo) con el justiciable o si cree que no tiene caso. Es decir, tiene el poder de ACUSAR o no acusar, según su ponderación y criterio, guiándose “por la perspectiva” de su ‘**teoría del caso**’; pudiendo promover ‘acuerdos’ (reparatorios) con **el delincuente** al margen de **la víctima** que al sistema acusatorio le importa poco; tanto, que este código al delincuente y a la víctima les llama ‘el agente’ y ‘el agraviado’, respectivamente.

Lo cierto es que, el fiscal puede dejar sin caso al juez o al Tribunal encargado (juzgado colegiado) si es que no acusa. Si eso no es ser *UN SUPER FISCAL*, entonces ‘que venga Dios y lo vea’.

Por eso es importante para la justicia y para la víctima que haya acusación particular e incluso acusación popular.

AL FISCAL, en el NCPP se le encarga investigar sin ser policía, le encargan juzgar sin ser juez, y siendo quien es, ejerza la acusación fiscal; eso si logra construir el caso. Se le pide que, si “la oportunidad” cae del lado que interesa deje de ejercer la acción penal o deje de acusar según el estado de la causa. El problema es que con ello el favorecido es el delincuente, con lo cual, fiscal y delincuente se tienen que entender, terminando el primero convirtiéndose en el típico arreglero; o mejor dicho, el que echando mano de la oportunidad pone sobre la mesa un **acuerdo reparatorio**. Eso sin importar la víctima. La víctima no cuenta, no existe; como mucho asoma de reojo “el ofendido” o “el agraviado”.

Con todo esto, sólo falta que el fiscal (que alguno habrá) tire una moneda al aire a ver si la oportunidad cae cara o cruz. En ‘la Roma de los Cesares’, había algo parecido, levantaban el dedo hacia arriba o lo bajaban hacia abajo (valga la redundancia), veredicto para determinar el destino de alguien. En este caso los fiscales hacen lo mismo con “la oportunidad”; no se si levantarán un dedo o tirarán una moneda al aire, pero lo que sí está claro es que la policía detiene y los delincuentes salen en libertad muy fácil.

Como se puede ver, un fiscal tiene competencias de todo y de todos (policía, juez y fiscal), y así no se puede tener un sistema de justicia coherente y justo, y

mucho menos eficiente, porque no se puede ser ni hacer de todo al mismo tiempo. Como diría un castizo, 'no se puede estar en misa y repicando'. Un absurdo total; "no se puede ser juez y parte a la vez". ¡Demasiado poder!, ¿no les parece?

La inviolabilidad del acceso a la justicia debería ser irrenunciable e intransferible; es el único bastión seguro de las personas en su 'derecho al auxilio judicial'. Los acuerdos reparatorios que lleva a cabo el fiscal mercantilizan la acción penal y en la siguiente etapa ya en la judicialización con matices hacen lo mismo con la acusación; todo depende de qué, de quién y del caso. De si hay injerencias o si no se politizan los hechos o si el poder no se inmiscuye e interfiere. Así pues, el sistema judicial acusatorio permite ponerle precio a este derecho (al acceso a la justicia) al margen de lo que pueda decir un juez, que no puede decir nada porque el NCPP en fase no jurisdiccional no le da opción a conocer la acción penal, si el fiscal no formaliza o no se lo pone a disposición; y en fase jurisdiccional, este Código le ha privado al juez de **iniciativa y discrecionalidad**.

Todo ello, es grave, incorrecto e injusto para la víctima, por mucho que lo recoja el NCPP. Con lo cual, la justicia que hay en el Perú actualmente es mucho peor que el sistema judicial que había con el Código procesal anterior conocido como Código de Procedimientos Penales de 1940, por muy inquisitorial o satanizado que nos lo presentaran para acabar con su vigencia y doblegar la voluntad popular de su aplicación.

Con el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), los fiscales, de la noche a la mañana se han constituido en AUTORIDAD, o mejor dicho han sido investidos con la categoría de autoridad coercitiva; al menos, eso es lo que creen los acólitos del sistema acusatorio. Antes sólo eran miembros del Ministerio Público (Un operador de justicia más); es decir, FUNCIONARIOS DEL ESTADO garantes de la legalidad, que cumplían su labor como fiscales (acusación fiscal) parte en el proceso judicial; pero no tenían autoridad coercitiva para citar, interrogar por su cuenta, ni mandar detener a nadie; eso estaba reservado sólo para la autoridad judicial (el juez), y constitucionalmente aún lo está. Pero visto lo visto, algo no va bien; con estos desatinos, al final la justicia es la que pierde.

Gracias al NCPP se les ve a los fiscales dirigir personalmente operativos policiales, requisas, incautaciones, allanamientos y ejecutando detenciones a personas, y si me apuran, son decisivos en enviar a prisión preventiva a quienes consideran "oportuno", nunca mejor dicho, la oportunidad como principio; lo mismo ocurre con decomisos e incautaciones y más; claro, con orden judicial, de un juez que hace de convidado de piedra, que no le queda más remedio que convalidar las ocurrencias del fiscal.

Hasta antes que entrara en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) sólo **un juez** era AUTORIDAD para privar de libertad a una persona, y también **la policía** en caso de **flagrancia** conforme al Art. 2, 24, f) de la Constitución (eso ante un delito cometido). Sin embargo, hoy los fiscales son "un poder factico" compitiendo con el Poder Judicial y avasallando a la policía; o si al caso, comiéndoles el terreno y espacios a ambos dos.

Y a todo ello; surge la interrogante: ¿Quién investiga al investigador? Quién investiga y/o denuncia a los fiscales cuando estos son sorprendidos cometiendo un delito. A la vista de hechos delictivos publicados en los medios de comunicación y en internet, donde se ve a fiscales recibiendo coimas, no hay respuesta válida. Ellos son dueños y señores de la acción penal, por lo tanto, 'dueños de la pelota'. ¿Ustedes creen que un fiscal va a denunciar a otro fiscal?; lo dudo, salvo si no es por venganza, una vendetta o una lucha intestina entre fiscales. Lo normal es que entre ellos se solapen. En el argot criollo dirían, que 'perro no come perro', o si lo quieren más suave, 'otorongo no come otorongo', haciendo alusión a una vieja máxima o quizá un viejo aforismo que viene como anillo al dedo a un malsano corporativismo. Claro, que puede haber alguna excepción, como el **caso Valquiria**, donde una fiscal abre investigación contra la fiscal de la nación, después que la primera fuera destituida por la segunda. Pero para que eso ocurra, tiene que haber de por medio, revancha, venganza, resentimiento, rencor o cualquier otro detonante, que retrata no un acto de justicia sino más bien un acto de venganza, que más parece "una vulgar pelea de perros". Valga pues la metáfora para ilustrar, y un perdón a los pobres animales; pero es la pura verdad. El corporativismo va primero.

Seguro me dirán, que el 2 de mayo 2019 (modificaron el art 51 del DL 052, LO del Ministerio Público). Se dio la Ley Nº30944, de 'Creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público', que tiene a su cargo el control funcional de los fiscales, salvo los fiscales supremos que compete a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). **Pues bien,** esta Ley en su **Art. 51. 2,** dice:

"*El control funcional comprende la prevención, supervisión, inspección, investigación, instauración del procedimiento disciplinario e imposición de la sanción conforme a la Ley 30483, Ley de Carrera Fiscal***".**

Como se ve, el control a que hace referencia esa Ley sólo es disciplinario. Yo me refiero; a quién los investiga y quién los denuncia en caso de delitos cometidos por fiscales. En otras palabras, la Ley Nº30944 (a efectos penales) es irrelevante, un engaña muchachos, que nos lleva a las mismas interrogantes: ¿Quién investiga al investigador? ¡Quién le pone el cascabel al gato!

Así, el poder de los fiscales se torna ilimitado en contubernio con el poder político. Un ejemplo lo tenemos en el Ministerio del Interior (Mininter), donde el poder fáctico filoterrorista del autodenominado "Poder Civil del Mininter", llegó a crear una policía paralela dentro de la policía que depende directamente del Mininter, como la **DIVIAC** (División de Alta Complejidad) y de ella desgajada una Unidad mucho más ajena y alejada de la policía como es el **Equipo Especial** de Apoyo a los Fiscales **de EFICCOP**. Policías monitoreados y/o al mando de "fiscales ad hoc" para investigar a políticos, autoridades, empresarios y personas relevantes, a las que se interviene al amparo de **operativos contra la corrupción** y el crimen organizado. Como aquél operativo que hicieron en su día en la casa del ex presidente Alan García y donde éste se quitó la vida. Aquél día, la orden del Juez era que la Policía Judicial se encargara de esa diligencia, sin embargo, la Fiscalía dispuso que fuera el equipo especial **Eficcop** de la DIVIAC (dependiente del Mininter) la que montara un operativo con un fiscal al frente. Este detalle ha pasado desapercibido y la responsabilidad del fiscal ha quedado

impune. Como se ve, la DIVIAC y Eficcop, son una especie de 'policía política' avalada por fiscales y disponible a los requerimientos del poder (están fuera del control del Comando PNP). Ni hablar de operativos fantasmas como los que en su día hacía el ministro "caviar" Basombrío con aval de la fiscalía.

Con estos tintes y estas fibras, la delincuencia vulgar de a pie, del día a día (robos, secuestros, extorciones, violaciones, etc.) avalada por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) ha dejado de interesar a los fiscales, los que en su quehacer funcional deberían hacer acto de presencia y cumplir con la formalidad; pero hay tanto desinterés por la delincuencia común por parte de los fiscales, que muchas veces ni eso cumplen a cabalidad. Lo cual, ha quedado patente en muchos casos, de los que citaré uno como muestra:

El **caso Terramoza** (2018), la Fiscal a cargo se desentendió del caso (violación de una terramoza por un chofer y un cobrador de un bus interprovincial), dejando libre a los autores confesos, con el argumento de no tener jurisdicción ni competencia por haber ocurrido los hechos en Nazca. El hecho ocurrió en el trayecto de Arequipa a Lima. Este hecho demostró la incompetencia de dos fiscales que se 'tiraban la pelota'. Finalmente, por la presión mediática una de las fiscales fue destituida y la otra investigada. La inoperancia del Ministerio Público como institución quedó en evidencia, ya que se empecinó en disponer que la investigación fuera en la Fiscalía de Nazca, obligando a la víctima tener que desplazarse 500 kms. durante el largo proceso judicial. Una insensatez sin fundamento que confirma la falta de sensibilidad de la Fiscalía con las víctimas. Hay muchos casos atroces que se pueden ver en YouTube y en otras plataformas de internet donde fiscales del Perú dejan libres a violadores, asesinos y a otros autores de crímenes atroces y execrables.

Todo ello, siguiendo los dictados del sistema judicial acusatorio y haciendo uso del principio de oportunidad. Los fiscales dueños y señores de la acción penal, hacen mal uso de esta cuestionada atribución; desdeñan a la víctima y miran más por los derechos humanos de los delincuentes, a los que de facto perdonan favoreciéndoles al otorgarles actos de gracia (la oportunidad) que los delincuentes saludan y ven con buenos ojos esas medidas; lógicamente, los delincuentes están encantados con el sistema judicial acusatorio impuesto que tiene cautiva a la justicia del país. ¡Y todo ello, gracias a los progres que la implantaron en el Perú!

Todos estos aspectos poco conocidos por los peruanos, son muy importantes y es necesario que se conozcan; que la gente sepa porqué la delincuencia tiene patente de corso (permiso) para cometer sus fechorías. Pero, sobre todo, que los policías sepan, porqué cuando ellos detienen a delincuentes y criminales, estos a la media hora ya están en la calle campando a sus anchas, listos para volver a cometer otros atracos u otras violaciones. Son los fiscales los que ponen en libertad a los delincuentes amparándose en el principio de oportunidad. La razón sólo ellos lo saben; las malas lenguas y la mala prensa suelen decir que hay estómagos agradecidos tras ello. Ahí os dejo un video muy ilustrativo de lo que digo:

Video subido en YouTube por TVPerú Noticias del año 2024, con el título de: *"PNP cuestiona liberación de 10 presuntos criminales en Cañete".*

https://www.youtube.com/watch?v=D95mph9Vb4A

En el video el General Manuel Lozada, señala: "Un fiscal les ha dado libertad bajo unos argumentos que a nosotros nos indigna". Tras la liberación de 10 extranjeros que fueron detenidos en operativo realizado por la policía en Cañete.

Si antes decían, 'los policías se dejan romper la mano', hoy esa afirmación ha quedado anticuada, obsoleta y corta. Porque ahora son los fiscales los que deciden. Con el poder que tienen y lo mal que va la justicia; la opinión generalizada de la gente es que estos funcionarios 'hacen su agosto', gracias a las facultades que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) les ha dado. Ser fiscal en el Perú ahora mismo es sacarse la lotería. 'Pillar cacos trincando' es una mina, donde no hace falta pico ni pala, sólo hace falta 'poner el cazo', y a veces ni eso. Valga la metáfora, eso se llama corrupción… Ya lo decía el finado presidente Alan García ¡la plata llega sola!.

Voy a recoger lo que el abogado Abelardo De la Espriella, con pasión, vehemencia y sentimiento patriótico, en sede del parlamento colombiano, alzó su voz para decirle a los presentes fuerte y claro: (se puede ver en YouTube)

"*El peor delincuente de todos es el funcionario judicial porque conoce la ley, ese es el peor bandido de todos, peor que los narcos, que los paramilitares, que la guerrilla, porque el funcionario judicial está obligado a acatar la ley, el funcionario judicial representa el espíritu de la nación y la democracia; estos políticos de pacotilla se pueden enloquecer todos, pero los jueces no se pueden enloquecer, porque son nuestra conciencia, son el alma de nuestra sociedad****".***

Pues esto mismo vale para los miembros del Ministerio Público, porque los fiscales representan la defensa de la legalidad; si ellos no respetan el cumplimiento irrestricto de los mandatos constitucionales, entonces LA LEGALIDAD y 'el estado de derecho' no está en buenas manos.

Finalmente, como fiscal: No se puede ser **AUTORIDAD** y **PARTE** al mismo tiempo en el proceso penal. Por un lado, cumplir la responsabilidad de ejercer la acción penal y mantenerla viva con la acusación; y, por otro lado, compartir y revelar las pesquisas, poniéndolas a nivel y disposición de la parte procesada (del delincuente). Igualdad de armas le llaman; de una lucha no buscada por la víctima, pero que el sistema acusatorio y el NCPP, lo quieren como comidilla de circo para darle sentido a la teoría del caso.

Perversión de la justicia pura y dura. Eso es el sistema judicial acusatorio. Eso nos ha traído el NCPP. Por eso hay corrupción, impunidad y delincuencia.

FISCALES vs POLICÍA

Es evidente que el sistema judicial acusatorio después de más de 17 años que se instalara en el Perú a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) no ha

funcionado y va camino al fracaso, aunque sus acólitos se empecinen en sostener lo contrario, más temprano que tarde la gente se dará cuenta y harta de tanta delincuencia, tanta impunidad y tanta corrupción, querrán tomarse la justicia por su mano. Si no queremos que eso ocurra, la justicia debe cambiar dando un giro de 360 grados.

El sistema judicial acusatorio es como un gusano-oruga que poco a poco va corroyendo y pervirtiéndolo todo, instituciones, autoridad y a la justicia; y sus promotores lo saben. Empezó silenciosa y soterradamente en los países de Centro América, luego dio el salto a América del Sur hasta que llegó al Perú. Ya en nuestro país, emplearon la misma estrategia, empezaron de forma experimental por algunos lugares de provincia con la expectativa que poco a poco fuera instalándose y cayera en cascada el resto del país.

Lo más grave, además de la inconstitucionalidad reseñada del NCPP, es el hecho que fiscales y policías no han logrado entenderse, y no lo harán, salvo por la vía de la arbitrariedad política o el abuso absurdo del que vienen haciendo gala los fiscales en contra de la policía.

Eso tiene una explicación: El Estado otorga cuotas de poder y todos deben respetarse entre sí para que el sistema funcione. Para el Estado todas las autoridades e instituciones son importantes, ninguna es mejor ni peor que otra. El Estado es como un padre para el que todos sus hijos son válidos e importantes. Si cada uno hace lo que tiene que hacer todo marcha como un reloj suizo. Así: Por un lado, a policía es autoridad para vigilar se cumpla la ley, con poder coercitivo en caso de incumplimiento; por otro lado, los fiscales con el NCPP han sido investidos de una autoridad confusa, difusa y hasta arbitraria; ahí están.

El Estado reparte poder a sus estamentos, los que deben saber coexistir, coordinarse, respetarse y administrarse bien. Pero no se cumple. Cuando el Fiscal quiere someter a la policía, incumple su rol, comete abuso, realiza un acto arbitrario. La policía es el brazo armado de la ley, el debilitarla o desvalorar su accionar y su entidad es ir contra el mismo Estado. Superponer la autoridad de unos sobre los otros, siendo dos instituciones con distintos roles, genera perversión del sistema y trae transgresión. Ya nos lo advertía **Gunther Jakobs**. El incumplimiento de roles. Si los fiscales hicieran de fiscales y los policías de policías, no habría conflicto. No se vería a fiscales interviniendo a policías ni a policías interviniendo a fiscales por cuestiones de transgresión funcional, como se ve en las noticias y videos que circulan en internet. Ahí les dejo un par de videos como muestra entre los muchos que circulan por internet:

1.- Video subido a YouTube por RPP Noticias del 06 julio 2019, con el título de*: "Fiscal provincial fue detenido con cinco mil soles de coima en el Callao"*

https://www.youtube.com/watch?v=EExvsCTJ6EU

El detenido fue el fiscal Ruddy Jaime Chiriboga Julca. Intervenido en flagrante delito luego de recibir un soborno para favorecer a un procesado por defraudación de rentas de aduanas.

2.- Video subido a YouTube por TVPerú Noticias año 2024, con el título de: *"Detienen a fiscal por pedir coima de S/ 2000 para liberar a un detenido".*

https://www.youtube.com/watch?v=j3ZjN5ppYXg

El detenido fue el fiscal Carlos Alberto Aquije Vilca. La Intervención policial estuvo a cargo de la DIRCOCOR de la PNP en Villa El Salvador.

Lógicamente hechos como esos no tienen justificación venga de donde venga, ya que, también hay policías corruptos que son intervenidos por la fiscalía, lo cual acrecienta el encono y rivalidad entre policías y fiscales.

Por ello, ha surgido una "corriente conciliadora" ante la falta de entendimiento entre dos instituciones con cometidos constitucionalmente diferentes, que aboga por la prevalencia del binomio fiscal-policía o viceversa.

Saben que la Policía es una institución con arraigo; someterla por la fuerza a ordenes de fiscalía sabiendo que la Constitución manda otra cosa es absurdo e insostenible. Saben igualmente qué con el NCPP, los fiscales se deben al sistema acusatorio, y de ello depende las atribuciones que tienen; por ello, buscan caminos de entendimiento con la policía para tenerla bajo control. Si por ellos fuera la desaparecen, pero eso no es posible. No les interesa una policía jerarquizada y militarizada, tal cual está concebida, con funciones y atribuciones constitucionales definidas. Por eso, buscan un acercamiento; utilizan a policías con vínculos en el Ministerio Público para que promuevan el **binomio fiscal-policía** y así no se les atragante el NCPP en las fauces de la justicia.

Pero los más de 130 mil policías son reacios al sojuzgamiento por parte de los fiscales; se han dado cuenta que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es inconstitucional respecto a lo que la Constitución les asigna y atribuye como quehacer funcional, y, además han observado que con este Código la policía pierde identidad y AUTONOMÍA institucionalidad.

Así las cosas, a los reformistas, no les queda otra cosa que echar mano de la misma estrategia que utilizaron sus mentores para implantar el sistema judicial acusatorio en Latinoamérica, ir por fases o tramos; "la estrategia del gusano oruga" ir comiéndole terreno a la policía poco a poco, que ya se doblegarán.

Comenzaron el experimento por la provincia de Huaura, adoctrinando a los policías con charlas, conferencias, seminarios y cursillos para someterlos, para que metafóricamente hablando, dobleguen el lomo e hinquen la rodilla ante los fiscales. Con esa estrategia pretendieron copar las comisarías (poniéndolas a su servicio) en todo el país, para que como en otros países latinoamericanos quedaran a merced del sistema acusatorio; de la nueva justicia.

La razón por la que el binomio fiscal -policía no se puede dar, es porque quieren encontrar en los policías lacayos a su servicio, a los que puedan mangonear, manosear y tratar como estropajos. Intenciones que se pueden oír y ver en sus famosas jornadas de capacitación, que no son otra cosa, que adoctrinamiento puro y duro, para obedecer 'a pie juntillas' a los fiscales; qué amparados en el NCPP, no les importa si va en contra del cometido constitucional de la policía.

No se cansan de repetir, que el Código dice, que la ley manda (refiriéndose al NCPP). Lo que no dicen es que ese Código es inconstitucional, que todas las disposiciones que recoge en relación a la policía son atentatorias contra su finalidad fundamental y su AUTONOMÍA; así como también, contra las atribuciones que la constitución le otorga a la policía. Por lo tanto, visto desde esa óptica, la policía no tendría que obedecer un Código transgresor de la legalidad constitucional. Porque así lo recoge y ordena la Constitución en sus artículos (**Art. 46** y **Art. 74**). Nadie debe obediencia y **no surten efectos** lo que viole la Constitución.

Por ello, en vez de hablar de binomio fiscal-policía, se debería hablar y reconocer de una vez por todas que **existe un conflicto de intereses institucionales**, de funcionalidad, operatividad, de servicio, de respeto y lealtad al mandato constitucional; por lo tanto, se debe hablar más bien de una realidad palpable, **FISCALES vs POLICÍA**, y si se quiere más claro fiscales contra la policía.

Siguiendo consignas de los patronos del sistema acusatorio, que no es Made in Perú sino un invento foráneo al amparo de organizaciones internaciones de Derechos Humanos, seguirán persistiendo, como en la vieja (URS) "marchando hasta la victoria"; sólo que por ahora el binomio fiscal-policía no es posible, porque a los acólitos de la nueva justicia les importa un bledo la policía, sólo les importa sus intereses.

Los que abogan por esta idea, son los mismos de siempre, políticos caviares enemigos de la policía y los acólitos del nuevo sistema de justicia (entre ellos, los fiscales); los cuales, desde que se aprobó el NCPP promueven una sintomática desestabilización institucional de la policía para hacerse con las riendas y poder disponer de las atribuciones, facultades y recursos de la Policía Nacional (PNP). Muchos se han hecho nombrar ministro del interior para servir al sistema acusatorio, entre ellos, caviares, ex fiscales, y familiares de terroristas. Los cuales, han hecho mucho daño a la policía, sea porque tienen un claro desprecio por la policía o porque sirven a intereses políticos cuyo sesgo es marcadamente de izquierdas, contrarios a los intereses de la policía y muy afines a la fiscalía **(*)**.

(*) *Entre estos ministros antipolicía están: Gino Costa (12jul2002 - 27ene2003), Carlos Basombrío (28jul2016 - 22dic2017), Rubén Vargas Céspedes (18nov2020 - 02dic2020),* ***Avelino Guillén ex fiscal*** *supremo (04nov2021 - 30ene2022), y* ***Juan Carrasco Millones ex fiscal*** *en Lambayeque (29jul2021 - 06oct2021, Mariano Gonzales (04jul2022 - 19jul2022), entre otros.*

Muchos de ellos, al asumir el cargo hicieron tabla rasa con la institucionalidad de la Policía Nacional (PNP); otros, "prometieron cosas ocultando sus intenciones hasta consiguir sus fines". Estos ministros eran enemigos de la policía. Entre ellos, hay algunos policías que cambiaron de chaqueta; con lo cual, son más peligrosos todavía, porque se les permite entrar en casa, pero en el fondo no sienten los colores de la PNP. Como diría un gitano, "la pepa del durazno primo ya cogió otros colores"; ahora son caviares o son fiscales. Son caballos de troya que van contra los intereses institucionales de la PNP.

En resumen, en esta pugna entre dos instituciones del Estado a la que he titulado de **'Fiscales vs Policía'**; lo que está en juego, no es poca cosa, es La AUTONOMIA constitucional de la Policía Nacional (PNP) para ejercer sus funciones en estricto cumplimiento del Art. 166 y el Art. 2. 24, f.

La transgresión constitucional hecha ley por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y el patrocinio de su incumplimiento por parte de los fiscales, es un precio muy caro a pagar. Patrocinio, porque los fiscales que son conocedores y garantes de la legalidad promueven y defienden el sistema judicial acusatorio, a sabiendas que hay quebranto constitucional.

De ahí que, las charlas, clases, artículos y libros escritos por fiscales y por policías conversos a fiscal no son de fiar. Es como si te estuvieran robando y encima envían a alguien conocido para convencerte de las bondades del que te está robando. Dicho de otra forma y más claro; es como si te enteras que te ponen los cuernos y te avienes a reconocer un manual de cómo tiene que llevarse a cabo la infidelidad. Eso sería allanarse y tirar la toalla en favor del NCPP. Es evidente que el discurso que venden los integrantes del Ministerio Público (los fiscales) es para poder subyugar y someter la labor que realiza la policía.

Pero los acólitos del sistema acusatorio te dirán, que el nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es la panacea, que lo demás es viejo y caduco, herencia del inquisidor (refiriéndose al sistema antiguo), y que es conveniente el binomio fiscal-policía; pero claro: ***"****el fiscal como jefe supremo de la investigación (director), que escuchará al policía, sus sugerencias, sus experiencias y deliberará con él para decidir la estrategia de cada caso; que el fiscal y el policía deben trabajar como un equipo, como binomio, sólidamente unidos por los fines de la investigación pero preservando la identidad de sus roles****";* bla, bla, bla. La cita es del libro de un ex fiscal superior y a la vez ex coronel PNP, de quien no daré el nombre para no hacerle publicidad.

Es evidente que al interior de la Policía Nacional hay incomodidad e inconformidad, no sólo por la recurrente presencia de los fiscales en las comisarías, sino, por el comportamiento arbitrario y desdeñoso que tienen con la policía. La policía hasta antes del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) tenía **autonomía funcional** en sus diligencias e investigaciones policiales (ahí están los famosos atestados); y en la Constitución aún lo tiene (Art. 166), pero es el NCPP, el que ha generado una situación de despojo funcional insostenible contra la policía, una sensación de que nos han robado la cartera (metafóricamente hablando); entendible sólo desde el desvarío del sistema judicial acusatorio que 'arrima el ascua hacia su sardina' (en favor de los fiscales) y 'deja con los cataplines al aire' a la policía.

No me vale que 'nos quieran vender la moto' diciendo que es necesario un cambio de mentalidad y que están dispuestos a ayudar y a suplir "la falta de preparación" de los policías; como si en los centros de formación y capacitación de la Policía Nacional no se enseñara nada o no se impartieran clases de formación y especialización de calidad. Lo cual no es cierto, ya que muchos de

los profesores y catedráticos son magistrados y también fiscales. Lo cierto es que, los acólitos del sistema judicial acusatorio y desde las fiscalías están ávidos y prestos a adoctrinar a los policías para que como borregos vayan moviendo la cola detrás de los fiscales, diciendo sumisos ¡sí, bwana, sí, bwana!.

El argumento es hasta ofensivo, dicen; les queremos dirigir "porque así manda la ley" (un Código Procesal Penal inconstitucional); pero, además porque nosotros los fiscales como letrados que somos y conocedores de la ley, somos los dueños de la verdad, "somos los TITULARES DE LA ACCIÓN PENAL"; cosa que la Constitución no dice. Que alguien me diga, en qué Art. la Constitución dice esa barbaridad expresamente. Esta gente cree que los policías no saben ni son capaces de entender la ley. Y lo dicen, como si un policía fuera un hombre de las cavernas, que no tuviera o no se le pudiera nutrir de los conocimientos necesarios para cumplir la función que la Constitución le encomienda, y por eso, los quieren "socorrer" (adoctrinar); al punto de hacerles creer que ante tanta incapacidad necesitan una niñera; un fiscal que supervigile lo que hacen y lo que no hacen.

Dicen: ***"****El fiscal es profesional del Derecho, el conoce sobre la descripción precisa de las acciones u omisiones que deben existir para que una conducta sea considerada como delito en sus tipos genérico y específico; conoce sobre tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que son elementos que convierten una acción en delito, conoce en general de los elementos objetivos y subjetivos de los delitos en particular; por eso es la persona encargada de determinar qué actos de investigación deben efectuarse en el caso concreto de acuerdo a su estrategia jurídica y de orientar a la policía sobre los que le sean de mayor ayuda para promover la acción penal****".*** (párrafo tomado de un artículo de internet, cuyo autor ha sido fiscal y también coronel PNP; no revelo su nombre para no hacerle publicidad).

Esta gente tiene un doble discurso. Por un lado; quieren que la policía les haga el trabajo a los fiscales para que estos ejerzan la acción penal (formalicen la denuncia). Es decir, les interesa que haya delincuencia y delincuentes para mantener el negocio vivo y activo, mientras más mejor; si no hay delincuencia ni delincuentes carecería de sentido su rol, el que les da el NCPP. Por otro lado, olvidan que para implantar el sistema judicial acusatorio en el Perú esgrimían como argumento, que las cárceles estaban llenas de presos, que los juzgados estaban desbordados de trabajo y que no se bebía perseguir todos los delitos, que los delitos de poca monta eran producto del sistema, y los pobres delincuentes no tienen la culpa de violar la ley, y que el culpable era el Estado por no darles las herramientas ni los medios necesarios para evitar que delincan; en otras palabras, no hay que molestar al delincuente porque es un pobre desgraciado, por el contrario, hay que apoyarlo y protegerlo. Eso promueve el sistema acusatorio a través del NCPP.

Si es así, por qué quieren que la policía pierda el tiempo, si los fiscales son juez y parte; como dice el dicho castellano, 'ellos se lo guisan ellos se lo comen'. Es decir, la policía detiene a los delincuentes y ellos (los fiscales) los sueltan. Aplicamos el principio de oportunidad, dicen. Y con ello, hacen y deshacen en nombre de la justicia sin ser jueces. Los fiscales gracias al NCPP que los ampara

se sienten “dueños del delito” y de la acción penal más allá de lo que ordena la Constitución. No sólo les deja en bandeja la investigación policial, sino también, les ha entregado la investigación y persecución del delito que debería estar en manos del extinto juez de instrucción, lo cual, es un ataque a la judicatura y a la justicia.

Dicho esto, si piensan que las unidades de investigación de la PNP tienen que estar al servicio de los fiscales se equivocan. La policía constitucionalmente tiene autonomía para INVESTIGAR LA DELINCUENCIA (Art.166); es decir, los HECHOS DELICTIVOS y a los AUTORES MATERIALES de los mismos, a través de las pesquisas y pericias de criminalística. Así ha sido siempre. Por eso existió la Policía de Investigaciones (PIP) que hoy forma parte de la Policía Nacional. Los impulsores de la nueva justicia, se aprovecharon de la unificación de las Fuerzas Policiales (FFPP) para adueñarse de las competencias de la policía despojándola de autonomía funcional. Sabían que tal cual estaban constituidas las FFPP eran un impedimento para implantar el sistema judicial acusatorio. Por eso, pusieron la mira en la policía, el NCPP hizo el resto.

Deberían dejar a la policía trabajar en paz, sin injerencias. Las comisarías y las Unidades Especializadas de Investigación necesitan autonomía funcional y operativa para investigar la delincuencia; lo que recoge la policía, son HECHOS delictivos, pruebas y evidencias; su trabajo es pura y dura labor policial.

Me gustaría que los fiscales visitaran una comisaría de policía en España o un cuartel de la Guardia Civil Española, para que vieran la profesionalidad y la capacidad de un policía en su labor de investigación policial, sin presencia de fiscales que adoctrinen ni supervisen su trabajo. No hace falta ningún tipo de niñeras que se arroguen derechos de nodriza hacia la policía. Ya sé, me van a decir, es que el fiscal ve por los derechos humanos del delincuente. Les contesto; para eso tienen un abogado designado. La policía debería tener autonomía funcional para trabajar; se debe al imperio de la ley. Pero por lo que se ve, quieren convertirla en un mero espantapájaros.

Van diciendo que a los policías les falta preparación para asumir el cambio que trae el sistema judicial acusatorio. No señor, lo que pasa es que los policías no están de acuerdo con el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), porque cercena sus competencias y le quita autonomía. Los reformistas, quieren someter a la policía y de paso se la quieren cargar so pretexto que hay ausencia de adecuación al sistema por parte de la organización policial. Quieren tomar por asalto las comisarías y Unidades Especializadas de Investigación (DRINCRI, DIRCOTE, etc., etc.) para que los fiscales hagan y deshagan, y así, desde ahí cada vez que se les dé la gana o ‘cuando la oportunidad se cae de la cama’, con campanilla de señorito llama sirviente, aticen a los policías, y estos ‘vayan a gatas’ a los pies del señorito fiscal.

Creo que se han equivocado y no están respetando el mandato constitucional del Art. 166 y el Art. 2. 24, f. Por ello, es necesario, que la Policía Nacional con sus propios medios y por su cuenta, articule y fortalezca el cumplimiento de sus funciones, atribuciones y competencias asignadas en estricto cumplimiento del

mandato constitucional; para ello, tienen que potenciar el conocimiento de sus efectivos desde la formación, especialización y perfeccionamiento en materia de investigación y en las demás materias que la constitución le asigna.

Los fiscales se empecinan en que la policía debe asumir de la mejor manera el nuevo sistema de justicia que regula el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), el cual, nos impone otro modelo de justicia, el acusatorio adversarial. Imponiendo con ello, una nueva forma de investigar LA DELINCUENCIA y los delitos, en la cual deberían participar de manera conjunta policías y fiscales, y dejar atrás el viejo sistema al que ellos llaman **inquisitorial**, que no permite a los integrantes de la institución policial, internalizar la dinámica del nuevo modelo de investigación con las reglas del sistema judicial acusatorio y bajo las órdenes del fiscal.

Lo que no entienden los fiscales es que la policía, al ser una institución disciplinada y no deliberante, en silencio ve que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) les arrebata inconstitucionalmente una de sus principales funciones, como es la investigación policial (**investigar la delincuencia**), es decir, la investigación de los hechos y su relación con el autor material de los mismos (pesquisas, criminalística, etc, etc.), que al no ser jurisdiccional nada tiene que ver con lo que le otorga la Constitución al Ministerio Público, la **investigación del delito** desde el inicio de la fase jurisdiccional (eso dice el mandato constitucional). Lo que ocurre, que astutamente para los fines del sistema judicial acusatorio retorciendo el mandato constitucional han invadido o se han apropiado de una de las finalidades fundamentales de la policía, como es la investigación de la DELINCUENCIA (Art.166) o investigación policial; y de paso también, se han cargado una de sus atribuciones y competencias, como es el poner a disposición del juez a los detenidos Art. 2, 24, f.

Parece que para ellos todo vale; y no es así. No vale los juegos de palabras en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para burlar la evidencia constitucional y sus mandatos. 'Conducir la investigación del delito desde el inicio' (Art. 159. 4), se refiere a lo que ya hacían los jueces de instrucción, al **INICIARSE EL PROCESO PENAL** (fase de INSTRUCCIÓN); así que, lo de "conductor jurídico de la investigación" es una leguleyada que no tiene cabida en fase policial; eso sí valdría en fase jurisdiccional bajo la DIRECCIÓN de un juez; porque conductor no es igual que director. Conducir es impulsar, accionar, activar, promover.

Los fiscales reclaman que la policía no es quién para tipificar, y en eso tienen razón, porque la policía actúa sobre HECHOS delincuenciales y criminales; en otras palabras, **reseña**, y si acaso pone nombre a los hechos materia de investigación (en clave de presunción ajustándose al código penal) que el presunto autor material de los mismos ha cometido y deja que la autoridad jurisdiccional **(un juez)** se encargue de **tipificar** el delito después de recibir el atestado (que ha desaparecido, sin un porqué); por eso mismo, ahí sobra la presencia fiscal. Ya **el fiscal calificará** en fase jurisdiccional. Eso, sí sería constitucional.

El binomio fiscal - policía no es posible en tanto en cuanto no se respeten los fueros institucionales de cada uno de los dos. Si la labor del fiscal se ciñera a lo que prevé la Constitución, es decir, a la fase jurisdiccional, y no incluyera la etapa de la investigación policial como lo hace el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), sería legal y ajustado al ordenamiento jurídico, es decir, sería constitucional. Pero no está siendo así.

La vinculación fiscal – policía desde una óptica constitucional está prevista que sea en fase jurisdiccional a través de juez, es decir, bajo amparo y supervisión judicial (jurisdicción judicial). Pero como no es así, los fiscales meten sus narices en fase policial, lo cual origina caos funcional y falta de entendimiento; tanto, que los delincuentes en esta fase temprana (policial), cuando son intervenidos por la policía, aprovechando el desvarío legal del NCPP se amparan en los fiscales para revelarse contra la intervención policial; piden la presencia de un fiscal que defienda sus derechos. Exigen derechos que la Constitución no contempla, como ser asistidos por un fiscal, entre insultos y amenazas. ¡Si no hay un fiscal presente no declaro!; incluso, agreden a la autoridad policial con su abogado presente. Preguntó: Si ya está su abogado, ¡para qué carajo hace falta un fisca!. La justicia no puede ser bicéfala.

De ahí que se ha visto a fiscales yendo a las comisarias, tomándolas por asalto, entrando en ellas 'como Pedro por su casa' sin respetar la institucionalidad. Hay casos inverosímiles de esta tensa relación. Tantos, que se podría escribir un libro de estos conflictos entre policías y fiscales. Casos como el ocurrido en la comisaría Santa Elizabeth de San Juan de Lurigancho el 13 Dic 2020. Según el vídeo de YouTube, un "servidor de la fiscalía" (vistiendo chaleco del Ministerio Público) que no estaba en el ejercicio de sus funciones como representante del Ministerio Público, se presentó con alguien para presentar una denuncia. El comisario no le permitió intervenir invitándole a salir e indicándole que si pensaba que por venir a la comisaría con el chaleco de la fiscalía los policías se intimidarían se había equivocado de lugar. El servidor del MP se tuvo que retirar. Pero hay casos en que los policías se han sentido intimidados ante la llegada de un fiscal.

En definitiva, los promotores de la nueva justicia sabían que constitucionalmente el binomio fiscal-policía era inviable bajo el sistema judicial acusatorio, ya que es invasivo y con claros propósitos de politizar la justicia para pervertirla y controlarla. Tenían que romper con el sistema antiguo. Por eso, se cargaron la investigación policial, incorporándola en el NCPP bajo control y como atribución del fiscal, haciéndola parte de la investigación preliminar y de la carpeta fiscal. De paso, se cargaron el atestado policial, que desapareció, y minimizaron la labor policial, reduciéndola a su mínima expresión; a un simple informe policial con carácter de no vinculante; sin importarles que la Constitución dice todo lo contrario.

Así se aseguraron de someter a la policía, a la que le quitaron entidad, identidad y su razón de ser en cuanto a la prevención, **INVESTIGACIÓN** y lucha contra la delincuencia; tanto, que la policía respecto a esta **finalidad fundamental**, al lado del fiscal ha quedado minimizada, reducida a cero. Ya que, al eliminarse en el

NCPP el Juez de Instrucción al que se refiere el Art. 2. 24, f) de la Constitución, dejaron a la policía sin piso, que afecta directamente a su **AUTONOMÍA** funcional, ya que **la someten al fiscal**; es decir, la policía sin Juez Instructor quedó en el limbo, sin atestado y sin referente, varada con un cometido constitucional que no puede cumplir por culpa del Nuevo Código Procesal Penal que a vista y paciencia de todo el mundo y con descaro viola la Constitución.

ANTECEDENTES de: FISCALES vs POLICÍA

En otros tiempos hubiera sido impensable discutir este tema. Con el sistema judicial antiguo que los peruanos heredamos de nuestros abuelos y que es verdad tiene raíces de hondo calado español, el rol y la figura de la policía estaba claramente delimitada y diferenciada de la función y figura del fiscal.

Sin embargo, hoy no es así; por lo que daré una pincelada de cómo ha ido evolucionando el quehacer de los fiscales hasta llegar al desencuentro funcional de los fiscales con la policía, originado por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que ejerce de locomotora del sistema judicial acusatorio. Asunto que en algún momento se tendrá que aclarar para delimitar, diferenciar y darle a cada una de estas instituciones el rol que les corresponde realmente, con arreglo al mandato constitucional.

La Constitución de **1933** reguló que debía haber fiscales a nivel de Corte Suprema, Cortes Superiores y juzgados. En ese contexto político y jurídico, con el Código de Procedimientos Penales de **1940**, se establecieron como etapas del proceso penal: la instrucción y el juzgamiento. Los Fiscales en todas las etapas formaban parte del Poder Judicial (PJ).

Luego, aunque en la Ley Orgánica del Poder Judicial de **1963** los reguló como institución autónoma, siguieron formando parte del Poder Judicial con el nombre de Ministerio Fiscal.

El **Ministerio Público** fue creado por la Constitución de **1979** (del 28 de julio), cambiando radicalmente su historia y terminando así una larga etapa de los fiscales ligada al Poder Judicial. La Constitución que había sido aprobada un año antes por la Asamblea Constituyente de 1978, entró en vigor en la fecha antes citada, atribuyéndole al Ministerio Público, personería jurídica propia, organización, composición, funciones, atribuciones y reconociéndole como órgano constitucional autónomo; conforme a los artículos 250º y 251º del capítulo XI de aquella Constitución.

El Ministerio Público COMO INSTITUCIÓN se desarrollaría luego con su Ley Orgánica, la que se aprobó mediante el Decreto Legislativo **Nº 052** del 19 de marzo **1981** (aún vigente), iniciando sus actividades como tal después de ello; funcionando desde entonces, con las modificaciones hechas años más tarde por la **Constitución de 1993** (del 31 de diciembre) que regula al Ministerio Público en sus artículos 158, **159** y 160, atribuyéndole entre otras cosas, **promover** de oficio, o a petición de parte, **la acción judicial** en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho (Inc.1); también, **ejercitar la**

acción penal de oficio o a petición de parte (Inc.6). Todo ello, con el Código de Procedimientos Penales de 1940 vigente por entonces hasta la dación del actual Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) de 2004 vigente desde 2006.

Como se puede ver, la Constitución no dice nada que el Ministerio Público es el **TITULAR** DE LA ACCIÓN PENAL, por lo tanto, esa frase, calificativo o atribución ES UN INVENTO del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Un invento qué junto a la instrumentalización del **principio de oportunidad**, entre otros cambios normativos relacionados con la justicia, sirvieron para implantar el sistema judicial acusatorio a través del NCPP.

Hasta entonces **era la policía** el mejor aliado de LA VÍCTIMA para hacer posible que su denuncia (acción penal) tuviera un recorrido seguro hacia el ejercicio de un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva.

De 1981 a 1993 la relación fiscales-policía apenas empezaba su andadura, tal y como lo conocemos hoy. Hasta ese momento la investigación y persecución del delito dirigida por el juez de instrucción, tenía en la policía su máximo colaborador a través de la **policía judicial**. Es decir, que la relación o vinculo fiscal- policía era mínima y casi inexistente; primero porque la fase policial no era jurisdiccional, por lo tanto, el fiscal nada tenía que hacer en las 48 horas que la policía tenía para investigar los hechos y evidencias para luego, junto con los detenidos (presuntos autores de los mismos) ponerlos a disposición judicial. Además, con el atestado en el juzgado (fase jurisdiccional) la policía era la única institución que era auxiliar del juez en las demás diligencias que éste creía oportuno para cumplir con su labor jurisdiccional de investigar y perseguir el delito; de ahí que el Código de 1940 ni siquiera menciona el binomio o relación fiscal-policía.

En ese sentido, ahí os dejo, lo que textualmente escribiera el magistrado (Vocal Supremo), César San Martín (Presidente del Poder Judicial, periodo 2011-2012), en su libro 'La Reforma del Proceso Penal Peruano' **(*)**:

(*) ***"La Ley Orgánica*** *del Ministerio Público —****Decreto Legislativo N.°52*** *del 16 de marzo de 1981— no consagró la conducción de la investigación del delito ni le atribuyó la dirección jurídico funcional de la Policía Judicial, no obstante haber sancionado que el Fiscal es el titular de la acción penal y que sobre él recae la carga de la prueba (arts. 11 y 14). Solo le encargó la supervigilancia de la investigación policial —reconociendo que la policía realiza una investigación propia al respecto, lo que ni siquiera reconocía el Código de 1940— (art. 9), y* ***ratificó*** *implícitamente las* ***características autónomas*** *del espacio* ***de actuación policial****, sin enfatizar —como correspondía— su naturaleza de competencia a prevención en tanto ello se condice con su función auxiliar de la justicia penal. Dicha Ley, además, entregó al Ministerio Público el monopolio de la denuncia al juez en los delitos públicos y le atribuyó la facultad de realizar indagaciones preliminares —por sí o a través de la Policía— antes de promover la acción penal (v. art. 94.2), ratificando que en la fase procesal de instrucción, a cargo de un juez como ya se ha anotado, el Fiscal se limitaba a participar en ella «[...] al efecto de actuar la prueba ofrecida, exigir que se observen los plazos establecidos en la ley e interponer los recursos que esta le conceda» (art. 94.4)."*

Luego vendría la suspensión del Ministerio Público por disposiciones legales que dispusieron su reorganización, desde el 18 de junio **1996** y que duró hasta el 6 de noviembre **2000**, día en que se promulgó la **Ley Nº27367**, que desactivó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. En el año **2004** se aprobó el Nuevo Código Procesal Penal (DL 957, del 22Jul), que entró en vigor el 01 de agosto 2006, y puso en marcha el sistema judicial acusatorio, potenciando la figura de los fiscales.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 052

Mención aparte merece el **DECRETO LEGISLATIVO Nº 052** '*Ley Orgánica del Ministerio Público'*, del 16 de marzo de 1981; que ha sobrevivido desde entonces a trancas y barrancas a base de parches y remiendos (modificaciones); que, a efectos de este estudio, cobran especial interés sus **artículos primigenios, Art. 1 (*)** y **Art. 9 (*)**, sujetos luego a las modificaciones derivadas de la Constitución de 1993:

(*) Art. 1.- "*El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación***".**

Aquí, como bien lo explica el Vocal Supremo, César San Martín; tímidamente se vislumbra el interés del Ministerio Público (por entonces nueva institución) o de quienes querían meterlo en el sistema para asumir la persecución del delito que estaba a cargo de los jueces de instrucción; aspiración de los acólitos del sistema judicial acusatorio que quedó trunca porque estaba limitada por las contradicciones de la ley y la Constitución; por lo tanto, todo quedó en letra muerta, ya que estaba vigente el Código de Procedimientos Penales de 1940 que si respondía a los requerimientos de nuestro sistema judicial de entonces.

(*) Art. 9.- ***"****El Ministerio Público, conforme al inciso 5 del Artículo 250 de la Constitución Política, vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial. Con ese objeto* ***las Fuerzas Policiales*** *realizan la investigación. El Ministerio Público interviene en ella orientándola en cuanto a las pruebas que sean menester actuar y la supervigila para que se cumplan las disposiciones legales pertinentes para el ejercicio oportuno de la acción penal. Igual función corresponde al Ministerio Público en las acciones policiales preventivas del delito****".*** *CONCORDANCIAS: Const. 1993, Art 159 num 4.*

Este artículo hay que analizarlo con objetividad y en su justa medida. Empezaré diciendo que hace referencia como base sustantiva el **inc. 5** del **Art. 250** de la Constitución de **1979**, ya derogada; que dice: Le corresponde al Ministerio Público *"vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial y promover la acción penal de oficio o a petición de parte"*. Ojo, dice vigilar e intervenir…; algo vacuo e impreciso. Y cuando dice DESDE la etapa policial, no dice EN LA etapa policial. Que no es lo mismo. La prueba lo tenemos ahí mismo

en el Art. 9 del DL 052, cuando dice *"Con ese objeto las Fuerzas Policiales **realizan** la investigación".* Este mandato sí que era tajante y preciso, dice las Fuerzas Policiales REALIZAN. Es decir, que no sólo la Policía de Investigaciones podía investigar, sino que también lo podían hacer las otras dos Fuerzas Policiales, la Guardia Civil y la Guardia Republicana, lógicamente cada una en el ámbito de sus funciones. Pero por celos entre estas instituciones no llegó a consolidarse este cometido. La Guardia Civil lo intentó desde sus comisarías. La Guardia Republicana (GRP) se abocó primero a la capacitación; en este sentido, a mediados de **1985** (del 01 de Junio al 31 de Diciembre) logró realizar el 'Primer Curso de Investigación Criminal para Oficiales' de la Guardia Republicana; paralelamente la GRP creó las 'Unidades Móviles de Investigación Criminal' (similar a lo que tenía la Guardia Civil Española), enfocadas a investigar y a hacer sus atestados en los lugares donde prestaba servicio (fronteras, penales, y servicios públicos), pero por los celos interinstitucionales, las otras instituciones (GC y PIP) hicieron que por Resolución Ministerial se anulara la creación de esta Unidad que a todas luces era un logro que vislumbraba ser una buena iniciativa de apoyo en la lucha contra la criminalidad y para dar cumplimiento al **Art. 9** del Decreto Legislativo **Nº. 052**.

El Ministerio Público por su parte, en cuanto a la función que le daba este Art. 9; por entonces, se encontraba en un callejón sin salida, atrapado entre dos fuegos. Por una parte, los Juzgados de Instrucción eran omnipresentes en la Instrucción (investigación y persecución del delito en fase jurisdiccional), no dándole cabida a los fiscales; y, por otra parte, las Fuerzas Policiales (FFPP), y más concretamente la Policía de Investigaciones (PIP), con su accionar al frente de la investigación como misión, y con el Código de Procedimientos Penales de 1940 vigente entonces; dejaban sin opción a los fiscales y en letra muerta el contenido de este artículo. Los fiscales no tenían cabida tal cual estaban estructuradas las instituciones implicadas y sus cometidos.

No obstante; el proceso de cambio no se detenía, involucraba el quehacer de los fiscales y el quehacer policial en cuanto a la investigación. En ese sentido; el 21 de abril de 1981 se dio el DECRETO SUPREMO Nº 005-81-JUS **(*)** (Reglamentan Disposiciones de Decreto Legislativo Nº 052); era un escueto Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo **Art. 4** decía:

(*) ***Artículo 4.-*** *La Policía de Investigaciones del Perú es la encargada de la investigación de los delitos perseguibles de oficio. En los lugares de la República en que no hubiere estaciones o dependencias de la Policía de Investigaciones, así como en los casos de delito culposos en accidentes de tránsito, la investigación la hará la Guardia Civil. En las fronteras nacionales y en los lugares donde no exista dependencia de las otras Fuerzas Policiales,* ***la Guardia Republicana*** *detendrá al autor de delito flagrante y practicará las diligencias urgentes para remitir el atestado respectivo a la autoridad competente.*

La fuerza policial que intervenga en cualquiera de estos casos, lo pondrá en inmediato conocimiento del Fiscal Provincial correspondiente, en la forma más rápida que permitan las circunstancias para que este proceda de acuerdo con sus atribuciones legales.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 21 de abril de 1981.
FERNANDO BELAUNDE TERRY, Presidente Constitucional de la República.
FELIPE OSTERLING PARODI, Ministro de Justicia.

Como se puede observar, el **Art. 4**, incorporó a la Guardia Republicana en la **investigación de delitos**, en los lugares donde prestaba servicio, es decir, "en las fronteras nacionales y en los lugares donde no exista dependencia de las otras Fuerzas Policiales, mandato que iba en consonancia con lo recogido en el considerando del DS. Nº 005-81-JUS, que decía: "***Que,*** *la Ley Orgánica de* ***la Guardia Republicana*** *-Decreto* ***Ley Nº 18070****, artículo 5, inciso a), b) y d)- le atribuye la vigilancia y control de las fronteras, el traslado de inculpados y sentenciados y el auxilio a las autoridades y particulares cuando la situación lo requiera****".* Abriéndosele con ello a la Guardia Republicana un amplísimo abanico de posibilidades de actuación, aunque en la práctica, en las fronteras ya venía realizando labor de investigación con éxito.

Fuere como fuere, en ese momento, todo se ponía a disposición directamente al juez; el ordenamiento jurídico en su conjunto así lo establecía; además, no habían fiscales ni fiscalías suficientes, mucho menos en lugares recónditos.

La pregunta que surge es: ¿Por qué entonces se daban normas en favor de los fiscales que no tenían encaje en nuestro sistema de justicia?. La respuesta, puede tener dos lecturas: **1)** Porque el Ministerio Público como institución nueva y novedosa sin medios ni infraestructura buscaba encontrar su sitio; **2)** Porque la mano de los reformistas acólitos del nuevo sistema de justicia ya estaba presente en el Perú, pero no encontraban la forma como burlar los obstáculos que les presentaba sistema imperante y la Constitución; por lo tanto, tenían que tener paciencia y actuar con sigilo para poder implementar e implantar el sistema judicial acusatorio.

Recordemos que 'el primer anteproyecto tipo' de nuevo Código Procesal Penal progresista (acusatorio) para Latinoamérica data de **1978** (elaborado por Jorge A. Clariá Olmedo), al que le siguió luego el Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica (elaborado en **1986** por Julio B. J. Maier); mentores ambos dos, que junto con otros activistas jurídicos, en torno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), trabajaron paciente e incansablemente en pos de los objetivos y metas de la nueva justicia, del sistema judicial acusatorio adversarial; la implantación de un nuevo modelo de justicia para Latinoamérica estaba en ciernes. Una justicia progresista, garantista y muy favorable y ventajosa para el infractor de la ley, en definitiva, una justicia muy a favor del delincuente y la delincuencia.

La policía peruana (FFPP), ni por asomo imaginó que con la aparición del Ministerio Público se le avecinaría en el futuro tiempos borrascosos y vientos turbulentos que le traerían complicaciones para su desarrollo institucional y el desempeño normal (con AUTONOMÍA) de sus funciones, atribuciones y competencias asignadas por mandato constitucional.

PODER COHERCITIVO, LIBERTAD INDIVIDUAL Y LOS FISCALES (En el rol de JUEZ, FISCAL Y POLICÍA)

Para HANNAH ARENDT, filosofa alemana, perseguida por los nazis, refugiada e inmigrante, confinada en un campo de internamiento por el gobierno francés; *"La libertad de movimiento: Es la libertad más antigua y también la más elemental. Por*

un lado, se convierte en condición indispensable para que la acción pueda ser posible. Su limitación se presenta como la condición previa a la esclavitud. Por otro lado, forma la base de la libertad en el pensar, la cual resulta fundamental para librarse de las ataduras, …". (Revista de Estudios Políticos -nueva época, pág. 33- España).

Es precisamente por ello que la libertad individual y la libertad de movimiento de las personas se recogen en todas las Constituciones como bienes jurídicos a proteger, derechos fundamentales a tutelar; más aún en un Estado de Derecho como el nuestro. Lo contrario sería admitir y legalizar, el rapto, el secuestro, la detención ilegal y hasta la esclavitud.

En ese sentido: La **Constitución** Política del Perú **de 1993** (vigente), en su Art.**2**, **24**, **f**) y **g**); al respecto, establece lo siguiente:

f).- "*Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia***".**

"*Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término***".**

g). "*Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida***".**

La libertad individual y la libertad de movimiento están íntimamente ligadas como un derecho fundamental, vinculadas al hombre como tal e inherentes a su existencia como fundamento ético de su soberanía individual. Por lo tanto, requieren de protección constitucional al ser un bien jurídico tutelado. Por eso, el Estado sólo en los casos previstos en el orden constitucional hace uso del poder coercitivo para restringirlas a través de la autoridad judicial y de la policía en cumplimiento de la ley.

No obstante. Últimamente vemos comunicados del Ministerio Público, en los que ponen "Fiscal (o fiscalía) en operativo desmantela organización criminal y detienen a sus integrantes". Esos comunicados inducen al error e incluso generan en la sociedad una idea de que los fiscales pueden detener a las personas. Lo cierto es que no es así, o no debería ser así. La Constitución es muy clara, en ningún momento les ha dado a los fiscales poderes coercitivos para detener. ¿Dónde dice que los fiscales pueden detener a las personas?. Ese poder coercitivo sin embargo si lo tiene atribuido el juez y también la policía en caso de flagrancia Art. 2, 24, f).

Esa es la verdad. Es por eso, que los fiscales para “sus operativos” que hacen (y que se ufanan en publicitar vía Twitter o en los medios de comunicación) necesitan la presencia de la policía. Si no fuera así; ¿se imaginan a los fiscales yendo a detener solos sin la presencia de la policía?. Lógicamente no pueden, ni deberían. Entonces ¿quién es el que tiene el poder coercitivo?, ¿Quién tiene poderes para detener? La respuesta es LA POLICÍA en flagrancia. Y con orden o mandato judicial cuando no hay flagrancia. Lo cual no deja de ser sorprendente y contradictorio a la vez, ese afán de los fiscales por tener notoriedad.

De esta reflexión surge la siguiente interrogante: Si es así, ¿Por qué entonces el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) prohíbe a la policía informar o hacer declaraciones a los medios sobre los detenidos?. Este Código además le condiciona, que para hacerlo pida permiso al fiscal. Y todo ello en fase policial, es decir en fase no jurisdiccional. Pues en todo ello, hay una transgresión constitucional por parte del Nuevo Código Procesal Penal porque atenta contra la AUTONOMÍA funcional que la Constitución le otorga a la policía en los Art. 166 y Art. 2.24, f.

La certeza que en la normativa del NCPP ‘hay gato encerrado’ se demuestra con una pregunta. ¿Por qué los fiscales para detener a una persona tienen que pedir autorización al juez?. La respuesta es: Porque los fiscales no tienen poder para detener a las personas por sí solos. Antiguamente AL INICIO del proceso penal la orden era de un juez de instrucción. Con este nuevo sistema de justicia, es otro juez el que ordena, un juez sin **iniciativa procesal** ni **discrecionalidad**, un juez de investigación preparatoria, travestido de juez de garantías o juez preparatorio, ya que el juez de instrucción “desapareció”.

Y así, van cabalgando los fiscales, valiéndose de la policía que tiene autoridad para detener de acuerdo a la Constitución y de los jueces que tienen autoridad y facultad para ordenar la detención, prisión preventiva y hasta cárcel por condena en sentencia firme.

En qué momento el Ministerio Público (MP) “le robó la cartera” al Poder Judicial (PJ). Constitucionalmente son dos órganos totalmente autónomos e independientes entre sí desde que se separaran en 1981 al institucionalizarse el Ministerio Público como tal mediante su Ley Orgánica (aunque naciera con la Constitución de 1979). Así las cosas: La investigación y la persecución del delito, el Ministerio Público se la quita al desaparecido ‘Juez de Instrucción’, y su sucesor, el juez de garantías o de investigación preparatoria se queda sin poder recibir las denuncias provenientes de la policía, porque el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), para transgredir el mandato constitucional se salta la atribución que la Constitución le da a la policía (Art. 2, 24, f). El NCPP establece normas que ignoran y violan ese mandato, como si ese artículo no existiera en la Constitución. Así, para que la policía no pueda poner a disposición judicial a los detenidos, **se cargaron al juez de instrucción** que recibía las denuncias y los atestados con detenidos. Al cercenarle a la policía la facultad de poner a disposición judicial, se consumó una grave vulneración constitucional que atenta

contra su autonomía funcional; y, para el Poder Judicial, significó la perdida de parte de sus fueros y atribuciones para administrar e impartir justicia.

Llegados aquí, el juez que sustituyó al extinto juez de instrucción; una vez iniciado el proceso penal (fase jurisdiccional), **a instancias del fiscal** puede ordenar la detención de una persona. Antes este juez no puede hacerlo si el fiscal no ha formalizado la denuncia o no ejerce la acción penal. Por lo tanto, si el juez desconoce o ignora los hechos, no puede. Cómo podría hacerlo si no ha asumido jurisdicción.

Toda esta parafernalia procesal, el NCPP lo recoge con muchísimos nombres nuevos, los mismos que el sistema judicial acusatorio impone como manual en toda Latinoamérica. Términos que pareciera fueron concebidos para pervertir y enredar la justicia, y, qué a su vez, desarbolan el lenguaje jurídico procesal tradicional (antiguo). Donde la víctima deja de ser víctima y el delincuente ya no lo es o al menos eso pretende el NCPP; con etapas inventadas para pervertir el proceso y la justicia, donde las fronteras funcionales van muy mal articuladas y definidas. Por lo tanto, seguirles el juego sería aceptar que es así, y de acuerdo a la Constitución no lo es. Es necesario hacer hincapié el respeto a la Constitución y la correcta delimitación de la frontera, jurisdiccional y no jurisdiccional; es decir, dónde y cuándo empieza en proceso penal.

En cuanto a la PRISIÓN PREVENTIVA, aquí los fiscales, le vuelven a birlan la cartera a los jueces. Me preguntarán ¿Por qué?. La respuesta es porque según el Nuevo Código Procesal Penal, el juez de investigación preparatoria (o juez de garantías) de la etapa intermedia, fiel al sistema judicial acusatorio, para no contaminarse con el caso, personifica una justicia ciega, con un juez inerte, que no ejerce la persecución del delito, y que, aunque su nombre es de “juez de **investigación** preparatoria, lo cierto es que NO INVESTIGA, sólo actúa a instancias del fiscal. Es decir, que el juez mira, pero no ve; y si es que ve tiene que hacerse el ciego por mandato del NCPP. Por lo tanto, si es ciego y sin iniciativa para no contaminarse, la prisión preventiva sólo puede darse a instancias del fiscal; no queda otra manera. ¡Qué tipo de justicia es esa!, ¡una justicia sin juez no es justicia!.

El juez del nuevo sistema de justicia, al ser obligado a seguirle el juego al sistema acusatorio pierde primacía y control de quién debe administrar justicia, y al tener un rol de garante no contaminado, por sí solo no puede romper los vicios de este arbitrario sistema. En otras palabras, este juez por sí solo se ve imposibilitado de ordenar prisión preventiva en esta etapa si el fiscal no se lo pide. Por otro lado, el fiscal tampoco puede por sí solo ordenar prisión preventiva, tiene que hacerlo a través del juez. La conclusión es clara; el juez hace de garante que tiene poderes para ordenar detención o prisión preventiva, pero no lo puede ejercer por sí y a su iniciativa (es la justicia ciega), necesita de un lazarillo para poder ejercer ese poder, en ese caso, es el fiscal quien a su solicitud hace posible que el juez ordene y ejecute esa facultad judicial.

Como puede ser esto posible, si constitucionalmente los fiscales sólo son funcionarios del Estado pertenecientes al Ministerio Público y con un rol distinto

a la de un juez. Pues sí, así es, gracias al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que está plagado de normas controvertidas y de dudosa constitucionalidad. En ese contexto, el NCPP con disposiciones y una terminología poco clara, nos vende la imagen de un fiscal omnipresente como si fuera una **autoridad coercitiva** con poderes omnímodos y omnipotentes para coartar (a su pedido) la libertad de las personas (poder coercitivo para detener y para la prisión preventiva). El juez va condicionado por ello, lo cual no debería ser así, porque una justicia donde el juez es un convidado de piedra no es justicia.

Los fiscales se valen de los artificios transgresores del NCPP para ir cabalgando en caballo ajeno; tanto, que se sienten algo así como gamonales o señoritos feudales, con báculo y con poderes ilimitados; algo que constitucionalmente no está previsto ni es así, porque su poder sobre las personas no es real, es un poder prestado y atado al NCPP que es su soporte y sostén.

Lo cierto es que; la detención en fase no jurisdiccional es atribución de la policía (en caso de flagrancia), y la prisión preventiva en fase jurisdiccional la decisión final le pertenece al juez. No obstante, con el NCPP el poder e influencia del fiscal es rotunda en ambos casos; en el **1er caso**, la policía puede detener a un delincuente y el fiscal lo puede liberar; en el **2do caso**, el juez sólo se puede ordenar prisión preventiva si el fiscal se lo pide. En ambas medidas coercitivas el fiscal puede decidir, y bien que las aprovecha y utiliza para marcar su territorio de poder, haciendo creer que es una autoridad coercitiva contra la libertad individual, y no lo es; para ello, necesita a la policía para la detención y al juez competente para ordenar.

Cosa distinta ocurre con la policía que sí tiene esa atribución, el poder coercitivo de la fuerza en caso de flagrancia, y en ese contexto, debería administrarla según su profesionalidad, con la autonomía que le otorga la Constitución y con sujeción al imperio de la ley. Para eso es y está la policía.

Lo que ocurre es que los acólitos del sistema acusatorio sagazmente han pervertido la justicia colándonos transgresiones constitucionales a través de NCPP para que parezca lo que no es. Por ello, es una ilegalidad que los fiscales lo apliquen a sabiendas que está mal. Hay un dicho antiguo que dice: ‘La mujer del César, no sólo debe serla sino parecerla’. Pues en este caso es al revés; los fiscales no sólo tienen que parecerlo sino serlo. Es decir, si hay atribuciones y facultades que vienen ejerciendo a través del NCPP, y que a todas luces contravienen la Constitución; hacen muy mal al ejercerlas. Porque se supone, que una finalidad constitucional de los fiscales, es velar por la legalidad. Por lo tanto, deberían ser los primeros en cumplir los mandatos constitucionales; no pueden ser que sean los primeros en montarse en la ilegalidad de un Código (NCPP) que transgrede el mandato constitucional.

Los que hicieron el NCPP y los que lo aplican saben bien los alcances y cuál es la primacía de ambas normas. No hace falta ser docto en leyes para saberlo. Pero dirán, ¡ah!, no es mi culpa que el Nuevo Código Procesal Penal esté redactado así. Los ingenuos y los que suelen “arrimar el ascua hacia su sardina”,

dirán; claro, que culpa tienen ellos (los fiscales) si la ley está hecha de esa manera.

Lo que no dicen, es que el Ministerio Público tiene facultades de iniciativa legislativa, y que las funciones y atribuciones que tienen los fiscales se las han dado por la vía de delegación legislativa. Es decir, que no ha sido el Congreso de la Republica el que ha legislado y se las ha dado, sino, el Poder Ejecutivo. En otras palabras, a propuestas de los fiscales redactaron los decretos legislativos que han ido incorporando a su Ley Orgánica (Decreto Ley Nº 052), para dotarse de poder y atribuciones, a sabiendas y con conocimiento pleno que el NCPP violenta varios artículos de la Constitución. Por lo tanto, toda la normativa en torno al NCPP está viciada (es ilegal) y no debería aplicarse. Tendrían que haber modificado la Constitución para que todo ello tuviera cabida; la Constitución está vigente y sus artículos no han sido modificados. Mientras eso no ocurra, el NCPP es inconstitucional. Los fiscales saben que cabalgan en caballo ajeno (tomado por asalto), en la ilegalidad constitucional, en la coerción del nuevo sistema. Cabalgan en la ilegalidad del NCPP.

Según la Constitución, el poder coercitivo sobre la libertad individual y la libertad de movimiento, con arreglo a su mandato, está atribuido a la policía y al juez. Pero con el sistema judicial acusatorio de repente ha surgido por imposición del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) un tercer actor que tiene mucho que decir en este asunto, **el fiscal**. Así:

En etapa o fase policial con el NCPP, si el fiscal cita y el citado no acude; ante la inconcurrencia o incomparecencia "del imputado fiscal", el fiscal puede ordenar a la policía que el rebelde sea conducido por la fuerza. Lo cual en la práctica viene a ser, el "Poder coercitivo del Fiscal en la investigación", o también, "Poder coercitivo de conducción compulsiva y restricción del derecho a la **libertad ambulatoria** del individuo" por parte de fiscalía. Extremo que linda con la ilegalidad, porque si no hay una orden judicial de por medio, sería una orden fiscal arbitraria e ilegal por inconstitucional. El fiscal no es un juez.

Lo curioso y contradictorio, es que este mismo Código (NCPP), establece que para que haya justicia tiene que haber igualdad de armas; en ese contexto, sitúa al fiscal a un extremo y al "imputado fiscal" al otro extremo. Pero resulta que, por este mismo Código, el fiscal para investigar cita "al imputado fiscal", y si éste no acude, su falta de colaboración lo toma como un acto de "obstrucción a la justicia" o de "peligro procesal", dependiendo del momento en que está. Si está en fase no jurisdiccional (policial) hecha mano de la detención preliminar, y si está en fase jurisdiccional amenaza al rebelde con prisión preventiva; para todo ello, sólo tiene que solicitarla al juez, y éste se lo concede o quizá calladito "accede al capricho". ¡Qué tipo de justicia es esta!.

Respecto a la **detención preliminar**, aunque el fiscal se escude en que es el juez el que se lo concede; lo cierto es que si el caso aún está en investigación preliminar o fase policial el juez no conoce los hechos, por lo tanto, se limitará a complacer el requerimiento del fiscal. Por mucho que el NCPP le haya llamado a esta medida, **detención preliminar judicial**; lo cierto es que, de judicial tiene muy poco, porque no se da por iniciativa ni decisión judicial, sino a petición del

fiscal. Tampoco cuando el juez ha asumido jurisdicción al estar en fase de investigación preliminar, por lo tanto, está detención preliminar, de facto, tiene nombre y apellido, es una detención fiscal en toda regla, o al menos a instancia y capricho fiscal. El juez no se pronuncia, sólo autoriza sobre algo que no conoce y no es jurisdiccional.

Se supone, que, a efectos de respetar los derechos humanos de los denunciados, debería prevalecer la presunción de inocencia; por lo tanto, cualquier investigación sobre los hechos si no es en flagrancia debe hacerse en entera libertad del investigado. Si no es así, se estaría cometiendo una ilegalidad y un abuso. La pregunta que surge es: Porqué entonces, el fiscal utiliza una medida de fuerza en caso que el investigado se declare omiso a la citación. Ello va en contra de los estándares internacionales de respeto a los derechos fundamentales, como es el derecho a no declararse culpable, derecho a guardar silencio, o acogerse a su derecho a no declarar. Lo cual, según el NCPP y desde la perspectiva del fiscal, esa rebeldía merece un castigo, la detención preliminar como medida coercitiva y de fuerza. La conducción compulsiva durante la investigación preliminar (antigua etapa policial) a instancia o deseo del fiscal es una ilegalidad desde el punto constitucional.

En este sentido, el **Art. 261** del NCPP, legaliza la detención preliminar judicial, que no deja de ser una "detención preventiva fiscal" o si se quiere una "detención provisional fiscal", ya que, se solicita durante la etapa de Diligencias Preliminares (no jurisdiccional). Como tal, sólo puede darse a solicitud del fiscal, por el mero hecho de que haya una sospecha inicial simple. Si bien es cierto, es una medida excepcional y provisional; le sirve al fiscal: **1).-** Para restringir o privar la libertad de un investigado o denunciado, para asegurar su permanencia en los casos de investigación o en diligencias urgentes y supuestamente necesarias. **2).-** No requiere de audiencia ni notificación al investigado, si a criterio del fiscal: **a).-** existan razones plausibles que el investigado haya cometido un delito con PPL superior a 4 años, o en su caso, **b).-** que exista cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Todo ello desde la valoración hecha por el fiscal.

Respecto a la **prisión preventiva:**

El uso del poder coercitivo por disposición del Ministerio Público a través de la prisión preventiva en caso de incomparecencia del "imputado fiscal" que origina la conducción compulsiva del omiso en aras de obtener la declaración indagatoria del imputado restringe arbitraria e ilegalmente la libertad ambulatoria del ciudadano, más aún si no hay una orden judicial. En este caso el mandato o resolución judicial es obligatoria.

De allí, surge la siguiente pregunta: ¿Cuándo modificaron la Constitución para que eso sea posible?. Pues, eso no se ha hecho. Por lo tanto, no existe poder ni autoridad coercitiva de los fiscales. Por otro lado, preocupa el uso y abuso que se pueda hacer de ello; "el chantaje" que se pueda hacer utilizando los despropósitos de una ley como el NCPP, que además de ser inconstitucional, ha

pervertido la justicia para encarnar la antijusticia. Sin mandato judicial sería ilegal.

La **prisión preventiva**, los fiscales lo tienen a mano o en su mano, sólo tienen que pedir autorización al juez y motivar los presupuestos previstos para ello. Sin ello, el fiscal "no puede enviar a prisión"; y el juez, si no tiene noticias del hecho delictivo y no se lo pide el fiscal, tampoco puede.

Con esta fórmula, la imagen que se irradia a la sociedad es que los fiscales pueden enviar a prisión a quien quieran, y así está ocurriendo en la práctica, siempre que al individuo se le atribuya haber cometido un delito. En estos casos, el juez hace de 'convidado de piedra'. El juez queda a expensas del fiscal, no puede hacer nada si el fiscal no se lo pide… Y todo este lío se lo debemos al sistema judicial acusatorio… Tenemos a un juez sin iniciativa procesal, privado de la persecución del delito y sin discrecionalidad, está a merced de lo que haga o deje de hacer el fiscal…

Es evidente que con el NCPP en la fase no jurisdiccional y en la etapa intermedia, concretamente durante la investigación preparatoria, quién manda es el Fiscal. Y como tal, utilizando la prisión preventiva como moneda de cambio a la declaración "del imputado fiscal", o incluso, a la declaración de algún colaborador eficaz (testigo), a quienes, a cambio de rebajas en la pena, "sentencias exculpatorias" (no acusándolos), lo que es igual a impunidad, obtienen delaciones en toda regla; chivatos hablando más de la cuenta a cambio de no ir a prisión. ¡Y qué curioso!, lo hacen con las mismas reglas del NCPP tan garantista para unos y tan "inquisitivo" para otros; en teoría no debería ser así, porque la nueva justicia alardea de odiar todo lo inquisitorio; como se puede ver; son las contradicciones y mentiras del sistema judicial acusatorio.

Lo normal es que teniendo en cuenta los tan cacareados derechos humanos, a una persona se le tendría que juzgar en libertad porque constitucionalmente es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, quiénes son más inquisidores, los antiguos jueces de instrucción o los fiscales actuales que están haciendo uso y abuso de la prisión preventiva.

Para graficar lo dicho, recogeré textualmente lo que el ex magistrado (juez), reconocido penalista y hoy Decano del Colegio de Abogados de Huaura, José David Burgos Alfaro, en entrevista que dio al Canal YouTube PASIÓN POR EL DERECHO (video nov 2019, minuto 20:15), sobre "Prisión preventiva bajo Análisis", dijo:

"El imputado no tiene el deber ni la obligación de colaborar con la Investigación. Tiene derecho incluso de crear dificultad a la investigación fiscal. ¿Tengo yo imputado fiscal, el deber de colaborarte para que luego tú me condenes?. Yo creo que no. En todo caso, el colaborar es un tema de moral, que no tiene nada que ver con el tema procesal. El Ministerio Público tiene todo el poder para frenar cualquier obstrucción del imputado. Tengo que encerrarte, privarte de tu libertad, porque si no el sistema no funciona. ¿Me dices tú, que una sola persona común y corriente tiene más poder que todo el sistema?. Entonces el sistema de justicia está en declive, no están funcionando las instituciones

procesales. Pues eso no debe ocurrir. Si yo no voy a una diligencia, por algo habrá sido. ¿Tengo el deber?. De repente es una citación para que yo declare. ¿Bueno sino fui, tengo el deber de declarar?. ¿Y eso es una obstrucción?. O sea, ¿gracias a mi declaración, tú no has podido investigar?. Tú, no has podido tener el set de información. ¿Sólo por qué no fui, ya hay peligro?. ¿Y por ello, me vas a pedir prisión preventiva?. No puede ser. Dos más dos no es cuatro. Yo creo que por ahí no va…"

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL CONTRA EL PODER JUDICIAL
(Análisis de los artículos 138, 139 y 143 de la Constitución)

El título parecería absurdo teniendo en cuenta que el Poder Judicial, además de su Ley Orgánica; por un lado, basa su accionar en los Códigos de derecho sustantivo de las distintas ramas del derecho, y por otro lado en los Códigos Procesales, y uno de ellos, es precisamente el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

Siendo así, no se entiende que el NCPP contenga artículos que al analizarlos y compararlos con el mandato constitucional en lo que respecta al Poder Judicial, son notoriamente contradictorios y transgresores del espíritu de la norma suprema recogida en la Constitución. En primer lugar, el NCPP, le quita al Poder Judicial competencias para dársela al Ministerio Público; desarticula y pervierte la estructura funcional del Poder Judicial al eliminar los jueces de instrucción (y los juzgados de guardia) privándole la recepción de primera mano las denuncias; pero sobre todo, aminora y desdeña su esencia y finalidad fundamental como Poder Judicial, el de administrar justicia sin cribadores de la acción penal, sin justicias paralelas ni sucedáneos de justicia; es decir, que nada se interponga entre el hecho criminal o delictivo y la investidura jurisdiccional (el juez) que tiene que garantizar justicia en igualdad para todos, ajustándose al principio de legalidad reconocido en la Constitución.

No se entiende que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en su articulado **ceda** encubiertamente (una parte) la facultad jurisdiccional de "administrar justicia" en favor del Ministerio Público, creándole a los fiscales una fase no jurisdiccional a medida, lo cual es completamente anticonstitucional, porque es contrario al **Art. 139. 1** de la Constitución (*"…exclusividad de la función jurisdiccional. No se puede establecerse jurisdicción alguna independiente,... No hay proceso judicial por comisión o delegación"*). Lo peor es que esta atribución el NCPP lo disfraza y lo sitúa en fase no jurisdiccional. De ahí las resoluciones fiscales de los famosos "acuerdos reparatorios" en base al principio de oportunidad. Donde el fiscal valora el hecho criminal o delictivo y decide su destino. Eso es hacer justicia. Por lo tanto, es inconstitucional, porque esa facultad está reservada constitucionalmente a los jueces.

En ese sentido, el **Art 138 (*)** de la Constitución (*CAPÍTULO VIII) - PODER JUDICIAL, dice:*

(*) ***Art. 138*** *(de la Constitución).* - ***Administración de Justicia****.*

"La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior".

Como se puede ver, este artículo de la Constitución no deja ninguna duda, es muy preciso y muy claro. Por lo tanto, no debería ninguna otra institución arrogarse atribuciones que la Constitución no prevé, ni deberían interponerse en el camino de la justicia; ya sea cribando la acción penal o aplicando remedos de justicia, que nos lo venden como alternativas. Cualquier otra cosa o solución parecida que sustituya a la justicia no es justicia. En todo caso, las alternativas deberían ser dadas y administradas por los órganos jurisdiccionales competentes del mismo Poder Judicial. Hacer lo contrario es quebrantar el mandato constitucional. Tal como está la Constitución no es posible administrar justicia por otras instituciones fuera del Poder Judicial. Para hacerlo tendría que modificarse la Constitución y no lo han hecho.

En contra de este mandato constitucional, el Ministerio Público, que es una Institución autónoma independiente del Poder Judicial, en la práctica está dando alternativas de justicia en fase no jurisdiccional. Es más, somete a censura las denuncias que recibe la policía haciendo una criba de cuales deben ir al juez y cuáles no. De esta manera priva a los ciudadanos de algo que debería ser irrenunciable, el derecho a acceder a la justicia (a un juez). Y aunque el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) dice lo contrario; el segundo párrafo del mandato constitucional del **Art. 138**, deja claro que si se da una Ley que estableciera justicias paralelas, los jueces deben regirse por lo que dice la Constitución. En este sentido, sobre la prevalencia de la Constitución sobre cualquier otra ley lo tenemos en el **Art. 51** de la carta magna, que dice:

Artículo 51 *(de la Constitución). -* ***Supremacía de la Constitución****.*

"La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado".

El Art 139 (*) de la Constitución, regula la Administración de Justicia, recogiendo en 22 incisos los 'Principios y derechos de la función jurisdiccional'.

Al ser muchos y extensos, les remito a la literalidad de la Constitución para aliviar la lectura. No obstante; de forma suscita y resumida les presento algunas pequeñas observaciones de algunos mandatos constitucionales aquí contenidos, que desoídos, incumplidos, contrariados, y porque no decirlo, violados por el Nuevo Código Procesal Penal, afectan el accionar (y funcionamiento) constitucional del Poder Judicial en su rol fundamental de administrar justicia.

(*) ***Art. 139*** *(de la constitución). -* ***Principios de la Administración de Justicia****.*

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

1. *La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.*
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.
No hay proceso judicial por comisión o delegación.
2. *La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.*
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
3. *La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.*
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
4. *La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.*
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.
5. *La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.*
6. *La pluralidad de la instancia.*
7. *La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.*
8. *El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.*
En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.
9. *El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.*
10. *El principio de no ser penado sin proceso judicial.*
11. *La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.*
12. *El principio de no ser condenado en ausencia.*
13. *La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.*
14. *El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.*
15. *El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.*
16. *El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala*
17. *La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.*
18. *La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.*
19. *La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.*
20. *El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.*

21. *El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.*
22. *El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.*

El Inc. 1 del Art 139 (CPE):

Dice: *"La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.*
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.
No hay proceso judicial por comisión o delegación".

Aquí se remarca '*la exclusividad de la función jurisdiccional, que no puede haber jurisdicción independiente y no hay proceso por comisión o delegación'*.

Es decir que no se puede COMISIONAR a nadie que no sea juez para hacer justicia o administrar justicia ni siquiera por una ley porque sería inconstitucional. Tampoco se puede hacer justicia ni administrar justicia por DELEGACIÓN, no se puede delegar por Ley a los fiscales para que hagan ese cometido porque sería igualmente inconstitucional. Por lo tanto, lo que hacen los fiscales interponiéndose entre la acción penal y la justicia es inconstitucional. Ya sea a través de acuerdos reparatorios, resoluciones de archivo o simplemente encarpetarlo no hacer nada y dejarlo prescribir.

Ahí está el quid de la cuestión. Es por eso que los acólitos del sistema acusatorio para burlar la constitución, a través del NCPP crean todo un ecosistema jurídico ad hoc y se inventan la FASE NO JURISDICCIONAL como parte del Proceso Penal. Un absurdo legal e inconstitucional, porque todo lo que no es proceso penal no debería tener cabida en el NCPP; un Código Procesal debería normar sólo el proceso en sí.

Creo que el mandato constitucional del **Art. 139** es muy claro. Por lo tanto, el establecer una jurisdicción paralela o alternativa "NO JURISDICCIONAL" ad hoc para el Ministerio Público (valga la contradicción), y recogerla en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), es burlarse descaradamente del mandato constitucional. Porque si una persona es víctima de un delito, y un fiscal decide (resuelve) o hace de "arreglador o arreglero" (acuerdos reparatorios) e impide que la víctima acceda de forma real y efectiva a que un juez le haga justicia en instancia o sede judicial, es hacer todo lo contrario de lo que manda y recoge la Constitución en el Art. 139 y otros. Por lo tanto: No cabe administrar justicia en fase no jurisdiccional; la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental amparado por la Constitución (Arts. 2 y 3).

El inc. 2 del **Art 139** (CPE):

Aquí se recoge. 'La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional' del Poder Judicial.

"*Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional* ***ni interferir en el ejercicio*** *de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni*

modificar sentencias ni retardar su ejecución. Esto no afecta el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno".

Esta norma constitucional es muy clara, realmente no debería haber problema para entenderla. Sin embargo, los que hicieron el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) la burlaron, involucrando en su articulado soterradamente al titular de la atribución de hacer justicia (al Poder Judicial) para legitimar de alguna manera (inacción u omisión) algo que evidentemente es 'una sacada de vuelta' al mandato constitucional. Y peor aún, es un atraco a la judicatura, ya que el NCPP vincula su accionar, de tal manera que los verdaderos titulares de administrar justicia (los jueces) piensen que lo que hacen los fiscales (Ministerio Público) es legal. Según los mentores de la nueva justicia lo es, porque así lo dispone y manda el NCPP. Pero realmente no es así.

Como si la Constitución no dijera que los únicos que pueden administrar justicia son los jueces, o que como señala este Inc. 2, que **nadie puede interferir en el ejercicio de la justicia**. Se mire por donde se mire, este Código (NCPP), es sin duda inconstitucional, porque al atribuirle a los fiscales la potestad de acceso a la justicia, e incluso, de "administrarla en fase no jurisdiccional", le están robando la cartera al Poder Judicial y a la víctima y no se dan cuenta. La llave de acceso a la justicia debe estar en sede judicial. Eso de que el Ministerio Público es **titular de la acción penal es un invento** del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) porque la Constitución no lo recoge ni contempla ese extremo tan radical que excluye a la víctima generándole indefensión y dejándola desarmada. Si la acción penal es publica, entonces es de todos, incluyendo la víctima; por lo tanto, debería ejercer en su nombre la acción penal independientemente del fiscal que lo hará en nombre del interés general.

Repito: Lo que hacen los fiscales en **fase no jurisdiccional** no tiene encaje constitucional. Me refiero a las actuaciones decisorias y resolutivas de los fiscales, que con o sin la firma de un juez adquieren la condición de cosa juzgada (acuerdos reparatorios, archivos y otros a los que llega unilateralmente el fiscal); es decir, valoración y decisión del fiscal respecto al hecho criminal o delictivo que se equipara a una sentencia. En otras palabras, **actuaciones del fiscal sustituyendo a la justicia**, haciendo parecer que lo es, y que a los jueces con conocimiento o no, no les queda más remedio que validar porque así se lo exige el Nuevo Código Procesal Penal.

Aquello es, como si el ladrón o criminal en acuerdo o connivencia con el fiscal firmaran documentos para legitimar el atraco; todo, porque el pobre delincuente no tiene la culpa de serlo, sino que la culpa es del estado que no le dio los medios para evitarlo (eso dice la ideología y doctrina de la nueva justicia). Me refiero a los acuerdos reparatorios a los que llega el fiscal bajo el amparo del principio de oportunidad. Le llaman así, pero eso no es hacer justicia con la víctima.

Para que se entienda mejor el alcance de lo que digo, lo graficaré con un caso conocido (judicializado), publicado y recogido por Radio Exitosa, en palabras del fiscal del caso LAVA JATO, al referirse y **defender el acuerdo** al que llegó La

Fiscalía con Odebrecht y que significó para el Perú la pérdida de muchísimos millones de dólares:

Sucesos: 12 de marzo 2021

https://www.facebook.com/sucesos.pe/posts/1272262066585088 .#CasoLavaJato

<<El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, sostuvo que una eventual expulsión de Odebrecht del Perú es una medida "anticonstitucional y antidemocrática". Fue en respuesta a los comentarios del candidato presidencial de Renovación Nacional, Rafael López Aliaga, quien anunció tal medida en caso de llegar a la presidencia de la República.

"El acuerdo de colaboración con Odebrecht no es un acuerdo con la Fiscalía, es un acuerdo que cuenta con la aprobación del Poder Judicial, es decir es una sentencia judicial. Para afectar una sentencia judicial hay que desconocer la Constitución Política del Estado. Todos tenemos la decisión de respetar los fallos judiciales, y como tal hay un pleno conocimiento de legalidad. Si no se respeta las decisiones de los jueces, por supuesto que esto es anticonstitucional y antidemocrático", señaló en Radio Exitosa.

Del mismo modo, señaló que todas las investigaciones del equipo especial Lava Jato se encuentran avanzando y que en un corto plazo el caso del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, será el primero de entrar en juzgamiento ante el Poder Judicial. Sobre la acusación a Keiko Fujimori, descartó que su institución -Ministerio Público-, quiera atacar solamente al partido de Fuerza Popular y sus integrantes>>.

No cabe duda que la referencia normativa en palabras de este Fiscal, es un desesperado acto de defensa de algún interés o quizá por miedo a perder el confort y el estatus privilegiado del que gozan actualmente los fiscales. De ahí la defensa cerrada aferrándose y echando mano precisamente a este mandato constitucional, "*que no se puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución".* Refiriéndose al famoso **acuerdo** de Odebrecht con la **Fiscalía** refrendada o mejor dicho **validada** por un juez. Como se puede apreciar, este fiscal carga la responsabilidad en el juez, pero lo cierto es que es la fiscalía la que mueve los hilos del acuerdo. Este caso llegó a conocimiento judicial, pero no siempre es así, los demás casos, los 'de poca monta' suelen quedarse en fase no jurisdiccional, es decir, en terreno exclusividad de los fiscales donde los jueces ni se enteran o mejor dicho no son enterados.

Volviendo al tema central de este **Inc. 2** (**Art. 139** CPE): Lo llamativo, es que los interesados en que le roben la cartera al Poder judicial, le dieron vuelta al sentido constitucional de la norma y la retorcieron con una interpretación antojadiza para darle una aplicación distinta al mandato, todo ello hecho a medida de los fiscales. Así, transgredieron el mandato constitucional a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP); dejándolo además a medida y bajo la doctrina y lineamientos del sistema judicial acusatorio.

De esta forma, los arreglos (acuerdos) a los que llega el fiscal, ya sea en fase no jurisdiccional o los que realiza en fase jurisdiccional, y que a instancias del mismo

fiscal son validados o legitimados por el juez (que no puede hacer otra cosa, ya que así se lo exige el NCPP) logran tener luz verde. De esta forma, los fiscales tienen patente de corso en su "microcosmos jurisdiccional Ad hoc". Una perversión que el sistema judicial acusatorio nos lo ha impuesto vía el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Una nueva forma de disponer, hacer y obtener todo (por parte de los fiscales) en nombre de la nueva justicia, todo ello, sin pringarse las manos de responsabilidad, la oportunidad como principio les faculta; y si algo les sale mal, nunca mejor dicho, se lavan las manos, el NCPP les ampara. Algo que la Constitución ni por asomo tiene previsto en favor de los fiscales. Por ello, a ojos de cualquier amante de la legalidad, esta práctica no sólo es irregular, sino que es inconstitucional.

Lo peor es que lo hagan quienes se supone defienden la legalidad, LOS FISCALES. Ellos deberían saber cuándo una norma es contraria al mandato constitucional, por lo tanto, no pueden escudarse que actúan de acuerdo a lo que dice el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), si este está plagado de artículos que violan la Constitución; por lo tanto, están obligados a cumplir la ley de mayor rango, y esa es la Constitución; y como se ve, la constitución dice todo lo contrario. (Art. 51 y Art. 138).

Art. 51** (CPE). - **Supremacía de la Constitución
"La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado".

***Art. 138** (CPE). - **Administración de Justicia**.*
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

A la vista está, juegan con el sistema, lo han pervertido todo, y no cabe duda que han politizado la justicia. Si la justicia estuviera yendo por los causes verdaderamente constitucionales, los arreglos fiscales (acuerdos) paralelos a la judicatura no se darían. Es evidente que en los delitos comunes y en los de alta complejidad se da una intromisión sintomática y persistente de cortarle el paso a la justicia. Lo normal es que un juez administre justicia, sin que nadie se interponga en el camino a ella. Y menos que haya fiscales que espeten a la ciudadanía que ellos pueden hacer arreglos (acuerdos) facultados por el NCPP que muchas veces son lesivos a los intereses del país como el caso Odebrecht, y encima, nos lo quieran vender como sentencias consentidas, es decir cosa juzgada. SI ESO NO ES SACARLE LA VUELTA A LA JUSTICIA, entonces estamos ciegos. Si la Constitución lo permitiera, no habría ningún problema; pero no lo recoge. Por el contrario, proscribe este tipo de prácticas **(Art. 139. 1)** que **dice:** "*la exclusividad de la función jurisdiccional, que no puede haber jurisdicción independiente y **no hay proceso por comisión o delegación**"*.

Si en el futuro se modificara la Constitución para contemplar un acuerdo respecto a la responsabilidad del hecho delictivo, tendría que hacerse como se hace en España; es decir, en sede judicial, bajo 'el principio de legalidad' y con la 'víctima como acusación particular'; y **NO** como se viene haciendo ahora **un acuerdo reparatorio** bajo decisión fiscal. En otras palabras, tendría que hacerse un acuerdo de aceptación de la responsabilidad penal por parte del delincuente (imputado). Lo que en España se le llama **UNA CONFORMIDAD (*)** en toda regla realizada en sede judicial y con anuencia del juez, del fiscal y de **la víctima como víctima**, a la que además como parte civil se le reconoce lo que a derecho le corresponde.

(*) ***La conformidad*** *en sí, es declararse culpable. Es reconocer la autoría y aceptar la condena anticipadamente, sin juicio y en función del pedido de las acusaciones personadas que se ponen de acuerdo. Es una manifestación voluntaria de estar CONFORME con lo que se le acusa y acepta la responsabilidad penal y civil; a cambio el imputado se beneficia de una rebaja en la pena prevista en la ley. En España acogerse a ello tiene una rebaja de un tercio de la condena. Todo ello, es posible antes de que se inicie el juicio; la víctima y el imputado a presencia judicial junto con las acusaciones y la defensa lo pueden solicitar. Iniciado el juicio ya no es posible. Esto promueve la simplificación judicial en nombre de la justicia.*

El inc. 3 del **Art 139** (CPE), dice:

La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

"*Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción* ***ni por comisiones*** *especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación****".***

Este inciso recoge mandatos constitucionales que van en el mismo sentido que los dos anteriores incisos. La Constitución blinda la labor de la judicatura, de tal manera que ninguna otra institución ajena al Poder Judicial (cualquiera sea su denominación) pueda administrar justicia, y menos esta sea sometida a procedimientos no jurisdiccionales, aunque fueran creados por una ley (como el NCPP), si esta no se ajusta a lo que dice la Constitución. El mandato constitucional es muy claro, dice: "*ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos".* La Constitución sólo reconoce que los jueces pueden administrar justicia, por lo tanto, el único procedimiento válido es el que se realiza en sede judicial. Tampoco acepta que a una persona le hagan justicia (sea juzgada) por órganos (instituciones) de excepción ni por alguien comisionado cualquiera sea su denominación (fiscales, por ejemplo).

Sin embargo, en la práctica todo esto está ocurriendo, o mejor dicho, ocurre todo lo contrario de lo que establece la Constitución para que se haga justicia. Tal es así, que los fiscales gracias al NCPP, ante un hecho criminal hacen y deshacen con ello en fase no jurisdiccional; deciden el destino de la acción penal. Lo mismo ocurre con la investigación y persecución del delito; y así, no hay ni se hace justicia; todo ello es inconstitucional.

El Ministerio Público es un órgano autónomo distinto y ajeno al Poder Judicial, que amparándose en el Nuevo Código procesal Penal (NCPP) está realizando procedimientos (acuerdos reparatorios) que sustituyen la administración de justicia, ya que prescinden de la justicia como tal. Me refiero a la FASE NO JURISDICCIONAL que el NCPP ha establecido textualmente para que los fiscales puedan decidir el destino de un hecho criminal sin conocimiento judicial; es decir, deciden si un hecho criminal sea o no sometido al arbitrio jurisdiccional.

Todo ello es así, porque depende de si el fiscal ejerce o no la acción penal. Lo cual, es una inconstitucionalidad en toda regla ya que le privan a la víctima el **derecho fundamental** de la tutela judicial efectiva. Si no, que me digan qué artículo de la Constitución le prohíbe expresamente a la víctima ejercer ese derecho.

El Inc. 5 del Art **139** (CPE):

"La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan".

Dispone que en todas las instancias las resoluciones judiciales deben estar sustentadas con una obligatoria MOTIVACIÓN ESCRITA donde la ley a aplicarse y los hechos en que se funda no puede faltar. Como se puede ver, **la Constitución** no sólo promueve LA ESCRITURALIDAD, sino que, además LA EXIGE, dejándonos muy claro en su mandato (evidencia a la vista) que el sistema judicial acusatorio que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) nos ha impuesto, no estaba ni está previsto en nuestra Constitución ni tiene cabida en nuestro sistema judicial.

"El nuevo sistema de justicia" (acusatorio) que recoge el NCPP exige y promueve una oralidad vacua, teatral y circense ajena a la realidad; que la justicia le importa muy poco, y encontrar la verdad como objetivo menos; prefiere la mentira y el circo. Para el NCPP la justicia no es lo importante, lo que cuenta es quien vende mejor su **'teoría del caso'** **(*)**. Es decir, 'teatro puro y duro', como dirían nuestros abuelos, la justicia es 'puro teatro', y mucho más con la nueva justicia, sin la víctima como víctima que defienda su verdad. Donde el delincuente con la víctima ausente procesalmente (ya que no ejerce la acción penal **per se** ni ejerce como acusación particular) exige igualdad de armas; tenemos que luchar en igualdad de armas dice el imputado, como si la víctima hubiese buscado o pedido ser lesionada, agredida, o violada. La justicia ha sido convertida en un circo, en un teatro histriónico, en una performance vulgar donde hay y se ve de todo menos justicia. Eso si el fiscal con la víctima ausente logra construir un caso.

(*) *La teoría del caso es el guion, la estrategia metodológica que utilizan las partes en los procesos penales del sistema judicial acusatorio adversarial para presentar los hechos y pruebas de tal manera que quien mejor puede convencer al juez gana el litigio y por tanto se lleva el premio de la sentencia a su favor.*

Buscar justicia y hacer justicia va reñido con 'la teoría del caso' y su filosofía progresista histriónica, de construir un relato al margen de la verdad. Donde sólo

importa hipnotizar al juez, convencerlo y condicionar su decisión al relato (donde es cuestión de ganar o perder), lo demás no importa. Donde no hay que ir con pruebas ni probar nada, hay que ir con "elementos de convicción", se trata sólo de que hay que convencer al juez. A un juez sin atribuciones persecutorias, privado de autoridad para la persecución penal, que no tiene iniciativa procesal y mucho menos tiene discrecionalidad; que sólo puede escuchar y ver cuál de los actores procesales le convence más teniendo en cuenta los ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, que pueden ser verdades o mentiras, en una batalla entre mentirosos disfrazados de colabores eficaces que cantan hasta por los codos por miedo a ir a prisión, una teatralidad con un lenguaje amanerado hecho a la medida de esta nueva justicia, conocida como sistema judicial acusatorio adversarial. Teatro entre adversarios, eso dicen. Y la víctima de lejos mirando que su desgracia de ser víctima lo convirtió en adversario entre iguales y con igualdad de armas con el victimario, que igual es un criminal, un pájaro de alto vuelo o un vulgar delincuente.

Como se puede ver, todo esto de la **teatralidad oral** que propugna la nueva justicia para sacar adelante la teoría del caso, discrepa del mandato constitucional que recoge el **Inc. 5** (Art 139) que pone énfasis en la escrituralidad de las resoluciones judiciales en todas las instancias.

El inc. 7 del Art **139** (CPE):

"La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar".

Este inciso nos habla de las indemnizaciones por errores judiciales. Lo que nos deja claro, que el protagonismo y responsabilidad del proceso judicial es de los órganos judiciales. La Constitución en ningún momento nombra a los Fiscales, y es porque **los Fiscales** constitucionalmente **no son ni pueden ser autoridad procesal** porque **son parte** en el proceso penal. No son jueces, por eso, no son responsables por los errores judiciales. Lo cierto es que, los fiscales al no ser jueces no son magistrados como nos quieren hacer creer. La función de un magistrado es la de **juzgar y hacer ejecutar lo juzgado**. Lo que ocurre es que los acólitos del sistema judicial acusatorio nos han metido a los fiscales hasta en la sopa haciéndonos creer que si lo son. La idea descabellada de considerar a los fiscales magistrados, sólo aparece en la cabeza perturbada y fantasiosa de los que hicieron el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Lo cierto, es que la norma constitucional sólo reconoce como magistrados a los jueces, y al Poder Judicial en exclusividad le reconoce la potestad de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos (jueces) ***Art. 138*** *(CPE)*. Y los fiscales no son ni lo uno ni lo otro.

Lo que si dice la Constitución es que *los jueces y los fiscales comparten derechos y prerrogativas, así como están sujetos a las mismas obligaciones* (**Art. 158**). Algo similar a lo que la Constitución establece para los militares y policías, pero no por eso, los militares son policías ni los policías son militares. En este sentido, los jueces son jueces (magistrados) y los fiscales son sólo fiscales. Eso al margen que les afecte o vincule por igual algún que otro mandato de la

Constitución como el **Art. 154** (nombramientos, ratificación y sanciones por la JNJ).

Esa es la razón por la que este **inc. 7**, no habla ni prevé responsabilidad de los fiscales por sus errores judiciales, porque deja claro que los fiscales no pueden ni deben administrar justicia; por eso no se entiende que el NCPP haya creado una fase no jurisdiccional para los fiscales donde lo que hacen es precisamente resolver y decidir qué es delito y que no, qué se juzga y qué no. Lo cierto es que, la Constitución sólo los considera funcionarios del Estado pertenecientes al Ministerio Público; es decir, una autoridad administrativa que es PARTE en el PROCESO, por lo tanto, no pueden ser autoridad coercitiva (como lo es un juez); el fiscal es un operador más de la justicia en el ámbito del Proceso Penal, y como tal, debe hacer su trabajo con arreglo al mandato constitucional, que por cierto éste, es contrario al sistema judicial acusatorio y a lo que norma el NCPP.

Aceptar lo contrario sería como aceptar que los fiscales gozan de impunidad ante los errores que pudieran cometer, que como se está viendo, con el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), los errores, usos y abusos de los fiscales son muchos y garrafales, por cuanto, desoyen mandatos de obligado cumplimiento del orden constitucional como es la preminencia de la Constitución sobre el NCPP; lo cual, por un lado, alimenta la arbitrariedad por parte de los fiscales; y por otro lado, el abuso sólo trae ausencia de justicia, impunidad y delincuencia.

Imaginemos: Si un juez comete una arbitrariedad, una negligencia o simplemente se equivoca en el ejercicio de su trabajo como juez o en uso de su investidura o cargo hace dejación funcional y causara algún daño, es evidente que puede ser sancionado por vía disciplinaria-administrativa y también puede ser denunciado por la vía penal, ya que como mínimo habría cometido abuso, negligencia o incluso prevaricación.
La pregunta es: Y, ¿qué pasa con los fiscales que hacen lo mismo, uso y abuso de las atribuciones que les da el NCPP?; es decir, que deliberadamente causan un daño, por ejemplo, al no ejercer la acción penal, al no acusar, al no logran construir un caso, o simplemente dejan pasar el tiempo para que el hecho punible prescriba (casos **por inacción**). También al revés, **por acción** irresponsable, maliciosa y hasta dolosa, casos donde construyen artificialmente denuncias, acusaciones y casos que no responden a la verdad y a una justicia real, como es el "caso los cocteles" **(*)** donde se han vulnerado la garantía de la defensa, imputando al abogado Arsenio Oré en base a información bajo custodia del secreto profesional; constituyéndose además el fiscal en **parte acusadora** y a la vez **en víctima** de un delito de obstrucción a la justicia (ojo: el fiscal se atribuye estar administrando justicia), todo un disparate.
La respuesta a todo ello, es simple: A los fiscales no les pasa nada. Salvo que haya alguna vendetta entre ellos.

Ahí os dejo un enlace revelador. Tribunal Constitucional en amparo anula investigación de fiscal, caso cocteles.

(*) https://www.youtube.com/watch?v=SDl3sVDTxFo

Video subido a YouTube por HOLA PERU NOTICIAS con fecha 14 de agosto 2024 bajo el título de: BOMB4! TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DESTRUYE A DOMINGO PÉREZ CON RESOLUCIÓN Q PARALIZA TODO CASO CÓCTELES

El inc. 8 del Art **139** (CPE):

"*El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.*
En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario".

Dice la Constitución, que como **principio** *'no se puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley'.*

Pero también recoge que *'en tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y la costumbre…'.* Hay que precisar que, entre los principios generales del derecho peruano en la Constitución de 1993 vigente actualmente, está recogidos sin duda: 'El Principio de Legalidad', el principio de 'jerarquía normativa', y el de ''seguridad jurídica', entre otros.

También hay que precisar que el 'principio de oportunidad' sobre el que se asienta y sustenta el sistema judicial acusatorio y que es el soporte del NCPP (Art. 2 y otros) no aparece por ningún sitio en nuestra Constitución. Por lo tanto, es evidente que el sistema judicial acusatorio y su instrumento normativo contenido en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es un atraco al sistema judicial peruano.

El afán intencionado y descarado por jubilar al PRINCIPIO DE LEGALIDAD en el NCPP, desvirtuándolo y condenándolo al desuso a través de su inaplicabilidad y su merma sustantiva en favor del principio de oportunidad es una muestra del ataque frontal que este Código hace a los mandatos constitucionales.

Si la Constitución dice que no se puede dejar de administrar justicia, y también dice que son los jueces los únicos que administran justicia. Porqué entonces los fiscales aplican sucedáneos de justicia en fase no jurisdiccional haciendo y deshaciendo con la denuncia de la víctima, al punto de invisibilizarla para no ejercer la acción penal en pro de algún 'acuerdo reparatorio' basándose en el principio de oportunidad; dejando con ello, a la justicia 'compuesta y sin novio' esperando los hechos en sede judicial, y eso no ocurre, ya que la acción penal nunca llega (o casi nunca) sobre todo en los casos de delincuencia común.

Constitucionalmente a la vista está: Que, el principio de no dejar de administrar justicia del **Inc. 8** colisiona frontalmente con el principio de oportunidad que además no existe ni está previsto en la Constitución.

El Inc. 9 del Art **139 (CPE)**, dice:

"*El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos".*

Aquí se invoca el **principio** que 'por analogía no se puede aplicar una ley penal que limite derechos'. Aquí la Constitución es muy clara no puede haber leyes

penales que restrinjan derechos fundamentales si expresamente no hay una prohibición constitucional.

Entonces surge una pregunta. Cómo es posible que a la víctima de un delito se le prive de su derecho de acceder a la justicia **per se**, si la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, si el arbitrio judicial es la mayor garantía de justicia, y más si se trata de un delito. Dónde dice o en qué artículo de la Constitución está expresamente esa prohibición, que la víctima no pude ejercer la acción penal por sí misma y que se le prohíbe ser o constituirse en acusación particular.

Esta norma (inc. 9 Art. 139 CPE) está en concordancia con otro artículo de la Constitución, el **Art. 3**, que viene a decir lo mismo; que no se puede restringir derechos al margen de la Constitución. En consecuencia, no se entiende ni hay explicación posible para que en Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) restrinja el derecho fundamental de la víctima de la tutela judicial efectiva; es decir, que una persona tenga derecho a acceder sin que nadie se lo impida ni se interponga a que sea un juez el que dirima y establezca el castigo penal por el delito y el daño sufrido.

El arbitrio judicial es un derecho y es justicia, ya que sólo un juez está habilitado constitucionalmente para valorar y decidir (juzgar) con arreglo a ley el destino de la denuncia de la víctima. Es decir; cortarle el paso al ejercicio de la acción penal de la víctima por alguien que no es juez es inconstitucional, por lo tanto, ilegal. Constitucionalmente sólo un juez puede decidir si el hecho denunciado no constituye delito, sea porque no está tipificado en el Código penal como tal, porque el autor material no es culpable o porque el autor material del hecho es inimputable por las razones previstas en la ley.

Parece que los que hicieron el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) olvidaron que los requisitos o elementos que componen **la teoría del delito** son: La antijuridicidad, la tipicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Y sobre ello SÓLO PUEDE DECIDIR UN JUEZ después de una razonada valoración de los hechos denunciados con arreglo a ley. Ya que toda conducta delictiva ha de ser típica, pero también es necesario que sea ilícita o contraria al ordenamiento jurídico para que sea relevante en el derecho penal. Por tanto, no pueda respaldarse en ninguna causa de justificación. Pues por eso, los fiscales no pueden apropiarse de la acción penal y decidir sobre ella; ya sea, no dándole curso (archivándola) o marcando su destino con acuerdos reparatorios amparándose en el principio de oportunidad, porque todo ello es administrar justicia. Y eso, es competencia exclusiva del Poder Judicial (de los jueces). Por lo tanto, DECIDIR sobre las denuncias y la acción penal no es competencia ni atribución de los fiscales. Eso es inconstitucional se mire por donde se le mire, por mucho que invoquen el principio de oportunidad.

En resumen**:** ***"El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos"***; que recoge la Constitución van en el mismo sentido del razonamiento que expongo con argumentos constitucionales, en que deben ser los jueces y la justicia la que determine el destino de las denuncias y la acción penal.

El Inc. 10 del Art **139** (CPE):

"El principio de no ser penado sin proceso judicial".

Esta norma constitucional nos dice que no hay castigo penal si no se es juzgado previamente conforme a ley por un juez o un tribunal, porque sólo los jueces pueden condenar previo proceso judicial, ya que son los que administran justicia en nombre de la nación **Art.** 138, 139 y **143** **(*).** Para que eso suceda se supone que hay unos hechos que revisten la condición de delito, que hay una denuncia, que hay una víctima y un presunto autor de los mismos.

(*) ***Artículo 143.- Órganos Jurisdiccionales***
El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.
Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.

Pues si eso es así, entonces, también se tiene que tener en cuenta el otro lado de la cara de la justicia, ante hechos similares; es decir: Que, '**nadie puede ser absuelto sin proceso judicial**'. Lógicamente sin intervención de la justicia no se podría absolver, porque además de ser una arbitrariedad sería una ilegalidad, tal y como lo es a la inversa (*que nadie puede ser condenado sin proceso judicial*); porque en un estado de derecho la víctima también cuenta, su derecho a que se le haga justicia tiene amparo constitucional.

Es decir, que el autor del hecho criminal no puede ser absuelto sin juicio; mucho menos puede ser excluido del castigo penal por alguien que no sea un juez penal. Por lo tanto, un fiscal no puede excluir al autor de un hecho criminal del posible castigo penal con acuerdos reparatorios en base al principio de oportunidad que el NCPP les faculta en fase no jurisdiccional; primero porque es inconstitucional, y, segundo, porque con esa forma encubierta de administrar justicia impiden el recorrido que debería tener la denuncia y la acción penal.

No cabe duda que el sistema judicial acusatorio a través del NCPP le entrega en bandeja de plata a los fiscales un instrumento antijusticia como es el principio de oportunidad. No olvidemos que para condenar, absolver, conmutar y perdonar ya está y existe la justicia. Los fiscales no son la justicia.

Para saber si alguien será absuelto o condenado es necesario que la denuncia (la acción penal) haga todo su recorrido; de lo contrario nunca se podría saber (ni siendo brujo o adivino) el resultado de un juicio que no se realizó; el resultado de la justicia que no se aplicó. Si un partido (juicio) no se juega, el árbitro (juez) no puede pitar; por lo tanto, el VAR (fiscal) no puede decidir sobre un partido no jugado. Símil futbolero aparte. Sin juicio no puede haber condena, mucho menos absolución.

En otras palabras; puesta una denuncia por un delito, si la víctima va en busca de justicia; nadie que no sea juez debería interrumpir el camino de la justicia. Más aún si es un delito perseguible de oficio, donde ni siquiera la víctima puede cortarle el paso a la justicia. Por lo tanto, a la víctima se le debería permitir en su propio nombre ejercer la acción penal y constituirse luego en acusación

particular, independientemente de lo que haga o deje de hacer el fiscal que representa el interés general.

En este Inc. 10, la norma constitucional indica tajante y expresamente, que NADA en términos de administrar justicia que no esté bajo el paraguas de las atribuciones del Poder Judicial tendría valides respecto a condenas, absoluciones o cualquier otra solución relacionada con un hecho criminal susceptible de valoración o juzgamiento judicial. Es decir, todo lo que se refiera o esté relacionado con el hecho de hacer justicia.

Por lo tanto, todo lo que haga el Ministerio Público, órgano autónomo e independiente del Poder Judicial (no perteneciente a él), no puede arrogarse la titularidad para llevar acciones o decisiones que tengan la equivalencia o algo parecido a hacer justicia o a remplazarla. Constitucionalmente: Nadie puede ser penado SIN PROCESO JUDICIAL **(Art. 2, 24, d)** **(*)**; y lógicamente nadie puede librarse de un delito que ha cometido sin ser juzgado; para ello, hay que doblegar la presunción de inocencia **(Art. 2, 24, e)** **(*)**, y eso sólo se puede hacer ante un juez. En estos términos, **excluir a alguien de ser juzgado** es ilegal.

(*) ***d).*** **-** *Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.*

(*) ***e).*** **-** *Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.*

Por lo tanto, por mandato constitucional, nada ni nadie (ni siquiera un fiscal) puede hacer lo contrario a lo que ordena la Constitución, a riesgo de ser un transgresor y cometer una ilegalidad.

Lo que están haciendo los fiscales liberando delincuentes en fase no jurisdiccional amparándose en el **principio de oportunidad** (que la Constitución no recoge) y haciendo uso de un PODER DISCRECIONAL que la Constitución no les otorga ni faculta es completamente ilegal. Es ilegal porque los fiscales no pueden ni deben administrar justicia, ni tampoco deberían hacer nada que se le parezca en favor de criminales que se libran de la justicia por esta vía en contra de lo que dispone la Constitución.

El Inc. 11 del Art **139** (CPE):

Dice: ***"****La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales****".***

Este mandato constitucional evidencia que ya la justicia era y es bastante proteccionista, benevolente y considerada con el criminal o delincuente, ya que le otorgaba de entrada el beneficio que se le aplique el castigo que más le favorezca. Ello está en la Constitución, eso dice el mandato, se aplica hoy y se aplicó anteriormente con el sistema tradicional (o antiguo) de justicia que tuvimos.

Así que, más garantías y más privilegios a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) era innecesario, ya que, con el pretexto de una mejor justicia, este Código garantista muy favorable a los delincuentes y, que ha sido impulsado por ideologías progresistas, ha pervertido la convivencia sometiéndola a la criminalidad; todo ello, para poder implantar una justicia a la medida de los fiscales, llamada '**sistema judicial acusatorio adversarial**', que en la práctica se adueña de la acción penal, se aleja del principio de legalidad y colisiona frontalmente con la Constitución. Lo cual, no es nada bueno para las víctimas, que con el NCPP quedan ignoradas y en total indefensión; son las que sufren en sus carnes las consecuencias de la nueva justicia. No cabe duda, que todo el caos generado por el NCPP es la antijusticia hecha ley.

Con todo ello, los criminales e infractores de la ley penal están encantados con el NCPP, ya que los delincuentes 'de la misma calaña' y los criminales 'de otro pelaje', sin ley ni justicia que los pueda frenar tienen barra libre, tanto, que hasta los cacos 'hacen su agosto'.

El Inc. 13 del Art **139** (CPE):

Dice: *"La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada".*

Este mandato constitucional tiene relación con el mandato de los Inc. 1 y 2 de este Art. 139.

Como se puede ver, en este inciso la Constitución respecto de los 'acuerdos reparatorios' a los que llegan los fiscales apoyándose en el NCPP, nada dice; no dice que estos surtan efecto de COSA JUZGADA. Es más, ni los menciona. Es decir, no existen en la Constitución.

Pues, para la Constitución, sólo producen efecto de cosa juzgada*: La resolución ejecutoriada, la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción*. Y cuando se refiere a **sobreseimiento** que es igual a archivo, se refiere a un SOBRESEIMIENTO JUDICIAL, es decir por vía o consecuencia de una RESOLUCIÓN JUDICIAL. En ningún momento dice ni se refiere a un ARCHIVO FISCAL; el fiscal no puede cortarle el camino a la justicia. Por lo tanto, lo que establece el Nuevo Código Procesal (NCPP) al respecto es inconstitucional y en consecuencia ILEGAL, porque **sólo los jueces tienen la facultad de administrar justicia**.

En este sentido, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) comete una transgresión constitucional más que evidente al institucionalizar "los acuerdos fiscales"; entre ellos, llama la atención los conocidos como **acuerdos reparatorios**, a los cuales solapadamente les otorga **carácter de sentencia**, dándoles el plus de cosa juzgada.

Sobre esta cuestión; hay infinidad de casos que pueden ilustrar y demostrar lo que digo; pero sólo como ejemplo citaré: Lo que sostiene y defiende de forma desesperada el fiscal del caso LAVA JATO, sobre los acuerdos alcanzados entre

la fiscalía con Odebrecht y la condición de cosa juzgada de los mismos. Una defensa a ultranza que pone en evidencia los intereses de estos "acuerdos fiscales", que por más que lo pinten como lo pinten incluida la guinda del pastel "de cosa juzgada", no se ajustan al espíritu de la norma constitucional ni a su mandato.

El Inc. 14 y el Inc. 15 del Art **139** (CPE):

14. *El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y* ***por escrito*** *de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.*
15. *El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y* ***por escrito****, de las causas o razones de su detención.*

Estos incisos recogen, cada uno en su contexto, que nadie será privado del derecho a defensa, y que la autoridad tiene que notificar por escrito las razones de la detención. Con lo cual, además de insistir en la escrituralidad de las notificaciones de la detención, en ningún momento ni contexto en estos mandatos constitucionales se menciona la intervención de un Fiscal.

Y cuando en el **Inc. 14** dice que "un presunto delincuente" tendrá derecho a un defensor de su elección, *"desde que es citado o detenido por cualquier autoridad"*; se está refiriendo a la AUTORIDAD de los jueces y la policía (en flagrancia) que son los que tienen el poder coercitivo de detener por mandato constitucional. Pero en ningún caso, se refiere que alguien puede ser detenido por un fiscal, porque sería inconstitucional e ilegal.

Por eso, hay que decirlo fuerte y claro, que la intervención de los fiscales tal y como lo recoge el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), es un invento transgresor para que a través de los fiscales fuera posible ponerse en marcha el sistema judicial acusatorio.

El inc. 19 del Art **139** (CPE)**:**

Dice: **"***La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad****".***

Aquí el mandato constitucional tiene relación con los incisos 1, 2 y 13, respecto a la prohibición de hacer justicia por alguien que no es juez y mucho menos de una forma no prevista en la Constitución.

Dice también, que no se puede legitimar ese tipo de actuaciones (de administrar justicia), bajo responsabilidad; eso, si constitucionalmente no se ha sido nombrado juez. En otras palabras, la Constitución nos está diciendo, que los órganos jurisdiccionales no deben legitimar actuaciones de alguien que no sea juez, porque ejercer función jurisdiccional sólo le perteneciente al Poder Judicial.

En este sentido; el NCPP fuerza la norma y la burla torciendo el verdadero espirito normativo de la Constitución. Ya que, en la práctica nos encontramos nuevamente con otra inconstitucionalidad. Me refiero a las actuaciones de los fiscales (Ministerio Público) que los jueces se ven obligados a legitimar, validar o autorizar, sólo porque lo manda el NCPP. Es inconstitucional porque el fiscal valora y decide qué se juzga y qué no; con lo cual, la ponderación judicial, el arbitrio e impulso procesal ha sido cercenado como atribución judicial y queda en manos del fiscal, al menos en la etapa no jurisdiccional.

A los acólitos del sistema judicial acusatorio, no les ha hecho falta modificar el inc. 19 del Art **139** (CPE); estas atribuciones la han tomado por asalto a través del NCPP; que les ha creado un espacio propio para los fiscales, LA FASE NO JURISDICCIONAL para que hagan y decidan con los delitos como si fueran un juez. Lo cual, es una forma descarada de sacarle la vuelta a la Constitución; una burla a su mandato. Todo ello, además de inconstitucional, es una grave contradicción.

Art. 143 *(de la Constitución). -* ***Órganos Jurisdiccionales.***

"*El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.*

*Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica****".***

Este artículo de la Constitución merece un ligero comentario. Es evidente que la Constitución recoge un mandato claro, de cuáles son los órganos jurisdiccionales. Pero el NCPP, siguiendo parámetros y la hoja de ruta del sistema judicial acusatorio para sacarle la vuelta al mandato constitucional, ha creado una estructura paralela a la judicial instituida a la fuerza por el NCPP. En primer lugar, crea un espacio, fase o etapa a la medida de los fiscales adjudicándole la categoría de NO JURISDICCIONAL; aunque para ello, se hayan adueñado de la parcela policial y de la parcela de persecución penal del delito que detentaban los jueces de instrucción. En segundo lugar, el NCPP ha pervertido los Órganos Jurisdiccionales a los que se refiere este Art 143 de la Constitución al prescindir de la fase de instrucción como parte del proceso penal en sí. Este atropello se puede constatar analizando el Art. 100 de la Constitución, donde sin lugar dudas se recoge y reconoce la instrucción como fase procesal.

La eliminación de los juzgados de instrucción, y con ello, el juzgado de turno o de Guardia, entre otras cosas, ha empujado al Poder Judicial a modificar su Ley Orgánica para que tuvieran un encaje casi anti natura las nuevas instancias e instituciones orgánicas que se establecen en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). El objetivo ha sido el mismo, implantar el sistema judicial acusatorio a como dé lugar. Lo grave es que todo ello es inconstitucional.

Podría decirse que han arrinconado al Poder Judicial, el mismo que no ata ni desata. Se ha quedado quieto viendo como le roban la cartera. Sus integrantes miran absortos y sorprendidos como el Ministerio Público les ha robado no sólo la persecución e investigación del delito, la discrecionalidad, la ponderación

judicial y el impulso procesal, sino también, el protagonismo y aquella figura señera de la judicatura de representar la autoridad y la justicia en el país. Qué hay de los jueces de instrucción; el Art.100 (CPE) no sólo les otorga carta de naturaleza constitucional, sino que, le pone nombre y apellido.

Art. 146** (de la Constitución)**. - Exclusividad de la Función Jurisdiccional

La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.
Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley.
El Estado garantiza a los magistrados judiciales:
***1.-** Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.*
***2.-** La inmovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento.*
***3.** Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Y*
***4.-** Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.*

El Inc. 1, despierta especial interés para este estudio al tratarse de la independencia de la función jurisdiccional, y a qué están sometido los jueces. El mandato constitucional que recoge este artículo es bastante claro y no ofrece ninguna duda. Pero una cosa es lo que dice y otra es si realmente se cumple.

En este sentido; visto lo visto, podemos afirmar que: El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) atenta contra **la independencia** en la función jurisdiccional porque lo amordaza, le quita atribuciones muy importantes como es la persecución e investigación del delito y la discrecionalidad, le niega impulso procesal y le resta autonomía en la ponderación judicial **(*).** Hay muchas sentencias judiciales que por la vía de la presión mediática de fiscales y prensa amarilla que cuestionaron la ponderación de los jueces, estás se volvieron en contra de quienes la firmaron. Ejemplo: el conocido como **'caso del calzón rojo'**, etc, etc.

(*) ***La ponderación judicial*** *es la acción que realiza un juez para valorar imparcialmente aspectos contrapuestos de un hecho delictivo, identificando las circunstancias que concurren para que la versión de una parte impere sobre la otra, fundamentando luego por qué su decisión se corresponde con hacer justicia. Es la valoración de idoneidad y proporcionalidad en el marco de la ley. Según lo cual la medida tomada es el medio ponderado y justo para alcanzar justicia.*

También hay otros casos que afectan directamente a la 'exclusividad de la función jurisdiccional' como reza el título de este artículo (146 CPE); casos que ni siquiera llegan a los jueces, donde el debate de la justicia se lo meriendan entre fiscales, como es el famoso caso Valquiria, versión peruana; donde la justicia no llega a ser 'una merienda de negros' **(*)**, pero casi. Lo mismo ocurre con todos los casos de delitos que se quedan en el camino, que mueren en fase no jurisdiccional en manos de un fiscal, o quizá, usando un viejo dicho, casos que duermen el sueño de los justos en una carpeta fiscal, hasta que mueren por olvido. Todo ello, quebranta la exclusividad jurisdiccional a que se refiere este artículo.

(*) ***Merienda de negros****: Expresión que se utiliza para referirse a un momento de caos y confusión. Tiene su origen en época remota cuando había esclavos. La expresión está registrada en el Diccionario de la RAE (Real Academia de la lengua española) como 'Confusión y desorden en que nadie se entiende'.*

El mandato constitucional de este inciso además dice; que los jueces 'están sometidos sólo a la Constitución y a la ley'. Pero se refiere en todo caso a una ley, cualquiera que sea, que no contravenga a la Constitución. Pero, como se ha podido ver y constatar, no es el caso; porque actualmente los jueces están sometidos al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), y éste, vulnera reiterada y sistemáticamente muchos de artículos de la Constitución; contravenciones que afectan la función jurisdiccional.

VISIÓN POLITICO-CRIMINAL DEL NUEVO PROCESO PENAL

No es una casualidad que el sistema judicial acusatorio llegara al Perú y a Latinoamérica de la mano de gobiernos de izquierda. Como no es casualidad que ésta marea contra la justicia de la región latinoamericana surgiera en torno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente' (ILANUD) ambos en San José de Costa Rica. Tampoco es casualidad que el discurso esgrimido en cada país fuera el mismo, los derechos humanos y la obligación de cumplir los compromisos contraídos por los Estados Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica de 1969) y la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948 en París.

Como dirían nuestros abuelos "de aquellos barros vienen estos lodos", un problema actual que tiene su origen en aquellos hechos y compromisos del pasado, que en muchos países ha traído pérdida de soberanía jurídica y otras consecuencias con resultados muy negativos para la sociedad y sus instituciones, como el aumento de la criminalidad, caos, corrupción, impunidad y envilecimiento de la justicia; sobre todo, en aquellos países que han tenido la mala fortuna de sufrir en sus carnes el flagelo del terrorismo y el narcotráfico, además de la delincuencia generalizada a través de bandas y delincuentes callejeros, y como no, de organizaciones criminales vinculadas al poder.

Con todo ello, es lógico que **la política criminal** de estos países convulsionara para mal; porque toda la maquinaria o ingeniería social que hay detrás de los derechos humanos y los pactos que se firmaron y se firman en torno a ellos, nos llevan a aceptar y creer que con mano blanda y mimando a los delincuentes se vive mejor (política progre), porque se asume que la violencia y sus estragos como la delincuencia es culpa del Estado (o culpa de los demás) y no culpa del que comete el delito. Es como decir, que un incendio es culpa del bombero y no del incendiario. La escala de valores y la vara de medir de estas organizaciones ideológicas no es la misma porque favorece al delincuente y no a la víctima. El

sistema judicial acusatorio que las organizaciones de derechos humanos promueven y propugnan ha invertido los valores y el sentido común; en definitiva, han pervertido el sentido de la justicia.

Los delincuentes y criminales vulgares de toda la vida con las facilidades que le da la nueva justicia se han incrustado en el tejido social generalizando su accionar y creciendo en número difícil de cuantificar, y desde ahí imponen su ley, 'la ley del hampa', te dejas robar o te matan, te sometes o te pegan un tiro; mientras los de cuello blanco por su parte hacen prevalecer su posición de poder y desde ahí cometen miles de tropelías al estilo gansteril de los 50, el dinero público es su principal botín, donde no hay límites para el latrocinio, el abuso de poder y la corrupción. Y si, además, a ello le sumas los violentos con sesgo ideológico que parasitando esperan la ocasión para empuñar un arma y atacar al pueblo que trabaja y a su fuerza pública, la convivencia se convierte en un caos, haciendo del Perú un país invivible e insufrible en manos de delincuentes y de la turba violenta.

Por eso, es importante saber que no es lo mismo defender y estar a favor de la víctima, que defender y estar a favor de los criminales, delincuentes, terroristas, violentos, transgresores de la ley y todo lo que sea pervertir el sistema y la convivencia social.

Ahí está el meollo de la cuestión, en las entrañas del nuevo sistema de justicia, que no es otro que el llamado "sistema judicial acusatorio" y sus fórmulas de trilero para 'sacarle la vuelta a la justicia'. Es evidente que los mentores de "la nueva justicia" buscaron proteger a sus huestes por si llegado el caso o el momento tuvieran que enfrentarse a ella (a la justicia). De ahí el NCPP. Quizá todo ello fue una cuestión de ideología, infiltrándose en el sistema y hacerse con las bases de la **política criminal** para socavarla, pervertirla y hacerse con el control de la justicia. 'Los de esa cuerda', los acólitos del sistema acusatorio, la de los derechos humanos, sólo son sanguijuelas del sistema, por eso son garantistas con los criminales y terroristas, pero no lo son con los policías; en ese sentido, para beneficiar a los delincuentes no tienen reparos en cambiar las leyes con tal de alcanzar sus fines.

Así nace la nueva justicia. Un cambio nacido como experimento para Latinoamérica. Aunque los seudo eruditos dirán, ¡qué dices!, pero si es igual al sistema Americano (USA), y que también han cogido o tomado nota del modelo alemán, del italiano, o quizá dirán, eso ya viene de la antigüedad, etc, etc,. Lo cierto es que, el sancochado que ha llegado a Latinoamérica como nueva justicia con el nombre de sistema judicial acusatorio adversarial lo cocinaron en los fogones ideológicos cercanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo demás es cuento.

En esa tesitura, vía política criminal, los bienes jurídicos a proteger y los tipos penales para garantizar orden, seguridad y tranquilidad social, para esta gente, toto ello, es una cuestión que pasa a un segundo plano, son cosa secundaria. Lo prioritario para ellos es su hoja de ruta, convencer (comprar) gobiernos y vender el discurso (adoctrinar) progre para implantar las nuevas doctrinas de la

globalización, y ahí, entre ellas está la nueva justicia con el sistema judicial acusatorio adversarial, lógicamente con el apoyo y financiación de las Organizaciones de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus agencias; además de múltiples y diversas ONGs como IDL- Reporteros, entre otras, que influyen y ejercen poder en la justicia a través de los fiscales.

En un estado democrático de derecho se debe respetar la decisión de la persona de denunciar y exigir un juicio justo, a eso se le llama **auxilio judicial**, y si se quiere algo más preciso, tutela judicial efectiva, derecho sólo limitado por el Derecho Penal como medio de control social formalizado, para evitar así comportamientos sociales que se reputan indeseables (por ejem: una denuncia falsa). Mecanismo regulado para ello, que acude a la imposición de diversas sanciones en caso de que dichas conductas se realicen y que llamamos **delitos**. Lo mismo vale para todos los que infringen la ley penal.

Ese control es muy importante, por eso ha sido monopolizado por el Estado, y por ello, es necesario delimitarlo con la máxima claridad posible como garantía del ciudadano. De ahí que el poder punitivo sólo puede ejercerse por normas legales aprobadas por los representantes del pueblo en los países democráticos. Tales normas que constituyen el derecho penal determinan qué conductas son constitutivas de delito y qué penas pueden sufrir quienes las realicen. Eso y su sujeción a ellas, es lo que le da sentido al **imperio de la ley**, a la **seguridad jurídica** y a lo que conocemos como **principio de legalidad**.

Sin embargo, vía política criminal, esta gente, los acólitos de la nueva justicia, en vez de despenalizar conductas si tan seguros están que los delitos que cometen los delincuentes es una cosa sin importancia, se van al otro extremo del derecho en busca de atajos, a la vía procesal, a través del Nuevo Código Procesal Penal, para burlar lo que el código penal contempla y tiene previsto. Así las penas quedan en papel mojado. Ahí en vía procesal los fiscales hacen su agosto y si algo no sale como esperan, desesperados y algunas veces desbocados, se agarran si hace falta de un clavo ardiendo para defender su parcela, invocando cuando les conviene el “debido proceso”, un eufemismo progre del lenguaje jurídico procesal que no es otra cosa que ‘el estricto cumplimiento de la ley’. En este caso la ley procesal penal, es decir el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). En conclusión: Hecha la ley hecha la trampa (el NCPP). El debido proceso, es un mantra que utilizan los fiscales como herramienta para obtener lo que quieren. De qué debido proceso hablan, si el NCPP está viciado y es inconstitucional desde su origen.

A todo esto, unos le llaman **politización de la justicia**. Yo le llamaría simple y llanamente perversión de la justicia, que lo único que trae es corrupción, impunidad y delincuencia. Sin justicia no hay problema que se resuelva en el Perú.

Así las cosas, para implantar el sistema judicial acusatorio en el Perú tenían que atacar a la justicia misma desde sus bases, desde la POLÍTICA CRIMINAL, cambiando las ideas y los conceptos, arrasándolo todo, pervirtiéndolo todo y desde los cimientos construir una nueva realidad procesal. Y no hace falta citar a Clausewitz para afirmar lo dicho. Así es cómo para acabar con la justicia nos

han montado una película de ‘tierra quemada’, donde como si se tratara de un campo de guerra han arrasado con el antiguo proceso penal. Imponiendo que todos vayan como corderos tras los vientos de la nueva justicia, que ataviada y encadenada al NCPP, no deja de ser una ocurrencia procesal que hunde sus raíces en el sistema judicial acusatorio. Ahí están sus cimientos y sus bases. Y ello, no es poca cosa, porque además de las transgresiones constitucionales que contiene, es humo y mentiras lo que vende como nueva justicia. De ahí que el NCPP sea malo para la víctima y muy bueno para la delincuencia; su contenido alberga un sistema de justicia perverso al que llamo la antijusticia.

La visión político-criminal del NCPP, se basa en que es garantista en favor de los delincuentes; para ello, no sólo ha institucionalizado nuevos actores, sino que, ha establecido nuevos mecanismos para poder articular el nuevo sistema procesal; y todo ello, recogido en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) como guía y patrón para los operadores de justicia y partes implicadas.

Entre las salidas alternativas que el NCPP tiene para ello, están: el principio de oportunidad, los **acuerdos reparatorios**, el proceso inmediato y el proceso de terminación anticipada. Mecanismos procesales (dicen) diseñados para flexibilizar, economizar y descongestionar el sistema de justicia penal, en términos de celeridad y resultados, y ofrecer mejores y más rápidas soluciones a los conflictos penales.

Eso dicen, y su aplicación y puesta en marcha lo sustenta en:
– la necesidad de racionalizar la persecución penal pública ante los escasos recursos disponibles, lo cual ayudará a descongestionar el sistema de justicia penal al focalizarlo en delitos de mayor gravedad;

– la conveniencia social de excluir la respuesta penal y el contacto con el sistema carcelario cuando se trate de personas con posibilidades de reinserción; y

– el reconocimiento de la víctima (que con eufemismos la han convertido en ofendido, agraviado, perjudicado) como sujeto activo en el proceso y la consecuente satisfacción de sus intereses, referidos a la reparación de los daños causados por el delito.

Como se puede apreciar el nuevo sistema de justicia está lleno de terminología novedosa que amanera el lenguaje procesal para no herir las susceptibilidades y los derechos humanos del delincuente, del que obviamente vela por sus garantías; pero se olvida de la víctima, a la que desdeña, ignorándola y despojándola de lo más elemental de su derecho a la tutela judicial efectiva al privarle el ejercicio de la acción penal por sí misma. Con la nueva justicia dicen, promover la oralidad, celeridad, publicidad y la contradicción e igualdad de armas entre las partes (víctima y delincuente). Pero esta se aleja del ‘principio de legalidad’ y cae en brazos del ‘principio de oportunidad’.

Siendo así, cabe preguntarse: Qué es la justicia acusatoria.
Según en que etapa: Es un baile al servicio de los fiscales; es una música que languidece al compás de la teoría del caso. Obviamente esa es la caricatura. El dibujo es desalentador y tiñe de negro para la víctima.

Pues todo ello ocurre, y lo apuntado previamente es lo que esgrimieron los acólitos del sistema judicial acusatorio como argumento para cambiar el sistema procesal que hasta entonces teníamos.

Ya nos lo advertía en su día uno de sus mentores el Dr. Julio B. J. Maier:

"*La administración de justicia penal y la necesidad política de una reforma, teniendo como punto de partida al procedimiento penal, concluye en que las reformas del procedimiento nos llevarán a una nueva organización judicial, la cual necesariamente debería apartarse del sistema tradicional".*

Eso decía en su libro ***"DEMOCRACIA Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL EN IBEROAMERICA: LOS PROYECTOS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA PENAL".***

En este sentido, los mentores del nuevo sistema de justicia, reformistas ideológicos (progres), no sin antes satanizar al sistema judicial antiguo tachándolo de inquisitorial y otras barbaridades, se abocaron a atacar la política criminal existente desde sus cimientos porque sus bases se cimentaban en **el principio de legalidad** reconocido constitucionalmente, convirtiéndolo en un blanco a batir. Y así fue, en la nueva justicia el principio de legalidad desaparece literalmente, lo que diga la Constitución les importa poco, es papel mojado; ya que a través de Código Procesal Penal (NCPP) se le limita excluyendo y pervirtiendo su alcance, a la vez que se le atribuye un nuevo significado distorsionando su sentido real y su contenido.

Lógicamente para implantar la nueva justicia que encarna el sistema judicial acusatorio tenían que cambiar todo, doctrina, instituciones y normativa; por ello, previamente tuvieron que sentar las bases. Para ello, difundieron y adoctrinaron a una pléyade de acólitos, que luego estos hicieron de adoctrinadores. Así fueron ganando adeptos entre profesionales del derecho, profesores, abogados y personajes de todo tipo, doctos y legos, daba igual, lo importante era destruir el viejo sistema. Por ello, sin medir las consecuencias expandieron las ideas del sistema judicial acusatorio, hasta que lograron meterlo en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP); o mejor dicho, lo encarnaron en él de tal manera que fuera una caja de resonancia de los lineamientos y doctrina "vendida a la sociedad" como la nueva justicia; similar a como hicieron en los otros países de Latinoamérica sin que nadie se enterara y hoy sufren las consecuencias.

Estas reformas lo hicieron satanizando previamente todo lo anterior que tuvimos como justicia; diciendo que:

El principio de legalidad creaba expectativas que el sistema procesal penal no podía cumplir, así que había que controlar la acción penal. Que los recursos limitados que poseían los Jueces de Instrucción no les permitía investigar eficazmente todos los casos, y mucho menos los casos delictivos complejos en los que se acusaba a personas con poder económico o político. Argumentaron que el principio de legalidad imponía la persecución ineludible de todos los hechos delictivos, lo cual, era una regla de persecución que no admitía

excepciones; según ellos, era un objetivo inalcanzable, más cuando la criminalidad crecía y los recursos del Estado eran escasos.

Así es como 'al principio de legalidad' se le culpó de saturar el sistema procesal, y a la vez, se le culpó de provocar una discriminación estructural en la investigación y juzgamiento de los hechos delictivos; aduciendo, que con el principio de legalidad sólo se investigaba la delincuencia convencional colapsando el sistema y se dejaba de investigar el delito no convencional. Dijeron también, que el principio de legalidad se rompe ante las limitaciones que impone la realidad, ya que no hay ningún sistema penal que tenga recursos suficientes para investigar todos los hechos delictivos denunciados.

Entre otras mentiras dijeron, que la policía ejercía en la práctica una incontrolada discrecionalidad para determinar los casos que deberían ser investigados o que merecen investigación; lo cual era falso, porque ese supuesto poder que se le atribuían a la policía es contraria al sentido común y a la legalidad, ya que contradice la idea que justifica que fundamenta **el principio de legalidad. Perseguir sin distinción el delito** en cumplimiento de la ley.

Lógicamente esta gente, los acólitos de la nueva justicia, se llenaron la boca alabando los supuestos dones del nuevo sistema judicial (acusatorio), diciendo que éste racionaliza y permite disminuir la discriminación estructural en la investigación por parte de la policía. Con ese pretexto se cargaron el quehacer atribuido a la policía y que la Constitución lo recoge en su **Art. 166** … **INVESTIGAR** … (con **AUTONOMÍA**) como finalidad fundamental; y lo hicieron a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en favor de un nuevo actor, los fiscales; a los que les dota de atribuciones y pone en sus manos una herramienta perversa y letal contra la justicia, *'la oportunidad' como principio prevalente*. Lo cual, es perverso porque corrompe el sistema y politiza la justicia; ya que lo saca y lo expone fuera del ámbito jurisdiccional.

El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, es el criterio que como norma se filtra subrepticia y subjetivamente en las decisiones del fiscal gracias al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). En fase no jurisdiccional o pre judicial, no les hace falta ninguna aprobación, por lo tanto, ahí el NCPP convierte a los fiscales en amos y señores del sistema sin ningún control, más que su propio criterio y discrecionalidad para aplicar el principio de oportunidad. En fase jurisdiccional, las decisiones del fiscal requieren la validación de un juez; si bien es cierto eso es así, los fiscales "al sentirse dueños de la acción penal" (titularidad que se lo da el NCPP) "si quieren formalizan", luego "si quieren acusan"; digo si quieren, porque si lo hacen o dejan de hacerlo les da lo mismo, nadie les controla, por lo tanto, mientras presuman de poder y acaparen el foco mediático están en su salsa. Total, al final poco de ello llega a juicio; lo normal es que se entretengan buscando colaboradores eficaces, a los que le meten miedo, distraen tiempo y no logran construir el caso, o lo dejen prescribir o lo archiven. Hay muchos casos como ejemplo de todo ello. Citaré uno en fase jurisdiccional.

El (23/02/2021) un fiscal al frente de la DIVIAC llevó a cabo un operativo contra el General Astudillo, Presidente del Comando Conjunto, y a otros 13 altos

mandos militares; según comunicado del Ministerio Público. Por presuntamente apropiarse de gasolina de su institución. Al margen de si hay responsabilidad o no en este caso; por la forma de la intervención, más parece fue una utilización política del 'gobierno de Sagasti' para debilitar a las FFAA. Los intervinientes actuaron sin notificación previa y bajo consigna. Ya se vio cuando allanaron la casa de Alán García y este se pegó un tiro.

Lo grave es que con el sistema judicial acusatorio los fiscales se han convertido en inquisidores y están convirtiendo la justicia en una "caza de brujas". Es decir, son la mismísima Inquisición. La intervención de la fiscalía al frente de la DIVIAC (y su equipo especial de apoyo Eficcop) es propio de una dictadura bananera.

En un estado de derecho pleno, en ambos casos (el del General Astudillo y el de Alán García), ese fiscal que intervino habría cometido como mínimo abuso de autoridad y prevaricato. Estoy seguro que, en una sociedad sana, con autoridades sujetas al imperio de la ley, eso no ocurriría. Lo cual nos lleva a una conclusión, que con el tipo de justicia que hay en el Perú, "la oportunidad y la investigación" en manos de los fiscales bailan al son que toque el interés político y en algunos casos el interés particular.

No cabe duda, que ***la investigación*** siguiendo criterios del ordenamiento nacional, en cualquier estado de derecho, cumple objetivos político-criminales tasados por la Constitución y la ley muy importantes para la convivencia y el equilibrio social, tanto en fase policial como en fase jurisdiccional. Es decir, tanto la investigación policial o investigación de la delincuencia (Art.166), como la investigación jurisdiccional o investigación del delito (Art.159.4), se rigen por criterios de política criminal que van recogidos en la Constitución formando parte de los grandes objetivos nacionales.

No es normal que a través de una norma de menor rango que la Constitución como es el NCPP se cometan excesos, abusos o se institucionalice la arbitrariedad en nombre de la ley. El sistema judicial antiguo al que tacharon de inquisitorial no permitía este tipo de abusos, y mucho menos, como los que lleva a cabo la fiscalía con apoyo de la **DIVIAC** y su equipo especial de apoyo a **Eficcop**. La investigación policial y la investigación del delito que realizaba el juzgado de instrucción, eran garantía de justicia y un freno a todo tipo de exabruptos en nombre de la autoridad, tropelías en nombre de la justicia promovidas y ejecutadas por aquellos que aprovechan el lado oscuro de la ley. Cosas de la nueva justicia o quizá de la antijusticia.

PRETEXTOS QUE ESGRIMIERON PARA IMPLANTAR EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO

El nuevo sistema procesal (acusatorio) puesto en marcha con ideas progresistas ha trastocado la aspiración y sensación **de justicia** que todo ciudadano quiere, tanto, que ha perdido la fe en la justicia; su influencia es tal que llega al punto de pervertirla. Eso, porque ha roto las bases de la política criminal que teníamos antes de la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP); todo ello, con nuevas y descabelladas propuestas, como separar la investigación y

persecución del delito de la función de tutela judicial que el Juez de Instrucción tenía como rol y la garantía que ello brindaba; donde por una parte tenía el compromiso de ser eficaz en la investigación, y por otra parte, debía autolimitar sus potestades para asegurar la vigencia de los derechos tanto del imputado como de la víctima. Esa virtud y potestad que tenía el juez de instrucción, los detractores acolitos del nuevo sistema lo conviertieron en un escollo insalvable.

Dijeron; ahí está el origen de una insoluble contradicción y la consecuencia inevitable para el cambio de sistema judicial. Hoy sabemos, que fue un pretexto mas. Lo cierto es que, hoy, los fiscales realizan más de dos funciones a la vez y todas contradictorias; sin embargo nadie se rasga las vestiduras por ello. Son en la practica y a la vista de sus intervenciones más inquisidores que los antiguos jueces de instrucción.

Satanizaron la figura y la vigencia del juez de instrucción, diciendo entre otras cosas: *"Es la personificación del inquisidor y por tanto es mantener la INQUISICIÓN viva"*. *"Este juez es la resistencia a introducir las garantías del debido proceso"* (que tanto cacarea el sistema acusatorio). *"Su figura representa, junto al autoritarismo en la instrucción, la supervivencia del inquisidor"*. Tras ello, se empecinaron en que tenían que desmembrar (separar) las funciones, destruir 'la instrucción' y al actor principal, al juez de instrucción. Con ello, crearon nuevas parcelas que sustituyan lo anterior como la investigación preliminar e investigación preparatoria, atribuyéndoselas a los fiscales. Así es como pervirtieron lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional, superponiéndolas en favor de los fiscales para que pierda sentido la justicia de los jueces que la Constitución consagra. En otras palabras, al pervertir la frontera jurisdiccional, le metieron mano a la justicia, politizándola, dejando un buen trozo de ella en manos de los fiscales.

Nos dijeron que uno de los objetivos político-criminales más importantes de la nueva justicia era el 'principio de oportunidad' que nos traía la nueva justicia del sistema acusatorio, ya que aliviaba la carga procesal y promovía 'la celeridad del proceso penal'. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no es así. Se puede constatar que por culpa de este sistema los delincuentes salen favorecidos, ya que los fiscales en fase no jurisdiccional muchas veces los liberan y no ejercen la acción penal, y en fase jurisdiccional, no logran construir el caso, no acusan, o simplemente dejan pasar el tiempo y las causas prescriben. Las consecuencias y el daño de todo ello para la justicia es irreparable, porque justicia que no se hace no es justicia, es injusticia; da pie y alimenta la corrupción, la impunidad y abona la delincuencia; ello **es antijusticia**.

Argumentaron, que la *celeridad del proceso* se podía lograr disminuyendo el flujo de expedientes que ingresan al sistema procesal que era muy rígido y no permitía excluir el ingreso de causas, debido a la aplicación del principio de legalidad que sólo rechaza una denuncia si los hechos son atípicos o si son delitos de acción privada; imponiendo así, la admisión indiscriminada de cualquier denuncia, tanto que las oficinas judiciales se veían inundadas de expedientes que muchas veces no justificaban una costosa intervención de la burocracia judicial.

Decían también, que la inercia de las normas que regulan la admisibilidad de los hechos denunciados impone la obligación de iniciar el proceso y tramitar todos los casos. Que la inflexibilidad, en la práctica provoca contradicciones que convierten el sistema procesal en discriminador, que sólo persigue la criminalidad convencional y es incapaz de investigar y juzgar el crimen no convencional.

Otro objetivo político-criminal de la reforma del nuevo proceso penal estaba más que cantado y sus mentores lo tenían claro; es el fortalecimiento de las ***garantías del delincuente*** (denunciado, imputado, acusado o sentenciado). Un proceso penal garantista que inclina la balanza sólo del lado del criminal dejando a la víctima completamente desarmada *(la despoja de la acción penal)*, desamparada *(le niega la tutela judicial efectiva)* y desguarnecida *(la convierte en un mero actor civil)*.

Nos dijeron, entre otras cosas, que el código procesal antiguo contenía normas, doctrina, instituciones y aspectos jurídico-procesales que debilitaban estas garantías (del imputado - delincuente), tales, como la duración de la prisión preventiva, la cual debería estar en todo momento bajo la lupa y los criterios de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos; que con la globalización y el mundo moderno en que vivimos son los que protegen los derechos fundamentales de criminales y delincuentes.

En este sentido, todos los pretextos esgrimidos para implantar la nueva justicia, e impulsar a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) el sistema judicial acusatorio, estaban orientados sin duda a favorecer al delincuente y dificultar la lucha frontal y eficaz contra la criminalidad. ¿Intereses políticos?, ¡Quién sabe qué!. Lo cierto es que la justicia ha empeorado, satanizaron al inquisidor, pero se olvidaron que con el sistema acusador la justicia se politizó, vino el caos, la corrupción y la justicia enfermó; y como se suele decir, a río revuelto… la justicia claudicó. Hoy no hay justicia en el Perú, sólo queda delincuencia y "delincuentes en cada esquina".

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL SISTEMA ACUSATORIO

La criminalización de la política y la politización de la justicia. Dos trincheras, dos frentes. Ese es el escenario en el que se mueven las huestes progresistas anti sistema a través de los acólitos del sistema judicial acusatorio para tomar por asalto la justicia y manejar los hilos del poder. Así es como logran crear un clima de impunidad donde campa la corrupción y la delincuencia. Cuando están fuera del tablero político criminalizan la política y cuando están dentro, desde el estado politizan la justicia.

Es un hecho objetivo que la justicia además de ser comidilla cada día en los telediarios, se le ha politizado. Eso se lo debemos a la nueva justicia, al Nuevo

Código Procesal Penal (NCPP) y al accionar mediático de los fiscales. En ese orden.

Estos tres elementos van de la mano. El sistema acusatorio no podría existir sin el Nuevo Código Procesal Penal; el NCPP tal cual está redactado no se hubiera dado sin el sistema judicial acusatorio de por medio; los fiscales no tendrían las atribuciones que tienen actualmente sin el NCPP concebido exprofesamente para acoger el sistema acusatorio. Un traje a la medida de los fiscales. Y estos de la mano con el poder político y mediático hacen de la justicia una performance, caricaturizando la justicia con la ausencia de prevalencia en la ley.

La prueba está en que la Constitución ha sido violada por el NCPP y ellos (los acólitos) hacen como que no se enteran. Los políticos hacen lo mismo. Saberse la ley y no acatarla o no aplicarla tiene un nombre… se lo pongo yo o se lo ponen ustedes; y si no lo saben, invito a que adivinen cuál es.

En este sentido, la politización de la justicia ha roto todos los puentes entre la verdad objetiva del injusto (hecho antijurídico o ilícito) y el deseo de querer alcanzar justicia como hecho subjetivo real; y eso, porque desde el poder político se ha desvirtuado y pervertido la finalidad suprema de la misma; de la justicia.

Sobre este tema mucho tiene que ver el accionar de los fiscales con nuevas competencias y atribuciones que el Nuevo Código Procesal Penal ha dejado en sus manos. Es verdaderamente sonrojante el encargo que el NCPP hace a los fiscales (por el fondo y por la forma), que con tanto no saben qué hacer tienen empacho, ya no se reconocen al mirarse al espejo. Se sienten magistrados de élite, policías sobrenaturales y acusadores implacables cuando la oportunidad sopla del lado que les va bien, ahí no hay reparos al inquisidor. Y en fase no jurisdiccional, se sienten jueces exclusivos y excluyentes, ahí nadie les puede cantar las cuarenta. En definitiva, **el fondo** es la transgresión del NCPP (su contenido) y **la forma** es la vulneración constitucional.

La politización de la justicia ha permitido la perversión del sistema, lo que da pie al manoseo de la ley y consecuentemente trae ‘inseguridad jurídica’. En todo ello, mucho tienen que ver los fiscales y la ambigüedad en que se mueven; ya que de la noche a la mañana se han convertido en administradores del bien y del mal, en dueños de la acción penal, *TITULARES dicen ellos (aunque la Constitución no dice eso)*. Con ello, ‘se mueven como peces en el agua’ en la jungla del sistema, entre voceros políticos del delito y el crimen van blandiendo el látigo inquisidor de la justicia utilizando muy bien los medios de comunicación filtrando o anticipando resultados inciertos. Lo cierto es que, jadeados y endiosados por la prensa están en una nube, aupados entre el cielo y el infierno, aupados entre el poder y embrujo de los políticos, en una especie de limbo particular con poderes omnímodos, donde se tiene “licencia para matar” en sentido figurado y dicho metafóricamente, en cuanto se sienten la encarnación de la justicia, o la justicia misma reencarnada. Hijos de la nueva justicia. Todo ello, gracias al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) concebido por políticos que anegaron la justicia con elementos y el ideario de una política criminal foránea totalmente ajena a la realidad del Perú.

Antes, estaba muy claro todo, lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional. Pero con el sistema judicial acusatorio y el NCPP los fiscales juegan con doble baraja, cuando quieren son no jurisdiccionales y cuando no pasan al lado jurisdiccional; en ausencia de juez se han constituido en la máxima autoridad y a presencia judicial son parte en el proceso penal, en una mano la carpeta fiscal abierta de par en par respetando la igualdad de armas y en la otra mano la prisión preventiva como arma para amedrentar. Así van los fiscales hoy, cruzando la línea fronteriza jurisdiccional a ambos lados; al lado que pertenecía a los juzgados de instrucción, y el otro lado, de la pesquisa policial (no jurisdiccional). Al final no saben a que juegan, ser fiscal, ser juez o ser policía.

Por eso, es curioso ver a **los fiscales** recurrir al artículo **IV inc. 3 del NCPP (*)** reivindicando **atribuciones no jurisdiccionales** (etapa policial); y, dependiendo qué, cuándo, dónde y para qué, en un abrir y cerrar de ojos cambian de lado, posicionándose en el lado jurisdiccional para birlarle al Poder Judicial lo que es propio de un juez de instrucción (la investigación y persecución del delito). Juez extinto inconstitucionalmente; si no, miren el Art. 100 de la Constitución donde se recoge que tanto la Instrucción como el Juez de Instrucción son dos elementos o instituciones constitucionales, por lo tanto, al tener rango constitucional no puede una ley de menor rango desaparecerlos. Pues, en ese escenario se mueven los fiscales aprovechando que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) les permite esas licencias a costa de violar la Constitución.

(*) ***El Art. IV inc. 3*** *del* NCPP; dice: *"Los actos de* ***investigación*** *que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional* ***no tienen carácter jurisdiccional****. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición***".**

Además, este artículo dice: *"Cuando fuera indispensable una decisión … la requerirá del órgano jurisdiccional…"*. Si es así, quién hace esa valoración, de si es o no indispensable requerir autorización judicial. La subjetividad es evidente y los fiscales lo saben y hacen uso y abuso de ello, por eso no les pasa nada si cometen un desatino, una torpeza o una ilegalidad, ya que cualquier cosa que decidan o hagan estará amparada por "la legalidad que les da el NCPP".

En estos desajustes legales, los fiscales además de atribuirse facultades para poner en libertad a los delincuentes en virtud del principio de oportunidad (en fase no jurisdiccional), a río revuelto, el NCPP les atribuye también el poder atizar con el látigo amenazador (del extinto inquisidor) a los posibles delatores o chivatos que no cantan lo que el fiscal quiere escuchar, a los que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) les llama eufemísticamente "colaboradores eficaces"; y estos, según que vientos surquen el panorama político-judicial hablan hasta por los codos de lo que saben y lo que no saben con tal de no ir a prisión.

El sistema judicial acusatorio, permite a los fiscales conminar a los colaboradores eficaces se sometan voluntariamente a la justicia. Con ello, los fiscales cuando están en fase no jurisdiccional, dan por descontado que ellos son la justicia; eso es lo que deducen les otorga el NCPP. En fase jurisdiccional es más de lo mismo.

Cuando les interesa le aprietan las clavijas a quien quieren que cante, y cuando no les interesa simplemente el asunto duerme en una carpeta fiscal. Y si algo sale mal, porque la justicia marcha mal, dicen, nosotros somos el Ministerio Público, no somos Poder judicial. Sin embargo, cuando el NCPP les permite, se atribuyen la categoría de magistrados; absurdo verdad (un magistrado administra justicia). Por otro lado, en fase no jurisdiccional, los fiscales pretenden hacer el trabajo de la Policía, pesquisas e investigación policial.

En esa tesitura, la justicia va dando palos de ciego, la corrupción e impunidad "le comen la tostada" mientras los políticos hacen su agosto; parches y remiendos con la norma procesal penal para blindarse, o quizá para contentar a unos y agradar a otros. Y disgunto de otros.

Así por ejemplo, el 21 de Dic 2023, con la modificación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y modificación de la Ley de la Policía Nacional (PNP), se le permite a la policía cierta participación en la investigación, pero la someten a los fiscales, con lo cual, ese pequeño bocado no es realmente una verdadera **atribución en la investigación**; en otras palabras, lo atribuido con esa modificación es un mendrugo para la policía, un puñado de alpiste, una dadiva en la pesquisa que no deja de ser un engaña muchachos. La policía se merece mucho más, sobre todo necesita recuperar su fuero competencial en esa materia, la investigación policial. La Constitución en su Art. 166 y su Art. 2. 24, f, le otorgan a la PNP autonomía funcional plena para ello; por lo tanto, no necesita someterse a los fiscales, y mucho menos que la sometan a golpe de Decreto Legislativo (NCPP). Constitucionalmente la policía en materia de investigación debería estar a disposición de la autoridad judicial. Eso fue así y debería seguir siéndolo. Sino que me digan: ¿Cuándo se modificó la Constitución para ello?.

POLITIZACIÓN DE LA CRIMINALIDAD EN EL SISTEMA ACUSATORIO

En todo esto y más, está la mano negra del poder político que nunca falta para influir y manipular la justicia y la labor policial. Por otro lado, el cuestionado sistema judicial acusatorio y el Nuevo Código Procesal (NCPP) tienen mucho que ver en la forma que se ha pervertido la justicia en el Perú. Los políticos, dando normas que vulneran el ordenamiento constitucional, han pervertido la ley y el proceso penal. Desde el poder, han politizado la justicia poniéndola al servicio de intereses; al haber cambiado las reglas de juego, han invertido los valores de la justicia y las medidas a aplicar; se le ha dado alas al crimen. Los políticos vía decretos legislativos han encontrado el atajo perfecto para poner de cabeza la justicia cada vez que les interesa, si están en apuros o son rehenes de sus desvaríos; tanto, que se creen sus propias mentiras. Suelen decir, que en aras de la justicia y la convivencia social cambian la ley, y en ello, no tienen reparos en plagiar tendencias foráneas que muchas veces son ideas ya trasnochadas que no tienen encaje ni responden a nuestra realidad nacional.

La **política criminal** de nuestro país ha cedido a las ideas foráneas del sistema judicial acusatorio que promueven, apoyan y financian organizaciones de derechos humanos, lo cual no es un misterio. Ideas que fueron traídas exprofeso con fines políticos e ideológicos. La globalización, la hoja de ruta progresista y la vieja lucha comunista, o quizá los objetivos de la agenda 2030 de la ONU, entre otros factores, han llevado a los países latinoamericanos y entre ellos el Perú a ceder soberanía jurídica y a aceptar que se les imponga un nuevo modelo de justicia; y de paso acepten el cambio funcional de instituciones conservadoras y tradicionales como la policía y el poder judicial. Con ello, además, obligados a aceptar nuevas normas de convivencia que afectan el orden, la seguridad y la forma de administrar justicia; algo que la sociedad aún no logra entender ni asimilar.

A la policía se le quiere imponer que deje de perseguir la delincuencia común ni reprima la horda de los violentos para no herir, lesionar ni ofender los derechos humanos de los que cometen crímenes o violentan la ley cometiendo delitos, ya que dicen, que los delincuentes no tienen la culpa de ser así (delincuentes), argumentan que el Estado es el culpable por no proveerles todo aquello que les impida delinquir. A la policía se le exige que enfrente a los criminales sin armas y sin las herramientas jurídicas que respalden su accionar. Actualmente, al uso legítimo de la fuerza por parte de la policía no se le da el respaldo legal necesario, por el contrario, a los policías se les expone desarmados a que sean apedreados. Ver videos de toma de carreteras y toma de ciudades en distintos gobiernos (Sagasti y otros).

El Poder Judicial y los jueces están perdiendo su razón de ser; su autoridad ha sido ensombrecida por el Ministerio Público y sus fiscales. Los jueces ya no investigan ni persiguen el delito, no hay juzgados de instrucción, no hay juzgado de guardia, no hay carceleta judicial, no hay denuncias ante el juez, ha desaparecido el auto apertorio de instrucción, la imputación judicial, el impulso procesal judicial y el auxilio judicial de primera mano son cosa del pasado; todo ello, junto con el atestado policial que realizaba la policía fueron satanizados y se los cargaron por intereses político-criminales foráneos (la globalización). Con ello, la criminalidad se ha generalizado y los políticos ‘están en su salsa’, hacen su agosto.

La sociedad por miedo a la delincuencia ha cambiado su percepción respecto al delincuente; serlo ya no es tan grave. Incluso, ser terrorista, violador, extorsionador, ladrón o asesino, se ha normalizado desde las esferas del poder, tanto, que la sociedad ha tenido que aprender a vivir y a convivir con ello en su día a día. En el Perú hoy en día no es nada raro tener un vecino delincuente. Los vecindarios ya no son ese espacio seguro donde era sagrado meterse con el otro vecino, hoy no te puedes descuidar, los malhechores andan a la orden del día, los criminales y delincuentes están en todas partes. Si no te roban, te extorsionan y si no pagas te matan, así de simple. A los políticos les da lo mismo. Lo han pervertido todo.

Antiguamente a los malvados y crueles asesinos se le condenaba a muerte o se les enviaba a cárceles de máxima seguridad como la isla penal El Frontón o la colonia penal EL SEPA en la selva; hoy, a los criminales se les envía a la

universidad, incluso si no quieren trabajar, estudiar ni hacer nada se les alimenta y se les permite muchas licencias y beneficios, como el bis a bis reglamentario o el tener televisión en su celda, etc, etc. Muchos derechos humanos para el delincuente en el nuevo sistema de justicia y para la víctima nada, de ella nadie se acuerda.

Se ha maniatado a la sociedad y se ha perfumado las cloacas del delito, tanto, que hasta la delincuencia se ve distinta, los que delinquen se sienten dueños de las calles, con leyes laxas y garantistas, la delincuencia común se ha apoderado de las ciudades; ya ni que decir, de la delincuencia de cuello y corbata, como los cuellos blanco o morados, el color depende de quien mande y ostente el poder, son tantos y tan variopintos "los linajes de delincuentes de alto vuelo", que algunos cuando son pillados, son ayudados a fugar por las fronteras desde el mismo gobierno, como se ha descubierto y se les escucha en los audios que se han publicado donde políticos con poder y fiscales afines se prestan a ello. El amiguismo y la política, el amiguismo y la justicia, sólo traen corrupción, han politizado la justicia. Lo mismo ocurre con la criminalidad si se mezcla con la política. Para algunos la criminalidad es un negocio y para otros es un medio de vida.

Todo esto de justicia y política mezclándose en la cotidianidad, nos revela, que la nueva tendencia político-criminal, es un maremágnum que entre manos nos traía oculto el sistema judicial acusatorio adversarial, donde la política y la justicia se maridan para mal, porque trae impunidad, crea espacios donde no hay fronteras ni barreras entre políticos y delincuencia. Todo ello, le va bien a quienes trincan en aguas turbulentas, mientras más sucias las aguas mejor. En otras palabras, a los políticos les interesa el caos, igual a las fuerzas ocultas y oficiosas de la corrupción enquistadas en la sociedad, a través de partidos políticos, ONGs, asociaciones, grupos y masas ideológicas, donde se esconde la turba, los terroristas, redes, organización criminal y hasta la delincuencia común; total, a río revuelto ganancia de pescadores.

En este contexto, la víctima ya no es víctima. Mientras que en Europa (España, por ejemplo) se esfuerzan por reforzar los apoyos a las víctimas de un delito reivindicando sus derechos como tal. En el Perú se le esconde, se le minimiza y se le vuelve invisible en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP); pero lo más grave, se le despoja de su derecho a ejercer como víctima en la justicia penal, se le priva de ejercer la acción penal por sí misma, en contra de lo que manda la Constitución. Atropello que este Código recoge con una serie de normas que atentan contra la esencia de la justicia misma y favorecen al delincuente; lógicamente, siguiendo lineamientos del sistema judicial acusatorio que se nos ha impuesto.

Como referencia, decir que, en el marco de las políticas de la Unión Europea, en España se dio la Ley 4/2015, de 27 de abril, del "Estatuto de la víctima del delito". Este estatuto se aprobó para proteger a las víctimas de cualquier delito; entre ellas, las víctimas de violencia de género y una protección Integral a las víctimas del terrorismo.

El Perú también ha sufrido el flagelo del terrorismo, que ha costado miles de víctimas, lo cual podría dar para escribir cientos de libros sobre el horror y la tragedia sufrida por las víctimas, sin embargo, hemos sido tan mezquinos con ellas que las hemos olvidado, y hoy desde las esferas del poder politizando la justicia se les quita voz y su derecho a defenderse y a defender su propia causa.

Por eso es preciso señalar, que con el sistema judicial acusatorio y su Código Procesal Penal (NCPP), los que han salido perdiendo son: la sociedad en primer lugar, con miles de víctimas que no obtienen justicia; luego está la justicia y el Poder Judicial en su tarea de auxilio y tutela judicial; y finalmente la policía encargada de la prevención, represión e **investigación de la delincuencia**, además de sus otras funciones en el marco de su finalidad constitucional (Art 166). Y con ello, lógicamente la seguridad ciudadana ha quedado desprotegida, desnuda, expuesta ante el crimen.

La delincuencia se ha generalizado y los delincuentes están por todas partes, están protegidos por el sistema; si se le combate con mano dura saltan las asociaciones y ONGs ideológicas poniendo el grito en el cielo, defendiendo al delincuente e invocando los derechos humanos. Pero no debería ser así, por el contrario, se debería ser contundente y firme en la aplicación de la ley; es bueno que haya orden y seguridad para tener una sociedad sana. Dice el presidente NAYIB BUKELE: *"Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno"*. ¡Igual tiene razón!.

Por eso, hace falta en el Perú tener como base sólida, una política criminal responsable, coherente y eficaz, acorde con nuestra realidad nacional, donde la viveza y la pillería son la madre el cordero de la corrupción y la delincuencia.

Necesitamos una política criminal de mano dura, eso, sino queremos que la criminalidad y la delincuencia nos ganen la batalla. La muestra del desenlace completo sobre las consecuencias de la criminalidad la tenemos en la Republica del Salvador. Donde con voluntad política y mucha determinación solucionaron el problema. La lucha por la justicia y contra el crimen debería ser de todos y no sólo de los fiscales; la policía y los jueces también deberían contar. Pero a la vista está que no es así, el NCPP les ha cercenado parte de su accionar.

JUECES – PODER JUDICIAL – INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA CONSTITUCIÓN, ATACADOS EN EL NCPP

Solo pueden defender la justicia los que creen en la Constitución y la ley, lógicamente, respetando la legalidad y la preminencia de la Constitución sobre cualquier otra la ley. El respeto a la jerarquía normativa es fundamental sino se quiere quebrar el estado de derecho. Cualquier otra interpretación y proceder es un quebranto constitucional.

Al respecto; en el sistema jurídico peruano, la Constitución Política del Perú es la norma de mayor jerarquía. Eso quiere decir que todas las demás leyes y

normas deben adecuarse y ser conforme a los parámetros y principios establecidos en la norma constitucional. La Constitución prima por sobre todas las leyes, así lo establece su Art. 51 **(*)**. La Constitución, es la guía fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos; incluido los fiscales.

(*) ***Art. 51.- Supremacía de la Constitución***.
"La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado".

El texto constitucional al remarcar el principio de autoridad normativo, busca "garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución, ya que consolida un Estado de Derecho que convierte al imperio de la ley como expresión de la voluntad popular en el pilar fundamental de la convivencia para garantizar la mejor versión del interés general e individual.

Los mandatos de la Constitución configuran el Estado Social y Democrático de Derecho, en efecto, sólo pueden defender la Democracia quienes creen en la Constitución y sus instituciones, en este sentido, el respeto a la autoridad judicial y el respeto a la independencia de la judicatura es fundamental para la convivencia.

Los jueces independientemente de su ideología, deberían tener una actitud equidistante con los sesgos políticos y una fe inquebrantable por la justicia haciendo prevalecer el derecho y su independencia. No cabe duda que la independencia del Poder Judicial es fundamental para que funcione nuestro estado de derecho. Mucho más, si tenemos en cuenta que en estos últimos tiempos ha tenido que hacer frente a presiones y manipulaciones del 'poder político'; injerencias de poder que muchas veces son llevadas a límites insospechados, que más parecen "extorsiones o chantajes" a los jueces por parte de los otros poderes del estado, ejecutivo y legislativo; y otros poderes que se tercian en el camino, que son de nueva data, como es la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, etc.

Aunque también es cierto y hay que decirlo que hay jueces que no son santos, pero ese es otro tema. Lo cierto es que a la política y a los políticos le interesa que la justicia sea un caos. A río revuelto ganancia de pescadores. Por eso es importante tener una judicatura fuerte y sana, ajena a cualquier otro interés que no sea la justicia. Y es que los jueces (Poder Judicial) en tiempos de crisis han sido en última instancia el único asidero del Estado que ha defendido los valores y principios no sólo de la justicia, sino también de la democracia, la unidad nacional y la defensa de la convivencia.

Un juez con sesgos e ideas políticas comprometidas es un juez hipotecado; al estar politizado, intentará retorcer o manipular las leyes en beneficios de su particular visión y posición política. Por el contrario, un juez apolítico sin etiqueta ni tienda política, siempre será un defensor a ultranza del Estado de Derecho, sin el cual, es inviable la democracia.

El Perú necesita jueces coherentes consigo mismos, con principios inquebrantables, que representen la justicia y ser guardianes de la ley, inmunes a cualquier obediencia que no sea la que dicta la Constitución y ley misma, magistrados que sean como dice Cicerón, 'la ley que habla'. Digámoslo claramente, magistrados que representen la ley.

LA CORDURA DEL PODER Y LA LEY
(Gobierno, ley y justicia en el sistema acusatorio)

Como regalo a mis lectores de cuando en cuando al hilo de alguna metáfora les dejo alguna pequeña perla para deleite, para que la lectura de este estudio jurídico no resulte tedioso. Ahí va, una versión adaptada a mi estilo, de *Pablo Capel Dorado. Director general de Economist & Jurist Group.*

Lucas y Andy se separan, como la racionalidad y la ley. El dúo se separa, como la cordura y el Derecho. Lo de Lucas y Andy, que no al contrario, es una licencia de este bardo. Solamente así tiene cadencia la cosa y no perpetra un crimen contra su lengua. Ahora fluye, tiene un nexo. Porque esto va de nexos, como el que hoy ya no hay entre las instituciones y la democracia; entre el Derecho y la cordura, entre el poder y la ley.

Después de 20 años cantando juntos (el 15Nov2023) en el programa TV El Hormiguero anunciaron: La mala salud de Lucas ha precipitado el cisma de este dúo español que hizo época, a inicios de siglo por el año 2003, con su ***Son de Amores***: arquetipo generacional para los *millennials* y alegoría macho de aquella época.

Ahora bien, valga el símil para retratar la falta de cordura entre el poder y la justicia en el Perú. La mala salud del **Poder Judicia**l la dirige a un aislamiento de su poder, hoy ya no lleva la voz cantante de **la justicia** y es por algo más que por un virus. El abuso constante del Poder Ejecutivo para restarle su razón de ser y primacía, vía Decretos Legislativos, ha precipitado la crisis. Cohabitan, pero separados tras "el alejamiento sin orden", o quizá conviven, pero por separado y sin orden de alejamiento. Y entre medias, "un tercero", el de la discordia, el Ministerio Público que coquetea "con la manzana" entre los dos, con un poder tan grande que no hay cuerpo que lo aguante.

"Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola", rezaba la letra de su *one-hit wonder* de **Andy&Lucas**. Se referían en su momento, premonitorios sin saberlo a la soledad que trae la ruptura, el fin de ciclo, el adiós.

Valga la metáfora para endosarla como remedo a la judicatura peruana frente a los excesos del legislador-**ejecutivo**, maltratador en la sombra, con sus 'decretos legislativos' retrato-caricaturas de la ley al servicio del poder, con los que si se le antoja puede pintarle la cara a la justicia; maltratador sin orden de alejamiento,

embriagado de poder, ávido de atropellos selectivos a cualquier agente fiscalizador de sus propios excesos. Poder contra poder al margen de la ley.

"Comentan que ya no te pones esa ropa, que te favorecía y te hacía tan mona"; continuaba la tonadilla.

Al hilo de la metáfora, vale la performance de la canción, como clara alusión a cómo luce desvestida y sola la pobre Justicia, otrora majestuosa espada en mano, balanza equilibrada y venda en los ojos contra la injusticia. Hoy tras tantas bofetadas recibidas yace alicaída, lastimera, enseñando sus vergüenzas, sin toga, sin puñetas —es la nueva justicia—, sometida a un "decreto ley" (léase legislativo), el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que la ha dejado desnuda y sola. Es el gobierno de la ley en manos de quienes la violan (los políticos), la ley en manos de quien (el poder) no encuentra en ella el espejo en el que se mira la justicia (un juez); entre tanto desvarío, es la vulneración hecha ley.

Siguiendo con la historia: El dúo gaditano, historia viva de una 'España tan cañí como cainita', se separa, como lo hace la cordura y la racionalidad, como lo hace el poder y la ley (valga el símil como colofón del relato).

Mientras, en el Perú '**la nueva justicia**' y su sistema judicial acusatorio se han merendado la cordura del poder y la ley; la racionalidad del gobierno y la justicia son el réquiem funesto de la descomposición del sistema, con una ley procesal penal que es "la mortaja nupcial" de un funeral que se palpa no sólo en el damero de Pizarro sino en toda la nación; es la justicia lamiendo sus heridas en el *fin de siècle,* quien sabe si definitivo de la separación de poderes, eso, si alguna vez la hubo. Lo cierto es que la justicia se cae a pedazos entre el poder y la ley. El cambio de "catecismo" a la justicia en el Perú', no le ha ido bien. Por eso hay que rebobinar y volver a tomar las riendas de la justicia donde se extravió. Y eso sólo es posible cambiándolo todo. No basta un lavado de cara. Hay que cambiar el sistema de justicia actual, porque es el sistema el que está mal. ¡El sistema judicial acusatorio es un fraude!

EL INSEPARABLE VÍNCULO ENTRE DERECHO Y POLÍTICA
– entre la ley y la justicia -
(Hecha la ley hecha la trampa)

Derecho y política están condenados a convivir, a cohabitar el mismo espacio, tienen un pacto no escrito de aceptarse y soportarse mutuamente, transitan de la mano muchas veces a trancas y barrancas. La relación entre estas dos disciplinas es compleja, multifacética y accidentada. El derecho es la brida que sujeta que la política no se desboque y descarrile, y viceversa, desde la política se proyecta las normas que crean el derecho de acuerdo al interés general, aunque muchas veces esto no siempre es así, ya que desde ella muchas veces se genera derecho para favorecer ciertos intereses dependiendo qué.

En la sociedad actual, el vínculo entre el derecho y la política tiene relevancia porque moldea el panorama jurídico y político de los países sobre todo

emergentes donde hay mucho por hacer. La relación entre estas dos esferas aparentemente distintas es fundamental para comprender cómo se estructuran las sociedades modernas y cómo se conciben, desarrollan y se aplican las leyes en un entorno político complejo, dinámico y cambiante.

El derecho, como conjunto de normas que regulan la conducta humana y el comportamiento social, se entrelaza con la política, que define cómo se ejerce el poder y se toman las decisiones dentro de una sociedad contemporánea, es decir, como se ejerce la justicia. Esta relación está marcada por una influencia recíproca, una interrelación compleja condenada a aceptarse, a reinventarse y a retroalimentarse mutuamente: la política da forma al derecho y viceversa el derecho moldea la política.

A partir de ahí, un pacto implícito: 'Aquí no se mueve nada más allá de lo que lleva el viento'. Nada fuera de lo que lleva y trae la política y el derecho. Una parcela, donde la reciprocidad entre ambas disciplinas, nos traen ley y justicia, la que pacta el poder, la que moldea el derecho al antojo de quien manda. Y si los vientos no soplan a favor, siempre quedará la sentencia que rumia el dicho bastardo: "hecha la ley hecha la trampa". Ahí política y derecho alinean sus astros en las manos de quien detenta el poder; para la trampa no faltará manos manchadas fáciles de corromper.

Recientemente el medio internacional The Impact Lawyers recalcaba en uno de sus espacios de mayor audiencia, que, en una era como la que vivimos actualmente, de interdependencia y globalización, el derecho político adquiere una importancia adicional.

Así que, vamos listos; los políticos se frotan las manos; los juristas bostezan, no sé si cansados o hartos de ir a trancas y barrancas tras la norma y su interpretación; a la justicia le da pereza; y al chorizo le entran las ganas "de trincar" y más… Unos retuercen la ley, otros zurcen los rotos, el malo busca el atajo, mientras la justicia languidece sin más ni un porqué.

Al final todos trincan y nadie se entera, o todos se enteran, pero trincar no está mal visto, está de moda; pervertido todo, no se salva nadie. No hay derecho y no hay justicia; hay justicia, pero no hay derecho. La política se interpone, le pone palos en la rueda al derecho, levanta barricadas a la ley en todos los caminos; ya no le queda sendero a la justicia, está a punto de coger sus maletas o un atajo… El ojo por ojo vuelve, y antes que la venganza se apodere de las calles, urge en el Perú un cambio…

Para un futuro mejor, urge un cambio de rumbo, donde el Estado de Derecho y la seguridad jurídica sean inquebrantables. Donde no se gobierne a punta de telediarios ni se legisle para romper el marco constitucional a punta de decretos legislativos. Hace falta conciencia nacional; cómo puede ser posible que haya leyes que vulneran la Constitución y que nadie se inmute. El Nuevo Código procesal Penal rompe el consenso constitucional, porque se le mire por donde se le mire, sus artículos y su normativa es inconstitucional. Nos ha traído una justicia que no calza con el Perú.

Hace falta una política criminal contundente, con reformas radicalmente opuestas a lo que hay, que fortalezcan la justicia y a sus jueces; nada más y nada menos que la justicia que la Constitución prevé basada en el principio de legalidad y no en el principio de oportunidad. La lucha contra cualquier amenaza a la independencia judicial y la defensa de un sistema legal justo y de mano dura, debería ser una prioridad de Estado y de la sociedad; eso, si se quiere un país seguro, estable y con bajos índices de criminalidad, donde la convivencia y la paz social sean una constante.

Las grandes amenazas que acechan al **Estado de derecho**, como son la criminalidad, la corrupción y la impunidad, sumado a la grave situación que atraviesa uno de los tres pilares que lo sustentan: la Justicia; han sumido al país en una crisis social no sólo de valores sino de calado estructural. Se han roto todos los puentes correctos del vínculo entre derecho y política. Hay una lucha encarnizada entre los diversos poderes del Estado, promovido y alimentado por quienes ostentan el poder. Se pasan olímpicamente por el arco del triunfo el orden constitucional generando caos e inseguridad. El estado de derecho va mal herido.

Es necesario que en nuestro marco normativo no haya improvisación, que no se legisle por legislar a golpe del interés mediático, y mucho menos, se abuse de legislar a golpe de Decretos Legislativos porque ello genera inseguridad jurídica.

El país necesita estabilidad y que haya **seguridad jurídica**. “El Gobierno-legislador no puede convertirse en una suerte de vía rápida para sortear el cauce legislativo ordinario. Eso es una disfunción y una perversión del sistema”. Los decretos legislativos tal cual se vienen dando, más parecen decretos leyes propios de las dictaduras. Derecho y política deben respetar sus propios espacios.

CRITICAS AL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO EN EL PERÚ

No cabe duda que la política mucho ha tenido que ver para instaurar el sistema judicial acusatorio en el Perú, eso, al margen de que es obvio que este nuevo sistema no lleva intrínseco la búsqueda de justicia en sí o el hacer justicia de verdad. La justicia verdadera en el sistema acusatorio es una quimera, ya que su fin es el resultado; un resultado determinado muy emparentado con el conflicto. Tú me violas y yo ya tengo un parentesco contigo a través del conflicto. Y si hay litis, igualdad inter pares; igualdad de armas en un conflicto no buscado. La nueva justicia no sólo avala eso, sino que monta un circo, le importa el resultado. ¡Qué tipo de justicia es esa!. ¡Qué justicia puede haber al margen de la víctima!.

El sistema penal acusatorio-adversarial peruano es un traje ajeno hecho a medida de los fiscales, traído prestado o mejor dicho plagiado, a sabiendas que es un taparrabos mal hecho, ya que deja a la justicia peruana desnuda, que vaya mostrando sus vergüenzas y sus carencias por todos lados. Un corta y pega a punta de tijeretazos siguiendo patrones de países entregados a los dictados

provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones internacionales a través de ONGs ideologizadas.

Este sistema, a diferencia del antiguo (al que acusaron de inquisitorial) que estaba basado en la idea de un juez que buscaba la verdad sin ceguera, que investigaba y perseguía el delito sin ataduras ni limitaciones, con discrecionalidad e iniciativa procesal; es ineficaz. Hoy con esta nueva justicia, nos presentan un nuevo escenario, con un nuevo juez que no ve o no quiere ver (supuestamente) para no contaminarse, y donde las partes compiten en la búsqueda de un resultado. En ese afán, la evidencia en la que sustentan su 'teoría del caso' la presentan de manera persuasiva ante un juez "que nada conoce" ni le importa investigar, pero que debe resolver en base a lo que le cuentan las partes.

Lo cierto es que:

En el sistema judicial acusatorio implantado en el Perú, la persecución penal es una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público (de los fiscales) y excluyente de los jueces dada la propia naturaleza que tiene su función de juzgar sin contaminarse y "con imparcialidad". La garantía que daba antaño los delitos perseguibles de oficio hoy resulta que han sido suplantados, hoy son delitos perseguibles por el fiscal. Y eso **es muy distinto**, es subjetivo y discriminador.

La consigna era suplantar a toda costa la investigación que llevaba a cabo los Jueces de Instrucción por una investigación preliminar encabezada por fiscales, para así, poder implantar el sistema judicial acusatorio respondiendo a pactos Internacionales, a organizaciones de derechos humanos y al ideario de sectores progresistas. Pues, para ello, **era necesario e imprescindible reformar la Constitución**. Cosa que en el Perú no se hizo; por eso es inconstitucional el nuevo sistema de justicia que el Código Procesal Penal (NCPP) alberga, conocido como sistema judicial acusatorio adversarial.

Han suplantado lo que era la Instrucción, por la Investigación penal **preparatoria**, donde los elementos de convicción (las pruebas) que logren recabar sólo podrán utilizarse para fundamentar la "acusación" del Fiscal, más no para fundar la sentencia, salvo que aquellas sean ofrecidas y producidas durante el Juicio. Con el sistema judicial antiguo, las pruebas recabadas en la Instrucción para su validez tenían que ser confirmadas y/o reproducidas en el plenario del juicio oral, sin teoría del caso, sólo **con pruebas** y la verdad; todo ello, sin tanta parafernalia ni invocación a la igualdad de armas, al debido proceso, ni a garantías ni tutelas de derecho sin ton ni son. Se daba por asumido que el juez estaba ahí para garantizar todo ello.

Hoy, "el conejo de la chistera" se llama "elementos de convicción"; porque en la nueva justicia, no se trata de probar (pruebas), sino de convencer (el más charlatán gana); todo ello, siguiendo directrices doctrinarias adversariales de 'la teoría del caso'; que no es otra cosa que, quién o cuál de las partes vende mejor la historia al juez, al margen de si es verdad o no, lo que importa es convencer, lo que importa es el resultado. Lo cual, todo ello, da pie a que el juicio sea un circo de charlatanes al cual mejor, donde hacen resucitar si hace falta a Sun Tzu

para plagiarle premisas y diatribas de su ‘arte de la guerra’ (abogado presidente castillo). Total, en la guerra todo vale. En eso se ha convertido la justicia gracias al NCPP; en una guerra insulsa. Con armas en igualdad y pares, sin víctima que se defienda.

Con el sistema judicial acusatorio; el fiscal, siguiendo los dictados del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y velando por los intereses del delincuente, debe establecer las circunstancias que agravan o atenúan el delito; es decir, el fiscal investiga, valora y decide. En su investigación, pondera la extensión del daño, individualiza a los autores, cómplices y valora las condiciones personales de estos, edad, educación, costumbres, condiciones de vida, facultades mentales, medios de subsistencia, antecedentes, etc, etc, y todo lo que pueda favorecer al investigado-detenido; dado que es relevante para que tome su decisión. En otras palabras, para que decida ‘la oportunidad’ (o en función del principio de oportunidad). ¡Un cheque en blanco!. ES DECIR: Valora cuestiones subjetivas.

En los **delitos de acción pública**, llamados antiguamente **delitos perseguibles de oficio**; por la naturaleza del bien jurídico vulnerado y por el interés social y general que se afecta, el Nuevo Código Procesal (NCPP) crea una parcela especial y atípica desde un enfoque convencional y conservador, incluso anómalo en términos de justicia desde el prisma constitucional, ya que regula una etapa inicial no jurisdiccional, donde los Fiscales son los amos y señores; le llaman etapa preliminar, y en ella se inventan la investigación preliminar; digo se inventan porque se apropian de lo que era la investigación policial y se apoderan travistiendo la investigación que realizaba el juez de instrucción sustrayéndola y alargándola hacia lo no jurisdiccional. En la fase jurisdiccional, ocurre algo similar con matices, mejor dicho, en la ‘Etapa Intermedia’ mucho antes del juicio, si es que lo hay. Si es que el fiscal logra armar una acusación o mejor dicho logra construir el caso.

Me estoy refiriendo a la ETAPA DE INVESTIGACION PREPARATORIA, que es obligatoria, dirigida y llevada a cabo por los fiscales, y dividida en dos partes: una sub etapa “que es oficiosa” llamada de diligencias o INVESTIGACIONES PRELIMINARES (no formalizada o pre procesal), aquí la denuncia no va al juez si no pasa esta etapa; y la otra sub etapa, llamada INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (formalizada y jurisdiccional), aquí si el fiscal no construye el caso no hay acusación, por lo tanto, no hay juicio.

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), de un tiro se cargó “La Instrucción”, y con ello, la investigación y persecución del delito que realizaban los Jueces de Instrucción, y también, se cargó la ‘Investigación Policial’, la que como ‘diligencias o investigaciones preliminares’ lo incorporó dentro de la ‘Etapa Preparatoria’ como investigación no formalizada (es decir no jurisdiccional). Todo ello, en un solo paquete ha ido a parar a la carpeta fiscal. Extintos han quedado el atestado policial e instrucción judicial, que ya no existen por obra y gracias del NCPP. La pregunta es: ¿Eso es legal? La respuesta sería: NO. Porque es frontalmente opuesto al mandato constitucional.

Como se puede ver, hay muchos “nombrecitos” nuevos ‘mareando la perdiz’, para poder robarle la cartera a la justicia y de paso a sus antiguos protagonistas.

Por un lado, al extinto Juez de Instrucción (hoy travestido de juez de garantías); y por otro lado, a la Policía que se le despoja de la Investigación que realizaba y que debería realizar sin injerencias, tal y como establece el Art. 166 y el **Art. 2. 24. f** de la Constitución.

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que el NCPP viola descaradamente el mandato constitucional. Con lo cual, a consecuencia de ello, también se puede inferir categóricamente, que El Ministerio Público ha invadido competencias de la judicatura y por supuesto de la policía; lo que deja a los fiscales en este último supuesto, como actores pasibles de usurpación y abuso funcional, lindando incluso con la prevaricación y el abuso de poder por no obedecer y ceñirse a los mandatos de la Constitución.

Visto lo visto, lo cierto es que; el 'sistema judicial acusatorio' pivota sobre un pilar imprescindible y fundamental que es la 'acción penal' y sobre un soporte necesario como es el 'principio de oportunidad'. Sin esos dos elementos "la nueva justicia" tiene los pies de barro. Luego lo que ocurre en la etapa intermedia y después en el juicio (si lo hay) es más de lo mismo; donde 'la teoría del caso', nos lleva a los desvaríos de la mejor teatralidad de los oponentes para obtener un resultado.

A un lado el delincuente y su abogado y al otro lado el fiscal; ambas partes cara a cara, con las cartas boca arriba, en igualdad de armas dice el NCPP, y con la mejor verborrea posible invocando la ley y los "elementos de convicción", los que mutuamente tratan de ser desacreditados por las partes, ya que no son prueba plena, sino partituras vacías de la performance que hay que llenar "con mucho floro"; mientras tanto, se va recreando y completando la escena con el ir y venir de cada colaborador eficaz, que no siempre responden a la verdad sino a un interés o al miedo para no ir a la cárcel (prisión preventiva).

Eso, si antes el fiscal no llega a un acuerdo, "un arreglo" entre las partes que deja Offside a la justicia real, fuera de juego a la víctima y su verdad. Negociaciones antinaturales que, aunque le llaman reparatorias y favorezcan a alguien a pesar del resultado, no representan la justica como tal. 'Hablando en plata': ¡No se podría decir que así se hizo justicia, sino que se llegó a un arreglo!. Lo cual, es todo lo contrario a la verdadera y autentica justicia. Lo normal sería que: ¡quién la hace la pagué!; pero, para que eso sea posible, habría que seguir el camino de la justicia con todas sus etapas y estadios de un verdadero proceso penal y vencer la presunción de inocencia al final del camino, en el juicio. Ahí y sólo ahí se personifica la justicia, ante un juez. Lo demás es sacarle la vuelta.

LA TEORÍA DEL CASO Y LA JUSTICIA

La justicia en los casos que llegan a juicio, siguiendo los lineamientos del sistema judicial acusatorio lo que buscan es el resultado en una litigiosidad teatralizada **del caso**, cada una de las partes "en conflicto" defendiendo **su teoría** para convencer al juez. En igualdad de armas pregona este sistema.

Con la 'TEORÍA DEL CASO' como bandera de la nueva justicia, los contrincantes (las partes) como si fuera un campo de batalla acuden a la litis invocando igualdad de armas; así lo ordena el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Un juego absurdo, como si la víctima hubiese buscado esta disputa y la justicia le torciera la cara para no mirarle a los ojos (ya que no es acusación) y abocarse a mirar ese nuevo juego inventado para sustituirla. Donde, el fiscal va "a la lucha" (a la litigiosidad) con sus elementos de convicción, con su teoría del caso y su estrategia procesal para convencer al juez. El objetivo es ganar; *la verdad jurídica y la verdad real, frente a frente*. Dicho así, suena todo muy interesante. Ganará quien supo vender mejor su historia.

Pero si al fiscal la historia no le sale como quiso contarla o no supo defenderla, o si el juez ve otra cosa distinta. La sentencia podría resultar contraria a lo que el fiscal pretende; ya sea: **1)** porque el fiscal plantea mal la acusación o, **2)** porque el fiscal no puede demostrar que hubiera delito. En ambos casos si no se alcanza justicia debería arder Troya. Sin embargo, no pasa nada. No pasa nada porque la víctima ahí concurre como un mero actor civil, es decir no hay víctima real. La acusación particular desaparece, se lo tragó el "cuco o coco", el NCPP.

En el 1er supuesto, el agresor muchas veces sale absuelto, a pesar de las pruebas, videos, peritajes, testigos y más; eso, porque las pruebas en el juicio sólo llegan a ser "**elementos de convicción mal contados**". El juez, por más que vea otra cosa está condenado a ver sólo lo que no le cuentan, a no ver más allá de sus narices "en aras de la imparcialidad". Y en atención, del qué y el cómo le cuentan el caso sentencia sin más, asumiendo la historia mejor contada y adoptando la teoría que más le convence. No puede hacer otra cosa porque la igualdad de armas y la imparcialidad procesal se lo exigen.

Como ejemplo: el **caso de la joven Arlette** (caso del 2015), que desnuda fue arrastrada de los pelos por su expareja en la recepción de un hotel de Huamanga - Ayacucho en presencia del portero, escena que fue grabada por las cámaras de videovigilancia del recinto. El fiscal de primeras nada más conocido el hecho, puso en libertad al agresor, ante el asombro de la policía y de la ciudadanía. En el juicio, al plantear (el fiscal) mal la acusación, y por la falta de diligencia del fiscal, no se pudo saber si hubo violación y/o agresión. El juez por imposición del NCPP, en este caso, no podía ver lo que el fiscal no le contó. Los vaivenes, debilidad, errores y las vergüenzas de la justicia en este caso es harto conocido.

En el 2do supuesto, es cuando un fiscal, simplemente no puede demostrar fehacientemente que se cometiera un delito, como fue en el famoso **caso del calzón rojo** (violación, oct 2020).

Si a lomos de la teoría del caso los fiscales pierden un juicio por no habérselo currado, sólo les queda exorcizar los demonios de la antijusticia y rumiar el fracaso del sistema acusatorio. Al ser ello un fracaso, deberían ser dignos del suicidio profesional; pero como de ello no son capaces, les queda el juego y juicio mediático (la prensa); y ahí vuelcan su ataque frontal contra todo y contra todos. En el caso citado fue así. Perdida la batalla judicial, prendieron la mecha mediática; feministas y feminazis hicieron de caballería, al ser una presunta

violación, los medios y prensa amarilla hicieron de artillería, el trabajo sucio a cargo de ONGs ideológicas. Con esos escuadrones no hizo falta "que echaran mano de la DIVIAC"; la justicia fue doblegada. La presión mediática fue tal, que superó con creces lo que antaño se conocía como 'la alarma social'. Lo que no consiguieron los fiscales en el juicio lo consiguieron así, soliviantando las masas y la turba con declaraciones y bombardeo informativo; la prensa sesgada avivó el conflicto y hasta el chismorreo. El caso se convirtió en una cuestión de estado. Tanto que los jueces del Tribunal que dictó la sentencia fueron suspendidos (sancionados) por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

En el caso del calzón rojo, los 3 jueces del Juzgado Penal Colegiado de Ica (2 mujeres y un hombre), por pecar de extensos y querer lucirse al citar "la máxima de la experiencia" **(*)** sobre la prenda en cuestión, dieron pie a que todo el mundo se quedara con lo anecdótico, que sirvió de gasolina para incendiar la verdad, ensuciarla y dar paso a que primara el escándalo, el escarnio y la satanización del presunto violador que resultó ser inocente. Pero la turba mediática quería sangre, al margen de querer encontrar la verdad, y en base a ella, tener un veredicto de culpabilidad o inocencia. La versión del acusado fue totalmente contraria a la versión de la denunciante. Lo curioso de los hechos es qué, la denunciante y el denunciado (amigos), después de libar licor volvieron a casa y voluntariamente subieron al dormitorio del chico y durmieron (ella no quiso ir a su casa para no despertar a sus padres), por la mañana despertaron sin signos de haberse tocado. Ella se despidió y se fue sin más; luego puso una denuncia por violación. El chico aseguró que no hizo nada ni hubo nada entre ellos. La policía y los jueces sólo tenían las versiones contrapuestas de ambos. No se encontró secreciones, fluidos ni restos biológicos de sexo en ningún sitio, y a resultas del examen forense la supuesta víctima seguía siendo virgen. Pero con toda la presión mediática, y la decisión de la OCMA que dijo "se ha violentado la perspectiva de género", la sentencia absolutoria fue camino a ser anulada, ya que fue apelada por el fiscal y jadeada por lo mediático; medios y el feminismo ideológico echaron gasolina y el fiscal prendió la cerilla. El final fue 'una noche gris' para la justicia porque ésta fue sodomizada por la antijusticia.

(*) ***La máxima de la experiencia*** *es una conclusión empírica fundada sobre la observación de lo que ocurre comúnmente. Es un juicio hipotético de contenido general, sacado de la experiencia y tomado de las distintas ramas de la ciencia o del derecho. Es un principio de Derecho, aceptado unánimemente, para interpretar un texto, resolver una situación o aplicarlo a un caso jurídico.*

Todas estas aberraciones procesales que hoy tenemos en el sistema de justicia de nuestro país, se lo debemos a la tendencia doctrinal sesgada del sistema judicial acusatorio-adversarial que nos ha metido sin que lo notáramos en un pantanal-procesal, un juego absurdo a costa de la justicia, cuya parafernalia histriónica es "un juego procesal" absurdo con herramientas y teorías muy alejadas de lo que necesita como justicia el Perú, donde se ha pervertido la concepción de justicia y sus elementos, la tutela judicial, el debido proceso, etc, etc, e imponiéndose además otros instrumentos y mecanismos jurídicos, muy ajenos y alejados de la realidad peruana, como es la **'la teoría del caso'**. Por ejemplo: Este sistema, primero pervierte y viola el proceso a una verdadera justicia, para luego invocar que no se violé el debido proceso. ¿Toda una

incoherencia verdad?. Sólo si el proceso que se invoca llevara a que se haga justicia real, entonces si cabría la invocación. De lo contrario es un juego tramposo que se le hace a la justicia.

LA TEORÍA DEL CASO: Nos lo han vendido como una estrategia, un proceder (jurídicamente hablando) y una forma de actuar en la litis, con argumentos para convencer al juez. Lo cierto es que, es una performance foránea, de quién vende mejor la historia de los hechos, algo así como en las películas americanas y sus estrados llenos de elocuentes charlatanes. Sin tener en cuenta que nuestra realidad social y nuestra idiosincrasia es muy distinta. Tenemos charlatanes, claro que sí, pero es mejor que sigan haciendo reír a la gente en la Plaza San Martín.

En una verdadera justicia, no se trata de ganar un caso a pesar de la verdad, sino, se trata de hacer justicia con la verdad. Por eso, '**la teoría del caso**' **(*)** no encaja en el sistema judicial previsto en nuestra Constitución, porque responde a un interés distinto, del que se vale la "nueva justicia" para llegar a un resultado; le sirve al sistema acusatorio para exponer "los elementos de convicción" buscando la mejor forma de contar la historia basada en hechos materia de litis para convencer a un juez privado de capacidad de mirar la verdad por sí mismo, sino, guiado por lo que escucha de boca de los actores de la litis.

(*) ***La teoría del caso:*** *Es la forma de cómo "se le vende" (se le cuenta) la historia de los hechos al juez para que te crea y puedas ganar el caso (al margen de la verdad). Sus adeptos, dirán: Es la estrategia a través de la cual el fiscal y el abogado plantean ante el juez de garantías sus planteamientos del caso para convencerle, tomando como estructura tres elementos; lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio; exponiendo en ello de forma persuasiva y creíble la historia de lo que ocurrió, con una visión que dé sentido a los hechos y a la teoría en la que se apoya, ya que será la base de la prueba y de la argumentación en el juicio.*

No obstante, además de la floritura verbal (o 'del floro' como dicen en Perú) que busca el sistema judicial acusatorio, lo de ser adversarial lo lleva al suicidio en las fauces de la misma teoría del caso, ya que al no buscar la verdad sino el resultado la justicia agoniza ahogándose entre la teatralidad y la comedia, más propio de un circo romano o una performance mediática, donde 'no es oro todo lo que reluce'.

Escenificación de la teoría del caso: Por los medios y condicionantes que se necesita para ello; como la igualdad de armas de los contrincantes (litigantes) y todo el despliegue de los actores procesales (sin víctima a la vista), sólo podría funcionar con fines acusatorios y con expectativas de circo, en casos mediáticos, corrupción en el poder (alto vuelo), en casos que haya grandes intereses de por medio, llámese lavado de activos, organización criminal, tráfico de drogas, y otros delitos, en los que se encuentran metidos no sólo 'delincuentes de verdad', sino también "los verdaderos delincuentes", que son los peores, porque generalmente son políticos o están vinculados con el poder.

Lo curioso y llamativo es que se ha tenido que cambiar toda la forma de administrar justicia sólo para adecuar y que tenga cabida el sistema judicial acusatorio, y con ello, incorporar en la litis 'la teoría del caso', cuya parafernalia sólo sirve para distraer a los parroquianos (a la audiencia), pero al final nada de nada; la justicia brilla por su ausencia. Eso, porque con ello no se busca justicia, sino, se busca un resultado. Tanto es así, que si al delincuente (acusado) le sale mal su defensa siempre le quedará echar mano a "la tutela de derechos"; y así, seguir mareando la perdiz. Como ya dije, al final, de justicia cero; o como dicen en el argot criollo, mucha paja y poco trigo. Es precisamente por ello, 'por el sistema' que les permite atajos para la impunidad, que los delincuentes de alto vuelo con poder económico y/o político escapan a la justicia, recurriendo a leguleyadas como las 'tutelas de derechos', 'el debido proceso' o cualquier otra medida de amparo o protección para eludir la acción de la justicia. Invocan el debido proceso que previamente han pervertido a través del NCPP. Invocan como legal algo ilegal. La Constitución lo desenmascara. Cosas de la nueva justicia.

Y todo ello, por un lado, con ayuda de operadores políticos en los medios de comunicación (especialmente en la televisión) creando tendencias y estados de opinión sesgados y parcializados según qué intereses; y, por otro lado, con una retahíla de abogados mediáticos que no buscan la verdad, sino, defender intereses, y cuya retorica histriónica es charlatanería pura y dura. Histrionismo ajeno a la verdad y a la búsqueda de justicia genuina, alejado de nuestra realidad nacional; una justicia absurda que nadie entiende, donde todo cabe y todo vale.

Al respecto, para entender lo que digo, les invito a ver el video para canal YouTube, 'PASIÓN POR EL DERECHO', del 23 jul 2020, donde el doctor Frank Almanza (Fiscal Superior), en una clase "Cómo litigar en audiencia de prisión preventiva", dice:

(**Minuto 39:00**), ***"…****la vida real no son esos casos mediáticos que salen en la tele donde una audiencia de prisión preventiva puede durar semanas; cierto. No, esa no es la vida real, pues; eso es, el día que defiendes a cierto ex presidente…En la mayoría de casos te van a dar no más de 10 minutos, y si no eres capaz de resumir, ¿qué crees que pasa?, te callaron y le dan la palabra al otro. Tú vas a decir, pero recién estaba en la introducción. Y cuál es el problema; terminó tu tiempo. Lo primero que tienes que aprender…, es saber entender lo que el juez quiere saber. Yo pregunto, ¿al juez le interesa las casaciones, los acuerdos plenarios?, ¿ustedes creen que hay algún juez que no se las ha leído?. Ya lo sabe; trabaja en eso**…**".*
(**Minuto 41:36**) **"…***Pero qué pasa: Cuando litigan; empiezan a hablar de las resoluciones de la Corte interamericana de Derechos Humanos, que el derecho a la libertad es lo más sagrado, el fin supremo de la persona...Y cuando estás haciendo tu introducción procesal, te dicen señor le quedan 2 minutos. Pero ni siquiera he empezado a hablar del tema…Yo lo veo todos los días; los abogados recogen sus cosas, y se van pateando el piso porque no hablaron lo que debían. Y la réplica y la duplica, ya no es para volver argumentar. ¿Qué le interesa al juez?; los hechos***…"***.*
(**Minuto 45:00**) **"…***En el caso de la chica que le tiraron combustible y le quisieron prender fuego y el limpiador de carros lo impidió: Me dieron 5 minutos; ¿qué dije?, hablé de hechos vinculados; no hablo tonterías, uso mi tiempo. No voy a contar historias bobas. Ese día esa sala tenía 32 audiencias. Esa es la vida real, es la carga procesal, es el Perú. Lamentablemente con los casos mediáticos de la Sala Penal Nacional, los abogados lo han distorsionado…Señor juez este es el caso, …y cuentan una historia como en los casos de la justicia gringa. Pero eso no es la vida real***...".***

TEORÍA DEL CASO vs TEORIA DE LA VERDAD

(pruebas VS elementos de convicción)

La estrategia al servicio de la preparación del juicio (teoría del caso), frente a frente con la verdad material y la prueba palpable, concreta e irrefutable (teoría de la verdad).

La aplicación de la técnica que encarna y le da sentido a '**la teoría del caso**' puede que funcione y resulte positiva en aquellos países cuyo ordenamiento jurídico-procesal ha apostado por la oralidad, destacando de esa estrategia lo histriónico y la locuacidad de los actores (nunca mejor dicho) que en la litis representan y llevan la voz cantante de las partes. Eso es lo que nos trae la nueva justicia, la del sistema judicial acusatorio adversarial que nos han impuesto a treves del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

Lo cierto es que, se ve bien en las "películas americanas" de corte jurídico y con juicios llenos de elocuencia, donde lo histriónico, la verborrea y la leguleyada son el soporte formal del alegato para convencer al juez. Y donde '**los elementos de convicción**' es la munición, que uncida a la ley es el arma con la que intentan batir a su contrincante. Todo ello, dentro de una parafernalia procesal que revisten con efectos y argumentos jurídicos locuaces que les dé retito.

Sin embargo, para '**la teoría de la verdad**', no hay mejor soporte que '**la prueba plena'**, objetiva e irrefutable, basada en primer lugar, en la confesión; y, en segundo lugar, basada en hechos probados, palpables y cotejados; avalados con peritajes irrefutables, verificación que la criminalística hace a través de la pericia acuciosa y responsable que busca ubicar e identificar el hecho y la verdad material; cotejos, análisis y pruebas forenses que conducen y ayudan a ver algo sin duda real.

Aquí '**la prueba**' es el pilar en el que se apoya esta teoría; la verdad y la prueba son indisolubles; lo cual conduce a que se haga justicia. La prueba se sustenta en hechos probados, algunas vienen a juicio como prueba anticipada, otras pruebas vienen contrastadas y validadas por el juez de instrucción sólo para corroboración y otras a practicarse en el juicio. Eso debería ser lo correcto, aunque actualmente no es así. Lógicamente, porque este postulado va con la justicia tradicional, basada en el principio de legalidad y la tutela judicial efectiva; donde, la verdad y la prueba son la base de la auténtica justicia.

Esa es la disyuntiva a la que se enfrenta la justicia peruana hoy en día para encontrar su verdadero rumbo; 'teoría del caso' o 'teoría de la verdad'. La primera responde a la nueva justicia y la segunda a la justicia tradicional.

Pues ahí anda el juego: "Pruebas vs Elementos de convicción". La primera se ve se palpa, los segundos se trata de convencer. Ahí está la diferencia, 'un juego entre mentiras y la verdad'. La verdad cuenta con pruebas objetivas que la sustentan. La mentira cuenta con elementos de convicción que la apoyan; que

parezcan o pasen como verdad depende de cómo se cuente la historia, si convence o no; necesitan convencer y ser contadas bien, sino, no hay nada.

Visto así, algunas mentiras (declaraciones y hechos) pueden pasar como verdad e incluso a ser admitidas como tal; caso distinto, es la otra cara de este debate, un hecho probado es prueba plena, es una verdad. En esta absurda batalla, donde "algunas cosas podrían ser verdad y no lo son", tienen enfrente "la verisimilitud de las cosas verídicas que son verdad incuestionable", que a efectos de justicia es postergada a expensas de algo que sólo tiene que convencer.

En el Perú, urge y es prioritario tener un ordenamiento jurídico completamente sano, sin vicios ni perversiones en la ley; respetuoso del orden constitucional y que garantice justicia autentica y real para todos los peruanos en igualdad.

Es necesario que impere: La **ley a favor de la verdad** como argumento jurídico. Sólo así es posible que haya justicia.

En este punto cabe una reflexión:

¿Qué es la verdad?.

Si Platón dijo «son filósofos verdaderos aquellos a quienes gusta contemplar la verdad», ¿podemos deducir entonces que la verdad existe y se puede llegar a ella? ¿Si es así, es aplicable a la justicia? ¿Hay una verdad o hay verdades? ¿Y qué hay de la otra cara de la verdad? La verdad y 'la no verdad útil'; ambas en una lucha inútil en pos de la verdad; y ésta a su vez en pos de la justicia.

¿**Existe la verdad**?

A lo largo de la historia la verdad ha sido desde la Grecia antigua hasta hoy, objeto de estudio y reflexión. Diferentes visiones y variadas interpretaciones han tratado de comprender y explicar LA VERDAD como idea y como concepto y han formulado sus teorías sobre ella. Las ideas y conceptos han sido múltiples y variados.

Para romper un poco el ineludible corset jurídico del tema que nos ocupa y para que puedan entender lo expuesto desde otra perspectiva, me remitiré al libro "La mentira como arma", de *Daniel J. Levitin* (Alianza Editorial), donde podemos rescatar una reveladora frase:

***«Lo que desconoces no es lo que va a meterte en problemas, es lo que das por sentado pero no lo está»* (*).**

La frase realmente no se sabe de quién es, pero 'es una verdad'; o, mejor dicho, su literalidad dice "una verdad muy cierta". Ya que: ¡Hay verdades que no son ciertas! (como en la teoría del caso).

(*) *La frase* ***en internet,*** *aparece entre «las mejores frases» del escritor estadounidense* ***Mark Twain.*** *Muchos dan por sentado que es suya. A él se la adjudica la película The Big Short – traducida en español como 'La gran apuesta'-, sobre la crisis financiera de 2007-2010. A Twain*

también se la atribuye el político estadounidense Al Gore en el documental que protagonizó, Una verdad incómoda, sobre su campaña contra el calentamiento global.
***Todo esto** lo cuenta el psicólogo-neurocientífico norteamericano **Daniel J. Levitin** en su libro **'La mentira como arma',** donde dice que, mientras escribía el libro, intentó confirmar la autoría de la cita y le fue imposible; algunos dicen que es apócrifa. Total, que a una frase que habla sobre lo que se asume como cierto y quizá no lo sea, se le atribuye falsamente un autor (al menos dudosamente).*

Lo que nos lleva a pensar que estamos en **"una era de irracionalidad deliberada"** donde la verdad está en juego.

¿Importa en realidad quién dijo la frase? ¿Importa conocer con exactitud a su autor? ¿Importa la verdad?
La repuesta la voy a dejar a que nos lo explique el mismo Levitin en un pequeño extracto de su libro:

*«La verdad sí importa –leemos a modo de respuesta en el libro de Levitin–. Una era de la posverdad es una era de irracionalidad deliberada, que se opone a todos los grandes avances de la humanidad (…) La mejor defensa contra los embusteros taimados, la defensa más fiable, es que todos nosotros nos convirtamos en pensadores críticos. No hemos logrado enseñar a nuestros hijos a contrarrestar la tendencia evolucionista a la credulidad. Somos una especie social y tendemos a creernos lo que los demás nos dicen. Nuestros cerebros son máquinas magníficas de contar historias y fabular: dada una premisa extravagante, somos capaces de generar explicaciones rocambolescas para justificar su veracidad. Justamente esa es la diferencia entre pensamiento creativo y pensamiento crítico, entre las mentiras y la verdad: **la verdad cuenta con pruebas objetivas que la apoyan**. Algunas declaraciones podrían ser verdad, pero las declaraciones verídicas son verdad».*

Pareciera que me salí del tema central, pero no, todo está relacionado, esto venía a cuento, que en **'la teoría del caso'** del sistema judicial acusatorio, la verdad como fórmula para encontrar justicia no es válida, ya que alineados con esa teoría no se va con pruebas (verdades) sino con elementos de convicción, que no son prueba plena, sino que, se llevan a juicio a ver si se aceptan como prueba si se logra convencer al juez, por lo tanto, susceptibles de engaño, ya que todo ello, se presta a que se cuelen todas las mentiras posibles y no posibles para engatusar al juez. Un juego de trileros.

Con un juez con una venda en los ojos, la cosa tiene truco.

La verdad de la prueba plena que no pasa por el caprichoso tamiz de la teoría del caso no le sirve a la nueva justicia. Velar por los derechos del delincuente así lo impone, donde la igualdad de armas y las cartas boca arriba de los contrincantes (las partes) secundan y facilitan el escenario a la teatralidad y la verborrea, donde si hace falta resucitar a Sun Tzu como alegato se hace. "Qué importa si todo ello es un cuento chino". Todo vale, menos la verdad.

EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO

Hasta aquí, he realizado un análisis cuyo recorrido va desde la Constitución Política (CPE) al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y viceversa, también

alguna que otra norma afín, e incluso algunas citas y precisiones de derecho comparado; donde los actores principales en el tema materia de estudio, Policía, Fiscales, Judicatura y lógicamente las instituciones a las que pertenecen y juegan un papel importante en la lucha contra la delincuencia, la investigación del delito y la acción de la justicia con su proceso penal, como son: Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Todo lo antes expuesto, ajustándome a la legalidad (constitucional) está hecho con una lógica jurídica objetiva, con el único afán de mostrar la problemática actual y la verdad.

Por todo ello, si no muestro **qué es** realmente **el sistema judicial acusatorio** con algunas precisiones, apreciaciones y valoraciones sobre la nueva forma de hacer justicia que se nos ha impuesto vía el NCPP, este estudio quedaría incompleto; porque a pesar del rigor jurídico al que me he ceñido, y el haber seguido fielmente la literalidad de cada artículo que he citado de la Constitución y del Nuevo Código Procesal Penal, los detractores a mi exposición, dirán todo lo contrario, con conjeturas equivocadas a fin de ocultar la verdadera cara del sistema judicial acusatorio o nueva justicia.

Pues bien, como evidencia, o quizá mejor, para "poner en evidencia" a este sistema judicial llamado acusatorio adversarial, tomaré literalmente lo que algunos gurús, estudiosos y juristas con ese sesgo han escrito y dicen sobre este tema. Por mi parte, iré tocando diversos puntos de interés que estén relacionados con este estudio, donde además son otros lo que opinan que este sistema judicial no funciona y es un fracaso, y por ello, claman por su erradicación o revertir el problema con una contundente y eficaz contrarreforma.

CONSIDERACIONES GENERALES

El sistema judicial ACUSATORIO es una herramienta de corriente progresista, impulsada por caviares y neocomunistas que siguen lineamientos de la globalización y la DICTADURA DEL PENSAMIENTO ÚNICO que quieren implantar en el mundo activistas ideológicos, desde las Organizaciones Internacionales con poder que adoctrinan y lo financian, como la ONU y sus Agencias que subvencionan y patrocinan. Dispendio con el que han comprado conciencias de corruptos para influir e imponer la nueva justicia, su doctrina y su ideología.

Los organismos supranacionales de derechos humanos instalados o con influencia en el Perú, han impuesto que el Estado tiene la obligación de investigar con todos los medios a su alcance las violaciones de derechos humanos de los acusados de terrorismo, incluyendo los casos ya juzgados en el pasado; argumentan que el Estado debe garantizarles sus derechos, cosa que no dicen lo mismo con el derecho de justicia "a las víctimas". Con la ideología progre que impera en estos organismos y estando el sistema judicial acusatorio en marcha esta gente lo tiene fácil.

La Convención Americana de Derechos Humanos del 22-11-1969 (**Pacto de San José** de Costa Rica), en su **Art. 8, 5** dice: «*El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia*»; en similar sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 23-

03-1976, en su **Art. 14** dice: «*Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella…*».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se estableció el 22-05-1979, destacó en su momento que en el Perú no se alcanzaba los estándares de un juicio justo ya que se limitaba la facultad del defensor a intervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del proceso, por eso era necesario e imprescindible se implante el sistema judicial acusatorio. Esas y otras barbaridades han esgrimido para desprestigiar la justicia peruana de viejo cuño que extendió su vigencia hasta el Código de 1940 y que nos hizo acreedores en su momento de una estable, fácil y segura protección legal bajo amparo judicial.

La globalización y los organismos internacionales de derechos humanos están dedicándose a pervertir los sistemas tradicionales de la sociedad, y el sistema de justicia no podían dejarlo al margen, tenían que aniquilar el viejo sistema para sus fines. Así lo hicieron en Perú; y así lo vienen haciendo en otros países, toman por asalto la justicia a través de un Nuevo Código Procesal Penal y le cambian la cara a la justicia. Esta gente, a los que yo llamo los acólitos del nuevo sistema, se tomaron el tiempo necesario para crear una nueva doctrina y un nuevo proceso penal, y lógicamente también se ocuparon de formar adoctrinadores, los que a su vez se encargan de adoctrinar a los demás, es decir, esparcen la semilla de la nueva justicia por todo el mundo; lo que ellos llaman empoderar con sus nuevas doctrinas.

Para ello, escogieron a países pobres o en vías de desarrollo como laboratorios sociales de sus experimentos, algunos de ellos en Centroamérica y en Sudamérica, lo que los mentores de este sistema llamaron el “proyecto judicial para Latinoamérica”; países a los que la necesidad les ha llevado a aceptar dadivas a cambio de dejarse manipular, a costa incluso de hipotecar su soberanía judicial y romper con ello sus tradiciones de justicia y su historia.

Los promotores y adoctrinadores de este nuevo sistema judicial, saben que con dinero todo es posible. Pues para ellos, eso no es ningún problema, cuentan con dinero a raudales, financiación de alto o supra nivel, ONU, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos humanos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros, los que financian foros como el de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, y lógicamente, subvencionan e impulsan “a sus ejércitos”, que no son otros que, las ONGs ideológicas repartidas por el mundo.

En el Perú, lo primero que hicieron, es desacreditar el sistema judicial tradicional (antiguo), tachándolo de arcaico, injusto e inquisitorial. Luego mostraron su dinero como cuando se le enseña dinero a un mendigo. Había que atacar el sistema desde dentro y que mejor que corromperlo contando para ello con corruptos dispuestos; entre ellos, caviares, progresistas y neocomunistas de todo pelaje, sumándose además como aliados incondicionales los “hijos de Sendero y el MRTA”, residuos de aquellas huestes, algunos convertidos ya en lucidos “intelectuales progresistas”, con consignas muy claras, destruir la

institucionalidad, atacando la Constitución y la justicia a través de un Nuevo Código Procesal Penal. El gobierno de turno cedió. Lo demás fue pan comido.

Así es como nos han impuesto una nueva justicia; con un Código Procesal elaborado en la sombra por ONGs ideológicas en connivencia con caviares y comunistas, monitoreados por el que fuera Ministro de Justicia **Diego García Sayán** del gobierno de Valentín Paniagua y Ministro de RR.EE. del gobierno de Alejandro Toledo; quien además, vinculó al Perú (cedió) con la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impulsó el nuevo Sistema de Justicia para el Perú conocido como ACUSATORIO, mediante el cual, se le otorga más garantías al delincuente que a la víctima, desdeñándose la justicia tal cual se conocía hasta entonces y recortando la autoridad policial hasta límites ínfimos para no reprimir el delito ni perseguir la delincuencia.

Con este nuevo sistema, lo único que han conseguido es que el imperio de la ley sea papel mojado, que la autoridad sea una antigualla insignificante y que la justicia brille por su ausencia. En ese sentido, ya se le puede faltar y agredir a la autoridad, incluso apedrear policías con crueldad hasta matarlos, que nadie les meterá a la cárcel por ello.

Según la doctrina y teorías que alimentan el sistema judicial acusatorio, los derechos fundamentales del delincuente son más importantes que la misma justicia, por ello, en un alarde normativo y de populismo, en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se predica encubiertamente (leer entre líneas) que sólo se debe perseguir a los delincuentes poderosos o ricos, y a los delincuentes pobres hay que dejarlos delinquir sin perseguirlos policialmente ni penalmente. Así pues, los malhechores celebran este Código como algo bueno a sus intereses, ya que gracias a él pueden cometer cualquier atrocidad que no les pasará nada. Es por ello, que actualmente en el Perú la delincuencia se ha generalizado, salen extorsionadores y todo tipo de criminales hasta de debajo de las piedras.

El nuevo sistema judicial vende la idea que los pobres delinquen porque no les queda otra opción al no tener los recursos necesarios para no hacerlo; que es la única salida que tienen, ya que el Estado les niega la salida para evitar lo sean, por lo tanto, los delincuentes ya no tendrán que preocuparse si delinquen; ya pueden robar o violar cuando quieran, que siempre habrá un fiscal que los deje en libertad echando mano al principio de oportunidad; total, qué culpa tienen “los pobres delincuentes” si el Estado no les da lo que impida salgan a robar, extorsionar o a matar.

Además, dicen los acólitos del sistema judicial acusatorio, que las cárceles están llenas de delincuentes, y sale más barato para el Estado dejarlos libres, aunque tengan que delinquir por las calles; dicen eso es mejor, que tenerlos que mantener encerrados en la cárcel. Sostienen que es una cuestión de economía procesal y de ahorro para el erario nacional.

Dicen también: Para qué distraer jueces en ello, si con el Nuevo Código Procesal Penal (hecho a medida del sistema acusatorio), podemos librarnos de jueces carceleros y de policías que persiguen delincuentes, por la vía de los llamados

“acuerdos reparatorios” aplicado por fiscales ávidos, diligentes en aplicar el principio de oportunidad. De esta forma, los jueces descansan, los fiscales están en su salsa y los delincuentes libres para sus fechorías; al final todos contentos. Todos felices, menos los policías que se fajan cada día luchando contra la delincuencia y ven como su trabajo es en balde. La gente de bien piensa que es la policía la que suelta a los delincuentes, y no es así. Otros piensan que hay arreglos debajo de la mesa y por eso los delincuentes en vez de ir a la cárcel los ponen en la calle. La policía no tiene esa facultad. Todo es culpa del sistema y de los que tienen poder para ello.

Bueno: Para que no sea yo, el que deja en evidencia y desnuda al sistema judicial acusatorio y al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que impera en el Perú, recojo lo que otros juristas dicen sobre ello:

El Vocal Supremo José Neyra Flores, en la ‘Revista Derecho & sociedad’ Nº39’ (pág. 100); a pregunta, ¿Cuál es su opinión cuando escucha que el Nuevo Código Procesal Penal es garante?, dijo: **“***…tiene muchas disposiciones que protegen los derechos de los imputados; pero también otorga muchas herramientas al Ministerio Publico… De manera civilizada hemos firmado convenios internacionales, ya que la globalización no solamente es económica, sino también jurídica, y por tanto estamos sujetos a un control de las instancias supranacionales…-depende del imputado y su abogado que en los procesos pueda haber juicio oral, salvo escoja una salida alternativa, una fórmula de simplificación procesal, y dependiendo de la gravedad del delito, puede ser Principio de Oportunidad, Acuerdo Reparatorio, Terminación Anticipada o Conclusión Anticipada del Debate…-también que el abogado, al elaborar su teoría del caso, estime que… su cliente va a ser declarado culpable, por lo tanto para qué va a utilizar todas las etapas del proceso si puede acogerse a fórmulas de simplificación procesal penal y lograr se le reduzca la pena por colaboración***”***.*

Todo ello, dicho así, aparentemente suena muy bonito, pero la cruda realidad es otra. Hay perversión de la justicia. El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que alberga el sistema judicial acusatorio ha pervertido la justicia. Pues ésta pende de un alambre donde se balancea al borde del precipicio mientras la impunidad, la injusticia y la corrupción la acechan.

El sistema judicial acusatorio ha hecho de ‘la teoría del caso’ la panacea y del fiscal un litigante más, que se preocupa más por si gana o pierde el caso, que por defender la legalidad al margen del resultado.

Lo normal sería que cuando se va con la verdad no hay por qué preocuparse; la persona que ha delinquido y es juzgada, sabe bien lo que hizo, con lo cual, valerse de la teoría del caso para obtener un resultado que es injusto para la víctima es una perversión y una injusticia.

“La teoría del caso”, no es otra cosa, que la parafernalia formal, de quién monta mejor “su película” o la película que hay que contarle al Juez, quién se supone no está contaminado (es incorrupto); y al ser ciega la justicia, por su cuenta no es capaz de encontrar o ver la verdad, sino que hay que hacerla ver; en otras palabras, se le tienen que saber vender la historia (verdad o mentira qué importa si logras que te crea). El juez que juzga, juega a ser arbitro imparcial ante la

igualdad de armas de los contrincantes (las partes), encarna la justicia ciega, mira sin ver, sólo ve lo que le dicen y lo que le enseñan. El juez que juzga, ha perdido objetividad, le han quitado discrecionalidad y capacidad de criterio propio para discernir e impulsar la búsqueda de la verdad. Ni que decir, de los jueces preparatorios de la fase inicial o intermedia, a los que se les ha despojado la persecución del delito y el impulso procesal a costa de ceder atribuciones y facultades a los fiscales.

Según la nueva justicia; bastante tienen los jueces con preocuparse de quién le vende mejor la película, de quién cuenta mejor la historia, eso a pesar de los hechos, que son los que son, pero que poco importarán si la historia está mal contada, si no convence. A veces la performance parece un teatrillo de barrio tan aburrida y descontextualizada como una telenovela y su trama o algo así. Gana quien maneja mejor la teoría del caso. Una teatralidad ajena a la realidad peruana. Que, ante tanta parafernalia, la gente de a pie, no entiende nada de nada de lo que pasa en los juzgados. Como diría Tulio Loza, los pobres andan más perdidos que un cuy de tómbola'.

Y para que el lector no diga que exagero o que no es cierto lo que digo; ahí les dejó, un resumen a modo de sinopsis del libro "La Acción Penal Pública en el Sistema Acusatorio" del Dr. Jorge C. Baclini, uno de los gurús expertos en la materia, donde abierta y descaradamente divulga el sistema judicial acusatorio adversarial; y donde además sin tapujos nos dice, qué hacer y cómo llegar a implantarlo para controlar la justicia.

SINOPSIS DEL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO

A esta primera parte le llamo yo, 'LA RUTA o el atajo':

El Dr. Jorge C. Baclini (Fiscal General del Ministerio Público en Argentina) en su libro "La Acción Penal Pública en un Modelo Acusatorio" nos dice:

"El capitalismo y la globalización han generado grandes cambios sociales. El modelo social es conflictivo, hay una lucha permanente entre clases sociales y una brecha grande entre ricos y pobres. Las sociedades capitalistas se basan en la producción de bienes. Ello lleva a disputas por acceder a esos bienes; las personas que no pueden alcanzarlos por no tener recursos, cometen delitos. En esa sociedad el delito es un dato real y está en continuo crecimiento.

El sistema punitivo no resolverá el problema, y menos la pena privativa de libertad; producen tendencia al delito. Como lo punitivo no puede desaparecer (se caería en el caos, y en la justicia por mano propia), sí hay que limitarlo desde los principios constitucionales y desde la dogmática penal.

Ante una tendencia criminalizante, dirigida hacia ciertos sectores sociales o hacia la tutela de bienes jurídicos con una política legislativa de punición a casi todas las conductas.

La pretensión estatal crece ante el incremento del catálogo de delitos y de penas, no sólo por la cuestión legislativa sino por el fracaso en las respuestas a la conflictividad social, que lejos de dar soluciones pretende con el control social atemorizar a la población.

El sistema de persecución penal no puede hacer frente a modelos sociales conflictivos. La antigua pretensión de perseguir todos los delitos para imponer sanción es de imposible realización.

El sistema es selectivo, ineficiente e ineficaz, y sólo persigue un patrón de estereotipos dado por la policía, insuficiente en cantidad y en calidad, generando carga endémica, congestión de casos y no hay recursos para perseguir casos importantes o de otra índole de criminalidad.

Bajo ese prisma, hay que cambiar el modelo de persecución penal que obliga perseguir todos los delitos, y busquemos la solución en modelos alternativos, que en base a la realidad incorporen criterios de disponibilidad de la acción penal, otorgándole al fiscal seleccionar los delitos a perseguir, en busca de resultados de calidad, tiempo y cantidad, respetando las garantías constitucionales.

Es decir, replantear la política criminal y de persecución penal, tomando injerencia en todo lo relacionado a la acción penal pública.

El modelo social ha cambiado y la estructura de persecución debe acompañar esos cambios. Es necesario replantear todo.

El cambio normativo en el régimen de la acción penal publica, debe ir de la mano de la modificación en las prácticas de los operadores y su capacitación; de lo contrario, es quedarse a mitad de camino, modificar unas cuantas normas y finalmente no cambiar nada.

Los procesos no son de hoy para mañana, tantos años de cultura inquisitiva han dejado secuelas que imponen un cambio en el curso del rio".

A esta 2da parte le llamo, 'EL CONTENIDO'.

"Para entender el enfrentamiento irreconciliable, entre el sistema antiguo (inquisitivo) basado en el principio de legalidad con una visión del delito 'como infracción' vinculada al castigo y, el sistema nuevo (acusatorio) basado en el principio de oportunidad con una visión del delito 'como conflicto' vinculado al resultado.

Se puede decir que se ha sustituido la teoría absoluta de la pena por justificaciones preventivo-generales y especiales, que vinculan al castigo a su necesidad social y a su conveniencia.

Como se ve los principios de legalidad y oportunidad referidos a la persecución penal hacen hincapié de forma distinta la idea del Derecho: la legalidad subraya la justicia; la oportunidad resalta la finalidad (la efectividad, la política).

La opción político-criminal debe tener en cuenta que la justicia es la meta, pero que la finalidad es la condición restrictiva para alcanzar la meta. Expresado sucintamente: tanta legalidad como sea posible; tanta oportunidad como (política y económica) sea necesario.

El principio de oportunidad, descongestiona el rebasado sistema judicial, lo torna más eficiente 'ya que permitirá orientar la investigación y juzgamiento a casos más graves, aunque ello suponga abandonar los más leves', para los que da respuestas alternativas a la sanción punitiva.

Esto deparará un ataque frontal contra la selectividad intrínseca de la persecución penal, evitando desigualdades en contra de los más débiles, y poder atacar la delincuencia económica y de 'guante blanco'.

La selectividad operativa de la criminalización sobre gente sin poder y por hechos de la calle, es como la epidemia, alcanza sólo a quienes tienen bajas defensas frente al poder punitivo y deviene en más vulnerables a los criminales de a pie, ***(a)*** *porque sus personales características cuadran en los estereotipos criminales;* ***(b)*** *su entrenamiento sólo les permite producir obras ilícitas toscas, por ende, de fácil detección; y,* ***(c)*** *porque el etiquetamiento los lleva a sumir el rol del estereotipo, y su comportamiento termina igual (la profecía se autorrealiza). Al final, la policía acaba seleccionando a los que transitan por espacios públicos con divisa de delincuente, ofreciéndose a la criminalización -mediante sus obras toscas (delitos comunes)- como inagotable material de esta.*

Así; otra de las finalidades de la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público, es romper la selectividad en la persecución que surge a partir de las agencias (policía) de criminalización. En otras palabras, quitarle a la policía la atribución de perseguir la delincuencia".

SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO, SOCIEDAD Y DERECHO COMPARADO

El sistema judicial acusatorio es un galimatías. Si le preguntas a sus acólitos te contarán que es similar al sistema USA, otros dirán que es tomado del sistema alemán o del italiano e incluso te venderán la idea que es genuinamente Latinoamericano inspirado en el sistema anglosajón. Aquellos que no aceptan el fracaso del sistema judicial acusatorio, se niegan aceptar las inevitables contrarreformas en los países donde éste se implantó. En su desesperado afán de no aceptar que este sistema es un fiasco (y un fraude a la justicia), te dirán que hay dos sistemas acusatorios, el puro y el mixto, en una huida hacia adelante, o en un intento desesperado por retener un sistema cuyas consecuencias no se ven ahora, pero que con el incremento del crimen organizado y la delincuencia común, la corrupción e impunidad, la sociedad será invivible y mucho menos segura. La criminalidad no trae nada bueno.

El sistema judicial acusatorio llegó a Latinoamérica como llega una plaga o una moda absurda, y esperemos que por la misma razón se vaya, todo depende de nosotros, de la gente, la justicia no puede estar de rodillas ante el crimen. No, porque una sociedad civilizada no puede tomar como normal vivir con el azote del crimen cada día y a la vez alentar su impunidad, y menos, normalizar sus atrocidades como parte del equipaje social, como si todo ello fuera un activo o quizá, incluso un pasivo (un debe) que el Estado tiene que cargar por la criminalidad. Lo normal sería erradicarla, pero como es imposible, hay que luchar para que la delincuencia y la criminalidad sea algo residual, que el costo social sea mínimo y no nuestra seña de identidad. ¿A más crimen mejor?; eso no puede ser.

No se puede aceptar que la víctima del crimen sea la olvidada por un sistema que se autoproclama garantista, y sin embargo vela y aboga por los intereses del criminal. Garantía para el delincuente sí, pero también al otro lado de la balanza, garantía para la víctima, garantía para vivir en paz, garantía para respetar la ley, garantía para ejercer libremente los derechos y libertades sin que nadie los quebrante o los viole a costa de un mal, de un perjuicio, y encima el criminal sea favorecido por ello.

Han tomado como pretexto los derechos humanos y la presunción de inocencia para pervertir la convivencia y legitimar el crimen. Con el sistema judicial acusatorio buscan las opacidades de la ley para ser garantes del lado oscuro y sórdido de la vida, como es el crimen que muchas veces es atroz y cruel. No podemos aceptar para instaurar el mal el viejo dicho de: A río revuelto ganancia de pescadores. Mientras por un lado los ciudadanos sufrimos el lacerar constante de la delincuencia común; por otro lado, los delincuentes de cuello y

corbata, políticos corruptos, grandes narcotraficantes y despiadados terroristas se burlan de la justicia gracias al sistema judicial acusatorio.

Así, la justicia es una película espantosa, donde el miedo se normaliza y el daño se vuelve bucólico, los acólitos del nuevo sistema de justicia piensan que todo ello es parte del juego para matar el rato; y no debería ser así. La justicia no es un pasa tiempo que busca un resultado al margen de la verdad. Muy por el contrario, debería ser el freno, la frontera y el límite de lo que está bien y lo que está mal. Y nadie debería cruzar esa línea para dañar o perjudicar a nadie; de lo contrario, con esa permisividad mal entendida y con una justicia mal administrada, la delincuencia que suele ser cruel seguirá dejando victimas en el camino, sembrando injusticia.

El sistema judicial acusatorio es una especie de fiebre en estos tiempos de globalización que 'los progres' han inventado para politizar la justicia y poder burlar la ley, mientras van generando caos e inundan las instituciones "tomándolas por asalto", haciéndose con cuotas de poder para destruirlas o pervertirlas.

En ese afán, legitiman el desacato a la ley y a la autoridad; la prueba la tenemos en el mismo Código Procesal Penal (NCPP) que viola la Constitución, y como consecuencia de ello, los delincuentes ya no ven en la policía a una autoridad, y las víctimas ya no ven jueces a la vista sino fiscales politizados que coquetean con el poder y le dan palmaditas a los delincuentes, gracias precisamente a este Código.

Y así va todo, no hay justicia, o, mejor dicho, la nueva justicia que encarna el sistema judicial acusatorio pervierte el sentido común y los valores sociales, y con ello, se generaliza la delincuencia y la criminalidad. Se roba y se viola impunemente en todos los niveles, y en lo cotidiano, se incentiva el pillaje, la ocupación ilegal y hasta la ley del más vivo trufada con el mal (la viveza criolla germen del mal). Todo ello, invocando derechos y libertades que no respetan para los demás.

EN ESPAÑA:

Los acólitos de esta nueva justicia también han intentado implantar el sistema judicial acusatorio adversarial en España, pero aún no lo han conseguido, al menos totalmente. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2015, le asigna a los fiscales (Ministerio Fiscal) atribuciones que antes no tenían, sobre todo la de iniciar y promover la investigación del delito; pero sin alterar la función principal de los jueces de instrucción que con el principio de legalidad a mano, siguen siendo el pilar fundamental de la tutela judicial efectiva y de la persecución penal (excepto menores, que es materia de otro estudio); igualmente, sin alterar los derechos y capacidad de la víctima para defenderse y hacerse valer por sí misma; lo mismo ocurre con las atribuciones de la policía y la Guardia Civil que siguen intactas respecto a las denuncias e investigación de los hechos delictivos que luego ponen a disposición judicial sin intermediarios.

No obstante; es interesante analizar como la judicatura española ha ido resistiéndose a los embistes, envites y embates de la presión progre reformista y a los aires expansionistas de los ideólogos latinoamericanos lacayos acólitos del sistema judicial acusatorio adversarial que llegaron cruzando el charco con “la tonada” o si prefieren con “la monada” de la nueva justicia o “nuevo sistema judicial” queriendo vender gato por liebre.

Sobre ello hubo muchos debates y aún lo hay, siguen intentando colar el cuento de la nueva justicia de forma muy solapada, tratando de politizar la justicia española a través de los fiscales cuya Fiscalía General del Estado depende del Gobierno, y ahí sí que están ganando terreno, ya que los progres logran colocar a gente afín en ese cargo. Pero creo que en España será difícil arrancar de cuajo las columnas y murallas de una justicia con arraigo de siglos, con bases sólidas e historia.

Pretender que desaparezcan los jueces de instrucción para sustituirlos en su función por fiscales, es ir contra la justicia misma, ya que los fiscales como ya lo son en los países latinoamericanos, aspiran ser un poder paralelo e independiente del poder judicial. Pretender quitarle, a los jueces la persecución del delito, el impulso procesal, la discrecionalidad, la capacidad y atribución de imputar, quitarles la iniciativa, el discernimiento y el arbitrio discrecional y razonado del asunto en litis, sería una perversión del sistema.

Aunque algo si han conseguido los acólitos del sistema acusatorio en España: Que en los casos de menores la instrucción lo lleve los fiscales, que al imputado mientras esté en investigación no se le llame imputado sino investigado, que los fiscales puedan iniciar investigación y denunciar delitos ante el juez. Como se ve poca cosa aún, pero si se descuidan los jueces o se quedan dormidos en sus laureles, pueden despertar de la noche a la mañana con un gran disgusto; compuestos y sin novia, la justicia en otras manos. Es decir, que la justicia se vaya al carajo. Porque toda justicia que se politiza deja de ser justicia; prima los intereses.

Creo que por el momento los españoles están muy orgullosos de su sistema de justicia, una justicia tradicional, la de siempre, con sus jueces y tribunales de toda la vida; donde la valía, calidad y profesionalidad de sus magistrados está más que contrastada y fuera de duda; sumándose a ello, el apoyo de los ‘agentes de policía judicial’ que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (policías y Guardia Civil), formando un todo que son un referente y un capital de cultura judicial solvente y de garantía.

La sociedad española, al mismo tiempo, está muy concientizada respecto a la víctima del delito; algo que “la nueva justicia” del sistema judicial acusatorio desdeña volviéndola invisible, donde no existe víctima sino perjudicado, ofendido o agraviado, y actor civil en el juicio, eufemismos utilizados para no ofender al delincuente presunto; al que se le protege y se le trata de lavar la cara a toda costa.

En ese sentido, hay que destacar en España la **Ley 4/2015** de 27 de abril, por la que se aprueba el Estatuto de la Víctima del Delito. Una ley que repara el olvido de la víctima en el proceso penal; la misma, que le reconoce derechos básicos y refuerza su intervención como tal (como víctima) en el proceso, fortaleciéndola por extensión en la LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Ante el fracaso de implantar el sistema judicial acusatorio adversarial en España tal y como lo han hecho en Latinoamérica; los acólitos, promotores y adoctrinadores que llegaron en manada a la península, se han esfumado o quizá se han quedado en silencio agazapados en las tierras de Castilla, esperando que el Quijote se descuide o quizá que los molinos de viento dejen de soplar, para persistir en su afán por darle un zarpazo a la justicia; mientras tanto van creando estados de opinión, por si madure la cosa, tan ajena a la justicia como "La Cosa Nostra".

No obstante, las huestes residuales de acólitos de este sistema, no se cansan de decir, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) española acogió el sistema acusatorio formal mixto, una especie de híbrido entre los dos sistemas (el antiguo y el nuevo). Así, "no se quieren dar por vencidos y mucho menos derrotados". Esta gente quiere pervertir la justicia española, politizándola.

Por eso, los jueces españoles tienen que estar vigilantes y atentos; pero sobre todo, tener presente las palabras del Presidente del Gobierno de España (Pedro Sánchez) cuando en televisión, dijo: *"¿La Fiscalía de quién depende? "Pues ya está..."*. Lo que Sánchez apostilló era la afirmación de una evidencia. Con ello, queriendo o sin querer puso en duda la imparcialidad de la fiscalía, ahondando aún más el debate sobre la politización de la justicia en un momento en que al gobierno le urgía, al parecer, la desjudicialización de la política; es decir, "que los jueces no metan mano a los políticos". Como se puede ver, los acólitos de la nueva justicia, no se sacian, ahora abogan para que en España haya un gobierno tipo Venezuela donde el gobierno sea la justicia. Precisamente para que el gobierno no sea la justicia, es que los fiscales no deberían meter sus manos en ella como lo hacen en Latinoamérica.

Hay otros que dicen, que ante la falta de sensibilidad para la persecución del delito del sistema judicial acusatorio puro, que se refleja en la despreocupación del Estado por la persecución del hecho criminal, y frente a la clásica concentración funcional en manos del juez "inquisidor" tradicional, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) adoptó el modelo napoleónico del Código de Instrucción Criminal francés de 1808, que encomienda la competencia para instruir las causas penales a un juez distinto del Tribunal decisor, con un enorme poder en la dirección de la investigación, y a la vez, garante de los derechos del imputado.

No obstante, los españoles han preferido quedarse con los valores y el capital de justicia que han tenido, la de siempre. Porque ya lo dice el dicho: "nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde". Y perder la justicia, sería muy malo para España, ya que se vería reflejado en términos de crimen organizado y de

delincuencia común, pero sobre todo en una falta de justicia y en un aumento de la criminalidad.

España tomando distancia del sistema judicial acusatorio, tiene otra forma de ver la justicia. La sustitución del juez instructor por un fiscal instructor (investigador) hubiese sido nefasto para la justicia, privaría a la víctima de la tutela judicial efectiva y sería un atentado contra el principio de legalidad, pilar fundamental innegociable del sistema judicial español. Por contrario, los acólitos del sistema acusatorio tienen en su cabeza acabar con ese reducto inquisitivo incrustado en la ley (eso dicen y satanizan su esencia). No reconocen que la instrucción está al servicio del juicio de acusación, y que sirve a la decisión entre sobreseer la causa o abrir el juicio oral, previa a una exhaustiva búsqueda de la prueba.

Si bien la instrucción judicial se inspira en la máxima inquisitiva en el sentido de que *inquirir* es investigar, cosa bien distinta es atribuirle al término "inquisitivo"; una connotación peyorativa equiparable a un proceso carente de las garantías procesales más básicas. Y eso no es verdad.

El legislador español no es tonto, una cosa es aproximar el proceso penal español a un adversary system, y otra cosa es, plagiar el mamotreto de modelo judicial acusatorio Latinoamericano. Mejor que eso sería un modelo adversativo como superación del acusatorio mixto de 1882.

También está el modelo adversativo del **proceso anglosajón,** el cual está estructurado como una disputa entre las partes –acusador y acusado– que se desarrolla ante un tercero, el Juez que actúa de manera pasiva. Donde no existe una etapa de instrucción propiamente dicha encomendada a un Juez ni tampoco a un Fiscal, porque es la Policía quien asume extraprocesalmente la función investigadora.

Si la intervención procesal del Fiscal conllevara, además de la dirección de la investigación, la legitimación para ejercitar la acción penal como acusador público; con las mismas premisas y postulados que utilizan para atacar y satanizar al juez de instrucción, resultaría que el inquisidor sólo cambiaría de mano, a la del fiscal.

Si ya a **CARNELUTTI** (1879-1965) la imparcialidad del Ministerio Fiscal le evocaba el viejo problema geométrico de la cuadratura del círculo, es decir, algo imposible de realizar; dotarle de nuevas y más atribuciones haría todavía aún más irresoluble aquel viejo problema. Más si éstas adquieren carácter y dimensiones de poder omnímodas e ilimitadas.

Si vemos el problema con los mismos ojos de aquellos que se empeñan en imponer el modelo judicial acusatorio, hay que precisar que, el mero cambio en la figura del director de la investigación no logra erradicar por completo un proceso "inquisitivo" en pro de uno acusatorio. Las atribuciones del Ministerio Fiscal son tan amplias que nos lleva inevitablemente a un proceso inquisitorial que cambia a poder de la Fiscalía. Ni siquiera la figura del Juez de Garantías es

factor de equilibrio que permita un distanciamiento del Fiscal con lo que implica la dirección de la etapa de investigación.

No se puede ignorar los **argumentos contrarios** a conferir la dirección de la primera etapa del proceso penal (la instrucción) al Ministerio Fiscal, como es la evidente politización que tiene en el sistema y a sus consecuencias directas. Ningún Gobierno renunciará al control de la Fiscalía, por muy autónoma que la quieran pintar, teniendo en cuenta el principio de dependencia jerárquica que en ella rige, lo que se convierte en una seria objeción para una investigación objetiva e imparcial, circunstancias que se ve en muchos procesos que han sido politizados.

Así, el Juez instructor, figura clave del proceso al que parecía no se le concedía la más mínima oportunidad de supervivencia a la arremetida feroz de los reformistas, en España ha terminado por resistir al cambio de modelo procesal a pesar de la reforma del año 2015.

Y así ha sido, cuando algunos miembros de la clase política comenzaron a declarar en los Juzgados de Instrucción por lacerantes casos de corrupción, advirtieron de primera mano el poder del Juez instructor, y siendo ésta quien legisla no tardó en intentar poner coto a una figura que por su independencia no se encuentra sometida más que al imperio de la ley.

Por ello, realmente sí que es importante quién instruye (o quién investiga), no es lo mismo que lo haga un juez que tiene independencia funcional a un fiscal que está condicionado por el poder político, y en otras latitudes incluso por otros condicionantes e intereses ajenos a la justicia.

A febrero de 2024, los acólitos del sistema judicial acusatorio persisten una y otra vez con un proyecto de Ley para modificar nuevamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y con ello pretenden seguir comiéndole terreno a la justicia tradicional española e instaurar definitivamente el sistema judicial acusatorio adversarial en toda su extensión y términos en todo el territorio español.

LA IMPUNIDAD ES LEY EN EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO

Gracias al sistema judicial acusatorio y al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), la justicia en **el Perú** ha entrado en un túnel gris de tiempos oscuros, en una época donde una espiral giratoria retroalimenta la mugre que hay en la justicia condenando a la sociedad a sufrir el cadalso que deja la impunidad de los delincuentes, o quizá mejor, este nuevo sistema ha sumido a las víctimas en un estado espacio-tiempo donde la justicia importa un rábano a quienes tienen el poder; hay tal desidia en los que tienen la obligación de facilitarla, promoverla y garantizarla, que los que tienen la obligación de administrarla se han quedado sin herramientas para aplicarla. Las leyes tienen los renglones torcidos, empezando por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

Vivimos en un país donde la impunidad alcanza niveles de más del 90%, lo cual lo convierte en la regla; se ha normalizado el crimen y la delincuencia. Eso quiere decir que bajo los lineamientos del sistema judicial acusatorio no se está impartiendo justicia de verdad y tampoco se están dando juicios con condenas donde la víctima haga valer su condición de víctima y sienta que encontrará justicia como tal. Lo cierto es que, en los escasos juicios acusatorios de importancia que se dan y que superan la fase de investigación preparatoria no hay justicia verdadera para la víctima. La justicia restitutiva que promueven al margen de la víctima es un fraude, un camelo inventado para burlarse de la víctima; el considerarla un mero actor civil dista mucho de parecerse un acto de justicia o que se le hace justicia. En otras palabras, no hay justicia.

Falla la investigación del delito, si la hay. Si los encargados de realizarla (los fiscales) caen en la teatralidad, lo mediático y ceden a la intromisión de intereses políticos, propio en la justicia acusatoria, esta se convierte en una parafernalia sin sentido, un camino a ninguna parte. Ya que, si los fiscales no ejercen la acción penal, si no acusan o no logran construir el caso, es decir, sino llevan a juicio a los criminales, la impunidad se convierte en una constante. Cosa diferente era cuando la policía investigaba y ponía la denuncia con el atestado a disposición judicial; ello garantizaba a la víctima como mínimo a que accediera directamente al auxilio judicial y a la tutela judicial efectiva. Actualmente no es así gracias al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

Los lineamientos del sistema judicial acusatorio facilitan el camino a la impunidad. No nos sirve como alegato la premisa, que más vale dejar libre a cien delincuentes que encarcelar a un inocente. Como ideal garantista suena bien; pero la realidad es otra, ésta con el sistema acusatorio está llena de zancadillas que cierran paso a que se haga justicia; están disfrazadas de aparente buenas intenciones, como las tutelas de derechos, la presunción de inocencia, los derechos fundamentales y el debido proceso, todas ellas, invocadas para torpedear el camino de la justicia.

Y aún peor, si vencidos todos estos obstáculos, el pretexto es de ripley, dicen que el delincuente pobrecito no tiene la culpa de serlo sino el Estado, que las cárceles están llenas o que los juzgados están saturados, etc, etc; con ello, sólo sale ganado la delincuencia y la impunidad. Así, la policía pierde el tiempo en su lucha contra el crimen. ¡Es la ley de la selva!.

Los gobiernos, en vez de potenciar los órganos jurisdiccionales en número suficiente a nivel nacional, capacitándolos y estableciendo sistemas de control para corregir desajustes en la justicia, han preferido recurrir a atajos fáciles que no cuestan esfuerzo, como es copiar el Código Procesal Penal de países vecinos para implantar el sistema judicial acusatorio, sin tomar en cuenta que el Perú tiene su propia realidad y su idiosincrasia; su historia y su propia singularidad social. El sistema judicial acusatorio, es un traje ajeno que no trae nada bueno.

El Perú con el NCPP va camino a convertirse en un país sin ley, la impunidad viene implícita, adherida en el ADN del sistema judicial acusatorio, la nueva justicia que nos ha impuesto, por un lado, es muy laxa con la delincuencia común y delitos contra el estado y la autoridad (sedición, terrorismo, hechos violentos

por la turba, etc); por otro lado, es muy selectiva según qué interés con el crimen organizado y con la corrupción en el poder.

Con el sistema acusatorio, la impunidad ha extendido sus tentáculos y su influencia incluso a la esfera judicial preventiva, cuestiona la prisión preventiva de oficio que imponía el juez a quienes se le imputaba y/o acusaba de haber cometido ciertos delitos graves, satanizándola como "automática", aunque en la práctica sólo se aplicaba cuando se cumplían los presupuestos establecidos para ello, como es, la posibilidad de seguir cometiendo delitos, la destrucción de pruebas o de sustraerse a la acción de la justicia.

Hoy los fiscales y "la oportunidad", en etapa no jurisdiccional, sin necesidad de juicio dejan libres a los delincuentes, agudizando el problema de la delincuencia, ya que con esa medida otorgan patente de corso a la impunidad con los malhechores en las calles campando a sus anchas, cometiendo delitos y fechorías, sembrando inseguridad y zozobra e infundiendo miedo en la población, ya que impunemente matan, violan y extorsionan a la gente de bien que intenta buscarse la vida de alguna manera.

En los países de Centroamérica donde se implantó el sistema judicial acusatorio, fue el caldo de cultivo para que las Maras, sicarios, asesinos y otros delincuentes se adueñaran de las calles, atemorizando a la gente, secuestrando su cotidianidad y sometiendo a los barrios bajo el terror y la crueldad de la delincuencia. Con la ley a su favor, los criminales encuentran el hábitat perfecto para el crimen y la impunidad. Por ejemplo:

En Honduras la expansión del sicariato lo ha convertido en un país sin ley. Debido a la incapacidad investigativa del Ministerio Público, la impunidad y la criminalidad ha aumentado, en el gobierno de Rafael Callejas (1990-1994) el sicariato aumento un 300 %, durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) fueron asesinadas 27 mil personas, más asesinatos que en todo el siglo XX en Honduras; en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue más de lo mismo, aunque en campaña electoral propusiera que 30,000 soldados de las Fuerzas Armadas conformasen una Policía Militar para combatir la violencia. Lo cierto es que desde el 2013 reciben al año más de 40.000 casos para investigación, y sólo pueden investigar el 5%; la comisión interventora señaló que la impunidad creció en ese país desde la creación del Ministerio Público en 1994; institución que como investigador y representante del Estado es cuestionado, debido a que su ley fundamento del sistema acusatorio es apta para países ricos y sociedades distintas a Latinoamérica, por lo que el ente investigador se queda sin herramientas para investigar los crímenes y llevarlos a juicio. (datos Wikipedia).

El gobierno peruano, con el sistema judicial acusatorio desatiende la lucha frontal contra la delincuencia y deja a los policías a su suerte, que exponen sus vidas cada día enfrentándose a peligrosos criminales, asesinos, terroristas y narcotraficantes, muchas veces mejor armados y equipados que las fuerzas del orden. Policías que realizan su trabajo en precarias condiciones por la falta de medios, sin autoridad y ausencia de apoyo gubernamental.

Por otro lado, la impunidad está en la Ley, en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que prima al delincuente y borra literalmente en su texto a la víctima como tal. O quizá, **la impunidad es la ley**, reflejada en la realidad cotidiana de la gente al no percibir justicia. Han dejado de lado la importancia de la denuncia de la víctima y la investigación policial realizada antaño. Con las fiscalías saturadas por la cantidad de casos, la investigación brilla por su ausencia, generándose un clima de impunidad y corrupción.

Todo ello ha llevado a que la gente piense que denunciar no sirve de nada, porque con la incursión de los fiscales, las denuncias no van ni llegan a ninguna parte; se pierden en una carpeta de un fiscal, que ignora a la víctima y mira más por los derechos humanos del delincuente. Así, de nada vale que la policía persiga y combata a los delincuentes, si luego no hay un juez que instruya ni ejerza una verdadera persecución del delito y que luego castigue a quien los haya cometido. Es absurdo que en cambio se castigue y condene a policías por combatir la delincuencia.

Los ciudadanos están en total indefensión, mientras las autoridades en su poltrona del poder muestran una total indiferencia. La justicia acusatoria adversarial en el Perú sólo funciona y se aplica según qué; quien tiene poder o dinero para pleitear estará bien defendido y bien tutelado. ¡Ah! las tutelas… Las tutelas se han convertido en un instrumento político, en un atajo para burlar la justicia, sobre todo para los poderosos. Todos los demás están a la deriva en un impase con una justicia que nadie entiende y que no funciona en un país donde la sensación generalizada es que no hay ley. El crimen y la impunidad se han emparentado, la impunidad y la ley se han divorciado. El Perú parece un país sin ley gracias al sistema acusatorio.

EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO ES UN FRACASO

El sistema penal acusatorio que echó a andar con bombo y platillo el 01 de agosto 2006 no encaja, no funciona, dista mucho de ser una solución en el país. La exigencia de un cambio severo en la sociedad y en las instituciones para que funcione no es asimilable, porque este sistema le da alas a la criminalidad y a la impunidad para que se enquisten y convivan en la cotidianidad. No se le puede pedir a la policía que deje de combatir la delincuencia y adapte su operatividad a cambios estructurales tolerantes con la extorción, el latrocinio, la violación, el pillaje y todo tipo de delincuencia común, asumiéndolas como algo normal en vez de tratar de erradicarlas.

El sistema judicial acusatorio no funciona en el Perú. Los operadores políticos y judiciales saben que esta aventura va camino al fracaso, por lo tanto, no deberían hacer sufrir más a la sociedad sus consecuencias. Para que este nuevo tipo de justicia cuaje en el Perú, el cambio cultural tendría que ser contra natura, tan radical en una sociedad dopada de ignorancia para que acepte lo irracional; una

sociedad conformista y tolerante hacia el delito y al delincuente. Una justicia absurda a fin y al cabo. Y eso no puede ser ni se puede aceptar.

Porque a pesar de los acuerdos reparatorios habrá victimas que digan: “A mí no me importa que me paguen por el delito que cometieron contra mi persona, yo quiero que se haga justicia”; otras dirán, “yo quiero que quién me agredió vaya a juicio y a la cárcel”. Por lo tanto, no es cuestión de ponerle precio al daño. El sistema acusatorio, le ha robado a la víctima su derecho a sentirse y a reclamar justicia como víctima. Le ha quitado lo último que le quedaba, el sentimiento y la esperanza de que a pesar de todo el mal recibido por el malhechor se haría justicia.

El Perú (a manos de sus políticos) sucumbió al ‘canto de sirenas’ traído por el sistema judicial acusatorio, que fue presentado en bandeja de plata como beneficioso para la sociedad porque servía para dirimir los conflictos con un bajo coste social. Eso dijeron. Nos vendieron la idea de que es garantista, pero se olvidaron que sólo es garantista para el delincuente; a la víctima la despojaron de su condición como tal, y la dejaron en cueros, con un taparrabos de perjudicado o agraviado, es decir, de “actor civil”. Con lo cual, en una sociedad convulsa, desordenada, no disciplinada, no cultivada, los efectos del sistema judicial acusatorio surten el efecto al revés, porque alimenta la impunidad y se convierte en caldo de cultivo para la corrupción, el caos y la delincuencia.

La justicia y los procesos penales con el sistema judicial acusatorio se han convertido en un suceso político vergonzoso, o el caso es mediático o clama por su ausencia (dos extremos), los que interesan y los que no. Lo cual genera problemas adicionales al sistema jurídico. Cuando los casos son relevantes —en los de rutina los fiscales tienen poder para zanjarlos a voleo o al palomeo como dirían en México—, desde el gobierno de turno, como hemos visto en los famosos videos de “los cuellos blancos” y otros casos, suelen telefonear a fiscales y jueces, involucrando a ministros para pedir inclinen la balanza de la justicia del lado de conveniencia, para que se culpe aquí o se absuelva allá. Como se le escucha al juez supremo Hinostroza (alias el hermanito), decir en una grabación: *“¡qué es lo que quieres que le rebaje la pena o lo declare inocente”;* ofreciendo absolver al violador de una niña de 11 años condenado en primera instancia.

El nuevo sistema de justicia hace aguas por todas partes. Si a los policías le quitan capacidad de investigar usándolos sólo como espías o amanuenses, y los fiscales haciendo de policías, la lucha contra la criminalidad y la delincuencia irá sin norte porque los fiscales no sabrán cuando son fiscales y cuando no, ya que incluso hacen de juez; y tanto, que utilizan la amenaza de “la detención preliminar” y la prisión preventiva como azote para obtener colaboradores eficaces, chivatos muertos de miedo que ante la amenaza de “o hablas o te mando a prisión” mienten como bellacos para librar su pellejo. En el mundillo del hampa dirían, que un chivato es capaz de vender su alma al diablo o incluso de vender a su madre con tal de librarse.

Si los fiscales siguen empecinados en tratar como a lacayos a los policías y los "jueces enrocados" con los fiscales en disputas como en una partida de ajedrez; ambos negándose a asumir las consecuencias de lo que implica su verdadera razón de ser, no habrá que esperar demasiado del sistema judicial acusatorio; ya que con el tiempo será un sálvese quien pueda. No olvidemos que el poder político es parte interesada a efectos de impunidad, y como tal, lógicamente reclama su cuota de influencia en el asunto judicial. Para ello, vía política criminal inclina la balanza a sus intereses. Práctica extendida en toda Latinoamérica.

En **derecho comparado** respecto a este tema, podríamos tomar nota de muchos de los países del entorno latinoamericano, pero quizá con uno es suficiente para ilustrar al lector la realidad sobre este fenómeno; el de 'la nueva justicia'.

En México, el Sistema Penal Acusatorio Adversarial (SPAA), que aprobaron el 18 de junio de 2008; tras su implementación, la sensación no es buena, la percepción es que no funciona y que la justicia se aleja de los ciudadanos cada vez más, siendo los delincuentes los que salen beneficiados.

Ante los cuestionamientos por el incremento de la delincuencia con índices delictivos altísimos y preocupantes, la sociedad y muchos políticos "culpan al nuevo sistema de justicia penal".

Así lo asegura Eruviel Ávila (Gobernador del Estado de México),[1] Miguel Ángel Mancera (Jefe de Gobierno de Ciudad de México 2012-2018) [2] y Omar Fayad (Gobernador del Estado de Hidalgo 2016-2022),[3] entre otros gobernantes de diferentes Estados, que proponen una contrarreforma para quitar el sistema acusatorio. Ahí les dejo tres enlaces de internet que corroboran lo afirmado:

[1]. - "Eruviel culpa al Nuevo Sistema de Justicia Penal de aumento de violencia en el Edomex (Estado de México)", en Oaxaca Político, 7 de julio de 2017.
[2]. - http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/06/7/mas-delitos-culpa-del-nuevo-sistema-penal-mancera
"Más delitos, culpa del Nuevo Sistema Penal: Miguel Ángel Mancera", en El Universal, 7 de junio de 2017.
[3]. - http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/11/conago-pedira-reformar-el-nuevo-modelo-de-justicia

"La Conago pide reformar el nuevo modelo de justicia". Los gobernadores de Hidalgo, Durango, Querétaro y Nueva León, culpan a la nueva justicia de la salida de miles de reos de la cárcel. *El Universal*, 11 de julio de 2017.

Una investigación realizada sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que analizó expedientes judiciales, estadísticas oficiales y testimonios, encontró que en el Estado de México se fabricaban falsos culpables para elevar los índices de eficiencia y defender los avances del sistema judicial acusatorio y al gobierno en materia de seguridad pública. https://contralacorrupcion.mx/fabricacion-culpables/.

Por otra parte, los mexicanos honrados y gente de bien, achacan la inseguridad a la liberación de 12 mil reos a raíz de que se implantara el sistema judicial acusatorio. Los cuales no dejan de tener razón, ya que, con toda la delincuencia

en las calles, liberada, atendiendo la nueva forma de hacer justicia, los delincuentes imponen su propia ley; la ley del hampa.

En el Perú ha ocurrido lo mismo, desde el gobierno de Paniagua, en que se liberaron a miles de delincuentes encarcelados por terrorismo y narcotráfico, y a muchísimos asesinos, violadores y otros criminales con delitos graves. Hoy esos delincuentes se han adueñado de las calles, roban, violan, extorsionan y asesinan; y los terroristas excarcelados quieren hacerse con el control del país por todas las vías posibles, unos han tomado las armas y se han echado al monte internándose en la selva, otros se han pertrechado en lugares inhóspitos de la sierra para desde ahí desestabilizar y generar violencia; y los más desapercibidos se han infiltrado en las esferas del poder copando las instituciones haciéndose con importantes cargos en el aparato del Estado. Con el sistema judicial acusatorio tienen de su parte el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para librarles de sus fechorías.

Con este panorama; claro que el sistema acusatorio es un fracaso total en el Perú y en toda Latinoamérica, tanto, que en los otros países hay un descontento general con la nueva justicia (acusatoria); por ello, la gente está pidiendo a gritos un cambio radical; y juristas entendidos en el problema están pidiendo una contrarreforma urgente; incluso, sugieren movilizarse en contra del sistema acusatorio para volver a la justicia tradicional, y así poder frenar la criminalidad y la delincuencia, antes que sea demasiado tarde; para que no se llegue a los niveles de los crímenes atroces de las Maras de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Esto y muchos factores más son indicadores que el sistema judicial acusatorio no ha funcionado en el Perú ni en Latinoamérica, porque la delincuencia y el incremento de hechos criminales como la extorción, el sicariato y todo tipo de delincuentes se ha generalizado sin que las autoridades ni la justicia puedan frenar la criminalidad.

En este sentido son muchos los que se pronuncian:

El ex juez y decano del Colegio de Abogados de Huaura, el penalista José David Burgos Alfaro en entrevista para canal (lp) PASIÓN POR EL DERECHO (video YouTube 07 nov 2019) 'Prisión preventiva bajo análisis'. Véase el Enlace: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GudSG1vNe-Y

(Minuto 9:04), dice: **"***el sistema acusatorio implementado en el Perú no ha funcionado, porque las personas que están en el sistema no han querido cambiar. El tema corporativo del trabajo, la transparencia, la inmediación, nada de eso ha funcionado. El magistrado sigue con el expediente en la mano, lo puede leer dos o tres días antes, y hace su resolución en la computadora antes de escuchar la audiencia, obviamente hace un receso de media hora, no va pues a transcribir 100 páginas, opta por notificar por casilla electrónica que ya va a decidir, cuando debe resolver al término del debate. Esas cosas nos dan respuesta que el sistema no funciona. La Corte Suprema no ha hecho la labor que debía, permite la escrituralidad; y la jurisprudencia no es suficiente hay que cambiar normas y ajustar cosas***".**

Todo ello, además de lo ya expuesto, se da porque hay un desencuentro entre la función de los policías y la función de los fiscales; y si a ello le sumamos, que

hay un desencuentro silenciado, soterrado y que canta a gritos tras bambalinas entre miembros del Poder Judicial (jueces) y miembros del Ministerio Público (fiscales), entonces no cabe duda, el sistema judicial acusatorio adversarial en el Perú no encaja, está agotado, caduco, fuera de lugar y es malo para nuestro país.

Yo digo que ese sistema es un fraude, un engaño, que no funciona. Y no sólo lo digo yo, hay muchos que lo dicen, incluso miembros de ambas instituciones (fiscalía y judicatura); el trato que se dispensan jueces y fiscales, deja mucho que desear, hay una rivalidad encarnizada, no empática, evidente y notoria.

Como se ve en el vídeo del Instituto Nacional de Capacitación **IACAP - PERÚ** (YouTube, 8 nov 2019), **Iacap Perú** sobre el tema 'Teoría del caso e imputación objetiva'.
Véase el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xyY8Vup7TvA&t=2107s

Donde el Dr. Frank Almanza Altamirano (Fiscal Superior) en una valiente e interesante exposición que explica cómo está funcionando la justicia, dice:

(Minuto 20:10) "…*no sé cómo la Corte Suprema del país, que algunos más que abogados parecen físicos nucleares o químicos puros, expertos en astrofísica… vienen y me piden que cuando formalice investigación preparatoria haga imputación necesaria... Qué parte de esto no entiende la Suprema, qué parte de esto no entendió la Sala de Ayacucho, cuando le pide a los fiscales que cuando formalicen investigación preparatoria hagan imputación necesaria…Acaso hay que llamarles acá y sentarlos como tarados y decirle mira aquí cholo, te voy a explicar…como en transición…En este país parecemos copistas, nos hemos copiado de Colombia…deberían estar presos por el delito de plagio, pero como nadie los pone en su lugar a estos farsantes y vendedores de cebo de culebra, se apropian de una doctrina de otro país que encima es inaplicable en el Perú y la traen, y algún físico nuclear que está en el TC lo jala y otro Supremo que sabe de derecho, porque ya sabemos cómo nombran a los jueces y fiscales en este país, ¿ya hemos visto los audios verdad?; 10 verdecitos, 4 azulitos,…Yo soy magistrado y me avergüenzo de serlo hoy día después de ver cómo se nombra esta gente. Entonces pregunto,…cuándo esto pasa, te das cuenta que copian algo, lo traen…lo ponen en un acuerdo plenario y mañana en una ejecutoria suprema pero nadie lo entendió,***...***"**

(Minuto 25:30) "*El otro día me botaron de la Suprema, porque dije: los fiscales no estamos a la altura de las exigencias que el Poder Judicial nos da para formalizar investigación preparatoria con imputación precisa, y no estamos a la altura dije, porque no somos ni adivinos ni brujos ni pitonisos, porque para serlo en preliminar y pasar a preparatoria con imputación precisa tendría que ser brujo, y la verdad, tengo la cara pero no lo soy. Y qué me dijeron los jueces, Almanza no se burle, estamos en un evento serio, y yo les dije, y sus resoluciones sobre imputación necesaria son serias, o son copias de modelos que no se aplican acá. Yo dije, la imputación necesaria se podría hacer, si y sólo sí la investigación preliminar fuera sólo para investigar…Y saben qué, un genio ahí, se planta y me dice, disculpe Dr. Almanza, y aplicó un principio jurídico que me dejó atónito, ¡tampoco tan poco!. Yo me vi obligado a aplicar otro, ¡ojo de loca no se equivoca!. Llegado a ese nivel, dice: Qué más hay que investigar. ¿Usted ha sido fiscal?. No, me dijo... Para hacer investigación precisa, hay que investigar pues. Yo no sé cuándo ha sido el día en el Perú que se desnaturalizó eso. Y así tantos casos se han archivado. Yo debería pedir un minuto de silencio por todos los casos que se han archivado. Porque qué hacían, archivaban por mala imputación. Cuando el fiscal formalizaba investigación preparatoria, ponía a derecho, y le archivaban el proceso. Preguntó, ¿alguien debería ir preso por eso o no?***...".**

(Minuto 32:04) "*Todas las tutelas de derecho saben para quién era… eso no era para los que no tienen perro que les ladre. A quién le metían las tutelas, a quién le archivaban los casos, a quién devolvían el proceso penal; a los de crimen organizado, corrupción, temas grandes, ¡ah!, entonces ahí empezaron a entrarme las dudas. Yo digo, los jueces que resolvían esas cosas eran brutos o se hacían. Y cuando hice esa pregunta es que ahí sí que ya me botaron. Me dijeron, lárguese no permitimos que venga a nuestra casa a ofendernos. Así que armé mis chivas, guardé mis cosas, y dije, de mejores sitios me han botado, y me fui***…".***
(Minuto 34:37**) "***Que la población entienda, para que se quite la venda de los ojos, porque una cosa es que te engañen. La pregunta es, cuánto tiempo****...".***

La politización aviva el conflicto de la justicia.

Además de los conflictos institucionales entre judicatura y fiscales. A nivel Ministerio Público también existen conflictos. Entre fiscales hay celos y recelos, miradas de reojo e incluso grupillos que se tienen 'entre ceja y ceja'; las peleas por el control de ciertas parcelas y algunas causas como 'Lava Jato', 'caso 'cocteles y otros de interés mediático, las pugnas por el control son tan acusadas como evidentes. Que sí cuestiones competenciales, que sí la jurisdicción entre iguales, que sí autonomía fiscal o funcional con los de arriba, todo ello, originado por los vínculos, fobias y preferencias con el poder, que hasta vendettas políticas se dejan ver; etc, etc.

En una institución jerarquizada con poder y tantas atribuciones como el Ministerio Público, los intereses son diversos, es muy difícil separar la paja del trigo por la injerencia política. Tanto, que uno se pregunta, en qué galimatías normativo e institucional ha caído la justicia peruana; o qué hemos hecho los ciudadanos para merecer esto.

Las peleas político-judiciales entre fiscales aviva la politización de la justicia; donde todo vale, incluso pelearse por el 'derecho de pernada' con los colaboradores eficaces; granjearse más y mejores "delatores" es signo de buena salud en las fiscalías. Quien hace los mejores tratos con estos personajes se da por bueno, les ayuda a conseguir resultados con efecto mediático; aunque a la postre no sirvan para construir un caso, por lo tanto, resultan estériles; y si llegan a juicio no terminan en sentencia condenatoria. ¡Algo es algo!, dicen.

En ese contexto, los colaboradores no sólo hablan, sino que cantan hasta lo que no saben con tal de no ir a prisión; y si además se corroboran, los fiscales felices, tienen para engordar a la prensa, ya que un colaborador eficaz ayuda a la fiscalía "a descubrir", eso dicen, aunque a veces nada es cierto porque los delatores suelen mentir, mientras más mentirosos mejor. Y si es reiterativo y contumaz en su relato mejor que mejor; a ello, le llaman coherencia argumentativa del testimonio con la evidencia aportada, y con ello, dicen, lograr un alto grado de corroboración.

Así las cosas, a los fiscales les hace falta mucha evidencia que corrobore en alto grado de probabilidad lo sucedido. "Antiguamente", de acuerdo a su valoración se le llamaba 'prueba plena', prueba indiciaria, hechos concurrentes, hechos

concomitantes, etc, etc. Hoy le llaman elementos de convicción, lógicamente ávidos de evidencia y corroboración, condicionados a la igualdad de armas entre las partes. Y así, un sin fin de nombrecitos que no dejan de ser una serie de términos difusos o conceptos indeterminados que pocos entienden; como por ejemplo: imputación precisa, imputación concreta, imputación necesaria, imputación suficiente, y más; y como decía el Fiscal Superior Almanza mucho de ello plagiado de Colombia, Argentina y de Centroamérica.

En este maremágnum los políticos son los principales protagonistas y la justicia su principal carnaza, porque desde el poder dominan el sistema; así, la corrupción y lo barato que les sale delinquir hace que se muevan al filo de la navaja como peces en el agua traspasando muchas veces los límites de la legalidad, y si a ello, le sumamos, que gracias al sistema acusatorio los fiscales determinan la suerte del delito, la acción penal y el hecho de construir o no el caso, la justicia es una quimera. Todo está politizado. Lo cual, aviva el conflicto de la justicia más allá de lo judicial. Así cualquier **investigación** se debilita al depender de elementos de convicción y exponerla a la igualdad de armas, riesgo innecesario que pone en riesgo "la prueba" y el rigor de la ciencia forense, entre ellas, la criminalística policial como evidencia de prueba plena. Por ello, la justicia va de mal en peor.

No cabe duda que la justicia tiene un conflicto; los fiscales fungen hacer justicia en fase NO JURISDICCIONAL, y además se ponen a hacer pesquisas, lo que toda la vida se le llamó investigación policial, y que hoy por obra y gracia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) eufemísticamente le llaman 'diligencias preparatorias' o 'investigación preliminar'; ¿de qué justicia estamos hablando?. La justicia es y se hace ante un juez; lo demás es un engaño. El Fiscal no es la justicia.

Permitir que así sea, sabiendo que los fiscales son proclives a la politización y al ruido mediático, y como no, a arrimarse a las esferas del poder, es avivar el conflicto que tiene la justicia, es seguirle el juego al sistema judicial acusatorio dejando a la justicia a su suerte; donde hay y cabe de todo, menos una verdadera justicia.

El fracaso del sistema acusatorio es tan evidente y notorio, que personifica el fracaso de la justicia. Sólo hay que ver cómo desde su implantación se ha incrementado la delincuencia, ha crecido la inseguridad y la sensación de que no hay quien haga justicia. Todo ello, lo ha generado el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que lleva implícito la creación de "un cuarto poder" indispensable para que el sistema judicial acusatorio funcione; un poder que rompe el equilibrio constitucional de poderes y que está encarnado en una institución que actúa como tal, el Ministerio Público; al que, el NCPP le dota de múltiples "atribuciones autónomas" muy afines a intereses políticos y al servicio del poder, como es la persecución del delito y disponer del 'principio de oportunidad' a la carta para influir en la justicia y el gobierno de la misma.

Por eso, no llama la atención que a ojos de todo el mundo la impunidad y la corrupción se haya normalizado y hasta institucionalizado; tanto, que las

disputas y pelea entre fiscales por los colabores eficaces y la lucha por los casos mediáticos se vean como dos apetitosos bocados, donde a instancia de parte interesada hay quienes le saben sacar provecho, ya que cuenta y mucho para el socorrido poder político de turno. Por todo ello, es necesario un cambio radical en la justicia peruana para volver a retomar el cauce de la auténtica y verdadera justicia.

TUTELA DE DERECHOS POR FALTA DE IMPUTACIÓN

(Imputación fiscal y tutela de derechos)

Desde que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) dejara en manos de los fiscales la imputación se han perdido en el limbo muchísimas denuncias y muchos procesos en ciernes por delitos muy graves cometidos no sólo por avezados delincuentes comunes, sino que han quedado impunes muchísimos y diversos delitos cometidos por políticos y personas enquistadas en el Estado o vinculadas al poder de turno. Unos por obra y gracia del principio de oportunidad y otros por estar vinculados al poder.

La imputación fiscal es una forma burda de birlar la cartera al poder judicial, es una forma como se ha desnaturalizado a través del NCPP lo que en su día fue la **fase de instrucción** y que aún hoy el espíritu normativo de esta figura procesal sigue intacto en la Constitución (Art.100 CPE). Ahí la tenemos aún vivita y coleando, vigente como INSTRUCCIÓN (aunque se le tenga como letra muerta por el NCPP); Art. citado donde nos habla de **juez supremo instructor**, a la sazón de "*el Vocal Supremo Penal abre LA INSTRUCCIÓN Correspondiente*", y líneas más abajo, al tratarse de autoridades de alta investidura lo recoge textualmente y nos dice que: "*el AUTO APERTORIO **DE INSTRUCCIÓN** no puede exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso*".

Con lo cual, y a la vista se ve, que la Constitución reconoce y así lo tiene previsto, que ante un delito tiene que haber UN JUEZ DE INSTRUCCIÓN; por lo tanto, la atribución de la IMPUTACIÓN le corresponde a los jueces. Del mismo Art. 100 de la CPE **(*)** se puede afirmar que, al fiscal sólo le otorga atribuciones "**en los términos de denuncia fiscal**"; es decir, trasladar el contenido de la "resolución acusatoria de contenido penal" emitida por el Congreso de la Republica; haciéndola suya sin exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Denuncia que el Fiscal de la Nación debe hacer ante la Corte Suprema.

(*) ***Art. 100*** *de la Constitución (CPE)****. - Antejuicio Constitucional***

Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.
*En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre **la instrucción** correspondiente.*
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.
*Los términos de la denuncia fiscal y del **auto apertorio de instrucción** no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.*

Es preciso indicar que los fiscales tradicionalmente calificaban (calificación fiscal) y acusaban (acusación fiscal), que no es otra cosa que mantener la denuncia fiscal independientemente de la denuncia y acusación particular que podía

ejercer la víctima como tal. La policía con las reservas del caso, teniendo en cuenta la presunción de inocencia, detenía y **reseñaba** a los autores materiales del hecho criminal poniéndolos a disposición judicial (Art. 2. 24. f de la Constitución).

Sin embargo, el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) a contracorriente con el mandato constitucional vigente, deja la puerta abierta a la impunidad al condicionar el proceso penal a la imputación fiscal. Un invento para que todo pueda calzar a medida y se pueda aplicar el sistema judicial acusatorio en el Perú. Como también es un invento del NCPP la detención preliminar activada por los fiscales; medida inconstitucional que vulnera derechos fundamentales.

En este sentido, el fiscal tiene superpoderes, si no hay imputación fiscal no hay caso, no hay proceso penal que salga adelante si el fiscal no quiere, lo cual, deja al margen el derecho de la víctima a que se le haga justicia. Al delincuente sin embargo por medio del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se le dota de muchas herramientas para salir indemne penalmente y libre de cualquier denuncia que haya en su contra; no olvidemos que el malhechor siempre puede echar mano a la '**tutela de derechos**' para torpedear el proceso penal, más si hay falta de diligencia por parte del fiscal. Si no hay imputación cabe la tutela de derechos.

La tutela de derechos por falta de imputación se ha convertido en un coladero para la impunidad; esa leguleyada es un contrasentido a la justicia tradicional, es un despropósito que nos trae el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Es decir, si el fiscal no logra reunir "los elementos de convicción" necesarios no hay nada que hacer, si el fiscal no logra construir el caso, el delincuente se libra de un procesamiento con enjuiciamiento. En otras palabras, si el fiscal no acusa o se tarda en hacerlo dejándolo prescribir, el investigado que con seguridad tiene siempre algún abogado que se sabe todas las leguleyadas pide ser **sobreseído por falta de imputación**.

Lógicamente con el NCPP le asiste además el derecho a instar **tutela de derechos** por ese motivo en caso de estar siendo investigado por haber cometido un ilícito penal. El fundamento de ese recurso, realmente es un pretexto para evadir la acción de la justicia a consecuencia de la **falta de imputación**, motivo por el que recurren a control jurídico del Poder Judicial sobre la actuación de la administración pública sujeta al derecho y a la efectiva tutela de los derechos e intereses del administrado, a través del proceso respectivo. Le llaman '**debido proceso**', un mantra progre cuyo quebranto se supone tiene que estar amparado (como si antes no lo hubiese estado). Por eso a los que son proclives a delinquir les gusta el sistema acusatorio, porque este enrevesa la justicia de tal manera que los delincuentes pueden echar mano a todas las triquiñuelas jurídicas para librarse de la acción de la justicia.

Dicho lo cual: Aquí se abre el debate, cual es primero el huevo o la gallina. La **'tutela de derechos'** vs la '**tutela judicial efectiva**'. La primera es patrocinada con vehemencia por el sistema judicial acusatorio (la nueva justicia) y la segunda estaba más a mano e iba patrocinada por el sistema tradicional al que denominan inquisitivo (la justicia tradicional-antigua).

Siempre se nos dijo y así debe ser, que la '**tutela judicial efectiva**' es aquella a través de la cual la denuncia de la víctima con el principio de legalidad nos garantiza el auxilio judicial o en todo caso el arbitrio de un juez; eso, con el sistema judicial antiguo ha sido así, es decir, que el auxilio y el amparo judicial con la justicia tradicional al que los acólitos de la antijusticia han demonizado como sistema inquisitorial o justicia inquisitiva estuvo garantizado, a disposición de los ciudadanos. Lo cierto, es que, tal como están las cosas, no hay más inquisitorial que el poder que tienen actualmente los fiscales. Si miramos el panorama nacional, nada que envidiar a una cacería de brujas.

Recordar también que la tutela judicial efectiva, era el instrumento (con el NCPP ya no lo es) por el cual los particulares podían, en ejercicio de su derecho de acción o denuncia, solicitar tutela jurisdiccional ante un hecho que les resultaba lesivo penalmente por ser una conducta enmarcada en el código sustantivo respectivo como un ilícito penal, es decir, un delito, y era el juez el encargado de hacer la valoración y la tipificación en el auto de procesamiento, controlando a partir de ese momento y enjuiciando luego la legalidad del hecho denunciado. El juez tenía a su disposición las herramientas procesales necesarias para garantizar por un lado la tutela judicial; y, por otro lado, disponer dado el caso de la imputación penal previo el auto apertorio de instrucción; cosa que se les ha castrado funcionalmente.

Por lo tanto: La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental y tiene amparo constitucional (Art 2 y Art. 3 de la CPE); por lo tanto, ese derecho debería ser inalienable. Sólo un juez constitucionalmente puede administrar justicia. La tutela de derechos por falta de imputación fiscal es una argucia legal para burlar la justicia.

Es aceptar que alguien que no es juez está valorando (juzgado) que el hecho no es delito según su parecer, que no sabe qué hacer con ello, y por eso no imputa. El sistema (acusatorio) se aviene a que esa impostación permita que la justicia se vuelva contra sí misma y contra la víctima dejando impune el agravio penal por falta de imputación fiscal.

Claro que hay que tutelar los derechos fundamentales, y la justicia debe actuar por ello, pero no hay que irse al otro extremo, al punto de pervertir el verdadero propósito de este recurso, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de instancia, (4ta. Instancia), y pedirlo "por quítame esta paja" lo saturamos, desvirtuando su finalidad. Eso no es justicia, es un juego perverso entre trileros.

La tutela de derechos por falta de imputación fiscal con la justicia que teníamos antes no era posible, ya estaba el juez para garantizar justicia real para todos por igual.

PODER VS JUSTICIA

Todo lo que está ocurriendo en el Perú a raíz de la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) se lo debemos al sistema judicial acusatorio garantista adversarial o contradictorio.

Es decir, el problema en sí, es una cuestión de poder o de justicia. Si impera la justicia el poder es un cordero domado, si impera el poder la justicia es una mansa paloma con el ala rota.

Ronald Dworkin, escribe sobre '**el imperio de la justicia**', teoría estudiada y debatida por eruditos y teóricos, abogados y jueces, estudiantes y políticos. El autor se pregunta: qué se halla en el corazón del sistema legal; cómo deciden o deberían decidir los jueces; qué es la ley. Dice que los jueces deben decidir interpretando y no simplemente aplicando la ley. Supongo que es porque ésta (la ley) puede ser tramposa al estar al servicio del poder.

Y no le falta razón, a lomos del poder se suben políticos, autoridades y personas con influencia. Y por otro lado, con la justicia van remando los jueces (la judicatura) con auxilio de la fuerza pública (la policía). La policía está en el centro ajena a este conflicto, se debe y obedece al imperio de la ley; es el brazo armado de la ley y sus efectivos como agentes de la autoridad están al servicio de la justicia.

En esta batalla, donde el poder y la justicia colisionan en una lucha encarnizada y sin tregua por quién se impone y domina, hay mucho en juego. En ello, el estado, el derecho y la ley se debilitan; así, es muy difícil tener un país estable donde la seguridad jurídica no se vea amenazada, ya que el poder suele ser un refugio donde anidan individuos corruptos que no sólo violan la ley, sino que delinquen. Más aún, si el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) incentiva que haya corrupción, delincuencia e impunidad y porque además ha hecho de la justicia un caos; es decir, no hay justicia.

En un país donde el poder somete a la justicia o la destruye, el estado de derecho es un espejismo, una ilusión donde 'hasta la ley miente' porque con ella el poder viola la Constitución, y lo hace a través de Decretos Legislativos que burlan mandatos constitucionales que no van en la dirección de sus interese políticos.

Rota la justicia, ésta es desmantelada y sometida, el poder la pervierte; y con ella en descomposición, los oportunistas de siempre campan por todas partes; muchos se apoltronan en las altas esferas del poder desde donde fagocitan todo lo que se les oponga o se les ponga enfrente. Así las cosas, los que mandan, embriagados de poder se sienten por encima de la ley, el abuso impera, a la ley le tiemblan las piernas y como consecuencia de todo ello la justicia agoniza.

En un estado de derecho, lo normal es que la justicia someta 'al poder' bajo las reglas que nos marca la Constitución, y con ello, lo normal es que la justicia condicione, discipline y frene los desvaríos del poder evitando además que haya impunidad.

Sin embargo, vemos que no es así, el poder ha sometido a la justicia, la ha pervertido y la ha destruido, al extremo que da la sensación que no hay justicia, que ésta, está en total descomposición por culpa de la corrupción, y así, la delincuencia, la corrupción e impunidad está en todas partes, su soporte y su sustento es el poder.

Cuando el poder es más fuerte que la justicia al punto de doblegarla, no hay una sociedad sana. Si no impera la justicia, es porque ha caído bajo las garras de una dictadura, del gobierno de la justicia por la autocracia. Donde alguien dice la justicia soy yo. Eso me recuerda las palabras de un gobernante español, que nos da una pista de cómo es cuando el poder cree estar por encima de todo: *"De quién depende la fiscalía, pues ya está".*

EL PODER DE LA LEY

Desde que el hombre se civilizó EL PODER DE LA LEY ha guiado la sociedad, es más, la ley contribuyó para que el hombre dejara de ser salvaje y renunciara a la barbarie, organizando, estructurando y ordenando su vida en comunidad. 'El poder de la ley' hizo que la sociedad renunciara a la venganza como una forma racional de hacer justicia. Precisamente de ahí (de la venganza) vino la ley del talión conocido por el pasaje bíblico del «Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie». Con la ley llegó la civilización.

Es por ello, que en una sociedad sana el soporte fundamental de la convivencia es el imperio de la ley. **El poder de la ley** hace que funcione el Estado de Derecho partiendo del orden constitucional a la ley, para que las libertades y derechos junto con la vida sean el bien supremo del hombre. Existiendo la ley, entra a tallar la justicia. Entra a tallar el poder de la ley. Ese debería ser el verdadero poder.

Pero la civilización no podía ser del todo perfecta, traía sus propias taras, las que se derivan de la condición humana.

Así pues, como dice el dicho, hecha la ley hecha la trampa; y ahí entra a tallar la política y los políticos de turno, que para burlar la ley pervierten la justicia, y si hace falta, pervierten la ley y se sacan de la manga otro poder, un poder fáctico que no está escrito ni reconocido como tal, pero todos sabemos que existe, es el **PODER POLÍTICO** que se mueve como una lombriz en las fauces de una nebulosa gris y las cloacas del sistema, buscando siempre burlar la norma, ya sea para romper el imperio de la ley o para pervertirla. Tanto es así, que: El poder y los políticos en nombre de todos los ciudadanos gritando pan, justicia y libertad nos dan gato por liebre y nos dejan sin ley, sin justicia; sin nada.

No siempre fue así, los políticos de antaño vivían de su trabajo, sabían lo qué es trabajar, eran gente que no vivía de la política, su paso por ella lo veían como un servicio a la sociedad; los políticos de ahora nacen directamente en el útero de algún partido político sin antes haber trabajado nunca; no saben qué es trabajar,

¡en su vida han trabajado!, no saben qué es una nómina; se suben al carro de la política y desde ahí se dedican a destruir más que a construir, a robar más que a aportar, a corromper el sistema para poder medrar y robar. Y así nos dejan sin justicia. Se lo apropian o la destruyen. Son una caterva llena de sátrapas.

La justicia para la sociedad es fundamental; y una justicia independiente es crucial para que se puedan aplicar las leyes de manera justa y sin injerencia del poder político. Cuando se quiebra la independencia de la justicia se deja el camino libre para que reine el caos y la impunidad. La corrupción hace su madriguera en la aplicación de la ley. El poder de la ley sin justicia no es ley.

En resumen, la relación entre el poder político y la justicia es compleja y a menudo es una situación delicada. El poder político hace la ley y la justicia aplica la ley. Por eso, la separación de poderes es esencial para mantener una sociedad equilibrada, justa y democrática. Es fundamental que se proteja la justicia y con ello la ley y su poder. Por lo tanto, hay que proteger la independencia del Poder Judicial y el orden constitucional. De ello depende el poder de la ley. El imperio de la ley es la base de toda civilización.

En ese sentido, siguiendo el hilo del razonamiento, el hecho que el poder político buscando impunidad haya inventado un poder paralelo al judicial como lo es de facto el Ministerio Público, tal cual lo erige el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), es un atentado al orden constitucional y a la justicia. Con ello, la que paga los platos rotos es la víctima y la sociedad como tal. Todo ello se lo debemos al sistema judicial acusatorio adversarial, que es un sistema impuesto e impostado, que no tiene cabida ni encaje en nuestra Constitución. Si queremos de verdad arreglar la justicia en el Perú hay que cambiar de raíz el sistema de justicia. El poder de la ley debe ser respetado por todos, incluso por el Ministerio Público.

Llegado a este punto y después de un concienzudo estudio se podría afirmar sin ninguna duda que; el sistema judicial acusatorio ha destruido la justicia. No respeta el imperio de la ley, tampoco busca justicia. La justicia está en descomposición.

EL SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO HA DESTRUIDO LA JUSTICIA
(LA JUSTICIA ESTA EN DESCOMPOSICIÓN)

El título que antecede cae como anillo al dedo respecto a la justicia que hay actualmente en el Perú.

Por ello, antes de terminar y llegar a las conclusiones y soluciones finales, os dejo a modo de ilustración un apunte adicional de cuáles son los orígenes más remotos y su evolución del sistema judicial acusatorio; antecedentes que han ido fluyendo y variando al compás de las transformaciones sociales, de lo que se han aprovechado los acólitos de este sistema para ir alimentando su adoctrinamiento hasta transformar la idea de justicia, hasta llegar al sistema judicial acusatorio tan cuestionado en estos días.

Algunos sostienen que el sistema acusatorio sienta sus orígenes **después de la revolución francesa (1789-1799)**, con la caída de la sociedad moderna que dio paso a la edad contemporánea de entonces, donde la monarquía y la iglesia dejaron de tener el poder que ostentaban para dar paso a la república y a monarquías parlamentarias que tuvieron que someterse y ponerse al servicio de la democracia.

Esa tesis hasta cierto punto tiene sentido, pero antes hay que precisar que el sistema francés se inspiró en el sistema Americano de Estados Unidos y éste a su vez se inspiró en el sistema británico. Una concatenación de hechos dados en el tiempo que de una u otra manera sirvieron de antecedente e inspiración a las sociedades que le precedieron.

Yo por mi parte no quisiera remontarme tan lejos, pero a modo de ilustración es necesario indicar al lector que:

Para buscar los orígenes del papel que desempeñaron y desempeñan actualmente los fiscales, habría que remontarse al **sistema británico** cuya cimiente data del año **1243** y **1461**, dos momentos, cuando como letrados se va generando la defensa de los intereses de la corona ante las cortes, y luego desde **1673** encarnando la figura de Fiscal General que aconsejaba y representaba a la Corona en asuntos jurídicos. Actualmente, la Fiscalía General dirige el Servicio de Persecuciones Judiciales de la Corona y desempeña un papel crucial en el sistema legal británico, asesorando al gobierno y representando los intereses de la Corona en asuntos legales.

Mientras qué, la Fiscalía General de los **Estados Unidos** que tiene sus orígenes en el modelo del Fiscal General Británico, fue creada durante la primera reunión del Congreso de ese país mediante la Ley Judicial de **1789** que organizó la administración del poder judicial del nuevo gobierno de la nación. Actualmente esta institución desempeña un papel crucial en el sistema legal y la aplicación de la ley en los Estados Unidos.

En España, la Fiscalía es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el poder judicial. Su función es la **defensa de la**

legalidad y promover **la acción de la justicia** en defensa de los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. Es el **Ministerio Fiscal** (o Ministerio Público).

Sus orígenes se remontan a siglos atrás. Antiguamente, se les conocía como los "Hombres del Rey" o "Procuradores Fiscales", quienes representaban los intereses y asuntos del monarca en los procesos judiciales. Con el tiempo, se transformaron en funcionarios que permitían un enjuiciamiento imparcial al distinguir entre las partes procesales y los jueces.

Sin embargo, sus cimientos **de órgano** como tal, no se establecieron hasta bien entrado el siglo XIX. En 1835, bajo la regencia de María Cristina, se promulgó el **Reglamento provisional para la Administración de Justicia**, que estructuró la Fiscalía con una organización sólida.

Con la instauración de la democracia en España y la promulgación de la Constitución de 1978, se dio comienzo a una nueva etapa del Ministerio Fiscal al reconocerse de un modo expreso al órgano en el artículo 124 del texto constitucional fundamental.

En la actualidad, la Fiscalía de España desempeña un papel crucial en la administración de justicia y la protección de los derechos y la legalidad.

Dicho esto:

*La Fiscalía en **la Constitución Napoleónica** tuvo un papel significativo en el sistema legal de la época. La Constitución del Año VIII, promulgada **en 1800** durante el gobierno de Napoleón Bonaparte, estableció un nuevo orden legal en Francia. Esta constitución fue diseñada a medida para el Primer Cónsul, Napoleón, y le otorgó poderes similares a los de un dictador.*

***La Constitución de 1808**, promulgada por José Bonaparte para el Reino de **España e Indias**, también siguió la influencia napoleónica. Fue una variante adaptada a los territorios directamente afectados por la ocupación francesa.*
Sistema Legal y la Fiscalía:

El sistema legal en la época napoleónica se basaba en una transacción entre el sistema inquisitivo y autoritario del "Ancien Régime" y el sistema acusatorio y liberal.

***El modelo francés** de proceso penal, que influyó en otros países continentales como España, se promulgó en 1808. Este sistema mantuvo elementos del método investigador inquisitivo, pero también incorporó principios acusatorios y derechos ciudadanos.*

Aquí, la Fiscalía desempeñaba un papel crucial en la instrucción de casos penales. Sin embargo, las libertades y derechos ciudadanos, junto con las reglas del "juicio justo", cuestionaron la eficacia de la fase sumarial y la autoridad del Juez de Instrucción.

En resumen, la Fiscalía en la Constitución Napoleónica estaba inmersa en un contexto de cambios legales y políticos, y su función se adaptó a las transformaciones de la época. Esta Constitución, sí que es verdad, le dio un rol

inquisitivo a los fiscales, el de acusar y defender la legalidad y una participación activa en la instrucción.

Por ello, muchos dicen que el sistema acusatorio garantista moderno se originó en Francia después de la Revolución francesa, porque es ahí donde aparece el ministerio fiscal como un órgano diferente al juez para acusar e impulsar la instrucción, pero no el hecho en sí de investigar. Es decir, **en Francia** donde apareció este sistema la policía es la que investigó e investiga, y la fiscalía es la que conduce la investigación en base a requerimientos a través del juez. Mientras que, la policía responde al cómo y al qué, con diligencias y pruebas que pone a disposición de la autoridad judicial competente para que el fiscal pueda acusar. **En Inglaterra** ocurre más o menos lo mismo, desde principios del siglo XIX (**1829**), la mítica policía de Londres Scotland Yard investiga y el fiscal acusa. Y **en Estados Unidos**, donde el sistema acusatorio es más notorio y su tradición está más arraigada, la policía es la que investiga en coordinación con la fiscalía.

Algunos dicen que **en América Latina** se nos ha colado un hibrido del sistema acusatorio que ha destruido la justicia, y que además de acusatorio es garantista y adversarial. Siendo acusatorio se apropia de la acción penal dejando indefensa a la víctima; siendo garantista protege al delincuente y genera más delincuencia e impunidad; siendo adversarial exige igualdad de armas poniendo a la víctima al mismo nivel que su verdugo. Es el mundo al revés. En otras palabras, la justicia está de cabeza y en descomposición porque se han pervertido sus bases, sus principios y su razón de ser como tal, el de hacer justicia.

Lo que ocurre con la justicia en el Perú, no tiene nada que ver con el sistema de justicia de EE.UU., inglés, francés o español. El problema para Latinoamérica se originó entorno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde ahí se ha ido monitoreando el nuevo sistema de justicia y luego lo ha expandido por los países del entorno, que les gusta copiar todo lo foráneo, plagios que no responden a la realidad e idiosincrasia de países como Perú; donde reina la viveza, la pillería y donde los políticos que gobiernan se sacaron de la chistera este entuerto, la justicia acusatoria, garantista y adversarial.

Que por cierto acusatoria ya lo era, porque esa fue siempre una de las funciones de los fiscales, pero adversarial y garantista también lo fue; ahí está el juicio oral como evidencia. Lo que no está bien, es convertir a la víctima en adversario de su victimario, y que sólo sea garantista para el delincuente; eso una perversión de la justicia. Por eso, delincuencia e impunidad están a la orden del día.

…

En Francia e Inglaterra el sistema judicial es acusatorio y la policía investiga, pero en el Perú el sistema le priva a la policía esa facultad a través del NCPP.

De nada sirve que la policía combata la delincuencia como reza el mandato constitucional, porque es como hacer la guerra por su cuenta y la fiscalía le tira piedras a la policía por ello, mientras que el Poder Judicial como institución es indiferente. Así, yendo cada uno por su lado debilitan el poder coercitivo del estado para combatir la criminalidad. Con esa debilidad y con el sistema

acusatorio en marcha vamos perdiendo la guerra contra el crimen, ya que, a falta de justicia impera la impunidad. Los delincuentes de a pie campan en las calles y los de cuello blanco van gobernando el país.

La lucha debe ser conjunta, la sociedad (la gente), el poder judicial (los jueces) y la policía, son los tres frentes en común para devolver a los peruanos la justicia que se les ha quitado; la justicia que el sistema judicial acusatorio le ha robado a la sociedad peruana en su conjunto.

La guerra contra el crimen organizado y la delincuencia común se gana si vamos unidos; el problema de la inseguridad como consecuencia de la criminalidad es un problema de todos. Por ello, sino se devuelve la acción penal a la víctima en la parte que le toca como víctima, si no se respeta el principio de legalidad y se devuelve a los jueces la persecución del delito reponiendo LA INSTRUCCIÓN al poder judicial, y si no se respeta la autonomía que la constitución le otorga a la policía en el Art. 166 y el art, 2, 24, f, muy mal seguiremos. Sin justicia ni orden, sin seguridad jurídica y sin tutela judicial efectiva, la legalidad como principio es papel mojado, letra muerta.

Hay que cambiar de raíz el problema. En solitario la lucha contra la delincuencia tal cual lo plantean en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es una lucha infructuosa.

…

La solución del problema en el caso peruano, para luchar contra el sistema judicial acusatorio, pasa porque los perjudicados por este sistema, la sociedad, el Poder Judicial y la Policía, defiendan conjuntamente lo que la Constitución les asigna y les atribuye, ya sean derechos, atribuciones, funciones, autonomía y su institucionalidad. Si van por separado haciendo la lucha cada uno por su lado todo será baldío. Por ello, no deberían ser indiferentes ante la vulneración de la Constitución, y más, si con ello se pervierte la justicia al extremo de que todo el sistema de justicia se cae a pedazos, está en descomposición.

COMENTARIO A LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL (NCPP)
(De fecha 21 Dic 2023)

Todo lo escrito hasta llegar a estas líneas fue realizado antes del pasado 21 de diciembre, es decir hasta antes de la última modificación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP); y, como esta modificación en el fondo no varía ni corrige en nada las vulneraciones constitucionales analizadas, a efectos de este estudio, mi postura tampoco cambia; es decir, el razonamiento sobre la cuestión en debate sigue siendo el mismo; por lo tanto, sin entrar al detalle ni adentrarme en los pormenores de la citada modificación, sólo me limitare a hacer una pequeña crítica sobre ello.

Si bien es cierto se han modificado ciertos artículos del NCPP, la vulneración constitucional persiste y la perversión del sistema de justicia también. Se agudiza el daño contra la sociedad y se sigue perjudicando el accionar funcional del Poder Judicial y de la Policía Nacional. Con lo cual, estos parches al NCPP, por el contrario, hacen crónico el problema ya que tienden a normalizar algo que es diametralmente opuesto al espíritu de la norma constitucional. Por lo tanto, me tomo la licencia de opinar y hacer crítica en ese sentido:

El Decreto Legislativo Nº 1605 (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21/12/2023), que modifica el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), es una cachetada contra la autonomía e intereses institucionales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Convalida descaradamente la vulneración de los Art. 2. 24. f) y el Art. 166 de la Constitución. Aceptarlo o alegrarse de ello es allanarse al atropello institucional, ya que esta norma somete funcional y operativamente a la PNP y a la investigación policial bajo el zapato (“arbitrio”) de los fiscales.

Si ya, hasta ahora los fiscales se servían y apoyaban a través de **Efficcop** (Equipo Especial PNP de apoyo a la Fiscalía) encuadrada dentro de la DIVIAC (policías que no dependen del Comandante General PNP), ahora dieron un paso más allá y se apoderan de la autonomía funcional de las unidades básicas como son las comisarías y también de las unidades especializadas de investigación, (DIRCOTE, DIRANDRO, DIRINCRI, etc, etc).

El caramelito envenenado que es este Decreto Legislativo pervierte aún más la finalidad fundamental constitucional de la Policía Nacional (PNP), de <u>prevenir, INVESTIGAR y combatir</u> la delincuencia (Art. 166), y contraviene la norma constitucional del Art. 2. 24, f) cuyo mandato es claro; que la policía debería poner a disposición a los detenidos y sus actuaciones de investigación policial directamente al juez. Eso dice la Constitución. Que no se cumple; esa ya es otra cuestión. Sólo en el 2do. Supuesto, de espionaje, terrorismo, y tráfico Ilícito de Drogas y delitos cometidos por organización criminal debe (ojo) informar al fiscal y al juez quien asume jurisdicción, es decir, que es a quién la policía debería dirigirse poniendo a disposición. Todo lo demás es un invento de los fiscales que haciendo uso de la facultad de iniciativa legislativa que tienen como Ministerio

Público le han puesto sobre la mesa al Ejecutivo que ha mordido el anzuelo, y como un corderito ha solicitado facultades legislativas al Congreso y se lo han aprobado; el resultado es un NCPP lleno de parches y contradicciones.

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en su conjunto es inconstitucional porque está plagado de artículos que contravienen y vulneran mandatos constitucionales esenciales relacionados con la justicia. Todo ello, obedece a la implantación del SISTEMA JUDICIAL ACUSATORIO, cuyos lineamientos son globalistas promovidos por los acólitos de ese sistema (los caviares). El resultado es nefasto para la justicia. Los únicos que se favorecen con todo ello son los delincuentes. Los fiscales con o sin modificaciones del NCPP, mientras no se cambie radicalmente el sistema de justicia, seguirán haciendo y deshaciendo con la justicia a su antojo, amparados por el sistema acusatorio que les da atribuciones y herramientas para ello, como el principio de oportunidad y otras más; por mucho que esta vez, en las modificaciones, se hayan preocupado de mencionar el principio de legalidad, cosa que en la práctica no es así, ya que el principio de oportunidad cierra todos los caminos a la tutela judicial efectiva.

Por otro lado: El Art. 166 de la Constitución, no dice “delito”. Dice que la Policía Nacional investiga LA DELINCUENCIA (hechos delictivos); que no es lo mismo. El delito es en fase jurisdiccional, y los hechos delictivos en fase NO JURISDICCIONAL. En otras palabras: A la Policía, la Constitución le da plena autonomía para ello (para el cumplimiento de lo encomendado) bajo las atribuciones del Art. 2. 24. f) cuyo mandato constitucional es muy claro. Un vínculo funcional de Policía -´Juzgado que el NCPP se lo ha cargado de un plumazo violando la Constitución. ¡Son ciegos o no quieren ver!.

Por su parte: El Art. 159. 4 (de la Constitución), cuando habla del delito se refiere a la FASE JURISDICCIONAL; pero los fiscales lo han tomado retorciendo el mandato constitucional, aprovechándose que dice “que conducirá desde el inicio la investigación del delito. Pero ese INICIO, constitucionalmente no se refiere a la etapa policial; se refiere a cuando se inicia el proceso penal (fase jurisdiccional); es decir, desde que el juez toma o asume jurisdicción.

Lo que ocurre, es que hay y está en juego “intereses superiores” … El problema o el quid de la cuestión se llama **Sistema Judicial Acusatorio**; el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es sólo el instrumento que han utilizado y los fiscales son la caballería de este sistema perverso que encarna en su ADN la antijusticia. Si no reaccionamos a tiempo, los acólitos de la nueva justicia nos quieren llevar a una etapa oscura donde la justicia sea una pantomima; pues el nuevo sistema lleva en sus entrañas la perversión de la justicia.

En tal sentido, el Sistema Judicial Acusatorio perjudica frontal y seriamente a la sociedad, a la justicia y a la policía. Salen ganando, la delincuencia y los fiscales. Al respecto, en este libro que lo escribí durante la pandemia, lo explico todo de una forma clara y contundente con un lenguaje no sofisticado para que todo el mundo pueda entenderlo; sólo tienen que leer bien la literalidad del mandato constitucional para que puedan ver qué hay tras el sistema judicial acusatorio; donde (repito) el Nuevo Código Procesal Penal **(NCPP)** es sólo el medio o la

herramienta a través de la cual hacen posible la aplicación de LA ANTIJUSTICIA, y dónde la caballería de ese PERVERSO sistema son los fiscales.

Publicadas las modificaciones al NCPP en el Diario Oficial El Peruano del 21Dic2023; **los fiscales fingen rasgarse las vestiduras** por ello, para hacer creer a los policías que este Decreto Legislativo es un gran logro para la Policía Nacional (PNP), ya que la policía por fin va a poder "investigar el delito" y van a poder "tipificar el delito". Lo cual es mentira, por eso lo pongo entre comillas. Eso y más se les escucha decir a los portavoces de la fiscalía en televisión. ¿Por qué la pataleta?. Porque así la policía no hace nada y el engaño se consumará, se asimilará, se dará por hecho consumado y la Policía con todas sus comisarías y Unidades de investigación pasarán "legalmente" bajo las órdenes de los fiscales.

Esa norma (las modificaciones) es un engaña muchachos; con "el informe que haga la Policía de su investigación" **del hecho delictivo,** los fiscales se limpiarán el trasero, por mucho que esta vez (en esa modificación) se hayan sacado de la manga para engañar a los incautos, poniendo en la literalidad del Decreto Legislativo "investigación policial (ojo) como parte de la carpeta fiscal, es decir, como parte de la "investigación preliminar", término que en su día se inventaron para hurtarle a la Policía lo que antes era el ATESTADO POLICIAL que encarnaba **la auténtica investigación policial**, que gozaba de AUTONOMÍA porque no había intermediarios (fiscales), es decir, cuando la policía ponía su investigación y su atestado directamente a disposición judicial.

La Constitución no ha cambiado. Lo que están haciendo con la justicia es inconstitucional. El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en su conjunto está plagado de artículos inconstitucionales; por lo tanto, es Inconstitucional. Y esta nueva modificación no es la excepción, es más de lo mismo. Inconstitucional en el fondo y en la forma.

En ese sentido, el Decreto Legislativo **Nº 1605** del 21 de Dic 2023 que modifica el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), además de su contenido, también es inconstitucional por una cuestión formal. La razón salta a la vista en sus motivaciones.

La Constitución en su **Art. 104 (*)** dice que las delegaciones legislativas deben ser sobre **materia especifica**. Es decir, tiene que ser una delegación precisa, tasada, que no se puede cambiar ni desvirtuar y mucho menos violar el mandato. En otras palabras, esta delegación que tiene carácter excepcional ya que no debería ser la regla, está concebida para facilitar la gobernabilidad, pero no para generar caos y desgobierno, y menos con la justicia; no pueden ni deben darnos gato por liebre. Lo normal, es que el Congreso debería ser el que legisle.

(*) Art. 104 "*El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.*
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo".

Pues en ese contexto es que el Congreso de la Republica dio la **Ley N° 31880** por la cual le otorgó facultativas al Ejecutivo para legislar sobre **seguridad ciudadana**, gestión de riesgos de desastres e infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia; en teoría supuestamente esa era la intención formal, tal y como establece **el objeto de la citada ley** que lo recoge en su Art 1 **(*)**.

(*) ***Art 1. Objeto de la Ley.*** *La presente ley tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de* ***seguridad ciudadana****, gestión del riesgo de desastres-Niño Global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia, por el plazo de noventa días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, en los términos a que hace referencia el* ***Art 104*** ***de la Constitución*** *Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República, y comprende las materias desarrolladas en el art 2.*

Habría que preguntarse: ¿Dónde está la trampa, dónde está el truco, dónde está el engaño?.

Pues bien; sabiendo que es El Ejecutivo el que pide las facultades legislativas, las mismas que están recogidas en el objeto de la **ley Nº 31880** en cuestión (Art. 1), no se entiende por qué propone cosa distinta para que se recoja en el Art. 2 de la citada ley. La respuesta es muy clara; a todas luces lo hicieron así para burlar y violar "**de una forma legal"** el mandato constitucional.

Por una parte, a la vista está, que modificar el Código Procesal Penal es **reformar el sistema de justicia,** por lo tanto, si esa era la intensión, en el objeto de esa ley tendrían que haberlo recogido. No lo hicieron porque el Poder Judicial se hubiese opuesto y tendría que haber habido debate parlamentario. Pero, sobre todo, no lo hicieron porque era la única forma de favorecer a los fiscales, y con ello, consolidar definitivamente el sistema judicial acusatorio, que como estamos viendo ha politizado la justicia al punto que es desde la ONG IDL Reporteros donde se manejan los hilos de los fiscales.

Pues para todo ello, no se solicitó facultades legislativas, no al menos como el reza el objeto de la ley citada.

Por otra parte; tampoco tiene sentido, que de forma encubierta reformaran las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, con un pretexto distinto al objeto de la ley; la seguridad ciudadana como materia de reforma, sólo fue el pretexto para meter mano a la policía y pervertir su funcionalidad y operatividad en materia de INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA, por mucho que hicieran hincapié que lo están haciendo con arreglo al Art. 104 de la Constitución, una mención que es una tomadura de pelo, por cuanto dicen una cosa y hacen la contraria. Ya que ni siquiera se ha tocado la Ley de Seguridad ciudadana ni la ley de municipalidades que si tienen algo que decir en esa materia.

Por lo tanto, El Ejecutivo se extralimita haciendo uso y abuso de las delegaciones legislativas que terminan en un sinfín de diversos Decretos Legislativos que burlan o violan el mandato constitucional, como es este caso.

Con esta delegación legislativa se modificó el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y la Ley de la Policía Nacional (PNP), ambas modificaciones

contraviniendo el espíritu de la norma suprema; con lo cual, se mire por donde se mire es inconstitucional, porque **El OBJETO** de la ley **Nº 31880** no contempla legislar sobre estas materias. Por lo tanto, al hacerlo (en la letra pequeña) de forma encubierta buscando un atajo normativo, se viola la Constitución al no ser MATERIA de delegación ni estar contenidas en el OBJETO DE LA LEY las modificaciones abordadas por el Decreto Legislativo **Nº 1605** del 21 de Dic 2023 (que modifica el NCPP y la Ley de la PNP).

Cualquier otra explicación está fuera de contexto legal, por lo tanto, no dejan de ser argumentos torticeros, mentirosos y cuasi mafiosos para consolidar el engaño y la violación constitucional que viene como arrastre adicional a lo hasta ahora ya analizado en este estudio.

Para que se entienda. Esto es como si a un abogado le otorgan un poder para pleitos, es decir, que EL OBJETO de las facultades otorgadas es para litigar en nombre de quien otorga esas facultades, y el abogado cambia la **finalidad u objeto** del poder, metiendo en la literalidad (en la letra pequeña) de forma encubierta que puede sacar dinero del banco de quien sólo dio autorización para pleitear en su nombre.

Así es, como entre otras cosas, descaradamente pretenden engañarnos ya que en el **literal a)** **(*)** del inciso 2.1.3 *(Lucha contra la delincuencia y crimen organizado)* del numeral 2.1 *(en materias de seguridad ciudadana)* del **Artículo 2** *(materias de la delegación de facultades legislativas)* de la **Ley N° 31880**, nos dicen:

(*) ***a)*** *Modificar el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, salvaguardando las atribuciones que la Constitución Política del Perú otorga a cada institución de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 159, numeral 4, y 166;".*

Al respecto, en primer lugar, debo decir con rotundidad que la finalidad fundamental que la Constitución en su **Art. 166** confiere a la Policía en ningún momento la supedita al Ministerio Público. Por lo tanto, las ocurrencias del **literal a)** antes citado es un pretexto encubierto para tomar por asalto las unidades de investigación de la policía a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y ponerlas bajo control y supervisión de la fiscalía, extremo que la Constitución no contempla. Y si la Constitución no lo establece ni contempla, no cabe burlarla, sería una perversión legal. En ese sentido, la Policía en LA INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA (Art. 166) tiene autonomía plena funcional y operativa otorgada por la Constitución.

Por lo tanto, justificar en el 3er considerando del preámbulo (del Decreto Legislativo **Nº 1605** del 21 Dic 2023) la modificación del NCPP so pretexto:
"Que, el decreto legislativo tiene por finalidad modificar algunos artículos del NCPP promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957 publicado el 29 jul 2004; para permitir que la Policía Nacional en función de investigación, pueda realizar actos de investigación por propia iniciativa bajo la conducción jurídica del Fiscal, permitiendo el trabajo articulado y dinámico entre el ***Fiscal y la Policía****, respetando el ámbito funcional de cada uno de ellos, para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y el*

crimen organizado;", es un camelo, una burda mentira, ya que la lucha contra la criminalidad y la seguridad ciudadana no son competencia del Ministerio Público más allá de que son los garantes de la legalidad. Al menos, constitucionalmente es así, otra cosa es, que los gobiernos de turno se dediquen a dar Decretos Legislativos por intereses políticos sin importarles si violan o no la Constitución.

En este caso en particular, el Ejecutivo se extralimita en las facultades de la delegación legislativa, es decir, se sale de la supuesta intencionalidad de la solicitud hecha al Congreso, y por lo tanto, de lo autorizado, ya que modifica por un lado el Código Procesal penal y por otro lado modifica la Ley de la Policía Nacional so pretexto de regular MATERIAS de seguridad ciudadana. Es decir que el Ejecutivo ha hecho todo lo contrario de lo que establece la Constitución respecto al objeto de la solicitud y delegación legislativa que tiene que ser expreso y tasado.

Lo que ocurre, es que en el país reina la viveza y el querer sacarle la vuelta a la legalidad, y entre los que gobiernan y ostentan el poder aún más; le sacan la vuelta a la ley y ni se sonrojan, en este caso a la Constitución.

Si el Ejecutivo hubiese pedido al Congreso facultades concretas para los puntos que han recogido en la cuestionada modificación del NCPP, igual no se la daba el Congreso; por ello, pidieron facultades para legislar una cosa (seguridad ciudadana) e hicieron o legislaron otra cosa. De esta manera le sacaron la vuelta al marco constitucional vulnerando una vez más de forma reiterada la Constitución.

La delegación legislativa por mandato constitucional debería ser para materia específica, es decir, expresa e indubitada; sin embargo, el Ejecutivo con el Decreto Legislativo Nº 1605 **(*)** de forma encubierta legisló otras materias, lejos de la MATERIA y el OBJETO previsto. Y ante ello, los garantes de la legalidad (los fiscales), como todo lo normado les favorece, ya que les otorga más atribuciones y más poder, se hacen de la vista gorda y se avienen a aplicar ese Decreto Legislativo y todo el NCPP ya aprobado a sabiendas que es una norma inconstitucional.

(*) ***DECRETO LEGISLATIVO Nº 1605***
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante la Ley N° 31880, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres - Niño Global, Infraestructura Social, Calidad de Proyectos y Meritocracia, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otros, en materia de seguridad ciudadana, por el plazo de noventa (90) días calendario;

Que, el literal a) del inciso 2.1.3 del numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 31880, dispone que el Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia de seguridad ciudadana para modificar el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, salvaguardando las atribuciones que la Constitución Política del Perú otorga a cada institución de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 159, numeral 4, y 166;

Que, el presente decreto legislativo tiene por finalidad modificar algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957 publicado el 29 de julio de 2004; para mejorar su aplicación, optimizando el marco legal que regula la investigación del delito, para permitir que la Policía Nacional en función de investigación, pueda realizar actos de investigación por propia iniciativa bajo la conducción jurídica del Fiscal, permitiendo el trabajo articulado y dinámico entre el Fiscal y la Policía, respetando el ámbito funcional de cada uno de ellos, para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado;

Que, en virtud a la excepción establecida en el numeral 18) del inciso 28.1 del artículo 28 del Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado mediante Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, no corresponde que se realice el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, debido a que las disposiciones contenidas no establecen, incorporan o modifican reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o exigencias que generen o impliquen variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos; sino modificatorias al Nuevo Código Procesal Penal; asimismo, en la medida que el presente Decreto Legislativo no desarrolla procedimientos administrativos bajo el alcance del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), no se requiere realizar el ACR Ex Ante previo a su aprobación;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, y en ejercicio de las facultades delegadas en el literal a) del inciso 2.1.3 del numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 31880;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

OBJECIONES FINALES AL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

Voy a partir diciendo que para este estudio lo único que interesa es la verdad constitucional y por otro lado, desvelar o denunciar el contenido inconstitucional que hay en los artículos del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP); es decir, demostrar si este código es inconstitucional o no lo es, y como al parecer lo es a la vista de las evidencias tan claras que expongo; como no puede ser de otra manera, en mi condición de jurista me veo en la obligación de mostrar con argumentos las vulneraciones que el NCPP alberga y promueve contra muchos mandatos constitucionales. Por ello, es importante visibilizar las consecuencias que acarrean estas infracciones, para que se conozcan y así despertar conciencia social y jurídica en los afectados y en la gente en general. De lo contrario, como viene sucediendo la ciudadanía estará recibiendo como justicia gato por liebre. Como ocurre con la acción penal y el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima.

Lo cierto es que en una democracia plena, el uso de los derechos y libertades de todos y cada uno, como es el ejercicio del derecho al arbitrio judicial y otros derechos ya citados, se debió someter a consulta y dejar que los ciudadanos decidan por sí mismos si sus denuncias deben o no tener una respuesta judicial;

eso, si tenemos en cuenta que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental; hacer lo contrario, incluyendo el privarle a las personas ejercer ***per se*** la acción penal, es un atentado contra la víctima, es dejarla sin acceso real, inmediato y efectivo a su derecho al auxilio judicial.

Por lo tanto, no se debe dejar en manos de un tercero que no sea un juez (un fiscal), decidir si una denuncia merece llegar o no a sede judicial. La respuesta a una denuncia debería ser ineludiblemente **el auto de procesamiento** o el auto de no a lugar, archivo o sobreseimiento, pero por vía judicial. Eso es lo que manda y prevé la Constitución, que no priva ni restringe ese derecho a la víctima. Un derecho que ningún fiscal debería interrumpir y mucho menos vulnerarlo. El albedrío del fiscal en casos penales respecto a la acción penal, sobre todo en fase no jurisdiccional, es una atribución arbitraria y desmedida que se traduce entre otras cosas en una medida limitativa del derecho de la víctima, y eso, sólo un juez debería decidirlo y hacerlo con arreglo a ley.

…

Todo ello, nos lleva a la conclusión que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) recoge muchas vulneraciones y desacatos a la Constitución, lo cual, podría acarrear que las personas e instituciones hagan lo mismo. Así, por ejemplo, la Policía en cumplimiento irrestricto del Art. 2. 24, f) de la Constitución, podría plantarse cada día en la puerta de los juzgados llevando a los detenidos en flagrancia; porque así lo ordena la Constitución.

Pero el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) desarbola este mandato constitucional eliminando los Juzgados de Instrucción, y por consiguiente desaparecen los juzgados de guardia y la carceleta judicial; todo ello, para favorecer la implantación del sistema judicial acusatorio, y facilitar la tarea que este Código encomienda a los fiscales, aunque todo ello sea contrario al mandato constitucional.

Si eso no lo quieren ver como UN DESACATO O UNA TRANSGRESIÓN A LA CONSTITUCIÓN, entonces el Estado de Derecho en el Perú esta bizco o tuerto, ya que tiene una visión distorsionada o simplemente no quieren ver el verdadero contenido y marco constitucional. Un orden constitucional que no se cumple es simplemente antidemocrático e ilegal.

…

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) distorsiona el sistema de justicia. Entre otras cosas, los fiscales utilizan la prisión provisional para lograr sus objetivos relacionados a la investigación, medida que «se ha acabado convirtiendo en un instrumento en manos del fiscal para conseguir elementos de convicción (pruebas) que de otra manera no podría obtener», por otro lado, el monopolio del ejercicio de la acción penal y del principio de oportunidad por parte de la fiscalía nos lleva a la conclusión que «la búsqueda de la verdad material al estar politizado el sistema pueda verse perjudicada por la falta de independencia del director de la investigación». En otras palabras, la justicia se ve perjudicada igual que la víctima por falta de independencia del investigador y por una instrumentalización del sistema.

Lo mismo ocurre con la detención preventiva que los fiscales promueven y administran; la utilizan para prácticamente para presionar u obligar a que algún detenido asustado se incrimine o incrimine a otros por temor a perder su libertad, es decir, un chantaje en toda regla.

A los políticos les interesa la perversión del sistema politizando la justicia, así se aprovechan de las grietas y debilidades del sistema para subirse al carro de la corrupción sabiendo que no les pasará nada, que a mano en la misma ley tienen asegurada la impunidad para eludir la acción de la justicia, todo gracias al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Por eso, hay muchos políticos y gobernantes investigados por la fiscalía, pero sentenciados ninguno, salvo una excepción, Fujimori. Pero ese caso es harina de otro costal ya que ahí, más que justicia primó una dosis muy alta de sesgo político y de venganza.

De qué vale que las personas, especialmente los políticos, se encuentren como investigados numerosas veces si todas las investigaciones por parte de fiscalía al final concluyen que no hay lugar a presentar denuncia, e incluso más adelante con los hechos judicializados, si el fiscal en la etapa de investigación preparatoria concluye que no hay elementos probatorios (pruebas) suficientes para una acusación se libran de todo sin más. En otras palabras, el autor material de los hechos muchas veces ni siquiera llega a ser procesado, otras veces, los imputados no son acusados y en la mayoría de casos no son sentenciados porque en la lucha de igualdad de armas entre las partes (víctima y victimario) que propugna el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), si el fiscal no es diligente, hace un mal planteamiento o defiende mal su teoría del caso, el delincuente sale libre de polvo y paja siendo muchas veces culpable.

Esas son en definitiva algunas consecuencias de que la investigación y la persecución del delito esté en manos de los fiscales, quienes desde que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) los encumbrara como los adalides de la nueva justicia se sienten omnipotentes y todo poderosos al ser dueños de la acción penal y, amos y señores del principio de oportunidad, quienes además, se han adueñado de la Investigación policial e investigación jurisdiccional (antiguamente investigación judicial), ambas atribuciones funcionales actualmente controladas y en poder de los fiscales.

Si miramos la Constitución, esto no es normal ni constitucional, lo cual es preocupante ya que nuestro ordenamiento jurídico constitucional dice una cosa y el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) dice otra cosa, lo cual genera **inseguridad jurídica**. A río revuelto ganancia de pescadores, ya que así se aviva y acrecienta la criminalidad. En ese contexto, es fundamental el trabajo de la policía, especialmente la prevención, investigación y la represión contra la delincuencia; labor muy necesaria e importante para la convivencia; por ello, la política criminal de nuestro país debería primar este cometido de la policía en la ley, dotándola de firmeza, fortaleza y seguridad jurídica; fortaleciendo su autonomía y el principio de autoridad, tal y como establece la Constitución en su Art. 166 como finalidad fundamental de la Policía Nacional.

La seguridad jurídica es un valor supremo del ordenamiento jurídico, nos garantiza paz social y una convivencia ordenada. Por eso, cuando los fiscales desoyen los mandatos de la constitución, la que sale perdiendo es la justicia. En ese sentido, si los principios constitucionales son los que rigen nuestro ordenamiento jurídico, es fundamental entender que el respeto a la Constitución como pilar que sostiene nuestro estado de derecho es innegociable, de ninguna manera se puede aceptar que un Decreto Legislativo como el que encarna el Nuevo Código Procesal Penal la vulnere.

Debo señalar que en la batalla para imponer un nuevo modelo de justicia en el Perú a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), los acólitos del sistema judicial acusatorio han pervertido la dialéctica jurídica tratando de crear doctrina a su medida, para ello; por un lado, han pervertido los términos y conceptos jurídicos adaptándolos al sistema acusatorio; y por otro lado, han adoctrinado a tutilimundi, profesores, juristas, académicos y a los operadores de justicia (incluido abogados y policías) a través de cursos, charlas, seminarios, etc, etc, en las instituciones, universidades y en diversos centros de estudios para que cambien los hábitos, costumbres y la práctica jurídica hasta no dejar rastro de la antigua justicia. Eso, sin importarles que al final la justicia ya no parece justicia.

UNA CONTRAREFORMA SE HACE NECESARIA DEROGAR EL SITEMA ACUSATORIO Y VOLVER AL SITEMA TRADICIONAL

Es evidente que en el Perú el sistema judicial acusatorio no funciona; como tampoco funciona en los demás países de Latinoamérica, por lo que, en México, Argentina, Chile, entre otros, han surgido voces discordantes que plantean una contrarreforma, es decir, volver al sistema tradicional de justicia, el antiguo, el de toda la vida, o en su defecto, reformar drásticamente el que hay a semejanza del modelo español.

Actualmente las fiscalías están colapsadas de asuntos (o casos) pendientes de investigación, se acumulan las carpetas fiscales y a consecuencia de ello, no hay forma que se esclarecen los delitos; por lo tanto, la mayoría de los casos investigados ni siquiera llegan a juicio. Todo ello, por las deficiencias del sistema acusatorio, litigación teatralizada, el circo mediático y politización de los casos, acusaciones endebles y mal planteadas, tutelas tiradas de los cabellos que dan pie a la impunidad y una teoría del caso que huye de la verdad y busca circo.

A ello, se suma que recae en las víctimas la carga de la prueba para enjuiciar a los delincuentes; por lo que, la víctima se ve forzada a aceptar un acuerdo reparatorio cuando se trata de delitos en los que no procede prisión preventiva oficiosa.

Algunos países que implantaron el sistema acusatorio se están dando cuenta del daño social que causa el incremento de la delincuencia, por lo que están dando

marcha atrás y han iniciado campañas de “contrarreforma”. El no enviar a prisión a los delincuentes y liberar a los que hay en las cárceles, no es una solución saludable para la convivencia, tampoco lo es, la reducción de delitos con prisión preventiva oficiosa, pero si son, causa del aumento de la delincuencia.

En el Perú, es evidente que la presunción de inocencia mal entendida y articulada con los estándares del Nuevo Código Procesal Penal, no sólo obstaculizan las labores de la justicia, sino que propician una mayor inseguridad en la sociedad, por ello, es necesario una “contrarreforma”, y con ella, la derogación total del NCPP.

La verdad sea dicha, “mano dura” es la única alternativa que queda frente a la inseguridad, el crimen y la delincuencia generalizada que intimida a una sociedad donde la pérdida de valores es una constante. Es vital un Estado fuerte que imponga el cumplimiento de la ley. Por ello, se debe corregir todo lo que en la lógica del sistema acusatorio cronifica el crimen, fortaleciendo la prisión preventiva oficiosa, la detención policial señalada por ley y el principio de autoridad.

La corrupción es el mayor problema a vencer para la justicia, pero con el sistema judicial acusatorio es imposible, ya que se revela endeble e inútil con tanta mano blanda y tantas facilidades que brinda al delincuente para que pueda eludir la acción de la justicia. La corrupción está emparentada con el delito, siendo una constante ver operadores involucrados: Fiscales que no ejercen la acción penal o no acusan, que “dejan libres a peligrosos delincuentes”. Jueces maniatados por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) e incapaces de mirar por sí con ojos de justicia.

Los vicios achacados al viejo sistema de justicia, con el Nuevo Código Procesal Penal y el surgimiento de los fiscales y su nuevo rol, han desdibujado la importancia de los jueces. No ver lo ineficaz que resulta el sistema acusatorio nos aleja de la realidad y la solución.

Los defensores del sistema acusatorio, en una especie de narcicismo colectivo, creen ser los buenos, los adalides de la justicia, los que defienden los derechos humanos, la presunción de inocencia del delincuente y exigen un cambio institucional profundo para el éxito de ese sistema procesal. Los del viejo sistema que abogan por la eficacia del Estado para encarcelar a los delincuentes, abogan por mano dura y una política criminal fuerte para frenar la delincuencia.

Quizá ni unos ni otros tienen la razón, ni siquiera la certeza y falibilidad de las “balas de plata”; lo cierto es que, mientras menos delincuencia haya en las calles y la justicia esté al servicio de la sociedad, será mejor para lograr un país organizado, ordenado, pacífico y contrario a la criminalidad y a la injusticia.

La única certeza que tenemos es que con el sistema judicial antiguo, la justicia atada al principio de legalidad era un hecho palpable; con él como bandera hemos convivido y sobrevivido al tiempo, a salvo con una justicia digna y con nuestra historia. Por ello, no creemos que hoy la delincuencia deba

condicionarnos para favorecerla, ni renunciar al orden por el caos. El sistema acusatorio sólo ha incrementado la criminalidad, la corrupción y la impunidad.

No queremos un país donde la impunidad es ley… El Perú no puede estar aletargado sin que nadie diga nada… Es hora de echar fuera al sistema judicial acusatorio derogando el Nuevo Código Procesal Penal…

El sistema acusatorio es una especie de *McDonalización* de la justicia al importar instituciones extrañas, cuyo efecto es tóxico, porque su funcionamiento es transgresor, perturbador y difícil de aplicar para bien en el ordenamiento jurídico del país. Conlleva perversión social, es contrario y ajeno a la víctima, ocasiona deterioro en instituciones con arraigo como la judicatura y la policía, perjudica la convivencia y va en detrimento de la sociedad.

ANALISIS Y APORTES

1.- El sistema de justicia es el que está mal en el Perú, es el que hay que cambiar de raíz y de forma radical.

-Habrá que hacer cambios a nivel práctico y a nivel normativo, y ello sólo es posible con el cambio del modelo de justicia que tenemos, es decir, hay que hacer una derogación total del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), para volver al modelo tradicional donde el principio de legalidad sea el pilar sobre el cual la justicia se sustente y encuentre su soporte.

-Que los fiscales vuelvan a su parcela de defensores de la legalidad y de acusación fiscal en fase jurisdiccional, donde además ejerzan su responsabilidad de vigilar e impulsar el proceso judicial, promoviendo en esta etapa la investigación del delito bajo la dirección o titularidad del juez de instrucción.

-Que la investigación y persecución del delito en fase jurisdiccional vuelva al poder judicial, a los jueces de instrucción.

-Que le devuelvan a la policía la autonomía funcional que manda y prevé la Constitución en cuanto a la investigación policial del Art. 166 y el Art. 2. 24, f).

2.- Actualmente la lentitud del proceso por una excesiva duración de la etapa de investigación, es algo que trasciende al devenir del proceso mismo. Esta circunstancia debe valorarse en términos de efectividad, pues de su eficacia depende la tutela de los derechos e intereses de la víctima. De lo contrario, además del agravio inicial de no considerarla víctima, se produce la paradoja de resultar perjudicada por un sistema de justicia garantista creado para proteger al delincuente y no a la víctima.

3.- Permitir siga vigente el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) cuyo articulado viola y mucho el mandato constitucional, es dejar que sus perversiones ganen tiempo a ser asimiladas y normalizadas. Lo cual no es bueno, porque luego sus acólitos querrán incorporarlas a la Constitución o hacer una nueva a medida para blanquear las transgresiones que nadie ve. Cuando debió ser al revés, primero modificar la Constitución y luego hacer el NCPP. Pero no lo hicieron. Estamos

viviendo una etapa negra para la justicia sometida vía transgresión constitucional.

4.- En foros, charlas y cursos escucharan decir a los acólitos del sistema acusatorio: el legislador ‘dice’ o ‘quiso decir’. Pues no se dejen sorprender, no hubo legisladores para hacer el NCPP; cuando dicen eso, se refieren a los cuatro progres que se reunieron con nocturnidad para plagiar de un lado y otro. Los legisladores están en el Congreso de la República, y como se ve no es el caso. A saber, en qué pocilga urdieron y maduraron este entuerto que pervierte y perturba la convivencia de los peruanos.

5.- Es un hecho que la reforma procesal del NCPP no está funcionando. Las ocurrencias normativas del modelo acusatorio son causantes del incremento de la actividad delictiva en el país. Los riesgos de legislar a base de plagios y mentiras trae consecuencias que no se corrigen con una mera modificación del Código en cuestión, sino con su derogación total. Las fallas de dicho sistema no se resuelven con pequeños cambios procesales para disminuir sus estragos o subir las expectativas.

6.- El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) exige que la Policía lleve a cabo las tareas de investigación bajo las órdenes del Ministerio Público; un disloque funcional que ha originado fractura entre las dos instituciones. La falta de confianza en la policía y las malas condiciones en que los policías realizan su trabajo y otros problemas adicionales lo hacen incompatible con el sistema acusatorio.

7.- Hay quienes sugieren que la solución es un sistema procesal acusatorio mixto, como lo hay en España, donde el juez es el protagonista y no el fiscal. Lo que indica que el sistema antiguo no era malo y la etiqueta mal oliente de inquisitivo que le pusieron gratuitamente fue injusto. Con el sistema acusatorio que nos impone el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), los fiscales son más inquisidores que el extinto juez de instrucción; con lo cual, se constata que el inquisidor sólo ha cambiado de mano.

8.- La aprobación del Nuevo Código Procesal Penal en el Perú se realizó en un escenario marcado por la improvisación ante la falta de reforma constitucional que definiera el soporte normativo y viabilizara la adecuación de las instituciones implicadas para la implantación de un sistema judicial tan extraño y ajeno a nuestra realidad como es el acusatorio.

9.- La política criminal en torno al sistema acusatorio carece de lineamientos coherentes que permitan resolver con eficacia al fenómeno delictivo, ya que éste, elude la lucha frontal contra la delincuencia; por el contrario, lo incentiva al tolerarla y hacerle concesiones, tanto, que se incrementa. La introducción de mecanismos alternativos de solución de conflictos en lo penal es un parche que cronifica el fenómeno delictivo.

10.- Con la nueva justicia, la falta de coordinación interinstitucional es evidente. El NCPP rompe toda posibilidad de empatía entre los operadores de justicia implicados; se impone los lineamientos del sistema acusatorio. Es decir, las

políticas públicas con visión integradora es nula. Es lógico, porque a unas les quita atribuciones (Poder Judicial y Policía) y a otra (la fiscalía) la sobredimensiona saturándola inadecuadamente.

11.- El problema del sistema acusatorio es que el Ministerio Público y sus fiscales no son policía, y por lo tanto, operativamente no saben investigar delitos. La falta de las capacidades de investigación criminal por parte de los fiscales condena al sistema acusatorio al fracaso. Por ello, la acumulación de casos en las fiscalías ha saturado el sistema. Como dirían antiguamente, zapatero a tus zapatos.

12.- La disyuntiva insalvable del sistema acusatorio es: Dejar de combatir la delincuencia para primar los derechos fundamentales (derechos humanos) de los delincuentes; o priorizar la perspectiva de seguridad pública con una política de mano dura y la aplicación de la ley con todas sus consecuencias en aras de una mejor convivencia y una efectiva administración de la justicia.

Me temo y a la vista está, que el sistema acusatorio se inclina por la primera opción, es por ello, que el Perú se ha convertido en un país sin ley, donde el crimen está a la orden del día.

13.- El sistema acusatorio, le quita al juez la capacidad de perseguir los delitos de oficio ante la constatación o toma de conocimiento de los mismos, ya sea por denuncia recibida directamente o a través de los medios de comunicación u otro medio, vía o circunstancia.

14.- El sistema acusatorio le quita al juez la capacidad de impulsar el proceso penal de oficio negándole la facultad de permitir o dar la oportunidad a las partes personadas su propia calificación de los hechos; al menos, hasta el final de la instrucción.

15.- La figura decimonónica del Juez de Instrucción que tenía la capacidad de impulsar el proceso de oficio y que le permitía en todos los casos imponer requerimiento a las partes personadas para su propia valoración y tipificación de los hechos; al menos, hasta el final de la instrucción.

16.- El sistema judicial acusatorio hace desaparecer la policía judicial, como ese vínculo directo entre el juez y la policía.
-El sistema acusatorio, se carga al Juez Instructor
-El sistema judicial acusatorio se carga el auto de procesamiento o auto apertorio de instrucción.
-Con el sistema judicial acusatorio: Desparece el atestado. Desaparece la víctima. Desaparece la acusación particular; y muchas más cosas que han dejado huérfana a la justicia.

17.- La fiscalía como garante de la legalidad tendría que **adoptar una función de tutela** y desempeñar con arreglo al principio de legalidad el ejercicio de la acusación; pero no es así, prefieren el **principio de oportunidad** que la Constitución no contempla. El principio de legalidad está presente y es patente en nuestra Constitución como pilar de nuestro ordenamiento jurídico, Así tenemos por ejemplo el Art. 74 y otros.

18.- Los fiscales al aceptar y aplicar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) incumplen su rol constitucional de garantes de la legalidad. Deberían ser los primeros en vigilar que se cumpla lo que estipula la constitución. No hacerlo es ponerse al margen de la legalidad constitucional.

19.- El sistema acusatorio limita radicalmente las facultades de los jueces, la situación de enconamiento político aviva la politización de la justicia y aparecen los sesgos, que se oponen seguir encomendando la investigación del delito al juez de instrucción. De hecho, hace tiempo los países de nuestro entorno, por intereses políticos limitaron radicalmente sus facultades al punto de ser inexistentes.

20.- Se ha pervertido a la justicia. El actual reparto de roles ha destruido la justicia en el Perú. No sólo nos afecta como país, sino que afecta a la ciudadanía, y lógicamente al Poder Judicial y a la Policía que se encargan de garantizarnos un país sin criminales ni delincuencia, compatible con los fundamentos constitucionales que deberían regir nuestro ordenamiento jurídico, especialmente con el principio de legalidad que consagra la Constitución.

21.- Las reformas legales progresistas del NCPP han sido promovidas por gente a la que la justicia le importa muy poco, que no luchan por la igualdad ante la ley ni el imperio la legalidad. No les importa una justicia de verdad; son una suerte de corriente maquiavélica que ha pervertido el imperio de la ley; sus intereses pasan por dominar y someter al poder judicial. En otras palabras, son una amenaza contra la independencia judicial y la defensa de un sistema legal justo.

22.- En cuanto a la seguridad jurídica, es absolutamente necesario que no se legisle a la ligera a golpe del interés político de turno ni de la voracidad del interés mediático.

23.- Que no se abuse del Decreto Legislativo, tal y como viene sucediendo. Un Gobierno-legislador no puede ser arbitrario ni estar al servicio de intereses sesgados, ni convertirse en una suerte de vía rápida para eludir el cauce legislativo ordinario y con ello eludir la acción de la justicia. Eso es una disfunción y una perversión del sistema.

24.- Hay que construir un futuro donde el estado de derecho, el imperio de la ley y la seguridad jurídica sean principios inquebrantables.

¿CÚAL ES LA SOLUCIÓN?

- La solución pasa por un cambio radical de la justicia en el Perú. Es decir, erradicar el sistema judicial acusatorio y volver al sistema judicial tradicional donde el principio de legalidad sea el pilar fundamental y no el principio de oportunidad. Para ello, hay que derogar por completo el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

Y con ello:

- Devolverle a la víctima su estatus como tal, el de víctima propiamente dicha que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) le ha despojado, dejándola como un mero actor civil.

- Devolver a las personas la acción penal, de tal forma que, cada individuo pueda ejercer en su propio nombre la acción penal, independientemente de lo que haga o deje de hacer el fiscal como acusación fiscal, con lo cual, la víctima iría a juicio con dos balas en la recamará, el de la acusación particular y el de la acusación fiscal. Dejando la puerta abierta incluso si es el caso a una tercera, a la acusación popular.

- Devolver a las personas el derecho a la tutela judicial efectiva, y con ello, el auxilio judicial y el arbitrio judicial, todo ello, como individuo sujeto de derecho.

- Devolver al Poder Judicial la dignidad de administrar justicia basada en el principio de legalidad tal y como manda la Constitución.

- Deben volver los juzgados de Instrucción con plenos poderes para investigar y perseguir el delito.

- Deben volver los jueces de instrucción con amplias facultades discrecionales para que previo el auto de procesamiento puedan ejercer la persecución del delito basada en el principio de legalidad. Con ello, devolverle dignidad a la judicatura.

- Devolverle el valor de prueba plena a lo practicado (confesiones, pericias y testimonios indubitados de testigos presenciales) y ratificado en sede judicial.

- Debe volver la investigación policial llevada a cabo por la policía con plena autonomía funcional; en cumplimiento a lo que estipula la Constitución (Art.166).

- Debe volver el atestado policial como elemento y soporte de la investigación que realiza la policía poniendo directamente a disposición judicial; tal y como recoge y ordena el Art. 2, 24, f) de la Constitución.

- La Policía Judicial debería volver con funciones y atribuciones sujetas sólo al mandato judicial, al ser pieza fundamental para que el juez competente ejecute sus mandatos a través de la policía.

La solución es: LA CONTRAREFORMA

- El Perú debe **eliminar el Sistema Judicial Acusatorio Garantista Adversarial**; es decir, revertir el tipo de justicia que tenemos actualmente. Hay que volver a la justicia tradicional, donde impere el principio de legalidad y no el principio de oportunidad.

- **Derogar el Nuevo Código Procesal Penal** y volver al cause normativo del Código de Procedimientos Penales anterior, actualizándolo para restablecer el principio de autoridad y la seguridad jurídica para garantizar la convivencia social.

Se puede llevar a cabo a través de tres vías o causes legales constitucionalmente establecidos:

1.- Por vía de un Decreto Legislativo *(Art. 104 de la Constitución). Se precisa para ello que el legislativo le otorgue facultades legislativas al ejecutivo. Tal y como se hizo para poner en marcha el sistema judicial acusatorio a través del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).*

2.- Por vía de una Ley *que salga directamente del Congreso de la Republica que derogue el Nuevo Código Procesal Penal y nos retrotraiga al Código de Procedimientos Penales anterior, con una justicia que tenga encaje constitucional.*

3.- También por vía de iniciativa legislativa*. Una Ley presentada por los sujetos legitimados constitucionalmente (Art. 107) y aprobada por el Congreso.*

4.- Por vía de Recurso de Inconstitucionalidad *presentado por los diversos sujetos legitimados para interponer la demanda (Art. 203 de la CPE), para que sea el Tribunal Constitucional en base al Art. 200 inc. 4 de la CPE, como intérprete de la constitución el que ordene la derogación del NCPP (y su sistema acusatorio) por inconstitucional y nos devuelva la justicia que teníamos prevista en la Constitución.*

Esta última opción debería haber sido la primera, pero la puse última porque, los acólitos de la nueva justicia, tomaron todas las precauciones para blindarse. Y lo hicieron a través del Código Procesal Constitucional, el cual dice, que sólo hay seis años para presentar Recurso de Inconstitucionalidad según su **Art. 99 (*).**

Ojo: El delito de lesa humanidad no prescribe nunca, pero violar la Constitución sí a los 6 años. Como se ve, es una perversión más del sistema. Significa que una ley menor puede violar la Constitución, y si no hay voluntad política de enmendarla, o nadie habilitado para ello lo advierte ni presenta recurso de anticonstitucionalidad, nos deja condenados a vivir en un marco legal inconstitucional. Como es el que vivimos actualmente. Pero, nos queda las otras opciones para revertirlo todo.

(*) ***Art. 99*** *(del CPC).* ***Plazo prescriptorio****.*

La demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de seis años contados a partir del día siguiente de su publicación, salvo el caso de los tratados en que el plazo es de seis meses. Vencidos los plazos indicados, prescribe la pretensión, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 y por el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución.

El artículo citado y otros del Código Procesal Constitucional también deberían ser revisados y revocados por cuanto le sigue el juego a la antijusticia, ya que por deseo de los acólitos se ha convertido en un tribunal de instancia con autonomía, es prácticamente una 4ta. Instancia, lo cual atenta contra la autonomía del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional sólo debería abocarse a asuntos violatorios de la Constitución y dejar lo demás al Poder Judicial. Lo contrario es debilitar el sistema de justicia.

RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS

Recomendaciones de gran calado:

- Renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denunciar el Pacto de San José, salirse del tratado de Costa Rica.

-Denunciar el Tratado de Roma o "El Estatuto de Roma". Es el tratado que creó la Corte Penal Internacional en 1998. No permitir que el sesgo político progre imponga su dictadura ideológica con los delitos de lesa humanidad porque a fin de cuentas ya sabemos contra quienes va dirigido.

- Restablecer la autoridad judicial; devolviéndole a la judicatura solvencia y autoridad para poder administrar justicia de forma eficaz y sin condicionantes.

- Restablecer la autoridad de la policía; que implique normas contundentes e idóneas, personal y logística necesaria, traducida en recursos y medios suficientes para una eficaz lucha contra la criminalidad.

- Incorporar al Código penal la nueva realidad criminal con nuevos delitos y endurecer las penas, pero siempre dirigido a combatir la criminalidad y la delincuencia.

Recomendaciones menor calado e interno.

- Que en cada distrito rural haya por lo menos un juzgado lego o letrado para que la justicia llegue a todos los rincones del país.

- Que en todos los distritos haya una comisaría o cuartel de la PNP en condiciones y con la dotación suficiente que garantice la seguridad, que prevenga y luche contra la criminalidad de su jurisdicción.

- Que los lugares rurales, alejados e inhóspitos del Perú cuenten con policía especializada con línea de mandos propios similar a los de las grandes ciudades para que su trabajo sea efectivo y las demandas sean atendidas.

-Que se creen las Unidades de Investigación Móvil en las Zonas Rurales, para que estas zonas puedan acceder a un auxilio policial inmediato y a una atención in situ de investigación de delitos cometidos en esas zonas alejadas de la ciudad.

COROLARIO Y COMENTARIO FINAL

Así las cosas, es normal que exista una fuerte resistencia por parte de los miembros de la Policía Nacional a la aplicación y vigencia del Nuevo Código Procesal Penal y hacia la preminencia de los fiscales.

En la práctica, se percibe una superposición entre las funciones del Ministerio Público y las de la Policía Nacional respecto de la investigación; y no debería ser así. La Constitución es muy clara en diferenciar el rol de cada institución, a diferencia del NCPP que trae confusión y transgresión.

Es totalmente falso, que dejar a los delincuentes libres en atención del principio de oportunidad aminore la delincuencia. Lo que quieren 'los acólitos de la nueva justicia', es convertir a los policías en espantapájaros. Que miren y no hagan nada, que se dejen apedrear si hace falta. Si los policías detienen delincuentes, criminales y asesinos los fiscales los sueltan.

Los delincuentes no son tontos, con este tipo de política y con un Código así, le pierden el respeto a la policía, se ríen de la ley y delinquen con descaro a vista y paciencia de todos. El delincuente sabe que no le pasará nada.

Si el sistema acusatorio tiene como meta el resultado. Porqué mejor no ponen precio a los delitos. Hacen un catálogo y 'a delinquir se ha dicho'; el que es pillado paga y sale. Así, de paso no haría falta fiscales que hagan de "arregleros"; porque entre arreglo y arreglo pasan cosas. Como dice el dicho, 'quien parte y reparte se queda la mayor parte'…

Pues: 'Esta es la milonga de justicia' que nos han vendido y que hemos comprado como buena. Los progres y caviares se han burlado de todos en nuestras barbas; nos han metido en un lío social, de desorden y criminalidad diaria. Donde el caos, la impunidad y la injusticia 'campan a pierna suelta'. Con la justicia en manos de los acólitos del nuevo sistema, vamos perdidos. 'Un berenjenal' que nadie entiende y cuyos resultados son más delincuencia y más caos en las ciudades y pueblos del Perú.

Lo que llaman 'sistema procesal acusatorio', no es más que una patraña para que los políticos se garanticen IMPUNIDAD, porque el Ministerio Público (fiscales) está 'de facto' influido y en manos "del poder de turno", aunque la formalidad diga lo contrario. ¿Órgano autónomo? es letra muerta, papel mojado. Así, si los fiscales son dueños y señores de la ACCIÓN PENAL, los políticos pueden burlarse de la ley a su antojo para no ser juzgados ni terminar en la cárcel.

Se debería volver al sistema penal antiguo donde la ACCIÓN PENAL era pública de verdad, y el principio de legalidad nos protegía de los delincuentes. Donde el único que podía garantizarnos que no haya impunidad era un juez. Dejar en manos de fiscales decidir qué se juzga y qué no, convierte a la justicia en lo que es, en UNA BURLA.

Un fiscal no puede ni debe hacer de POLICÍA, JUEZ y FISCAL al mismo tiempo y con arreglo al interés de la oportunidad. El sistema judicial acusatorio vulnera la SEPARACIÓN DE PODERES. La injerencia del EJECUTIVO es evidente.

Los fiscales controlan a la policía, privan a los jueces de juzgar a los delincuentes, y se presta a que acusen sólo a quien les interesa, sea por intereses políticos, económicos o personales. Todo ello institucionaliza la CORRUPCIÓN, LA IMPUNIDAD y la COIMA... La justicia está politizada.

La nueva justicia en el Perú, no sólo incentiva la violencia, el crimen y la delincuencia, sino que se pone del lado del delincuente. 'Con esa regla de tres' cualquier sujeto al margen de la ley puede partirte la cara, romperte una silla en la cabeza, incendiar tu casa, violar a tu mujer o a tu hija y no le pasaría nada. Si acaso, el fiscal haciendo de arreglero valora o pone precio al daño y lo deja en libertad. Si no te avienes, como víctima poco puedes hacer, el fiscal de oficio arreglará por ti en tu ausencia; lo que decida va a misa y el asunto quedaría zanjado, sería cosa juzgada. Así, un delincuente puede tomar lo tuyo cuándo y dónde quiera, que con el sistema acusatorio no iría a la cárcel… ¡En fin, es el mundo al revés!.

Es hora de volver al sentido común. Es hora de **derogar el Nuevo Código Procesal Penal** (NCPP) que cobija el sistema judicial acusatorio, pervierte la justicia y alimenta la criminalidad. Que las ideologías globalistas dejen en paz a la justicia peruana y se vayan a hacer experimentos a otra parte; al infierno si quieren. En España dirían "que se vayan a hacer puñetas".

En Madrid a 24 de febrero de 2021

Autor del libro:

Jorge Ernesto Ibáñez Vergara
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

ANEXOS

ABREVIATURAS

ACNUDH: *Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.*
BID: *Banco Interamericano de Desarrollo.*
CIDH: *Corte Interamericana de Derechos Humanos.*
CP: *Código Penal*
CPE: *Constitución Política del Estado.*
DIVIAC: *División de Alta Complejidad.*
DS: *Decreto Supremo.*
DL: *Decreto Legislativo.*
FFAA: *Fuerzas Armadas.*
FFPP: *Fuerzas Policiales.*
GC: *Guardia Civil.*
GCP: *Guardia Civil del Perú.*
GR: *Guardia Republicana.*
GRP: *Guardia Republicana del Perú.*
IDL: *Instituto de Defensa Legal.*
ILANUD: *Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.*
JUS: *Justicia.*
JNJ: *Junta Nacional de Justicia.*
LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal (España)
MP: *Ministerio Público:*
MININTER: *Ministerio del Interior.*
MRTA: *Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.*
MOVADEF: *Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales.*
NCPP *Nuevo Código Procesal Penal*
ONG: *Organización No Gubernamental.*
ONGs: *Organizaciones No Gubernamentales.*
OACDH-NU: *Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones.*
OCMA: *Oficina de Control de la Magistratura.*
ONU: *Organización de Naciones Unidas.*
PIP: *Policía de Investigaciones del Perú.*
PJ: *Poder Judicial.*
PNP: *Policía Nacional del Perú.*
RR.EE: *Relaciones Exteriores.*
SL: *Sendero Luminoso*
SPAA: Sistema Penal Acusatorio Adversarial (México)

GLOSARIO DE TERMINOS

Acción Penal: *La Acción Penal, es el punto de partida del proceso judicial en la jurisdicción penal, se origina a partir de un delito y supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. El ejercicio de interponer esta acción es un derecho fundamental que salvaguarda el acceso a la justicia donde un juez juzgará los hechos que la víctima denuncia como delito.*

'Antijusticia': *Contrario a la justicia.*

Caviares: *Individuos de izquierda, neocomunistas de fachada. Se creen pitucos, millonarios, presumen de tener ONGs con las que ganan muchos dólares, son globalistas, ambientalistas, defensores de terroristas, detestan a los socialcojudos por idiotas e idealistas, pero los usan cuando necesitan votos, o como carne de cañón para marchas, huelgas y como incendiarios en las turbas. (Definición popular coloquial en el Perú).*

De pleno derecho: *Frase mediante la cual se significa que un efecto jurídico se produce por expresa disposición y fuerza de la ley independientemente de la voluntad de las personas y sin requerir el cumplimiento de formalidades previas.*

Derecho procesal: *Conjunto de normas que regulan el proceso judicial; los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso. Es una rama del derecho público que incluye al conjunto de actos mediante los que se constituye, desarrolla y determina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y demás personas intervinientes. Tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes, a través de una decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados, y en el derecho aplicable.*

Diario Oficial El Peruano: *Conocido como 'El Peruano', es el diario oficial de la República del Perú. Fue fundado por Simón Bolívar el 22 de octubre de 1825 como El Peruano Independiente. Su contenido lo forman en su mayoría las leyes que se promulgan y los actos, gastos y nombramientos del Estado. También cuenta con un cuerpo noticioso y suplementos.*

Estado de derecho: *Modelo de orden y gobernanza por el cual las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes promulgadas públicamente, que se cumplen por igual y se aplican con independencia; compatibles con las normas y principios de derechos humanos. Las instituciones garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal.*

Filoterrorista: *Es un eufemismo que significa amigo de terroristas. Integra la palabra filo= amigo, con la palabra terrorista. Alguien que no es terrorista, pero siente admiración y sus preferencias van en pro de ellos*

Gobierno Frankenstein de la justicia: *Gobierno dispar de la justicia. Justicia llena de 'retales' disonantes e incongruentes como el personaje-monstruo de la novela de Mery Shelley. Justicia como un accionar variopinto y sin sentido, llena de altibajos y contradicciones que lindan la inconstitucionalidad; algo que no debe ser.*

Inciso: *En el ámbito del derecho, los incisos son subdivisiones de los artículos de las leyes. Cada inciso, en este marco, es una parte que detalla una cierta disposición.*

Inquisidor: *Presbítero de tribunal de la inquisición; creado para extirpar la herejía y otros asuntos rechazados por la iglesia, mediante la censura o expurgo (libros, comedias etc.), castigo jurídico (multa, cosificación, sambenito) ejecución en la hoguera (reos rebeldes), en efigie (reos huidos), la horca (reos humildes) o por hacha (reos de alta condición social).Tenían formación jurídica, y como tales, no se dejaban influir fácilmente por prejuicios populares, por lo que raramente quemaban brujas, costumbre más bien propia de ambientes rurales e iletrados.*

Inquisición: *Institución dedicada a la supresión de la herejía en la era medieval europea, muchas veces se castigaba con la excomunión y hasta con la pena de muerte. Fue establecida en el año 1184 mediante la bula del Papa Lucio III como un instrumento para acabar con la herejía cátara y desde los Estados Pontificios fue implantada según el país europeo o colonia que se tratara; en España, duró mucho tiempo. Su labor era castigar el delito ideológico y teológico y reprimir la heterodoxia.*

Ius puniendi: *Expresión jurídica latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar.*

'La Investigación policial': *Es el proceso por el cual la policía procura descubrir al autor de hechos delictivos, incluso los que están siendo planeados o en fase de perpetración, mediante la reunión de indicios y pruebas ("elementos probatorios"); trabajo que supone, indagación, inteligencia, operaciones, pericias y diligencias de investigación.*

'La Investigación del delito': *Es el trabajo que realiza la autoridad competente facultada para ello constitucionalmente. En el Perú, la Constitución establece que sea un juez (Art. 2, 24, f) y (Art. 100) a través de la Instrucción después de asumir jurisdicción. Todo ello, en fase jurisdiccional. Y es así, porque en esa fase es donde se valora y determina si EL HECHO delictivo es típico, antijuridico, imputable y punible. Actualmente el NCPP ha distorsionado el mandato constitucional al alterar la persecución e investigación del delito y su jurisdicción. Lo cual resulta inconstitucional.*

'La Investigación de la delincuencia': *Constitucionalmente es el trabajo que realiza la policía con autonomía funcional (Art.166). Consiste en la investigación de HECHOS DELICTIVOS desde la función policial; conlleva labor de inteligencia, pesquisas e intervenciones en su lucha contra la delincuencia; es decir, intervenir e investigar los hechos delictivos y poner lo actuado y a los presuntos autores a disposición de la autoridad competente. La Constitución dice que al juez (Art. 2, 24, f).*

La máxima de la experiencia*: Es una conclusión empírica fundada sobre la observación de lo que ocurre comúnmente. Es un juicio hipotético de contenido general, sacado de la experiencia y tomado de las distintas ramas de la ciencia o del derecho. Es un principio de Derecho, aceptado unánimemente, para interpretar un texto, resolver una situación o aplicarlo a un caso jurídico.*

Neo Comunismo*: Nueva forma de comunismo, surgida tras la caída de los regímenes comunistas europeos.*

Neo Comunista: *Nuevo comunista. Término utilizado para referirse a aquellos que siguen lo que se considera la nueva corriente del comunismo.*

Principio de Legalidad: *Es una regla de oro del derecho público que establece que nadie puede ser condenado por un hecho que no esté expresamente tipificado como delito en la ley. Este principio garantiza la seguridad jurídica y protege los derechos*

fundamentales. Además, somete a los poderes públicos a la ley y es la base de un Estado de Derecho. Es legítimo tener acceso directo a la tutela judicial efectiva.

Principio de Oportunidad: *El principio de oportunidad es una norma procesal penal que favorece al delincuente presunto, imputado o no en un proceso penal, y por el cual, el fiscal puede abstenerse de ejercer la acción penal si el responsable del hecho criminal cumple algunas condiciones. El principio de oportunidad despenaliza el delito so pretexto de reducir la carga procesal, y se basa en la reparación del daño causados al ofendido (víctima). Se rige por el Art.2 del NCPP; aunque la Constitución no lo contempla.*

Progresista (Progre)*: Fracasado que gusta culpar de sus miserias al sistema y procura que los demás reconozcan sus méritos como "luchador social", que, en el fondo, consiste en que unos vivan a expensas de los demás, utilizando al Estado como cómplice. Se les puede ver predicando su ideología en ONGs y organismos públicos, nacionales e internacionales, donde solucionan todos sus problemas desde sus escritorios con magníficos artículos llenos de palabras como "visibilizar", "empoderar", "desigualdad" …y destrozan el lenguaje con modismos sexistas como "ciudadanos y ciudadanas". Son argolleros y gustan hacerse pasar por intelectuales. Se les conoce también como "parásitos sociales" (Dicc. lingüista Perú, Martha Hildebrandt).*

Sendero Luminoso: *Grupo terrorista, que violenta y sanguinariamente operó en la década de los ochenta en el Perú; que a través del terror y la violencia intentó destruir al Estado y la democracia, a base de atentados, muertes y todo tipo de acciones de terror contra la población, para tomar el poder e implantar un sistema de gobierno comunista de corte Marxista, Leninista y Maoísta.*

Socialcojudo: *Bruto, vago, misio y violento. Cree que todos sus problemas y traumas son por culpa del imperialismo. Termino que hace referencia a individuos social-comunistas del montón de nivel y perfil bajo. (Definición popular en el Perú).*

Teoría del caso: *Es la forma de cómo se le vende (se le cuenta) al juez la historia de los hechos para que te crea y puedas ganar el caso. Sus adeptos, dirán: Es la estrategia a través de la cual el fiscal y el abogado plantean ante el juez de garantías, diferentes planteamientos del caso, tomando como estructura tres elementos; lo fáctico, jurídico y probatorio. Exponiendo de forma persuasiva y creíble la historia de lo que ocurrió, con una visión que dé sentido a los hechos de la historia y a la teoría jurídica en la que se apoya, ya que será la base de la prueba y argumentación jurídica del juicio.*

Tutela de derechos: *Con la reforma del proceso penal y para instaurar un proceso penal acusatorio garantista, era necesario recoger la figura procesal recogida en legislaciones extranjeras denominada tutela de derechos. El art. 71 del NCPP regula cuál es el procedimiento a debatir dentro del proceso penal y advierte de toda presunta vulneración a los derechos del imputado. Faculta a la defensa para que pueda acudir ante el órgano jurisdiccional incluso desde las diligencias de investigación preparatoria. El numeral 2 del Art.71 enumera una lista a modo de catálogo cerrado o numerus clausus cuáles serían estos derechos.*

Vladivideos: *Videos descubiertos a Vladimiro Montesinos, donde se le ve entregando miles de dólares a políticos y militares a cambio de favores para perpetuarse en el poder.*

DICHOS, FRASES Y REFRANES USADOS EN EL TEXTO

'Apaga (velas) y vámonos: *Es una locución antigua que tiene un tono irónico, para decir que no hay nada que hacer y es mejor marcharse, dejarlo o terminar con ello; que ya no hay nada útil, por lo que es mejor no darle más vueltas y acabar.*

'Apartado': *A efectos de este libro; es un sustantivo que se refiere a un párrafo o serie de párrafos en que se divide un texto, artículo, etc. … En otro contexto, lógicamente también, es un adjetivo que significa retirado, remoto o diferente.*

'A pie juntillas'*: Frase adverbial que quiere decir con los pies juntos. Nuestro diccionario añade que en sentido figurado significa "firmemente"; y por extensión, se dice 'creer una cosa con terquedad, con los ojos cerrados.*

'Aceptar pulpo como animal de compañía': *Dicho que designa un estado de resignación o condescendencia en el que el sentido común dimite de sus facultades y se rinde ante lo que a todas luces no es correcto, está mal o parece inverosímil. Es admitir lo inadmisible, transigir resignadamente con algo que no está bien, no se comparte o no se desea.*

'Apuntarse el tanto': *Sígnica que alguien consigue una ventaja o se atribuye algo frente a los demás.*

*'**Arrimar el ascua a su sardina**': Es aprovecharse para lo que le interesa o importa de la ocasión o coyuntura que se le ofrece para su beneficio o interés. (Acepción según la RAE).*

'A vuelo de pájaro': *Locución adverbial que denota que el objeto o cuestión se ve muy de pasada y de forma ligera, muy por encima, sin profundidad, de lejos o desde un punto de vista distante.*

'Bailar dos bailes a la vez': *Frase que alude a alguien que juega a dos bandas, a dos situaciones a la vez, incluso a que tiene dos caras o maneja dos lealtades al mismo tiempo.*

'Blanco de todas las iras': *Indica que alguien o algo recibe el rechazo o desaprobación de los demás.*

'Caballo de troya'*: Artilugio con forma de enorme caballo de madera en la historia de la guerra de Troya, según el relato fue usado por los aqueos como estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Hoy la frase se usa, para referirse a meter algo extraño en tu casa que te va a destruir.*

'Cada vez que le da la vena': *('Darle la vena'). Es cuando a alguien le da un barrunto, una impronta, un impuso súbito, o tiene una premonición, coge lo que tiene a mano y sale pitando a solventar su impulso. Dícese del pronto, antojo o idea que se le mete a alguien en la sesera de forma repentina, sin atender a otras razones.*

'Campan a pierna suelta': *'Campan a sus anchas'. Término utilizado para referirse a quienes se posesionan de un área, puesto, zona, lugar o de algo, donde se mueven o actúan con toda libertar, sin ningún problema y sin ningún control. Sería lo contrario a dormir a pierna suelta.*

'Cazadores de brujas': *'Caza de brujas'. Se conoce al fenómeno histórico sucedido en Europa y América en el siglo XV y XVII, en que decenas de miles de personas, fueron ejecutadas por practicar la brujería. El término actualmente se usa para referirse metafóricamente, a la persecución de un enemigo de forma sesgada, independientemente de la hay razón o no para ello.*

'Ciudadano de a pie': *Frase que alude a una persona común u ordinaria. Dicho de una persona: Normal y corriente.*

'Con mucho floro': *Hablar mucho o adornar las palabras de manera exagerada. Cuando alguien dice "con mucho floro", se refiere a alguien que habla con mucha elocuencia o mucho detalle. Es como decir "con mucha palabrería".*

'Campar a sus anchas': *Significa que alguien actúa o se mueve sin control de nadie. Pero también se usa "campar a sus anchas" para decir que una/s persona/s actúa/n como les antoja o apetece y sin tener control.*

'Compuesta y sin novio': *Frase que hace alusión a que alguien se ha quedado sin nada después de haberlo tenido todo preparado o arreglado para que le ocurriera algo favorable y al final nada.*

'Canto de sirenas': *Oír cantos de sirena es sinónimo de algo aparentemente interesante y seductor, pero que se presupone lleva aparejado algún perjuicio. Ejemplo: "La supuesta subida de sueldo es un canto de sirenas, no nos creemos nada".*

'Colarse por la puerta falsa': *Coloquialmente se usa para decir que ciertas cosas no se hicieron por el conducto adecuado o correcto con el fin de lograr un objetivo. Yendo más allá, se puede usar para denotar que alguien "hace trampa" o usa el engaño para lograr un fin.*

'Con esa regla de tres': *'Por esa regla de tres'. Expresión para cuestionar o ridiculizar el argumento o la lógica de alguien, presentando un resultado esperable que no se ajusta a la realidad.*

'Con estos tintes y estas fibras'*: Dicho que hace referencia a las formas o condición que caracterizan a algo o a alguien, y que con ello, y a pesar de ello, consigue lo que consigue. Puede tener una ligera connotación negativa.*

'Convidado de piedra': *'Ser el convidado de piedra', se aplica al invitado incómodo o marginado, 'que no pinta nada; fuera de sitio o sin voz en una fiesta, reunión o lugar, donde su influencia es irrelevante, nula o casi nula.*

'Cómo está el patio': *En España se dice la frase "¡Cómo está el patio!". Es una expresión que se utiliza para indicar que una situación está descontrolada o es tremendamente negativa.*

'Cuando las papas queman': *La locución, se refiere a una circunstancia difícil en la cual alguien se ve abrumado por el riesgo que corre, ya que no son pocas las posibilidades de «quemarse», o de fracasar.*

'Cuando la oportunidad se cae de la cama': *'Caerse de la cama'. Expresión de que ha pasado algo inesperado pero antojadizo, que tuerce el discurrir normal de las cosas, impronta inesperada que condiciona y lo cambia todo.*

'Chismes de claraboya': *Se refiere a cotilleo de bajo nivel, conversaciones sin importancia surgidas en el rellano de la cotidianidad maledicente. Chismes en toda regla. Que practica maledicencia.*

'De aquellos barros vienen estos lodos': *Refrán: Se usa para afirmar que los efectos negativos tienen una causa previa o son consecuencia de algo que ha ocurrido anteriormente*. (*También se usa 'de aquellos polvos, estos lodos').*

'Dejar con los cataplines al aire'*: Frase que refiere en España, cuando a alguien lo dejan sin nada, sin protección y sin nada que esconder; también que le han despojado de todo.*

'De su cosecha'*: 'poner de mi cosecha" o "cosecha propia". La expresión quiere decir que alguna cosa o idea es aportada por la persona que lo dice, sin ayuda de nadie, bien porque sea algo que ha creado o es suyo.*

'De un plumazo': *Expresión coloquial que significa "de manera expeditiva". También se utiliza para indicar la manera rápida y expeditiva de suprimir una cosa. "Plumazo" es un sustantivo que se refiere a un trazo hecho con una pluma de una sola vez. También significa "de una sola vez o de un solo golpe"*

'De un tiro matar dos pájaros': *O matar dos pájaros de un tiro. En definitiva, es una expresión que se usa cuando con una acción se resuelven dos cosas a la vez, o se logra con una acción un doble objetivo.*

'De una tacada': *Frase coloquial que significa: De una vez, de un tirón.*

'Dictadura bananera': *Expresión peyorativa para describir un país autoritario, inestable, atrasado, tercermundista y corrupto, cuya economía depende de productos de escaso valor como las bananas, gobernado por alguien legitimado fraudulentamente, y sometido a empresas extranjeras, con sobornos al gobernante que ostenta un poder desmesurado.*

'Duerme el sueño de los justos'*: Refiere a cuando las cosas o algo que se espera respuesta está parado, trancado, abandonado o dejadas de lado, durmiendo en el cajón o en escritorio de alguien y por eso no avanza.*

'Encantador de serpientes'*: Es alguien que convence, un embaucador, que usa la palabrería para seducir con el lenguaje, para muchos eso es considerado como ser un "encantador de serpientes".*

'Entre gallos y media noche'*: Alude a aprovechar furtivamente el momento. Cuando se trama o se hace algo a escondidas, en una situación poco clara y en horas inapropiadas, sin testigos y utilizando medios fraudulentos, con el fin de lograr salirse con la suya y afectar a otros, sin que tengan posibilidad de hacer algo para impedirlo.*

'El hábito no hace al monje': *El refrán se refiere a que las personas no deben ser juzgadas por su apariencia. Otro modo de decirlo es que "no todo es lo que parece".*

'El que la hace la paga': *Es un refrán que se utiliza para justificar la sanción o penitencia correspondiente ante errores, faltas o negligencias. También se puede usar la forma "Quien la hace la paga". Nos enseña a ser conscientes de nuestras acciones y a enfrentar las consecuencias. Nos invita a ser personas íntegras y a evitar el hacer el mal, recordándonos que nuestras acciones definen nuestro camino.*

'Entrar al trapo': *Termino taurino de uso popular para indicar que alguien cayo en el juego de quien provoca algo a sabiendas para lograr un propósito.*

'Entre ceja y ceja': *Es una expresión que se utiliza para referirse a tener manía a una persona. También se utiliza para referirse a pensar siempre en alguien de forma negativa.*

'Es una patata caliente en manos de …': *La frase se usa para indicar que alguien intenta pasar a otra persona la responsabilidad de un problema importante, o simplemente, alguien recibió una gran responsabilidad sin esperarla ni merecerla.*

'Es más paja que trigo': *Se refiere que es más lo intrascendente que lo importante. Que de lo que se ve o se obtiene, es más lo que no tiene valor que lo verdaderamente valioso. Alude una decepción inesperada.*

'Es un brindis al sol': *Hace alusión a una fanfarronada. Indica que no es nada, acción que no significa nada. Algo que no se cumple, una mentira o falsa promesa, algo que no se hará realidad. También, cuando alguien hace o dice algo de cara a la galería a sabiendas de que no va a cumplir su promesa. En caso de la justicia sería una alusión a algo imposible.*

'Ellos se lo guisan ellos se lo comen': *O él se lo guisa él se lo come. Frase que significa que cada individuo debe ser responsable de sus actos. También significa que muchos actúan sabiendo y asumiendo que el acto y sus consecuencias le pertenecen o favorecen y de ello sacan provecho o ventaja.*

'Es pan comido': *Se utiliza para hablar de algo que es muy fácil de hacer. Se dice cuando la tarea es bastante sencilla y no supone mayor esfuerzo desempeñarla. Frase que expresa energía y confianza, señala que lo que se va hacer es tan fácil que no causa ninguna dificultad ni problema.*

'Es papel mojado'*: Significa de escasa o nula importancia, que no sirve para nada o que no produce efectos ni prueba nada, que sirve para poco para un determinado asunto.*

'Es una chapuza': *Frase de uso coloquial para referirse a un trabajo mal hecho, realizado sin cuidado ni profesionalidad, con un acabado y técnica deficiente.*

'Estar entre dos fuegos': *Estar en una posición difícil y comprometida entre dos situaciones contradictorias y opuestas.*

'Estar pensando en las musarañas'*: Se dice del que está embobado, distraído o absorto. Quevedo, en su Cuento de cuentos, habla de contemplar las musarañas, y Seijas Patiño explica la expresión: Mirar a otra parte y no a donde se debe por estar distraído. La musaraña es un animal muy pequeño que habita oculto debajo de la tierra en los prados; por su poca utilidad, se originó la frase, dando a entender que una persona se distrae por cosas de poco valor.*

'Estar pintado': *Termino que indica, que el aludido no significa nada, carente de valor alguno, que no tiene poder, facultades, ni autoridad alguna. Algo así, como que su persona es un mero cuadro decorativo.*

'Es un espantapájaros': *Persona sin voluntad ni actitud propia, muchas veces de aspecto intrascendente o raro, utilizado para fines no importantes o incluso disuasivos.*

Viene de la alusión a una especie de muñeco que simula la figura humana que se pone en sembríos para ahuyentar a los pájaros y evitar que coman las semillas y los frutos.

'Hacen su agosto': *Se refiere a aprovecharse de una situación o circunstancia para obtener beneficio personal de forma rápida. Expresión que se utiliza para describir la obtención de ganancias inesperadas o para señalar el aprovechamiento de una oportunidad muchas veces inmerecida. Cuando alguien obtiene un beneficio de manera fácil y con rapidez o aprovecha la ocasión para ello, se dice que "ha hecho su agosto".*

'Hacer tabla rasa': *Dejar sin nada, dejar en cero, acabar con todo, destruir lo hecho, borrar lo hasta entonces construido.*

'Hacer el paripé': *Re refiere a cuando alguien finge, simula o realiza algún acto engañoso o hipócrita.*

'Hacerse de la vista gorda': *Es una locución verbal que se utiliza para referirse a la acción de pasar por alto algo que se debe denunciar, ignorar algo que se sabe que está mal, pero se decide no hacer nada generalmente por conveniencia.*

'Hay gato encerrado': *Expresión que significa que hay algo sospechoso. Se emplea para indicar que, en una situación determinada, hay una razón oculta o hay manejos secretos. En este sentido, la frase se aplica a situaciones o acciones que despiertan desconfianza o inquietud, y que nos previenen ante un potencial engaño.*

'Juego de trileros': *Del trile, ¿dónde está la bolita? Juego asociado a la estafa en calles concurridas, ferias y mercadillos. El trilero actúa con compinches que hacen de gancho para convencer a la víctima de lo fácil de acertar y ganar. Con un juego de manos, se evita que el jugador acierte donde está la bolita. El truco, con habilidad y ligereza se esconde la bolita para que la víctima no la localice. El trilero deja que un cómplice acierte, y para atraer incautos, a veces deja que la víctima gane cuando la apuesta es baja.*

'Jugar a la justicia del justiciero': *Pretender aplicar estrictamente la justicia centrada en el castigo de los delitos sin ser juez.*

'La misma chola con diferente calzón'*: Locución peruana. Se usa para indicar la similitud entre personas, cosas o situaciones. Son variantes, la misma chola con distinto fustán (Perú) y la misma chola con distinta pollera (Bolivia).*

'La mujer del César, no sólo debe serlo sino parecerlo': *Refiere que las personas no solo deben parecer correctas, si no también parecerlo. No sólo hay que ser honrados, sino procurar que la honradez resplandezca de manera inequívoca. El dicho viene de cuando el César renegó y se divorció de su esposa Pompeya después de que un patricio violase un rito religioso sólo accesible a las féminas.*

'La ley de la selva': *Frase popular que se da al funcionamiento social en ausencia de toda ley, presuponiendo que se impondrá la tiranía de los más fuertes, en analogía al funcionamiento, real o supuesto, del mundo animal.*

'La punta del iceberg': *Es una analogía muy válida para indicar algo que permanece oculto a la vista y de lo que solo podemos ver una pequeña fracción.*

'La plata viene sola': *Frase atribuida al ex presidente Alan García, como epitafio de una república criolla como la peruana. En el argot criollo, significa que en el Perú sin mayor esfuerzo si estas donde la inercia del sistema corrupto permite la plata llega sola.*

'La pepa del durazno primo ya cogió otros colores'*: Dicho para decir que ya la situación de algo o de alguien ya ha cambiado, que ya no es lo mismo.*

'Le han comido la tostada': *Es una expresión que la gente usa con un sentido amplio para referirse a alguien que se aprovecha de otra. Significa tomar su lugar o reemplazarle. Hay gente que dice "no me comas la tostada" como diciendo, no me engañes. Por similitud "comer la tostada" también es convencer o manipular a alguien.*

'Les importa un comino'*: Que les importa muy poco. Frase para referir a algo de escasa importancia.*

'Le sobró ganas y le faltó tiempo': *Frase que alude a que alguien puso lo mejor de sí pero el tiempo inexorable pasó sin que pudiera completar o conseguir el objetivo deseado.*

'Les importa un pepino la justicia': *Frase usada para decir que no les importa nada algo. En este caso, significa que no les importa nada la justicia*

'Los progres': *Se refiere a los que tienen ideología de izquierda o extrema izquierda y viven en un constante debate por la lucha de clases. Actualmente progre es un individuo que no le gusta trabajar pero que le gusta vivir bien a costa de los demás.*

'Los de su cuerda'*: Frase usada para refiere a los de una misma ideología, grupo, partido o bando.*

'Los pillan trincando': *Cuando son sorprendidos cogiendo algo que no debería, algo que es ajeno o que es reprochable hacerlo; hace referencia a ser descubierto recibiendo un soborno o apropiándose de algo que no le corresponde. En el argot popular hay otra acepción muy distinta.*

'Llevar agua para su molino'*. Indica cuando alguien dirige un asunto de modo que se favorezca el interesado solamente.*

'Llevar bajo el ala': *Llevar atado, cautivo, sometido o protegido por algo o por alguien, puede tener un significado positivo o negativo, depende del contexto.*

'Llevarse el gato al agua'*: Frase que se refiere a cuando alguien ha conseguido el objetivo que otros también pugnan por ello. Que por sobre todas las cosas sale ganando en una disputa.*

'Marchando hasta la victoria': *Eslogan comunista, utilizado en sus luchas sociales y reivindicativas hasta imponerse e implantar el comunismo y que diera como resultado la Unión Soviética. Testigo de ello, los adoquines de la Plaza Roja por donde marcharon miles de soldados y milicianos.*

'Marujeo': *Frase que alude a señoras que no trabajan y que acuden a reunirse para lucir palmito y dar rienda suelta o entretener a su lengua viperina. Personas que se dedican al chismorreo.*

'Mano de hierro y guante de seda': *Consiste en ser enérgico, severo, inflexible en la toma de decisiones, pero con un actuar de aparente sutileza o delicadeza.*

'Manga ancha': *Ser permisivo y tolerante. Mi padre jamás me castigó y siempre tuvo mucha manga ancha conmigo. En su origen, la expresión se refería a la permisividad*

de los confesores. Es posible que entonces se identificara esta tolerancia con el hecho de que el hábito tuviera las mangas más o menos anchas.

'Mezclar papas con camotes': *Esta locución verbal exclusiva de nuestra lengua coloquial mezcla un quechuismo (papa) con un aztequismo (camote). La expresión hace referencia a una confusión total.*

'Meterse en camisa de once varas'*: Que se inmiscuye en asuntos que no le incumben y que además se complican la vida innecesariamente en algo que no deberían.*

'Meterse en un berenjenal'*: Un berenjenal es un lugar espinoso. Es una expresión, cuando alguien se mete en un lío del que puede salir mal parado.*

'Miran por encima del hombro': *Significa sentirse superior a alguien y tratarlo con desprecio y soberbia. Una forma de mostrar que considera a la otra persona inferior o insignificante.*

'Marear la perdiz': *Término que se utiliza para referirse a la acción de dilatar o alargar una conversación, situación, discusión u acuerdo innecesariamente, evitando llegar a un punto concreto o tomar una decisión clara.*

'Moverse como pez en el agua': *Significa moverse de manera natural o fácil, sin esfuerzo.*

'Ni pincha ni corta': *Con esta locución se da a entender que alguien no es importante o que no ejerce ningún poder en un determinado asunto o lugar.*

'No le queda más remedio': *Locución del español: no quedar [a alguien] más remedio que [algo]; [loc. verb.] No quedarle más solución que hacer algo. Aceptar o hacer algo como única y final solución.*

'No dejar cabos sueltos'*: No dejar cosas ni circunstancias pendientes que puedan dañar o perjudicar lo que se está haciendo. Es hacer algo que cierra un problema o situación para evitar imprevistos o problemas futuros.*

'No les da vela en el entierro'*: Significa que alguien se está entrometiendo donde no le corresponde. Se considera que alguien no debería estar ahí, que no es bienvenido.*

'No se puede estar en misa y repicando'*: Enseña que no se pueden hacer a un tiempo y con perfección dos cosas muy diferentes, por ser incompatibles la mayoría de las veces.* ***Se*** *dice también sin la fórmula introductoria: Estar en misa y repicando.*

'No se puede ser juez y parte': *Que no se puede ser las dos cosas a la vez, por una cuestión de imparcialidad; ya que, no puede haber ningún atisbo, ni mácula de parcialidad, de favoritismo, que beneficie al actor. Principio jurídico consagrado en el código de Justiniano "Nadie puede ser juez de su propia causa" que se mantiene vigente en todos los códigos y constituciones del mundo.*

'No es oro todo lo que reluce': *Es un aforismo, que indica que todo lo que parece maravilloso o cierto resulta no serlo realmente. Quiere decir que aunque a primera vista algo parece ser bueno a lo mejor no lo es. Aunque pueda parecerlo o creerse así, no todo es tan perfecto.*

'No pintar nada': *No tener importancia o relevancia en un lugar o una situación determinada.*

'Nos birlan la cartera sin despeinarse y se quedan tan Panchos'*: Significa que alguien nos quita algo sin mayor dificultad y se queda tan tranquilo o como si nada hubiera pasado.*

'Nos quieren vender la moto': *Se utiliza para expresar que alguien intenta engañarnos o convencernos de algo falso o poco creíble. 'Vender la moto' se usa para referirse al acto de tratar de convencer con mucha labia de algo que no se ajusta a la verdad.*

'Otorongo no come otorongo': *Frase popular que se utiliza para criticar la conducta poco ética de algunos funcionarios públicos, cuando no son sancionados por la Comisión correspondiente. Puede aplicarse también a colectivos del sector privado.*

'Pasar el corte': *Estar habilitado para algo después de pasar una dificultad. Aprobar algo, una prueba, un examen, etc. Producirse un hecho habilitante que estas esperando. Estar en condiciones de realizar una actividad que implica una sucesión de hechos.*

'Perro no come perro'*: Frase que significa que los de la misma especie no se hacen daño, se encubren, se apañan. Hace alusión a una certeza de la naturaleza animal, que un carnívoro como el perro no come carne de perro.*

'Política de tierra quemada': *Consiste en destruir absolutamente todo lo que pueda ser de utilidad a su oponente. Estas acciones se emplean cuando para conseguir algo se intimida, incluso se destruye, provocando sufrimiento y dejando sin recursos ni defensa a su objetivo. La «tierra quemada» históricamente resultó muy eficaz en ciertas guerras y batallas.*

'Poner el cazo': *Recibir dinero o tener disposición para recibirlo, por una comisión o pago indebido. En el Perú sería algo así como estar dispuesto a recibir una coima.*

'Ponerle puertas al campo': *Significa poner límites o restricciones a algo que no se puede ni se debe controlar. Expresa la inutilidad de una medida que pretende restringir la libertad de algo. Cuando las libertades se recortan y empiezan a ser objeto de limitaciones se da paso al abuso y la arbitrariedad.*

'Poner sobre el tapete': *Poner de manifiesto, poner encima de la mesa una cuestión, mostrar la preocupación de manera visible, sacar a relucir; plantear, proponer, poner en su sitio, comunicar claramente una situación.*

"Promete y promete hasta que *lo consigue, una vez conseguido se olvida lo prometido**':*** *Creo que el dicho es muy conocido y no merece mayor explicación; se explica por sí sólo.*

'Pasarse por el arco del triunfo': *La expresión "me lo paso por el Arco del Triunfo" se usa para indicar que algo es completamente irrelevante. Se emplea para remarcar lo insignificante o sin importancia, o para indicar que una idea, propuesta o petición ha sido rechazada sin contemplaciones.*

'Saltarse a la torera': *La expresión "saltarse algo a la torera" es muy común en el lenguaje coloquial y se utiliza para referirse a la acción de ignorar o desobedecer algo por completo.*

'Por la puerta de atrás': *Quiere decir perdida de prestigio en la actividad que estuviese desarrollando, de ahí su salida por la puerta trasera o falsa, en el caso contrario de haber hecho bien las cosas o haber conseguido los objetivos lícitos utilizaría la puerta principal.*

'Quedarse tan ancho y tan orondo'*: Significa quedarse satisfecho, orgulloso, envanecido, ufano; cómodo, sin agobios ni preocupaciones.*

'Que se vayan a hacer puñetas': *'Vete a hacer puñetas', frase utilizada en España; que teñida de un ligero aire judicial carcelario, era como enviar a alguien a ninguna parte, y que denotaba cierto desaire hacia alguien. Sería como en el Perú decir, "veta a la porra".*

'Quién le pone el cascabel al gato': *Dificultad de realizar algo por ser peligroso. Expresa la falta de voluntarios para tomar una determinación de todos, porque su ejecución resulta arriesgada. De origen literario, esta frase proverbial procede de la fábula de los ratones (Esopo), en la que estos proponían poner un cascabel al gato para saber cuándo se acercaba y tener así tiempo de huir.*

'Romper la baraja'*: Actuara en contra de una norma o tendencia. Estropear una cosa de modo que no sirva y tenga que ser reparada. Interrumpir el desarrollo de un compromiso o romper la continuidad de algo no material.*

'Romper la mano': *Frase que grafica una interpretación cultural de la corrupción. Es sinónimo de soborno. Es darle dinero al funcionario para que no actúe conforme a ley (que mire a otro lado; que se haga de la vista gorda). Expresa una realidad de los peruanos en su vida cotidiana. Pequeños actos de corrupción que se producen en el sector público.*

'Sacarse de la manga': *Expresión en sentido figurado. Revelar algo que estaba escondido. Hacer o decir algo de forma imprevista, para su provecho o para sacar u obtener algo a su favor. Quien no muestra todas sus cartas, se guarda un as en la manga que saca en último momento para conseguir algo.*

'Se lavan las manos' o 'lavarse las manos': *Desentenderse de la responsabilidad en un asunto. La expresión tiene origen bíblico, pues alude a la acción realizada por Poncio Pilato cuando Jesús es condenado a morir en la cruz. (Diccionario de uso del español de América y España, 2007).*

'Se le/s ve el plumero': *Expresión coloquial, cuyo uso es común en España cuando se quiere decir que se le ha visto las intenciones (a veces malas) de alguien. Significa que cuando le decimos a alguien "a mí no me engañas, que se te ve el plumero" o le comentamos a alguien "a esta persona se le ve el plumero", queremos decir que notamos sus intenciones, y normalmente no suelen ser buenas.*

'Se lo pasaron por el forro' *o 'Pasarse por el forro'; Hacer algo sin importarle nada en absoluto; no hacer ningún caso a los posibles afectados. Expresa cierto desprecio o rechazo hacia algo por parte de quien realiza la acción.*

'Se va de rositas' *o* ***irse de rositas****, significa irse sin afrontar su responsabilidad o sin asumir las consecuencias de sus malos actos. Irse sin pagar lo que se debe o sin recibir el castigo merecido. Salir de una situación comprometida sin esfuerzo y con ayuda. Salir libre de culpa de algo que se es responsable. Rositas es el matiz irónico que enfatiza la satisfacción de impunidad.*

'Sí, bwana, sí, bwana*: Frase coloquial en España que se utiliza para referirse, cuando alguien muestra aceptación, conformidad o sumisión a quien ha ordenado algo, y que obedece aunque no se esté de acuerdo.*

'Tirarse la pelota'*: No aceptar una responsabilidad y para escapar de ella se le atribuye a otra persona.*

'Tirios y troyanos': *Es un tópico literario que se refiere a dos enemigos irreconciliables. Se usa para referirse a personas o grupos contrarios, en pugna, de manifiesta rivalidad. El origen de la expresión se encuentra en la rivalidad entre las ciudades antiguas de Tiro y Troya por la hegemonía en el Mediterráneo. La frase llega a nuestros días a través de Don Quijote, que dice: «Callaron todos, tirios y troyanos».*

'Tocado por la varita mágica de la oportunidad': *A la varita de los magos se le adjudica poderes extraordinarios. El dicho, recoge esta creencia para afirmar que aquella persona que le va muy bien, ha sido tocada por una de estas varitas. Que sus éxitos dependen de un hecho fortuito, el toque de la varita, y no de su esfuerzo personal.*

'Tocado por la varita mágica de la oportunidad': *Alguien que vive a costa de la oportunidad. En el caso del sistema de justicia, se refiere a quienes han hecho del principio de oportunidad su razón de existir o su medio de vida.*

'Tomar el pelo': *Expresión que significa hacer creer algo que es ficticio. También se refiere figuradamente a la acción de burlarse de alguien o tratar de engañarle para que crea que algo falso es cierto.*

'Tutilimundi': *Todo el mundo.*

***'Un cheque en blanco': 'Tener carta blanca'. Se dice cuando alguien está autorizado para obrar como le plazca por o para la consecución de algún fin, aunque ese fin sea alcanzado de manera poco ortodoxa o aparentemente inapropiada.*

'Una noche gris': *La expresión no tiene un significado literal. Es una metáfora que se utiliza para describir una noche triste. El color gris se asocia con la monotonía y la tristeza. En ese contexto, la frase sugiere una noche cargada de melancolía y pesar. Es como si el cielo y las sombras se fusionaran en una paleta de grises evocando una atmósfera sombría.*

'Una panda de críos': *Frase en sentido figurativo se usa para referirse a un grupo de muchachos o niños.*

'Vayan a gatas': *'ir a gatas'. Es simplemente la forma en la que camina un bebe al no saber caminar. Es decir, arrastras, gateando o en cuatro patas.*

'Vender la piel del oso antes de cazarlo': *Locución cuyo significado advierte contra la precipitación y el optimismo excesivo por algo que aún no se tiene. Se dice de alguien que manifiesta o expresa una total seguridad de algo antes de conseguirlo o dar por hecho algo que podría no darse.*

'Yo me lo guiso yo me lo como, como Juan Palomo'*: Frase usada negativa y positivamente; hace referencia al egoísmo o a la autosuficiencia de alguien. Su origen está en la "Letrilla Satírica III" (de un conjunto de 25) de Francisco de Quevedo, una de sus múltiples poesías burlescas, y en la que se puede observar el característico estilo del escritor de una manera más intensa y audaz si cabe.*

'Zurrarles la badana': *Este vocablo recoge la intención de castigar a alguien con algo que figurativamente alimenta el imaginario y representa las antiguas correas de cuero para golpear o dar una paliza como castigo por algo malo o incorrecto que ha cometido.*

LEGISLACIÓN UTILIZADA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 (vigente)

Art. 2. 20

A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.

Art. 2, 24. A la libertad y a la seguridad personales.

a.- *Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.*

e. *Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.*

f.- *Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.*
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

h.- *Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.*

Artículo 3.- Derechos Constitucionales. Numerus apertus

La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

Artículo 38.- Deberes para con la patria

Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

Artículo 41.- *Declaración Jurada de bienes y rentas*
…
El plazo de prescripción de la ***acción penal*** *se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares.* ***La acción penal*** *es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al* ***principio de legalidad****.*

Artículo 44.-Deberes del Estado

Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad;

y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Artículo 46.- Gobierno usurpador. Derecho de insurgencia

Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.
La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

***Artículo 51**.- Supremacía de la Constitución*

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

CAPÍTULO IV
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL

***Artículo 74.-** Principio de Legalidad*

Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.

Artículo 100.- Antejuicio Constitucional

Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.
En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.
Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.

Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.
La Constitución no ampara el abuso del derecho.

Artículo 104.- Delegación de facultades al Poder Ejecutivo

El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.

Artículo 105.- Proyectos de Ley

Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

Artículo 106.- Leyes Orgánicas

Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución.
Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

Artículo 107.- Iniciativa Legislativa

El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.

***Artículo 118**.- Atribuciones del Presidente de la República*

Corresponde al Presidente de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.
2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República.

CAPÍTULO VIII - PODER JUDICIAL

***Artículo 138**.- Administración de Justicia. Control difuso*
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

***Artículo 139.-** Principios de la Administración de Justicia*

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

***1.** La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.*
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.
No hay proceso judicial por comisión o delegación.
***2.** La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.*
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni

retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
***3.** La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.*
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
***4.** La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.*
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.
***5.** La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.*
6. La pluralidad de la instancia.
***7.** La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.*
8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.
En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.
***9.** El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.*
***10.** El principio de no ser penado sin proceso judicial.*
***11.** La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.*
***12.** El principio de no ser condenado en ausencia.*
***13.** La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.*
***14.** El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.*
***15.** El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.*
***16.** El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala*
***17.** La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.*
***18.** La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.*
***19.** La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.*
***20.** El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.*
***21.** El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.*
***22.** El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad*

***Artículo 143**.- Órganos Jurisdiccionales*

El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.
Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.

Artículo 143.- Órganos Jurisdiccionales

El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.

Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.

Artículo 146.- Exclusividad de la Función Jurisdiccional

La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.
Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley.
El Estado garantiza a los magistrados judiciales:
***1**.- Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.*
***2**.- La inmovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento.*
***3**.- Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Y*
***4**.- Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.*

Artículo 159.- Atribuciones del Ministerio Público

Corresponde al Ministerio Público:

***1.-** Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.*
2.- Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
3.- Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
***4.-** Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.*
***5.-** Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.*
6.- Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
7.- Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.

Artículo 166.- Finalidad de la Policía Nacional

La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL PERÚ

Artículo VI.- ***Legalidad de las medidas limitativas de derechos***

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.

Artículo IV.- ***Titular de la acción penal***

1.- El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad.
2.- *El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y* ***controla*** *jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.*
3.- *Los actos de* ***investigación*** *que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional* ***no tienen carácter jurisdiccional****. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición.*
4.- El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la ***Policía Nacional*** *de conformidad* ***con sus leyes*** *y reglamentos.*

Artículo 1.- ***Acción penal***

La acción penal es pública.

1.- Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular.
2.- En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente. Se necesita la presentación de querella.
3.- En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante, ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente.
4.- Cuando corresponde la previa autorización del Congreso o de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento previsto por la Ley para dejar expedita la promoción de la acción penal.

Artículo 2.- ***Principio de oportunidad***
1.- El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:
a. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.
b. Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.
c. Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.

2.- En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido.
3.- El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que este exceda de nueve meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente.
4.- Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable.

CAPÍTULO I: EL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 60.- Funciones

1.- El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial.
2.- El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

Artículo 61.- Atribuciones y obligaciones

1.- El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación.
2.- Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado.
3.- Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo.
Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece.
4.- Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición establecidas en el artículo 53.

Artículo 65.- La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal

1.- El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69 y 333.
2.- El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará -si correspondiere- las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional.
3.- Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal.
4.- El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. La Policía Nacional brinda sus recomendaciones a tal efecto. Garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes.

5.- El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios.

Artículo 66.- Poder coercitivo
En caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional.
Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes de que transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal dispondrá su levantamiento, bajo responsabilidad.

CAPÍTULO II: LA POLICÍA

Artículo 67.- Función de investigación de la Policía
1.- La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancia privada o sujetas a ejercicio privado de la acción penal.
2.- Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria.

Artículo 68.- Atribuciones de la Policía
1.- *La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en las normas sobre investigación, bajo la conducción del Fiscal, podrá realizar lo siguiente:*
a) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes.
b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito.
c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito.
d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación.
e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito.
f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos.
g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas.
h) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos.
i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. En este caso, de ser posible en función a su cantidad, los pondrá rápidamente a disposición del Fiscal para los fines consiguientes quien los remitirá para su examen al Juez de la Investigación Preparatoria. De no ser posible, dará cuenta de dicha documentación describiéndola concisamente. El Juez de la Investigación Preparatoria, decidirá inmediatamente o, si lo considera conveniente, antes de hacerlo, se constituirá al lugar donde se encuentran los documentos inmovilizados para apreciarlos directamente. Si el Juez estima legítima la inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá su conversión en incautación, poniéndolas a disposición del Ministerio Público. De igual manera se procederá respecto de los libros, comprobantes y documentos contables administrativos.
j) Allanar locales de uso público o abiertos al público.
k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.
l) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos.
m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del Fiscal.

n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados.
***2.-** De todas las diligencias específicas en este artículo, la Policía sentará actas detalladas las que entregará al Fiscal. Respetará las formalidades previstas para la investigación. El Fiscal durante la Investigación Preparatoria puede disponer lo conveniente en relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía.*
***3.-** El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la Policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 324 del presente Código. El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas.*

Artículo 68-A.- ***Operativo de revelación del delito***
***1.-** Ante la inminente perpetración de un delito, durante su comisión o para su esclarecimiento, el Fiscal, en coordinación con la Policía, podrá disponer la realización de un operativo conjunto con la finalidad de identificar y, de ser el caso, detener a sus autores, el que deberá ser perennizado a través del medio idóneo, conforme a las circunstancias del caso.*
***2.-** Para el operativo el Fiscal podrá disponer la asistencia y participación de otras entidades, siempre que no genere un riesgo de frustración.*

Artículo 69.- Instrucciones del Fiscal de la Nación
Sin perjuicio de las directivas específicas que el Fiscal correspondiente imparte en cada caso a la Policía, el Fiscal de la Nación regulará mediante Instrucciones Generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, así como los mecanismos de coordinación que deberán realizar los fiscales para el adecuado cumplimiento de las funciones previstas en este Código.

Artículo 70.- Prohibición de informar
La Policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible requerirá la previa autorización del Fiscal.

Artículo 122.- ***Actos del Ministerio Público***
1.- El Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta Disposiciones y Providencias, y formula Requerimientos.
*2.- Las Disposiciones se dictan para decidir: **a)** el inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones; **b)** la conducción compulsiva de un imputado, testigo o perito, cuando pese a ser emplazado debidamente durante la investigación no cumple con asistir a las diligencias de investigación; **c)** la intervención de la Policía a fin de que realice actos de investigación; **d)** la aplicación del principio de oportunidad; y, **e)** toda otra actuación que requiera expresa motivación dispuesta por la Ley.*
3.- Las Providencias se dictan para ordenar materialmente la etapa de investigación.
4.- Los Requerimientos se formulan para dirigirse a la autoridad judicial solicitando la realización de un acto procesal.
5.- Las Disposiciones y los Requerimientos deben estar motivados. En el caso de los requerimientos, de ser el caso, estarán acompañados de los elementos de convicción que lo justifiquen.
6.- Rige, en lo pertinente, el artículo 127.

Artículo 164.- Citación y conducción compulsiva
1. La citación del testigo se efectuará de conformidad con el artículo 129. Cuando se trata de funcionarios públicos o de dependientes, el superior jerárquico o el empleador, según el caso, están en la obligación de facilitar, bajo responsabilidad, la concurrencia del testigo en el día y hora en que es citado.
2. El testigo también podrá presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.
3. Si el testigo no se presenta a la primera citación se le hará comparecer compulsivamente por la fuerza pública.

SUBCAPÍTULO I: EL CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

Artículo 205.- Control de identidad policial

***1**. La Policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. El intervenido tiene derecho a exigir al Policía le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado.*
2. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio del correspondiente documento de identidad. Se deberá proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. Si en ese acto se constata que su documentación está en orden, se le devolverá el documento y autorizará su alejamiento del lugar.
3. Si existiere fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso, la Policía podrá registrarle sus vestimentas; equipaje o vehículo. De esta diligencia específica, en caso resulte positiva, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público.
4. En caso no sea posible la exhibición del documento de identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada, se conducirá al intervenido a la Dependencia Policial más cercana para exclusivos fines de identificación. Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria. Este procedimiento, contado desde el momento de la intervención policial, no puede exceder de cuatro horas, luego de las cuales se le permitirá retirarse. En estos casos, el intervenido no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto con personas detenidas, y tendrá derecho a comunicarse con un familiar o con la persona que indique. La Policía deberá llevar, para estos casos, un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y
5. Siempre que sea necesario para las finalidades del juicio o para las finalidades del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin perjuicio de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad -en cuyo caso se requiere la expresa orden del Ministerio Público-, y efectuar en él mediciones y medidas semejantes. De este hecho se levantará un acta.

Artículo 206.- Controles policiales públicos en delitos graves
1. Para el descubrimiento y ubicación de los partícipes en un delito causante de grave alarma social y para la incautación de instrumentos, efectos o pruebas del mismo, la Policía -dando cuenta al Ministerio Público- podrá establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a estos fines, al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales, con el fin de comprobar que no se porten sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos.
2. La Policía abrirá un Libro-Registro de Controles Policiales Públicos. El resultado de las diligencias, con las actas correspondientes, se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Público.

ARTÍCULO 208.- Motivos y objeto de la inspección.

***1.** La Policía, por sí —dando cuenta al Fiscal— o por orden de aquél, podrá inspeccionar o disponer pesquisas en lugares abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán rastros del delito, o considere que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona prófuga, procede a realizar una inspección.*
***2.** La pesquisa tiene por objeto comprobar el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere, de utilidad para la investigación. De su realización se levantará un acta que describirá lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerá o conservarán los elementos materiales útiles.*
***3.** Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si estos han desaparecido o han sido alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de convicción de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente se procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar.*

4. *De ser posible se levantarán planos de señales, descriptivos y fotográficos y toda otra operación técnica, adecuada y necesaria al efecto.*

ARTÍCULO 209 del NCP - Retenciones.

1.- La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- o por orden de aquél, cuando resulte necesario que se practique una pesquisa, podrá disponer que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra.
2.- La retención sólo podrá durar cuatro horas, luego de lo cual se debe recabar, inmediatamente, orden judicial para extender en el tiempo la presencia de los intervenidos.

ARTÍCULO 210 del NCP. - Registro de personas.

1.- *La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- o por orden de aquél, cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito, procederá a registrarla. Antes de su realización se invitará a la persona a que exhiba y entregue el bien buscado. Si el bien se presenta no se procederá al registro, salvo que se considere útil proceder a fin de completar las investigaciones.*
2.- *El registro se efectuará respetando la dignidad y, dentro de los límites posibles, el pudor de la persona. Corresponderá realizarlo a una persona del mismo sexo del intervenido, salvo que ello importe demora en perjuicio de la investigación.*
3.- *El registro puede comprender no sólo las vestimentas que llevare el intervenido, sino también el equipaje o bultos que portare y el vehículo utilizado.*
4.- *Antes de iniciar el registro se expresará al intervenido las razones de su ejecución, y se le indicará del derecho que tiene de hacerse asistir en ese acto por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad.*
5.- *De todo lo acontecido se levantará un acta, que será firmada por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciera, se expondrá la razón.*

Artículo 211.- Examen corporal del imputado.

1.- El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar un examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la investigación, siempre que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad mayor de cuatro años. Con esta finalidad, aún sin el consentimiento del imputado, pueden realizarse pruebas de análisis sanguíneos, pruebas genético-moleculares u otras intervenciones corporales, así como exploraciones radiológicas, siempre efectuadas por un médico u otro profesional especializado. La diligencia está condicionada a que no se tema fundadamente un daño grave para la salud del imputado, para lo cual si resulta necesario se contará con un previo dictamen pericial.
2.- Si el examen corporal de una mujer puede ofender el pudor, sin perjuicio que el examen lo realice un médico u otro profesional especializado, a petición suya debe ser admitida otra mujer o un familiar.
3.- El Fiscal podrá ordenar la realización de ese examen si el mismo debe realizarse con urgencia o hay peligro por la demora, y no puede esperar la orden judicial. En ese caso, el Fiscal instará inmediatamente la confirmación judicial.
4.- La diligencia se asentará en acta. En esta diligencia estará presente el Abogado Defensor del imputado, salvo que no concurra pese a la citación correspondiente o que exista fundado peligro de que la prueba se perjudique si no se realiza inmediatamente, en cuyo caso podrá estar presente una persona de la confianza del intervenido siempre que pueda ser ubicada en ese acto. En el acta se dejará constancia de la causal invocada para prescindir de la intervención del Abogado Defensor y de la intervención de la persona de confianza del intervenido.
5.- El Ministerio Público, o la Policía Nacional con conocimiento del Fiscal, sin orden judicial, podrán disponer mínimas intervenciones para observación, como pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello que no provoquen ningún perjuicio para su salud, siempre que el experto que lleve a cabo la intervención no la considere riesgosa. En caso contrario, se pedirá la orden judicial, para lo cual se contará con un previo dictamen pericial que establezca la ausencia de peligro de realizarse la intervención.

ARTÍCULO 212 *del NCP. - Examen corporal de otras personas.*

1.- *Otras personas no inculpadas también pueden ser examinadas sin su consentimiento, sólo en consideración de testigos, siempre que deba ser constatado, para el esclarecimiento de los hechos, si se encuentra en su cuerpo determinada huella o secuela del delito.*
2.- *En otras personas no inculpadas, los exámenes para la constatación de descendencia y la extracción de análisis sanguíneos sin el consentimiento del examinado son admisibles si no cabe temer ningún daño para su salud y la medida es indispensable para la averiguación de la verdad. Los exámenes y la extracción de análisis sanguíneos sólo pueden ser efectuados por un médico.*
3.- *Los exámenes o extracciones de análisis sanguíneos pueden ser rehusados por los mismos motivos que el testimonio. Si se trata de menores de edad o incapaces, decide su representante legal, salvo que esté inhabilitado para hacerlo por ser imputado en el delito, en cuyo caso decide el Juez.*

ARTÍCULO 213 *del NCP. - Examen corporal para prueba de alcoholemia.*

1.- *La Policía, ya sea en su misión de prevención de delitos o en el curso de una inmediata intervención como consecuencia de la posible comisión de un delito mediante la conducción de vehículos, podrá realizar la comprobación de tasas de alcoholemia en aire aspirado.*
2.- *Si el resultado de la comprobación es positiva o, en todo caso, si se presentan signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancia prohibida, el intervenido será retenido y conducido al centro de control sanitario correspondiente para realizar la prueba de intoxicación en sangre o en otros fluidos según la prescripción del facultativo.*
3.- *La Policía, cuando interviene en operaciones de prevención del delito, según el numeral 1) del presente artículo, elaborará un acta de las diligencias realizadas, abrirá un Libro-Registro en el que se harán constar las comprobaciones de aire aspirado realizadas, y comunicará lo ejecutado al Ministerio Público adjuntando un informe razonado de su intervención.*
4.- *Cuando se trata de una intervención como consecuencia de la posible comisión de un delito y deba procederse con arreglo al numeral 2) del presente artículo, rige lo dispuesto en el numeral 4) del art 210.*

Artículo 214.- Solicitud y ámbito del allanamiento

1.- *Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el Fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto.*
2.- *La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar, y el tiempo aproximado que durará.*
3.- *Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial constarán detalladamente en el acta.*

Artículo 215.- *Contenido de la resolución*

1.- *La resolución autoritativa contendrá: el nombre del Fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan, la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia, y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato.*
2.- *La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado o para un período determinado, en cuyo caso constarán esos datos.*

Artículo 216.- *Desarrollo de la diligencia*

1.- *Al iniciarse la diligencia se entregará una copia de la autorización al imputado siempre que se encuentre presente o a quien tenga la disponibilidad actual del lugar, comunicándole la facultad que tiene de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza.*
2.- *Si no se encuentran las personas arriba indicadas, la copia se entregará y el aviso se dirigirá a un vecino, a una persona que conviva con él, y a falta de ellos, sólo de ser posible, al portero o a quien haga sus veces.*

3.-*La diligencia se circunscribirá a lo autorizado, redactándose acta. Durante su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado.*

Artículo 217.- Solicitud del Fiscal para incautación y registro de personas

1.- *Cuando sea el caso, el Fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso. En este caso se hará un inventario en varios ejemplares, uno de los cuales se dejará al responsable del recinto allanado.*
2.- *El allanamiento, si el Fiscal lo decide, podrá comprender el registro personal de las personas presentes o que lleguen, cuando considere que las mismas pueden ocultar bienes delictivos o que se relacionen con el mismo. El Fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. El trasgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar.*

Artículo 259.- Detención Policial

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:
1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.
4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.

Artículo 261.- Detención Preliminar Judicial

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar cuando:
a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.
b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.
c) El detenido se fugare de un centro de detención preliminar.
2. En los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento.
3. La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la Policía a la brevedad posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias puede ordenarse el cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, telefónicamente u otro medio de comunicación válido que garantice la veracidad del mandato judicial. En todos estos casos la comunicación debe contener los datos de identidad personal del requerido conforme a lo indicado en el numeral dos.
4. Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tienen una vigencia de seis meses. Vencido este plazo, caducan automáticamente bajo responsabilidad, salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas no caducan hasta la efectiva detención de los requisitoriados.

Artículo 263.- Deberes de la policía

1. La Policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto ciudadano, informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También informará al Juez de la Investigación Preparatoria tratándose de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
2. En los casos del artículo 261, sin perjuicio de informar al detenido del delito que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención, comunicará la medida al Ministerio Público y pondrá al detenido inmediatamente a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria. El Juez, tratándose de los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 261, inmediatamente examinará al imputado, con la asistencia de su Defensor o el de oficio, a fin de verificar su identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Acto seguido, lo pondrá a disposición del Fiscal y lo ingresará en el centro de detención policial o transitorio que corresponda. En los demás literales, constatada la identidad, dispondrá lo conveniente.
3. En todos los casos, la Policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste los derechos previstos en el artículo 71. De esa diligencia se levantará un acta.

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ DE 1979 (derogada)

- *Algunos Artículos relacionados con El Ministerio Público y las Fuerzas Policiales (Policía). La investigación del delito y prevenir y combatir la delincuencia.*

***Artículo 250**.-El Ministerio Público es autónomo y jerárquicamente organizado. Le corresponde:*
1. Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos, tutelados por la ley;
2. Velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta administración de justicia;
3. Representar en juicio a la sociedad;
4. Actuar como defensor del pueblo ante la administración pública;
***5.** Vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial, y promover la acción penal de oficio o a petición de parte;*
6. Emitir dictamen previo a todas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, en los casos que la ley contempla; y
7. Las demás atribuciones que les señalan la Constitución y las leyes.

***Artículo 251.-** Son órganos del Ministerio Público:*
1. El Fiscal de la Nación;
2. Los Fiscales ante la Corte Suprema. Son nombrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado. Se turnan cada dos años en la Fiscalía de la Nación;
3. Los Fiscales ante la Corte Superior; y
4. Los Fiscales ante Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción.
Los miembros del Ministerio Público tienen las mismas prerrogativas que los integrantes del Poder Judicial en sus respectivas categorías.
Les afecta las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a idénticos requisitos y procedimientos. Una Ley Orgánica fija las demás disposiciones relacionadas con la estructura y el funcionamiento del Ministerio Público.

****Artículo 277**.-Las Fuerzas Policiales están constituidas por la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana tienen por finalidad fundamental mantener el orden interno, preservar, conservar el orden público, garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad de las personas y los patrimonios público y privado así como prevenir y combatir la delincuencia. Participa con las Fuerzas Armadas en la Defensa Nacional. Sus misiones especificas son establecidas por las respectivas leyes orgánicas.*

***Artículo 278**.-Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no son deliberantes. Están subordinadas al Poder Constitucional.*

DECRETO LEGISLATIVO Nº 052
(Ley Orgánica del Ministerio Público)
Versión original – del 16 de marzo de 1981

El DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 'Ley Orgánica del Ministerio Público', del 16 de marzo de 1981; ha sobrevivido desde entonces a trancas y barrancas a base de parches y remiendos (modificaciones); que, a efectos de este estudio, cobran especial interés sus artículos primigenios, Art. 1 (*) y Art. 9 (*), sujetos luego a modificaciones derivadas de la Constitución de 1993:

(*) ***Art. 1.- "****El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta*

*administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación**".***

Aquí, tímidamente se vislumbra el interés del Ministerio Público (por entonces nueva institución) o de quienes querían meterlo en el sistema en cuanto a la persecución del delito; aspiración de los acólitos del sistema judicial acusatorio que quedó trunca porque estaba limitada por la Constitución; por lo tanto, todo quedó en letra muerta; estaba vigente el Código de Procedimientos Penales de 1940 que si tenía encaje constitucional.

(*) Art. 9.- *"El Ministerio Público, conforme al inciso 5 del Artículo 250 de la Constitución Política, vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial. Con ese objeto las* ***Fuerzas Policiales realizan la investigación****. El Ministerio Público interviene en ella orientándola en cuanto a las pruebas que sean menester actuar y la supervigila para que se cumplan las disposiciones legales pertinentes para el ejercicio oportuno de la acción penal. Igual función corresponde al Ministerio Público en las acciones policiales preventivas del delito". CONCORDANCIAS: Const. 1993, Art 159 num 4.*

DECRETO SUPREMO Nº 005-81-JUS

Reglamentan Disposiciones de Decreto Legislativo Nº 052
(Ley Orgánica del Ministerio Público)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
CONSIDERANDO:

Que, el día tres del presente mes ha entrado en vigencia la Ley Orgánica del Ministerio Público, promulgada por ***Decreto Legislativo Nº 052*** *reglamentaria del Capítulo XI del Título IV de la vigente Constitución de 1979;*

Que, es conveniente reglamentar algunas de las disposiciones de la ley, así como establecer la forma en que se continuarán pagando los haberes de personal del Ministerio Público, en tanto el Fiscal de la Nación asume el cargo y formule los proyectos de reglamentos y el Pliego Presupuestal correspondientes;

Que, a los Fiscales Provinciales corresponde vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial, asegurar el derecho de defensa de los detenidos y los demás que les reconoce la Constitución y las leyes y ejercitar oportunamente la acción penal pública, de que es titular;

Que, conforme a los artículos 2 y 5 inciso a) de su Ley Orgánica - Decreto ***Ley Nº 18071*** *a la* ***Policía de Investigaciones*** *le corresponde investigar la comisión de delitos perseguibles de oficio y descubrir a los responsables;*

Que, también de acuerdo con su propia Ley Orgánica - Decreto ***Ley Nº 18069****, artículos 2, inciso b) y 5, inciso c), g) e i)-* ***a la Guardia Civil*** *corresponde prevenir la comisión de delitos, investigar el abigeato, detener a los sospechosos de hechos delictuosos, proteger los objetos probatorios para ponerlos a disposición de la autoridad encargada de la investigación y colaborar con la Policía de Investigaciones en todas las funciones propias de su misión;*

Que, *la Ley Orgánica de* ***la Guardia Republicana*** *-Decreto* ***Ley Nº 18070****, artículo 5, inciso a), b) y d)- le atribuye la vigilancia y control de las fronteras, el traslado de inculpados y sentenciados y el auxilio a las autoridades y particulares cuando la situación lo requiera;*

Que, al Fiscal Provincial corresponde designar de oficio al defensor del detenido, en los casos en que éste rehusa hacerlo, eligiendo a falta o por impedimento del Defensor de Oficio, entre los propuestos para el efecto por el Colegio de Abogados respectivo, para lo cual estos Colegios deberán formular las nóminas de abogados residentes en cada provincia, aplicando al caso el artículo 10 del Decreto Ley Nº 11363;

Que, el artículo 5, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que los Fiscales deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores por constituir un cuerpo jerárquicamente organizado;

Que, conforme a los artículos 87, inciso 2) y 93 de la ley corresponde a los Fiscales Superiores y Provinciales más antiguos de cada distrito judicial y en cada provincia respectivamente, convocar y presidir las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales a que se refiere el artículo 63 y, en los casos en que las Juntas no pudieran constituirse o no fuere posible hacerlo oportunamente, ejercer, respectivamente, sus atribuciones, conforme a los artículos 87, inciso 2) y 93.

Que, recayendo sobre el Ministerio Público la carga de la prueba, le corresponde señalar el plazo que necesita para actuarla, como lo disponen expresamente los artículos 14 y 92, inciso 4) o implícitamente en el inciso 1), de este último:

DECRETA:

Artículo 1.- Entre tanto se organiza la estructura administrativa del Ministerio Público que haga posible la transferencia de partidas a que se refiere el artículo 103 del Decreto Legislativo Nº 52 -Ley Orgánica del Ministerio Público- el Poder Judicial continuará, conforme a su Presupuesto, pagando las remuneraciones del personal del Ministerio Público a que se refiere el citado artículo y demás gastos operativos del mismo, así como las pensiones de cesantes y sobrevivientes.

Artículo 2.- Los Fiscales Decanos de cada distrito judicial y de cada provincia, que cuenten con tres o más Fiscales, convocarán de inmediato a las respectivas Juntas de Fiscales para formular las instrucciones que correspondan para el debido ejercicio de las atribuciones que les competen, particularmente en cuanto a la intervención del Fiscal Provincial en la investigación policial, la recepción de las denuncias de los agraviados, el ejercicio de la acción penal pública y el ofrecimiento y la actuación de las pruebas; así como en cuanto al trámite que debe observarse en los expedientes en giro en los juzgadas y Tribunales de Segunda Instancia en aplicación de las normas legales pertinentes.
En los casos en que, por el número existente de Fiscales Superiores o Provinciales, no pudiera constituirse la Junta de Fiscales o en que, por cualquier otra circunstancia, no pudiera reunirse de inmediato, ejercerá las atribuciones a que el presente artículo se refiere, el respectivo Fiscal Decano.

Artículo 3 .- Los Colegios de Abogados de la República procederán a formular las nóminas de abogados que ejercer en cada provincia de su respectivo distrito judicial y a ponerlas en conocimiento de los Fiscales Provinciales para los efectos a que se refiere el artículo 94 inciso 1 del Decreto Legislativo Nº 052.

Artículo 4 .- *La Policía de Investigaciones del Perú es la encargada de la investigación de los delitos perseguibles de oficio. En los lugares de la República en que no hubiere estaciones o dependencias de la Policía de Investigaciones, así como en los casos de delito culposos en*

accidentes de tránsito, la investigación la hará la Guardia Civil. En las fronteras nacionales y en los lugares donde no exista dependencia de las otras Fuerzas Policiales, la Guardia Republicana detendrá al autor de delito flagrante y practicará las diligencias urgentes para remitir el atestado respectivo a la autoridad competente.
La fuerza policial que intervenga en cualquiera de estos casos, lo pondrá en inmediato conocimiento del Fiscal Provincial correspondiente, en la forma más rápida que permitan las circunstancias para que este proceda de acuerdo con sus atribuciones legales.

Artículo 5.- El Fiscal Provincial, al ejercitar la acción penal pública entre el Juez Instructor competente, podrá solicitar que se autorice la permanencia del inculpado en la estación de la Policía de Investigaciones o la Comisaría o Puesto de la Guardia Civil en que se encuentra detenido hasta que el Juez resuelva su situación jurídica con arreglo a las disposiciones del Código de Procedimientos Penales.

Artículo 6.- Cuando el Fiscal Superior solicite la ampliación de la instrucción, en el caso a que se refiere el artículo 92, inciso 1), de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señala el plazo que corresponda.

*Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a **21 de abril de 1981**.*
FERNANDO BELAUNDE TERRY, Presidente Constitucional de la República.
FELIPE OSTERLING PARODI, Ministro de Justicia.